

**LA EXTINCION DEL ELEMENTO SOLARIEGO EN  
LOS SEÑORIOS DE JURISDICCION ALFONSINA  
RADICADOS EN LAS COMARCAS DEL  
CAMPO DE ALICANTE Y BAJO VINALOPO**

**Ana Rosa Cendela Hidalgo**

**TOMO I**

### ABREVIATURAS

* A.H.P.A.:	Archivo Histórico Provincial de Alicante
* A.M.A.:	Archivo Municipal de Alicante
* A.N.J.:	Archivo Notarial de Jijona
* A.R.V.:	Archivo del Reino de Valencia
* A.M.E.:	Archivo Municipal de Elche
* th.:	Tahullas
* ha(s).:	Hectáreas
* s.:	Sueldos
* L.:	Libras
* d.:	Dineros
* r <sup>sv</sup> n.:	Reales de Vellón
* mrds.:	Maravedíes
Prot. Not.:	Protocolo(s) Notarial(es).
* Exp.:	Expediente
* Arm.:	Armario
* leg.:	Legajo
* Lib.:	Libro

### EQUIVALENCIAS

* 1 jornal:	4 tahullas
* 1 th.:	1.201 m <sup>2</sup> (en el Campo de Alicante)
* 1 th.:	4 cuartas= 8 octavas
* 1 octava:	32 brazas
* 1 libra:	20 sueldos
* 1 sueldo:	12 dineros
* 1 libra:	15 reales
	10 reales valencianos
* 1 real:	34 maravedíes

## INDICE

### **CAPITULO 1**

INTRODUCCION Y FUENTES .....	1.
1.-Introducción .....	1.
2.-Fuentes .....	9.

### **CAPITULO 2**

EL MEDIO FISICO .....	36.
1.-Las características del relieve .....	39.
2.-Las condiciones climáticas e hidrográficas .....	41.
2.1.-Rasgos Climáticos .....	43.
2.2.-Características hidrográficas .....	55.

### **CAPITULO 3**

LA PECULIARIDAD JURISDICCIONAL DEL AMBITO DE ESTUDIO.	
CARACTERIZACION Y EVOLUCION DE LOS SEÑORIOS ALFONSINOS .....	67.
1.-La jurisdicción alfonsina .....	78.
2.-Gobierno local y funcionamiento económico de los señorios de jurisdicción alfonsina. Las rentas señoriales .....	95.
2.1.-El gobierno local .....	98.
2.2.-Las rentas señoriales .....	103.
3.-La abolición del régimen señorial y la desintegración de los patrimonios señoriales .....	147.

### **CAPITULO 4**

BUSOT Y AGUAS. JURISDICCION SEÑORIAL Y SEÑORIO SOLARIEGO. EXTINCION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO TERRITORIAL ESTABLECIDO ENFITEUTICAMENTE .....	169.
A.-EL SEÑORIO DE BUSOT .....	172.
1.-El señorío de Busot hasta la crisis del antiguo régimen .....	172.
1.1.-Las aportaciones de cronistas y autores contemporáneos. Los titulares del señorío .....	172.
1.2.-El elemento jurisdiccional. Los conflictos con Alicante y Jijona. El gobierno local .....	192.
1.3.-El funcionamiento económico del señorío. Elemento territorial y rentas asociadas al ejercicio de la jurisdicción .....	223.
2.-Reacción antiseñorial, evolución de las prestaciones y pérdida del elemento solariego tras la evolución del régimen señorial .....	277.
2.1.-La reacción antiseñorial inmediata al decreto de 6-VIII-1811 .....	278.
2.2.-La evolución del señorío de Busot hasta la segunda mitad del siglo XIX. Desaparición de particiones en especie e inicio del proceso de extinción del elemento solariego .....	301.
2.3.-La cuestión de las regalías .....	322.
2.4.-La fase final del proceso de extin-	

ción del señorío solariego censido enfitéuticamente. Contaduría de Hi- potecas y Registro de la Propiedad .337.	
2.5.-El patrimonio solariego subsistente.362.	
B.-EL SEÑORIO DE AGUAS .....	377.
1.-Las noticias proporcionadas por cronistas y autores contemporáneos .....	378.
2.-Configuración del señorío territorial .....	383.
2.1.-La adquisición del elemento terri- torial .....	383.
2.2.-Sistemas de tenencia .....	390.
2.3.-La propiedad de las aguas .....	429.
2.4.-La subordinación jurisdiccional a la ciudad de Alicante. Conflictos por la delimitación del señorío territo- rial y el realengo .....	452.
3.-La situación posterior al decreto de aboli- ción de señoríos. La importancia del proce- so de adquisición del dominio útil en la conservación del antiguo patrimonio seño- rial .....	490.
4.-El patrimonio solariego subsistente .....	544.
CAPITULO 5	
EL SEÑORIO DE AGOST .....	560.
1.-Las noticias aportadas por los cronistas y los autores y fuentes contemporáneos .....	562.
2.-Constitución y características del señorío de Agost. Situación y evolución en vísperas de la abolición del régimen señorial .....	572.
2.1.-Un señorío de carácter mixto: elemento territorial y jurisdiccional .....	572.
2.2.-El ejercicio de la jurisdicción .....	603.
2.3.-El funcionamiento económico del señorío .	620.
3.-Disolución del antiguo régimen y desintegración del patrimonio señorial .....	652.
CAPITULO 6	
LA VALLONGA DE BURGUNYO. CONSOLIDACION DE UNA GRAN PRO- PIEDAD .....	678.
Instrucción .....	678.
1.-La fundación del señorío .....	679.
2.-La consolidación de dominios. El mantenimiento de una gran propiedad .....	704.
2.1.-La cancelación de los establecimientos enfitéuticos y la consolidación de la plena propiedad de la tierra .....	706.
2.2.-Otros sistemas de tenencia .....	718.
2.3.-El cambio de titularidad. La incidencia de las disposiciones desvinculadoras ....	739.
3.-Fragmentación de una gran propiedad y nuevas perspectivas de uso del suelo en la segunda mitad del siglo XIX .....	752.
CAPITULO 7	
PEÑACERRADA. UN PEQUEÑO SEÑORIO DE TARDIA FUNDACION EN LA HUERTA DE MUCHAMIEL .....	771.



1.-La fundación del lugar de Peñacerrada y su funcionamiento hasta la abolición del régimen señorial .....	777.
CONCLUSIONES .....	800.
BIBLIOGRAFIA .....	813.

## CAPÍTULO 1

### INTRODUCCIÓN Y FUENTES

## CAPITULO 1

### INTRODUCCION Y FUENTES

#### 1.1.-Introducción

El régimen señorial valenciano ha sido objeto de un gran número de estudios enfocados desde ópticas diversas, bien con una perspectiva evolutiva, bien centrados en períodos concretos. Aspectos institucionales, jurisdiccionales, económicos y sociales, considerados tanto conjunta como individualmente, han atraído la atención de un nutrido grupo de investigadores procedentes de distintas disciplinas (historia, geografía o derecho, entre otras). Esta labor investigadora, planteada con un carácter local o bien referida a ámbitos espaciales más amplios, se ha plasmado en una abundante bibliografía que aborda cuestiones como el origen y la constitución de los señoríos, la estructura interna y el funcionamiento político-administrativo y económico de los dominios señoriales, el problema morisco y las consecuencias de la expulsión de cara a la reestructuración del régimen señorial, las relaciones entre señores y vasallos (principalmente campesinos enfiteutas), la oposición antiseñorial y sus manifestaciones, estructura de la propiedad y regímenes de tenencia, crisis y abolición del régimen señorial o la disolución de los patrimonios señoriales y su incidencia en el reparto actual del suelo.

Enumerar y comentar las obras más representativas en esta línea de investigación sería una tarea demasiado larga y bastante alejada del propósito del presente estudio; además, es un aspecto que consideramos suficientemente cubierto con las referencias y alusiones incluídas a lo largo de todo el texto.

La tesis de licenciatura, con el título *La extinción del elemento solariego en los antiguos señoríos de jurisdicción alfonsina radicados en las comarcas del Campo de Alicante y Bajo Vinalopó*, fue planteada inicialmente con el objetivo de analizar el proceso de desintegración de los patrimonios de origen señorial que tuvo lugar, en el transcurso del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, en un ámbito particularmente rico (sobre todo la comarca del Campo de Alicante) en este tipo de enclaves señoriales de menor entidad y jurisdicción intermedia.

La elección del tema vino motivada por la trascendencia que adquiere el estudio de la disolución de los patrimonios señoriales y el acceso a la plena propiedad del campesinado enfiteuta en los antiguos términos de señorío en la configuración de las estructuras de propiedad actuales.

El ámbito de estudio escogido, integrado por dos comarcas con una notable implantación del régimen señorial, resultaba de enorme interés para la investigación planteada. En primer lugar por la peculiaridad jurisdiccional, evidenciada en el Bajo Vinalopó por la coexistencia de dos jurisdicciones señoriales, la suprema o baronal ejercida en el Marquesado de Elche por los titulares del mismo, y la baja poseída por los

señores de Asprillas (pues existen dudas de su condición de señorío alfonsino), subordinada a la primera; y en el Campo de Alicante por su configuración como zona de realengo con su cabecera en la ciudad de Alicante, circundada por una serie de enclaves señoriales cuyos titulares disfrutaban del ejercicio de la jurisdicción alfonsina al amparo del Privilegio otorgado por Alfonso II en las Cortes Generales de 1329.

En segundo lugar, por la diversa antigüedad de los señoríos comprendidos en este área, constituidos en distintas épocas y coyunturas y con una finalidad principal también diferente. En este sentido, podemos distinguir dos grupos de señoríos, los anteriores a la expulsión de los moriscos (Agost, Aguas, Asprillas, Busot y Villafranqueza) y los creados tras la reposición del fuero alfonsino en 1772 (La Vallonga de Burgunyo, Peñacerrada o Pueblo Nuevo y la Sarga). Tanto los rasgos que caracterizan a cada uno de estos grupos como su trayectoria posterior tras la abolición del régimen señorial y la instauración del nuevo marco sociopolítico y legislativo diferirán bastante, a tenor del diferente grado de consolidación del régimen señorial y la situación general de la época en la que se generan.

Dado que, a pesar de las similitudes existentes en la evolución sufrida por cada uno de los señoríos ubicados en este ámbito, ésta adquiriría en cada caso unas características propias (en función de los factores que habían intervenido en la constitución y la estructuración del funcionamiento interno del

señorío y de la actitud posteriormente adoptada por los titulares tras la abolición del régimen señorial), se consideró más apropiado el tratamiento individual y diacrónico de cada uno de estos enclaves.

La evaluación de la incidencia de las leyes que establecían la abolición del régimen señorial -a través de la incorporación a la nación de los señoríos jurisdiccionales-, de otra serie de disposiciones complementarias, como las desvinculadoras, y del nuevo contexto sociopolítico y económico generado subsiguientemente, en las estructuras de propiedad de la tierra, exigía una tarea previa que permitiera determinar las características del sustrato sobre el que estos elementos actuarían.

Adquiere por ello una enorme trascendencia la caracterización de los distintos señoríos, el establecimiento de los rasgos y elementos que definen el sistema señorial, tanto en su vertiente jurídica (alcance de las competencias jurisdiccionales, control del gobierno municipal) como económica (estructura de las rentas señoriales y mediatización de las actividades económicas del lugar), el análisis del régimen de tenencia de la tierra y la evolución de la reacción antiseñorial.

A tenor de lo expuesto en las líneas antecedentes y de los planteamientos introducidos por las disposiciones abolicionistas y las repercusiones del nuevo clima sociopolítico generado tras la supresión del régimen señorial (evidenciado en la negativa de los enfiteutas a reconocer los derechos señoriales sobre la tierra y a satisfacer las prestaciones de ese

origen), resultan de esencial interés tres cuestiones fundamentales: el alcance de las competencias jurisdiccionales señoriales, la posesión del elemento territorial con carácter previo a la obtención de la jurisdicción por el dueño del lugar, y el recurso a la enfiteusis como régimen de tenencia predominante. La conjunción de estos factores, particularmente teniendo en cuenta la imbricación de la enfiteusis con el régimen señorial, será determinante en la preservación o desaparición de los patrimonios de origen señorial.

En definitiva, en esta memoria de licenciatura se ha tratado de demostrar la hipótesis de que, en los señoríos de carácter mixto o exclusivamente territorial, ha sido el régimen de tenencia empleado para la puesta en explotación del término el factor condicionante, en última instancia, de la evolución de los patrimonios señoriales.

En aquellos señoríos en los que se generalizó la enfiteusis, ésta sería concluyente en el proceso de disolución de la propiedad señorial a favor del campesinado enfiteuta, que vería posibilitada su acceso a la plena propiedad de la tierra. Sin embargo, en aquellos otros en los que predominó el arrendamiento (u otras formas de explotación indirecta o directa que no implicaran la división de dominios de la propiedad de la tierra) desde un primer momento, o bien se produjo una sustitución de los sistemas de tenencia empleados por este último, no tuvieron apenas incidencia las disposiciones abolicionistas, adquiriendo el protagonismo (en caso de producirse la extinción o disolución del patrimonio señorial)

otro tipo de factores, como las disposiciones desvinculadoras, las divisiones hereditarias, el endeudamiento de las casas nobiliarias o la falta de vinculación afectiva de los descendientes de los antiguos titulares.

Por este motivo, y en función de los datos existentes, han sido también evaluados los aspectos mencionados en último lugar, así como las actitudes adoptadas por los diversos señores para superar la situación; ambos darán como resultado un diferente grado de preservación de los patrimonios señoriales subsistentes.

Aunque se han tratado de mantener los planteamientos iniciales, se ha de señalar que las pautas seguidas en la investigación y, posteriormente, en la elaboración de la memoria, han venido marcadas por la documentación disponible, que ha condicionado, en última instancia, el contenido y el tratamiento dado a cada capítulo. Sin embargo, se ha pretendido desarrollar un esquema tipo en el análisis de cada uno de los señoríos, en el que figuran como puntos principales los siguientes:

- la constitución de los señoríos: el proceso de adquisición del elemento territorial y jurisdiccional, con el carácter de las competencias de este último.

- funcionamiento interno político y económico de cada señorío (estructura de las rentas señoriales) hasta la disolución del antiguo régimen.



-la situación durante el siglo XIX con la incidencia de los distintos factores (disposiciones abolicionistas y desvinculadoras, reacción antiseñorial, actitudes de los titulares).

-evolución posterior del patrimonio subsistente.

Es necesario mencionar igualmente que ha predominado en todo momento un enfoque cualitativo. El tipo de fuentes consultadas y la información obtenida no ha permitido más que en contadas ocasiones recurrir al soporte cuantitativo para apoyar nuestras afirmaciones. Sólo los protocolos notariales, la Contaduría de Hipotecas y el Registro de la Propiedad, al margen de datos más o menos puntuales aportados por diferentes expedientes, nos han proporcionado material cuantificable, aunque las dos primeras fuentes de modo más ocasional. Gracias al Registro de la Propiedad hemos podido evaluar los patrimonios señoriales subsistentes y su evolución posterior (tanto ampliaciones como reducciones del mismo), y por tanto, la incidencia de la abolición del antiguo régimen en unos términos de señorío de distintas características.

Por este motivo, ha sido imposible calcular, por ejemplo, la entidad de las rentas señoriales y sus diferentes capítulos, así como el porcentaje de las mismas retenido por los arrendatarios de los derechos señoriales. El mismo problema nos hemos encontrado en relación al estudio de la estructura de la propiedad o del dominio útil de la tierra, o de la estructura de las explotaciones, y por tanto de la valoración de la importancia

relativa de la propiedad señorial en el término (aunque partimos de la premisa de la casi o total inexistencia de tierras francas en los señoríos)<sup>1</sup>. De todos modos, consideramos que el estudio de la organización socioeconómica de los distintos señoríos queda bastante alejado del propósito inicial de la memoria, y excede de manera considerable los límites de una tesis de licenciatura.

Igualmente importante para la elaboración del estudio ha resultado la comparación y contrastación de la realidad señorial del ámbito elegido con otras zonas de implantación del régimen señorial. Se ha procurado cotejar los diferentes aspectos y procesos analizados con los que han caracterizado a otros señoríos en una tónica similar o diferenciada de la expuesta, tratando de obtener una perspectiva más amplia de los hechos y de hacerlos partícipes de una realidad más general, inmersa en el marco del régimen señorial valenciano. Para ello ha sido fundamental el recurso a la bibliografía existente, que nos ha proporcionado, además, los conocimientos necesarios para emprender la investigación planteada y la óptica más adecuada para enfocar correctamente el asunto.

---

<sup>1</sup> En este sentido, hay que señalar que no se han podido localizar fuentes como los padrones de riqueza del equivalente, los padrones de riqueza (padrones de contribuyentes) y amillaramientos, refundiciones, etc, muy utilizados por los investigadores para establecer la estructura socioeconómica durante los siglos XVIII y XIX.

## 2.-Las Fuentes

El carácter comarcal y local del estudio y la perspectiva evolutiva con que ha sido enfocado hacen necesario el empleo de un grupo numeroso de fuentes, que permitan obtener información correspondiente a diversos periodos y realizar un seguimiento detallado del señorío y de los patrimonios señoriales considerados. Son fuentes que algunos autores han denominado "diacrónicas"<sup>2</sup>.

Las nociones iniciales ofrecidas por algunos autores sobre las fuentes existentes para los estudios de Geografía Agraria<sup>3</sup> han sido completadas y ampliadas posteriormente por otros investigadores, historiadores y geógrafos, a través de la divulgación de fuentes nuevas y de gran riqueza, algunas adecuadas al estudio de ámbitos más concretos.

El análisis de la propiedad agraria ha estado fundamentado en fuentes de origen fiscal, de carácter "estructural o sincrónico"<sup>4</sup>, que porporcionan información sobre la distribución de la propiedad o los regímenes de tenencia en un

---

<sup>2</sup> MATA OLMO, R. Y ROMERO GONZALEZ, J.: "Fuentes para el estudio de la propiedad agraria en España (Siglos XVIII-XX). Balance provisional y análisis crítico". *Agricultura y Sociedad*, nº 49, 1988, pp. 209-292.

<sup>3</sup> CABO ALONSO, A.: "Fuentes para la Geografía Agraria de España". *Estudios Geográficos*, nº 83, 1961, pp. 223-249; LACOMBA, J. A.: "Fuentes para la Geografía Agraria de España. Las Estadísticas de la Restauración". *Estudios Geográficos*, nº 90, 1963, pp. 39-55.

<sup>4</sup> MATA OLMO, R. y ROMERO GONZALEZ, J. (1988): Op. Cit., pp. 211-214.

momento concreto. Responden a esta catalogación fuentes de gran importancia para el conocimiento de las estructuras agrarias del siglo XVIII como el Catastro de Ensenada<sup>5</sup> en la Corona de Castilla, el Cadastre en Cataluña<sup>6</sup> o los Padrones de Riqueza del Equivalente en Valencia.

Los Libros padrones de riqueza del equivalente<sup>7</sup>, confeccionados para la puesta en práctica en el antiguo Reino de Valencia del nuevo sistema impositivo, el Equivalente, implantado por Felipe V desde 1715, han sido muy empleados por historiadores

---

<sup>5</sup> Camareno Bullón, C.: *Claves normativas para la interpretación geográfica del Catastro de Ensenada*. Tesis Doctoral, Madrid, 1987, Universidad Autónoma; DONEZAR DIEZ DE ULZURRUN, J. M<sup>a</sup>.: "Las respuestas particulares del Catastro de Ensenada". *Estudios sobre Historia de España (Homenaje a Tuñón de Lara)*. Madrid, 1981, Vol. I, pp. 133-145; MATILLA TASCON, A.: *La única contribución y el Catastro de Ensenada*. Madrid, 1947; MATA OLMO, R. y ROMERO GONZALEZ, J. (1988): Op. Cit., pp. 214-222.

<sup>6</sup> MERCADER RIBA, J. : *L'Establiment del Reial Cadastre a Catalunya i la seva fundació econòmica i social*. Barcelona, 1961; NADAL I FARRERAS, J.: "Una font important per a l'història de Catalunya. El Reial Cadastre". *Homenaje a Joan Reglà i Campistol*, Universidad de Valencia, Valencia, 1975, Vol. II, pp. 209-222.

<sup>7</sup> AZAGRA ROS, L.: "De los Padrones de Riqueza como fuente para la historia agraria del siglo XIX". *Estudios de Historia de Valencia*, Valencia, 1976, pp. 419-423; HERNANDEZ MARCO, J.L.: "Propiedad, trabajo y renta en el setecientos valenciano según unas fuentes poco utilizadas: Los Padrones de Riqueza del Equivalente". *Actes du premier colloque sur Le Pays Valencien a l'époque moderne*. Université de Pau, Valencia, 1980; MATA OLMO, R. y ROMERO GONZALEZ, J. (1988): Op. Cit., pp. 223-228; ROMERO GONZALEZ, J.: "Les estructures de propietat de la terra i de les unitats d'explotació al País Valencià. Mètode i fonts per al seu estudi". *Economia agrària e Història Local. I Assemblea d'Història de la Ribera*. Inst. Alfons el Magnànim, Valencia, 1981, pp. 161-183; ROMEU, J.: "El equivalente y otras contribuciones en el País Valenciano". *Estudis d'Història Contemporània del País Valencià*, Valencia, 1978.

y geógrafos en el País Valenciano<sup>8</sup>. Vigentes hasta la primera mitad del siglo XIX, permiten -dado su carácter de impuesto sobre las rentas individuales anuales- extraer una perspectiva de la estructura de la propiedad y de la organización socioeconómica municipal. La información que recogen abarca desde los datos del titular a la descripción de la propiedad rústica (extensión, localización, linderos, cultivos, número de parcelas, valor, renta, y, excepcionalmente, el nombre de los cultivadores y el régimen de tenencia) y urbana con sus cargas respectivas o los rendimientos por actividades distintas a la agraria. La fiabilidad de la fuente es, según la experiencia de diversos autores, bastante alta, registrándose pocas ocultaciones de bienes, pues es más frecuente la infravaloración de los mismos<sup>9</sup>.

Entre otros problemas que presenta la fuente, Romero menciona la dificultad de distinguir las tierras francas de las establecidas enfitéuticamente; aunque considera que este hecho apenas afecta el conocimiento real del repartimiento del suelo, dada la práctica asimilación entre propietarios plenos y enfiteutas ya en ese periodo<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Aracil y García Bonafé, Bernabé Gil, Giménez López, Gozalvez Pérez, Hernández Marco y Romero González, Morant Deusa y Ruiz Torres entre otros.

<sup>9</sup> HERNANDEZ MARCO, J.L. (1980): Op. Cit., pp. 278-280; ROMERO GONZALEZ, J. (1981): Op. Cit., pp. 170-178. Romeu menciona dos tipos de fraudes, los cambios de domicilio sin justificación y los transposos de la titularidad de ciertos bienes a personas exentas de tributar. ROMEU, J. (1978): Op. Cit., p. 55. Azagra alude a tres tipos de ocultaciones: las absolutas (desaparición de los declarantes), las parciales (relaciones incompletas de bienes) y la infravaloración. AZAGRA ROS, L. (1976): Op. Cit., pp. 419-423.

<sup>10</sup> ROMERO GONZALEZ, J (1981): Op. Cit., p. 178.

De gran interés para el conocimiento de las estructuras agrarias y socioeconómicas, pero ceñido a las áreas de predominio de la enfiteusis, tanto de señorío como de realengo, ha resultado el empleo de los *Cabreves*<sup>11</sup>. Esta fuente adquiere un valor considerable para conocer el funcionamiento interno de los términos de señorío, puesto que a raíz de la información que contiene<sup>12</sup> permite emprender el estudio de las rentas y los censos señoriales, la presión señorial sobre los enfiteutas y resto de vecinos, la estructura del dominio útil y la organización social del lugar, la distribución de cultivos, la movilidad de la propiedad (en este caso del dominio útil), entre otros aspectos.

Durante el siglo XIX las fuentes mencionadas serían sustituidas por los *Libros Padrones de Riqueza* (Padrones de Contribuyentes), *Libros de Amillaramientos*, *Refundiciones*, *Repartimientos*, entre otros; documentos de origen fiscal surgidos tras la reforma tributaria emprendida en 1845 por Mon, y que presentan un contenido similar (que ya incluye los regímenes de

---

<sup>11</sup> Ejemplos de su utilización en ambos casos es la obra de AGUADO, A. M<sup>a</sup>.: "Aproximació a l'estructura de classe i conflictes socials en el senyoriu de Montesa: Sueca al segle XVIII". *Estudis d'Història Contemporània*, n<sup>o</sup> 2, Valencia, 1981, pp. 99-114; y ALBEROLA ROMA, A.: *Jurisdicción y Propiedad de la tierra en Alicante (siglos XVII y XVIII)*. Ayuntamiento-Universidad de Alicante, Alicante, 1984.

<sup>12</sup> Algunos de los datos declarados en esta fuente son: nombre y profesión del enfiteuta, reconocimiento del dominio directo, y características de las propiedades poseídas en dominio útil (por parcelas: extensión, tipo de cultivo, localización y lindes, censos de carácter enfiteútico -en metálico y particiones de frutos-, otros derechos enfiteúticos, origen de las propiedades, diezmos, etc).

tenencia), aunque se les atribuye una menor fiabilidad que a los anteriores<sup>13</sup> (en este punto se han comprobado las diferencias existentes según los ámbitos y colectivos de propietarios considerados).

A pesar del indudable interés de las fuentes mencionadas, no han sido éstas las utilizadas en el proceso de documentación de la presente memoria. De una parte, la inexistencia de las mismas o las dificultades de acceso (fondos de la Sección de Hacienda del A.H.P.A.) han impedido su consulta, y de otra, el carácter evolutivo y los planteamientos del estudio (centrado en la evolución de los patrimonios señoriales y en la caracterización y constitución de los distintos señoríos) permitían conceder una mayor importancia a otra serie de fuentes. En este sentido, junto a protocolos notariales, Contaduría de Hipotecas, Registro de la Propiedad y Registro de la Propiedad Expropiable, se ha manejado una importante documentación de carácter histórico procedente de diferentes archivos públicos y privados, consistente en actas capitulares, expedientes de pleitos, reales provisiones, expedientes de apeo y deslinde o disposiciones testamentarias, entre otros.

---

<sup>13</sup> El padrón general de riqueza inmueble fue sustituido legal y definitivamente en 1853, aunque no siempre en las denominaciones locales, por el Amillaramiento de la riqueza individual contribuyente. MATA OLMO, R. y ROMERO GONZALEZ, J. (1988): Op. Cit., pp. 228-247.

El interés de la misma es evidente, pues al margen de las cuestiones concretas que trate, suele revelar detalles del funcionamiento interno del régimen señorial en el lugar e incluir, fundamentalmente en el caso de expedientes de pleitos o de autos de apeo y deslinde, copias o fragmentos de documentos de mayor antigüedad y de gran importancia para conocer el proceso de constitución y las características y evolución del señorío (cartas pueblas, contratos de establecimiento, capítulos de gobierno de alguna regalía, escrituras de compraventa que reflejan la adquisición del elemento territorial o cambios de titularidad en la posesión del señorío, reales provisiones, sentencias o privilegios confirmando o ampliando las competencias jurisdiccionales, testimonios de la designación de cargos municipales, entre otros). La información proporcionada por estos fondos documentales ha sido básica para la elaboración de la memoria, sobre todo en aspectos tales como la organización económica y municipal del señorío, su caracterización como señorío de carácter mixto o solamente solariego, o las relaciones entre señores y vasallos (reacción antiseñorial).

Esta labor de recogida de información ha sido desarrollada en tres archivos de ámbito municipal -el Archivo Municipal de Alicante (AMA), el Archivo Municipal de Elche (AME) y el Archivo Notarial de Jijona (ANJ)-, además del Archivo Histórico Provincial de Alicante (AHPA) y el Archivo del Reino de Valencia (ARV). La falta de tiempo material y la práctica inexistencia de documentación en algunos casos ha impedido la extensión de la investigación a otros archivos municipales



(Novelda, Busot, Muchamiel) o provinciales (caso del archivo de la diputación, cuyos fondos carecían de interés para el tema propuesto); además de que los datos obtenidos por otros cauces ilustraban suficientemente las cuestiones planteadas.

La investigación centrada en el **Archivo Municipal de Alicante** ha sido considerablemente facilitada por la existencia del *Indice General de Remisiones*, en el que se hace una recensión de la documentación localizada en el archivo, catalogada en diversos apartados. El hecho de que esta recopilación sólo afecte al material anterior al siglo XIX (XVII y XVIII principalmente)<sup>14</sup> y que el perteneciente a ese siglo permanezca mayoritariamente sin catalogar no ha resultado demasiado problemático, dado que durante la segunda mitad del siglo XVIII tuvo lugar la definitiva segregación de la ciudad de Alicante de los señoríos considerados y la realización de las correspondientes operaciones de deslinde (son excepciones Aguas, que no se independizará de Alicante hasta los años cuarenta del siglo XIX, y Villafranqueza, que posteriormente volvería a ser integrada en su término). Sin embargo, no cabe duda que habría resultado de gran ayuda la centralización de toda esa documentación de carácter más local.

La labor de consulta se ha visto dificultada en algunas ocasiones por la existencia de referencias de localización erróneas o inexactas, sin correspondencia con la información

---

<sup>14</sup> Las noticias y los documentos anteriores al siglo XVIII son escasos debido al incendio del archivo municipal tras el bombardeo, de la escuadra francesa al mando del Conde D'Estres, sufrido por la ciudad de Alicante en 1691.

recogida en los libros de cabildos o la fuente pertinente; además, ha de tenerse en cuenta la posibilidad de que la relación de los documentos consignados no sea completa. También las propias características de las fuentes consultadas han dificultado el proceso de documentación, dado que con frecuencia solamente proporcionan referencias fragmentarias de los asuntos tratados. Así sucede por ejemplo con las *actas capitulares* o los *libros de cartas escritas y recibidas*; si la recensión no va acompañada de algún memorial, u otro documento de similares características, o real provisión, son muy escasas las conclusiones a extraer de su lectura. Aunque los aspectos mencionados en ellas son muy variados, adquieren particular interés las que recogen cuestiones de carácter jurisdiccional (resoluciones relativas al nombramiento de alcaldes o funcionarios o a la autorización del establecimiento de determinadas actividades económicas en los lugares sometidos a su jurisdicción, o a conflictos jurisdiccionales con los señoríos circundantes).

Otro tipo de información localizada, también en actas capitulares o en cartas de pago, es la correspondiente al cobro de distintos censales y derechos suscritos por el ayuntamiento de la ciudad y otros particulares a favor de algunos de los titulares de señoríos. En general, los *expedientes de apeo y deslinde* han sido las fuentes que nos han proporcionado una mayor abundancia de noticias. Estos recogen referencias de gran importancia y copias de documentos relativos a la concesión de distintos privilegios de jurisdicción, establecimientos de

tierras o percepción y cuantía de determinados derechos señoriales; así como a la extensión y delimitación de los términos de los señoríos, aunque sea preciso señalar las dificultades existentes para su identificación actual, dado el recurso a una toponimia y unos puntos referenciales en desuso actualmente.

La búsqueda de información en el **Archivo Municipal de Elche**, dirigida a documentar el caso del señorío de Asprillas, ha resultado mucho más difícil y con escasos rendimientos, dado que la mayor parte de los fondos van referidos a otro señorío de mucha más entidad, el Marquesado de Elche. Se ha dispuesto, también en este caso, de una serie de índices y fichas en los que aparece recogida la documentación catalogada hasta el momento (distinta a la labor de catalogación realizada por archiveros anteriores), así como de una serie de libros en los que consta un breve resumen del contenido de las distintas actas capitulares, cuya consulta se ve facilitada por la existencia de un índice general confeccionado alfabéticamente por temáticas que remite a los libros citados.

Las referencias localizadas han sido muy escasas, limitadas a cuestiones como la delimitación de la partida de Asprillas y la percepción de diezmos en la misma (conflicto entre el Marqués de Elche y el titular del señorío). Estas referencias proceden de la correspondencia entre el marqués y los funcionarios señoriales, convenios, fragmentos de expedientes y testimonios de diverso tipo. Al margen de otras noticias de carácter más puntual, se ha procedido a la consulta de los

diversos inventarios de propiedades y rentas confeccionados con fines tributarios, aunque con resultados poco positivos. En este sentido se ha de señalar que, o bien los datos proporcionados tienen un carácter global (todo el término), o bien son poco relevantes e incompletos para evaluar el patrimonio de los sucesivos señores de Asprillas (así como para conocer los regímenes de tenencia empleados).

Por lo que respecta al Archivo del Reino de Valencia, éste cuenta con una gran riqueza documental, pero no sin ciertas dificultades para su acceso. Su consulta se ve facilitada por la existencia de una serie de inventarios, aunque no para todas las secciones; inventarios que, en ocasiones, solamente incluyen la mención del legajo, sin explicitar su contenido (caso por ejemplo de relaciones de sentencias, en las que se mencionan los litigantes, pero no los motivos de la disputa). Esta situación repercute por tanto negativamente en la investigación de carácter local. Además de los índices, algunos bastante antiguos, existen colecciones de fichas elaboradas en función de topónimos (entidades de población) o apellidos para diversas secciones, y que reducen la tarea de búsqueda en la investigación limitada a ámbitos más concretos. Entre las secciones que disponen de inventario y que nosotros hemos utilizado se encuentran Manaments i Empares, Real Acuerdo, Real Audiencia y Bailía. Se ha de señalar, sin embargo, la circunstancia del extravío de un importante volumen de documentación así como de la existencia de numerosos errores en la confección de estos índices.

El interés de los fondos consultados en este archivo ya ha sido mencionado; consistentes en su mayor parte en expedientes de pleitos, contienen, además de la información relativa al asunto tratado, copias o testimonios de documentos anteriores de gran importancia para la caracterización del señorío y su funcionamiento interno (escrituras de adquisición de los señoríos, cartas de población, establecimientos de tierras, regulación de ciertas regalías, competencias jurisdiccionales, etc). Sin embargo, en algunas ocasiones aparecen inconclusos o incompletos, lo que dificulta en cierto grado su interpretación y la extracción de conclusiones de su consulta. Una gran mayoría de estos expedientes suelen presentar adosados al proceso de apelación ante la Real Audiencia, los autos desarrollados previamente en el juzgado ordinario competente.

La sección menos utilizada ha sido la de *Manaments i Empares*, donde se han localizado testimonios de suplementos de edad, fes de vida, cláusulas de herencias, testamentos, fundaciones de vínculos, capítulos matrimoniales o donaciones reales. De la sección del *Real Justicia* hemos obtenido información sobre un periodo similar al caso anterior (siglos XVII y XVIII), aunque de mayor importancia, relativa fundamentalmente a cuestiones jurisdiccionales, delimitación de términos, concordias, e incluso capítulos de población.

Las secciones que más datos nos han proporcionado han sido las de *Bailía* y *Real Audiencia*. La primera recoge los expedientes instados ante el tribunal especial del Real Patrimonio del Reino de Valencia desde la abolición de los fueros

a 1836, así como aquellos correspondientes a la jurisdicción común del baile general. Los consultados pertenecen a los siglos XVIII y XIX, aunque se ha prestado particular atención a los desarrollados en este último siglo, dado que reflejan la situación posterior, e inmediatamente anterior, a la abolición del régimen señorial en aspectos como las regalías o monopolios señoriales, el establecimiento de tierras y la usurpación ilegal de las mismas en términos de señorío, o la presentación de los títulos de posesión de los mismos.

La sección de la Real Audiencia incluye varias series, Procesos, Sentencias, Procesos de Madrid, y Escribanías de Cámara, cuya consulta facilita el análisis de litigios entre particulares sobre cuestiones diversas, pero frecuentemente relacionadas con el funcionamiento económico de los señoríos en distintas coyunturas y el mantenimiento de los derechos señoriales -caso de los expedientes de finales del siglo XVIII y siglo XIX-, (pleitos sobre reducción de censales en lugares de moriscos expulsos, pago de prestaciones señoriales, pertenencia de frutos, pago de quindenios, regulación de los capítulos de las regalías, pago de diezmos, ...), o con las sucesiones de bienes. Los índices o inventarios de las series de Procesos y Procesos de Madrid (de las que se ha consultado documentación perteneciente a los siglos XVI, XVII y primeros años del XVIII) son muy escuetos en cuanto a la información que proporcionan sobre cada expediente (fecha, litigantes y no siempre la causa del pleito). Sin embargo, la segunda serie adquiere un gran interés, puesto que al ser procesos remitidos al Supremo Consejo, incluyen copias

íntegras de los documentos presentados como prueba. La serie Escribanías de Cámara, comprende procesos más recientes, de gran importancia para evaluar la situación posterior a la supresión del antiguo régimen.

El Real Acuerdo recoge una serie de provisiones, reales cédulas, autos, o solicitudes de información sobre asuntos diversos (sucesiones hereditarias, amparos de posesión, concesiones de jurisdicción, nombramiento de funcionarios municipales, etc), que sólo en contadas ocasiones, al ir acompañadas de algún memorial o documento similar, nos han sido de utilidad.

Por último, resta mencionar las secciones de *Varia y Mapas y Planos*, que contienen relaciones de lugares de distinta entidad con información sobre aspectos demográficos, económicos o de adscripción jurisdiccional.

Conviene en este punto hacer un inciso para mencionar la labor desarrollada en un archivo de carácter privado, el **Archivo del Conde de Villafranzeza**. Queremos hacer constancia del agradecimiento a los titulares del mismo por permitir el acceso a los fondos conservados y facilitar en la medida de lo posible su consulta.

Los fondos del **Archivo Notarial de Jijona (ANJ)** y del **Archivo Histórico-Provincial de Alicante (AHPA)** son fundamentalmente de carácter notarial. La riqueza de aspectos y de escrituras de diverso tipo recogidos en los *Protocolos Notariales* convierte a este fuente en un instrumento básico de cara a la realización de estudios de carácter monográfico o

local, muy detallados y con una perspectiva evolutiva. La consulta de los mismos se ha emprendido tanto con la finalidad de localizar una escritura concreta (por ejemplo fundación de los señoríos más recientes -Peñacerrada-, convenios de sustitución o redención de las cargas señoriales -Villafranqueza, Agost, Busot-, o transmisión íntegra por medio de venta de la titularidad de algún antiguo señorío -la Vallonga de Burgunyo-) como con la de analizar diversos aspectos entre los que destacan la evolución (constitución, ampliación y desmembración) de los patrimonios señoriales, la tenencia de la tierra (principales sistemas de tenencia, características y procesos de sustitución), la gestión de los monopolios y resto de derechos señoriales (arrendamientos de derechos dominicales, subarrendamientos de regalías), estado y evolución de las principales rentas de origen señorial (actitudes de los enfiteutas ante la satisfacción de las mismas), factores condicionantes del mercado de la tierra y precios de venta de la misma, estructura de la propiedad (o del dominio útil), distribución de cultivos y descripción de técnicas y aperos de labranza o del utillaje de ciertas actividades de transformación de productos agrarios.

Una amplia tipología de escrituras públicas permite establecer esos planteamientos. Escrituras de arrendamiento (de propiedades rústicas o urbanas, derechos señoriales, monopolios), de establecimientos en enfiteusis, de particiones de bienes, testamentos, redenciones de censos, reconocimientos de la señoría directa, poderes, constitución de hipotecas, obligaciones en pago de deudas, escrituras de compraventa, concordias o inventarios de



bienes son ejemplos de ello. En ellas se recoge la identidad, profesión y vecindad de los interesados (transferentes y adquirentes, arrendadores y arrendatarios, estabilientes y enfiteutas, poderdante y beneficiario, etc); la descripción de los bienes objeto de la operación; las cargas que soportan; las compensaciones (precios de venta, pensiones de arrendamiento, pechos de carácter enfiteútico, etc) y las condiciones en que se efectúan éstas (cláusulas de arrendamiento o establecimiento, formas de pago, características de convenios o acuerdos, etc), entre otros aspectos.

Sin embargo, a pesar del indudable interés de esta fuente, no deben olvidarse algunas de sus deficiencias. El carácter aleatorio del contenido de los protocolos, la dificultad de conseguir series notariales completas, lo laborioso de su consulta -en frecuentes ocasiones sin resultados positivos-, la necesidad de realizar análisis bastante exhaustivos para obtener una perspectiva completa, la inexistencia de índices en una gran parte de los libros, el mal estado de conservación, o la posible falta de veracidad de alguno de los datos (por ejemplo en relación a la declaración de gravámenes o de los precios de venta) son algunas de las más importantes.

Lamentablemente, no se ha podido realizar un vaciado de protocolos en series significativas para cada uno de los señoríos. Aunque para la mayor parte de los mismos se han localizado escrituras referentes a distintos aspectos, sólo se ha recurrido a esta fuente de una manera más completa en los casos de la Vallonga de Burgunyo, Peñacerrada, Busot y Aguas de Busot.

En todos ellos se ha procedido a la consulta y análisis de los protocolos firmados por notarios habituales de los distintos señoríos o casa señoriales.

En los dos archivos en los que se ha trabajado existen índices de referencia con una relación, ordenada cronológica o alfabéticamente, de los distintos notarios o escribanos existentes, en la que se hace constar además el lugar donde desempeñan su actividad, la fecha de los distintos protocolos y algunas observaciones sobre las características de los mismos (número de folios, estado de conservación, existencia o inexistencia de índices, etc).

Los protocolos consultados en ambos casos pertenecen a los años finales del siglo XVIII y al siglo XIX. La búsqueda de escrituras se ha visto facilitada en ocasiones por las referencias contenidas en otro tipo de fuentes, como los expedientes de pleitos, la Contaduría de Hipotecas o el Registro de la Propiedad. Las series notariales vaciadas han sido las siguientes:

1.-En el ANJ<sup>15</sup>:

- Brotons y Bernabeu, T. (Busot): entre 1794-1820 (P.19-25).
- Miralles, Fco. (Busot): entre 1825-1827 (P.26).
- Alberola, Vte. (Busot): entre 1828-1841 (P. 27-31).

---

<sup>15</sup> Es característico de estas series su buen estado de conservación. Los protocolos presentan una extensión variable, cada uno comprende las escrituras de varios años y suelen carecer de índices.

- Arqués y Bernabeu, G. (Agost): entre 1761-1764 (P. 1-2 -Varios-).

2.-En el AHPA:

- Aracil, Fco. (Alicante): años 1790-1803, 1805, 1807-1810 (P. 80-92, 94, 96 y 118).
- Aracil y Alonso, J (Alicante): año 1793 y 1837 (P. 119 y 477).
- Ayala y Cantó, J. (Muchamiel): años 1784-89 (P.120).
- Cazorla, A. (Alicante): años 1738-42 (P. 1761-62 y 407-408).
- Cirer y Palou, J. (Muchamiel): años 1851 y 1861-62 (P. 501-502 y 526-528).
- Hernández y Soler, A.: años 1795-1829, excepto 1813-16 y 1820-22 (P. 935 y 937-942).
- Izquierdo y Champoursin, Vte. (Alicante): años 1863 y 1870 (P. 990-992 y 1.006-1.007).
- Manchón y Soriano, P. (Alicante): años 1835-36 (P. 1.113).
- Marco y Alted, J. (Muchamiel): años 1778-1790 (P. 1.147-1.154).
- Montllor, P. (Alicante): años 1773-1793, excepto 1775-76, 1779, 1783 y 1790-91 (P. 1.228-1.242, excepto 1.238 y 1.240).
- Navarro, L. A. (Alicante): años 1783-1807, excepto 1791-94, 1796-99 y 1805 (P. 585 y 1.311-1.316).
- Pastor y Rovira, E. (Alicante): año 1825 (P. 1.378).
- Rovira, J (Alicante): años 1780-1802, excepto 1783,

1792 y 1797 (P. 1.527-1.545 y 1.811-1.812).

-Sala y Cantó, F. (Muchamiel): años 1785, 1788-90, 1799, 1803-1828 (P. 1.614-16, 1.624-28 y 1.721).

-Sesse. J. J. (Alicante): años 1817-51, excepto 1824-25 (P. 1.673-1.684, excepto 1678).

Las tres fuentes que nos resta comentar tienen una gran importancia y se encuentran muy relacionadas entre si. Dos de ellas, la Contaduría de Hipotecas y el Registro de la Propiedad, aparecen conectadas con los protocolos notariales, y presentan un indudable interés para el estudio evolutivo de la propiedad de la tierra.

Los fondos del Oficio, posteriormente Contaduría, de Hipotecas han sido escasamente utilizados por los investigadores<sup>16</sup>. Considerado como precedente del actual Registro de la Propiedad fue instituido por la Real Pragmática de 31-I-1768, y se mantendría hasta su sustitución, al amparo del Real Decreto de 23-V-1845, por las Contadurías de Hipotecas<sup>17</sup>.

Sin embargo, como señala Roca Sastre<sup>18</sup>, la mencionada disposición de 1768 no creaba un sistema general de registro inmobiliario puesto que sólo se exigía la inscripción de algunas

---

<sup>16</sup> MATA OLMO, R. y ROMERO GONZALEZ, J. (1988): Op. Cit., pp. 270-273.

<sup>17</sup> GIL OLCINA, A: "Declive y ocaso de la enfiteusis señorial valenciana." *Agricultura y Sociedad*, nº 49, 1988, pp. 305-314.

<sup>18</sup> Citado por GIL OLCINA, A. y CANALES MARTINEZ, G.: *Residuos de propiedad señorial en España. Perduración y ocaso en el Bajo Segura*. Inst. Juan Gil Albert, Alicante, 1988, pp. 267-268; y MATA OLMO, R. y ROMERO GONZALEZ, J. (1988): Op. Cit., pp.270-271.

operaciones: imposiciones, ventas y redenciones de censos o tributos, enajenaciones de bienes raíces gravados con alguna carga, fianzas, fundaciones de mayorazgos y obras pías, y todo tipo de contratos con la cláusula de hipoteca general.

La Contaduría se constituye para cada partido judicial, requiriéndose la apertura de un libro de inscripciones por cada pueblo comprendido en el mismo, lo que facilita la concentración de toda esa información de carácter municipal, que de otro modo estaría dispersa (caso de protocolos notariales). Los libros de "traslaciones de dominio" proporcionan una información bastante completa; junto a la fecha del documento, nombre y vecindad de los otorgantes, carácter y naturaleza del instrumento, descripción de los bienes raíces gravados -con indicación de los nombres, cabida, situación, linderos, valor según la escritura y cargas-, recogen el nombre y vecindad del escribano y oficio en que queda protocolizada la correspondiente escritura. De este modo, los asientos de Contadurías se convierten en recensiones abreviadas de las escrituras notariales. Tras la reforma de 1845 se introducen de forma sistemática y general libros impresos, con volúmenes independientes por distritos, y diferenciados para arrendamientos y traslaciones de dominio<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> MATA OLMO, R. y ROMERO GONZALEZ, J. (1988): Op. Cit., p. 272. Los libros de arriendos y subarriendos recogen hasta 1835, año en que se suprime el tributo que los afectaba, junto a los datos de identificación de la escritura, escribano, otorgantes y finca, la cantidad total del arriendo, fecha de comienzo, conclusión y duración. Este tipo de libros no hemos podido localizarlos en nuestro ámbito de estudio.

Lamentablemente, sólo hemos podido localizar los libros de traslaciones de dominio de fincas rústicas y urbanas de Aguas y Busot, junto a un único volumen referente a Peñacerrada. Estos fondos se encuentran radicados en el Registro de la Propiedad de Jijona. El A.H.P.A. contiene fuentes de este tipo, pero afectan a ámbitos distintos al del presente estudio.

Los libros manejados abarcan el período de 1845 a 1862, y revisten una gran importancia para el estudio de la evolución de la propiedad de la tierra, el proceso de ampliación y reducción de los patrimonios señoriales, la naturaleza y la cuantía de las cargas señoriales existentes, el endeudamiento del campesinado enfiteuta, la reacción antiseñorial (reconocimiento o rechazo de la señoría directa, evidenciado en la declaración de cargas señoriales) y la actitud de los titulares de los antiguos señoríos a la hora de encarar el problema. Sin embargo, no hemos localizado ninguna referencia al otorgamiento de escrituras de redención de censos enfiteúticos (vía legal de acceso a la plena propiedad por parte de los antiguos enfiteutas); únicamente se han encontrado asientos de estas características en relación a los censos impuestos por los titulares de los señoríos, sobre los bienes y rentas comprendidos en los mismos, a favor de instituciones eclesiásticas.

No se puede olvidar la mención de alguna de las deficiencias que presenta esta fuente, a pesar de que no se ha utilizado de modo exhaustivo ni con la finalidad propuesta por otros autores. La falta de veracidad de algunos aspectos reseñados en los asientos, como es el caso de las declaraciones

de cargas (como se ha comprobado tras el cotejo con otras fuentes, caso del Registro de la Propiedad, o con asientos posteriores de una misma finca) es un ejemplo de ello. La fiabilidad de los precios establecidos en las transacciones podría ser igualmente objeto de duda. Sin embargo, se ha de señalar que la circunstancia mencionada en primer lugar (declaraciones de cargas falseadas) ha sido utilizada para evaluar la resistencia del campesinado enfiteuta a reconocer el dominio directo y satisfacer las prestaciones a él inherentes. Otros aspectos relativos a las posibilidades de utilización de la fuente serán comentados en los capítulos donde, a la vez que se comentan las conclusiones extraídas de su consulta, se realizan las oportunas críticas.

La utilización del Registro de la Propiedad ha sido de vital importancia para la realización de la presente investigación. Su consulta nos ha permitido evaluar la situación de los patrimonios señoriales tras la consolidación del proceso de abolición del régimen señorial, y establecer su evolución posterior. Creado por la Ley Hipotecaria de 8-II-1861 y en vigor desde 1-I-1863, contiene un notorio volumen de información sobre las fincas objeto de inscripción. Los asientos recogen todo el historial de las fincas, la descripción y localización, los linderos, la identidad de los sucesivos propietarios, el origen y procedencia del inmueble, cargas, valoración y títulos que acreditan la posesión (escrituras de venta, escrituras de partición de bienes, etc.). Generalmente, esta información sólo se precisa en detalle en la primera inscripción, puesto que de no

mediar modificaciones todas las posteriores remiten al contenido de la primera. De la ley hipotecaria se desprende que "son títulos inscribibles los que constituyen, declaran, reconocen, transmiten, modifican o extinguen el dominio como derecho básico sobre los inmuebles, y los derechos impuestos sobre los mismos, como el usufructo, la enfiteusis, la hipoteca, los censos, servidumbres y cualquier otro tipo de derecho real"<sup>20</sup>. En ocasiones hemos encontrado también contratos de arrendamiento, inscritos no en los asientos de sus fincas correspondientes, sino en los de aquellas otras hipotecadas en garantía de los mismos.

Los asientos del Registro se remiten con frecuencia, en las anotaciones preventivas, a las inscripciones de los libros de la Contaduría, asumiendo generalmente su contenido en lo relativo al origen o las cargas de la finca. Las anotaciones preventivas no se convierten en inscripciones definitivas mientras persistan situaciones dudosas en torno a la titularidad o las condiciones de la finca (embargo, demandas judiciales, confirmación de gravámenes, etc.). Los asientos presentan también anotaciones al margen, que, además de la cancelación de embargos, hipotecas o situaciones similares, recogen las segregaciones efectuadas, mencionando la extensión superficial, el número y la localización en los libros del Registro de la nueva finca. Este hecho nos posibilitará conocer la trayectoria posterior de los patrimonios señoriales preservados.

---

<sup>20</sup> MATA OLMO, R. Y ROMERO GONZALEZ, J. (1988), Op. Cit., p. 276.



Las declaraciones de cargas y las anotaciones realizadas por los registradores al respecto nos permiten obtener algunas conclusiones acerca de la actitud de los enfiteutas hacia el reconocimiento o el rechazo del dominio directo, así como de la evolución de los derechos señoriales inscritos hasta su prescripción registral o su supresión por leyes posteriores.

La existencia de datos como el origen o la procedencia de las fincas o el título en virtud del cual se efectúa la inscripción nos han permitido evaluar la actitud de los antiguos señores en relación a los patrimonios establecidos enfiteúticamente; su preservación a través de la consolidación de dominios (Aguas) o la sustitución de las cargas señoriales por cantidades anuales en metálico (Villafranqueza).

El registro nos ha proporcionado además la información precisa para analizar la incidencia en la evolución de los bienes conservados de otra serie de factores (con cierto protagonismo en los procesos de extinción del antiguo elemento territorial de los señoríos) como las disposiciones desvinculadoras, la política testamentaria o el endeudamiento de las casas nobiliarias. Sin olvidar las posibilidades que confiere al análisis de los cambios de uso del suelo, sobre todo en las áreas periféricas de ciudades de una cierta entidad (caso por ejemplo de la Vallonga de Burgunyo).

Por lo que respecta a las deficiencias de la fuente, la de mayor envergadura es el carácter optativo de las inscripciones. En este sentido cabe señalar la imposibilidad de efectuar el seguimiento del señorío de Peñacerrada. También cabe

achacar a esta fuente la falta de precisión en las delimitaciones de linderos de las fincas, así como la frecuencia de errores de medida de la superficie real de las fincas; ambas reputables a la falta de base planimétrica<sup>21</sup>. En último lugar, no se puede olvidar la escasa fiabilidad de los precios y valoraciones declarados.

Por último, resta mencionar los Registros en los que se ha llevado a cabo la labor de investigación. En el Registro de la Propiedad de Jijona se extrajeron los datos relativos a los señoríos de Busot y Aguas; en el Registro de la Propiedad de Novelda los correspondientes al señorío de Agost; en el Registro de la Propiedad de Alicante los referentes al señorío de la Vallonga de Burgunyo (junto a las escasas noticias obtenidas sobre Peñacerrada); y en el Registro de la Propiedad de Elche se efectuó el seguimiento del señorío de Asprillas. La localización de las fincas ha sido realizada a través de la consulta de los índices antiguos de propietarios (generalmente por orden alfabético) y de las fichas de propietarios, de confección más moderna (con referencias a partir de la segunda década del siglo XX, aunque variable según los registros).

El interés del Registro de la Propiedad Expropiable -que contiene el inventario de fincas rústicas objeto de expropiación en función de la aplicación de la Ley de Reforma Agraria de 1932- para el estudio de la propiedad agraria ha sido ya puesto de manifiesto por numerosos autores. Sin embargo, dicha

---

<sup>21</sup> Ibidem, p. 279.

fueron se halla limitada puesto que recoge únicamente la propiedad expropiable; aunque las características de las fincas que comprende la hacen idónea para el estudio de la gran propiedad a mediados de la década de los treinta del siglo XX. Algunos autores han puesto de relieve su importancia de cara al análisis de la clase terrateniente, su composición interna y origen, y, más limitadamente, al conocimiento de la organización parcelaria y la distribución de los aprovechamientos, el régimen de tenencia (según estuvieran sujetas o no al apartado 12 de la base 5ª), las vías de constitución de los grandes patrimonios rústicos y su situación financiera<sup>22</sup>.

Los estadillos remitidos por los registros consignaban los datos de identificación del propietario (nombre, estado civil, naturaleza, título nobiliario); el nombre y localización de la finca; los linderos, cultivos, aprovechamientos y extensión de la misma; la fecha y título de adquisición, la causa de posible expropiación, gravámenes y observaciones<sup>23</sup>.

Por lo que respecta a la fiabilidad o a la carencia de información de la fuente, los investigadores aludidos suelen señalar la relativa indefinición de las causas de expropiación y la escasa precisión de ciertas denominaciones de aprovechamientos agrarios, además de cuestionar si figuran recogidas en él toda o la mayor parte de las tierras expropiables<sup>24</sup>. En relación a la

---

<sup>22</sup> MATA OLMO, R. Y ROMERO GONZALEZ, J. (1988), Op. Cit., pp. 248-251.

<sup>23</sup> GIL OLCINA, A.: *La propiedad señorial en tierras valencianas*. Del Cenit al Segura, 1979, p. 152.

<sup>24</sup> MATA OLMO, R. Y ROMERO GONZALEZ, J, Ibidem, pp. 250-251.

propiedad señorial, Gil Olcina señala el enmascaramiento de las fincas de esta procedencia en el Registro, puesto que figuran consignadas en él por otros conceptos distintos (a su origen señorial) que contaban con indemnización<sup>25</sup>.

Hemos de señalar en este punto, que no hemos procedido a la consulta directa de la fuente, sino que los datos relativos a las propiedades objeto de expropiación en la zona de estudio que hemos manejado nos han sido facilitados por D. Antonio Gil Olcina.

Finalmente, resta aludir a la obra de los cronistas y autores contemporáneos. A pesar de la escasa importancia de la información contenida en estas fuentes bibliográficas y la evidente parcialidad que se detecta en la presentación de las distintas cuestiones, no puede descartarse totalmente su consulta. Al estar orientadas principalmente al estudio y la descripción de la ciudad de Alicante y su término general, las de carácter más local, incluyen breves referencias a los diversos señoríos incluídos en esta memoria. Junto a comentarios sobre la toponimia y los titulares de los diversos lugares, autores como Martín de Vicihana, Escolano, Bendicho, los Padres Maltés y López, Viravens o Figueras Pacheco afirman e intentan justificar la supremacía jurisdiccional de la ciudad sobre los distintos señoríos así como la pertenencia de otra serie de derechos en relación al aprovechamiento de las utilidades rústicas de los

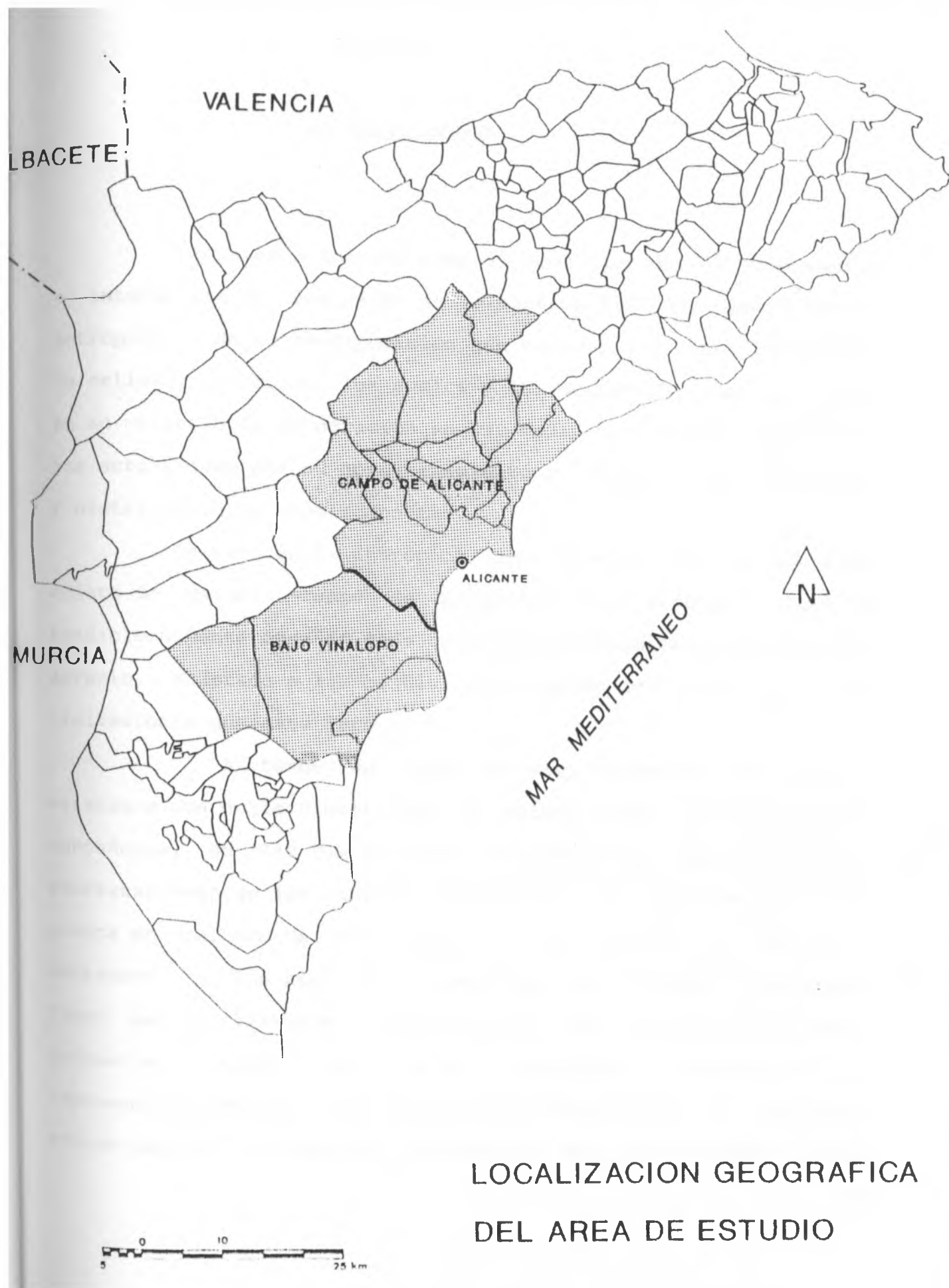
---

<sup>25</sup> GIL OLCINA, A. (1979), Op. Cit., pp. 149-152; y (1988), Op. Cit., pp. 155-160.

términos. Las obras de Cavanilles, Madoz y Figueras Pacheco, con una mayor trascendencia, incluyen descripciones más completas de los lugares estudiados; puesto que son objeto de su atención cuestiones de carácter demográfico, económico o paisajístico, al margen de otra serie de consideraciones. En ellas, sin embargo, excluyendo la de Madoz, se elude la mención del carácter señorial (y sus consiguientes implicaciones) de los diferentes municipios integrados en el área de estudio.

## CAPÍTULO 2

### EL MEDIO FÍSICO



LOCALIZACION GEOGRAFICA  
DEL AREA DE ESTUDIO

## CAPITULO 2

### EL MEDIO FISICO

El paisaje aparece como el resultado de la combinación e interacción de una serie de elementos físicos, biológicos y antrópicos. En su configuración han intervenido tanto las formas de relieve, el clima, los suelos y la vegetación, como el hombre en su esfuerzo de integración en ese medio físico y a través de las actuaciones que su aprovechamiento y consiguiente ordenación y distribución de usos comportan.

La vertiente antrópica del paisaje de las comarcas objeto de estudio -Campo de Alicante y Bajo Vinalopó- ha sido tradicionalmente identificado con un aprovechamiento de carácter agrario, adaptado a las condiciones propias del medio y a las limitaciones que este impone.

A tenor de estos condicionamientos es como se establece una doble distinción. En primer lugar, entre las zonas montañosas, en las que se hace necesario el abancalamiento y aterrazamiento de las laderas y vertientes, en combinación con la puesta en cultivo de los valles y los lechos de ramblas y barrancos, y las zonas de topografía más allanada conformadas tanto por las llanuras aluviales como por los glacis de suave pendiente, ambos de gran extensión superficial y representatividad en este ámbito. En segundo lugar, la dicotomía secoano-regadío, totalmente mediatizada por las disponibilidades



hídricas, disponibilidades que acusan la escasez e irregularidad de las precipitaciones, que conjugada con la intensa evapotranspiración, determinada por las elevadas temperaturas (rasgos propios del clima mediterráneo), definen un ámbito marcado por una notoria aridez<sup>1</sup>; hecho al que se añade, además, la carencia de cursos autóctonos importantes, pues los existentes se caracterizan por un caudal exiguo e irregular<sup>2</sup> (representados en el Campo de Alicante y el Bajo Vinalopó por el Montnegre y el Vinalopó respectivamente).

Todos estos factores justifican la penuria hídrica de la zona y el desarrollo de iniciativas (no siempre cristalizadas) dirigidas a paliarla en dos sentidos. Por un lado se ha contemplado el abastecimiento y transvase de recursos alóctonos, procedentes de otras zonas de la provincia o incluso de otras áreas más alejadas (conducciones de aguas desde Villena, del Júcar, del Ebro, y hasta desde las lagunas de Ruidera a Elche<sup>3</sup>; constituyendo otros ejemplos la elevación de sobrantes del Segura y sus azarbes para abastecer los Campos de Elche y Alicante por

-----  
<sup>1</sup> En este sentido, Geiger califica la franja costera del SE español como la región de aridez más extremada, no sólo de la Península Ibérica, sino también de toda Europa -exceptuando el área del mar Caspio-, con una precipitación anual inferior a los 300 mm. GEIGER, F.: "El sureste español y los problemas de la aridez" *Revista de Geografía*, VII, n° 1-2, Barcelona, 1973, pp.166-167

<sup>2</sup> GIL OLCINA, A.: "El régimen de los ríos alicantinos", *Estudios Geográficos*, n° 128, CSIC. Madrid, 1972, p.437 y GIL OLCINA, A.: "Evolución de los grandes regadíos deficitarios del SE peninsular" en *Demanda y Economía del agua en España*. CAAM-Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, Alicante, 1988, p.312.

<sup>3</sup> RAMOS FERNANDEZ, R: "Proyectos para transvase de aguas de riego a Elche". *Cuadernos de Geografía*, 1970, n°7, pp.259-272.

la "Real Conpañia de Riegos de Levante"<sup>4</sup>, y la transferencia de aguas desde la zona del Zaricejo (Villena) hasta la Huerta de Alicante, emprendida por la "Sociedad del Canal de la Huerta"<sup>5</sup>). por otro lado, la construcción de embalses y presas destinadas al almacenamiento de los escasos recursos en las épocas de mayor abundancia. Asociado a esa carencia de agua viene el exahustivo aprovechamiento, mediante el establecimiento de los sistemas de boqueras<sup>6</sup>, de los reducidos aportes que, producidos en la época de lluvias, circulan por ramblas y barrancos.

Por otra parte, entre los factores que explican la diversa caracterización y rentabilidad de los distintos espacios agrarios, no puede olvidarse el papel realizado por las condiciones edáficas.

La actuación antròpica sobre el medio natural abarca un amplio espectro de actividades. Centràndonos en la agraria (tradicionalmente predominante aunque no exclusiva de este àmbito), ha de señalarse la gran incidencia que ejercen las estructuras de propiedad y de tenencia de la tierra; a las que, además, van íntimamente ligadas la morfología y dimensiones de los

---

<sup>4</sup> GOZALVEZ PEREZ, V: *El Bajo Vinalipó. Geografía Agraria*, Valencia, 1977, pp.229-245; GIL OLCINA, A.: "El regadío en Elche", *Estudios geográficos*, 1968, pp. 541-549.

<sup>5</sup> ALBEROLA ROMA, A: *El pantano de Tibi y el sistema de riegos en la Huerta de Alicante*, Instituto Juan Gil-Albert, 1984, p. 144-145. LOPEZ GOMEZ, A: "Riegos y cultivos en la huerta de Alicante. Evolución y estado actual", *Estudios geográficos*, n°45, Madrid, 1951, pp.701-771.

<sup>6</sup> MORALES GIL, A: "El riego con aguas de avenida en las laderas subáridas". *Papeles del departamento de Geografía de Murcia*, n°1, Murcia, 1986-69, pp.167-183.

parcelarios, la distribución y selección de cultivos, las técnicas y métodos de cultivo más comunes, entre otros aspectos. De ahí, su gran relevancia en la configuración del paisaje.

### 1.-Las características del relieve.

Ambas comarcas se encuentran ubicadas en el extremo oriental de las Cordilleras Béticas.

El Campo de Alicante se encuentra limitado por las estribaciones meridionales de la serranía alcoyana, el Valle del Vinalopó y el mar. Un arco montañoso la circunda por sus límites septentrionales (Sierra del cid, Sierra del Maignó, Sierra del Ventós, Sierra de Peñarroya, Sierra de la Grana) y nordorientales (Cabeçó d'Or, Sierra de la Ballestera, Sierra de Bonalba o Lomas de Gigi), ciñendo a los Valles de Agost, Busot y Jijona, mientras se abre al sur y al oeste hacia los llanos ilicitanos y el Valle del Vinalopó respectivamente. En la zona central se encuentran los llanos aluviales del río Montnegre sobre los que se sitúa la Huerta de Alicante, mientras al oeste y noroeste se desarrollan importantes glacis de escaso grado de pendiente.

El paisaje del Campo de Alicante viene definido por el notorio contraste existente entre llanuras y relieves montañosos. Las llanuras, que ocupan la mayor parte de la superficie y se corresponden con glacis que truncan los sedimentos blandos cretácicos y triásicos, presentan una acusada planitud y dan lugar a amplios espacios abiertos. Sobre ellos se elevan de modo aislado y enérgico relieves montañosos de diversa altitud, en

unos casos modesta (400-500 metros, Foncalent, Sierra Mediana, Tajos y Aguilas) y en otros más elevada (Castelled, Ventós, etc)<sup>7</sup>.

Por lo que se refiere a la estratigrafía, el triás predomina en áreas como la depresión de Agost, la Sierra de las Aguilas o la zona del Monnegre. Son escasos los afloramientos jurásicos (Cabeçó, Foncalent, Sierra Mediana). Existen igualmente materiales cretácicos en el triángulo comprendido entre Alicante, Jijona y Cabeçó d'Or, así como en Torrmanzanas; y el paleógeno se halla representado en elevaciones plegadas como las Sierras de Bonalba, Ballestera o Lomas de Gigi. Gran extensión ocupa en la zona meridional de la comarca y en pequeñas manchas dispersas el cuaternario<sup>8</sup>. En definitiva, el Campo de Alicante se encuentra formado en gran parte por un llano de materiales del trias, cretácico superior, eoceno y mioceno, coronado por el plioceno<sup>9</sup>.

Similar contraste presentan en el Bajo Vinalopó la zona montañosa septentrional y la llanura litoral. La unidad más importante del primer sector es el anticlinal jurásico de la Sierra de Crevillente; ésta se prolonga hacia el este por una serie de pequeñas sierras miocenas como Sierra Negra o el Murón. A la izquierda del Vinalopó el sistema se continúa por las sierras del Tabeyá, Sierra Gorda, y Sierra de Sancho y dels Colmenars,

---

<sup>7</sup> GARCIA FERNANDEZ, J.: *Contribución al conocimiento geomorfológico del Campo de Alicante*. Instituto Univesitario de Geografía, Alicante, 1986.

<sup>8</sup> GUMUZZIO, J. Y MATARREDONA, E.: *Formaciones edáficas del Campo de Alicante*. Alicante, 1983, pp. 9-12.

<sup>9</sup> LOPEZ GOMEZ, A.: "El Campo de Alicante". *Geografía de la Provincia de Alicante*. Alicante, 1978, p. 531.

ya frontera con el Campo de Alicante. La llanura litoral, constituida por materiales cuaternarios (principalmente pleistocenos), es el resultado de la deposición de los acarreos del Vinalopó y es considerada como una zona de subsidencia postpliocena, probablemente continuada en la actualidad<sup>10</sup>.

## 2.-Las condiciones climáticas e hidrográficas.

Las dos comarcas objeto de estudio, a pesar de conformar dos unidades geográficas diferenciadas, presentan un gran número de puntos en común, tanto en lo referente a las unidades morfoestructurales (predominio de las zonas de topografía más regular y allanada) como a las características de los aparatos hídricos que las atraviesan o las condiciones climáticas que las definen, aunque es necesario hacer constar, en éste último caso, la acentuación de la aridez hacia las zonas más meridionales del ámbito elegido.

La conjunción de precipitaciones y temperaturas -elementos climáticos de mayor trascendencia de cara a la delimitación de las posibilidades de aprovechamiento del medio por el hombre- con las características propias de los cursos autóctonos de régimen pluvial mediterráneo, y definidos por un caudal escaso e irregular -incluso inexistente durante largos

---

<sup>10</sup> GOZALVEZ PEREZ, V.: *El Bajo Vinalopó. Geografía Agraria*. Valencia, 1977, pp. 11-18.

periodos de tiempo en el caso de las ramblas- han deparado durante mucho tiempo un afán común de superación de estas limitaciones en ambos espacios, patente en la constante preocupación por el abastecimiento de recursos hídricos y la organización de redes para su distribución; recursos imprescindibles para poder asegurar las cosechas, aunque no suficientes para permitir un incremento considerable de los rendimientos y la introducción de cultivos más exigentes en agua (como es el caso de hortalizas y frutales, que aparecen confinados en espacios muy limitados).

Constituyen ambas comarcas unos sectores tradicionalmente identificados como "campo" (incluso la Huerta de Alicante presenta las connotaciones propias de un regadío deficitario), caracterizados por un tipo de regadío que López Gómez<sup>11</sup> denomina "alicantino", por ser muy frecuente en la provincia de Alicante (La Marina, Huerta de Alicante, Campo de Elche, Valle Medio del Vinalopó, ...), frente a lo que denomina "regadío valenciano"<sup>12</sup>, en las dos provincias más septentrionales (Castellón y Valencia), en las que el aprovechamiento íntegro de los caudales más abundantes de los ríos de mayor longitud, procedentes de las montañas interiores, aunque con valores absolutos modestos (Mijares, Palancia, Turia, Júcar, Serpis), ha dado lugar a los "regadíos principales", aunque no sin la

---

<sup>11</sup> LOPEZ GOMEZ, A: "Riegos y cultivos en la huerta de Alicante. Evolución y estado actual". *Estudios Geográficos*, nº45, Madrid, 1951, pp. 701-771.

<sup>12</sup> LOPEZ GOMEZ, A: "Riegos y cultivos en las huertas valencianas". *Cuadernos de Geografía*, nº1, Valencia, 1965, p.7-15.

necesidad de recurrir también al embalsamiento de las aguas, ante la irregularidad y los fuertes estiajes propios de estos ríos (sichar -Mijares-; Benagéver, Loriguilla -Turia-; Buseo -Chera-; Alarcón, Tous -Júcar-; Contreras -Cabriel-; Regajo -Palancia-; Beniarrés -Serpis-).

## 2.1.- RASGOS CLIMATICOS

Las características climáticas del ámbito de estudio vienen definidas por su ubicación meridional en la zona de circulación general del oeste y en la cuenca del Mediterráneo Occidental<sup>13</sup>; ubicación que determina una alternancia estacional plasmada en el predominio invernal de la circulación zonal del oeste, frente a la primacía estival de las condiciones asociadas a las altas presiones subtropicales (aire cálido y subsidente en altura que impide la formalización de procesos convectivos); a la vez que matizadas por una serie de factores geográficos<sup>14</sup>, como las modificaciones introducidas por el relieve (compartimentación

-----  
<sup>13</sup> Así por ejemplo, la incidencia de las perturbaciones vinculadas al Frente Polar es mínima en este área, puesto que está fuera de la trayectoria que siguen estas borrascas, a través de la llanura de Aquitania y el Valle del Ebro, hacia el Mediterráneo; y, por otra parte, las que afectan a la península a través del litoral portugués, no provocan precipitaciones, como consecuencia de la desecación que experimentan -efecto foehn- tras atravesar los relieves montañosos del interior. Sin embargo, las borrascas atlánticas pueden sufrir una regeneración al contacto con el mar Mediterráneo.

<sup>14</sup> GARCIA DE PEDRAZA, L y CASTILLO REQUENA, J.M.: "Influencia de la configuración topográfica de la Península Ibérica en sus caracteres meteorológicos y climáticos", Paralelo 37, Almería, 1981, pp. 31-41.

de unidades homogéneas -llanos litorales, valles interiores ...-, diferencias altitudinales), por la orientación y disposición del relieve y de la costa, por su situación en la mitad oriental de la Península Ibérica y su posición a sotavento de la meseta y los relieves montañosos que la bordean (desección de los flujos y borrascas atlánticas), y la proximidad al mar Mediterráneo entre otros.

De esa ubicación en la Cuenca del Mediterráneo y, en estrecha relación con las características físicas de la cuenca, derivan, a su vez, la formalización de procesos de ciclogénesis y frontogénesis autóctonos, no relacionados directamente con la circulación zonal del oeste, y los fenómenos provocados por las descargas de la, denominada por Jansá Guardiola, corriente en chorro mediterránea; mecanismos éstos, que pueden dar lugar a esporádicos fenómenos tormentosos localizados, con una distribución irregular<sup>15</sup>.

Son estos factores los que van a configurar el clima del Campo de Alicante y el Bajo Vinalopó, y los que van a condicionar los diversos elementos climáticos y su distribución. Las diferencias espaciales en este ámbito vendrán dadas por las modificaciones de los factores geográficos locales.

Si nos atenemos a la individualización de los distintos sectores climáticos valencianos propuesta por Clavero Paricio<sup>16</sup>,

---

<sup>15</sup> GIL OLCINA. A. y OTROS: Op. Cit., p. 21-22.

<sup>16</sup> CLAVERO PARICIO, P.L.: *Los climas de la región valenciana*, Resumen de Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona, Barcelona, 1980, pp 54-67.



siguiendo un criterio fundamentalmente pluviométrico (pues es éste el elemento que más acusa la incidencia de los factores geográficos), la mayor parte de la zona de estudio estaría comprendida en el sector litoral meridional, que se inicia en el Cabo de S. Antonio y se extiende por los cursos bajos del Segura, Vinalopó y Montnegre. Este sector se caracteriza principalmente por la gran penuria pluviométrica (306,3 mm anuales), con valores paulatinamente más reducidos hacia el Sur (Villajoyosa 346 mm, Alicante 336 mm), y hacia el centro de la fosa (294 mm en Elche, 295 mm en Orihuela); indigencia pluviométrica de la que son responsables, así como del descenso de la humedad relativa media anual (llega a un 60% en el extremo meridional sobre todo en verano e invierno), la posición a sotavento del flujo zonal del oeste y la orientación de la costa respecto a los vientos del noreste.

Las zonas montañosas que conforman los sectores septentrional y oriental del Campo de Alicante estarían englobados en el sector denominado por Clavero vertiente seca de Alcoy, que incluiría la vertiente meridional del Macizo de Alcoy y las áreas más interiores del Alto y Medio Vinalopó, constituyendo un sector seco de rápida transición hacia las zonas más áridas del sureste; sector en el que incide un efecto de "sombra pluviométrica", con la consiguiente disminución de las precipitaciones (en clara disimetría con la vertiente septentrional) hasta valores próximos a los del sector anterior (384,3 mm), superándose sólo los 400 mm en los observatorios más elevados e interiores.

Se trata, por tanto, según palabras del profesor Gil Olcina<sup>17</sup> (a tenor de los datos registrados en los observatorios del Aeropuerto de Alicante y Alicante -Ciudad Jardín-) de un clima de características netamente mediterráneas, seco y soleado, definido básicamente por escasas e irregulares precipitaciones, acentuada sequía estival, pocos días con precipitación, débil nubosidad, elevado número de días despejados, inviernos muy suaves (suavizados por el Mediterráneo), fuerte insolación, intensa evaporación y acusado déficit hídrico; aunque con las consabidas diferenciaciones espaciales introducidas por la altura, la mayor o menor proximidad al mar (litoral-interior) y la latitud; diferenciaciones que se evidencian en los valores de los distintos elementos climáticos.

En lo que respecta al régimen térmico<sup>18</sup>, la temperatura media anual es bastante uniforme y elevada (en correspondencia con la cercanía al mar Mediterráneo y las topografías comarcanas, pues la configuración de estas dos últimas facilita su protección frente a la incidencia de los flujos septentrionales), oscilando

-----

<sup>17</sup> GIL OLCINA, A y OTROS: *Inundaciones en la ciudad y término de Alicante*, Universidad de Alicante-Ayuntamiento de Alicante, Alicante, 1986, p.13.

<sup>18</sup> Los distintos valores manejados proceden de los estudios de ámbito comarcal, provincial y regional realizados por los siguientes autores: GOZALVEZ PEREZ. V.: Op. Cit. pp. 20-41. GUMUZZIO, J.-MATARREDONA, E.: *Formaciones edáficas del Campo de Alicante*. Universidad de Alicante, Alicante, 1983, p.12-14. LOPEZ GOMEZ, A.: "El Clima" en *Geografía de la Provincia de Alicante*, dirigida por LOPEZ GOMEZ, A. y ROSSELLO VERGER, V.M., Excma. Diputación Provincial de Alicante, Alicante, 1978, pp. 107-107. LOPEZ GOMEZ, A.: "El Campo de Alicante" en *Geografía de la Provincia de Alicante*, dirigida por LOPEZ GOMEZ, A. y ROSSELLO VERGER, V.M., Excma. Diputación Provincial de Alicante, Alicante, 1978, pp. 531-556. CLAVERO PARICIO, P.L.: Op. Cit.

entre los 17,9 grados de Alicante, o 17,3-19 grados de Elche<sup>19</sup> (dependiendo de los observatorios considerados), y los 14,6 grados de Jijona<sup>20</sup>, temperatura propia de las áreas más interiores y situadas a una mayor altitud.

Enero es el mes más frío en todos los casos, con una temperatura media entre los 11-11,4 grados en Alicante (según las series utilizadas) y 11-11,8 grados en Elche, frente a los 6,6 grados de Jijona; mientras que las temperaturas medias más elevadas se localizan en julio-agosto (en torno a los 26-27 grados), dependiendo de la continentalidad o proximidad al mar, pues es la acción termoniveladora del mar Mediterráneo la que justifica el máximo térmico de agosto en las zonas litorales (pues reduce la irradiación nocturna manteniendo mínimos térmicos elevados)<sup>21</sup>.

Como resultado de estas circunstancias, la amplitud térmica anual presenta valores moderados, estableciéndose isolíneas paralelas a la costa con gradiente creciente al alejarse del litoral (aunque en las zonas montañosas vuelve a reducirse la amplitud térmica). Valores representativos son los 14,2-14,9 grados en el litoral del Bajo Vinalopó y Alicante, los 15,7 en Elche o los 16,6 grados en el interior.

Las temperaturas absolutas máximas extremas se dan siempre en julio y agosto, con valores cercanos a los 40 grados, a excepción de algunas zonas más elevadas o costeras (en este

---

<sup>19</sup> GOZALVEZ PEREZ, V.: Op. Cit., p.24.

<sup>20</sup> GUMUZZIO, J.-MATARREDONA, E.: Op. Cit. p.12.

<sup>21</sup> CLAVERO PARICIO, P.L.: Op. Cit., p.44-47.

último caso, por la acción de las brisas marinas); las mínimas extremas, en cambio, pueden darse desde diciembre a febrero en el litoral (asociadas a olas de frío), intensificándose hacia el interior las bajas temperaturas y alargándose los periodos en que son posibles (incidencia de las inversiones térmicas). No obstante, las temperaturas próximas a -5 grados en el litoral han sido muy escasas (febrero de 1956)<sup>22</sup>.

Los totales pluviométricos son muy escasos, siendo de destacar la aleatoriedad e irregularidad de las precipitaciones, traducida tanto en los grandes contrastes estacionales y los distintos totales pluviométricos que recibe un mes de un año a otro, como en la acusada irregularidad interanual (con coeficientes, para el Campo de Alicante, en torno a 3,4 en el periodo 1950-1979<sup>23</sup>, y, para el Bajo Vinalopó, entre 3,3 y 4,7, considerando el periodo 1946-1972<sup>24</sup>), puesto que predominan los años con totales inferiores a la media (situada hacia los 300 mm. en el Bajo Vinalopó<sup>25</sup> y 350 mm. en el Campo de Alicante<sup>26</sup>), ocasionalmente con valores ínfimos que, prolongados durante varios años, dan lugar a graves y pertinaces sequías<sup>27</sup>.

-----  
<sup>22</sup> GOZALVEZ PEREZ, V.: Op. Cit. p.27. CLAVERO PARICIO, P. L.: Op. Cit., p.47.

<sup>23</sup> GUMUZZIO, J.-MATARREDONA, E.: Op. Cit., p.14.

<sup>24</sup> GOZALVEZ PEREZ, V.: Op. Cit., p.36.

<sup>25</sup> GOZALVEZ PEREZ, V.: Op. Cit., p.29.

<sup>26</sup> GUMUZZIO, J.-MATARREDONA, V.: Op. Cit., p.13.

<sup>27</sup> Este es el caso de la famosa "seca", que se mantuvo durante cuatro años, entre 1875 y 1879. GIL OLCINA, A. (1986): Op. Cit., p.13.

El régimen pluviométrico se caracteriza por un máximo otoñal (frecuentemente con un pico en octubre), asociado a las lluvias de fuerte intensidad horaria, aunque de menor cuantía que en otros sectores en relación al descenso del total pluviométrico anual; un mínimo secundario invernal; un máximo secundario primaveral (con un pico destacado en abril) y una acentuada sequía estival (agudizada en las zonas más cercanas al litoral, mientras se reduce hacia el interior y a mayor altitud) como rasgo más sobresaliente del clima mediterráneo.

Julio y agosto presentan los mínimos más acusados, constituyendo los valores más frecuentes los situados en torno a los 10-20 mm., que se presentan más reducidos hacia el sur, de modo que en los sectores más áridos no se alcanzan los 10 mm. en agosto, mientras que los totales de julio son prácticamente nulos<sup>28</sup> (5 mm. en julio y 12 mm. en agosto en el Bajo Vinalopó, en los casos más favorables)<sup>29</sup>.

Este ritmo pluviométrico sufre una cierta modificación en las zonas de valles marginales interiores, en las que los totales de precipitación invernal superan ligeramente a los primaverales (caso de Jijona con un ritmo O.I.P.V.), con máximo secundario en diciembre<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> LOPEZ GOMEZ, A. (1978): Op. Cit., p.109.

<sup>29</sup> GOZALVEZ PEREZ, V.: Op. Cit., p.29.

<sup>30</sup> GUMUZZIO, J.-MATARREDONA, E.: Op. Cit., p.13. CLAVERO PARICIO, P.L.: Op. Cit. p.64.

En contraste con la sequía y el predominio de los días con precipitaciones inferiores a 15 mm., se ha de destacar la incidencia de esporádicas lluvias de fuerte intensidad horaria, que pueden aportar, en cortos intervalos de tiempo, totales pluviométricos muy elevados, que llegan a rebasar la media anual, y que, en ocasiones, provocan inundaciones por las fuertes avenidas de ríos y ramblas. Un caso ejemplar lo constituyeron las inundaciones que tuvieron lugar el 20-X-1982 en el Campo de Alicante<sup>31</sup>.

La mayor concentración de precipitaciones máximas anuales en 24 horas (superiores a 50 mm./24 horas) en el periodo 1940-1984 (datos del Observatorio de Ciudad Jardín) se produce en los meses de septiembre a diciembre, con el 64,44 % de los casos<sup>32</sup>.

Por lo que respecta a la distribución estacional de estos aguaceros, se dan con mayor frecuencia, siempre asociados a tensiones de vapor muy elevadas, en el intervalo septiembre octubre, con el 46,6 %; presentan un máximo secundario en mayo-junio, con el 13,3 %; y un profundo mínimo de agosto (2,2%).

---

<sup>31</sup> GIL OLCINA, A.: "Lluvias excepcionales en la noche del 19 al 20 de octubre de 1982 y riada en el Barranco de las Ovejas", en *Lluvias torrenciales e inundaciones en Alicante*, Instituto Universitario de Geografía, Universidad de Alicante, Alicante, 1983, pp. 5-10.

<sup>32</sup> GIL OLCINA, A. y otros (1986): Op. Cit., p.15.

Por tanto, el máximo pluviométrico otoñal aparece íntimamente ligado a estas precipitaciones de fuerte intensidad horaria, siendo necesario para su génesis la coalescencia de una serie de factores<sup>33</sup>:

.-Altas tensiones de vapor de agua en el aire (entre 11,2 y 16,5 mb. en las inundaciones del 20-X-1982), vinculadas a la transferencia de grandes cantidades de vapor de agua y energía calorífica del Mar Mediterráneo al aire. Las condiciones más óptimas para ello se producen en otoño, cuando las aguas marinas, merced a su inercia térmica, registran las máximas temperaturas .

.-El contacto de masas de aire procedentes del E y SE -con un grado de humedad relativa muy bajo- con la superficie marina propicia la absorción de gran cantidad de humedad y por tanto, su rápida saturación, condicionando, por tanto, su evolución con un gradiente pseudoadiabático desde niveles muy bajos, gracias a la liberación de energía latente en el proceso de condensación.

.-La presencia de aire anormalmente frío en los niveles altos de la Troposfera, en estrecha relación con un bajo índice de circulación zonal de la corriente en chorro. Esto se traduce en la aparición de una vaguada con posibilidades de evolución hacia la formalización de una depresión fría en altitud (aunque no es imprescindible que ésto suceda). Aire frío que genera inestabilidad atmosférica por la exageración del gradiente

---

<sup>33</sup> GIL OLCINA, A. y otros (1983): Op. Cit., pp. 9-10. GIL OLCINA, A. y otros (1986): Op. Cit., pp. 14-22.

térmico estático en la vertical, que potencia el disparo de una corriente ascendente de aire de elevada relación de mezcla y muy inestable.

.-El papel del relieve como percutor contribuye también al disparo en la vertical, al iniciar el despegue por convección forzada; con una mayor efectividad con gradientes horizontales de presión en superficie débiles.

.-La existencia de abundantes núcleos de condensación (cristales de hielo y partículas adquiridas por la masa de aire durante su trayectoria -sal marina y polvo y sílice del Sáhara- facilita una condensación copiosa.

.-Otro factor potenciador del ascenso es la instalación en la rama ascendente de la vaguada de un campo de divergencia por difluencia, al generar un efecto de succión del aire Mediterráneo, que favorece y acentúa el disparo en la vertical.

Por último, en consonancia con esa escasez e irregularidad de las precipitaciones, ha de señalarse el escaso número de días de lluvia : en torno a los 61 días al año en Alicante<sup>34</sup> y en un número aún menor -entre 34,5 y 45,3- en Elche<sup>35</sup>, siendo esta diferencia más importante respecto al número de días que a los totales pluviométricos. En general son lluvias breves, y, frecuentemente, en forma de chaparrones, con totales pluviométricos escasos (exceptuando las lluvias de fuerte intensidad que esporádicamente dan lugar a inundaciones y

---

<sup>34</sup> GIL OLCINA, A. Y OTROS (1986): Op. Cit., p.13.  
<sup>35</sup> GOZALVEZ PEREZ, V.: Op. Cit., p.31.



avenidas); puesto que los días con lluvias superiores a los 15 mm. sólo suponen en Elche el 12 % del total<sup>36</sup>.

En suma, la indigencia e irregularidad pluviométricas imponen un factor limitativo para el desarrollo de la actividad agraria y el crecimiento de la vegetación natural, agravado por la concentración de las lluvias en pocas tormentas, que reducen la efectividad de las ya de por sí exiguas precipitaciones, al tiempo que, por su vinculación con procesos erosivos, reportan graves perjuicios, como la pérdida de suelos o la malogración de las cosechas.

Los valores térmicos, óptimos en principio en relación al ciclo vegetativo -a tenor de la suavidad invernal y las altas temperaturas equinocciales y estivales-, ejercen, sin embargo, una influencia negativa, debido a la intensa evapotranspiración potencial de la que son responsables; puesto que, su interacción con las condiciones pluviométricas ocasiona la notoria aridez de estas áreas, con incidencia no sólo en el desarrollo vegetativo de los cultivos y la vegetación natural, sino en las condiciones edáficas de la zona.

Esa aridez se hace evidente tras el manejo de los diversos índices de aridez y climogramas. Con la aplicación del índice de Dantín-Revenge, ambas comarcas alcanzan valores entre 5 y 6, muy próximos, por tanto, al umbral que marca la aridez acusada (6). Son considerados como secos la mayoría de los meses atendiendo al Climograma de Gaussen; y, asimismo, si recurrimos

---

<sup>36</sup> GOZALVEZ PEREZ, V.: Op. Cit., p.32.

al de Thornthwaite, les corresponde una caracterización de aridez extrema, con un déficit de agua en torno a los siete meses (superior en el caso del Bajo Vinalopó). De este modo, la mayor parte del ámbito de estudio estaría comprendido en el dominio climático semiárido, con una ligera diferenciación entre la zona interior, donde repercute la continentalización, y el sector costero, resultando una caracterización DB'<sub>2</sub>db'<sub>4</sub> (Jijona) o DB'<sub>3</sub>da (Alicante) respectivamente. Se ha de destacar como excepción el sector de Torremanzanas, definido como C<sub>2</sub>B'<sub>2</sub>sb'<sub>4</sub><sup>37</sup>. Finalmente, siguiendo la notación de Köppen, queda identificado el clima de estos ámbitos como BShs".

Los condicionamientos climáticos expresados, y las limitaciones que imponen de cara a la práctica agrícola, con los riesgos que ésto conlleva, y la subsiguiente adaptación de cultivos y técnicas, se percibe en el análisis de los diversos fondos documentales. Un ejemplo clarificador lo constituye una cláusula común a numerosos contratos de arrendamiento, que especifica lo siguiente: "Es condición: Que por razón de piedra, niebla, diluvios de agua, esterilidad, langosta, Peste, guerra, u otro cualquier infortunio del tiempo, aunque sea de los más inopinados y jamás vistos, no han de poder pedir rebajas, ni moderación alguna del precio de este arrendamiento, porque se hace a todo riesgo y peligro de aquello (...)"<sup>38</sup>. A este ejemplo hay que añadir otros múltiples en los que se establecen los

---

<sup>37</sup> JUAREZ SANCHEZ-RUBIO, C.: *Tipología climática de la Provincia de Alicante*, 1982, mecanografiado.  
<sup>38</sup> A.H.P.A.: Protocolos Notariales de SALA Y CANTO, F.

cuidados que han de recibir los distintos cultivos en las épocas, generalmente estivales, de escasez de aguas<sup>39</sup>, para enfrentarse con un relativo éxito -que permita si no incrementar si asegurar las cosechas- a la precariedad de las precipitaciones.

## 2.2.- CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS

La indigencia pluviométrica propia de la zona, hace imprescindible, por tanto, el recurso al regadío; aunque dadas las características de la red hidrográfica alicantina las disponibilidades existentes no han permitido solventar el problema, que ha seguido latente a pesar de los continuados esfuerzos por aumentar los recursos hídricos desde las primeras décadas del s. XX, y que, en la actualidad, todavía resultan insuficientes en concordancia con las grandes transformaciones realizadas en los últimos años, a tenor de la explotación de los caudales hipógeos y las expectativas despertadas por los transvases, no cubiertas en su totalidad.

La red fluvial alicantina se caracteriza por un escaso grado de jerarquización, constituida por una serie de pequeñas y medianas cuencas disociadas entre sí<sup>40</sup>; afectando las dos más meridionales, las de los ríos Montnegre y Vinalopó, las comarcas

---

<sup>39</sup> Son representativas las dedicadas a cultivos generalmente de secano, que reciben muy pocos riegos al año, como las moreras, los olivos, la vid, etc.

<sup>40</sup> GIL OLCINA, A.: "El régimen de los ríos alicantinos", *Estudios geográficos*, Madrid, 1972, nº 128, pp. 432-441, p.429.

del Campo de Alicante y del Bajo Vinalopó respectivamente. Ambos cursos participan de los rasgos definidos por Masachs Alavedra<sup>41</sup> para los cursos mediterráneo-levantinos.

Son cursos de corto recorrido, puesto que nacen en los relieves montañosos próximos al litoral, y de caudal escaso e irregular, con un régimen pluvial mediterráneo. Sus características están determinadas por la incidencia de factores como el relieve (por sus implicaciones en el clima y la escorrentía), la marcada aridez de estas áreas y la intervención antrópica.

En este sentido, el incremento de la aridez y la suavización de los sistemas de pendientes justifican la disminución del caudal de estos cursos frente a los septentrionales, puesto que estos últimos, unido al aumento de las precipitaciones por efecto orográfico, se ven favorecidos por la reducción de los déficits de escorrentía ante la menor evapotranspiración, los fuertes declives que aceleran la circulación de las aguas y la reducción de las áreas de regadío. Por otra parte, la detracción de recursos para el regadío en los tramos inferiores acentúa la exigüidad de los caudales<sup>42</sup>.

Con un módulo absoluto de  $0,276 \text{ m}^3/\text{sg}$  y un módulo específico de  $0,68 \text{ l/sg/km}^2$  para una cuenca vertiente de  $405 \text{ km}^2$ , el río Montnegre, desempeñó un papel fundamental, durante varios

---

<sup>41</sup> MASACHS ALAVEDRA, M.: *El régimen de los ríos peninsulares*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, 1948, pp. 266-280.

<sup>42</sup> GIL OLCINA, A. (1972): Op. Cit., pp. 432-441.

siglos, para el mantenimiento de la Huerta de Alicante. Tiene su cabecera a unos 1100 m. de altitud, en la zona de confluencia de los caudales procedentes de la Marjal de Onil y los excedentes de varias resurgencias con origen en la sierra del mismo nombre. Conocido en este tramo como río Verde, parte con una dirección SE hacia la hoya de Castalla, donde recibe los aportes del río de Ibi o barranco de Gabarrera, procedente de la Canal de Alcoy. El estrechamiento que sufre el río en Tibi, al encajarse entre los cerros del Mos del Bou y la Cresta, fue aprovechado para la construcción del pantano de Tibi a finales del s. XVI<sup>43</sup>.

A partir de este punto, y ya con la denominación de Montnegre -puesto que atraviesa un sector de calizas triásicas negras aguas abajo del embalse-, discurre hasta Muchamiel, desde 1943, por un cauce artificial, con el propósito de evitar las pérdidas por evaporación e infiltración. Al inicio de este tramo se le une el río de la Torre (tras recorrer los valles de Torremanzanas y Jijona), que tiene su cabecera en la Sierra de Rontonar, aproximadamente a unos 1000 m. de altitud, y, ya cerca de Muchamiel, lo hacen los barrancos de Vergeret (Vercheret), Agua Amarga, Busot y Bahafi, todos por su margen izquierda. Desde Muchamiel, y hasta su desembocadura en Campello (donde origina un delta de 0,5 km<sup>2</sup>), es aprovechado íntegramente en la Huerta de

---

<sup>43</sup> LOPEZ GOMEZ, A.: "Embalses en los siglos XVI y XVII en Levante", *Estudios Geográficos*, 1971, XXXII, pp. 617-656.

Alicante, recibiendo, por esta razón, el calificativo de río seco, puesto que sólo circulan aguas con motivo de fuertes avenidas.

El río Vinalopó, por su parte, con una cuenca vertiente más amplia, y también enormemente influenciado por la acción antrópica, nace en la Sierra de Mariola a unos 1000 m. de altitud, en la zona conocida como Rincón de Bodí (Bocairente). Los escasos caudales de cabecera se ven considerablemente reducidos por las detracciones efectuadas para el riego de las huertas de Bañeres, Bocairente, Benejama y Biar, a pesar de los diversos aportes que recibe; entre estos, los de varias fuentes y los del barranco dels Pinarets en las cercanías de Bañeres y los del río Marchal en el valle de Benejama; destacando la escasa importancia de su red afluente en el curso alto, integrada por una serie de ramales secundarios de escasa longitud con una disposición pinnada<sup>44</sup>. El aprovechamiento intensivo en este tramo se ve favorecido por una topografía poco accidentada.

Tras circundar la ciudad de Villena adopta una dirección S-SE, siendo necesario en esta zona su encauzamiento, para evitar el estancamiento de las aguas ante el escaso declive de su perfil longitudinal. La disminución de caudales, provocada por el empleo de sus aguas en el regadío, continúa en Sax, Elda y Monóvar, aunque, en compensación, recibe los gastos de varias resurgencias en los términos de Elda y Monforte, junto con las aguas del Tarafa; aportes que posteriormente eran aprovechados

---

<sup>44</sup> GIL OLCINA, A. (1972): Op. Cit., p.433.

para el regadío de Elche, que, sin embargo, apenas depende del Vinalopó desde la elevación de los sobrantes del Segura y sus Azarbes y la llegada de los caudales proporcionados por el Tansvase Tajo-Segura.

El pantano, situado cuatro km aguas arriba de Elche y que antaño respondía de su regulación, se encuentra en la actualidad totalmente enrunado. Esta circunstancia motivó la construcción de un cauce artificial -en funcionamiento desde 1914- para salvar la entrada en el embalse. El caudal desembocaba, tras ser conducido por diversos túneles y acueductos, en la Acequia Mayor; condicionando, de este modo, la circulación del agua por el cauce natural, que, a partir de este punto, sólo discurría en momentos de avenida o cuando no se producía su aprovechamiento en el regadío de Elche<sup>45</sup>. La situación ha cambiado actualmente ante el abandono del empleo de estas aguas para el riego, gracias a la llegada de las transvasadas desde el Tajo (proceso iniciado ya con la consolidación de Riegos de Levante).

Finaliza su trayectoria, originando un amplio delta interior de 6 km de generatriz, en la Albufera de Elche, que va siendo progresivamente colmatada por los acarreos del Vinalopó.

---

<sup>45</sup> GIL OLCINA, A.: "El regadío de Elche", *Estudios Geográficos*, 1968, XXIX, p.534.

En definitiva, ambos ríos presentan los rasgos propios de los ríos rambla mediterráneos. La exigüidad de su módulo relativo -consecuencia de la indigencia pluviométrica y la evapotranspiración potencial, las infiltraciones y el consumo en diversos usos- se acentúa hacia la desembocadura. Hay que tener en cuenta, por tanto, que los datos disponibles acusan la regulación y el aprovechamiento de que son objeto estos cursos.

Presentan, por otra parte, una elevada irregularidad interanual, patente en el caso del Montnegre con un coeficiente de 96,5 ( $1,739 \text{ m}^3/\text{sg}$  el año de máxima abundancia -1933/4-, y  $0,018 \text{ m}^3/\text{sg}$  el año de mínima -1911/2-), en franco contraste con los valores que caracterizan al Vinalopó, puesto que en ninguno de sus tres afluentes alcanza una irregularidad interanual superior a 15, presentando, incluso, los valores más reducidos en el conjunto de los cursos provinciales analizados por el profesor Gil Olcina<sup>46</sup>.

Responden, el Vinalopó y el Montnegre, a un régimen pluvial mediterráneo, en el que destacan las variaciones estacionales, más acentuadas que las que presentan los cursos septentrionales. No obstante, hay que tomar en consideración las diversas condiciones pluviométricas y de escorrentía, puesto que tienen una gran incidencia en la configuración de las distintas gráficas mensuales. A esta circunstancia, se une el hecho de la

---

<sup>46</sup> Benejama: 14,7 ( $0,324 \text{ m}^3/\text{sg}$  el año de máxima -1918/9-, y  $0,022 \text{ m}^3/\text{sg}$  el de mínima -1912/3-); Santa Eulalia: 14,3 ( $2,928 \text{ m}^3/\text{sg}$  -1947/8- y  $0,204 \text{ m}^3/\text{sg}$  -1913/4-); y Aspe: 10,0 ( $0,880 \text{ m}^3/\text{sg}$  -1923/4- y  $0,088 \text{ m}^3/\text{sg}$  -1913/14-). GIL OLCINA, A. (1972): Op. Cit., p.437.



modificación de estos cursos por la acción antrópica. Expresivo de la notoria irregularidad que caracteriza a estos cursos es el gran contraste existente entre los acusados estiajes estivales, motivados por la escasez de precipitaciones y los elevados índices de ETP (acentuados o moderados por la intervención antrópica), y las furiosas avenidas otoñales y primaverales (predominando las primeras), que experimentan ocasionalmente, vinculadas con las lluvias de fuerte intensidad horaria y potenciadas por las características hidrológicas, morfológicas, litológicas y biogeográficas de la cuenca vertiente.

La mayor riada conocida en el Vinalopó, con un máximo instantáneo estimado, según la pendiente y sección mojada, en 350 m<sup>3</sup>/sg, tuvo lugar en 1884; más recientemente destaca la acaecida en 1953, en la que alcanzó 26,8 m<sup>3</sup>/sg<sup>47</sup> (modestia relativa de sus avenidas). Ejemplos similares se han producido en el río Montnegre, destacando por su envergadura la riada, citada por Viravens, que tuvo lugar en el Montnegre el 7-IX-1793, durante la cual las aguas sobrepasaron la presa de Tibi<sup>48</sup>; más próxima en el tiempo fue la acontecida el 8-XI-1914, en la que se alcanzaron los 29 m<sup>3</sup>/sg.

---

<sup>47</sup> GIL OLCINA, A. (1968), Op. Cit., p.531.

<sup>48</sup> "El agua, corriendo furiosamente por el río, subió 2 metros 90 centímetros sobre el pantano: así lo testimonia una lápida que existe en el monte Mos del Bou, colocada á la misma altura á que llegó la corriente". VIRAVENS Y PASTOR, R.: *Crónica de la muy ilustre y siempre fiel ciudad de Alicante*, Alicante, 1876, reed. facs. por A. Soler, Alicante, 1976, p. 153.

Señalar, por último, los enormes acarreos de materiales que realizan estos cursos, posibilitados por las condiciones climáticas y geomorfológicas de este ámbito, a lo que se añade además el deterioro de la cubierta vegetal. Acarreos, cuya deposición genera la aparición de formaciones deltaicas en las desembocaduras<sup>49</sup>, al mismo tiempo que provoca el enrunamiento de los pantanos, reduciendo su efectividad hasta su casi total inutilización<sup>50</sup>.

La red hidrográfica de ambas comarcas se complementa con una red de barrancos o ramblas originados en las alineaciones costeras, profundamente encajados en sus tramos superiores, mientras que incrementan la amplitud de sus cauces a medida que descienden hacia las zonas más bajas; todo ello en estrecha relación con el tipo de flujo y con el material predominante. Generalmente son cursos de escasa longitud, en los que se confunden los lechos mayor y menor, y en los que la circulación del agua es escasa (Geiger<sup>51</sup> establece como promedio para las

-----  
<sup>49</sup> Este es el caso del cono-delta del Vinalopó, limitado por el cinturón de saladares; con un radio de 8 km -desde Elche- y unos 40 km<sup>2</sup> de superficie, con una pendiente de 8,5 por mil; o el delta de menor extensión del Montnegre en Campello. ROSSELLO VERGER, V.M.: "Los llanos y piedemontes: un dominio subárido", en *Geografía de la provincia de Alicante*, Excma. Diputación Provincial de Alicante, 1978, p.39..

<sup>50</sup> Un caso ejemplar lo constituye el aterramiento en sus 9/10 partes del pantano de Elche, que en su reconstrucción, iniciada en 1842, tenía prevista una capacidad de 4 millones de m<sup>3</sup>. GIL OLCINA, A. (1968), Op. Cit., pp. 532-533. Un caso similar es el del pantano de Tibi, puesto que los espesores de fangos depositados, cuya limpieza se efectuaba cada 4 años, alcanzaban los 12 y 16 metros. LOPEZ GOMEZ, A.: "Embalses en los siglos XVI y XVII en Levante", *Estudios Geográficos*, 1971, XXXII, p. 637.

<sup>51</sup> GEIGER, F.: "El Sureste español y los problemas de la aridez", *Revista de geografía*, VII, n<sup>o</sup> 1-2, Barcelona, 1973, p. 198.

ramblas del sureste unos 10 días anuales de fluidez hídrica, superior al número de avenidas), aunque, en algunos casos, proporciona la humedad suficiente para su colonización por la vegetación.

La extrema irregularidad que los caracteriza ratifica su concepción como regímenes espasmódicos, puesto que la habitual carencia, casi absoluta, de caudales circulantes por el cauce contrasta, en gran medida, con las furiosas avenidas que ocasionalmente experimentan estos cursos (generalmente otoñales, y en función de las condiciones climáticas, morfológicas y de escorrentía de la cuenca), de las que son consecuencia elevados coeficientes de escorrentía y un enorme poder erosivo. La falta de funcionalidad con precipitaciones de escasa cuantía está en estrecha relación con la intervención antrópica que se viene desarrollando desde la Edad Media en estos ámbitos; plasmada en la fiebre roturadora que tuvo lugar durante el s. XVIII e intermitentemente durante el s. XIX, que propició la adecuación de las laderas montañosas mediante los aterrazamientos, y la implantación de los sistemas de riego eventual (boqueras) ante la imperiosa necesidad de aprovechar los escasos recursos hídricos. Ejemplos de estas actuaciones son las roturaciones (actualmente abandonadas) efectuadas a elevadas altitudes en los relieves de la zona (a 800 m. de altitud en la ladera meridional del Maigmó o a 750 m. en la vertiente oriental de la Sierra del Cid, entre otros). Además se ha de señalar la incidencia de los sistemas de

riego tradicional de aguas fluviales o subterráneas y, más recientemente, la proliferación en los lechos de edificaciones urbanas e industriales<sup>52</sup>.

Finalizan su recorrido desembocando directamente al Mediterráneo o afluyendo a cualquiera de los dos cursos que vertebran las comarcas estudiadas, o bien, se desvanecen en las cercanías de la costa. Así por ejemplo, en el Bajo Vinalopó, los cauces de ramblas y barrancos desaparecen entre las isohipsas de 20-40 m. por falta de pendiente, desvaneciéndose en "amplios y topográficamente imperceptibles conos interiores"<sup>53</sup>, del mismo modo que desaparece el Vinalopó en los terrenos pantanosos de la costa. A la topografía y la naturaleza del roquedo hay que añadir la matización impuesta por la acción antrópica, que desvirtúa e, incluso, hace desaparecer los cauces.

No se puede olvidar tampoco, la existencia de áreas deprimidas topográficamente, de características semiendorreicas o endorreicas, que actúan como zonas en las que se interrumpe la esorrentia y se provoca la desconexión entre distintos sectores de la red hidrográfica. Esta desconexión está motivada, además, por las actuaciones del hombre, tanto a través de las

---

<sup>52</sup> MORALES GIL, A.; BRU RONDA, C. y BOX AMOROS, M.: "Condiciones morfológicas y chubascos de fuerte intensidad horaria en la cuenca vertiente del Barranco de las Ovejas", en *Lluvias torrenciales e inundaciones en Alicante*, Instituto Universitario de Geografía, Universidad de Alicante, Alicante, 1983, pp. 34-35.

GIL OLCINA ET ALII: *Inundaciones en la ciudad y término de Alicante*, Instituto Universitario de Geografía, Universidad de Alicante-Ayuntamiento de Alicante, Alicante, 1986, p. 41.

<sup>53</sup> GOZALVEZ PEREZ, V. (1977), Op. Cit., pp. 16-17.

transformaciones agrícolas, como por la detracción de caudales mediante los sistemas de boqueras instalados a lo largo de las ramblas<sup>54</sup>.

En lo que respecta a la comarca del Bajo Vinalopó, el mayor desarrollo de los barrancos se produce a la derecha del río vinalopó, caracterizados en su gran mayoría -excepto el barranc de l'Arc- por una fuerte meandrización (Barrancos de Barbasena, del Boc y su afluente la Garganta, de la Rambla y del Fondo); puesto que, en su margen izquierda, la llanura aluvial está ocupada mayoritariamente por "el cono de piedemonte" de este curso, relación con la orientación de los relieves montañosos. Al este del cono, ocupando lo que debería constituir el centro de la llanura, se distinguen una serie de formaciones de caliche atravesadas por barrancos de orientación paralela al desarrollo del cono (NW-SE) y ocupados por cultivos arbóreos, que reciben la denominación popular de "canales" o "canyades"; ocasionalmente funcionales con motivo de las intensas lluvias otoñales, durante las cuales el agua se concentra en "regalladors" que destruyen los bancales construídos en los cauces. Desembocan en las zonas deprimidas de la costa : antiguas salinas de Salinera Catalana, depresión del Altet y la depresión que circunda la sierra de Santa Pola (Vallverd, Bassars, el Senial y Clot de Galvany)<sup>55</sup>.

---

<sup>54</sup> GIL OLCINA Y OTROS (1983), Op. Cit., pp. 35-57. GIL OLCINA Y OTROS (1986), Op. Cit., pp. 32-46.

<sup>55</sup> GOZALVEZ PEREZ, V. (1977), Op. Cit. pp. 17-18.

En el Campo de Alicante, el sistema de drenaje no consiste en una única cuenca vertiente, sino que, por el contrario, está integrado por una serie de colectores que avenan pequeñas subcuencas (Barranco de Agua Amarga, Barrancos de la cubeta de Agost y sus proximidades-Barranco de las Ovejas, Barranco de Maldo, Barranco de San Blas-San Agustín), que probablemente guardaron conexión en otros tiempos<sup>56</sup>.

Por último señalar la red fluvial del Montnegre, en la que se encuentran integrados los barrancos del triángulo Busot-Jijona-Muchamiel, que, originados en los relieves que contornean la comarca por el N y el NE, se encajan y concentran al N de Muchamiel, afluyendo al río Montnegre (Barranco del Vergeret, del que son afluentes la Rambla de Busot y el Barranco de la Umbría; Barranco de Agua Amarga). Sin olvidar tampoco los más orientales, como el barranco de Aguas de Busot y el del Amerador que vierten directamente al Mediterráneo, o el Barranco de Cabrafich que desaparece en las proximidades de Campello.

---

<sup>56</sup> GIL OLCINA Y OTROS (1986), Op. Cit., p. 39.

### CAPÍTULO 3

LA PECULIARIDAD JURISDICCIONAL DEL ÁMBITO DE ESTUDIO.  
CARACTERIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS SEÑORÍOS ALFONSINOS.





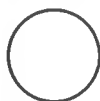
LOCALIZACIÓN DE LOS ANTIGUOS SEÑORÍOS DE JURISDICCIÓN ALFONSINA  
Y LOS DE CARÁCTER ÚNICAMENTE TERRITORIAL EXISTENTES EN LAS COMARCAS  
DEL CAMPO DE ALICANTE Y BAJO VINALOPÓ A MEDIADOS DEL SIGLO XIX.

(Mapa Provincial de Alicante. Diccionario Geográfico Estadístico  
Histórico. Atlas de España y sus posesiones de Ultramar. COELLO-  
MADOZ. 1859).

LEYENDA



Antiguos señoríos actualmente constituídos como municipios independientes.



Antiguos señoríos que, o bien nunca se constituyeron como municipios independientes, o bien una vez adquirido ese carácter lo perdieron con posterioridad.



Heredad

- 1.-La Sarga
- 2.-Aguas de Busot (Aigües)
- 3.-Busot
- 4.-Barañes (Baranyes)
- 5.-Agost
- 6.-Peñacerrada o Pueblo Nuevo (El Poblet Nou)
- 7.-Villafranqueza o Palamó
- 8.-La Vallonga de Burgunyo (El Poblet de Burgunyó)
- 9.-Torrellano
- 10.-Asprillas

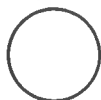
LOCALIZACIÓN DE LOS ANTIGUOS SEÑORÍOS DE JURISDICCIÓN ALFONSINA  
Y LOS DE CARÁCTER ÚNICAMENTE TERRITORIAL EXISTENTES EN LAS COMARCAS  
DEL CAMPO DE ALICANTE Y BAJO VINALOPÓ A MEDIADOS DEL SIGLO XIX.

(Mapa Provincial de Alicante. Diccionario Geográfico Estadístico Histórico. Atlas de España y sus posesiones de Ultramar. COELLO-MADOZ. 1859).

LEYENDA



Antiguos señoríos actualmente constituídos como municipios independientes.



Antiguos señoríos que, o bien nunca se constituyeron como municipios independientes, o bien una vez adquirido ese carácter lo perdieron con posterioridad.



Heredad

- 1.-La Sarga
- 2.-Aguas de Busot (Aigües)
- 3.-Busot
- 4.-Barañes (Baranyes)
- 5.-Agost
- 6.-Peñacerrada o Pueblo Nuevo (El Poblet Nou)
- 7.-Villafranqueza o Palamó
- 8.-La Vallonga de Burgunyo (El Poblet de Burgunyó)
- 9.-Torrellano
- 10.-Asprillas





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ALICANTE

Palmerías

NUEVA TABARCA

Isla Plana o Nueva Tabarca



### CAPITULO 3

#### LA PECULIARIDAD JURISDICCIONAL DEL AMBITO DE ESTUDIO. CARACTERIZACION Y EVOLUCION DE LOS SEÑORIOS ALFONSINOS.

La notoria implantación del régimen señorial en el antiguo Reino de Valencia ha sido puesto de manifiesto por un gran número de autores. En este sentido, Gil Olcina<sup>1</sup> -en función del *Censo de la Población de España en el año 1797, ejecutado por orden del Rey en el de 1801-* ofrece unos datos bastante significativos sobre la extensión del régimen señorial valenciano en vísperas de su abolición. Frente a un total de 77 términos de realengo (tomando en consideración los calificados como villas, lugares y aldeas), se contabilizan 485 de señorío (incluyendo los pertenecientes a Ordenes), entre los que predomina claramente el señorío secular o laico, con un total de 386 municipios. El realengo es mayoritario, sin embargo, entre las grandes ciudades, pues solamente Denia, Gandía y Segorbe son dominios señoriales. En esta misma línea, el mencionado autor recoge, otorgándoles un valor relativo, las estimaciones del diputado de las Cortes de Cádiz Alonso y López, y las de Canga Argüelles. El primero

---

<sup>1</sup> GIL OLCINA, A.: *La propiedad señorial en tierras valencianas*. Del Cenia al Segura, Valencia, 1979, pp. 106-107.

establecía en un 72,2% la proporción de tierras cultivadas que en el antiguo reino de Valencia estaban adscritas al señorío laico (1.766.974 aranzadas de un total de 2.446.472)<sup>2</sup>, mientras el segundo valoraba la cuantía de los derechos feudales y dominicales satisfechos en los señoríos valencianos en la mitad de los percibidos en el conjunto de la Península y Baleares<sup>3</sup>.

No cabe duda, sin embargo, de que esta estimación ha de ser matizada incluyendo entre los parámetros de comparación no sólo el número de términos adscribibles a señorío o realengo, sino también la superficie y población afectadas por la implantación del régimen señorial. En este sentido, el autor mencionado anteriormente, basándose en el *Nomenclator* de Floridablanca (1789) y la *Relación* de Franco (1804), calcula en un 74,52% del reino de Valencia la superficie de carácter señorial, distribuída del siguiente modo<sup>4</sup>:

	<u>Extensión (km<sup>2</sup>)</u>	<u>% Reino Valencia</u>
Realengo	5.455,92	25,48
Abadengo	778,54	3,64
Señorío Eclesiástico	398,43	1,86
Señorío Secular	12.260,80	57,26
<u>De Ordenes</u>	<u>2.517,32</u>	<u>11,76</u>
Total	21.411,01	100,00

<sup>2</sup> Ibidem, p. 118.

<sup>3</sup> GIL OLCINA, A: "La extinción de la propiedad señorial en territorio valenciano". *Estudios Geográficos*, nº154, 1979, p. 52.

<sup>4</sup> GIL OLCINA, A.: "Declive y ocaso de la enfiteusis señorial valenciana". *Agricultura y Sociedad*, nº 49, 1988, pp. 297-298.

Este autor introduce dos puntualizaciones al respecto, la primera, que el área global considerada para el ámbito señorial peca ligeramente por defecto al excluir un conjunto de lugares alfonsinos que no alcanzaron o perdieron la condición de municipios, y la segunda, que no todo ese territorio es de propiedad señorial (tanto en plena propiedad como en dominio directo), hay que tener en cuenta las tierras francas y las superficies de montes y baldíos, que no siempre están bajo el control del señor<sup>5</sup>.

Asimismo, Peset y Graullera realizan unas estimaciones de esa índole, obteniendo valores muy próximos a éstos, aunque con ligeras diferencias, e incluyendo, además, el elemento población<sup>6</sup>.

% Población    % Extensión

Realengo	38,71	24,07
Ordenes Militares	7,95	11,86
Señorío Eclesiástico	5,62	6,11
Señorío Laico	47,72	57,96

<sup>5</sup> Ibidem, p. 298.

<sup>6</sup> PESET, M. Y GRAULLERA, V.: "Nobleza y señoríos durante el siglo XVIII valenciano". *Estudios de Historia Social*, nº 12-13, 1980, pp. 250-251.

Al tomar en consideración la población comprendida en ambos ámbitos, se observa como la importancia del realengo se incrementa, aunque sigue sin alcanzar las proporciones del señorío, que todavía se mantiene en un porcentaje superior al 60%.

No se debe olvidar, sin embargo, que el realengo engloba los centros urbanos de mayor importancia, así como algunas de las zonas más ricas del Reino de Valencia. A este respecto, Romero Gonzalez señala como, aunque el señorío afectaba al 84% de los lugares y al 56% de la población de la actual provincia de Valencia, el realengo, con sólo un 16% de los municipios (entre lugares, villas y ciudades), se extendía a lo largo de toda la franja litoral, ocupando gran parte de las ricas tierras de huerta y regadío, donde se localizaban los núcleos de población más importantes y las densidades más elevadas<sup>7</sup>.

Esto no implica que no existieran ámbitos de esas características afectados por el señorío, como son los casos del Ducado de Gandía, los Marquesados de Denia o Elche o los pequeños señoríos del Bajo Segura.

---

<sup>7</sup> ROMERO GONZALEZ, J: *Propiedad agraria y sociedad rural en la España Mediterránea. Los casos valenciano y castellano en los siglos XIX y XX*. MAPA, Madrid, 1983, pp. 14-20.

Es necesario, antes de emprender el análisis de las características de los señoríos de la zona de estudio, tomar en consideración dos cuestiones: la existencia de diversos grados de jurisdicción señorial y la conjunción de base territorial y elemento jurisdiccional en los señoríos.

Por lo que respecta a la jurisdicción concedida "in dominum", Iborra Lerma<sup>8</sup> establece, siguiendo a Matheu Sanz, tres modalidades, la jurisdicción concedida a los barones que poseen el mixto y mero imperio (ésto es, la suprema o baronal), la jurisdicción alfonsina o de mixto imperio y la jurisdicción meramente civil, ligada a la enfiteusis.

Esta tipificación responde a unas competencias jurisdiccionales de distinto grado. La suprema jurisdicción es privativa, y presenta una serie de limitaciones en ciertos casos, en los que pertenece al rey la potestad judicial (entre ellos, los delitos de lesa majestad, de moneda falsa, de bandidos famosos, de delitos cometidos por oficiales reales, casos sobre jurisdicción entre vasallo y señor -excepto censos o asuntos feudales-, o casos contra caballeros, en los que no podrá proceder civil ni criminalmente a no ser que se trate de censos; gama de mayor amplitud con anterioridad a las Cortes de 1604). En virtud de esta jurisdicción el señor estaba facultado, entre otros actos, para conceder licencia al concejo municipal de su territorio para establecer "sisas" o contribuciones (aunque no

---

<sup>8</sup> IBORRA LERMA, J.M.: *Realengo y señorío en el Campo de Morvedre*. Caja de Ahorros y Socorros de Sagunto, 1981, pp. 205-215.



podía crear por si mismo impuestos o derechos), comprobar las cuentas de administración de los oficiales del concejo, evocar las causas tramitadas ante sus oficiales, cambiar el lugar del juicio y realizarlo fuera de la baronía, o disponer de un oficial en las causas de mero imperio en caso de existir otros señoríos de jurisdicción inferior.

La **jurisdicción alfonsina** es una jurisdicción de carácter intermedio, inferior a la anterior, plena en lo civil y limitada en lo criminal, en la que se hace reserva del mero imperio. Por este motivo está fuera de su competencia la imposición de las penas de muerte, mutilación y tortura, así como la potestad de mandar a exilio perpetuo. Esta jurisdicción, que el señor ejerce sobre sus vasallos únicamente en delitos cometidos dentro del señorío -sólo en primera instancia-, será tratada con mayor detalle en páginas posteriores.

Existe también la **jurisdicción baja o civil**, que refleja la profunda complejidad jurisdiccional del régimen señorial valenciano. A ella se añade el **dominio directo** sobre la cosa censada, donde cabría también apreciar connotaciones de orden jurisdiccional.

Estos distintos niveles jurisdiccionales podían superponerse en un mismo territorio, creando un complejo sistema de relaciones de interdependencia, en el que adquieren protagonismo los conflictos por el disfrute de las competencias jurisdiccionales, la percepción de derechos o el deslinde de

términos, entre otras cuestiones<sup>9</sup>. El Condado de Cocentaina, el Ducado de Gandía<sup>10</sup>, la Baronía de Planes<sup>11</sup> o el Marquesado de Denia, así como otros importantes términos de realengo (caso del campo de Alicante con la ciudad de Alicante o el Bajo Segura con el extenso realengo oriolano<sup>12</sup>) en el se constituyen en ejemplos destacados de esta fragmentación jurisdiccional. En este sentido, Pla Alberola señala como el Condado de Cocentaina integra hasta quince señoríos de rango inferior<sup>13</sup>.

Por lo que respecta a la otra cuestión, la correspondencia entre elemento jurisdiccional y territorial en los dominios señoriales, podemos distinguir igualmente tres tipos de señoríos (al margen de mayores matizaciones), los estrictamente solariegos, constituídos únicamente por una base territorial y carentes de jurisdicción (excepto la que confiere la enfiteusis o las relaciones de vasallaje), los de carácter

---

<sup>9</sup> PLA ALBEROLA, P: *Conflictos jurisdiccionales en un gran señorío valenciano. El Condado de Cocentaina ante la consolidación del absolutismo*. Tesis doctoral inédita, Dpto. Historia Moderna, Universidad de Alicante, 1985.

<sup>10</sup> MORANT DEUSA, I.: *El declive del señorío. Los dominios del Ducado de Gandia. 1705-1837*. Institución Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1984. Un importante número de estos lugares con competencias jurisdiccionales más reducidas habían sido adquiridos por los diversos titulares del ducado.

<sup>11</sup> DOMINGUEZ MOLTO, A.: *El señorío de la Baronía de Planes*. Alicante, 1978.

<sup>12</sup> GIL OLCINA, A. y CANALES MARTINEZ, G.: *Residuos de propiedad señorial en España. Perduración y ocaso en el Bajo Segura*. Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, Alicante, 1988; MILLAN Y GARCIA VARELA, J.: *Rentistas y Campesinos. Desarrollo agrario y tradicionalismo político en el sur del País Valenciano. (1680-1840)*. Instituto Juan Gil-Albert, Alicante, 1984.

<sup>13</sup> PLA ALBEROLA, P.: "Apuntes para el estudio de las rentas señoriales en el siglo XVI. Los pequeños señoríos del "Cuartel de las Montañas". Jerónimo Zurita. Su época y su escuela. (Congreso Nacional), Fundación "Instituto Fernando el Católico", Zaragoza.

mixto, en los que aparecen conjuntamente ambos elementos, y los exclusivamente jurisdiccionales, aquellos en los que no existe sustrato territorial.

Moxó considera como señorío jurisdiccional "no el que encierra cierto poder coactivo -anejo y consustancial con todo señorío desde la Alta Edad Media- sino aquel otro cuyo titular posee legítimamente en su mano -por compra o donación real- el ejercicio de la Justicia -excepto la Suprema del Rey- en sus dos vertientes civil y criminal, lo que a lo largo del desarrollo del régimen señorial se manifestaba muy acusadamente en los nombramientos de Jueces y en la percepción de tasas derivadas de la función judicial, del ejercicio de la jurisdicción"<sup>14</sup>. Distingue, sin embargo, dos tipos de señoríos jurisdiccionales, el pleno, fundamentalmente de origen medieval (otorgado incluso durante los primeros Austrias), en el que coexisten base territorial y competencias jurisdiccionales, y el *simple* o *impropio*, "que se basa esencialmente en el derecho otorgado a una persona que puede estar desvinculada con la tierra sobre la que va a ejercer una autoridad judicial y administrativa". El calificativo de impropio se debe a que "no cabe olvidar que la posesión o tenencia de tierras, a cuyo poseedor se le concedió el privilegio de inmunidad, fue el germen del régimen señorial"<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> DE MOXO, S.: *La disolución del régimen señorial en España*. CSIC, Madrid, 1965, pp. 22-23. Esta definición dirigida al tipo de señorío más frecuente en España, excluye a aquellos señoríos que presentan una jurisdicción con competencias más limitadas, como es el caso de los alfonsinos.

<sup>15</sup> Ibidem, p. 48.

En este último, predominante bajo los Austrias menores (a raíz de las numerosas ventas de villas y lugares y de títulos, ante las dificultades económicas), es la jurisdicción el elemento más importante, al constituirse sobre áreas ya pobladas y cultivadas. En estas ocasiones el señor tenderá a la apropiación de los montes y otros terrenos comunales o de propios<sup>16</sup>; así sucede por ejemplo en el Marquesado de Elche<sup>17</sup>.

En este caso, sin embargo, tendrá lugar un acontecimiento, de gran trascendencia igualmente para el conjunto del régimen señorial valenciano, que permitirá dotar de patrimonio rústico, de una base territorial importante, al señorío. Nos estamos refiriendo a la concesión a los señores valencianos de las propiedades de sus vasallos moriscos expulsados en 1609<sup>18</sup>. Otro ejemplo de señeríos mixtos, algunos bastante tardíos (a finales del siglo XVIII), lo constituyen los señeríos alfonsinos, en los que la posesión del sustrato territorial era un requisito previo al logro de la jurisdicción. No niegan estos hechos, empero, la existencia en el País Valenciano de señeríos exclusivamente jurisdiccionales; muestra de ello son el Marquesado de Cullera y el Ducado de Liria<sup>19</sup>,

---

<sup>16</sup> Ibidem, pp. 23-51.

<sup>17</sup> RUIZ TORRES, P.: *Señores y propietarios. Cambi social en el sur del País Valenciano: 1650-1850*. Inst. Alfons el Magnànim, Valencia, 1981, 403 pp.

<sup>18</sup> CISCAR PALLARES, E: *Tierra y señorío en el País Valenciano. (1570-1620)*. Del Cenia al Segura, Valencia, 1977.

<sup>19</sup> GIL OLCINA, A. (1979): Op. Cit., pp. 76-80. ROMERO GONZALEZ, J. y CUOCO GINER, J.: "La estructura de la propiedad de la tierra y los cultivos en la Ribera Baixa durante el siglo XIX: El caso de Cullera". *Cuadernos de Geografía*, Valencia, n° 24, 1979, pp. 55-78.

ambos creados a comienzos del siglo XVIII.

A este respecto, Mata Olmo<sup>20</sup> señala como en la campiña andaluza, al margen de los patrimonios rústicos señoriales pertenecientes a una nobleza de viejo cuño -gestados durante la reconquista y, principalmente, durante los siglos XIV-XVI a través de las donaciones y mercedes reales, así como de la apropiación de montes y baldíos comunales o de propios-, tiene lugar durante los siglos XVI y XVII un importante proceso de concentración de la tierra, anexo a la obtención de la jurisdicción, en manos de una nueva nobleza; proceso fundamentado en la adquisición a la corona de lugares, despoblados, heredamientos o baldíos de los términos realengos.

En relación al ámbito de estudio considerado en la presente memoria, atendiendo al tipo de jurisdicción ejercida, podemos distinguir una cierta diversidad de señoríos. Un rasgo común presentan, sin embargo, todos ellos (ateniéndonos a los pequeños señoríos cuyo análisis se plantea en el trabajo), la existencia de una importante base territorial previa a la adquisición de la jurisdicción, en los casos en que ésta es obtenida por los titulares de los mismos.

---

<sup>20</sup> MATA OLMO, R.: "Concentración de la propiedad y renta de la tierra en la Campiña andaluza durante el antiguo régimen". *La propiedad rústica en España y su influencia en la organización del espacio*. Alicante, 1981, pp. 39-51.

Es notorio en la comarca del Campo de Alicante, el predominio de los señoríos de jurisdicción alfonsina. Presentan este carácter los señoríos de Agost, Busot, Peñacerrada, La Sarga y La Vallonga de Burgunyo. Los dos primeros fueron fundados con anterioridad a la expulsión de los moriscos, y los tres últimos tras la reposición del fuero alfonsino en 1772. Hay que añadir al panorama señorial el de Aguas, de carácter solariego, y el de villafranqueza, originariamente alfonsino, pero cuyos titulares accedieron al disfrute de la jurisdicción suprema tempranamente. En el caso del Bajo Vinalopó, comarca centrada en el antiguo Marquesado de Elche, sólo hemos tenido constancia de la existencia de un pequeño señorío, Asprillas, cuya adscripción jurisdiccional se presenta dificultosa, pues no poseemos las pruebas suficientes para decantarnos por la naturaleza solariega o alfonsina del mismo.

En ambas comarcas es un hecho bastante generalizado, con menos testimonios documentales en el caso del Bajo Vinalopó, la génesis de conflictos entre los titulares de las diversas jurisdicciones, la ciudad realenga de Alicante contra el resto de señoríos de la comarca y el Marqués de Elche contra el poseedor del señorío de Asprillas. Delimitación de términos, alcance y ejercicio de las competencias jurisdiccionales, aprovechamiento de las utilidades rústicas de los términos comprendidos en ambos ámbitos o la percepción de determinados derechos, entre otros aspectos, serán las principales causas de enfrentamiento.

## 1.-La jurisdicción alfonsina

El significado y contenido de la jurisdicción alfonsina ha sido objeto de estudio por parte de diversos investigadores, quienes se han basado fundamentalmente en la obra del jurista valenciano del siglo XVII Matheu Sanz<sup>21</sup>.

Este nuevo tipo de jurisdicción, intermedia entre la suprema o baronal y la baja o civil, quedaba instaurada en el reino de Valencia tras la promulgación del fuero 78, *De Iurisdictione Omnium indicum*, por Alfonso II de Valencia y IV de Aragón. A tenor del mismo se otorgaba a "*prelats, persones ecclesiastiques, richs homens, cavallers, persones generoses, ciutadans e homens de viles qui no han mer imperi haien iuredictio civil e criminal e exercici conexença e determinatio daquela: ...*"<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> GIL OLCINA, A.: "La propiedad de la tierra en los señoríos de jurisdicción alfonsina". *Investigaciones Geográficas*, nº 1, Alicante, 1983, pp. 7-24; "Jurisdicción alfonsina y poblamiento valenciano", *Cuadernos de Geografía*, nº 39-40, Valencia, 1986, pp. 235-245; IBORRA LERMA, J. M. (1981): Op. Cit., pp. 211-213; PLA ALBEROLA, P.: *Conflictos jurisdiccionales en un gran señorío valenciano: El Condado de Cocentaina ante la consolidación del absolutismo*. Tesis doctoral inédita, Alicante, 1985; ROMEU ALFARO, S.: "Los fueros de Valencia y los fueros de Aragón. Jurisdicción alfonsina". *Anuario de Historia del Derecho Español*, Madrid, 1972, pp. 94-115.

<sup>22</sup> *Furs e ordinations fetes per los gloriosos Reys de Arago als regnicols del Regne de Valencia*, Universidad de Valencia, 1977, pp. 205-207. Citado por GIL OLCINA, A. (1983): "La propiedad de la tierra ...", pp. 7-8.

Pla Alberola sostiene, a pesar de las dificultades de interpretación del enunciado del texto, el carácter de fuero del citado precepto (por tanto de rango superior al privilegio). Por ello adquiere vigencia en todo el Reino de Valencia, tanto en áreas de realengo como de señorío, con mayor propiedad en las áreas sometidas a Fueros de Valencia. Es éste un hecho de vital importancia, puesto que determinará que durante la época foral el fuero se considere suficiente título para obtener la jurisdicción una vez cumplidos los requisitos demográficos exigidos; sin necesidad de una concesión particular expresa<sup>23</sup>. Dejará de ser así, sin embargo, tras su restablecimiento en 1772, con la incidencia de la Nueva Planta y la intervención del Consejo de Castilla<sup>24</sup>.

La finalidad primordial del fuero alfonsino ha suscitado interpretaciones diversas, en ocasiones controvertidas. Romeu Alfaro aduce razones de índole política; sería ésta una iniciativa dirigida a lograr la unidad política y legislativa del reino a fuero de Valencia. Sin embargo, llega a la conclusión de que, además de no suponer la desaparición del Fuero de Aragón (que no quedaría erradicado hasta las Cortes de 1626), ocasionó "la creación de un importante régimen señorial, más costoso de liquidar, y que supuso una fuerte limitación a la aplicación del derecho general, con menoscabo de la justicia real"<sup>25</sup>.

-----  
<sup>23</sup> PLA ALBEROLA, P. (1985): Op. Cit., pp. 775-784.

<sup>24</sup> GIL OLCINA, A.: "Reformismo ilustrado, colonización interior y restablecimiento del fuero alfonsino". *Agricultura y Sociedad*, nº 56, Madrid, 1990, p. 86.

<sup>25</sup> ROMEU ALFARO, S. (1972): Op. Cit., p. 106.



Este propósito unificador del derecho regnícola sería criticado, en un principio, por Gil Olcina, quien cuestionaba que los titulares de señoríos a fuero de Aragón estuvieran dispuestos a renunciar al mismo a cambio de una jurisdicción de competencias más limitadas. A la vez, ponía el acento en una finalidad colonizadora, junto a la de "control y policía de la multitud de pequeños lugares y alquerías que, de resultas del legado musulmán, salpicaban por doquier las tieras valencianas, pobladas entonces en fuerte medida por mudéjares"<sup>26</sup>. En posteriores trabajos se aproxima más a la opinión expuesta por Pla Alberola, conciliando ambos aspectos. Así afirma, que, hasta el extrañamiento de los moriscos, "el fuero alfonsino pudo servir primordialmente a la unificación foral, el afianzamiento y policía de pequeños núcleos de población y apenas a la fundación de otros nuevos". Argumenta esta hipótesis en hechos como la permanencia de un cuantioso volumen de población árabe y luego morisca, la distribución espacial y jurisdiccional de la población, la estructura del hábitat heredado y la distinción que establece el fuero entre mudéjares y cristianos viejos<sup>27</sup>.

Tras la generalización de los *Furs* a todo el reino de Valencia en las Cortes de 1626, el fuero adquiriría o intensificaría la finalidad repobladora<sup>28</sup>; muestra de ello es la creación, durante todo el siglo XVII, de nuevos señoríos en la

---

<sup>26</sup> GIL OLCINA, A. (1983): "La propiedad de la tierra,...", p. 9.

<sup>27</sup> GIL OLCINA, A. (1986): "Jurisdicción alfonsina y ...", p. 239.

<sup>28</sup> Ibidem, p. 243.

comarca del Bajo Segura<sup>29</sup>.

Pla Alberola<sup>30</sup>, por su parte, confiere la preeminencia a razones de tipo político: la unificación jurídica y política del reino a fuero de Valencia y la reafirmación del poder real frente al de los señores. Alega en su defensa el contenido del proemio de las Cortes de 1329, el hecho de que la jurisdicción alfonsina fuera una más de las concesiones reales a los señores en dichas Cortes o la naturaleza de las prerrogativas jurisdiccionales de los señores que se regían por el fuero de Aragón, entre otros argumentos. En este sentido señala que "en el eje de la cuestión está el considerar que los señores cuyas tierras regía el Fuero de Aragón verían reducidas sus competencias de aceptar la jurisdicción alfonsina. Es un supuesto que deriva de una visión parcial de las prerrogativas jurisdiccionales de los señores aragoneses, confundiendo la potestad absoluta con la jurisdicción baronal. (...) en ningún momento se perjudicaron derechos anteriores, pues el rey declara expresamente que la concesión la hace sin menoscabo de qualesquier competencias ejercidas hasta entonces"<sup>31</sup>. Fundamentándose en la situación demográfica de la época y las competencias jurisdiccionales ejercidas por los señores asdritos a cualquier fuero (jurisdicción civil que ejerce el señor del fuero, competencias derivadas de la relación

---

<sup>29</sup> GIL OLCINA, A. (1990): "Reformismo ilustrado ...", pp. 90-92; GIL OLCINA Y CANALES MARTINEZ, (1988), Op. Cit.; MILLAN y GARCIA VARELA, J. (1984), Op. Cit.

<sup>30</sup> PLA ALBEROLA, P. (1985): Op. Cit., p. 763-773.

<sup>31</sup> Ibidem, p. 766.

vasallática y jurisdicción sobre la cosa cedida a censo o en aparcería) rechaza tanto el objetivo colonizador como el de "control y policía" de pequeños lugares.

El requisito exigido para la concesión de la jurisdicción alfonsina, en aquellos casos en que el señor no poseyera el mero imperio, consistía en la fundación o posesión (e incluso la simple titularidad del dominio útil)<sup>32</sup> de un lugar en el que residiera un número mínimo de familias, 15 si se trataba de cristianos viejos, y 3 o 7 si eran mudéjares, dependiendo de su ubicación en realengo y señoríos de la corona o en los dominios de otros señores respectivamente. En caso de disminuir la población por debajo de los límites señalados por el fuero, Matheu declara el mantenimiento de la jurisdicción recurriendo al principio de que los derechos de una universidad (en el sentido de comunidad jurídico-pública) permanecen en uno solo de sus miembros, incluso si todos ellos desaparecen<sup>33</sup>.

Esta jurisdicción, con competencias plenas en lo civil y limitadas en lo criminal, ha sido asimilada por diversos autores al mixto imperio de la suprema o baronal<sup>34</sup>. Otros<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> PLA ALBEROLA, P.: "Condiciones de tenencia de la tierra y jurisdicción en el siglo XVI valenciano. Hacia una tipificación de las alquerías moriscas". *La propiedad de la tierra en España*. Alicante, 1981, pp. 53-63.

<sup>33</sup> GIL OLCINA, A. (1986): "Jurisdicción alfonsina ...", p. 237; PLA ALBEROLA, P. (1985): Op. Cit, p. 786. En este sentido, este último autor señala que Matheu realiza una "interpretación del fuero alfonsino como un privilegio de la comunidad local y no exclusivamente del señor".

<sup>34</sup> IBORRA LERMA, J. M., (1981), Op. Cit.; y ROMEU ALFARO, S. (1972), Op. Cit.

<sup>35</sup> GIL OLCINA, A. (1986): Op. Cit, p. 236.

cuestionan esa identificación, pues si bien exceden esas competencias aquellas causas o delitos en los que hubiera de aplicarse pena de muerte, mutilación, destierro o castigo corporal grave (100 azotes en caso de mudéjares, y "hasta la efusión de sangre exclusivamente" en el caso de cristianos)<sup>36</sup>, ni tampoco pueden someter a interrogatorio y tormento a los acusados, ni imponer la pena temporal de galeras (por ser considerada de mayor gravedad que la flagelación leve), si perciben en cambio la mitad de las penas pecuniarias en los procesos criminales de esas características, y conocen y sancionan los delitos criminales no exceptuados, recibiendo íntegramente las calonías y multas correspondientes.

En este sentido, Pla Alberola<sup>37</sup> señala como en caso de delitos cuya pena principal era de naturaleza pecuniaria pero que, al carecer el reo de medios para satisfacerla, era sustituida por una pena corporal aflictiva (de las reservadas a la jurisdicción baronal), el conocimiento de la causa y su sentencia pertenecen al titular de la jurisdicción alfonsina, pero la ejecución de la misma corresponde al señor del mero imperio. Casos excepcionales son también la correspondencia a los titulares de la jurisdicción suprema de la mitad de las penas pecuniarias impuestas por "crim de nafres" (heridas o lesiones), aunque el enjuiciamiento del delito sea competencia del titular de la alfonsina (ya que, a pesar de ser pecuniaria la pena

---

<sup>36</sup> PLA ALBEROLA, A. (1985): Op. Cit., p. 792-793.

<sup>37</sup> Ibidem, pp. 793-797.

principal, cabe la posibilidad de que el condenado deba sufrir tormento, además de ser subsidiaria la pena de mutilación de miembro); y el hecho de que el mudéjar prefiriera ser vendido como esclavo a sufrir la pena de azotes, puesto que entonces estaba estipulada la distribución de la cantidad obtenida entre los titulares de ambas jurisdicciones (puesto que la servidumbre, que puede entenderse como pena subsidiaria, significa la muerte civil del reo y, por tanto, es competencia de la suprema).

Por último, cabe señalar que en caso de decretarse pena de confiscación contra el vasallo, los bienes retornarían antes a la señoría directa, de modo que ésta consolidase el dominio útil con el directo o eminente<sup>38</sup>. En relación al hecho de que todas las alusiones del fuero van dirigidas a delimitar únicamente la jurisdicción criminal, los diversos autores se inclinan por considerar que la civil es la plena concedida ya en los fueros a los señores de los feudos<sup>39</sup>.

Por lo que respecta a la administración local, algunos aspectos fueron bastante debatidos durante los siglos XVI y XVII, como es el caso de la facultad de los señores alfonsinos de visitar sus lugares y supervisar la gestión económica de los oficiales municipales<sup>40</sup> o la de otorgar licencia para imponer

---

<sup>38</sup> GIL OLCINA, A. (1986): Op. Cit., p. 236.

<sup>39</sup> En este sentido, Pla Alberola aduce una sentencia de 1346, en la que se declara tener el titular de varias alquerías situadas en término de Cocentaina "jurisdictio civil segons fur vell e criminal segons lo fur nou (...). Segons fur vell, ha jurisdictió civil generalment en les sues alqueries, axí en los seus moros convenguts com en qualsevol altres persones allí contrahents".

Pla ALBEROLA, P. (1985): Op. cit., p. 790.

<sup>40</sup> GIL OLCINA, (1986), Op. Cit., p. 237.

censales en su territorio<sup>41</sup>. Al margen de estas cuestiones, los señores carecían de competencias para autorizar a los pueblos de sus señoríos la imposición de contribuciones o sisas (reservadas al mero imperio), para imponer obras o servicios o para exigir hospedajes o caballerías para el transporte de enseres ("manar bagatjes") -pagando en caso de utilizarlos el salario acostumbrado-<sup>42</sup>. Si podían, en cambio, comparecer ante el titular del mero imperio en caso de maltratos a sus vasallos.

Es necesario matizar finalmente, que dado que las limitaciones de la jurisdicción alfonsina eran establecidas en función de las penas impuestas y no por el tipo de delito, el endurecimiento posterior de aquellas en algunos delitos concretos repercutiría en la práctica en una reducción de las competencias de esta jurisdicción en materia criminal<sup>43</sup>.

A la hora de realizar una evolución de la trayectoria seguida por los señoríos de jurisdicción alfonsina, hay que tomar en consideración dos hechos fundamentales, al margen de la situación creada tras la abolición del régimen señorial, el extrañamiento de los moriscos y la guerra de sucesión, con la supresión de los fueros valencianos y la implantación del Decreto de Nueva Planta.

---

<sup>41</sup> PLA ALBEROLA, P. (1985), Op. Cit., pp. 814-816.

<sup>42</sup> IBORRA LERMA, (1981): Op. Cit., p. 212.

<sup>43</sup> GIL OLCINA, A. (1990): "Reformismo ilustrado,...", p. 16; PLA ALBEROLA, P. (1985): Op. Cit., p. 794. Así sucedía por ejemplo con el delito de nafres, que pasaría a ser competencia de la jurisdicción baronal.

La expulsión de los moriscos tuvo una gran trascendencia en el conjunto del régimen señorial valenciano, permitiendo a los señores acceder a la plena propiedad de las tierras de sus vasallos moriscos, confiriéndoles de este modo la posibilidad de reestructurar sus rentas. A este mismo proceso pudieron adscribirse aquellos señoríos alfonsinos que conservaran un volumen de población suficiente para mantenerse.

El único caso de estas características que conocemos en la comarca del Campo de Alicante es el de Agost; señorío que, a pesar de haber contado en el pasado con un vecindario de carácter mixto, en estas fechas estaba poblado únicamente por cristianos viejos, aunque sí estaba cultivada una proporción importante de las tierras del término por moriscos residentes en Novelda. Este acontecimiento agravó más la difícil situación económica de los señores de Agost, al producirse el abandono de la superficie cultivada por ese colectivo, así como una importante reducción de la población por su marcha para repoblar otras zonas. No hemos podido determinar si el titular del señorío estableció de nuevo esos terrenos así como las condiciones en que fue efectuada dicha operación. En Aguas de Busot parece darse una situación similar, pues tras la compra por D. Alfonso Martínez de Vera de las heredades de Aigües y Baranyes, en 1609, fueron establecidas diversas porciones de su territorio ya cultivadas durante la primera mitad del siglo XVII (la enfiteusis fue empleada en Aguas hasta los primeros años del siglo XIX, e incluso a mediados de ese siglo todavía fueron efectuadas varias ventas a censo enfitéutico).

Y es que sin duda, tras el extrañamiento, muchos señoríos alfonsinos se convirtieron en despoblados, perdurando únicamente los de mayor entidad y los enclavados en términos de realengo, que pudieron atraer nuevos pobladores. Entre ellos destacan Granja de Rocamora, Setla y Mirarrosa, Pedreguer, Gata de Gorgos, Rótova y Daimuz<sup>44</sup>. Las dificultades de repoblación unidas a la exigencia de un vecindario mínimo de 15 cristianos viejos obstaculizaron la conservación de las jurisdicciones así como la fundación de otros lugares nuevos (una excepción parece ser la comarca del Bajo Segura, en la que se gestó a lo largo de todo el siglo XVII un conjunto importante de nuevos enclaves señoriales).

Contrariamente a lo expuesto por Matheu, parece ser que los señoríos alfonsinos que vieron reducida su población por debajo de los mínimos exigidos perdieron su condición de tales, por lo menos hasta las Cortes de 1626. Así lo demuestran, como apunta Gil Olcina, los ejemplos de Negrals y Adsubia<sup>45</sup>.

La Guerra de Sucesión y la consiguiente abolición de los fueros valencianos, decretada por el vencedor como consecuencia del apoyo prestado por el Reino de Valencia a la causa austracista, tuvieron una trascendental incidencia en dos cuestiones fundamentales. La Nueva Planta supuso una profunda modificación de las instituciones de gobierno y la administración

---

<sup>44</sup> GIL OLCINA, A. (1983): Op. Cit., p. 10.

<sup>45</sup> Ibidem, pp. 10-11.



valencianas, pero no alteró apenas el régimen señorial<sup>46</sup>. Al contrario, resultado de la nueva situación fue la consolidación y el reforzamiento de las competencias jurisdiccionales de los titulares de señoríos. Este incremento del poder señorial dio paso, en algunos casos (Marquesado de Elche, Ducado de Gandía)<sup>47</sup> a un proceso de usurpación de derechos, rentas y tierras que habían escapado a su dominio con anterioridad. En 1723, era aprobada una resolución en la que se responsabilizaba a los dueños de lugares de los nombramientos de oficiales de sus pueblos, sin necesidad de que los aprobasen los Capitanes Generales ni el Real Acuerdo.

Por otra parte, la jurisdicción alfonsina quedaba abolida en 1707 junto al resto de fueros valencianos. A diferencia de lo que sucedió con otros antiguos estados de la Corona de Aragón, en este caso no fueron reintegrados por el Decreto de Nueva Planta.

A tenor de lo dispuesto por el Real Decreto de 29-VI-1707, el fiscal encargado de la cuestión consideró revocadas e incorporadas a la Corona las jurisdicciones alfonsinas. Sin embargo, una resolución del Consejo de Castilla de fecha 5-XI-1708 salvaguardaba la existencia de los señoríos de

---

<sup>46</sup> PESET REIG, M.: "Apuntes sobre la abolición de los fueros y la Nueva Planta Valenciana". *Primer Congreso de Historia del País Valenciano*. Universidad de Valencia, Valencia, 1976, Vol. III, pp. 525-536.

<sup>47</sup> MORANT DEUSA, I. (1984): Op. Cit., pp. 40-41 y 183-192; RUIZ TORRES, P. (1981): Op. Cit., pp. 181-183.

estas características creados con anterioridad a la supresión de los fueros, aunque no confirmaba el precepto, reconociendo su derogación sin efectos retroactivos<sup>48</sup>.

Después de un largo paréntesis, el fuero alfonsino fue reestablecido por Carlos III, el 16-V-1772, en respuesta al Memorial presentado por dos nobles alicantinos, D. Antonio Pascual y Molina, Marqués de Peñacerrada, y D. Ignacio Pérez de Sarrió, dueño del lugar de Formentera. En la Real Provisión promulgada al respecto se establecía "la confirmación, y subsistencia del Fuero del Señor Rey Don Alfonso del año de mil trescientos veinte y ocho, en que concedió á los Vassallos que formassen Lugares con quince Casas, que no tenían mero imperio, tuviessen el mixto, con las calidades, y circunstancias que en el mismo Fuero se Contienen, por los buenos efectos que produjo en esse Reyno (...)"<sup>49</sup>.

Como ha estudiado Alberola Romá<sup>50</sup>, D. Ignacio Pérez de Sarrió fue el protagonista de una tentativa similar, aunque fallida, a mediados de siglo. Tras otorgar en 1755 una escritura de concordia con varios enfiteutas de su partida de Campello para fundar una nueva población en ella, elevó un memorial a la Real Audiencia en 1757 solicitando la Jurisdicción alfonsina, que le

---

<sup>48</sup> GIL OLCINA, A. (1983): Op. Cit., pp. 12-13.

<sup>49</sup> Real Provisión en que nuevamente se confirma la subsistencia del Fuero del Sr. Rey D. Alfonso del año mil trescientos veinte y ocho, concedido a los Vassallos que formassen Lugares, Madrid, 1772.

<sup>50</sup> ALBEROLA ROMA, A.: *Jurisdicción y propiedad de la tierra en Alicante (siglos XVII y XVIII)*. Ayuntamiento-Universidad de Alicante, 1984, pp. 481-497.

fue denegada.

Varios autores han señalado como con anterioridad a la citada provisión, podía detectarse un ambiente favorable a la reposición del fuero. En este sentido, Pla Alberola destaca la evaluación positiva del mismo por parte de Macanaz, quien sugería su implantación en otras zonas del país<sup>51</sup>. La posición contraria estaría representada por Cavanilles. Como han puesto de manifiesto diversos autores<sup>52</sup>, resulta extraño que un conocedor tan notorio de la realidad valenciana, y con numerosas y atinadas observaciones sobre el régimen señorial, no haga ninguna referencia al fuero alfonsino en su obra, cuyo restablecimiento sin duda debía conocer. También muy favorable al fuero fue la postura de la Sociedad Económica de Amigos del País Valenciano<sup>53</sup>

De igual modo ha sido vinculada esta reinstauración con la política de colonización interior desarrollada por el reformismo borbónico, de la que son claro exponente la Instrucción, el año 1768, del *Expediente General de Despoblados del Reino* (que dio lugar a una importante labor repobladora) y la Real Cédula de 23 de diciembre de 1778 sobre Regla para la situación y construcción de los pueblos en el camino de Madrid

---

<sup>51</sup> PLA ALBEROLA, P. (1985): Op. Cit., p. 959.

<sup>52</sup> GIL OLCINA, A.: "Los ilustrados y el régimen señorial valenciano". *La Ilustración Española* (Actas del Coloquio Internacional), Alicante, 1985, pp. 403-415. PLA ALBEROLA, P.: "Recolonización interior y expansión del régimen señorial. La carta puebla de la Sarga de 1774". *Estructuras y regimenes de tenencia de la tierra en España*. MAPA, Madrid, 1987, pp. 117-128.

<sup>53</sup> GIL OLCINA, A. (1990): Op. Cit., pp. 106-108.

por la provincia de Extremadura (en ella se disponía la concesión de la jurisdicción alfonsina para los pueblos con más de veinte vecinos)<sup>54</sup>.

Podemos afirmar, que en esta segunda etapa el fuero alfonsino adquiere una finalidad colonizadora. Con su restauración se pretende lograr el aumento de la población y la producción agrícola y la incorporación de "los dueños de extensas superficies yermas o insuficientemente cultivadas al proyecto reformista; se trataba, en definitiva, de que éste no se agotara en la vía oficial de ambiciosos empeños colonizadores (Sierra Morena, Nuevas poblaciones de Andalucía, Campo de Lorca) y de las desamortizaciones de propios y comunales sino que integrase, en la mayor medida posible, las haciendas y capitales de grandes propietarios ansiosos de preeminencia social y, como meta de títulos nobiliarios"<sup>55</sup>.

Pla Alberola, al propósito de mejorar la explotación de las grandes propiedades agrícolas (mediante su distribución entre diversos colonos), añade el objetivo social del acceso de parte del campesinado sin tierra a la condición de propietario, "aunque con las limitaciones inherentes al establecimiento a censo enfiteútico"<sup>56</sup>. Sin embargo, a este respecto convendría matizar que la creación de nuevos lugares y el asentamiento de población tras la restauración del fuero alfonsino, no siempre vendría acompañada del recurso a la enfiteusis como régimen de tenencia

---

<sup>54</sup> Ibidem, pp. 95-96.

<sup>55</sup> Ibidem, p. 96.

<sup>56</sup> PLA ALBEROLA, P. (1987): "Recolonización interior...", p. 120.

predominante. Es significativa la frecuente utilización del arrendamiento que no conlleva los peligros de un condominio sobre la tierra, en un momento en que las reclamaciones y el sentimiento antiseñorial del campesinado enfiteuta están cada vez más acentuados. Ejemplos de ello son señoríos finiseculares como los de Algorfa, Daya Vieja o Peñacerrada.

La promulgación del Memorial Ajustado del Consejo de Castilla de 1776 -mediante el cual la corona fomentaba la labor de los Fiscales de los Reales Consejos en el proceso de reversión de señoríos y alentaba la apertura de un Expediente sobre la Ley General de Incorporaciones, intensificando el ambiente antiseñorial-, según Gil Olcina, no supone ninguna contradicción con la reposición del fuero alfonsino. Justifica esta postura alegando que, dado el debilitamiento de las jurisdicciones señoriales en general y la pérdida de poder político de la nobleza, "la jurisdicción alfonsina, probablemente muy desvaída, lejos de su capacidad punitiva originaria, no representaba merma alguna de la autoridad real ni implantación de su justicia, sino, en todo caso, una acción complementaria de policía, prácticamente rural, de pequeños núcleos, que sintonizada con la política de colonización interior tan cara a los fisiócratas del reformismo borbónico"<sup>57</sup>.

Pla Alberola minusvalora la función policial, y expone al respecto, que frente a la pervivencia de las grandes propiedades rústicas optaría por la extensión del régimen

---

<sup>57</sup> GIL OLCINA, A. (1990): Op. Cit, pp. 96-97.

señorial como mal menor (aunque partiendo de las limitaciones de la jurisdicción otorgada y el creciente intervencionismo de la corona en los señoríos)<sup>58</sup>.

Ambos autores rechazan de modo concluyente la interpretación de estas cartas pueblas de finales de siglo como el exponente de un proceso de "refeudalización" del régimen señorial valenciano<sup>59</sup>, dada la pérdida de significación política del señorío a finales del siglo XVIII, y la escasa entidad de estos nuevos núcleos de población. Además, de que con cierta frecuencia, las condiciones impuestas al campesinado enfiteuta eran similares e incluso mejores a las estipuladas en contratos de arrendamiento o aparcería contemporáneos<sup>60</sup> (estes sería el caso, por ejemplo, de la Vallonga de Burgunyo o de la Sarga).

Otros autores han criticado también la idea de un régimen señorial duro, de una fuerte presión señorial, en el antiguo reino de Valencia durante todo el siglo XVIII. Romero Gonzalez aduce al respecto la existencia a principios del siglo XIX de un gran dinamismo y una estratificación social clara del campesinado de los términos de señorío (aunque matiza las diferencias derivadas de la imposición de censos en especie o en metálico, y de una repoblación anterior o posterior al extrañamiento de los moriscos); señalando además que la situación

---

<sup>58</sup> PLA ALBEROLA, P. (1987): Op. Cit., p. 124.

<sup>59</sup> Postura defendida por ejemplo, en relación a la Vallonga de Burguño, por PALOP RAMOS, J. M.: *Hambre y lucha antifeudal. Las crisis de subsistencia en Valencia (siglo XVIII)*, Siglo XXI, Madrid, 1977.

<sup>60</sup> GIL OLCINA, A (1990): Op. Cit., pp. 102-103; PLA ALBEROLA, P. (1987): Op. Cit., pp. 126-127.

de este campesinado podría ser más favorable que la del arrendatario del realengo o de otras zonas de implantación señorial<sup>61</sup>. Por otra parte, Chiquillo defiende el debilitamiento del poder señorial a fines del siglo XVIII, evidenciado en el relajamiento del cumplimiento de las condiciones contenidas en las cartas de población, aunque matizado por el grado de control del señor sobre la tierra<sup>62</sup>.

En suma, el resultado del restablecimiento del fuero alfonsino sería la génesis de una serie de nuevos señoríos a finales del siglo XVIII, en cuya fundación intervienen no sólo la pequeña nobleza y diversas instituciones eclesiásticas, sino también algunos de los miembros más destacados de la burguesía (caso de D. Pedro Burgunyo y Juan, fundador de la Vallonga de Burgunyo, o de Salvador Catalá, promotor de un fallido intento en Benadressa). Muestra de este nuevo proceso, en el que se emplea tanto la enfiteusis como el arrendamiento (e incluso se produce la sustitución de la primera por la segunda forma de tenencia mencionada), son los señoríos de Daya Vieja y Algorfa en el Bajo Segura, la Vallonga de Burgunyo en Alicante, Peñacerrada o Pueblo Nuevo en Muchamiel, La Sarga en Jijona, San Rafael en Alcoy, Sta. María de Aguas Vivas en Carcagente y Venta del Emperador en Moncada.

---

<sup>61</sup> ROMERO GONZALEZ, J. (1983): *Propiedad agraria y sociedad ...*

<sup>62</sup> CHIQUILLO PEREZ, J. A.: "Aproximación al estudio del régimen señorial valenciano en el siglo XVIII, en *Estudis*, n° 7 (1978), pp. 241-259.

Todos los señoríos alfonsinos, de cualquier época, se caracterizan por la posesión indudable de la tierra con carácter previo al logro de la jurisdicción. Este hecho no impedirá, sin embargo, la existencia de trayectorias diversas, en ocasiones bastante contrastadas, en función de factores como el régimen de tenencia implantado, el grado de consolidación del señorío, la actitud de los titulares de los mismos o la reacción antiseñorial del campesinado enfiteuta. Todo este conjunto de factores será tratado más detenidamente en los apartados dedicados al análisis y estudio de la evolución de cada uno de los señoríos.

Las causas exteriores al régimen señorial, fruto de las nuevas condiciones sociopolíticas y legislativas del siglo XIX, serán expuestas igualmente.

## 2.-Gobierno local y funcionamiento económico de los señoríos de jurisdicción alfonsina. Las rentas señoriales.

Una gran parte de las disposiciones que regulan la organización económica y administrativa de los términos de señorío, aparecen recogidas en las Cartas Pueblas o Cartas de Población. Sin embargo, este tipo de documentos no ha sido localizado para todos los municipios, e, incluso, en los casos en que ha sido hallado, no siempre establece de una manera detallada todos los aspectos que rigen la vida local. Respecto al ámbito de



estudio considerado, sólo se ha podido acceder a tres de las cartas pueblas o escrituras de asentamiento de la población que teóricamente habrían de existir, las de Agost, Villafranca<sup>63</sup> y la Vallonga de Burgunyo<sup>64</sup>.

De modo general, estos documentos de carácter contractual otorgados, con una finalidad pobladora, entre el señor de un lugar y los futuros vecinos del mismo van ligados al establecimiento de tierras en enfiteusis. En ellos se estipulan las condiciones de cesión de la tierra y las normas que regularán el funcionamiento económico administrativo y político de los nuevos lugares.

En este sentido, Pla Alberola señala que las cartas pueblas han de contar con dos elementos esenciales para adquirir esa condición y no constituir en realidad "contratos agrarios colectivos". En primer lugar, "que estuviese pactada, o se encontrase implícita, la obligación de residencia de los tenentes de las "heretats" establecidas<sup>65</sup>, y en segundo lugar, que a los nuevos pobladores les fuera concedido algún derecho de propiedad sobre las casas y tierras que ocupasen. Señala en definitiva, que "el objetivo es constituir un lazo estable de dependencia entre

---

<sup>63</sup> ALBEROLA ROMA, A.: *Jurisdicción y propiedad de la tierra en Alicante. (Siglos XVII y XVIII)*. Ayuntamiento-Universidad de Alicante, 1984, pp. 465-470.

<sup>64</sup> PALOP RAMOS, J. M. (1977): Op. Cit., pp. 113-117.

<sup>65</sup> Señala a este respecto, la existencia de documentos en los que se establecen a censo enfiteútico todas las casas y tierras de un lugar, pero al pactarse la libertad de residencia de los enfiteutas, éstos no podrían ser considerados "pobladores", ni el documento carta puebla. PLA ALBEROLA, P.: *Cartas pueblas del Condado de Cocentaina*. Ayuntamiento de Cocentaina-Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, Alicante, 1986, p. 16.

el señor y el residente de su señorío por medio del vasallaje, pues el establecimiento a censo enfiteútico debe conceptuarse como un último eslabón en la cadena de subinfeudaciones, (...)"<sup>66</sup>. Esta matización que atribuye al conjunto de cartas otorgadas tras la expulsión de los moriscos no puede aceptarse, sin embargo, para cartas pueblas posteriores (en momentos más avanzados del siglo XVII y sobre todo a finales del siglo XVIII), ante la modificación de las relaciones feudovasalláticas y la utilización de regímenes de tenencia distintos a la enfiteusis (arrendamientos).

Gual Camarena también atribuye a la carta puebla un sentido más amplio que el de simple "contrario agrario colectivo", haciendo extensivo su concepto al conjunto de "elementales ordenanzas municipales, o bien al de privilegios y franquicias locales, con expresión detallada de los deberes y derechos de pobladores y señores, no exclusivamente dirigidos al cultivo de la tierra"<sup>67</sup>.

En este sentido, Gil Olcina afirma que "el contenido de las cartas pueblas y de los establiments emanados de ellas desborda ampliamente el marco de la enfiteusis alodial, por cuanto el estabiliente, además de intervenir como dueño de casa y tierras, lo hace a título de señor jurisdiccional, condición que

---

<sup>66</sup> Ibidem, pp. 16-17.

<sup>67</sup> GUAL CAMARENA, M.: *Las cartas pueblas del reino de Valencia. Contribución al estudio de la repoblación valenciana*. (Premio Menéndez Pelayo 1948 del CSIC). Edición preparada por D<sup>a</sup> D. Pérez Pérez, Directora del Archivo del Reino de Valencia, Generalitat Valenciana, Valencia, 1989, pp. 11-15.

conlleve una serie de elementos y prestaciones ajenas al contrato entre particulares"<sup>68</sup>. Esta imbricación del régimen señorial valenciano con la enfiteusis ocasionará, tras la abolición del mismo, la asociación de los derechos derivados de este contrato (y por tanto inherentes a la propiedad de la tierra) al ejercicio de la jurisdicción, dando lugar a una corriente generalizada de rechazo al pago de las prestaciones con ese origen.

### 2.1.-El gobierno local

La potestad judicial no es la única atribución que corresponde al señor por el ejercicio de la jurisdicción; ésta se complementa con el control de la administración y el gobierno de sus señoríos<sup>69</sup>, a través de su intervención en el nombramiento de los cargos municipales, realizado mediante designación directa (caso de los bailes o procuradores señoriales, vinculados a la administración señorial, o de los oficiales de los pequeños lugares y alquerías), elección del señor entre las ternas o nóminas de vecinos que le eran presentadas (confeccionadas por los oficiales cesantes, el consell o el conjunto de los vasallos del lugar) o insaculación en listas de candidatos, cuya composición controlaba siempre en

---

<sup>68</sup> GIL OLCINA, A. (1979): Op. Cit., p. 34.

<sup>69</sup> CISCAR PALLARES, E. (1977): Op. Cit., pp. 194-908; GIL OLCINA, A. (1979): Op. Cit., p. 19; IBORRA LERMA, J.M. (1981): Op. Cit., pp. 274-277.

mayor o menor medida el señor<sup>70</sup>.

Pla Alberola ha señalado al respecto, como a pesar de ser la jurisdicción alfonsina una de las que tiene un desarrollo más acabado en el derecho valenciano, existen una serie de aspectos que no aparecen contemplados en los distintos Fueros y privilegios promulgados. Entre ellos, uno de los más importantes es el relativo a las relaciones entre el titular de la jurisdicción y la comunidad que reside en el señorío (sobre todo en el caso de cristianos). Por esta razón, sostiene que, implícitamente, se mantiene la situación anterior a la concesión de la jurisdicción alfonsina; los cargos serían nombrados según las disposiciones existentes en los fueros, y sus competencias reguladas por las concesiones del señor y la costumbre. La adquisición de este tipo de jurisdicción sólo podría modificar las competencias del justicia, quien, en nombre del titular, podría ejercer la jurisdicción baja criminal<sup>71</sup>.

Señala la ausencia de referencias específicas a los derechos del titular en la regulación de la vida local, y como las limitaciones del poder señorial frente a los derechos de las Universitats, apuntadas por Mateu (falta de atribuciones para autorizar contribuciones o sisas y licencias para alienar bienes de la universidad, visitar a los oficiales de la universidad bajo su señorío y exigir servicios u hospitalidad), no se cumplen en

---

<sup>70</sup> Este es el caso de Gandía y de otras importantes ciudades del ducado. MORANT DEUSA, I. (1984): Op. Cit., pp. 71-72 y 188-189.

<sup>71</sup> PLA ALBEROLA, P. (1985): Op. Cit., pp. 810-811.

la práctica<sup>72</sup>.

El absentismo señorial determina la existencia de un representante del señor que asuma su autoridad y actúe en nombre suyo; es el baile o procurador (Procurador General en el caso de los grandes estados señoriales, al que están subordinados los bailes de cada señorío), con amplias facultades de intervención en el señorío, decidiendo, incluso, a quien es otorgado el arrendamiento de los derechos señoriales. El justicia (al que correspondía el conocimiento de causas civiles en primera instancia), los jurados (encargados de los asuntos comunes y generales: orden público, cuestiones administrativas, mercantiles, procesos, etc) y el almotacén o mustassaf (encargado de la regulación de mercados y precios) completan el grupo de cargos municipales más importantes; asistidos por asesores, consejeros, lugartenientes, escribano y otros auxiliares. La reunión de los oficiales municipales constituye el Consell.

Estos cargos, de duración anual, son ocupados por las personas escogidas por el señor o su representante entre las ternas o grupos de individuos que le son presentados. El lugarteniente del justicia puede ser designado por este mismo, mientras que respecto a otros cargos, como el de consejeros, el señor sólo elige un número de ellos.

El Consejo General, en el que participaban todos los vecinos, está rigurosamente reglamentado. Tanto la normativa por la que se regían (que incluía la necesidad de licencia y

---

<sup>72</sup> PLA ALBEROLA, P. (1985): Op. Cit., pp. 812-819.

autorización expresa del señor para su celebración, el ajuste al orden del día establecido y, en algunos casos, la asistencia del baile o procurador, y del justicia u otros oficiales) como la dureza de las penas impuestas por su contravención revelan el interés señorial por controlar el ambiente general y la toma de posturas colectivas<sup>73</sup>, que con frecuencia se plasmaban en planteamientos hostiles a la señoría<sup>74</sup>.

En definitiva, toda la organización interna del señorío está mediatizada por el titular del mismo, que de este modo se asegura el control político y económico del lugar, a la vez que garantiza la percepción de las rentas y derechos señoriales.

Tras la Guerra de Sucesión y la abolición de los fueros valencianos, los ayuntamientos de los pueblos de señorío se vieron también modificados para su adecuación al modelo castellano. Sin embargo, el proceso de mutación institucional, desarrollado en Valencia y Aragón entre 1707 y 1720, que suponía la nueva planta no afectó demasiado a los señores, como tampoco a la Iglesia, pues ambos vieron confirmadas todas sus prerrogativas<sup>75</sup>; sino que al contrario, como han puesto de manifiesto diversos autores<sup>76</sup>, significó un incremento del poder jurisdiccional de los señores. Así, en este sentido, cabría

---

<sup>73</sup> CISCAR PALLARES, E. (1977): Op. Cit., p. 203; IBORRA LERMA, J.M. (1981): Op. Cit., p. 276.

<sup>74</sup> GIL OLCINA, A. (1979): Op. Cit., p. 19.

<sup>75</sup> PESET REIG, M.: "Apuntes sobre la abolición de los fueros y la nueva planta valenciana". *Primer Congreso de Historia del País Valenciano*. Vol. III, Universidad de Valencia, Valencia, 1976, pp. 525-536.

<sup>76</sup> MORANT DEUSA, I. (1984): Op. Cit., pp. 37-41, 69-77 y 183-201; RUIZ TORRES, P. (1981): Op. Cit., pp. 77-84, 94-102 y 180-182.

señalar la incidencia en este proceso de la Real Resolución de 1723, que responsabiliza a los dueños de lugares de los nombramientos de los oficiales de sus pueblos, sin necesitar la aprobación de Capitanes Generales o del Real Acuerdo.

En los grandes estados señoriales la figura del alcalde mayor adquiere gran protagonismo. Nombrado directamente por el señor, estaba facultado para el ejercicio de la justicia en primera instancia, controlaba la vida pública y cultural de los diversos lugares y tenían amplias atribuciones sobre los ayuntamientos locales, cuyos cargos, en ocasiones, podían designar directamente<sup>77</sup>.

Los alcaldes ordinarios (con una función de justicia en primera instancia adecuada a las competencias jurisdiccionales del señor), regidores (encargados de distintos aspectos relacionados con el funcionamiento interno del municipio: recluta de soldados, política de abastos, recaudación de ciertas contribuciones, precios y salarios, ...) y síndico, a los que se une la desaparición del Consell, son los principales elementos

---

<sup>77</sup> En Gandía y otras ciudades importantes del Ducado se mantenía el antiguo sistema de insaculaciones, aunque totalmente controlado por el señor mediante la modificación de las listas de insaculados. Sin embargo, al margen del sistema de elección de los ayuntamientos, sus escasas atribuciones hacían que el poder efectivo estuviese en manos del gobernador o alcalde mayor. MORANT DEUSA, I. (1984): Op. Cit., pp. 70-73, 188-189 y 207-209. En Elche, por el contrario, era el Gobernador del Marquesado, nombrado por el señor, quien elegía la terna de cargos que serían presentados al Duque para la decisión final. Esta situación se prolongaría hasta 1742, momento en que la villa obtuvo una sentencia favorable a la confección por el ayuntamiento de las ternas de cargos posteriormente presentadas a la señoría. RUIZ TORRES, P. (1981): Op. Cit., pp. 93-96.

que caracterizan la constitución de los nuevos ayuntamientos. A ellos se añaden una serie de cargos administrativos vinculados más directamente al señor (procuradores, abogados, escribanos, oficiales), y, tras las reformas de Carlos III en 1766, dos diputados del común (en lugares con menos de 2.000 vecinos, y para cuestiones relacionadas con los abastos) y un síndico personero del pueblo (encargado de la vigilancia de lo referente a caudales publicos)<sup>78</sup>.

## 2.2.-Las rentas señoriales

El funcionamiento económico del señorío viene determinado por la conjunción de dos hechos, el ejercicio de la jurisdicción por el señor, al que van asociados una serie de derechos y rentas, y los regímenes de tenencia empleados para la puesta en explotación de la base territorial que lo integra; a ello se une la participación señorial en los diezmos.

El estudio de los ingresos señoriales, enfocado desde la detallada descripción y enumeración de las rentas<sup>79</sup> o desde su

---

<sup>78</sup> MORANT DEUSA, I. (1984): Op. Cit., pp. 204-205.

<sup>79</sup> CISCAR PALLARES, E. (1977): Op. Cit., pp. 88-113 y 237-272.



agrupación en diversos conceptos a tenor de su origen<sup>80</sup>, ha sido abordado por numerosos autores.

La jurisdicción supone para el señor una fuente de ingresos importante, aunque las características de cada señorío (en relación a las prerrogativas que adquiere el titular) determinan la entidad de este capítulo en el montante global de rentas. En nuestro caso concreto, es mayor la participación en las mismas de los derechos derivados de la propiedad de la tierra.

---

<sup>80</sup> Gil Olcina mantiene la división propuesta en el texto. GIL OLCINA, A. (1979): Op. Cit., pp. 20-23 y 33-60. Morant Deusa estudia las regalías como una unidad independiente, y expone la necesidad de matizar la diferenciación establecida entre derechos territoriales y jurisdiccionales, pues ambos forman parte del sistema señorial, y son adquiridos en función de un status privilegiado. MORANT DEUSA, I. (1984): Op. Cit., pp. 61-69 y 79-83. Iborra Lerma sigue la terminología establecida en las Cortes de Cádiz, y distingue derechos jurisdiccionales, regalías y derechos territoriales o solariegos. IBORRA LERMA, J. (1981): Op. Cit., pp. 273-304. Ruiz Torres, después de plantear una serie de criterios de clasificación de las rentas y derechos señoriales (cronológico, en función de la forma de percepción de cada una de las rentas o de la distinción de diferentes tipos de propiedad señorial) opta por detallar los distintos tipos de rentas, señalando en cada grupo las derivadas de la jurisdicción y las del dominio directo, aunque tomando en consideración la dificultad de realizar una separación tajante entre ambos conceptos. De ello resulta la clasificación en: jurisdicción y derechos jurisdiccionales, regalías y monopolios sobre la actividad comercial, regalías jurisdiccionales, propiedades adquiridas gracias al ejercicio de la jurisdicción, rentas derivadas del dominio directo, propiedades de las que dispone el señor privadamente, censos consignativos y reservativos y diezmos. RUIZ TORRES, P. (1981): Op. Cit., pp. 83-133, y "La crisis del régimen señorial en el País Valenciano. El señorío de Elche". *Estudis d'història contemporània del País Valencià*. Valencia, 1978, pp. 19-21. En otra obra conjunta entre varios autores se propone una división similar (rentas procedentes del ejercicio de la jurisdicción, regalías, rentas derivadas de la enfiteusis, diezmos, rentas de censales y propiedades privadas señoriales). ARDIT, M., GARCIA, C., MORANT, I. Y RUIZ, P. (1979): Op. Cit., pp. 65-69.

Capitaciones por diversos conceptos, en especie o en metálico (propias de señoríos de mayor entidad, y, en gran parte, vigentes únicamente hasta la expulsión de los moriscos)<sup>81</sup>, servicios personales y azofras (desaparecidas igualmente tras la expulsión)<sup>82</sup>, rentas derivadas de la administración de justicia y regalías configuran el espectro de los ingresos percibidos por la posesión de la jurisdicción.

Sin duda alguna, en este caso destacan entre todos los demás los privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos. Al margen de su importancia económica, es fundamental la trascendencia que adquieren en la organización de la vida económica del señorío, al situar en manos del señor el control de las actividades económicas del lugar, limitando de este modo el surgimiento de iniciativas por parte de los vecinos del mismo.

Iborra Lerma recoge la división que hace Matheu al respecto<sup>83</sup>. Este distingue entre "Suprema regalie" (regalías mayores o de primera clase), que se reservan como signo del dominio, potestad y jurisdicción, y que son inalienables de la corona, y Regalías de segunda clase, transferibles por privilegio o prescripción, porque se entiende que su concesión no redundaría en perjuicio del reino o la corona, y consistentes en frutos y

---

<sup>81</sup> GIL OLCINA, A. (1979): Op. Cit., pp. 22-23; GOZALBEZ ESTEVE, E.: *Análisis de un señorío valenciano. "El Marquesado de Lombay"*. Tesis Doctoral inédita, Alicante, 1990, pp. 142-174.

<sup>82</sup> Impuestos solamente sobre mudéjares, fueron sustituidos generalmente por pagos en metálico; así sucede en el siglo XVI en el Marquesado de Lombay. GOZALBEZ ESTEVE, E.: Op. Cit., pp. 204-230.

<sup>83</sup> IBORRA LERMA, J. M. (1981): Op. Cit., pp. 206-207.

réditos con un interés fiscal<sup>84</sup>.

Ciscar Pallares las define como el "conjunto de atribuciones que se arroga el señor tendentes a obligar a los vasallos a usar y utilizar una serie de bienes del señorío en beneficio propio". Asocia la denominación de "regalía" a su originaria pertenencia a la corona en los comienzos de la reconquista; posteriormente, ya fuera por donación o por usurpación pasaron a ser ostentadas por los señores<sup>85</sup>.

Detalladas en las cartas pueblas, son bastante numerosas y extendidas, aunque no comunes a todos los señoríos. Al margen de este grupo, se sitúan otras de carácter más excepcional asociadas a las grandes casas señoriales (aduana, pesos y medidas, derechos de moneda, de carácter marítimo o de peaje, entre otros)<sup>86</sup>. Pueden ser englobadas en diversos grupos según las parcelas de actividad económica a las que afectan. Así distinguimos las destinadas a la transformación de los productos agrarios (hornos de pan, molinos harineros, almazaras, lagares), la producción industrial (tejares, hornos de cal, yeso o vidrio, alfarerías), los servicios a la comunidad rural (mesón, taberna, tienda, abasto de carnes, fleca o panadería, pesos y medidas) o el aprovechamiento de las utilidades rústicas del término (derecho de pastos, recogida de leñas, caza, pesca, ...). Su gestión corresponde al dueño del lugar, que puede explotarla

---

<sup>84</sup> GUAL CAMARENA, (1987), Op. Cit., p. 73.

<sup>85</sup> CISCAR PALLARES, E. (1977): Op. Cit., p. 228. En éstos términos se expresa igualmente GUAL CAMARENA (1987, Op. Cit., p. 73).

<sup>86</sup> GIL OLCINA, A. (1979): Op. Cit., p. 54.

directamente por medio de sus administradores o de los funcionarios municipales, o cederlas en arrendamiento conjunta o individualmente. Incluso, algunas podían ser cedidas al ayuntamiento por el señor en concepto de propios para satisfacer las necesidades económicas del mismo (gastos municipales como veredas, contribuciones del equivalente, etc). Así se ha observado por ejemplo en el caso de Agost con los pesos y medidas, o en el de Busot (sisa de la carne, abastecimiento de aceite y aguardiente o regalía del cubillo).

Por lo que respecta a la zona de estudio, casi todos los señoríos (excepto Aguas y Asprillas) cuentan con las de hornos y molinos, fleca o panadería, abastecimiento de carnes, tienda y taberna. En Villafranqueza y Busot se menciona además la treta de frutos y mercaderías<sup>87</sup>; y en este último y en Agost la existencia de monopolios vinculados al desarrollo de ciertas actividades artesanales (hornos de cal, yeso y vidrio, tejares, alfarerías). En manos del señor se encuentra también la mayor parte de las veces el aprovechamiento de las utilidades rústicas (recogidas de leña y esparto, "herbatge", etc). En el caso de la Vallonga, por ejemplo, se establece la prohibición de cortar o quemar árboles sin licencia señorial y de extraer leña de la pinada, así como la reserva por parte del señor de las hierbas del término para su arrendamiento o venta. Un caso curioso lo constituye Peñacerrada, donde con posterioridad a la promulgación de la Real Cédula de 15-IX-1814 continúa efectuándose por el

---

<sup>87</sup> ALBEROLA ROMA, (1984), Op.Cit.

Marqués del mismo título el arrendamiento de la tienda, taberna y panadería, estipulándose en dicho contrato las condiciones requeridas.

Otro apartado de las rentas señoriales lo constituye la participación en diezmos, correspondiendo a los señores, en los casos en que gozan de esta prerrogativa, generalmente el tercio-diezmo.

El tercio-diezmo es una de las tres porciones en las que fueron divididas los diezmos, contribuciones -inicialmente eclesiásticas- sobre cosechas y ganados, junto al diezmo mayor y primicia (destinados a prelados y cabildos catedralicios, y mantenimiento y dotación de iglesias respectivamente).

Percibido originalmente por el rey, pasó a manos de los señores a través de donaciones regias, usurpaciones y compras. Estas transferencias a la nobleza no se limitaron ahí, sino que también afectaron a diezmos mayores y primicias<sup>88</sup>. Notablemente extendidos por todo el Reino de Valencia<sup>89</sup> y con una cuantía y espectro de especies a él sujetas diversificados<sup>90</sup>, se hallan presentes en algunas comarcas próximas al ámbito de estudio (Castalla, Onil, Tibi -propiedad del Marqués de Terranova y Duque

---

<sup>88</sup> GIL OLCINA, A. (1979): Op. Cit., pp. 55-60.

<sup>89</sup> CISCAR PALLARES, E. (1977): Op. Cit., pp. 90-96.

<sup>90</sup> CISCAR PALLARES, E. (1977): Op. Cit., pp. 249-251; GIL OLCINA, A. (1979): Op. Cit., pp. 56-57; MESTRE SANCHIS, A.: "La recolección de diezmos en la diócesis de Valencia según la encuesta capitular de 1758". *Actas del Primer Congreso de Historia del País Valenciano*, Valencia, 1976, Vol. III, pp. 631-642.

de Mandas-, Marquesado de Guadalest<sup>91</sup>, Elche y Crevillente<sup>92</sup>); llegando, incluso, a estar en manos de los titulares de los señoríos la totalidad del diezmo (en diversos señoríos como Aspe, Novelda, Elda, Salinas o Petrel los señores son los "unicos llevadores de los diezmos")<sup>93</sup>.

La gran importancia de este derecho en el conjunto de rentas señoriales de algunos dominios radica en el hecho de que podía afectar a la mayoría de los frutos así como a la totalidad de los vasallos (tanto enfiteutas como propietarios de tierras alodiales). Así ocurre en el Condado de Elda<sup>94</sup>, en los dominios del Ducado de Gandía (a excepción de la Vall de Gallinera y de Ebo)<sup>95</sup> o del Marquesado de Elche<sup>96</sup>. Importancia que irá en aumento (hasta su eliminación en 1837) cuando tenga lugar la devaluación de los censos en metálico más antiguos así como la

---

<sup>91</sup> CISCAR PALLARES, E. (1977): Op. Cit., pp. 95-96 y 105.

<sup>92</sup> GIL OLCINA, A. (1979): Op. Cit., pp. 87-94; RUIZ TORRES, P. (1981): Op. Cit., pp. 128-133.

<sup>93</sup> GIL OLCINA, A. (1979): Op. Cit., pp. 94-97; SANCHEZ RECIO, G.: "Las rentas señoriales del Condado de Elda a finales del Antiguo Régimen. Los diezmos". *Revista de Historia Moderna*, n° 3, Alicante, 1983, pp. 148-164.

<sup>94</sup> SANCHEZ RECIO, G. (1983): Op. Cit., pp. 139-180.

<sup>95</sup> El Duque de Gandía justificaba su derecho a percibir tercios-diezmos bien por cesión real en el contrato de compra del estado de Gandía, bien por su adquisición progresiva de otros nobles. Sin embargo, los conflictos entre el Duque y el Arzobispo de Valencia por cuestión de los diezmos fueron numerosos. MORANT DEUSA, I. (1984): Op. Cit., pp. 63 y 67-68.

<sup>96</sup> Aunque el diezmo era percibido en distintas proporciones por diversas instituciones e individuos (1/3 -el tercio-diezmo- para el Duque, confirmándose el Obispo y el Cabildo de Orihuela como los otros dos copartícipes más notorios), su administración recaía en el Duque, quien los arrendaba, percibía y repartía. La cuantía y el grupo de productos a los que afectaba, así como la constitución del grupo que participaba de ellos, era diferente en cada uno de los sectores en que fue dividido Elche tras la Reconquista. RUIZ TORRES, P. (1981): Op. Cit., pp. 128-133.

supresión de regalías y el resto de derechos vinculados al ejercicio de la jurisdicción; sin olvidar la dificultad que reviste la percepción de los pechos enfiteúticos tras la abolición del régimen señorial.

Por lo que respecta al ámbito analizado, sólo se ha podido verificar la percepción de los diezmos en los casos de Agost y Asprillas. La carta puebla de Agost otorgada en 1482 por D. Juan Puig de Vallebrera estipula el pago de diezmos, que se restringe a los cereales, olivos, higueras y viña, aunque no especifica su cuantía. Con posterioridad a este documento sólo se han hallado menciones escuetas y de pasada. Este es también el tipo de referencias que poseemos sobre la existencia de esta prestación en Busot, donde la situación se hace más confusa ante la percepción por el señor de un derecho en especie conocido como "de dos diezmos" vinculado a la enfiteusis.

En el caso de Asprillas es éste el único derecho de carácter señorial que hemos conseguido documentar; Ruiz Torres menciona además la implantación de la enfiteusis en el señorío<sup>97</sup>. Los diezmos del partido de Asprillas pertenecían por entero a los titulares del señorío, quienes se veían obligados a satisfacer a los partícipes del diezmo del franco una cantidad en metálico. Gil Olcina establece su cuantía, desde 1751 a 1765, en 14 reales 6 dineros de plata<sup>98</sup>; sin embargo, hemos detectado valores distintos para otras fechas, hecho que tal vez permita suponer

---

<sup>97</sup> RUIZ TORRES, P. (1981): Op. Cit., pp. 133 y 207-208.

<sup>98</sup> GIL OLCINA, A. (1979): Op. Cit., p. 92.

una cierta adaptación de esa prestación a las condiciones de cada época.

Así por ejemplo, mientras en un informe de los funcionarios del Conde de Altamira, en relación al "Diezmatorio de Asprillas" (Asperillas, Esprillas o Esprelles), se declara venir recopilado en unas relaciones de rentas, diezmos y derechos de D.Gutierre de Cárdenas, datadas entre 1501 y 1549, la satisfacción por los titulares de dicha partida en concepto de diezmo de una cantidad de 100 sueldos<sup>99</sup>; en el padrón confeccionado en 1712 para el repartimiento del "cuartel" y las restantes contribuciones vecinales, entre las cargas a deducir de la valoración de bienes de los poseedores del diezmo de Asprillas (valorado en 4.000 libras y distribuido a partes iguales entre D<sup>a</sup> Violante, D<sup>a</sup> Salvadora, D<sup>a</sup> Gertrudis y D<sup>a</sup> María Santacilia) se encuentran 25 libras que por dicho diezmo debían entregar a los "porcyonistas del Diesmo"<sup>100</sup>. Sin embargo, en otra relación de rentas ordenada por el Marqués en 1740, la cantidad respondida por D<sup>a</sup> Violante Santacilia (posiblemente como única propietaria) ascendía a 50 libras<sup>101</sup>.

Ya durante el siglo XIX, aunque se hace referencia a un principio de acuerdo entre los partícipes del diezmo del franco y el señor de Asprillas (D. Juan Roca de Togores y Albuquerque) dirigido a conceder a éste último el derecho de percibir los diezmos de dicha partida, con el compromiso de

---

<sup>99</sup> AME. H/284-nº 67, s/f. Carta de fecha 18-VI-1827.

<sup>100</sup> AME. H/99. Año 1712.

<sup>101</sup> AME. H/284-Nº 67, Carta de fecha 18-VI-1827.



satisfacer anualmente 90 reales de plata<sup>102</sup>, la cantidad declarada por este concepto por el administrador de D. Juan Roca en 1847, con motivo de su comparecencia ante el ayuntamiento de la villa para presentar un estado de los productos del diezmo desde 1827 a 1836 (la cuantía de la renta derivada de este derecho correspondiente al "año común" deducido de ese periodo fue establecida en 16.939 rs. 13 mrds. vn.) a fin de obtener las indemnizaciones correspondientes a los partícipes laicos por la supresión de los mismos en 1837, se situaba en los 75 reales<sup>103</sup>. Es importante destacar la escasa relevancia de la prestación satisfecha por los titulares de Asprillas en comparación con los ingresos obtenidos por el diezmo de la partida; hecho asociable sin duda tanto a la forma de percepción (en especie o en dinero) como al carácter y significación de cada uno de esos derechos. En este sentido es evidente la importancia de esta fuente de ingresos para la economía de los antiguos señores en un momento en que habían desaparecido parte de los derechos que la habían sustentado, y existía una gran dificultad para cobrar los derivados de la propiedad de la tierra (en aquellos casos en los que fue implantada la enfiteusis, no en éste ejemplo concreto, donde se produjo una sustitución de este régimen de tenencia por el arrendamiento y la explotación directa, así como una activa

---

102 AME. H/284-nº 61. Carta de fecha 27-IV-1827.

103 AME. Libro de Cabildos de 1846, sesión de 31-XII; y 1847, sesión de fecha 18-II.

política de compra de tierras durante el siglo XIX)<sup>104</sup>.

Desconocemos el proceso de gestación de este señorío, así como las atribuciones jurisdiccionales de su titular, dado que las escasas noticias halladas van referidas a la cuestión de los diezmos y los deslindes de la partida de Asprillas. Aureliano Ybarra menciona la concesión de los diezmos de Asprillas por el rey D. Jaime a favor de una familia de origen oriolano, los Rocafull; de cuyas manos pasaría por enajenación a dos familias illicitanas, los Ortiz de Palma y, posteriormente, los Santacilia<sup>105</sup>. En este sentido, Luis Gonzaga y Llorente señala como señor del diezmo de Asprillas en 1462 a D. Pedro Rocafull, y sitúa la fecha de adquisición de la partida por los Santacilia en 1616, efectuada por D. Guillermo Santacilia y Malla a Jaime y Madalena Ortiz<sup>106</sup>. Tras un enlace con la familia Ferriol, le fue concedido a uno de los miembros femeninos de la misma como dote una porción de tierra del señorío. Parece que por emparentamiento con los Cárdenas pasó a manos de éstos, siendo enajenada bastante después a otros particulares. Esta puede ser la explicación de la existencia en dicha partida tanto de tierras francas de todo

---

<sup>104</sup> BERNAL, A. M. y DE LA PEÑA, J. F.: "Formación de una gran propiedad agraria. Análisis de una contabilidad agrícola del siglo XIX". *Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico en la España contemporánea*. (Actas del Coloquio de Historia Económica de España), Ariel, Barcelona, 1974.

<sup>105</sup> YBARRA, A.: *Notas para la Historia de Elche*. (manuscrito), pp. 299-300.

<sup>106</sup> GONZAGA y LLORENTE DE LAS CASAS, L.: *Genealogías Illicitanas*, 1890. La familia Santacilia adquirió la nobleza durante el reinado de Felipe IV, en que fue concedida a Jaime Santacilia Terrá, padre del primer poseedor del señorío de Asprillas.

gravamen y diezmo,<sup>107</sup> como de tierras cuyo dominio directo pertenece al Marqués de Elche<sup>108</sup>.

Por otra serie de referencias, parece que el señorío fue poseído también por los caballeros Fernández de Mesa. En estos términos se expresa una relación de los lindes del "Diesmario y señorío de Asprillas, sito en la jurisdicción de Elche", efectuada en los primeros años del siglo XIX<sup>109</sup>, basada en la referencia de una escritura de partición de bienes entre los mencionados caballeros en la que se dice que el señorío de Asprillas se extendía por "todo el terreno conprehendido entre dos líneas tiradas desde la loma de Benjomar y el Algibe de los Miralles con dirección al mediodía, hasta llegar á los Almargales de la Albufera, cuyo terreno propiedad de los mismos señores se hallava entonces inculto, y reducido á saladares, por cuyo motivo se quedó entonces proindiviso de la misma herencia"<sup>110</sup>.

---

<sup>107</sup> AME. H/168-Nº 59.

<sup>108</sup> AME. H/103-Nº 1. En la venta realizada en 1683 por P. Serrano a favor de M. Dies de 33 tahúllas de tierra situadas en Asprillas, el transferente se había visto obligado a solicitar la correspondiente licencia de venta al procurador señorial, pagando por derecho de luismo 26 reales. Esa porción de tierra estaba sujeta a un censo enfitéutico en metálico de una cuantía de 7 reales y 22 dineros.

<sup>109</sup> Tras la transmisión del vínculo de Asprillas, por el fallecimiento sin sucesión de D. Bernardo Juan y Santacília en 1802, a la familia Roca de Togores. AME. H/281-nº 43, s/f.

<sup>110</sup> Ibidem, s/f.

El diezmo de Asprillas se satisfacía mediante pagos en especie, aunque desconocemos su cuantía así como los cultivos que se veían gravados con él. La referencia más antigua localizada corresponde a los primeros años del siglo XVI, y su contenido parece inducir a confusión:

"Ytem ha derecho (el Comendador D. Gutierre), en las tierras que se llaman las Esprellas que labran los Moros que es terrage por lo qual pagan un diezmo por entero á la dicha Señoria en lo qual no tienen parte el Obispo, ni Capitol de todos é qualquier pares gruesos é menudos é mas pagan los Señores de las Esprelles Cient sueldos de diezmo por las dichas heredades (...) los quales ciento sueldos se parten entre la dicha Señoria é Obispo é Capitol é tescioli (?) é altres beneficios según se parten los diezmos del franco"<sup>111</sup>.

En efecto, de su lectura extraía el representante del Conde de Altamira dos conclusiones; la primera, la satisfacción de dos derechos de diezmo en Asprillas, uno en frutos y de la propiedad de D. G. de Cárdenas, y otro en metálico, distribuído entre los diversos partícipes del diezmo del franco, y la segunda, la transferencia del diezmo de Asprillas por parte de

---

<sup>111</sup> AME. H/284-Nº 67. Carta de Gregorio Valdés a D. Juan Gonzalez Bernabeu (funcionario del Conde de Altamira), de fecha 18-VI-1827

los anteriores Marqueses de Elche a favor de los predecesores de D. Juan Roca de Togores, aunque ignorando las condiciones en que fue efectuada la misma<sup>112</sup>.

En dos relaciones de lindes y de haciendas sujetas al diezmo sin fechar, aunque probablemente pertenecientes al siglo XVIII, solamente en un caso se hace alusión al carácter de la prestación, estableciéndola (sobre un olivar) en la proporción de "pagar de 70 barchillas una"<sup>113</sup>.

A principios del siglo XVIII (entre 1717 y 1722), tendría lugar un proceso desarrollado por las hermanas Santacilia para obligar a varios propietarios de haciendas situadas en Asprillas a pagar el diezmo (el pago del fruto que se recogiese), puesto que éstos aducían la franqueza de diezmo o el pago del diezmo del franco. Tras presentar los autos de amparo de posesión y el decreto de manutención obtenido del Juzgado de la ciudad de Orihuela en 20-II-1676, y procederse al reconocimiento de límites (por la comisión conferida al procurador fiscal de la villa de Elche por la Sitiada y la Junta Patrimonial), se declaró por la sitiada estar todos los acusados obligados al pago del mencionado derecho<sup>114</sup>. La comisión justificaba el hecho de la siguiente manera: "se discurre se excusan apagar Asprillas por estar dichos diezmos arrendados y cobrarse con más rigor por los arrendadores;

---

<sup>112</sup> "En que tiempo, como, ó de que modo se transfirió el primero, y mucho mas ventajoso á la Casa de D. Juan Roca de Togores, ó sus Predecesores, es lo que el Archivo no ha podido averiguar, y presume que el documento de cesión, transpaso, o venta de este derecho obrará en poder de los que la adquirieron. Ibidem, s/f.

<sup>113</sup> En otro caso es de 72 barchillas una. AME. H/284-Nº 70 Y 71.

<sup>114</sup> AME. H/108-nº3 (año 1717) y H/47-nº 23 (año 1722).

que lo que voluntariamente manifiestan y pagan al diesmo mayor; aunque todos disen que estan promptos pagar Asprillas como se les mande"<sup>115</sup>. También advertía que a pesar de su actuación no se había pronunciado Real Provisión alguna que ratificara lo acordado allí.

Bernal y de la Peña señalan como la contabilidad de la casa Roca de Togores entre 1802-1027 recoge, en relación a la producción, una doble partida de entrada por cosechas en concepto de diezmo y "cosecha propia", llegando a veces a unificarlos; aunque evidencia una falta de continuidad en los ingresos de diezmos, probablemente asociada a la coyuntura política del momento<sup>116</sup>.

Durante un largo periodo fue mantenido por ambos señores (titulares de Asprillas y titulares del marquesado) un conflicto en torno a la delimitación de las zonas afectadas por el diezmo de Asprillas. Reflejo del mismo son las numerosas relaciones de lindes y de heredades adscritas a uno u otro diezmo existentes. En 1827, diez años antes de la abolición de los diezmos, tenía lugar un acuerdo, entre los partícipes del diezmo de franco y D. Juan Roca de Togores, destinado a establecer el amojonamiento y deslinde definitivo de la partida, clarificando de este modo la cuestión de la correspondencia de ciertas zonas reclamadas por ambos<sup>117</sup>. No cabe duda que la iniciativa se vio dificultada por la insuficiente documentación existente. Ambas

---

<sup>115</sup> AME. H/47-nº 23.

<sup>116</sup> BERNAL, A. M. y DE LA PEÑA, J. F. (1974): Op. Cit., p. 130.

<sup>117</sup> AME. H/284-nº 39, s/f.

partes convinieron la permuta de una serie de fincas (a efectos del diezmo) valoradas en 3.950 libras. El señor de Asprillas cedía al diezmo mayor 243 tahullas, recibiendo a cambio un total de 79. Además, parece que se comprometió a entregar a los partícipes del diezmo del franco (según se deduce de testimonios posteriores) una cantidad anual de 75 reales.

La evidencia de como se mantiene desapercibido un señorío de las características del de Asprillas en un gran dominio señorial del calibre del Marquesado de Elche (situación agravada por la adición de otros estados similares al patrimonio de los titulares del mismo) la encontramos reflejada en un fragmento de una carta dirigida al Conde de Altamira por su procurador en Elche con motivo del convenio sobre diezmos; y en la que sobre D. José Roca de Togores se dice "pertenece a las clases distinguidas del reino, y que no es un arrendador, como le informaron, sino un Señor de diezmos como S.E., cuyo derecho lo adquirió de sus antepasados"<sup>118</sup>.

No cabe duda de que son los ingresos derivados de la propiedad de la tierra la porción más cuantiosa de las rentas señoriales en aquellos señoríos con una base territorial importante. Este es el caso concreto de los que integran nuestro ámbito de estudio. El régimen de tenencia empleado por los titulares de los mismos será esencial sin duda alguna para determinar tanto su cuantía y evolución (problemas de devaluación

---

<sup>118</sup> AME. H/281-nº 67. Carta de fecha 28-V-1827.

en el caso de los pechos en metálico) como la preservación o extinción del patrimonio señorial durante el siglo XIX. La enfiteusis y otras formas de explotación como el arrendamiento o la aparcería, y con menor importancia la explotación directa, aparecen implantados con distinta intensidad en los diferentes señoríos de las comarcas señaladas.

Al sistema señorial del antiguo reino de Valencia va asociado particularmente la enfiteusis; aunque no limitada al mismo, como lo pone de manifiesto su uso para la puesta en cultivo de tierras realengas<sup>119</sup> (además de la explotación de baldíos se ha verificado su uso en zonas de regadío por particulares)<sup>120</sup>. La íntima conexión existente entre este régimen de tenencia y el régimen señorial dará lugar a una peculiar evolución de las estructuras de la propiedad de la tierra en el reino de Valencia.

Con un precedente en la *conductio agri vectigalis* (arrendamientos a largo plazo de tierras generalmente incultas otorgados por el Estado o los municipios a particulares a cambio de la entrega anual de un cánón fijo) y la *emphyteusis* (contratos de arrendamiento de tierras incultas entre particulares, de larga duración y con la obligación de cultivo) romanas, unidas por Justiniano en una sola institución bajo el nombre de enfiteusis con unas características ya determinadas (adquisición por el enfiteuta de un derecho real de carácter perpetuo o larga

---

<sup>119</sup> GIMENEZ LOPEZ, E. (1981): Op. Cit., pp. 130-141, ALBEROLA ROMA, A. (1984): Op. Cit., 296-311.

<sup>120</sup> ALBEROLA ROMA, Ibidem, pp. 296-297.



duración a cambio de satisfacer un cánón anual, deshaucio del mismo en caso de incumplir esa obligación durante tres años consecutivos, capacidad de transmisión de la finca por parte del enfiteuta, y derecho preferente de adquisición del establecimiento o, en caso contrario, percepción del 2% del precio convenido -acción denominada en un principio quincuagésima y posteriormente laudemio-), apenas alcanza importancia en la atapa visigoda, aunque experimentará un gran desarrollo durante la edad media, principalmente en Cataluña<sup>121</sup>.

La difusión de la enfiteusis en el reino de Valencia se vio favorecida por la conjunción de tres sucesos históricos de enorme trascendencia, la reconquista -que supuso su introducción en el reino, su regulación por los *Furs* y su amplia implantación en los estados poblados mayoritariamente por mudéjares-, la expulsión de los moriscos -que permitió su imposición de nuevo (en algunos casos en condiciones diferentes) en tierras

---

<sup>121</sup> PUIG y FERRIOL, L.: VOZ "Laudemio". *Nueva Enciclopedia Jurídica*. Dirigida por C. Mascareñas y Pellisé Prats, B., Seix, Barcelona, 1971, T. XIV, pp. 776-821; PUIG PEÑA, F. (1971): VOZ "Enfiteusis". *Nueva Enciclopedia Jurídica*, T. VIII, pp. 557-570; MAÑE JANE, A.: *La redención de censos con dominio*. Bosch, Barcelona, 1940. Este último autor asimila el feudo de la Edad Media a la enfiteusis, aunque señalando tres diferencias esenciales del primero respecto a la segunda institución: el hecho de no pagar censo o pensión, la no perpetuidad (el feudo es a precario y la enfiteusis perpetua) y la servidumbre (en el feudo es personal y en la enfiteusis económica). Añade además, que mientras el vasallaje es función inherente al feudo, en la enfiteusis queda reducida al cumplimiento de las cláusulas contractuales. Concluye diciendo que la enfiteusis no aparece en la Edad Media hasta el siglo XI, "cuando ya el *dómino* o *señor* es una persona natural o jurídica, que del establecimiento de aquella, necesita obtener, no una ayuda personal, sino un provecho pecuniario (...)" , *Ibidem*, pp. 25-26.

establecidas con anterioridad, así como su ampliación a tierras que habían sido francas y libres al quedar en manos de los señores los bienes de sus vasallos expulsos- y el proceso roturador desarrollado durante el último cuarto del siglo XVII y buena parte del XVIII. Completarían este proceso el saneamiento de aguas palustres y la creación de señoríos alfonsinos<sup>122</sup>.

La enfiteusis se constituye como forma jurídica de propiedad y sistema de explotación; implica una propiedad compartida de la tierra (en el caso de los establecimientos de bienes rústicos), una división de dominios, el directo, mayor o eminente que se reserva el estabiliente, propietario de la misma, y el útil que cede al cultivador o enfiteuta. Las características de esta cesión -perpetua (aunque el cedente posee ciertos mecanismos de recuperación), transferible (por herencia o enajenación), fragmentable-, que permiten al enfiteuta adquirir ciertos derechos sobre la tierra, a cambio de respetar y guardar los del dominio directo, son las que confieren a la enfiteusis un carácter especial frente a otros regímenes de tenencia.

La vinculación del enfiteuta a la tierra que cultiva y la adquisición de un cierto derecho sobre ella (derivado de la división de dominios) están en la base del proceso que conducirá finalmente a la inversión del significado e importancia de ambos dominios, y que convertirá al enfiteuta en propietario de hecho de la tierra antes de serlo de derecho.

---

<sup>122</sup> GIL OLCINA, A.: "Declive y ocaso de la enfiteusis señorial valenciana". *Agricultura y Sociedad*, nº 49, 1988, pp. 297-303.

En función de la relación de preeminencia establecida entre ambos dominios, Puig Peña<sup>123</sup>, al analizar la naturaleza jurídica de la enfiteusis, recoge tres tipos de doctrinas. La *doctrina tradicional*, del derecho romano, que -fundamentada en consideraciones como la existencia de los derechos de laudemio, devolución o comiso (que no existe sin embargo en el cens catalán) y redención- sostiene que es el dueño directo el verdadero propietario de la finca, mientras el censatario únicamente tiene sobre ella un *ius in re aliena*. Con posterioridad, y tras conferirse al dominio útil un significado más extenso (al poseer una cierta "sustancia dominical" -ius dominio proximun), favorecido por el ambiente feudal de descomposición del dominio, se planteó la *teoría del dominio dividido*, el directo del censualista y el útil del enfiteuta. "Los dos viven y conviven y juntos componen la integridad dominical sobre la cosa"<sup>124</sup>. Ya en el siglo XIX, va tomando cuerpo una nueva doctrina, que atribuye al enfiteuta el verdadero dominio sobre la cosa, conservando el señor directo únicamente un derecho real. "Es decir, es la misma doctrina romana del *ius in re aliena* pero a la moderna, o sea, concediendo todos los poderes dominicales al censatario"<sup>125</sup>.

---

123 PUIG PEÑA, F. (1971): Op. Cit., pp. 558-559.

124 Ibidem, p. 559.

125 Ibidem, p. 559. Tesis sostenida en España por Manresa, Bonilla y Sanchez-Román.

Estas doctrinas no hacen sino reflejar la evolución sufrida en el concepto y significado de los elementos que integran la enfiteusis en la adaptación a las nuevas situaciones sociopolíticas y económicas, proceso que se verá consolidado, tras la abolición del régimen señorial y la acentuación del rechazo al reconocimiento de los derechos inherentes al dominio directo, con la pérdida de valor de este último, convertido en un mero "gravamen ilusorio nominal"<sup>126</sup>.

Según este autor, el Derecho Español ha aceptado en principio la tesis del dominio dividido, aunque se registra una tendencia hacia una mayor valoración de la figura del enfiteuta; prueba de ello es el reconocimiento a ambos titulares de las facultades necesarias para obtener la consolidación de dominios (derecho de tanteo y retracto, prescripción y dimisión o renuncia), o la aptitud tanto del dominio útil como del directo para abrir una hoja registral<sup>127</sup>.

Esta situación se refleja sin duda en las disposiciones legislativas sobre redención de censos promulgadas tras la revolución de 1868. Clavero señala como la ley de 20-VIII-1873, aunque no se aleja de la tendencia a la compensación en el proceso de abolición de los derechos señoriales, se constituye como una ley general de censos (incluye ya a foros y rabassas), en la que se atribuye la propiedad definitiva de los bienes establecidos al dueño del dominio útil (el directo queda de este

---

<sup>126</sup> GIL OLCINA, A.: "Declive y ocaso de la enfiteusis señorial valenciana", *Agricultura y Sociedad*, nº 49, 1988, p. 304.

<sup>127</sup> PUIG PEÑA, L., *Ibidem*, pp. 559.

modo reducido a simple crédito inmobiliario)<sup>128</sup>. Sin embargo, su vigencia fue escasa, al ser suspendida en 1784 durante la primera restauración.

El estabiliente al ceder el dominio útil se reserva una serie de derechos, dirigidos a garantizar el dominio directo y sus prerrogativas, a la vez que a obtener unos beneficios económicos que hagan rentabilizar la cesión. Estos derechos son los de canon anuo, fadiga, luismo, comiso y cabreve.

Gil Olcina<sup>129</sup>, siguiendo a Monforte, define el laudemio como "la cantidad que se paga al señor directo en el acto de aprobar la enajenación, gravamen o permuta de la finca censida que ha celebrado el enfiteuta". Por tanto, supone la participación del censualista en el precio de transmisión del dominio útil y posee la condición de fruto del dominio directo". Con anterioridad a la promulgación del Código civil, era admitido comúnmente que el censualista tenía derecho a percibir el laudemio en todos los casos de transmisión de la finca acensuada, exceptuándose una serie de casos como la transferencia por derecho de sucesión a herederos forzosos, cuando se rescinde la venta antes de la entrega, cuando dona en dote a una hija o cuando el señor directo usa del derecho de retracto. El Código restringiría el ámbito del laudemio, limitándolo a las

---

<sup>128</sup> CLAVERO, B.: "Foros y Rabassas. Los censos agrarios ante la revolución española (2ª parte)". *Agricultura y Sociedad*, nº 18, 1981, pp. 66-100.

<sup>129</sup> GIL OLCINA, A. (1979): Op. Cit., p. 44.

enajenaciones onerosas, con los consiguientes problemas a la hora de precisar dicho concepto. Covián incluye dentro del mismo aquellos casos en los que el propietario puede ejercitar el derecho de tanteo (venta, permuta, adjudicación, pago, cesión a los acreedores y el legado de deuda específica del predio enfiteuticado) y excluye todas las donaciones, transmisiones *inter vivos* correspondientes al Derecho de familia, así como las *mortis causa*, ya sean testamentarias o *abintestato*, aunque otros autores consideran este criterio demasiado reducido<sup>130</sup>.

A la hora de establecer el carácter del *laudemio*, se le han conferido distintos matices. Algunos autores consideran que es la recompensa que obtiene el titular del dominio directo al dar su aprobación a la transmisión del útil (Sánchez Román); otros alegan que es la única retribución para el dueño de la propiedad, puesto que el canon es únicamente una señal en reconocimiento de su derecho (Gutierrez Fernández); o también se aducen razones de tipo económico, al ser en muchas ocasiones la más importante de las facultades reservadas por el censualista como contraprestación a la cesión, dada la moderación de la pensión (derecho civil castellano anterior a la codificación)<sup>131</sup>. La compensación al censualista por el riesgo de acoger a un enfiteuta desconocido se agrega a las expuestas en líneas anteriores<sup>132</sup>.

---

<sup>130</sup> PUIG y FERRIOL, L., Op. Cit., pp. 793-794.

<sup>131</sup> Ibidem, pp. 778-779.

<sup>132</sup> GIL OLCINA, A. (1979): Op. Cit., p. 44.

Por lo que se refiere a su cuantía, fue establecida en los fueros en la décima parte en el caso de venta y permuta y en 1/20 en el de hipoteca; por tanto superior a la instaurada en el Rerecho Romano, la legislación canónica, las Partidas y la Novísima Recopilación, situada en el 2%<sup>133</sup>. Este valor será el que le conferirán las leyes de señorios de 1823 y 1837 y el Código civil.

Tanto en el derecho civil castellano como en el catalán anteriores a la codificación, el estabiliente tenía derecho a cobrar el laudemio aunque no se hubiera pactado. Sin embargo son diferentes las cuantías establecidas en cada caso; mientras en el primero la cuantía venía determinada por la voluntad de los interesados, y en su defecto por la costumbre o la ley, en el segundo, en un principio, ascendía a la tercera parte del valor de la finca transmitida<sup>134</sup>. Algunos autores justifican este valor por el influjo de la legislación feudal y, en segundo lugar, (como señala Carreras Candi) porque este importe no resultaría desproporcionado en una sociedad en la que el interés legal del dinero oscilaba en torno al 20% anual (e incluso en documentos notariales de préstamo se estipula un interés del 50% y hasta del 100%<sup>135</sup>. Aunque en el Reino de Valencia se mantiene por lo

---

<sup>133</sup> Ibidem, p. 45.

<sup>134</sup> Generalizada durante el siglo XIII, dio lugar en 1285 a la Pragmática de Pedro II, restableciendo el laudemio al 10% y a la Sentencia Arbitral de Jaime II en 1310, que lo fijaba para las enfiteusis eclesiásticas en la séptima parte, limitándose sus efectos a la ciudad de Barcelona, su huerta y viñedo. MAÑE JANE, A. (1940): Op. Cit., pp. 17-36.

<sup>135</sup> PUIG FERRIOL, L., Op. Cit., p. 779.

general la décima parte del precio estipulado, se dan algunas excepciones. Así, por ejemplo, en el Marquesado de Lombay, con anterioridad a la expulsión de los moriscos, si se vendía la casa o la huerta el laudemio se estipulaba en la cuarta parte, si se vendía la tierra en zona montañosa se reducía a la octava parte, aunque ascendía a la cuarta parte si también se incluía en la venta la vivienda. A comienzos del siglo XVI se reduce y se unifica al séptimo, prescindiendo de la calidad de los bienes vendidos<sup>136</sup>.

Aunque el Código Civil establece que la obligación de pagar el laudemio corresponde al adquirente, salvo pacto en contrario, en las diferentes escrituras de transmisión del dominio útil consultadas, se especifica su satisfacción por el transferente en el momento de solicitar la licencia, o bien se atribuye su pago al adquirente, aunque en este caso, con cierta frecuencia, el importe del mismo es deducido del precio acordado.

La importancia de este derecho depende tanto de la frecuencia con que se efectúan las transmisiones como del incremento del valor de la propiedad establecida, generado a expensas del trabajo del colono (caso de las roturaciones de espacios incultos). Al contrario que los pechos en metálico, no se veía afectado por los procesos inflacionarios. En el caso de bienes amortizados (corporaciones perpetuas y manos muertas) se establece el quindenio, laudemio satisfecho cada quince años.

---

<sup>136</sup> GOZALBEZ ESTEVE, E. (1990): Op. Cit., pp 175-185.



Con el proceso iniciado tras la abolición del régimen señorial, el laudemio, además de resultar reducido al 2% (quincuagésima) por las leyes de 3-V-1823 y 26-VIII-1837, perdería su condición de elemento inseparable de la enfiteusis para convertirse en una disposición accesorio a la misma. En este último caso sólo se satisfará tras haber sido estipulado expresamente en el contrato de enfiteusis.

La fadiga consiste en el derecho preferente de adquisición que tiene el titular del dominio directo en caso de transmisión del bien establecido, aunque originariamente era el derecho que se pagaba al señor por el permiso para enajenar la cosa dada en enfiteusis. Gracias a él se ofrecía la oportunidad al estabiliente de consolidar ambos dominios. Borrell Maciá<sup>137</sup> asimila este derecho al tanteo y retracto reconocido por el Derecho Civil, aunque señala que es el derecho de tanteo y, en puridad de principios, no comprende el retracto, que sin embargo, viene a ser su complemento y en realidad queda virtualmente comprendido en ella; ya que, si el enfiteuta enajena la finca sin avisar previamente al dueño directo, éste no deberá verse privado de ejercer la fadiga. Por el contrario, Covián señala la independencia de las dos instituciones, y Castán afirma que no se conocía el retracto enfitéutico. Gil Olcina señala al respecto que el retracto completa el derecho de prelación, con la ventaja sobre el tanteo de la certidumbre del precio<sup>138</sup>.

---

<sup>137</sup> BORREL MACIA, A. : VOZ "Fadiga" en *Nueva Enciclopedia Jurídica*, Seix, Barcelona, 1971, T. IX, pp. 450-454.

<sup>138</sup> GIL OLCINA, A. (1979): Op. Cit., p. 49.

Aunque en un principio el plazo para ejercitarla era de treinta días, en el Código se establece que si el señor directo no ha decidido realizar la compra en un plazo de dos meses, el enfiteuta podrá venderla libremente. La finalidad de la fadiga tiene dos vertientes, por una parte va dirigida a la consolidación de dominios, en un principio, en manos del titular de dominio directo, aunque las nuevas disposiciones legales del siglo XIX, dotarán a este derecho de un carácter recíproco para señor directo y enfiteuta; y, por otra, a completar el derecho de laudemio, ya que de este modo se eluden los posibles fraudes en la satisfacción de este último, ocasionados por declaraciones de un precio de venta más bajo que el real (de este modo el dueño directo adquiere la finca por un precio inferior al real).

Vinculado al laudemio y a la fadiga se impone al enfiteuta la obligación de solicitar licencia señorial con motivo de cualquier enajenación; la contravención de este requisito llevaba aparejada la anulación de la operación e incluso el comiso.

A los derechos se mencionados se une además el comiso, que consiste en la reversión al titular del dominio directo de la finca cuando el censatario incumple algunas de las condiciones esenciales establecidas. De este modo se consigue la consolidación de dominios, hecho que adquiere gran importancia dadas la perpetuidad y la transmisión hereditaria que caracteriza a los establecimientos enfitéuticos.

Entre las acciones penadas con el comiso figuran el impago del cánón, la falta de cultivo o el deterioro grave de la finca, la enajenación de bienes establecidos sin solicitar la correspondiente licencia señorial, la no satisfacción del luismo, la modificación de la cosa censida sin autorización previa del señor o el incumplimiento de la obligación de residencia. En algunos casos, incluso la contravención de los derechos señoriales de carácter exclusivo era sancionada con el comiso<sup>139</sup>.

El código civil establece el recurso al comiso cuando se dejen de pagar las pensiones durante tres años cosecutivos, concediendo al enfiteuta un plazo de treinta días posteriores al requerimiento para solventar el importe de las mismas.

El cabreve es el derecho que tiene el censatario para exigir del enfiteuta el reconocimiento del dominio directo. en este acto se hacía declaración de los bienes poseídos con las cargas impuestas sobre ellos, los lindes y los títulos de pertenencia. Este derecho salvaguarda por tanto el dominio directo, y permite al señor ejercer un cierto control del dominio útil, ante posibles enajenaciones o fragmentaciones de las fincas inicialmente establecidas. Asegura, por tanto, de este modo la percepción del canon y del laudemio.

La realización de los mismos se llevaba a cabo cada 10 años a costa del enfiteuta, aunque el señor directo podía exigir ese derecho, a expensas suyas, siempre que lo deseara.

---

<sup>139</sup> GIL OLCINA, A. (1979): Op. Cit., p. 52.

Por último, el derecho más importante del titular del dominio directo tras la cesión del útil es la percepción de un canon o pensión anual, satisfecho tanto en cantidades fijas en metálico (pechos) como en especie (particiones de frutos). El Código civil distingue entre censos consignativos, reservativos y enfitéuticos; señalando que "es enfitéutico el censo cuando una persona cede a otra el dominio útil de una finca, reservándose el directo y el derecho a percibir del enfiteuta una pensión anual en reconocimiento de este mismo dominio"<sup>140</sup>.

Los pechos en metálico constituyen cantidades anuales fijas que se responden con independencia de la cosecha recogida. De este modo, el señor se garantiza la percepción de unos ingresos seguros y no participa del riesgo de una mala cosecha. Su principal inconveniente es la devaluación que experimenta ante procesos inflacionarios, hecho que favorece sin ninguna duda al enfiteuta. Romero se apoya en esta circunstancia para explicar la aparición de una estructura social dinámica y diferenciada del campesinado (importancia de propietarios útiles foráneos, capa de campesinos acomodados, pequeños "propietarios" y una importante masa de jornaleros y arrendatarios) de determinados señoríos, próxima a la existente en el realengo, frente a la que se configura en aquellos señoríos en los que ha predominado la partición de frutos<sup>141</sup>.

---

<sup>140</sup> BORRELL, A.: VOZ "Censo". *Nueva Enciclopedia Jurídica*. Seix, Barcelona, 1971, T. V, pp. 5-23.

<sup>141</sup> ROMERO GONZALEZ, J. (1983): *Propiedad agraria y sociedad rural*.

Son impuestos sobre casas y tierras, aunque según Ciscar, estos últimos carecen de importancia en las zonas repobladas tras la expulsión de los moriscos al predominar la partición de frutos. También podían ser establecidos sobre pequeñas superficies dedicadas a cultivos determinados (viña, hortalizas, forrajes, árboles frutales, ...). Las casas presentan normalmente un censo fijo y general (único par a todas las casas), aunque en algunas ocasiones su cuantía es relativa al valor de los bienes establecidos. Los pechos que gravan la tierra, de acuerdo a su extensión, evidencian la calidad y características de la misma, aunque en algunos casos su importe es independiente de estos factores. La cuantía relativa de los censos en metálico es variada, pero en general puede calificarse de moderada (frente a los cánones en especie a los que complementa); efectuándose los pagos de una sola vez (S. Juan, Navidad, S. Miguel, Todos los Santos) o bien en dos plazos<sup>142</sup>.

En el ámbito que nos ocupa, los señoríos de Aguas y Busot presentan los dos tipos de censos -con diferente cuantía los impuestos en dinero según se trate de regadío o secano (en los establecimientos efectuados en vísperas de la abolición del régimen señorial)-, aunque sólo en el primero de los lugares gravan ambos, en algunas ocasiones, la misma finca, adoptando en este caso un carácter complementario el canon satisfecho en metálico. De igual modo sucede en los casos de Villafranqueza y Agost (respecto a este último en referencias localizadas en el

---

<sup>142</sup> CISCAR PALLARES, E. (1977): Op. Cit., pp. 237-245.

siglo XVIII, pues en la carta de población se establecieron pechos en dinero solamente sobre determinados cultivos -vid, higueras y alfalfa).

Los censos en especie suponen la entrega al censualista de una porción alícuota de la cosecha; esa proporción varía en función de los cultivos existentes, la calidad y características de la tierra o el ámbito geográfico<sup>143</sup>. En este sentido, Ciscar señala como las cartas pueblas posteriores a la expulsión recogen, en el caso de los cereales, particiones entre 1/3 y 1/6 en el caso del regadío y entre 1/6 y 1/8 en el del secano. Estas proporciones se reducen o se incrementan dependiendo de la situación geográfica (a 1/6-1/7 en huerta y 1/8-1/10 en secano en las áreas interiores del sur de la provincia de Castellón). El arbolado satisface censos más elevados (sin diferenciar apenas secano y regadío), predominando los establecidos al tercio, cuarto y quinto, aunque existen casos de mayor dureza (Ayelo de Malferit y Anahuir a la mitad). El de mayor cuantía afecta al olivo (1/3-1/4), y el más reducido a las higueras (1/6 el más común). Por lo que respecta a la vid, el mayoritario es 1/8, presentando una mayor dureza en la Marina Alta y Muro (1/4 y 1/3). El arbolado se veía favorecido, en ciertas ocasiones, con algún tipo de exención o reducción temporal del importe de las pensiones, con la finalidad de fomentar la introducción de algún cultivo determinado (Así sucedía por ejemplo en Agost con la vid).

---

<sup>143</sup> CISCAR PALLARES, C. (1977): Op. Cit., pp. 249-268.

siglo XVIII, pues en la carta de población se establecieron pechos en dinero solamente sobre determinados cultivos -vid, higueras y alfalfa).

Los censos en especie suponen la entrega al censualista de una porción alícuota de la cosecha; esa proporción varía en función de los cultivos existentes, la calidad y características de la tierra o el ámbito geográfico<sup>143</sup>. En este sentido, Ciscar señala como las cartas pueblas posteriores a la expulsión recogen, en el caso de los cereales, particiones entre  $1/3$  y  $1/6$  en el caso del regadío y entre  $1/6$  y  $1/8$  en el del secano. Estas proporciones se reducen o se incrementan dependiendo de la situación geográfica (a  $1/6$ - $1/7$  en huerta y  $1/8$ - $1/10$  en secano en las áreas interiores del sur de la provincia de Castellón). El arbolado satisface censos más elevados (sin diferenciar apenas secano y regadío), predominando los establecidos al tercio, cuarto y quinto, aunque existen casos de mayor dureza (Ayelo de Malferit y Anahuir a la mitad). El de mayor cuantía afecta al olivo ( $1/3$ - $1/4$ ), y el más reducido a las higueras ( $1/6$  el más común). Por lo que respecta a la vid, el mayoritario es  $1/8$ , presentando una mayor dureza en la Marina Alta y Muro ( $1/4$  y  $1/3$ ). El arbolado se veía favorecido, en ciertas ocasiones, con algún tipo de exención o reducción temporal del importe de las pensioness, con la finalidad de fomentar la introducción de algún cultivo determinado (Así sucedía por ejemplo en Agost con la vid).

---

<sup>143</sup> CISCAR PALLARES, C. (1977): Op. Cit., pp. 249-268.

Gil Olcina<sup>144</sup> señala como en el Bajo Segura no existe una implantación mayoritaria de las particiones en todas las tierras de cultivo. Mientras las particiones ( $1/5$  y  $1/7$ ) se imponen en el secano (paralelamente las zonas de realengo son cultivadas a terraje), los censos en metálico fueron establecidos en el regadío (éstos se corresponden en el mismo sentido que en el caso anterior con los arrendamientos a corto plazo del realengo), respondiendo probablemente al deseo de los señores de obtener una renta segura y no la necesidad de incentivar el asentamiento de enfiteutas. Sin embargo, la desvalorización de los pechos propiciaría el retroceso y, posteriormente, la desaparición de la enfiteusis a través de la consolidación de dominios, en un primer momento (hasta los últimos años de Fernando VII), en manos del señor (ejercicio de la fadiga y el comiso), accediendo después (tras la promulgación de la legislación abolicionista) los enfiteutas a la propiedad plena de la tierra.

Los señoríos de Agost y Villafranqueza presentan particiones de frutos como cánon predominante, siendo las de Villafranqueza (al margen de las impuestas en los señoríos de finales del siglo XVIII) las más onerosas ( $1/3$  en árbolado y  $1/4$  en cereales). En el caso de Agost las pensiones inicialmente establecidas ( $1/3$  el arbolado y  $1/4$  o  $1/5$  el resto de cultivos según fuera secano o regadío -al margen de los gravados con

---

<sup>144</sup> GIL OLCINA, A. y CANALES MARTINEZ, G. (1988): *Residuos de propiedad ...*", pp. 41-48.



pechos) podrían haber sufrido una reducción en momentos posteriores. En Busot adquieren una cuantía más reducida (1/7, 1/12), y sigue recurriéndose a los censos en metálico.

Durante el siglo XVIII tendría lugar un proceso de crecimiento de las rentas señoriales -favorecido por el alza del valor de los productos agrícolas, la expansión demográfica y la introducción del cultivo en nuevas áreas (roturaciones de áreas marginales o saneamiento de zonas palustres)-, a la vez que un incremento del valor de particiones de frutos y diezmos en las mismas, ante la devaluación de los censos en metálico y la implantación preferente de las pensiones en especie en el nuevo proceso colonizador. La demanda de tierra propició igualmente el alza de los cánones<sup>145</sup>.

Ese incremento de las pensiones en especie (a pesar de la reducción de los establecimientos) aparece reflejado en los señoríos creados a finales del siglo XVIII, tras la reposición del fuero alfonsino; motivado por la demanda de tierras existente o tal vez porque ante la necesidad de recurrir a la enfiteusis a fin de reunir el vecindario preciso para el logro de la jurisdicción los estabillientes tratasen de encarecer al máximo al entrega del dominio útil<sup>146</sup>. Tres señoríos de la comarca tienen su origen en este período, aunque sólo en dos de ellos, La Vallonga de Burgunyo y La Sarga, se establecerá la enfiteusis como régimen de tenencia, con particiones bastante considerables

---

<sup>145</sup> GIL OLCINA, A. (1979): Op. Cit., pp. 98-101.

<sup>146</sup> GIL OLCINA, A. (1990): "Reformismo ...", n.º 56, p. 103.

(entre el tercio y el cuarto).

Sin embargo, ya desde finales del siglo XVII (por ejemplo en el caso de Alfara del Patriarca)<sup>147</sup> se venía produciendo un retroceso de la enfiteusis, limitada al cultivo de tierras incultas de peor calidad, sustituida por fórmulas más rentables y que permitían una revisión de los cánones, como el arrendamiento (y en menor medida por la explotación directa). Posteriormente, ante el incremento de la cuantía de los arrendamientos, la modificación de la relación mano de obra disponible y superficie cultivable y el creciente clima antiseñorial y de rechazo al pago y reconocimiento de las pensiones enfitéuticas impulsaron más decididamente esa tendencia. Así por ejemplo, en varios señoríos del Bajo Segura a finales del siglo XVIII el arrendamiento se constituye como el sistema de tenencia predominante de las fincas señoriales en plena propiedad (tanto las que no habían sido objeto de establecimiento, como las adquiridas a través de la consolidación de dominios)<sup>148</sup>. Millán también señala el relevo en las formas de tenencia de la tierra (aunque perviven los establecimientos en condiciones progresivamente más duras) posibilitado por la coyuntura favorable del crecimiento agrícola y la comercialización de ciertos productos<sup>149</sup>.

---

147 PESET, M., MANCEBO, M.<sup>a</sup> F. Y GRAULLERA, V.: "El señorío de Alfara del Patriarca (1801-1845)". *Estudis d'Història contemporània del País Valencià*, n° 2, Valencia, 1981, pp. 5-60.

148 GIL OLCINA y CANALES MARTINEZ, (1988): *Residuos de propiedad*, pp. 264-267.

149 MILLAN y GARCIA VARELA, J. (1984): Op. Cit.

Señoríos de nueva creación a finales del siglo XVIII, como Algorfa, Daya Vieja o Peñacerrada, responden plenamente a esta nueva etapa. El régimen de tenencia predominante en ellas será el arrendamiento desde un primer momento. A las razones de índole económica ya expuestas, se une la difícil percepción de las rentas de carácter enfiteútico así como el hecho de que por sus características (ubicación en una rica huerta y proximidad a núcleos importantes -en el caso de Peñacerrada en las inmediaciones de Muchamiel y próxima a Alicante y resto de municipios de la huerta-) no tendrían dificultades para conseguir reunir los mínimos de población exigidos.

Otro señorío que podemos adscribir igualmente a esta tónica es el de Asprillas. Aunque desconocemos la cuantía de las particiones si podemos afirmar que en un principio se implantó la enfiteusis. Uno de los documentos mencionados con anterioridad en relación a los diezmos aludía a la existencia de población morisca cultivando las tierras a "terrage" en la partida<sup>150</sup>. En este sentido, a pesar de no aparecer en los padrones del equivalente del siglo XVIII como grandes propietarios (pues en ellos no se diferencia la plena propiedad del dominio útil de la enfiteusis, que es considerado como tal) si se registra en fuentes posteriores la inclusión de los Roca de Togores, propietarios del mismo durante el siglo XIX, como uno de los mayores propietarios de Elche. Esta circunstancia revela además la sustitución realizada en las formas de tenencia, así como la

---

<sup>150</sup> AME. H/284- n° 64.

consolidación de dominios en cierta medida. En efecto, Bernal y De La Peña<sup>151</sup> señalan como de 1802 a 1827, y sobre todo hasta 1814, se combina la explotación agrícola directa con la indirecta, efectuada esta última a través del arrendamiento y la enfiteusis. A partir de 1820 (excepto 1823 y 1824 en que reaparecen los diezmos) la contabilidad señorial recoge únicamente partidas por cosechas propias. Además, desde 1827, el titular del antiguo señorío desarrollaría una intensa política de compra de tierras. En un primer momento, entre 1827 1842, ésta irá dirigida a la adquisición a particulares de fincas de pequeñas dimensiones, colindantes a las propiedades señoriales o bien situadas en los mismos pagos (probablemente, en algunos casos, estas compras afectarían en realidad al dominio útil de fincas antiguamente establecidas). Sin embargo, esta fase sólo supone el 8% de la superficie incrementada, puesto que de 1842 a 1860 tendrá lugar el mayor crecimiento superficial de la propiedad agraria (un 92%). En esta segunda etapa, junto a la compra de tierras a pequeños propietarios en períodos de crisis, adquirirá la coyuntura desamortizadora, a partir de 1856, una trascendencia fundamental.

Sin embargo, hemos de destacar en dos señoríos de la comarca, Aguas y Busot, una tendencia diferente, indudablemente relacionada con las características de las tierras incorporadas al proceso roturador. En efecto, en estos dos señoríos, al margen de las fincas en plena propiedad de los Marqueses del Bosch,

---

<sup>151</sup> BERNAL, A. M. y DE LA PEÑA J. F. (1974): Op. Cit., pp. 129-157.

continuará predominando la enfiteusis hasta los primeros años del siglo XIX. Se trata en general de tierras incultas en áreas marginales. El caso más extremo se dará en Aguas, donde existen testimonios de ventas a censo enfiteútico a mediados de siglo; con la imposición de pechos en metálico de escasa cuantía, aunque se seguirá manteniendo la cuantía del luismo en la décima parte del precio de venta. La mayor parte de los capítulos estipulados irán encaminados a asegurar los derechos del dominio directo (por ejemplo frente a la prescripción).

Como hemos puesto de manifiesto en líneas anteriores, en varios de los señoríos de las comarcas consideradas se detecta una mayor utilización del arrendamiento como régimen de tenencia a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX. En algunos casos, esta forma de explotación indirecta había sustituido a la enfiteusis (Vallonga, Asprillas, Aguas, en las fincas obtenidas tras la consolidación de dominios) o bien había sido utilizada desde un principio para la puesta en cultivo de la tierra (caso de Peñacerrada). Además este sistema de tenencia es el que había predominado, durante el antiguo régimen y también posteriormente, en tierras de la plena propiedad de los titulares de señoríos tanto en sus lugares como en el realengo -o bien en tierras alodiales de su propiedad situadas en otros dominios señoriales- (caso por ejemplo de los Marqueses del Bosch, de los señores de Asprillas o de los de la Vallonga). Este mismo sistema será también utilizado, en combinación con otros, en la gestión de las

regalías y los derechos dominicales (por ejemplo en Agost, Busot, Villafranqueza e incluso algún señorío tardío como la Vallonga), tanto de un modo conjunto como individualizado.

El arrendamiento es una forma de explotación de la tierra que implica la separación de la propiedad y la administración, puesta en producción y cultivo de la misma. En este caso, se produce la cesión del usufructo de la tierra a cambio de la entrega de una cantidad anual en metálico.

Este sistema es el que mayor implantación presenta en el Campo de Alicante y Bajo Vinalopó (al margen de los dominios señoriales) durante los siglos XVII y XVIII, más extendido en el regadío que en el secano. Giménez<sup>152</sup>, partiendo del análisis del padrón del equivalente de 1743, señala que el mayor volumen de tierras arrendadas en Alicante corresponde a las propiedades de la nobleza titulada (un 81% de las propiedades de su grupo), seguida de las del patriciado urbano (42,5% de las propiedades de su grupo), mientras que en el caso del campesinado es de escasa consideración (6,8%). En el siglo XVIII adquieren importancia ciertas comunidades religiosas y la clase comercial, que invertirá sus beneficios en la compra de tierras<sup>153</sup>. Un ejemplo de este último caso lo constituye Josef Rodriguez, arrendatario de los derechos señoriales de Agost, así como de varios propios y arbitrios de la ciudad de Alicante, y prestamista, que invierte

---

<sup>152</sup> GIMENEZ LOPEZ, E.: *Alicante en el siglo XVIII. Economía de una ciudad portuaria en el antiguo régimen*. Institución Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1981, pp. 121-127.

<sup>153</sup> ALBEROLA ROMA, A. (1984): *Op. Cit.*, pp. 280-281.

los ingresos obtenidos en la adquisición de fincas rústicas, cedidas posteriormente en arriendo.

Altamira recoge también su importancia, y, basándose en el interrogatorio de 1848 (Roca de Togores), señala que las rentas impuestas en los mismos eran preferentemente en dinero (30 reales con tahulla de secano), aunque también destacaba el empleo del terraje (el arbolado a medias y el suelo al cuarto)<sup>154</sup>.

Sin embargo, en la *Contestación de la Junta de Agricultura de la provincia de Alicante al interrogatorio o encuesta agrícola de 1849*, se dice lo siguiente:

"En las de Alicante se cultivan generalmente por sus dueños, porque los productos no bastan por lo regular a sufragar los gastos de cultivo, y se someten los propietarios a sufrir estas pérdidas, por conservar a fuerza de sacrificios los plantíos de las viñas: estos sacrificios sin embargo, son ya ineficaces, porque en varios años continuos de sequía, se han perdido casi totalmente aquéllos, y empiezan ya a darse las tierras a terraje como malos secanos. En el distrito de las montañas, las huertas, que poco considerables, por no serlos mucho las fuentes con que se riegan, se suelen dar en arrendamiento. (...). Los secanos se dan a

---

<sup>154</sup> En este sentido afirma que esta forma es conocida como *á cuarta*, reservándose la denominación de *terraje* para la división en tercios. ALTAMIRA CREVEA, R.: *Derecho consuetudinario y economía popular de la provincia de Alicante*. Edición Facsimil, Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, Alicante, 1985, p.26.

partido"<sup>155</sup>.

Las características de los arrendamientos en los señoríos son similares a las establecidas para las fincas del realengo<sup>156</sup>. Son a corto plazo, y las pensiones se pagan en metálico, en uno o varios plazos, contemplándose además en algunos casos la entrega de adehalas. De este modo, el arrendador puede revisar los cánones de los arrendamientos y adaptarlos a las fluctuaciones de los precios agrícolas. La cuantía de los mismos se establece en función de factores como la extensión y localización de las fincas, los cultivos existentes, la calidad y características de la tierra (secano o regadío) o las condiciones de explotación de la finca. Ejemplos concretos han sido analizados en los casos de Busot, Aguas, La Vallonga y Peñacerrada.

Este tipo de contratos lleva siempre aparejado un grupo de condiciones a cumplir por el arrendatario, destinadas a garantizar la percepción de las rentas anuales por el arrendador (exigencia de fianza al arrendatario, advertencia de la imposibilidad de solicitar rebajas en la cuantía de los arrendamientos por ningún motivo, rescisión del contrato en caso de impago de las pensiones, etc) y el adecuado cultivo de la finca (se exige un cultivo a uso y costumbre de buen labrador,

---

<sup>155</sup> *Contestación de la Junta de Agricultura de la provincia de Alicante al interrogatorio o encuesta agrícola de 1849. 1850. En Materiales para la Historia Económica de Alicante.* VIDAL OLIVARES, J., Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, Alicante, 1986, pp. 183-184.

<sup>156</sup> GIMENEZ LOPEZ, E. (1981): Op. Cit., pp. 127-130; ALBEROLA ROMA, A. (1984): Op. Cit., pp. 280-289.



corriendo en caso contrario el arrendatario con el coste de los daños, se marcan algunas de las labores a realizar en los cultivos, el número de rejas, levantamiento de márgenes, etc). A cargo del arrendatario son también las obras de reparación y mantenimiento de la finca, y, además, en ocasiones, el propietario se reserva la facultad de planificar el trabajo agrícola o la introducción de nuevos cultivos.

En los grandes patrimonios nobiliarios del reino de Castilla el régimen de tenencia empleado fundamentalmente es el arrendamiento a corto plazo, en el cobra gran importancia el gran arrendatario latifundista. Mata Olmo<sup>157</sup>, a este respecto, recoge la existencia en la campiña cordobesa de fórmulas diversas de explotación, entre las que destaca por su peculiaridad el arrendamiento sujeto a esterilidad y plazos cortos de cesión (tres años generalmente o múltiplos de tres), con rentas anuales de "pan terciado" y dádivas en dinero y granjería. Este sistema de explotación constituye "una forma particular de contrato, que contiene rasgos de un régimen de tenencia más tradicional como la aparcería. Por esta fórmula, el arrendatario adquiere el derecho de reducir el montante de renta de pan terciado acordado en el contrato, en aquellos años en los que la cosecha presenta "esterilidad", es decir, unos rendimientos por fanega de simiente o de tierra -varían las referencias según contratos- inferiores a

---

157 MATA OLMO, R.: *Pequeña y gran propiedad agraria en la depresión del Guadalquivir*. MAPA, Madrid, 1987, Vol. I, pp. 247-260.

Indicaciones para el libro  
de Carmen Irigoyen

los niveles medios de productividad"<sup>158</sup>. Este sistema fue evolucionando hacia una fórmula más próxima a la del verdadero arrendamiento a través del incremento de la cuantía de las entregas en concepto de dádivas (en metálico o de animales, en ambos casos no sujeta a la irregularidad de las cosechas).

Por lo que respecta al Bajo Vinalopó, Gozalvez<sup>159</sup> señala igualmente, por lo menos desde el siglo XIX, el empleo del arrendamiento con rentas en metálico, oscilando los precios pagados por tahulla (953 m<sup>2</sup>) entre 1 y 7 reales en seco y entre 4 y 30 reales en regadío (según un informe de 1848). A finales del siglo XIX, junto a la explotación directa, se emplean otros sistemas de explotación indirecta como los de plazo fijo y renta alzada, la aparcería y la enfiteusis. Los arrendamientos en metálico se otorgaban por períodos de corta duración (4-6 años), aunque la rotación de cultivos duraba cuatro años, y su cuantía era establecida en cantidades fijas por tahulla o por la explotación en su conjunto. Consideraciones especiales se establecían en los arrendamientos de los palmerales. Altamira señala como a principios del siglo actual el arrendamiento más generalizado es en dinero y a dos plazos, uno por San Juan o San Miguel (tierras blancas o sin arbolado en junio, y las plantadas de viña, almendros o higueras en septiembre) y otro en Navidad. En los huertos de palmeras, granados o higueras se arrienda la

---

<sup>158</sup> Ibidem, p. 255.

<sup>159</sup> GOZALVEZ PEREZ, V.: *El Bajo Vinalopó. Geografía agraria*. Valencia, 1977, pp. 197-198.

cosecha del vuelo con independencia de la del suelo, que se reserva el dueño. Se registra en general la tendencia a perpetuar los contratos sin renovación<sup>160</sup>.

Por último, la práctica de la *aparcería*, a pesar del desarrollo que alcanza en otras áreas<sup>161</sup>, en el Campo de Alicante durante el siglo XVIII era poco frecuente y limitada fundamentalmente al secano, afectando principalmente a pequeños propietarios<sup>162</sup>. Esta forma de explotación consiste en la cesión por parte del propietario de una porción de tierra por un tiempo determinado, comprometiéndose a proporcionar al cultivador los útiles necesarios y reservándose a cambio el derecho a recibir una parte alícuota de la cosecha. Alberola ha documentado también su uso, aunque sin apenas incidencia, en la huerta. Es la variedad conocida como *terraje*, con particiones al sexto e incluso inferiores. En secano presenta una mayor duración el contrato, y se exige la séptima parte de los frutos<sup>163</sup>. Altamira señala la existencia, en Aguas, Busot y otros pueblos situados en zonas más montañosas de la *aparcería* a medias en el arbolado y viña, recibiendo los medieros el nombre de *michers* o *vel-lats*. Durante el XIX, menciona el empleo de otras formas de *aparcería*, como el *terraje* (el arbolado a medias y el suelo al cuarto), denominado por los labradores á *cuarta*, o la que parte al tercio

---

<sup>160</sup> ALTAMIRA CREVEA, R., Op. Cit, pp. 26-31.

<sup>161</sup> GIL OLCINA, A. y CANALES MARTUNEZ, G. (1988): Op. Cit., pp. 64-65.

<sup>162</sup> GIMENEZ LOPEZ, E. (1981): Op. Cit., p. 130.

<sup>163</sup> ALBEROLA ROMA, A. (1984): Op. Cit, pp. 292-294.

(denominada *terraje* por los cultivadores<sup>164</sup>.

Por lo que respecta al campo de Elche, Gozalvez alude al empleo, a mediados del siglo XIX, de la *aparcería* en el secano. Mientras el arbolado partía a la mitad, en el caso de los productos herbáceos el *aparcero* se reservaba los siete novenos de la cosecha. A finales del siglo, era empleado en las tierras de cereales, con una duración entre cuatro y seis años, y unas particiones que dependían de la calidad del *terrazgo*. Las mejoras efectuadas por el *aparcero*, sobre todo por plantación de arbolado era recompensadas<sup>165</sup>. Altamira, además de recoger las noticias proporcionadas por Martínez Mas, menciona la partición a medias en las viñas, mientras en las tierras dedicadas a cereales se implanta el *terraje* (el *aparcero* satisface dos de cada cinco o dos de cada siete cahíces de trigo al dueño). En los señoríos analizados sólo hemos encontrado ejemplos de este régimen de tenencia en la Vallonga, con particiones similares a las impuestas en los establecimientos *enfiteúticos* (1/3 arbolado y viña y 1/4 sembrados y barrilla).

---

<sup>164</sup> ALTAMIRA CREVEA, R., Op. Cit., p. 26.

<sup>165</sup> GOZALVEZ PEREZ, V. (1977): Op. Cit, pp. 197-198.

### 3.-La abolición del régimen señorial y la desintegración de los patrimonios señoriales.

Esta cuestión ha sido abordada por una serie de autores que han establecido las directrices básicas de este proceso. Carácter general presenta la obra de Moxó, mientras que tanto la de Gil Olcina como la de Ardit van referenciadas al ámbito valenciano.

A finales del siglo XVIII ya se detecta en el reino de Valencia una importante corriente de carácter antiseñorial, que cuaja en la elevación de diversos pleitos de tanteo e incorporación a la corona por numerosos lugares de señorío; pleitos, que de larga duración y costes bastante elevados, en pocas ocasiones finalizarían con resultados positivos para los vecinos de los mismos. Además de este hecho, la difícil situación económica, motivada por la crisis de la agricultura y de ciertos sectores industriales, y agudizada por las epidemias y los conflictos bélicos, propició el estallido de revueltas populares<sup>166</sup>, que en los lugares de señorío contribuían a acentuar el clima antiseñorial, dando lugar a numerosos pleitos entre señores y vasallos por causas diversas, pero centradas principalmente en la percepción de los derechos señoriales

---

<sup>166</sup> ARDIT LUCAS, M.: *Revolución liberal y revuelta campesina. Un ensayo sobre la desintegración del régimen feudal en el País Valenciano (1973-1840)*. Ariel, Barcelona, 1977, pp. 79-89.

derivados de la propiedad de la tierra y las regalías. Ejemplos de ambos casos se han verificado en algunos de los señoríos objeto de la presente memoria de licenciatura.

La abolición del régimen señorial abarca un largo período en el que pueden distinguirse una serie de hitos fundamentales.

Al margen de la legislación específicamente abolicionista, se registran, en vísperas de la supresión del régimen señorial, los primeros ataques contra el mismo, iniciados desde el campo de la redención de censos, a través de una serie de disposiciones promulgadas por la Corona, dirigidas a evitar la devaluación de los vales reales así como a su amortización o retirada de la hacienda<sup>167</sup>.

En este sentido, el 17-IV-1801, se publicaba una Real Cédula, en la que al margen de las posibilidades ofrecidas a los poseedores de vínculos y mayorazgos para redimir censos impuestos sobre sus fincas y las facilidades para la redención de los censos enfitéuticos cargados sobre viviendas urbanas, se establecía lo siguiente:

"Todo dueño y poseedor de fincas afectas á censo redimible por la convención ó por la ley, ó perpetuo, de qualquiera naturaleza y condición que sean, podrá redimirlos con Vales Reales por todo su valor, y en los

---

<sup>167</sup> Estos vales se declaran en curso legal para la redención de ciertos censos. CLAVERO, B.: "Foros y Rabassas. Los censos agrarios ante la revolución española. (Primera parte)". *Agricultura y Sociedad*, nº 16, 1980.

términos que se expresará, aunque se hayan impuesto con licencia ó aprobación Real, ó intervenga pacto de no redimirse, ó se paguen la pensión ó réditos en frutos, ó en metálico con designación de monedas"<sup>168</sup>.

La redención se efectúa por el importe del capital que conste en la escritura, y, en caso contrario, se capitaliza el canon al 33 1/3 el millar (3,33%), pagándose el doble en el caso de los censos enfitéuticos. En caso de que el cánón fuera incierto (en especie por ejemplo) se tomaría en consideración el promedio del último quinquenio.

Esta disposición abría sin duda un camino a la redención de los censos establecidos en los lugares de señorío, que posibilitaba la consolidación de dominios en manos del enfiteuta en una fecha muy temprana. Así ocurrió en 1803 en Villafranqueza, donde a pesar de la oposición del Conde de Cirat y Villafanqueza, Francisco Martínez y Hernández lograba le fuera otorgado la redención y quitamiento de un censo de carácter enfitéutico impuesto sobre una heredad de 61 tahullas y 6 tandas de agua de la Balsa de Orgegia, localizadas en la partida del mismo nombre<sup>169</sup>. La citada finca estaba tenuta al dominio mayor y directo del mencionado conde, gravada con la partición de la cuarta parte de los frutos. Ante la oposición del señor del dominio directo y con motivo de no haber reportado las escrituras

---

<sup>168</sup> *Novísima Recopilación de las Leyes de España, mandada formar por el Señor D. Carlos IV. Ley 22, Título 15, Libro 10, Tomo V, pp. 88-92.*

<sup>169</sup> AHPA. Prot. Not. de Fco. Aracil, P. 90, 1803, fs. 22-26.

de imposición y demás que acreditasen el gravamen y su capitalidad, se procedió a ejecutar la valoración y justiprecio de la heredad, estimándose el valor de la redención en 2.379 libras 14 sueldos y 10 dineros, siendo aprobada ésta en el auto definitivo pronunciado en Alicante el 17-I-1803, obligándose a la condesa a formalizarla, señalándose que en caso de no ser otorgada la escritura por la interesada, se efectuaría de oficio. En la expresada cantidad venía incluído además el importe del derecho de laudemio.

La condesa apeló este auto, pero no le fue admitida la protesta, y ante su rebeldía fue otorgada la escritura de redención por el alcalde mayor de Alicante.

La incidencia de esta normativa y la oposición que pudo suscitar entre los dueños del dominio directo motivó sin duda alguna su modificación, asegurándose en 1804 la posibilidad de pactar la cláusula de no redención<sup>170</sup>. Sin embargo, el 17-I-1805 se volvía a la línea anterior estableciéndose de nuevo la redimibilidad de todos los censos tanto al quitar como redimibles, aunque se exceptuaban de esta medida "los dominios solariegos, ó establecimientos de carta-puebla, ni las prestaciones de octava, décima, undécima ni otra parte aliqüota de los frutos de uno ó mas predios, quando no conste haber sido adquiridos por precio cierto; ni finalmente los foros temporales, como los del Reyno de Galicia y Principado de Asturias, por

---

<sup>170</sup> PESET REIG, M.: *Dos ensayos sobre la historia de la propiedad de la tierra*. Editoriales de derecho reunidas, S.A., Madrid, 1982, p. 99.



ahora, y mientras que el Consejo acuerde y me consulte, con vista del expediente general instruido en su razón, lo que estimare conveniente"<sup>171</sup>. Esta nueva disposición aunque facilitaba la redención de los censos enfitéuticos de carácter alodial, zanjaba la cuestión sobre los de señorío, preservándolos por el momento de esa amenaza.

Con posterioridad a estas disposiciones, pero muy próxima en el tiempo, tendría lugar la aprobación de la Real Cédula de 25-II-1805, que dispuso la incorporación a la Corona de los señoríos temporales, derechos, rentas y fincas enajenadas del Real Patrimonio y poseídas por Mitras y otras dignidades eclesiásticas, debiendo imponerse su importe capitalizado en la Caja de amortización al 3%. Varios autores han matizado la incidencia real de este precepto, reduciendo sus efectos<sup>172</sup>.

Gran trascendencia tendría, sin embargo, el decreto de 6-VIII-1811, que abrió el proceso definitivo de abolición del régimen señorial. El debate sobre la extinción de señoríos fue iniciado conjuntamente por los diputados valencianos Antonio Lloret y Joaquín Lorenzo Villanueva. Del primero de ellos partiría la propuesta de reintegrar a la Corona "todas las jurisdicciones consideradas como regalías de primera clase e inherentes a aquélla, sin perjuicio de las oportunas compensaciones". Sin embargo, la formulación final de la misma sería efectuada por García Herreros<sup>173</sup>. De este modo, la nueva

---

<sup>171</sup> *Novísima Recopilación* ..., Ley XXIV, T. V, pp. 92-98.

<sup>172</sup> GIL OLCINA, A. (1979): *Op. Cit.*, p. 127.

<sup>173</sup> ARDIT LUCAS, M. (1977): *Op. Cit.*, p. 179.

ley establecía en su artículo primero: "Desde ahora quedan incorporados á la Nación todos los señoríos jurisdiccionales de cualquiera clase y condición". Además se suprimían las regalías que hubieran tenido su origen en el señorío (caza, pesca, hornos, aprovechamientos de aguas, montes, ...), así como los dictados de vasallaje y todas las prestaciones de origen jurisdiccional. Sin embargo, en relación al dominio de la tierra, el decreto no terminaría de definir claramente la situación. En el se disponía que "Los señoríos territoriales y solariegos quedan desde ahora en la clase de los demás derechos de propiedad particular, si no son de aquellos que por su naturaleza deban incorporarse a la Nación, ó de los en que no se hayan cumplido las condiciones con que se concedieron, lo que resultará de los títulos de adquisición" (art. 5º); y, además, que "Por lo mismo los contratos, pactos ó convenios que se hallan en razón de aprovechamiento, arriendo de terrenos, censos ú otros de esta especie, celebrados entre los llamados señores y vasallos, se deberán considerar desde ahora como contratos de particular a particular" (art. 6º).

A este respecto, Moxó señala como, frente a la claridad con que se consigna la supresión de jurisdicciones y regalías, el decreto plantea de un modo ambigüo dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, en relación a los señoríos de carácter mixto, no determina si debe procederse a la abolición conjunta de ambos elementos, territorial y jurisdiccional, o la transformación del primero de ellos en propiedad particular. Y, en segundo lugar, tampoco establece claramente si la continuidad en el disfrute del

señorío territorial debía ir precedida de la previa presentación de títulos acreditativos del dominio, o si por el contrario correspondía a los pueblos el demostrar el carácter jurisdiccional o monopolístico de las prestaciones<sup>174</sup>.

El primero de los puntos expuestos adquiriría una gran trascendencia para el régimen señorial del antiguo Reino de Valencia, donde la adquisición por los señores de los bienes pertenecientes a sus vasallos moriscos expulsados se había realizado sobre bases jurisdiccionales. Este tema había sido destacado por Aparici en la Cortes, puesto que éste, al igual que Lloret, cuestionaba la legitimidad del señorío territorial constituido tras el extrañamiento de los moriscos, y proponía la anulación o moderación de algunos de sus derechos (supresión de regalías, reducción de las particiones y pechos impuestas tras la repoblación al 10% e instauración de un cánón en metálico moderado en las roturadas con posterioridad, reducir los censos al 3% posibilitando su redención, suprimir la fadiga y matizar la cuantía (al 2%) y significado del laudemio<sup>175</sup>.

La controversia surgida de resultas del decreto, plasmada en la resistencia del campesinado a satisfacer los derechos señoriales, quedó definitivamente zanjada por la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en 1813, en el pleito seguido por las villas de Elche y Crevillente contra el conde de Altamira. De ella se deduce la transformación del elemento

---

<sup>174</sup> MOXO, S. de: *La disolución del régimen señorial en España*. (Premio "Luis Vives" 1962), Madrid, 1965, p. 55.

<sup>175</sup> ARDIT LUCAS, *Ibidem*, pp. 180-182.

territorial y solariego en propiedad privada, y la atribución a los enfiteutas de la responsabilidad de probar el carácter jurisdiccional de las prestaciones<sup>176</sup>. No cabe duda, que en la mayor parte de los pueblos de señorío se dio una interpretación amplia a este decreto, generalizándose la resistencia al pago de las pensiones de origen señorial, lo que motivó el desarrollo de iniciativas legales contra esa situación por los titulares de los señoríos. El retorno de Fernando VII y la anulación de gran parte de las disposiciones emitidas por las Cortes, adquiriría una importancia trascendental en el desarrollo de estos pleitos, que favorecerían en gran medida las pretensiones señoriales. Así sucedió por ejemplo en el caso de Busot.

La vuelta de Fernando VII al poder no supondría el retorno del régimen abolido en 1811, aunque si limitaría el alcance de las disposiciones establecidas en esa fecha. Además de la paralización del proyecto aclaratorio elaborado por una Comisión de las Cortes, con la promulgación de la Real Cédula de 15-IX-1814, aunque no restablecía ni las jurisdicciones señoriales ni las regalías, si se reintegraba a los señores la percepción de todos los derechos derivados de la propiedad de la tierra.

La instauración en 1820 de un nuevo período liberal permitió retomar la cuestión de los señoríos. La ley promulgada a finales de esta etapa (el 3-V-1823) aclaraba algunas de las cuestiones planteadas anteriormente y presentaba un carácter más

---

<sup>176</sup> MOXO, S., Op. Cit, pp. 60-61.

radical que la anterior. Establece en primer lugar la obligatoriedad de los señores de acreditar con los títulos de adquisición el carácter territorial del señorío, disponiendo que mientras transcurran las diligencias que determinen la naturaleza del señorío los enfiteutas no se verán obligados a pagar prestaciones (aunque se verán obligados a pagar los atrasos en caso de resultar favorable al señor). En segundo lugar, introduce dos innovaciones de gran interés para el ámbito valenciano: reduce la cuantía del luismo a un 2% del precio estipulado en las transmisiones del dominio útil, y suprime la satisfacción de cualquier cantidad por derecho de fadiga, que en lo sucesivo será recíproca para los poseedores de ambos dominios. Además declara la redimibilidad del laudemio así como de todas las prestaciones que deban subsistir en las enfiteusis de señorío, según las disposiciones establecidas en la Real Cédula de 17-I-1805; aunque la redención se prodrá efectuar por terceras partes a voluntad del enfiteuta. Sin embargo, su vigencia sería muy escasa tras la rápida restauración del absolutismo.

La ley de 26-VIII-1837 supuso el restablecimiento de la ley de 1823, aunque las modificaciones introducidas le confirieron un carácter más moderado. La presentación de títulos de acreditación del señorío territorial únicamente por aquellos señores que hubieran disfrutado de la jurisdicción (exceptuando a aquellos que hubieran obtenido sentencia favorable en juicio de incorporación o reversión); la consideración de todos los censos, pensiones, rentas y propiedades situadas en pueblos que no fueron

señorío jurisdiccional, como propiedad particular o la continuación en el pago de prestaciones mientras se promulgase la sentencia en el caso de la presentación de títulos, son algunas de las disposiciones que evidencian este hecho.

En definitiva, las disposiciones abolicionistas, en general, mantendrían el elemento territorial de los antiguos señoríos, aunque con la reducción de la cuantía de algunos derechos de gran importancia en el conjunto de las rentas señoriales (laudemios), y la apertura a los enfiteutas de una vía de acceso a la plena propiedad, a través de la reciprocidad de la fadiga y la redención de censos. Este último proceso propiciaría la desaparición de gran parte de los patrimonios señoriales. Así lo ha documentado Gil Olcina<sup>177</sup>. Sin embargo, en otros muchos casos, el nuevo ambiente antiseñorial creado por el marco sociopolítico y legal existente repercutió gravemente sobre los señoríos, puesto que ante la sistemática negativa de los enfiteutas a pagar las pensiones y a reconocer el dominio directo del señor, éste perdió totalmente su valor, transformándose en un mero gravamen ilusorio y vacío de contenido, al tiempo que el dominio útil del enfiteuta adquiriría toda la relevancia que anteriormente había correspondido al mayor o eminente. De este modo, el enfiteuta se convertía en propietario de hecho antes de serlo de derecho. La gran trascendencia que adquiere en este proceso el Registro de la Propiedad ha sido puesta de manifiesto

---

<sup>177</sup> GIL OLCINA, A. (1979): Op. Cit, pp. 142-147.

por Gil Olcina<sup>178</sup>. Sin duda alguna, la evolución sufrida en el significado de ambos dominios viene determinada por la profunda imbricación existente entre enfiteusis y régimen señorial en el antiguo reino de Valencia, evolución que no pudo ser evitada a pesar de la voluminosa jurisprudencia dictada sobre señoríos<sup>179</sup>. Este proceso ha sido analizado con más detalle en los señoríos de Busot y Aguas. En ambos, además del caso de Agost, se demuestra como, a pesar de que la posesión del elemento territorial no entrañaba ninguna duda (es la exigencia básica en los señoríos de jurisdicción alfonsina), se produce la pérdida del patrimonio señorial establecido enfitéuticamente a raíz de este proceso (el caso de Aguas presentará, sin embargo, bastantes matizaciones).

Al margen de las disposiciones abolicionistas, y con un carácter complementario a las mismas, se ha de prestar atención a otra serie de disposiciones que también incidieron de un modo importante en este proceso. Destaca en este sentido la legislación desvinculadora<sup>180</sup>, que propició no sólo la fragmentación hereditaria de los patrimonios señoriales, sino también la indefensión de los mismos ante los procesos de endeudamiento. De este modo se favorecía el debilitamiento económico de la nobleza y la liquidación de sus dominios

---

<sup>178</sup> GIL OLCINA, A. (1988): "Declive y ocaso ...", pp. 293-318.

<sup>179</sup> MARTINEZ ALCUBILLA, *Diccionario de Administración Española...*, VOZ "Censos" Tomo III, pp. 235-256; y VOZ "Señorios", Tomo XIII, pp. 782-788.

<sup>180</sup> GIL OLCINA, A. (1979): Op. Cit., pp. 130-131.

territoriales. La ley de desvinculaciones, promulgada el 27-IX-1820 - completada por las disposiciones aclaratorias de 15 y 19 de mayo, y 19 de junio de 1821- y restablecida el 30-VIII-1836 (tras ser derogada por la Real Cédula de 11-III-1824), establecía en esencia la supresión de los mayorazgos, prohibiendo nuevas fundaciones de esa clase. Los poseedores de bienes vinculados podían disponer libremente de la mitad de sus bienes, pasando la otra mitad, en concepto de libre, al inmediato sucesor del mayorazgo. En el caso de vinculaciones de elección libre, los poseedores actuales adquirirían la libre disposición de la totalidad de sus bienes. Los títulos honoríficos seguirían el orden sucesorio prescrito, exceptuando los casos de posesión de dos o más Grandezas de España o títulos de Castilla, en los que los titulares tuviesen más de un descendiente, puesto que de darse esta circunstancia podían ser divididos entre éstos, correspondiendo el principal al sucesor inmediato.

La institución del mayorazgo es definida por Clavero como "forma de propiedad vinculada, es decir, de propiedad en la cual su titular dispone de la renta, pero no de los bienes que la producen, se beneficia tan sólo de todo tipo de fruto rendido por un determinado patrimonio sin poder disponer del valor constituido por el mismo; ello lleva, generalmente, a la existencia, como elemento de tal vinculación, de la sustitución sucesoria u orden de sucesión prefijado, cuya forma más inmediata siempre sería la de primogenitura, para esta propiedad de la que no puede disponer, ni siquiera para después de la muerte, su



titular<sup>181</sup>. Sin duda alguna, esta institución tuvo una incidencia fundamental en la conservación de los patrimonios nobiliarios. La desvinculación significaría la entrada en el mercado de un considerable volumen de tierras, contribuyendo de este modo a la modificación de las estructuras de propiedad.

Sin embargo, las diferencias existentes entre el mayorazgo castellano y el valenciano o catalán provocarían a la larga una evolución distinta de los patrimonios sujetos a ellos<sup>182</sup>. En este sentido conviene señalar la distinta incidencia que tendría el empleo de la enfiteusis frente al arrendamiento a corto plazo. El mayorazgo castellano es incompatible con regímenes de tenencia como la enfiteusis o el arrendamiento a largo plazo, carece de legítimas y goza de inconfiscabilidad incluso en delitos exceptuados. El valenciano y el catalán, menos estrictos, junto a la admisión de la enfiteusis, permiten la enajenación en determinadas circunstancias.

En relación a la desintegración de los patrimonios señoriales, Gil Olcina<sup>183</sup>, además de los dos factores ya considerados, incide en otros aspectos como la desvalorización de determinadas rentas, la supresión de los diezmos, las dificultades cada vez mayores para la percepción de las

---

<sup>181</sup> CLAVERO, B.: *Mayorazgo. Propiedad feudal en castilla (1369-1836)*, Siglo XXI, Madrid, 1974, p. 21.

<sup>182</sup> GIL OLCINA, A: "Crisis y transferencia de las propiedades estamental y pública". *La propiedad de la tierra en España*, Alicante, 1981, pp. 19-23.

<sup>183</sup> GIL OLCINA, A. (1979): *Op. Cit.*, pp. 136-142.

prestaciones de carácter enfitéutico, la progresiva falta de vinculación afectiva de la nobleza a su tierras, el endeudamiento y la ruina de las casas nobiliarias, las incertidumbres políticas, la firma de acuerdos o concordias con los antiguos vasallos, la pérdida del significado del dominio directo de la tierra o las circunstancias personales de los titulares de los antiguos señoríos. Algunos de estos procesos tendrán lugar en los señoríos comprendidos en el área de estudio, a pesar de sus pequeñas dimensiones. Ya hemos señalado la incidencia de la pérdida de valor del dominio directo frente al útil en casos como Agost, Aguas o Busot; en Asprillas tendría incidencia la supresión de diezmos, aunque el factor más importante sería la fragmentación hereditaria (también tiene lugar un proceso de ventas a terceros); en Peñacerrada vuelve a ser el factor hereditario el de mayor entidad, aunque también interviene el endeudamiento; esta última causa sería trascendental en la Vallonga, completada con las segregaciones por ventas a terceros o de carácter hereditario; por último en Villafranqueza, la sustitución de las particiones de frutos por una cantidad anual de cuya responsión se responsabilizaba el ayuntamiento, ocasionaría a la larga, y tras la negativa de éste a satisfacer las pensiones, la desaparición de todo tipo de derechos señoriales.

En último lugar queda reseñar la trascendencia que podría haber alcanzado de haberse consolidado la reforma agraria

proyectada por la Ley de Bases de 1932<sup>184</sup>. Esta ley sujetaba a expropiación, entre otras, las fincas de la extinguida Grandeza de España, las que habiendo constituido señoríos jurisdiccionales se hubieran transmitido por herencia, legado o donación o por contrato de venta con la fórmula de a riesgo y ventura; y abolía sin derecho a indemnización todas las prestaciones de origen señorial, aunque estuvieran ratificadas por concordia, laudo o sentencia. Como afirma Gil Olcina, se impondría, de este modo, legalmente la tesis de la abolición conjunta de los elementos territorial y solariego<sup>185</sup>.

Sin embargo, el carácter de expropiación sin indemnización (excepto en casos de probada indigencia), ocasionaría un enmascaramiento de las parcelas de raigambre señorial en el Registro de la Propiedad, al ser declaradas bajo otros conceptos que eludían este hecho<sup>186</sup>. Esta fuente evidencia, por tanto, la situación de los patrimonios señoriales hacia la década de los treinta del siglo XX. Sólo figuran en ella, con una diferente cuantía, los patrimonios radicados en Aguas de Busot, Busot, Asprillas y La Vallonga.

---

184 MALEFAKIS, E.: *Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX*. Siglo XXI, Barcelona, 1972; MAURICE, J.: *La reforma agraria en España en el siglo XX (1900-1936)*. Madrid, 1975.

185 GIL OLCINA, (1979): Op. Cit., pp. 150-162. GIL OLCINA y CANALES MARTINEZ (1988): Op. Cit., pp. 155-162.

186 Ibidem, p. 150-151.

Por último restaría mencionar algunos de los hechos más significativos en relación a la constitución y evolución de los diferentes señoríos considerados.

La noticia más antigua correspondiente al señorío de Agost es la venta del castillo y término de Agost efectuada a favor de D. Jaime Burgunyo en 1320 por el baile general del Reino de Valencia en nombre del rey Jaime II. La adquisición del elemento territorial fue previa, incluso, a la promulgación del fuero alfonsino en 1329. La carta puebla del lugar, poblado por moros y cristianos, fue otorgada en 1482 por D. Juan Puig de Vallebrera. Cabe suponer que la obtención de la jurisdicción alfonsina fuera, por tanto, anterior al siglo XVI. En manos sucesivamente de los Burgunyo, Vallebrera, Pallás, Pascual de la Verónica y Frígola, sería durante la posesión de esta última familia cuando tendría lugar el desmantelamiento del antiguo patrimonio señorial, a través del acceso a la plena propiedad del campesinado enfiteuta, por lo que respecta a los bienes establecidos, y de la enajenación a terceros del patrimonio subsistente tras la consolidación de la abolición del régimen señorial.

En el caso del señorío de Busot no hemos podido localizar la carta de población; sin embargo, se tiene constancia de su existencia, como mínimo en cuanto a la base territorial, con anterioridad a 1423, momento en que tuvo lugar la venta del mismo por las herederas de Bonafonat de Vallebrera a favor de Pedro Fernández de Mesa. Aunque en este documento no se precisa de forma clara el tipo de jurisdicción ejercida, en testimonios

posteriores se alude a la jurisdicción alfonsina, cuya posesión es remitida al siglo XV, e incluso a fechas anteriores. Después de un importante lapso de tiempo bajo la posesión de los Martínez de Vera, pasaría posteriormente a ser propiedad de otras casas nobiliarias alicantinas como los Bosch, Pascual de Ibarra, Canicia y Rojas. En manos de esta última todavía se mantienen los escasos restos del antiguo patrimonio señorial -mayoritariamente establecido en enfiteutisis- conservado, tras la espectacular incidencia de las disposiciones abolicionistas y la generalización del rechazo de los enfiteutas a reconocer y satisfacer los derechos derivados del dominio directo.

La Sarga se configura como el primer señorío creado en la comarca tras la reposición del fuero alfonsino. El 14-III-1774 D. Rafael Descals de la Escala otorgaba una carta puebla para la fundación de un nuevo lugar, a través del establecimiento a censo enfiteútico de 15 vecinos en una finca de su posesión, de 81 hectáreas de cabida y radicada en los términos de Jijona y Alcoy. Además de las particiones de frutos (generalmente al tercio, aunque en el caso de granos y legumbres se estipulan en 2/7 de la producción total) impuestas como censo enfiteútico, se precisan las medidas tendentes a garantizar los derechos del dominio directo, la constitución del gobierno municipal o el control de los monopolios señoriales, entre otros aspectos. Dada la pérdida del valor político de los señoríos a finales del siglo XVIII, esta iniciativa debe contemplarse únicamente desde la perspectiva de la promoción social de sus dueños, puesto que desde el punto

de vista económico pocas ventajas podrían reportar al titular del señorío las nuevas condiciones establecidas, más generosas que las impuestas en otras tierras de su propiedad<sup>187</sup>.

Peñacerrada, fundado con posterioridad a 1780, ha permanecido hasta la actualidad en manos de la familia Pascual de Riquelme. Segregado del término de Muchamiel volvió a integrarse en el mismo a finales de la década de los cuarenta del siglo XIX. Se caracteriza por ser el único señorío en el que no se llegó a implantar la enfiteusis, recurriéndose desde un primer momento al arrendamiento y a la explotación directa como regímenes de tenencia. Las disposiciones abolicionistas no adquirieron por tanto ninguna trascendencia, aunque no parece ser éste el caso de las divisiones hereditarias y las ventas motivadas por el endeudamiento, que se constituyen, con toda probabilidad, en las responsables de la desintegración de gran parte de ese patrimonio, inferior actualmente a las 2,5 hectáreas.

El señorío de La Vallonga de Burgunyo se crea en las proximidades de la ciudad de Alicante (en las partidas de La Vallonga y las Atalayas) tras el otorgamiento en 1779 de dos escrituras fundacionales por D. Pedro Burgunyo y Juan, por las que establecía un total de 19 suertes a un número igual de enfiteutas, solicitando poco después la concesión de la jurisdicción alfonsina. Además de la enfiteusis, y al margen de

---

<sup>187</sup> PLA ALBEROLA, P.: "Recolonización interior y expansión del régimen señorial. La carta puebla de la Sarga de 1774". *Estructuras y regímenes de tenencia en España*. MAPA, Madrid, 1987, pp. 117-128.

una considerable extensión de tierras no cultivadas, son el arrendamiento y la aparcería las formas de tenencia empleadas para la puesta en explotación de una heredad superior a las 700 hectáreas. Este hecho unido al proceso de consolidación de dominios de la tierra anteriormente establecida, desarrollado con anterioridad a la abolición del régimen señorial, permitió la íntegra conservación del antiguo patrimonio señorial en manos de los descendientes del fundador, hasta su venta en 1862 a un destacado miembro de la burguesía alicantina, D. Juan Bta. Lafora Caturla. En 1896, por razones de índole económica, fue transferida esta gran propiedad a D. Luis Navarro de Mira, miembro de una adinerada familia noveldense, en cuyo seno se ha mantenido en su mayor parte hasta la actualidad.

Mención aparte merece el señorío de Villafranqueza. Constituido en los últimos años del siglo XVI como señorío de jurisdicción alfonsina, pasa su titular a ejercer la jurisdicción suprema a partir de 1604. En 1952 D. Pedro Franqueza adquirió dos heredades (Palamó y Orgegía) con la intención de establecer en ellas el número suficiente de colonos para obtener la mentada jurisdicción. Seis años más tarde era reconocido por la Real Audiencia el asentamiento de 29 casas de cristianos viejos, y, por tanto, otorgadas las competencias judiciales solicitadas, siendo amojonado el término en 1601. Sin embargo, como apunta Alberola Romá<sup>188</sup>, en 1604 lograba la suprema jurisdicción a

---

<sup>188</sup> ALBEROLA ROMA, A.: *Jurisdicción y Propiedad de la tierra en Alicante (ss. XVII y XVIII)*. Ayuntamiento-Universidad Alicante, Alicante, 1984, pp. 453-459.

través de un fórmula especial ligada al cargo honorífico de Portanveus de General Gobernador "d'ellà Sexona", es decir "in officium".

Iborra Lerma, siguiendo a Matheu, recoge esta modalidad que permite a los señores alfonsinos acceder al mero imperio, denominándola a "título gubernatorio" ("in officium"), que "equivale a crear un oficial real, lo cual pertenece al rey, quien puede ampliar los términos de la concesión, hasta convertirla en sucesoria" (como de hecho ocurriría en este señorío)<sup>189</sup>. El proceso de desaparición del elemento solariego establecido (predominante en el señorío) tendría lugar durante la segunda mitad del siglo XIX, tras producirse, en 1847, la sustitución de las prestaciones mantenidas durante más de tres siglos (particiones de frutos y censos en dinero) por una cantidad anual en metálico, cuyo pago debía ser satisfecho por el ayuntamiento en nombre de los vecinos y terratenientes. Las protestas señoriales (elevadas ante la Real Audiencia en 1892) causadas por la negativa del ayuntamiento, desde 1873, a efectuar el desembolso acordado no obtuvieron los resultados apetecidos, pues tanto el dictamen de la Real Audiencia (1893) como el del Tribunal Supremo (1895) fueron favorables al municipio. A partir de este momento ya no sería reconocido ningún tipo de derechos señoriales en Villafranqueza.

---

<sup>189</sup> IBORRA LERMA, J.M. (1981): Op. Cit., pp. 213-215.



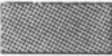







Respecto a Aguas de Busot, es esencial hacer constancia de la carencia de elemento jurisdiccional, hecho que permitirá una evolución diferenciada a la de Busot, a pesar de darse en ambas un mismo tipo de circunstancias, puesto que en este caso se posibilitaría la consolidación de dominios en manos del titular del directo a partir del empleo de la fadiga (en escasas ocasiones), la ejecución por deudas o la condonación de derechos de carácter señorial. Adquirido por los Martinez de Vera en vísperas de la expulsión de los moriscos, presenta como forma de tenencia predominante la enfiteusis. En este sentido es importante señalar su utilización todavía a mediados de siglo XIX, aunque ligada a la puesta en cultivo de áreas marginales de carácter montañoso. Tanto en este caso como en el de Busot, la actitud de los sucesores de los antiguos señores en relación a las condiciones de transmisión de la propiedad a sus descendientes, ha permitido la conservación casi íntegra en la actualidad de los restos del patrimonio subsistente a finales del siglo XIX.

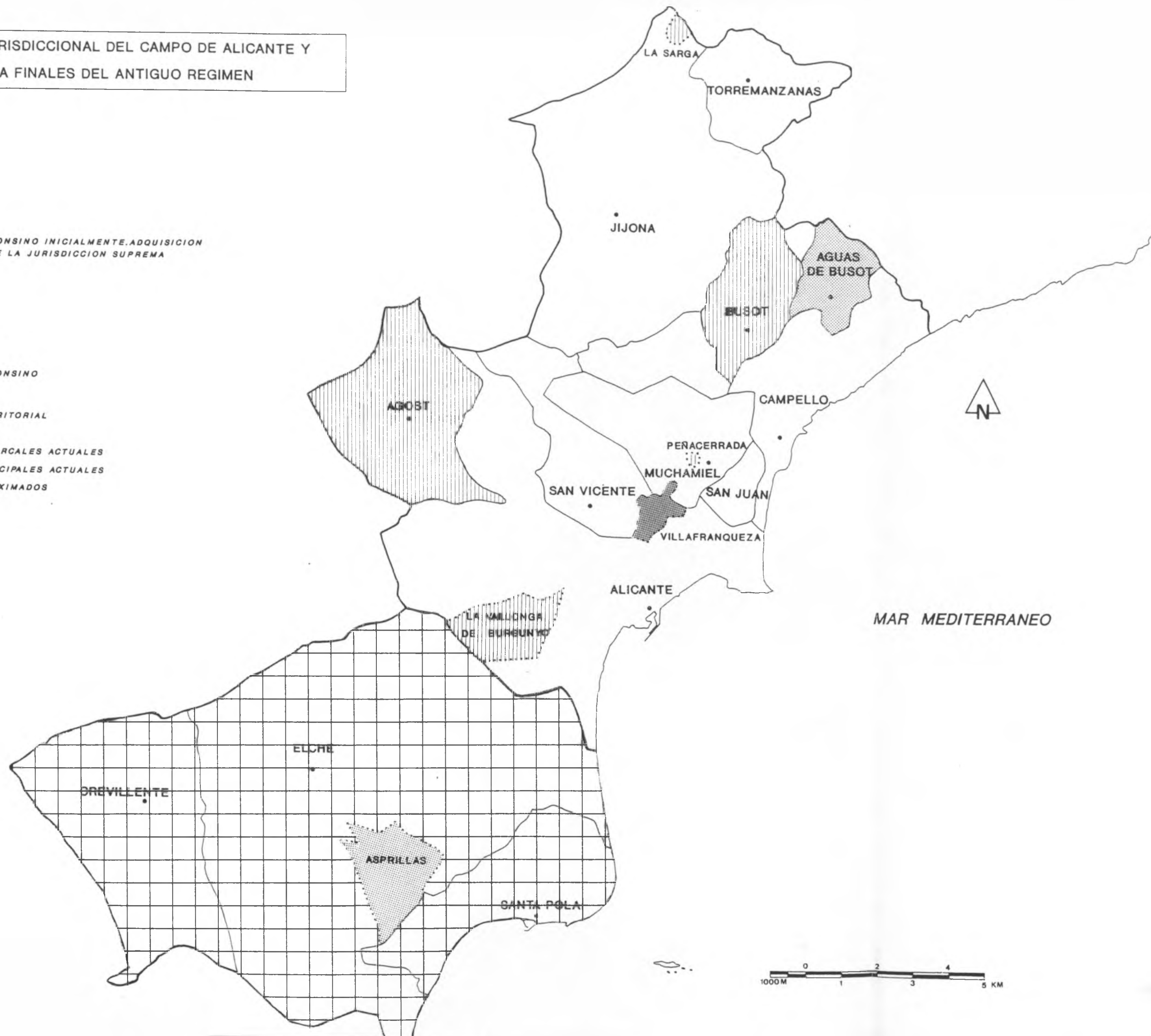
No podemos afirmar el carácter jurisdiccional del señorío de Asprillas, aunque sí señalar la percepción por el titular del tercio-diezmo. Por otra parte, caracteriza a este señorío la sustitución de la enfiteusis por el arrendamiento como forma de tenencia, a la vez que el desarrollo, durante el siglo XIX, de una activa política de compra de tierras, que permitirá incrementar la antigua base territorial. Posteriormente reviste una cierta incidencia la fragmentación por razones de herencia.

Finalmente, resta señalar, que se ha prescindido del análisis de Torrellano, al verificarse que no constituía un enclave señorial, sino una gran finca propiedad de los condes de Torrellano. Este título nobiliario, otorgado por el pretendiente austríaco a la corona española, fue confirmado por Real Cédula de 11-V-1728.

ADSCRIPCION JURISDICCIONAL DEL CAMPO DE ALICANTE Y  
BAJO VINALOPO A FINALES DEL ANTIGUO REGIMEN

LEYENDA

-  SEÑORIO ALFONSINO INICIALMENTE. ADQUISICION POSTERIOR DE LA JURISDICCION SUPREMA
-  REALENGO
-  MARQUESADO
-  SEÑORIO ALFONSINO
-  SEÑORIO TERRITORIAL
-  LIMITES COMARCALES ACTUALES
-  LIMITES MUNICIPALES ACTUALES
-  LIMITES APROXIMADOS



PERIODO DE CONSTITUCION DE LOS SEÑORIOS ALFONSINOS Y SOLARIEGOS DEL CAMPO DE ALICANTE Y BAJO VINALOPO

LEYENDA

- ANTERIORES AL XVI
- FINALES DEL XVI
- SIGLO XVII
- ULTIMO TERCIO DEL SIGLO XVIII
- LIMITES COMARCALES ACTUALES
- LIMITES MUNICIPALES ACTUALES
- LIMITES APROXIMADOS









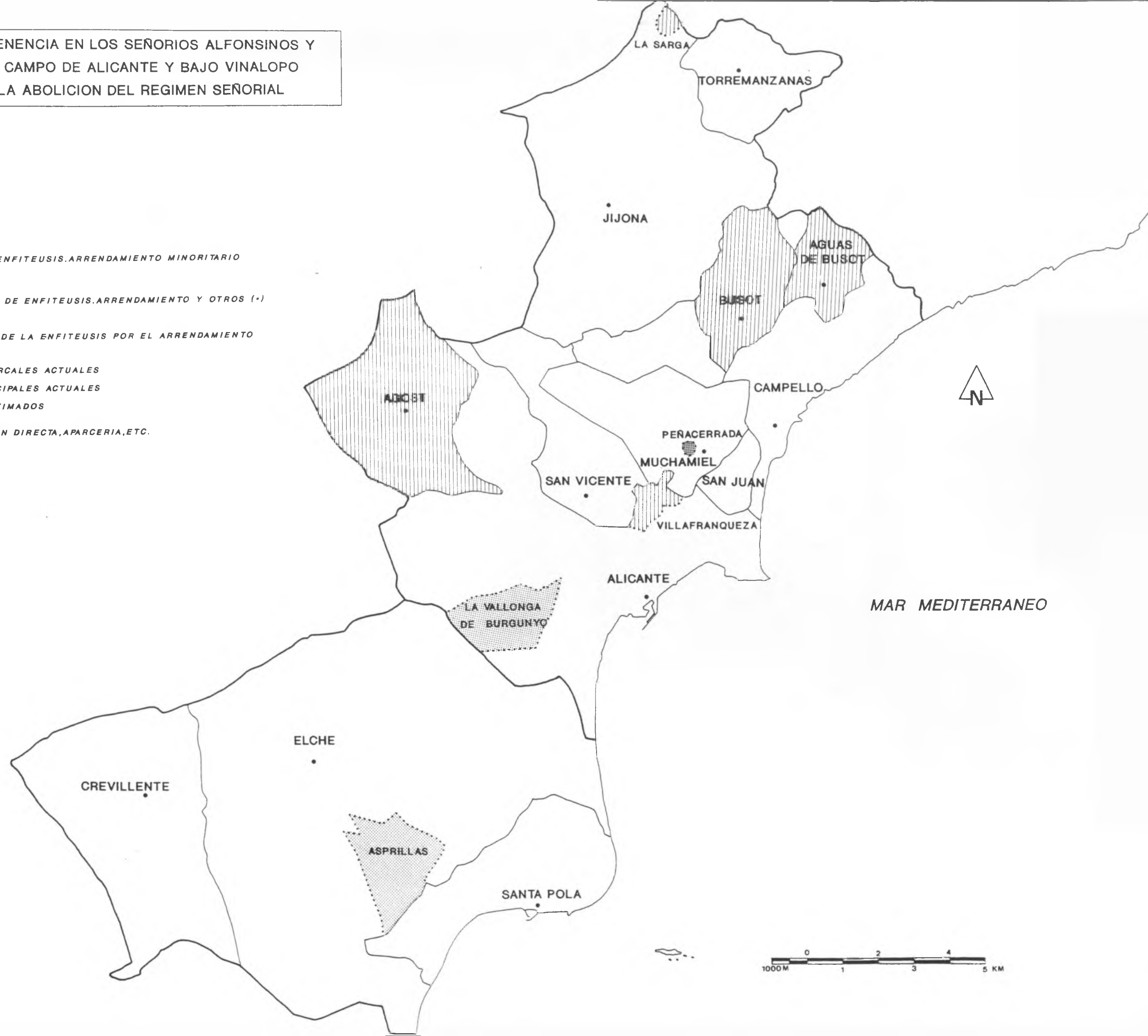
#### CAPÍTULO 4

BUSOT Y AGUAS. JURISDICCIÓN SEÑORIAL Y SEÑORÍO SOLARIEGO.  
EXTINCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO TERRITORIAL ESTA-  
BLECIDO ENFITÉUTICAMENTE.

REGIMENES DE TENENCIA EN LOS SEÑORIOS ALFONSINOS Y SOLARIEGOS DEL CAMPO DE ALICANTE Y BAJO VINALOPO EN VISPERAS DE LA ABOLICION DEL REGIMEN SEÑORIAL

LEYENDA

-  *PREDOMINIO ENFITEUSIS. ARRENDAMIENTO MINORITARIO*
-  *INEXISTENCIA DE ENFITEUSIS. ARRENDAMIENTO Y OTROS (\*)*
-  *SUSTITUCION DE LA ENFITEUSIS POR EL ARRENDAMIENTO Y OTROS (\*)*
-  *LIMITES COMARCALES ACTUALES*
-  *LIMITES MUNICIPALES ACTUALES*
-  *LIMITES APROXIMADOS*
- (\*) EXPLOTACION DIRECTA, APARCERIA, ETC.*



GRADO DE CONSERVACION DE LOS PATRIMONIOS DE ORIGEN SEÑORIAL (DE CARACTER ALFONSINO O SOLARIEGO) EN EL CAMPO DE ALICANTE Y BAJO VINALOPO EN LA ACTUALIDAD

LEYENDA



EXTINCION TOTAL



PROPIEDAD DE ORIGEN SEÑORIAL MUY ESCASA



CONSERVACION DE UNA PARTE IMPORTANTE DEL PATRIMONIO



SIN DATOS



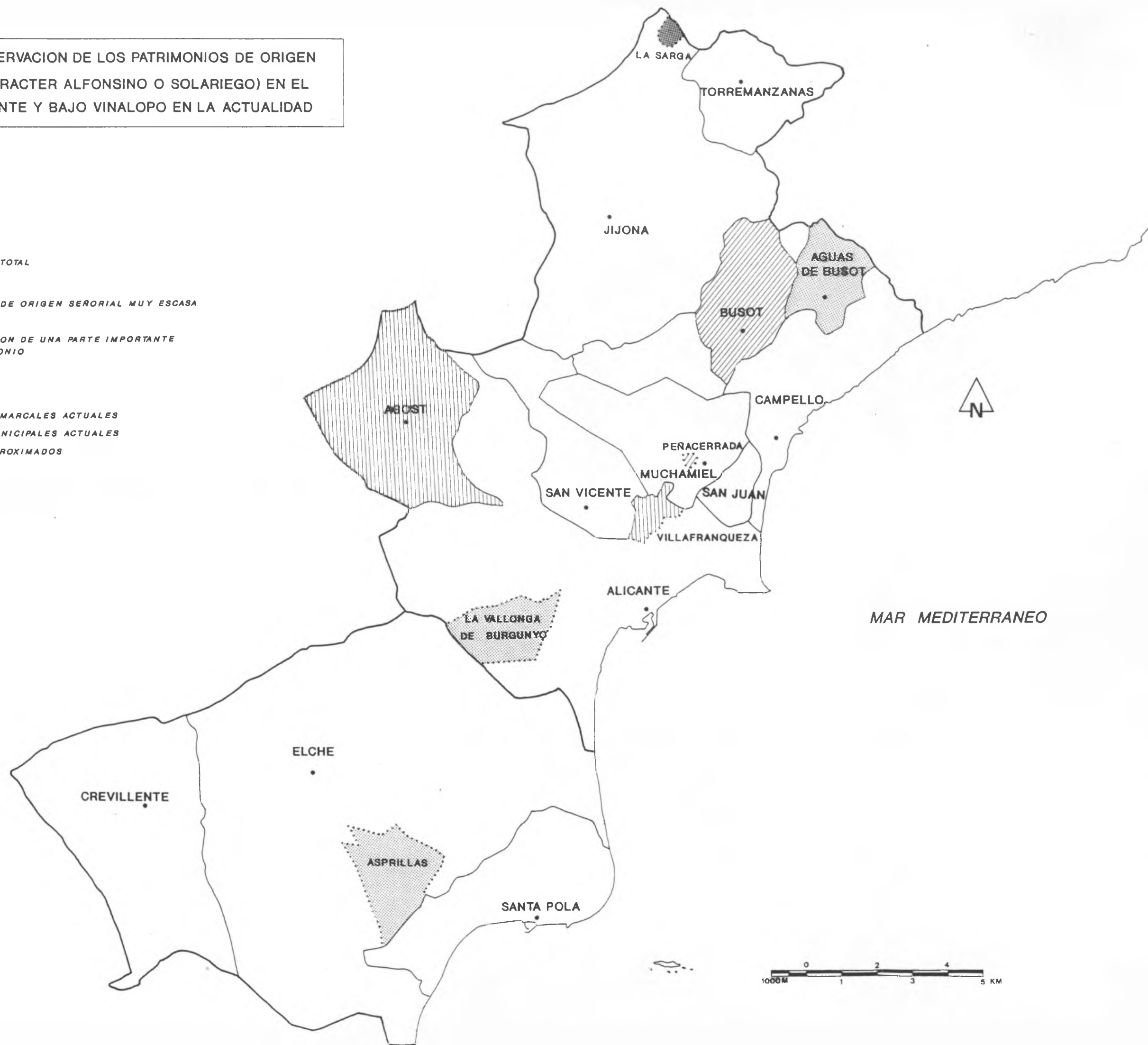
LIMITES COMARCALES ACTUALES



LIMITES MUNICIPALES ACTUALES


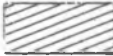
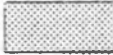






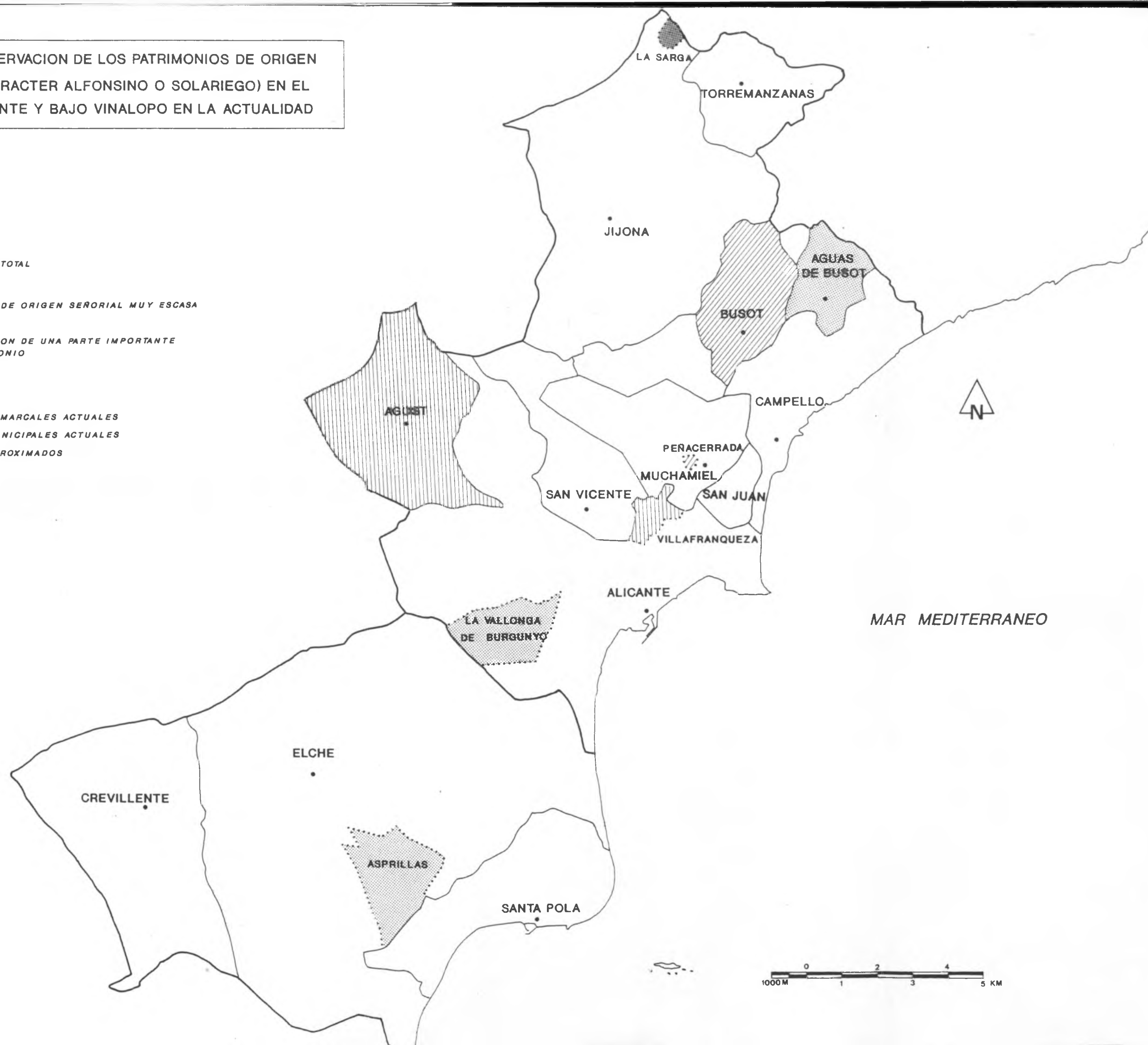
LIMITES APROXIMADOS



GRADO DE CONSERVACION DE LOS PATRIMONIOS DE ORIGEN SEÑORIAL (DE CARACTER ALFONSINO O SOLARIEGO) EN EL CAMPO DE ALICANTE Y BAJO VINALOPO EN LA ACTUALIDAD

LEYENDA

-  EXTINCION TOTAL
-  PROPIEDAD DE ORIGEN SEÑORIAL MUY ESCASA
-  CONSERVACION DE UNA PARTE IMPORTANTE DEL PATRIMONIO
-  SIN DATOS
-  LIMITES COMARCALES ACTUALES
-  LIMITES MUNICIPALES ACTUALES
-  LIMITES APROXIMADOS





#### CAPITULO 4

#### BUSOT Y AGUAS. JURISDICCION ALFONSINA Y SEÑORIO SOLARIEGO: EXTINCION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO TERRITORIAL ESTABLECIDO ENFITEUTICAMENTE.

Busot es otro de los señoríos que, creados al amparo del privilegio alfonsino promulgado por Alfonso II en 1329, surgen en torno al núcleo realengo constituido por la ciudad de Alicante. Su actual término municipal, con una extensión superficial de 3.350 ha., se encuentra situado en el sector septentrional del Campo de Alicante, en un valle ceñido al norte por las estribaciones meridionales del Cabeçó d'Or y La Gralla, y por el sur y sureste por el conjunto formado por las sierras de Bonalba, Ballestera y las Lomas de Gigi.

Junto con Agost, se constituye en el señorío alfonsino de más temprana fundación entre los detectados en la comarca, integrados todos ellos en el antiguo término general de la ciudad de Alicante; pues mientras Villafranqueza es creado a finales del s. XVI (como señorío alfonsino, aunque posteriormente, desde 1604,

su titular ejerciera la jurisdicción suprema o baronal)<sup>1</sup>, también con anterioridad al extrañamiento de los moriscos, La Vallonga de Burgunyo y Peñacerrada no surgen hasta finales del siglo XVIII, tras la reposición del Fuero Alfonsino por Carlos III con la Real Provisión de 16-V-1772<sup>2</sup>.

La evolución de este señorío tras la abolición del régimen señorial, y, concretamente, por lo que se refiere al elemento solariego, es similar a la que experimentan los señoríos de Agost y Villafranqueza (aunque condicionada en cada uno de ellos por circunstancias peculiares); marcada en los tres casos por el recurso a la enfiteusis como régimen de tenencia predominante, y la temprana negativa de los enfiteutas a reconocer los derechos del dominio directo, en manos de los titulares de los señoríos, sobre las tierras censidas, principalmente en lo que atañe al pago de prestaciones, tanto particiones de frutos y censos en metálico, como al resto de derechos enfiteúuticos.

En estos tres señoríos tendrá lugar la pérdida del patrimonio territorial que los titulares solamente poseían en cuanto al dominio directo, produciéndose el acceso a la plena propiedad de la tierra por los enfiteutas. Este proceso, en cuyos inicios el enfiteuta se constituye como el propietario de hecho

-----

<sup>1</sup> ALBEROLA ROMA, A: *Jurisdicción y propiedad de la tierra en Alicante (ss. XVII y XVIII)*, Ayuntamiento-Universidad de Alicante, Alicante, 1984, pp. 455-459).

<sup>2</sup> Real Provisión, en que nuevamente se confirma la subsistencia del Fuero del Sr. Rey D. Alfonso del año de mil trescientos veinte y ocho, concedido á los Vassallos que formassen Lugares. Madrid, 16-V-1772. Impreso, 4 págs.

de la tierra, se legaliza, en el caso de Busot, sin mediar la redención de los censos enfiteúticos, con su inscripción en el Registro de la Propiedad.

La trayectoria de este señorío, unida a la de Aguas de Busot (Aguas Altas) durante mucho tiempo, tanto por su proximidad geográfica y las características de su entorno físico como por su pertenencia a unos mismos titulares desde el siglo XVII, presentará, sin embargo, una diferencia fundamental en lo referente a la proporción del patrimonio rústico señorial que se llega a conservar en ambos señoríos a tenor de la coyuntura sociopolítica y el nuevo marco legislativo instaurados en el siglo XIX.

Las raíces de esta diferenciación se encuentran tanto en la naturaleza de las competencias jurisdiccionales ejercidas por los titulares (jurisdicción alfonsina en Busot, mientras en Aguas era la ciudad de Alicante la que ostentaba el poder jurisdiccional), que incidiría, en el caso de Busot, en una cierta identificación entre elemento jurisdiccional y elemento solariego, como en la decidida política de adquisición del dominio útil de las tierras establecidas llevada a cabo en Aguas durante el s. XIX, fundamentada, en algunos casos, en el ejercicio del derecho de fadiga (recurriendo incluso al retracto) y el endeudamiento del campesinado enfiteuta.

## A.- EL SEÑORIO DE BUSOT

### 1.-El señorío de Busot hasta la crisis del Antiguo Régimen.

#### 1.1.-Las aportaciones de cronistas y autores contemporáneos. Los titulares del señorío.

A pesar de la escasa importancia de la información contenida en las fuentes bibliográficas contemporáneas y su evidente parcialidad, unidas a la omisión de aspectos importantes (como los referentes a las características jurisdiccionales, regímenes de tenencia y propiedad de la tierra, o situación socioeconómica de los pobladores) al orientarse especialmente hacia el estudio de la ciudad de Alicante, en el caso de las fuentes con un carácter más local, y a la repetición de los datos aportados por los cronistas más antiguos, no puede descartarse totalmente su consulta. Junto a algunos datos de evidente interés, que por otra parte, no hacen sino confirmar los resultados obtenidos del análisis de otras fuentes documentales, se refleja la actitud favorable al mantenimiento de las competencias jurisdiccionales y la extensión superficial de la ciudad de Alicante. En este sentido, la mayor parte de los autores, sobre todo los historiadores locales, destacan la inclusión en el término general de la ciudad de Alicante no sólo

del pueblo de Busot, sino también de otros términos, tanto de señorío (Agost, Villafranqueza) como de realengo (Muchamiel, San Juan, Benimagrell, Monforte, ...).

La cuantía de la población residente en Busot, las discusiones en torno al significado y origen de la denominación del lugar, la mención de alguna de las principales actividades económicas, o la identidad de los titulares del señorío son, además de su pertenencia al término general de Alicante, el tipo de referencias más frecuentes.

*Martín de Viciana*, cuya obra fue publicada entre 1564 y 1566, señala al pueblo de Busot junto con su castillo como de la pertenencia de Mosen Pedro Juan Martínez de Vera, a la vez que integrado en los términos generales de Alicante, y sobre el que la referida ciudad ejerce jurisdicción en el crimen<sup>3</sup>. La única mención de la jurisdicción en materia criminal correspondiente a la ciudad de Alicante, podría permitir deducir unas ciertas competencias jurisdiccionales de los titulares de los señoríos.

-----

<sup>3</sup> "Los terminos de Alicante son contornados por la mar, y por los terminos de Elche, Aspe, Novelda, Elda, Castalla, Jijona, Villajoyosa, dentro de los cuales terminos generales tiene estos pueblos siguientes. (...) Agost con su castillo es de mossen Luys Joan Vallebrera caballero, Busot con su castillo es de mossen Pedro Joan Martinez de Vera, caballero. En estos dos lugares tiene la ciudad jurisdicción en el crimen (...)" *MARTINEZ MORELLA, V.: Alicante en la "Chronica de la inclita y coronada ciudad de Valencia y sus reynos" de Martín de Viciana.* publicaciones del Fondo Editorial del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, Alicante, 1970, pp. 40-41.

Gaspar Escolano únicamente añade a lo ya expuesto por Viciana la procedencia del titular del señorío, un Martinez de Vera "que tiene su solar conocido en Navarra", el número de casas existentes en el poblado, y algunas opiniones sobre la etimología de su denominación, de origen árabe<sup>4</sup>.

Las noticias que proporciona Bendicho siguen la tónica anteriormente señalada (pueblo de 80 casas enclavado en el término general de Alicante, según el privilegio promulgado por Alfonso X el sabio en Murcia el 29 de agosto, "en Era 1290 que son 1252"; la antigüedad del lugar, denominado Bosot anteriormente), y las únicas novedades son la pertenencia a "los caballeros Vallebreras, con anterioridad a los Martinez de Vera, descendientes, según dicen, de la Casa Real de Navarra", y la existencia del trabajo del vidrio como actividad económica distinta a la agraria<sup>5</sup>.

-----  
<sup>4</sup> "El nombre de Busot tiene Ochenta, y castillo. Es nombre Aravigo, que baxa de la palabra BeSat, y significa cosa estendida: de donde llaman los Africanos, BeSat a la alfombra: y por ventura se la dieron a este pueblo, aludiendo a la forma de su sitio. Otras afirman que su nombre verdadero, y no corrompido, era BiSant; que en Aravigo, es lo mesmo que dezir, en el bosque, o lugar puesto en el bosque: y que de BiSant paso en BiSot, y finalmente en BuSot. (...)" ESCOLANO, G.: *Décadas de la Historia de Valencia*. Edición facsimil a cargo del Departamento de Historia Moderna, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Valencia. Valencia, 1972, Tomo IV, Libro VI, col. 71 y 78.

<sup>5</sup> BENDICHO, V.: *Crónica de la muy ilustre, noble y leal Ciudad de Alicante*. Acabada en la misma ciudad el año del señor 1640. Resumida y anotada por D. F. FIGUERAS PACHECO. Instituto de Estudios Alicantinos, Diputación Provincial de Alicante, 1960, pp. 84 y 89.

Las novedades aportadas por los padres jesuitas Maltés y López se limitan a alguna matización sobre la actividad económica del señorío (ciertos sectores de huerta gracias al aprovechamiento de algunas fuentes del término, trabajo del esparto), el vecindario del mismo<sup>6</sup>, y el papel de la familia titular del señorío en el gobierno y administración de la ciudad de Alicante<sup>7</sup>. No se hace, en cambio, ninguna mención a la adscripción jurisdiccional del municipio, señalándose únicamente su pertenencia al término general de Alicante.

Aunque este lugar está incluido en diversos índices y relaciones de las entidades de población existentes en el reino de Valencia (la mayoría con una finalidad fiscal), son muy pocos los datos que este tipo de fuentes proporcionan, a pesar de su interés.

Aparece ya recogido en el *Index de les Ciutats, Viles, y*

-----  
<sup>6</sup> " (...) Busot, que está sito en el parage, bolviendo de Aguas á Alicante á la parte de Poniente del Monte llamado Cabezó, á cuya falda esta situado el Lugar antes llamado Bosot: distante cerca de tres leguas de la Ciudad. Es Poblacion mui antigua con fuerte Castillo, y 140 Casas. Riegase su huerta con las Aguas de algunas fuentes de buena calidad, que nacen en su termino. Abunda en caza. Sus vecinos hacen mucha grangeria con el Esparto que cogen." MALTES, J.B. y LOPEZ, L.: *Ilice Ilustrada (Historia de las Antigüedades, grandezas y prerrogativas de la muy noble y siempre leal Ciudad de Alicante)*., que escribió el P. D. J.B. Maltés (...) y aumentó, la completó y puso en orden, y estilo, el P. L. López de la misma Compañía. Collegi Societatis Alonensis, Alicante, 1907, p.174.

<sup>7</sup> "(...) La Fuente más insigne de todas (de la Huerta hacia poniente), es la que llamamos del Baile, porque era de los Señores de Busot que eran los Bailes en esta Ciudad, y oy es de los Martinez de Vera". Ibidem, p. 151.

*demes Universitats del Regne de Valencia* (...) del año 1646<sup>8</sup>, aunque no se indique siquiera el número de casas existentes en él. Sin embargo, otra relación del s. XVII, analizada por Camarena Mahiques<sup>9</sup> nos refleja la existencia de un grupo de propietarios foráneos (sin indicar si son enfiteutas o no, y si la propiedad se halla en arrendamiento o bajo explotación directa -aspecto que si viene aclarado para otros lugares-) que acumula un 6,04% del valor de las propiedades del término (sin especificar tampoco si se trata de bienes raíces o censos) frente al 93,96% acumulado por los vecinos. Asimismo, revela la existencia de un grupo importante de jornaleros, "arrendadores", medieros y trabajadores al tercio<sup>10</sup>, cuyas rentas suponen el 19,13% de las rentas netas totales del término, frente al 80,87%

-----

<sup>8</sup> *Index deles Ciutats, Viles y demes Universitats del Regne de Valencia; y de les Casses que te Cascuna, Conforme les Certificatories autentiques, Remeses, per les Justisies, y Jurats de aquelles, Cascuna dels quals Certificatories esta senyalada en son Original ab lo numero questrobava en lo present Index.* ARV, VARIA, Caja n.º 5, n.º 26, Año 1646.

<sup>9</sup> CAMARENA MAHIQUES, J.: *Padrón demográfico-económico del reino de Valencia. ¿1735?.* Estudios y materiales para la Historia de Valencia. Seminarios de Historia Moderna y Contemporánea, Universidad de Valencia, Valencia, 1966, 88 pp. El original se encuentra en el A.R.V., VARIA, Libro 883 ("Relación de los vecinos que contienen las Ciudades, Villas y Lugares del Reyno de Valencia; el valor principal de sus haciendas e raíces y Censos; el Producto que cultivadas de su Cuenta, ó arrendadas dan annualmente, con expresión de las cargas de Justicia, que responden, como son Censos particulares impuestos sobre ellas, Aniversarios, Derecho de Emphiteusis, y señorío a que estan sugetas, Pecha, que los Alcaldes reparten a los Individuos para el cumplimiento delas obligaciones que responden los Comunes (...) (entiendase este gravamen, ó carga, sin la particion de todos los frutos, que hacen los Vecinos de los Lugares con los Señores ...) ...").

<sup>10</sup> *Relación de los vecinos que contienen las Ciudades, Villas, y Lugares del Reyno de Valencia, el valor principal ...*, pp. 110 vto.-111.



de los "propietarios", tanto vecinos (74,71%) como residentes fuera del municipio (6,16%). Pone de manifiesto, además, la posesión de propios y arbitrios por el común (lo que no suele darse en todos los términos de señorío -como ocurre en Villafranqueza-), aunque insuficientes para hacer frente a las cargas de Justicia<sup>11</sup>.

En el *Estado general por orden alfabético de los pueblos de que se compone el Reyno de Valencia, divididos en sus trece gobernaciones, o partidos ...*<sup>12</sup>, del año 1776, se establece su pertenencia, como Dueño Territorial, a D. Luis Canicia; la cuantía de su vecindario (225 vecinos, excluidos los pertenecientes al estado eclesiástico), y la porción del equivalente que les corresponde pagar.

Por lo que respecta a la *Noticia de la actual población del Reyno de Valencia...* de V.I. Franco<sup>13</sup>, Busot, inexplicablemente, no aparece mencionado, aunque si Aguas -Aygües- (que no había sido recogido en ninguna de las relaciones comentadas), bajo el dominio directo de D. N. Canicia; resultado tal vez de una sustitución errónea entre ambos lugares.

-----  
<sup>11</sup> Aunque no se debe olvidar la falta de veracidad, las posibles ocultaciones o imprecisiones de este tipo de documentación, no cabe duda que sí son útiles, desde el punto de vista cualitativo, para poner de manifiesto una serie de aspectos como los arriba mencionados.

<sup>12</sup> A.R.V.: MAPAS y PLANOS, n.º 291.

<sup>13</sup> FRANCO, V.I.: *Noticia de la actual población del Reyno de Valencia: la de sus despoblados desde la Conquista por el Rey D. Jayme Primero: las leguas que distan de la Capital: los Señoríos directos que los poseen: y las Diócesis á que pertenecen*. Copia Facsimil, Valencia, 1979.

Por otra parte, siguiendo la línea anteriormente interrumpida, no se puede evitar mencionar la falta de referencias, acerca de los aspectos jurisdiccionales y los derechos del dominio directo del señorío de Busot, en una obra de tanta trascendencia como las *Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, ...*, de Cavanilles.

Dadas las numerosas y atinadas consideraciones de este autor sobre el régimen señorial valenciano, resulta extraña la falta de alusiones al Privilegio Alfonsino, así como la inexistencia de detalles vinculados a este sistema y a las relaciones que en él se establecen, en las observaciones que realiza sobre pequeños señoríos con este origen; que, en el caso de Busot, se limitan a una serie de aspectos como la cuantía poblacional (326 familias en esos momentos, 80 en tiempo de moriscos) y las principales producciones obtenidas, tanto agrícolas (algarrobos, almendros, cereales, vino, higos, esparto, barrilla, miel, cáñamo) como industriales (vidrio)<sup>14</sup>.

Gil Olcina afirma que Cavanilles debía conocer el restablecimiento del Fuero Alfonsino, así como el proyecto de Franco para asentar un mínimo de 1.500 familias, en el que se recurría a la concesión de la jurisdicción alfonsina como incentivo para la fundación de una serie de nuevos lugares. Este autor considera que el silencio en este asunto es intencionado,

-----

<sup>14</sup> CAVANILLES, A.J.: *Observaciones sobre la Historia natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia*. Madrid, en la Imprenta Real, 1797. Reimp. Facsimilar, Valencia, 1972, II, p.246.

con toda probabilidad descalificador, y que está estrechamente ligado a dos condiciones reprobadas por Cavanilles: la concesión de regalías a los titulares de estos señoríos, y el hecho de que las superficies entregadas a partición y pechos fuesen con frecuencia tierras por roturar<sup>15</sup>.

Madoz, quien en numerosas ocasiones sigue a Cavanilles, tampoco menciona ningún detalle relativo a la antigua naturaleza señorial de la población; y la única alusión a su, todavía, dueño territorial, es la posesión en que se hallaba de los Baños de Busot (que Madoz ubica en este término, a pesar de ser incluidos por la mayoría de los autores en el de Aguas) el Conde de Casa Rojas. Sus noticias reflejan el predominio de las producciones agrícolas de secano (cereales, vino, esparto, almendros y algarrobos) a pesar de la presencia de algunas zonas de huerta (frutas y hortalizas), la existencia de ganado vacuno y lanar y de caza menor, y el desarrollo de actividades orientadas a la producción de vidrio, tejas y espartería; además de apuntar la gran extensión de las roturaciones por el término<sup>16</sup>.

Viravens mantiene la tónica de los cronistas anteriores, mencionando únicamente el papel desempeñado por Pedro Martínez de Vera, Señor de Busot, en el pago de las deudas

-----  
<sup>15</sup> GIL OLCINA, A.: "Los ilustrados y el régimen señorial valenciano". *La Ilustración Española*. Actas del Coloquio Internacional celebrado en Alicante del 1 al 4 de octubre de 1985. Ed. A. Alberola y E. La Parra, Instituto Juan Gil-Albert, Diputación Provincial de Alicante, pp. 409-415.

<sup>16</sup> MADOZ, P.: *Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar*. Madrid, 1845,

contraídas en Orihuela, para costear la conquista de Granada, por Fernando el Católico, y la consiguiente recuperación de las alhajas reales allí empeñadas<sup>17</sup>.

Por último, las noticias relativas al señorío de Busot proporcionadas por *Figueras Pacheco*, quien recoge las opiniones de cronistas e historiadores anteriores (Escolano, Viravens, ...), carecen de importancia<sup>18</sup>. Tal vez extienda a Busot la tesis que mantiene sobre la inexistencia de competencias señoriales en materia de jurisdicción en Villafranqueza y Aguas (a pesar de las manifestaciones de algunos cronistas), ante el hecho de haber sido incluídas, por diversos monarcas, en el término general de Alicante<sup>19</sup>.

Los titulares de los señoríos alfonsinos más antiguos forman parte de una pequeña nobleza local que, con toda probabilidad, adquiere sus patrimonios iniciales en la época de la Reconquista y el posterior proceso de repoblación. Este parece ser el caso de Busot y Agost, así como el de otros pequeños señoríos situados en ámbitos próximos, como el extenso realengo oriolano (Albatera, Granja de Rocamora, Cox y la Daya son

---

<sup>17</sup> VIRAVENS PASTOR, A.: *Crónica de la muy ilustre y siempre fiel ciudad de Alicante*, Alicante, 1876, Reimp. Facsmilar, 1976, pp. 44, 51 y 58.

<sup>18</sup> FIGUERAS PACHECO, F.: "Geografía de la provincia de Alicante", en *Geografía General del Reino de Valencia*. Dirigida por F. CARRERAS CANDI, Barcelona, pp. 956-957.

<sup>19</sup> Ibidem, pp. 607-608 y 954.

## LOS TITULARES DEL SEÑORIO DE BUSOT

ALFONSO MARTINEZ DE VERA Y SELLER  
FRANCISCA BALAGUER

- I Sr. de Busot y Teniente de Baile Gral.
- Vino a Alicante en 1463.
- Justicia en Alicante en 1497.

PEDRO MARTINEZ DE VERA Y BALAGUER  
ISABEL BURGUNYO Y SALORT

- II Sr. de Busot.
- Jurado de Alicante en 1503.

ANTONIO JUAN MARTINEZ DE VERA Y  
BURGUNYO  
LEONOR ANGELA BOSCH Y MAIQUEZ

- III Sr. de Busot.
- Jurado de Alicante en 1536.
- Baile de Alicante.

PEDRO JUAN MARTINEZ DE VERA Y BOSCH  
ANA LUISA MARTINEZ DE VERA  
Y FERNANDEZ DE MESA

- IV Sr. de Busot.
- Jurado de Alicante en 1542-48.
- Baile de Alicante.
- Testamento en 1598.

CRISTOBAL MARTINEZ DE VERA Y  
MARTINEZ DE VERA  
MAGDALENA PASCUAL DE IBARRA Y BERNAL

- V Sr. de Busot.
- Jurado y Justicia de Alicante.
- Baile de Alicante.
- Sin sucesión.

PEDRO MINEZ DE VERA Y MINEZ DE VERA  
ISABEL ANA FERNANDEZ DE MESA Y  
FERNANDEZ DE MESA (Sra. de Ayacor)

Fig: 4.1

## LOS TITULARES DEL SEÑORIO DE BUSOT

-VI Sr. de Busot.  
-Baile de Alicante.  
-Testamento en 1627.

JUAN ALFONSO MARTINEZ DE VERA Y  
FERNANDEZ DE MESA  
(1609-1633)

-VII Sr. de Busot.  
-Caballero de la Orden de Santiago en 1628  
-Sucesión ilegítima: Juan Alfonso y Luisa.

ALFONSO MARTINEZ DE VERA Y MARTINEZ  
DE VERA (Fallecimiento: 1650)  
PLACIDA TALLACARNE

-VIII Sr. de Busot y I de Aguas y Barañes.  
-Baile de Alicante

LORENTE MINEZ DE VERA Y TALLACARNE  
-BERNARDA MARTINEZ DE VERA Y BOSCH  
-VICENTA CRESPI DE VALLDAURA Y BOIL

-IX Sr. de Busot y II de Aguas y Barañes.  
-Fallecido con anterioridad a 1650.

FRANCISCO BOSCH Y MARTINEZ DE VERA  
(1642-1708)  
LUISA CEVERIO Y PASCUAL

ANA MAGDALENA MARTINEZ DE VERA Y  
FNDEZ DE MESA (Nacim. hacia 1607)  
BERNARDO CARROZ (Conde de Cirat)

-X Sr. de Busot y III de Aguas y Barañes. Sr. de Ares.  
-I Marques del Bosch de Ares (Creado por Carlos II,  
el 28-11-1689)  
-Por razones de vínculo y mayorazgo Martínez de Vera y Bosch  
-Testamento el 17-11-1701.

-Sra. de Busot y Ayacor.  
-Heredera de los Vínculos de Fernandez  
de Mesa

LUISA BOSCH Y CEVERIO (Nacim: 1684)  
DIEGO BOSCH Y SOLER DE CORNELLA

-XI Sra. de Busot. Sra. de Aguas, Barañes y Ares.  
-II Marquesa del Bosch de Ares.

M. LUISA BOSCH Y BOSCH (1705-1770)  
JOSE CEVERIO Y FOLCH DE CARDONA  
(C. de Villafranguenza y Villalonga,  
Sr. de Navajas, Benimelic, Hostalejo)

Fig: 4.2

## LOS TITULARES DEL SEÑORIO DE BUSOT

- XII Sra. de Busot, Sra de Aguas, Barañes y Ares.
- III Marquesa del Bosch de Ares.
- Testamento en 18-IX-1769.
- Sin sucesión.

↓

LORENZA PASCUAL DE IBARRA Y BERARDO  
(1704-1787)  
L. ROTLA CANICIA Y DORIA (1700-1777)  
(Sr. de Beniasmet de la Arcada)  
(Regidor de la clase de nobles)

- Sra. de Busot, Aguas, Barañes, Ares y Ayacor.
- Marquesa del Bosch de Ares.

↓

ANTONIO CANICIA Y PASCUAL DE IBARRA  
(1726-1795)  
MARIANA VAILLO DE LLANOS Y ORTIZ DE  
ALMODUVAR (Hija del C.de Torrellano)

- Sr. de Busot, Aguas, Barañes, Ares, Ayacor y Beniasmet de la Arcada.
- V Marqués del Bosch (Sucesión concedida en 1788)
- Regidor de la clase de Nobles del Ayuntamiento de Alicante.

↓

RAFAEL A. CANICIA Y VAILLO DE LLANOS  
CATALINA PASCUAL DE RIQUELME Y  
VERGARA (Hija del M. de Penacerrada  
y Beniel) (Nacimiento: 1774)

- Sr. de Busot, Aguas, Barañes, Ares y Beniasmet de la Arcada.
- Marqués del Bosch y Conde de Torrellano.
- Caballero Maestrante de Valencia y vecino de Alicante.

↓

M. ROSARIO C. CANICIA Y PASCUAL DE  
RIQUELME (1800-1833)  
JOSE M. DE ROJAS Y PEREZ DE SARRIO  
(1786-1833) (III C. de CasaRojas)

- Marquesa del Bosch y Condesa de Torrellano.

↓

JOSE MARIA DE ROJAS Y CANICIA  
(1819-1888)  
MARIA DEL ROSARIO GALIANO Y ENRIQUEZ  
DE NAVARRO (1819-1895)

- Conde de Torrellano y Casa Rojas.
- Marqués del Bosch de Ares y M. de Algorfa.
- Fallecimiento: 14-XII-1888.
- Testamento: 30-VI-1884.
- Partición de Bienes: 30-XI-1893



Fig: 4.3

## LOS TITULARES DEL SEÑORIO DE BUSOT

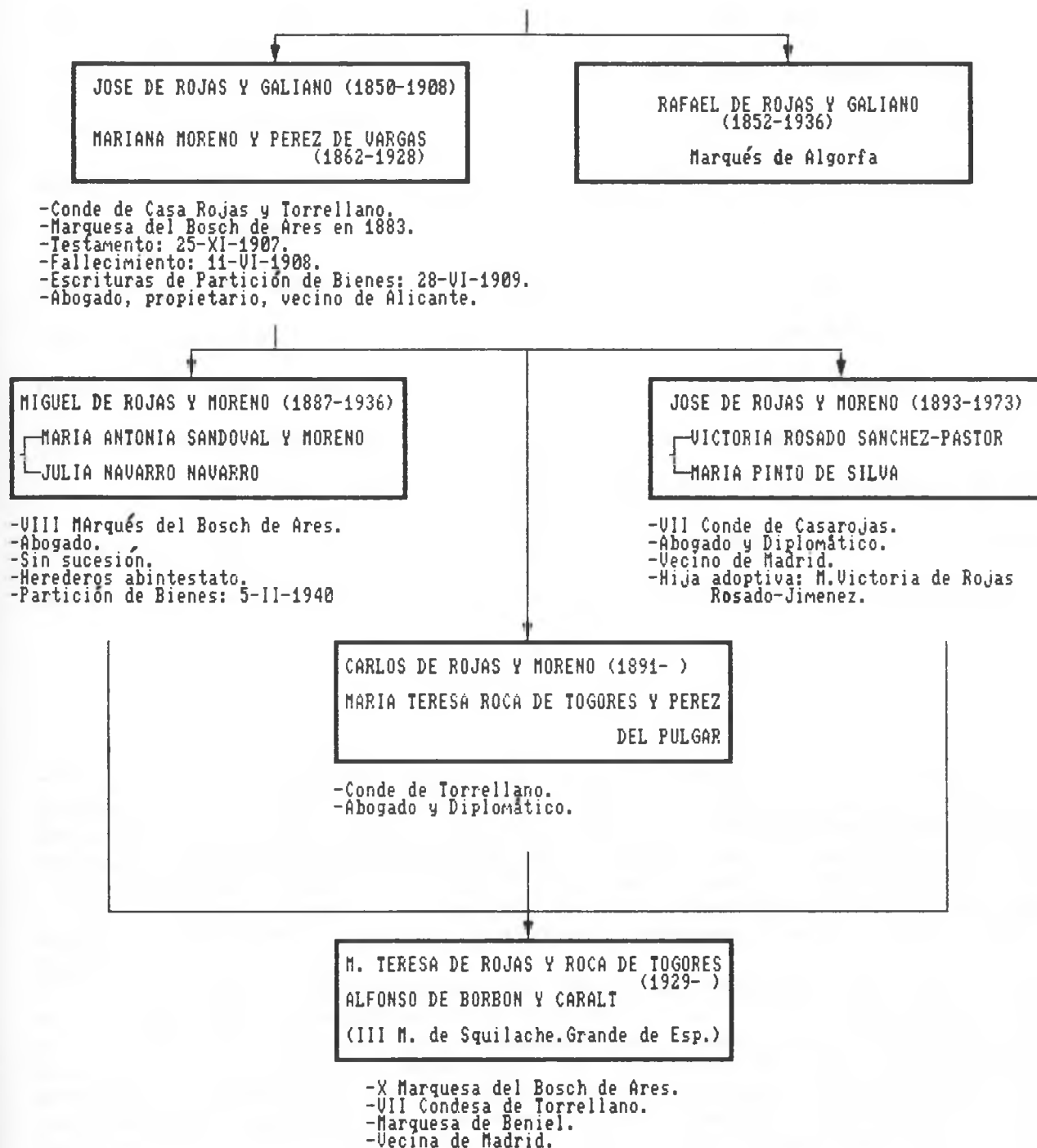


Fig: 4.4



ejemplos de ello)<sup>20</sup>, donde la nobleza local presentó durante largo tiempo solamente un interés relativo por la tierra, configurándose más bien como una oligarquía militar y urbana; situación que cambiaría a finales del s. XV, cuando surge una nueva nobleza dedicada a la compra de tierras de los antiguos nobles y caballeros empobrecidos, donde fundar nuevos señoríos (Redován, Benferrí)<sup>21</sup>. Sin olvidar, sin embargo, las diferencias existentes en ambos casos, derivadas tanto de su configuración física (valles interiores en zonas relativamente montañosas frente a una zona de huerta en expansión) como de sus características demográficas, grado de colonización, etc.

Por otra parte, esta movilidad en la titularidad de los señoríos por operaciones de compraventa parece haber caracterizado tanto a Busot como Aguas o Agost en estos momentos.

-----

<sup>20</sup> J. Millán señala como el término oriolano se caracterizó desde el principio por el dominio que ejercían ciertos señores en algunas partes del territorio, generalmente donaciones hechas a caballeros que habían participado en la Reconquista y la incorporación definitiva al Reino de Valencia. MILLAN, J.: "La ciudad y los señores. La crisis del realengo foral en el Sur del País Valenciano". *Estudis d'història contemporània*, n° 2, 1981, Valencia, pp.69-71.

<sup>21</sup> "(...) podría hablarse de una lenta metamorfosis de las clases altas que debió operarse entre fines del s. XV y principios del s. XVII, en que se ha asentado una clara tendencia hacia la tierra. Entre ambos momentos ha discurrido la recuperación económica y demográfica bajomedieval y la etapa de esplendor del quinientos, acompañada de una "revolución de los precios" sin precedentes. Es en este contexto cuando una clase nueva de nobles se ha lanzado -vigente aún el marco tradicional- a poblar las viejas alquerías de la huerta y a explotar la fuerza de los hombres más como colonos labradores que como "compañías de escuderos" al servicio de las armas.". MILLAN, J. (1981): Op. Cit., p. 12.

Los titulares más antiguos del señorío de Busot de los que se tiene noticia pertenecieron a la familia Vallebrera, que, procedente de Francia, se instaló en Murcia, Játiva y Alicante<sup>22</sup>, y cuyos miembros, según Arqués, "han sido los primeros en todos los actos positivos de Nobleza en el Gobierno de la Ciudad", y "los mas antiguos concurriendo a quantas insaculaciones ha habido del gremio de los caballeros", además de llegar a poseer durante muchos años los señoríos de Torremanzanas y Agost<sup>23</sup>.

Como apunta Alberola<sup>24</sup>, el lugar y su castillo debieron ser concedidos a esta familia tras la reconquista de las tierras alicantinas, probablemente en forma de feudo y con posterioridad al momento en que Alfonso X otorgó los Privilegios a la ciudad de Alicante, pues en ellos aparece integrado en los términos generales de la misma.

En 1423 pasaban a manos de D. Pedro Fernández de Mesa, caballero residente en Elche, a través de la venta que a su favor realizaron D<sup>a</sup> Isabel y D<sup>a</sup> Juana, viuda e hija respectivamente de Bonafonat de Vallebrera, por la cantidad de 18.000 sueldos valencianos<sup>25</sup>. Sin embargo, esta familia originaria de Barcelona

-----  
<sup>22</sup> MARTINEZ MORELLA, V.: *Linajes y blasones de la ciudad de Alicante*. Alicante, 1956, pp. 57-58.

<sup>23</sup> ARQUES JOVER, A. Fr.: *Nobiliario Alicantino*. Transcripción y notas de MAS y GIL, L. y ESQUERDO RIBERA, J.M., Ayuntamiento de Alicante, Alicante, 1966, p.78-79.

<sup>24</sup> ALBEROLA ROMA, A.: *Jurisdicción y propiedad de la tierra en Alicante (ss. XVII y XVIII)*. Ayuntamiento-Universidad de Alicante, Alicante, 1984, p. 425.

<sup>25</sup> AMA. Arm. 3, lio 1, n<sup>o</sup> 3, f. 353. Cif. en ALBEROLA ROMA, A. (1984): Op. Cit., p. 425. Existen además copias de la escritura de venta en otros documentos posteriores: AMA. Arm. 14, Autos de la Ciudad de Alicante contra Busot sobre apeo y deslinde. 1773, fs. 86-98; A.M. de Busot, sin número, 8 fls.

y que, procedente de Elche, se asentó en Alicante integrándose en la élite encargada del gobierno municipal (insaculados en el saco mayor y posteriormente en la bolsa de caballeros), mantuvo durante muy poco tiempo el señorío en su poder; pues en 1475 era adquirido por Alfonso Martínez de Vera, caballero Lugarteniente de Bayle General<sup>26</sup>.

Los Martínez de Vera, familia con solar en Navarra<sup>27</sup>, se instalaron, procedentes de Cocentaina, en Alicante, donde desempeñarían durante largo tiempo el cargo de baile local<sup>28</sup>. Insaculados algunos de sus miembros desde 1476, lo serían de nuevo en la bolsa de caballeros (bolsa de mayor rango creada tras las modificaciones introducidas en el sistema insaculatorio en tiempos de Felipe III), en la que "debían quedar insaculadas diecinueve notorias personalidades de la vida local ciudadana"<sup>29</sup>. Entre esas personalidades, y junto a algunos individuos

-----  
<sup>26</sup> ARQUES JOVER, A. Fr.: Op. Cit., pp. 50-51 y 58.

<sup>27</sup> BENDICHO, V.; Op. Cit., p. 89; ARQUES JOVER, A.; Op. Cit., p. 61

<sup>28</sup> VIRAVENS, R. (1976): Op. Cit., p. 44; ARQUES JOVER, A.: Op. Cit., p. 60-61. Entre los miembros de la familia que desempeñaron el cargo se encuentran: Alfonso Martínez de Vera y Seller, Antonio Juan Martínez de Vera y Burgunyo, Pedro Juan Martínez de Vera y Bosch, Cristóbal y Pedro Martínez de Vera y Martínez de Vera, todos señores de Busot. BARON DE FINESTRAT: *Nobiliario Alicantino*. Instituto de Estudios Alicantinos, Alicante, 1983, pp. 187-192. Los bailes locales eran nombrados por el Baile General (cuya principal función consistía en administrar los bienes del Real Patrimonio, además de ejercer una serie de competencias jurisdiccionales en diversos asuntos) y actuaban como lugartenientes suyos, gestionando el cobro de impuestos y rentas, y realizando los cabreves. El apogeo del cargo de baile general se dio durante los s. XIV al XVI; mermadas posteriormente sus prerrogativas, a partir de 1760 las funciones de su cargo pasaron a ser desempeñadas por el Intendente, figura creada poco después de la Guerra de Sucesión. ALBEROLA ROMA, A (1984): Op. Cit., pp. 323-333.

<sup>29</sup> ALBEROLA ROMA, A. (1984): Op. Cit., pp. 96-104.

pertenecientes a la familia Martínez de Vera, aparecen miembros de las familias Vallebrera, Fernández de Mesa, Canicia, Mingot y Bosch<sup>30</sup>. Con alguna de estas familias emparentará por lazos matrimoniales, siendo sustituida por ellas en la posesión del señorío a partir de la segunda mitad del s.XVII, al producirse la transmisión hereditaria del mismo por línea femenina (con la condición, en algún caso, de cambiar apellidos y armas, manteniendo el de los fundadores del vínculo).

Forman parte, en definitiva, de una pequeña nobleza de carácter local, residente en Alicante e integrada claramente en la oligarquía que detenta el control del poder municipal. Esta participación activa en el gobierno de la ciudad se ve confirmada por la ocupación de los cargos de Justicia y Jurados, por miembros de esta familia, en diversas ocasiones durante los siglos XVI y XVII<sup>31</sup>.

Por otra lado, mantiene la actitud rentista que caracteriza a las clases privilegiadas durante el Antiguo

---

<sup>30</sup> Ibidem, pp. 96-97.

<sup>31</sup> Ibidem, pp.116-127.

Régimen<sup>32</sup>. Sus ingresos proceden principalmente de las rentas que obtienen de los señoríos que poseen (Busot, Aguas, y los que se han ido agregando en diferentes momentos como resultado de su política matrimonial -Ares, Beniasmet de la Arcada, Ayacor-); rentas derivadas, por una parte, de los derechos dimanantes de la propiedad de la tierra y, por otra, de la posesión de las

-----

32 Miguel Artola señala que el término "Antiguo Régimen", como denominador de una etapa histórica, sólo puede justificarse en la medida en que transporta una imagen más completa que la que ofrecen el de "Edad Moderna" (que sólo alude a la organización del Estado) y el "feudalismo" de la escuela marxista (más extenso aunque menos preciso). El *Antiguo Régimen* pretende definir una época histórica que se extiende desde finales del s. XV a finales del S. XVIII, y que presenta unas formas específicas de organización del Estado, de la sociedad y de la economía, que constituyen, cada una de ellas, un sistema congruente de relaciones; cuya combinación conjunta define un modelo teórico que facilitará la comprensión de una realidad concreta. ARTOLA, M.: "El Antiguo Régimen". *Estudios sobre historia de España*. Obra homenaje a M. TUÑÓN DE LARA, Univ. Internacional Menéndez Pelayo, Madrid, 1981. Vol. I, pp. 149-166.

regalías (en aquellos señoríos en los que ostentan el poder jurisdiccional), generalmente arrendadas, e, incluso, del arrendamiento global del señorío<sup>33</sup>.

No se puede despreciar, sin embargo, el papel complementario que desempeñan otra serie de ingresos que provienen, por una parte, de las bienes inmuebles (tierras, edificios) que poseen en la zona de realengo, y, por otra, de los censales, instrumento de crédito de gran difusión e importancia en las sociedades del Antiguo Régimen, que Ciscar define, siguiendo a García Sanz, como "el derecho, garantizado con hipoteca, de percibir una pensión dineraria anual, adquirido por compra con pacto de retro"<sup>34</sup>, diferenciado del censo consignativo<sup>35</sup>, con el que tiene un gran parecido.

---

<sup>33</sup> CISCAR PALLARES, E.: *Tierra y Señorío en el País Valenciano (1570-1620)*. Del Cenía al Segura, Valencia, 1977, pp.88-113 y 229-235; ALBEROLA ROMA, A. (1984): Op. Cit., pp. 443-450.

<sup>34</sup> CISCAR PALLARES, E. (1977): Op. Cit., p.114.

<sup>35</sup> Un censo de origen crediticio, redimible y, por ello, perpetuo, que Clavero diferencia de los censos enfitéutico y reservativo, y que destina a operaciones como la imposición de capitales en tierras ajenas; a través de las cuales se adquiere, "mediante la prestación de un capital, un ingreso, respondiendo de todo ello -capital e "interés" o renta- un determinado bien de quien recibe el préstamo, pero aquí, y por imperativos institucionales contrarios al desarrollo del capital, se adquiere directamente la renta". CLAVERO, B.: "Foros y rabassas. Los censos agrarios ante la revolución española". *Agricultura y Sociedad*, n° 16, 1980, pp. 31 y 34-37; Peset también pone de manifiesto la función de préstamo de capitales a la agricultura que ejerce este tipo de censal, dada la inviabilidad del préstamo simple ante las leyes contra la usura. PESET, M.: *Dos ensayos sobre la historia de la propiedad de la tierra*. EDERSA, Madrid, 1982, pp. 41-42.

El censal consistía en la entrega de un capital, por el censalista, impuesto hipotecariamente sobre una propiedad o un derecho (por ejemplo los propios o arbitrios municipales), a cambio de recibir anualmente del censatario una pensión o interés anual. No se establece ningún plazo para la redención, y el interés fijado era variable (por ejemplo, durante el s. XVI y principios del XVII, el 6,6% de la ciudad de Valencia, el 7,5 y el 8,3% en Játiva, o el 10,0% en Orihuela y Alicante)<sup>36</sup>.

Miembros del clero y de la nobleza (especialmente pequeña nobleza), notarios, mercaderes, pequeños propietarios, actúan como censalistas; constituyéndose el censal como el modo de inversión más atractivo para los pequeños capitales que buscaban seguridad y un interés relativamente elevado<sup>37</sup>. La nobleza aparece también (junto a las ciudades y las clases populares) como uno de los principales deudores, constando como garantía los lugares de señorío<sup>38</sup>.

En este sentido, D. Alfonso Martínez de Vera recurría, en 1643 y 1648, al arrendamiento de todos los derechos de la señoría de Busot, obligado por la gran cantidad de deudas que tenía contraídas en forma de censales (las 650 libras anuales a que ascendían éstas -a favor de diferentes instituciones eclesiásticas y otros particulares- coincidían con el precio del

-----  
<sup>36</sup> CISCAR PALLARES, E.: Op. Cit., p. 114; HALPERIN DONGHI, T.: *Un conflicto nacional. Moriscos y cristianos viejos en Valencia*, Inst. "Alfons el Magnànim", Valencia, 1980, pp. 39-40.

<sup>37</sup> HALPERIN DONGHI, T. (1980): Op. Cit., p.39.

<sup>38</sup> HALPERIN DONGHI, T. (1980): Op. Cit., p. 40; CISCAR PALLARES, E. (1977): Op. Cit., pp. 115-119.

arrendamiento). Alberola Roma aduce este motivo al tomar en consideración el hecho de que los diferentes derechos del lugar eran arrendados regularmente, en pública subasta, por los oficiales señoriales, mientras que sólo tiene constancia del arrendamiento del lugar, durante el siglo XVII, en las dos ocasiones comentadas (aunque esta actitud se repita durante el siglo XVIII)<sup>39</sup>. Por otra parte, otros miembros de la familia Martínez de Vera tenían impuestos a su favor varios censos que respondía la ciudad de Alicante (la mayoría con un interés de un sueldo por libra -5%-). Este es el caso tanto de los marqueses del Bosque como de D<sup>a</sup> Josefa Alfonsa Martínez de Vera y, posteriormente, sus herederos, quienes constan como acreedores censalistas de la ciudad desde 1697 a 1706, y desde 1716 a 1747 (los herederos de J.A. Martínez de Vera hasta 1743)<sup>40</sup>. Así por ejemplo, en 1730, D. José y D. Pablo Pascual de Ibarra y Martínez de Vera recibían, de la ciudad de Alicante, 291 libras 18 sueldos y 3 dineros en concepto de pensión anual por cuatro capitales de censo (de 3.000, 990, 400 y 1.448 libras 5 sueldos)<sup>41</sup>. También D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Luisa Bosch y Ceverio, Marquesa del Bosque, percibía en 1740,

-----

<sup>39</sup> ALBEROLA ROMA, A. (1984): Op. Cit., pp. 448-450.

<sup>40</sup> AMA. Arm. 10, Lib. 1-46. Sin embargo, no era la ciudad la única deudora de los Marqueses del Bosque. Así se desprende de las 2.560 libras prestadas en 1706 a una compañía de comerciantes ingleses; quienes ofrecieron transportar, para su satisfacción, otra cantidad similar en un capital de censo impuesto sobre el correo mayor de la ciudad. En su lugar, pues no se realizó dicha sustitución debido a la guerra, y tras la confiscación de los bienes de la compañía, posiblemente les fue concedida a los marqueses una hacienda situada en la partida de la Almaja, compuesta de 30 th., agua de riego, casa, lagar, bodega, etc. AMA, Arm. 11, Lib. 46, fs. 63-74 y 169-184.

<sup>41</sup> A.M.A., Arm. 10, Lib. 31, fs. 41-44.



por la misma razón, 643 libras 4 sueldos 9 dineros (de las que donó a su hija 50 libras correspondientes a un censo de 1.000 libras de capital, impuesto por el Síndico Procurador General de la ciudad de Alicante en 1596)<sup>42</sup>. Además, algunas pensiones eran satisfechas con los ingresos derivados de las regalías que la ciudad poseía en las universidades de S. Juan (por ejemplo las 50 libras que la Marquesa del Bosque recibía en 1700 del arrendatario de la fleca) y Muchamiel (las 100 libras percibidas por D<sup>e</sup> J. A. Martínez de Vera del producto del abasto de la carne)<sup>43</sup>.

Otro aspecto característico de esta pequeña nobleza es la práctica de una política matrimonial endogámica y selectiva, aunque, según Peset y Graullera, menos estricta que la que mantiene la gran nobleza<sup>44</sup>. Así, en un principio, emparenta con familias pertenecientes a la oligarquía local (tanto durante la época foral como posteriormente), a la vez que poseedoras, en ciertos casos, de algún pequeño señorío; son los Burgunyo, Vallebrera, Fernández de Mesa, Pascual de Ibarra, Tallacarne, Bosch -señores de Ares y Sella- y Canicia -señores de Beniasmet de la Arcada, con anterioridad en poder de los Rotlá-. Sin olvidar las veces que se mantiene dentro de su misma familia, así como el frustrado intento, por falta de sucesión, de enlazar con

-----  
<sup>42</sup> A.M.A., Arm. 10, Lib. 40, fs. 200-204.

<sup>43</sup> A.M.A., Arm. 10, Lib. 5, fs. 246.

<sup>44</sup> PESET, M. y GRAULLERA, V.: "Nobleza y señoríos durante el s. XVIII valenciano", *Estudios de Historia Social*, n<sup>o</sup> 12, 1980, pp. 262-263.

los Ceverio, Condes de Villiafranqueza y Villalonga<sup>45</sup>.

Esta tendencia se acentúa durante la segunda mitad del siglo XVIII y siglo XIX, periodo durante el cual se lleva a cabo el enlace con apellidos como Vaillo de Llanos, Pascual de Riquelme, Rojas y Pérez de Sarrió, y culmina con la concentración en la persona de D. Jose María de Rojas y Canicia, Conde de Casa Rojas y Torrellano, y Marqués del Bosch de Ares y de Algorfa, de la mayor parte del patrimonio de estas casas; tanto el que habían conservado en sus antiguos señoríos, como las extensas fincas que poseían en los realengos tradicionales (por ejemplo de la Casa de Rojas en las provincias de Albacete y Murcia<sup>46</sup>).

El mayorazgo y los enlaces endogámicos de la nobleza (cuando la transmisión se efectúa por línea de sucesión femenina) han favorecido esta tendencia a la concentración de patrimonios<sup>47</sup>, hecho evidente en el caso de la familia poseedora de los señoríos de Aguas y Busot. La única excepción en este proceso de acumulación la constituyen "las heredades de Aguas y Barañes", que fueron adquiridas en 1609, por D. Alfonso Martínez de Vera, a D. Francisco de Rocamora, Señor de las Baronías de Novelda, Mogente y Castillo de la Mota, y de los lugares de La Granja y Agost.

-----  
<sup>45</sup> Peset y Graullera señalan que la poca importancia de sus patrimonios (poco extensos o poco poblados) motiva la falta de apetencia por emparentar con estas familias, impidiéndose, de este modo, su anexión por las grandes casas. PESET, M. y GRAULLERA, V. (1980): Op. Cit., p. 263.

<sup>46</sup> GIL OLCINA, A. y CANALES MARTINEZ, G.: *Residuos de propiedad señorial en España. Perduración y ocaso del Bajo Segura*. Instituto Juan Gil-Albert, Alicante, 1988, p. 284.

<sup>47</sup> PESET, M Y GRAULLERA, V. (1980): Op. Cit., pp. 258-268.

Por otra parte, diversos autores ponen de manifiesto el comportamiento burgués, con ciertas actitudes capitalistas, que caracteriza a algunos individuos de la nobleza local<sup>48</sup>. El interés por los cultivos, la mejora de los rendimientos, la cuidada administración de sus propiedades y la práctica de una política de inversión en tierras, tendentes a la mejora e incremento de sus patrimonios (patente por ejemplo en el caso de D. Luis Roca de Togores y Roca de Togores, Marqués de Asprillas<sup>49</sup>), la preferencia por el arrendamiento, entre otros, son rasgos que definen a esta nobleza. Aunque en el caso de Busot y Aguas es manifiesto el mantenimiento de la enfiteusis, se hace presente, aunque no de una forma tan clara como en el caso del propietario de Asprillas, una actitud similar, patente en el interés por la recuperación del dominio útil de las fincas establecidas mediante su adquisición por compra (recurriendo en algunos casos a la fadiga), como se ha verificado en el caso de Aguas; en la cesión en arrendamiento de las fincas más rentables de ambos términos o en el interés por controlar toda la actividad industrial de ambos lugares.

-----  
<sup>48</sup> ARDIT, M. y OTROS: "Estructura i crisi del règim senyorial al País Valencià". *L'Espill*, n° 3, Valencia, 1979, p. 77; GIL OLCINA, A. y CANALES MARTINEZ, G. (1988): Op. Cit, pp.260-264; RUIZ TORRES, P.: *Señores y propietarios. Cambio social en el sur del País Valenciano: 1650-1850*. Institución Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1981.

<sup>49</sup> BERNAL, A. M. y DE LA PEÑA, J. F.: "Formación de una gran propiedad agraria. Análisis de una contabilidad agrícola del siglo XIX. Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico en la España Contemporánea. Actas del primer coloquio de Historia Económica de España, Ariel, Barcelona, 1974.

Al contrario que algunas casas pertenecientes a la gran nobleza, van a consolidar e incluso incrementar (en la mayoría de los casos) sus patrimonios tras la crisis del régimen señorial. Aunque, posteriormente, se produce el debilitamiento de sus patrimonios ante las divisiones hereditarias, el absentismo, la pérdida de vinculación afectiva, la legislación de arrendamientos, el alza del valor de la tierra o los costes de administración, que conducen a la segregación y parcelación o transferencia de estos dominios<sup>50</sup>. Este no ha sido, sin embargo, el caso de Aguas y Busot, donde se ha intentado conservar, en la medida de lo posible, el patrimonio territorial, recurriendo a medidas como la concesión de mejoras o la cesión de los bienes en usufructo.

1.2.-El elemento jurisdiccional. Los conflictos con  
Alicante y Jijona. El gobierno local.

Las competencias jurisdiccionales de los titulares del señorío se encuadran en el marco de la jurisdicción alfonsina, una jurisdicción civil y criminal, intermedia entre la suprema o baronal y la baja o civil; generalmente asimilada al mixto

-----  
<sup>50</sup> GIL OLCINA, A.: "La propiedad de la tierra en los señoríos de jurisdicción alfonsina". *Investigaciones Geográficas*, n° 1, Alicante, 1983, p.24.

imperio de la suprema <sup>51</sup>, aunque otros autores matizan esa identificación, pues si bien sus titulares carecen de autoridad en aquellos delitos penados con muerte, destierro, mutilación o castigo corporal por encima de los 100 azotes, ni pueden someter a tormento e interrogatorio a los acusados, si perciben, en cambio, la mitad de las penas pecuniarias en los procesos criminales de esas características, y conocen y sancionan los delitos criminales no exceptuados, recibiendo íntegramente las calonías y multas correspondientes<sup>52</sup>.

Por lo que respecta a la finalidad primordial del fuero alfonsino se había desatado también una cierta polémica, aunque en la actualidad parece detectarse un mayor acuerdo entre las diferentes posturas. Razones de índole fundamentalmente política<sup>53</sup> -la unificación jurídica y política del Reino de Valencia a Fuero de Valencia, además de la afirmación del poder real frente al de los señores- se complementan con aquellas que persiguen "el afianzamiento y perduración de las pequeñas entidades de población , al tiempo que una vigilancia y control

-----  
<sup>51</sup> siguiendo a Matheu y Sanz, L, IBORRA LERMA, J.M.: *Realengo y señorío en el Camp de Morvedre*. Publicaciones de la Caja de Ahorros y Socorros de Sagunto, 1981, pp. 207-212; ROMEU ALFARO, S.: " Los Fueros de Valencia y los Fueros de Aragon: Jurisdicción Alfonsina", *Anuario de historia del derecho español*. Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Madrid, 1972.

<sup>52</sup> GIL OLCINA, A: "Reformismo ilustrado, colonización interior y restablecimiento del fuero alfonsino", *Agricultura y Sociedad*, n<sup>o</sup> 56, Madrid, 1990.

<sup>53</sup> PLA ALBEROLA, P.: *Conflictos jurisdiccionales en un gran señorío valenciano. El Condado de Cocentaina ante la consolidación del Absolutismo*. Tesis Doctoral Inédita, Dpto. de Historia Moderna, Universidad de Alicante, 1985, pp. 762-773; ROMEU ALFARO, S. (1972): Op. Cit.

muy directos de los mudéjares", adquiriéndose o intensificándose la finalidad repobladora o colonizadora con posterioridad a las Cortes de 1626, aunque no se haga patente con la creación de nuevos lugares hasta finales del siglo XVII<sup>54</sup>.

Sin embargo, el ejercicio de este tipo de jurisdicción no aparece especificado en el documento que recoge la venta del señorío realizada por las herederas de Bonafonat de Vallebrera a favor de Pedro Fernández de Mesa en 1423 (el más antiguo relativo a este señorío del que se tiene noticia), así como tampoco en otros posteriores, generalmente sentencias o firmas de derecho contenidas en los pleitos mantenidos contra las ciudades de Alicante y Jijona.

En este documento, además de incluir su delimitación geográfica (lindes con los términos de Sexona, Torre de les Masanes, Relleu, Cabrafich e Aygues) y una descripción de las propiedades rústicas y urbanas, regalías y derechos que adquiriría el comprador, si parece venir confirmado como señorío,

"(...) ab totes les cases, torres, fortalezes é monicions més é ab tots los Valls, Masos e habitacions qualsevols, e ab tots honors, monts, valls o Plans, e colls,

-----  
<sup>54</sup> GIL OLCINA, A.: "Jurisdicción alfonsina y poblamiento". *Cuadernos de Geografía*, nº 39-40, Valencia, 1986, pp. 235-245, p. 243; GIL OLCINA, A (1990): Op. Cit. Este autor, sin embargo, en trabajos anteriores cuestiona la finalidad unificadora, poniendo el acento en una función colonizadora, junto a la de "control y policía de multitud de pequeños lugares y alquerías que, de resultas del legado musulmán, salpicaban por doquier las tierras valencianas". GIL OLCINA, A: "La propiedad de la tierra en los señoríos de jurisdicción alfonsina". *Investigaciones Geográficas*, nº 1, Alicante, 1983, pp. 8-11.

campes, terres, orts, vinyes, olivarts, garrofers e garroferals, é  
altres qualsevol arbres fructificants, e no fructificants, é  
Boscatges, Prats, Molins, Forns, Aigues, fonts e torrents, cases  
é deveses é tots altres lochs, terres é posesions axi cultes com  
incultes en qualsevol nom apellats en los terments é dins los  
termes del dit Lloch e Castell existents, e al dit Lloch é  
Castell de Busot é á la Señoria de nos dites dones per raho de  
aquell sotmeses en lo dit Lloch e Castell, é en sos termens  
habitants é habitants e ab tots amprius é servituts é exactions  
reyals é personals e ab tots censos, pensions, delmes, tasques e  
ab totes propietats et señories axi utils com directes e ab tota  
aquella juredictio, la qual a nos dites dones e a nostres  
predecessors ha pertanygut, pertany e pertaner puxa e dexe segons  
fur e segons consuetut e per qualsevol altra raho en lo dit Lloch  
e Castell de Busot é termens de aquell. E generalmente ab tots  
los drets é pertencencies segons que nos dites dones venedores é  
nostres predecessors totes les damunt dites coses habien tengut e  
posehit (...)”<sup>55</sup>

aunque las referencias existentes acerca del tipo de jurisdicción  
ejercida en el señorío no son lo suficientemente claras;  
mencionada en el fragmento anterior, reaparece al final del  
documento en relación a las exigencias de las vendedoras para con  
los pobladores en lo relativo al respeto y obediencia de los  
mismos hacia el nuevo dueño.

-----  
<sup>55</sup> AMA. Arm. 3, Lio 1, n<sup>o</sup> 3, f. 353 vto. Cif. en ALBEROLA ROMA,  
A. (1984): Op. Cit., pp. 425-427.

Así lo ha señalado Alberola Romá, junto a la existencia de una clara referencia a la propiedad compartida y el desconocimiento de las normas que regulaban las relaciones de producción<sup>56</sup>; aspectos que por otra parte vienen contenidos en las cartas de población o capítulos de establecimiento<sup>57</sup>, y que en este caso concreto no han sido hallados. Sin embargo, la pertenencia de las regalías (molinos, hornos, pastos, aguas) al dueño de Busot, y la existencia de una propiedad compartida (establecimiento enfiteúutico) nos permiten aproximarnos a una situación característica en el funcionamiento económico del régimen señorial valenciano.

Las competencias jurisdiccionales y los diferentes derechos del titular del señorío van delimitándose y confirmándose en las diversas sentencias pronunciadas en los pleitos suscitados entre los señores de Busot y la ciudad de Alicante, ante la actitud totalmente reacia, de esta última, a reconocer los derechos jurisdiccionales de los primeros, alegando en todos los casos la inclusión de Busot en el término general de Alicante, y por lo tanto la subordinación jurisdiccional del lugar, y aprovechando cualquier circunstancia favorable a la consolidación de sus aspiraciones (por ejemplo la situación creada tras la abolición de los fueros y el conflicto sucesorio).

-----  
<sup>56</sup> ALBEROLA ROMA, A. (1984): Op. Cit., pp. 425-427.

<sup>57</sup> CISCAR PALLARES, E. (1977): Op. Cit.; GIL OLCINA, A. (1979): Op. Cit.; GUAL CAMARENA, M.: *Las cartas pueblas del Reino de Valencia*, Generalitat Valenciana, Valencia, 1989. Contribución al estudio de la repoblación valenciana, 1948. Edición preparada por Desamparados Pérez Pérez.



Así por ejemplo, en un decreto del Consell -recogido en los "*Autos de la ciudad de Alicante contra Busot sobre apeo y deslinde*", de 1773<sup>58</sup>-, de fecha 20-IX-1520, promulgado ante la negativa de varios terratenientes "que labran en Busot"<sup>59</sup> a satisfacer el "teratge" y los diezmos al señor de Busot, aduciendo que las tierras que cultivaban pertenecían al término de la ciudad de Alicante, se verifica la posesión en que se hallaba del término particular de Busot, durante más de 43 años, D. Pedro Martinez de Vera, al tiempo que se ordenaba "que pagasen el terratge y delmes con todos los otros derechos asi de bints como de arboles que han acostumbrado pagar todos los terratenientes del lugar de Busot (...)".

En este mismo sentido, en un documento de 1662 se establecía que D. Francisco Martinez de Vera y Bosch era señor del lugar de Busot (como también lo habían sido sus antecesores)

-----

<sup>58</sup> AMA. Arm. 14, fs. 129 vto-133. Cifrado en ALBEROLA ROMA, A. (1984): Op. Cit., p. 428.

<sup>59</sup> Probablemente se hace referencia ya a la existencia de enfiteutas no residentes en el término de Busot, sometidos en menor grado que los pbladores del lugar a las exigencias señoriales. Este hecho refleja el debilitamiento de antiguas condiciones de establecimiento, como la obligatoriedad del avencidamiento, exigencia que aseguraba la eficacia y productividad de las regalías y el ejercicio de la jurisdicción con sus correspondientes ingresos sobre un número mayor de habitantes. GIL OLCINA, A.: "Declive y ocaso de la enfiteusis señorial valenciana". *Agricultura y Sociedad*, n<sup>o</sup> 49, Madrid, 1988, p. 296; CISCAR PALLARES, E. (1977): Op. Cit., pp. 182-183. Sin embargo, este requisito seguirá siendo incluido en las escrituras de establecimiento posteriores a la expulsión de los moriscos, cuya contravención suponía el ejercicio por el dueño del derecho de comiso (CISCAR PALLARES, E. (1977): Op. Cit., pp. 182-183; GIL OLCINA, A. (1979): Op. Cit., pp. 52), y las que se otorgarán en vísperas de la disolución del régimen señorial: La Sarga, Aguas Vivas, Venta de Emperador o La Vallonga de Burgunyo.

y, por lo tanto, podía exigir y percibir el "ters" y la setena de todos los frutos que recolectasen sus vasallos y los terratenientes que poseen tierras en el término de Busot, y, particularmente, de las tierras situadas en la Hoya del Cabeçó. También contiene alguna referencia sobre el disfrute de cierta jurisdicción, aunque sin especificar su alcance total. Sólo señala que el señor ha castigado con multas de 25 libras a aquellos terratenientes que han intentado extraer sus frutos sin satisfacer los derechos señoriales, además de exigirles las cargas correspondientes; estando capacitado, además, para secuestrar los frutos y cobrar la parte alícuota acordada en caso de no proceder con puntualidad al pago de las particiones establecidas<sup>60</sup>.

El alcance del poder jurisdiccional y su ámbito de aplicación ha sido la principal cuestión en torno a la cual han girado los enfrentamientos de los titulares del señorío con las dos villas realengas limítrofes (Alicante y Jijona), pero gran importancia adquieren también, ante la íntima conexión entre el elemento territorial y el jurisdiccional en el señorío valenciano, los conflictos planteados por la negativa de los enfiteutas a respetar los derechos derivados de la propiedad de la tierra y a satisfacer las correspondientes pensiones (como se ha puesto de manifiesto en el anterior amparo de posesión, y se

---

<sup>60</sup> AMA. Arm. 14, Autos de la ciudad de Alicante contra Busot sobre apeo y deslinde. 1773. Fs. 136-156. Cif. en ALBEROLA ROMA, A. (1984); Op. Cit., p. 430.

hará patente en otros pleitos posteriores), en algunas ocasiones apoyados por las mencionadas ciudades, sobre todo cuando recaía sobre ese territorio una demanda de posesión por las mismas.

La extensión superficial del señorío también será cuestionada, dando lugar a diversos pleitos en los que Alicante y Jijona reclaman la incorporación de varias partidas limítrofes con sus términos generales. Sin duda, es ésta una cuestión relacionada con las frecuentes quejas presentadas por los representantes de los ayuntamientos de realengo ante las usurpaciones de parte de su territorio, y, consiguientemente, de la jurisdicción sobre ellas ejercida.

Así por ejemplo, en un pleito mantenido entre la ciudad de Alicante y el lugar de Busot con la ciudad de Jijona, a finales del siglo XVI, sobre división de términos, consta un pedimento de la ciudad de Alicante, de fecha 7-VI-1571, en el que esta ciudad se queja del estado en que se encontraban los mojones que delimitaban su término, dando paso, de este modo, a la usurpación de parte de su territorio por las villas fronterizas (Villajoyosa, Orcheta, Relleu, Xixona, Tibi, Castalla, Petrel, Elda, Novelda, Aspe y Elche). Tras la comprobación efectuada por los peritos y las personas encargadas de ello por el Portantveus del General Gobernador del Reino de Valencia, D. Enrique Palafox, se verificó que algunos mojones estaban derruídos y otros, dada su antigüedad, habían sido quitados, variándose el nombre de la partida de su situación. Como consecuencia de ello se remitieron las diligencias sobre las usurpaciones del término realizadas por los pueblos comarcanos en detrimento de la superficie territorial

de realengo y de la jurisdicción real, por lo que fueron acusados criminalmente, a instancias del Síndico de Alicante y del fiscal patrimonial, D. Pedro Juan Martínez de Vera y D. Luis Juan de Vallebrera, dueños respectivos de las "Alquerías" de Busot y Agost<sup>61</sup>.

Alguno de los pleitos planteados contra la ciudad de Jijona -por otra parte de gran duración<sup>62</sup>- serían disputados conjuntamente por el lugar de Busot y la ciudad de Alicante; puesto que sin duda a ésta última le interesaba, desde el punto de vista jurisdiccional (ejercicio de la jurisdicción suprema), mantener ese territorio dentro de su término general.

Sin embargo, no siempre será aceptada la participación de los titulares del señorío de Busot en los litigios suscitados entre Alicante y Jijona sobre delimitación de términos. Así sucedió con la petición presentada en 30-VII-1588 por D. Pedro Juan Martínez de Vera, con el objeto de que fuera tomada en consideración su intervención en el amojonamiento entre ambos términos ante los perjuicios que podía derivarse para él en caso contrario. No obstante, la situación sería reconsiderada

-----  
<sup>61</sup> AMA. Arm. 3, Lío 1, n<sup>o</sup> 2. Apuntamiento del pleyto original sobre división de terminos entre la ciudad de Alicante, y lugar de Busot, con la ciudad de Xixona. El original se encuentra en Arm. 3, Lío 1, n<sup>o</sup> 3. Cifrado en ALBEROLA ROMA, A. (1984): Op. Cit., pp. 429-430.

<sup>62</sup> Así por ejemplo, todavía en 1728, Jijona sigue pretendiendo el ejercicio de la jurisdicción en el "término litigioso del lugar de Busot". AMA. Arm. 1, Lib. 27, fs. 431-436 y Arm. 11, Lib. 52, fs. 404-406.

posteriormente, de modo que, en 1591, se incluía al dueño del lugar en las diligencias, mandándose realizar de nuevo las visuras y el amojonamiento<sup>63</sup>.

En este documento, P. J. Martínez de Vera declaraba estar situado Busot dentro de los términos generales de la ciudad de Alicante, pero que, a su vez, este lugar tenía su término propio delimitado por mojones que lo individualizaban de Alicante y Jijona. Este hecho había sido demostrado en un pleito que, empezado con anterioridad, seguía Busot contra Xixona, donde constaban los mojones, y donde se comprobó que las partidas de las Cañadas de Vercheret (Vergeret) y Rambla, la Alquedra, las Cañadas del Espino, del Azembujar y del Almeller, y las Hoyas del Cabeçó, de Bonalva (Bonalba) y de las Parras, formaban parte del término particular de Busot.

Alberola Romá señala como en este documento se menciona ya de forma expresa el tipo de jurisdicción ejercida por el dueño de Busot<sup>64</sup>:

"(...) y dins los dits termens esta en posesio quieta e inmemorial lo dit Pere Joan Martinez de Vera, suplicant, per si e per sos predecesors de exigir los fruits y splets a senyor pertanyents y exercir la jurisdiccio alfonsina, y sobre esta posesio sen quasi y que dites canyades y vertents de

---

<sup>63</sup> AMA. Arm. 3, lío 1, n<sup>o</sup> 2, fs. 9 y ss. El original en Arm. 3, lío 1, n<sup>o</sup> 3. Cif. en ALBEROLA ROMA, A. (1984): Op. Cit., p. 430.

<sup>64</sup> ALBEROLA ROMA, A. (1984): Op. Cit., pp. 429-430.

supermencionades estan dins los termens indubitats de Busot te ferma de dret lo dit Martínez de Vera, suplicant, en una causa que es porta en la Real Audiencia (...)"

Con anterioridad, en 3-VIII-1576, era admitida por la Real Audiencia, a instancias de la ciudad de Alicante y el dueño del lugar (representados por el mismo procurador), una firma de derecho que confirmara y asegurara la posesión en que se hallaba éste último de percibir la partición de frutos y el tercio diezmo de las tierras comprendidas en las partidas de la Hoya del Cabeçó, Cañada del Vercheret y Rambla. En el pedimento presentado el 30 de junio con este objeto<sup>65</sup>, se declaraba, además, la inclusión del lugar de Busot, del que formaban parte las partidas mencionadas, en el término general de Alicante. También se señalaba que los cultivadores de esas tierras estaban obligados a satisfacer los diezmos a la iglesia de Busot y al obispo de Orihuela; y que la partición y el tercio diezmo corresondía al señor desde hacía más de 10, 50, y 100 años "y más que memoria de hombres no había enconrado".

La ciudad de Jijona, que había defendido a varios labradores residentes en la misma (terratenientes) que habían extraído en garva las mieses recogidas clandestinamente, sin

-----

<sup>65</sup> En este pedimento, los interesados se remitían a un amojonamiento realizado en 1570, en el cual había sido tomada en cuenta una concordia firmada en 1422 por los síndicos de Alicante y Jijona, en la que se establecía que en la Hoya del Cabeçó cultivarían aquellas personas que fuesen del agrado del dueño de, la entonces, Alqueía de Busot; y que el diezmo del trigo se dividiese por mitad entre el lugarteniente de Gobernador de Sa el Río Júcar y el Gobernador de Orihuela. AMA. Arm. 3, lío 1, nº 2, f. 115.

pagar los derechos señoriales, se opuso a tal concesión, solicitando su revocación por pertenecer dichas tierras, sobre las que pendía en la Real Audiencia cierta denuncia anterior, al término de Jijona<sup>66</sup>.

Los problemas con la ciudad de Jijona, y concretamente, sobre el ejercicio de la jurisdicción en el terreno litigioso del lugar de Busot, parece que duraron largo tiempo, a pesar de las diferentes sentencias acordadas, generalmente, a favor de la ciudad de Jijona<sup>67</sup>.

En este sentido, en 1674 era promulgada, por la Real Audiencia, una sentencia por la que se declaraba que la justicia de la ciudad de Jijona debía conocer y ejercer la jurisdicción civil y criminal, mero y mixto imperio, en todas las sierras y terreno litigioso del lugar de Busot, con citación de D. Francisco Martinez de Vera y Bosch, dueño del mencionado lugar.

A pesar de esta confirmación oficial, una posterior intromisión del justicia de Busot dió lugar de nuevo, en 1703, a la confrontación entre ambas ciudades (con la participación también del lugar). Sin embargo, la sentencia, pronunciada el 17-III-1703, no modificó lo establecido por la anterior, amenazando con la pena de 500 libras, y otras al arbitrio del Real Consejo, al justicia de Busot y sus oficiales.

-----  
<sup>66</sup> AMA. Arm. 3, lio 1, n<sup>o</sup> 2, fs. 1-8 vto. El original en Arm. 3, lio 1, n<sup>o</sup> 3.

<sup>67</sup> AMA. Arm. 1, Lib. 27, fs. 431-436.

En 1728 la justicia de Jijona volvía a reclamar a la Audiencia de Valencia porque los justicias de Busot y Alicante no habían respetado lo acordado en las anteriores sentencias, además de violar lo establecido para el uso de los pastos, privativo de Jijona y Busot.

La actitud de la ciudad de Alicante, al respecto, se hace evidente en un fragmento de una carta escrita por D. Felipe Verdú, procurador de la misma, en septiembre de 1728:

"El Procurador de Xixona ha instado mucho estos días, se le bolviesen los autos, sobre el termino litigioso del lugar de Busot, y habiendome conferido con el abogado nos parecio despacharlos en la forma que contiene la petición adjunta, con lo cual me parece tendrán bastante para suspenderse y cuando quieran proseguir tendran que hacer para muchos años; y usted se mantendrá en la posesion que siempre ha estado, pues las sentencias no se dieron con citación de Vs., y en ellas está declarado ser el territorio termino de Busot, y como tal, comprehendido en el general de Vs. que es lo que basta para ganar la jurisdicción suprema."<sup>68</sup>

El lugar de Busot estuvo enfrentada con la ciudad de Alicante por el disfrute de las competencias jurisdiccionales de sus titulares hasta mediados del siglo XVIII. En los *Autos de la ciudad de Alicante contra Busot sobre apeo y deslinde*, de 1773, esta ciudad reconoce ya plenamente (aunque señalando estar en

-----  
<sup>68</sup> AMA. Arm. 11, Lib. 52, fs. 404-406.



posesión de la jurisdicción suprema) el ejercicio de la jurisdicción alfonsina por D. Luis Rotlá Canicia y Doria, regidor perpetuo de la clase de nobles de Alicante, y D<sup>a</sup> Lorenza Pascual, señores de los lugares de Busot, Aguas, Barañes, Beniasmet de la Arcada y Ayacor; aunque pretendiendo limitar su ámbito de aplicación a la extensión de la heredad "en el tiempo de los primitivos dueños de Busot", es decir, en el momento de la concesión de dicha jurisdicción, tras la promulgación del fuero alfonsino, excluyendo las tierras posteriormente incorporadas<sup>69</sup>.

Como señala Alberola Romá, la ciudad "sin cuestionar la jurisdicción, pretendía limitar la amplitud territorial y paralelamente defendía la política iniciada por el Real Patrimonio, tendente a evitar la usurpación de terrenos realengos por parte de los dueños de señoríos cuyas tierras lindaban con aquellos<sup>70</sup>.

De acuerdo a estas pretensiones de la ciudad, D. Antonio Spering y Arcayna, Síndico Procurador General del Ayuntamiento de Alicante, y D. Vicente Matarredona, abogado de los Reales Consejos, reclaman, en nombre de la ciudad de Alicante, como propias de la misma las partidas de "Bonalva, Vergeret, Oya de Cabezò; con lo demás que contiene el terreno conocido con el nombre de litigioso, y toda la comprencion de la

---

<sup>69</sup> AMA. Arm. 14, *Autos de la ciudad de Alicante contra Busot sobre Apeo y deslinde*. 1773, fs. 12-13. Cif. en Alberola Roma, A.; Op. Cit,

<sup>70</sup> ALBEROLA ROMA, A. (1984); Op. Cit., p. 432.

aldea o pago de Aguas"<sup>71</sup>.

Parece que la ciudad consiguió recuperar la mayor parte de los territorios disputados, según se pone de manifiesto en la petición instada por D. Juan Bautista Fuentes (representante de la parte de Busot) para que se mantuviese a los señores de Busot, como dueños territoriales de dicha universidad, en la posesión de la percepción del derecho de setena, censos, diezmo, luismo, fadiga y demás derechos enfiteúuticos y dominicales, tanto de las tierras que quedaron fuera como las sujetas a la jurisdicción de la universidad<sup>72</sup>.

La sentencia que, pronunciada en febrero de 1773, recogía, tras el acuerdo y convenio entre las partes, la nueva línea de demarcación entre ambos términos, y el disfrute "recíproco y común" por ambos lugares de los pastos, aguas, leñas y demás aprovechamientos y servidumbres rústicas, no establecía, sin embargo, ningún precepto respecto a la sujeción o no de las tierras al pago de derechos dominicales y enfiteúuticos<sup>73</sup>. Por las escrituras recogidas posteriormente en los protocolos notariales, parece que el señor no tuvo problemas para seguir manteniendo los derechos derivados de la propiedad de la tierra en esas zonas.

Sin embargo, este reconocimiento expreso del ejercicio de la jurisdicción alfonsina por los dueños del lugar de Busot tuvo que venir precedido de una sentencia de la Real Audiencia,

-----  
<sup>71</sup> AMA. Arm. 14, Autos de la ciudad de Alicante contra Busot ... 1773, fs. 59-61.

<sup>72</sup> AMA, Arm. 14, Autos de la ciudad de Alicante, ..., f. 143.

<sup>73</sup> AMA, Arm. 14, Autos de la ciudad de Alicante ..., fs. 247-253.

fechada en abril de 1747, por la que se confirmaban al titular del lugar de Busot las referidas competencias jurisdiccionales, y se conminaba a la ciudad de Alicante a no intervenir en los asuntos concernientes a esta jurisdicción.

"(...). Fallamos: Que la parte de la dicha Justicia, Consejo y Regimiento de la Ciudad de Alicante, no lo ha hecho de sus exepciones como debiera, damoslas por no probadas: en cuya consecuencia, debemos de reintegrar y reintegramos al dicho lugar de Busot, y su justicia en el uso, y ejercicio de la Jurisdicción alfonsina, y mandamos a la Justicia de la dicha ciudad de Alicante que no perturbe ni embarace en los casos y cosas pertenecientes a ella (...)"<sup>74</sup>

Sentencia que, por otra parte, nos pone de manifiesto la dejadez y desinterés que pareció caracterizar al Ayuntamiento de Alicante durante el transcurso del pleito con Busot, a pesar de las continuas quejas y requerimientos para el envío de instrucciones de sus representantes ante la Real Audiencia:

" Muy sr. mío a la culpa y omisión que se me crimina sobre no haverme mostrado parte en los autos con el lugar de Busot, sobre ejercicio de jurisdiccion, debo decir que desde que se me dio la orden para ello, siempre he estado a la mira de cuando la parte de dicho lugar restituiria los autos, que muchos meses ha, que les tenía, para alegar de bien probado, pues cuando se me dio la orden ya tenían este estado (...). Sin haber habido en mi la menor omision, si bien esta ha sido de quien debia haber

-----

<sup>74</sup> AMA. Arm. 11, Lib. 71, fs. 165-166.

enviado la instrucción, cuando yo la pedí, pero nanda se ha perdido, como venga por la inmediata posta. Los autos se hallan concludos, por parte de dicho lugar, sin haber hecho parte, en ellos la ciudad habiéndose seguido, en su rebeldía, y esta omision de su antecesor, tampoco se me puede culpar a mi, (...).

Y asi no deje Vm. de disponer se me remita la instruccion pues, los autos se manifiestan que esta jurisdiccion es usurpada por la ciudad, sólo desde el reinado de nuestro difunto rey Felipe V. Tambien, deseo hacer presente a Vm., que pocurador, sin dinero de la parte no hace papel, en ningun tribunal, pues en este pleito, acabado de mostrarme parte ya me piden los dineros de tirar por la ciudad y lo mismo pedirán, por los particulares, del lugar de Busot, y el abogado su dinero de vista, y a mi no siempre, me tiene a cuenta, el anticipar, y después, recobrar mi dinero, (...) "<sup>75</sup>.

La actitud de la ciudad, resumida en el menosprecio de las alegaciones realizadas por los abogados del lugar de Busot, la excesiva tardanza con la que se procuró, a sus representantes en Valencia, la documentación precisa (incluso la no presentación

-----  
<sup>75</sup> Carta de D. Joseph Crespán desde Valencia, de fecha 6-IX-1746. AMA. Arm. 11, Lib. 70, fs. 287 y ss. Cif. en Alberola Romá; Op. Cit., p. 431. En otra misiva posterior (18-IV-1747), el citado procurador comunica la pérdida del pleito y vuelve a insistir en la perjudicial actitud de la ciudad de Alicante: "(...) el (recurso) de el lugar de Busot no podia dejarse de perder, pues en el estado, en que se me dio aviso me mostrase parte por la ilustre ciudad y la defendiese, ya no estaban los autos en estado de ello, si que el abogado D. Tomás Ferrandis de Messa; me les hizo restituir sin hablar palabra, y tambien porque no se le habia remitido la instruccion que pidio (...)". AMA. Arm. 11, Lib. 71, fs. 163-164.

de la misma) y la insuficiencia de los recursos económicos enviados para financiar los trámites, fue decisiva para el resultado final del proceso<sup>76</sup>.

Según se indica en la correspondencia del procurador de la ciudad<sup>77</sup>, el lugar de Busot había alegado en el pleito que la ciudad de Alicante había usurpado la jurisdicción solamente tras la Guerra de Sucesión y la subsiguiente subida al poder de Felipe V.

Como han señalado varios autores<sup>78</sup>, la situación generada tras la Guerra de Sucesión y la subsiguiente abolición de los Fueros Valencianos favoreció el reforzamiento de la jurisdicción señorial en los lugares de señorío, con una serie de consecuencias, derivadas de ese incremento del poder político, plasmadas en la apropiación de una serie de derechos, rentas y tierras de las que los titulares carecían con anterioridad. Esta situación se potencia más con la resolución de 1723, en la que el monarca "responsabiliza a los "dueños de lugares" de los nombramientos de los oficiales de "sus pueblos", sin necesidad de que lo aprobasen los Capitanes Generales ni el Real Acuerdo. La medida entregó a los pueblos y ciudades de señorío completamente a merced de los señores, pasando por alto los compromisos que en la época foral se habían contraído"<sup>79</sup>.

-----  
<sup>76</sup> ALBEROLA ROMA, A. (1984); Op. Cit., p. 431.

<sup>77</sup> AMA. Arm. 11, Lib. 70, fs. 287-291 y 292-293.

<sup>78</sup> MORANT DEUSA, I.: *El declive del señorío. Los dominios del Ducado de Gandía. 1705-1837*. Instituto Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1984, pp. 40-41 y 183-192; RUIZ TORRES, P. (1981); Op. Cit., pp. 181-183.

<sup>79</sup> RUIZ TORRES, P. (1981); Op. Cit., p. 181.

Esta coyuntura que posibilitó esa evolución en grandes estados señoriales como el Marquesado de Elche o el Ducado de Gandía, también fue aprovechada, en ocasiones, para intentar desposeer de la jurisdicción alfonsina a algunos de sus titulares<sup>80</sup>. Esto es lo que pretendía, y parece que consiguió en 1709, la ciudad de Alicante con respecto a Busot, Agost y Villafranqueza. Así se desprende de una petición presentada en 1723 por un representante de la ciudad de Alicante, con el objeto de lograr la confirmación en el ejercicio de la jurisdicción y subordinación de estos lugares (como también de Monforte, Muchamiel, San Juan y Benimagrell) a la ciudad, ante las pretensiones de Monforte y Villafranqueza de separarse y mantener una jurisdicción privativa, independiente de la de la ciudad:

"Que siempre y de tiempo inmemorial, á, esta parte, y sin cosa en contrario, los lugares de Agost, Busot, Monforte, Villafranqueza o Palamó, Muchamiel, San Juan y Benimagrell han estado subordinados y sujetos al gobierno y Jurisdiccion de la Ziudad mi parte, tenidos y reputados por calles y aldeas suyas y sus vezindades, tratados con el mismo gose de todas las franquesas, (...) por estar, como están dichos lugares situados dentro de los lindes de sus terminos, y Pagos, exersiendo y practicando quantos actos de Jurisdiccion se han ofresido, assí en lo sivil como en lo criminal, por medio de su Justicia Mayor y Governador de dicha ciudad, asta que imbadida esta por las enemigas tropas de S.M. y restituhidas despues por sus Reales

-----  
<sup>80</sup> ALBEROLA ROMA, A. (1984); Op. Cit., p. 430.

Armas, dandose la providencia de poner Gobierno militar, en los lugares Sercanos, a, ella, para su mayor resguardo, por el Cavallero de Asfeld, y con orden de S.M. se aplicaron dichos lugares, a el gobierno que se le destino al Coronel D. Pedro Corbi, de que informada, y notisiosa la Ziudad mi parte, acudo ante S. M. representando la jurisdiccion que gozava, y tenia en dichos lugares, y el perjuhisio que se la seguia, en separarlos de ella, y de su gobierno, y pidiendo, se sirviese Expedir las ordenes combenientes, para que los referidos lugares quedasen reunidos, en la Jurisdiccion de la Ziudad, y de su correxidor, como lo avian estado antes, y entonces lo estaban, manteniendola con todas las prerrogativas, y honores que tenía, en ellos a cuya Instancia condescendio S.M. de que se dio aviso a la Ziudad, por medio de carta escrita por el Marques de Grimaldo, de fecha 31 de agosto de 1709, a cuyo tiempo, se resivio otra de D. Francisco Cayetano, en respuesta de la que la Ziudad mi parte le escrivio, en que le manifiesta no aver sido, su animo, el separar de ella dichos lugares, y que en su conformidad quedasen unidos como lo avian estado asta entonces, por ser calles suias (...)"<sup>81</sup>.

Por tanto, durante este largo periodo, hasta la finalización, en 1747, del pleito instado por el dueño de Busot, este lugar estuvo subordinado jurisdiccionalmente a la ciudad de Alicante, quien usurpó las competencias de esa índole correspondientes a su titular.

---

<sup>81</sup> AMA. Arm. 1, Lib. 26, fs. 488 y ss.

En otras zonas, sin embargo, como es el caso del realengo oriolano, la supresión de los fueros redundó, en la práctica, en una pérdida de toda competencia jurisdiccional de la ciudad de Orihuela sobre los señoríos alfonsinos<sup>82</sup>. Además de las competencias jurídicas, son la preservación de la propiedad de la tierra y la cuestión de los usos comunales, ambas ligadas al proceso de expansión agraria cuyo protagonismo reside en un nuevo tipo de nobleza terrateniente (de sólido poder económico y vinculado por sus cargos y servicios a la monarquía) con una posición preeminente en el gobierno municipal<sup>83</sup>, los factores que inciden en la consolidación de esta situación<sup>84</sup>.

La pasividad ante estos hechos fue la actitud que caracterizó a las autoridades municipales, quienes dejaron a la iniciativa señorial el deslinde de los términos, limitándose únicamente a una protesta ritual. El escaso interés existente por

---

<sup>82</sup> MILLAN Y GARCIA VARELA, J.M.: *Rentistas y campesinos. Desarrollo agrario y tradicionalismo político en el sur del País Valenciano. 1680-1840*. Instituto Juan Gil-Albert, Alicante, 1984, pp. 288-297.

<sup>83</sup> MILLAN Y GARCIA VARELA, J. (1984); Op. Cit., pp. 91-98 y 122-132.

<sup>84</sup> Dos párrafos de Millán son significativos al respecto: "Toda la primera mitad del s. XVIII está presidida por la confusión derivada del vacío que dejaron los fueros valencianos al ser suprimidos y también, y no en último lugar, por la trama de complicidades en favor de la privatización de la tierra que se deja sentir." MILLAN Y GARCIA VARELA, J. (1984): Op. Cit., p. 290; "La centralización y el fin de los privilegios locales suprimieron los obstáculos para la rápida expansión agraria de los terratenientes. Desde luego, esta expansión se hacía utilizando métodos feudales que incluían, y no en último lugar, la jurisdicción, los monopolios comerciales y el ennoblecimiento." MILLAN Y GARCIA VARELA, J. (1984): Op. Cit., p. 131.



precisar el territorio realengo se hace patente en el hecho de que el amojonamiento del término, ordenado en 1736, seguía sin realizarse 20 años después<sup>85</sup>.

Los conflictos suscitados en torno a las competencias jurisdiccionales y la amplitud territorial del término de realengo entre los municipios sometidos a la jurisdicción real y los enclaves señoriales que los circundan, en ocasiones a él subordinados jurisdiccionalmente (suprema), ha sido también detectado por Iborra Lerma en el Camp de Morvedre<sup>86</sup>. Un enfrentamiento que, en este caso, se mantiene desde el s. XIV, momento en el que, a partir de la adquisición de privilegios y la concesión de derechos jurisdiccionales<sup>87</sup>, se consolidan en la comarca los señoríos surgidos a finales del siglo XIII.

La potestad judicial no es la única atribución que corresponde al señor por el ejercicio de la jurisdicción; ésta se complementa con el control de la administración y el gobierno de sus señoríos<sup>88</sup>, a través de su intervención en el nombramiento de los cargos municipales. En definitiva, toda la organización

---

<sup>85</sup> MILLAN Y GARCIA VARELA, J. (1984); Op. Cit., p. 294.

<sup>86</sup> IBORRA LERMA, J.M. (1981); Op. Cit., p. 233-238.

<sup>87</sup> La jurisdicción, en unos casos plena (posesión del mero imperio, de la jurisdicción criminal) y en otros limitada, con ciertas reservas para la justicia real, fue obtenida por los señores en momentos de gran debilidad económica y política de la monarquía (Guerras de la Unión y revolución catalana), a través de ventas o donaciones. IBORRA LERMA, J.M. (1981); Op. Cit., pp. 220-233.

<sup>88</sup> CISCAR PALLARES, E. (1977): Op. Cit., pp. 194-908; GIL OLCINA, A. (1979): Op. Cit., p. 19; IBORRA LERMA, J.M. (1981): Op. Cit., pp. 274-277.

interna del señorío está mediatizada por el titular del mismo, que de este modo se asegura el control político y económico del lugar, a la vez que garantiza la percepción de las rentas y derechos señoriales.

Alberola Romá, ante la carencia de carta puebla (documento que recoge las directrices generales por las que se regulan estos aspectos) en Busot, ha enfocado el estudio de esta cuestión desde el análisis de dos series notariales del siglo XVII<sup>89</sup>. D. Alfonso Martínez de Vera, titular del señorío residente en la ciudad de Alicante, designaba personalmente a los oficiales responsables del control administrativo. El baile local, cargo de mayor importancia y representante del dueño del lugar, podía elegir a su lugarteniente, lo que originaba su ocupación por familiares o allegados. El resto de oficios municipales, cuyas funciones particulares se ajustan a las señaladas a nivel general, era también designados por el señor, y, a pesar de su duración anual, podían ser reelegidos en años posteriores. El consell (integrado, junto a estos oficiales, por una docena de consejeros) fue convocado en contadas ocasiones, en función de la existencia de cuestiones importantes para el común.

La carencia de referencias expresas a la percepción de algún tipo de salario podría relacionarse con la posesión por el Ayuntamiento de ciertos propios y arbitrios<sup>90</sup> (tal vez cedidos

-----  
<sup>89</sup> ALBEROLA ROMA, A. (1984): Op. Cit., pp. 433-436.

<sup>90</sup> *Relacion de los vecinos que contienen las ciudades, villas y Lugares del Reyno de Valencia; el valor principal de sus haciendas, e rahices y censos; ...*, pp. 110 vto.-112. ARV. VARIA, libro 883.

por el señor con este fin), o con la inexistencia de ese salario (así sucede por ejemplo en Villafranqueza).

Tras la Guerra de Sucesión y la abolición de los fueros valencianos, los ayuntamientos de los pueblos de señorío se vieron también modificados para su adecuación al modelo castellano. Por lo que respecta a Busot, y según se deduce del expediente del pleito suscitado en 1781, entre la Marquesa del Bosque, D<sup>a</sup>. Lorenza Martinez de Vera y Bosch, antes Pascual de Ibarra y Berardo, y el alcalde ordinario del lugar, en torno a la posesión de nombrar asesor para el juzgado de la universidad<sup>91</sup>, parece que los titulares del señorío designaban a las personas encargadas de desempeñar los diversos cargos municipales<sup>92</sup>

Lo expuesto se refleja en diversos fragmentos de las alegaciones presentadas por ambas partes, entre ellos el procedente de un testimonio del nombramiento de asesor general realizado en 1767 por D<sup>a</sup>. Luisa Bosch y Bosch, Marquesa del Bosque y Condesa de Villafranqueza:

-----  
<sup>91</sup> ARV. Real Audiencia, Escribanías de Cámara, Exp. 47, año 1781.

<sup>92</sup> Incluso en señoríos alfonsinos de fundación más reciente como es el caso de la Vallonga de Burgunyo o La Sarga, se siguen estas directrices. En el caso de Aguas Vivas, el prior nombraba directamente a los oficiales de justicia el primer año: los años siguientes serían los oficiales del ayuntamiento cesante los encargados de confeccionar las ternas propuestas al señor, para la elección definitiva por éste. Si con el tiempo se le escapaba a la señoría el control del gobierno municipal, podía nombrar el prior, en cualquier momento, un alcalde mayor. Se aprecia en su carta de población la misma falta de especificación respecto al resto de cargos municipales, con escasas excepciones. FRANCH BENAVENT, R.: "El régimen señorial del convento de Aguas Vivas durante el siglo XVIII". *Estudis*, n<sup>o</sup>8, Valencia, 1979-80, pp. 249-250.

"Que por quanto es presisa la asistencia de Persona liberata que acuerde y Asesore a los Alcaldes y demas ministros de Justicia, assi actuales como los que en adelante nombrare su Excelencia en dicha su Universidad de Busot; (...)"<sup>93</sup>; otro incluído en un testimonio del expediente elevado por Lorenzo Mallol, procurador de la Marquesa, en 1781 en el Juzgado de Busot, contra Lorenzo Giner, alcalde del lugar, porque éste ha despojado a la Marquesa de la "posesión de Nombrar Asesor General para los Asuntos y Dependencias de Administración de Justicia, como otra de las acciones que privativamente le respectan, entre el nombramiento de Alcaldes y oficiales del gobierno, de dicha Universidad (...)"<sup>94</sup>; o el comprendido en un memorial del procurador del alcalde de Busot:

"(...) los vecinos de ella, ó enfiteutas pobres de limitados haveres, rusticos como labradores, que apenas alguno sabe leer y escribir, y que de todos ellos se eligen Alcaldes y Regidores por el mismo Dueño los que mas á éste se le acomodan (...)"<sup>95</sup>.

Del mismo pleito se desprenden la duración anual de los

---

<sup>93</sup> ARV. Real Audiencia. Escribanías de Cámara. Exp. 47, fs. 1 vto-3.

<sup>94</sup> ARV. Real Audiencia. Escribanías de Cámara. Exp. 47, f. 4.

<sup>95</sup> ARV. Real Audiencia. Escribanías de Cámara. Exp. 47, f. 43 vto.

cargos designados por el señor<sup>96</sup>, que, sin embargo, podían ser ocupados varias veces por un mismo sujeto<sup>97</sup>, y la costumbre "inmemorial" de acudir a la casa del dueño del lugar, en Alicante, para agradecerle el nombramiento.

La reivindicación del nombramiento de asesor general por el alcalde ordinario es, junto al rechazo de antiguas prácticas de sumisión de las autoridades locales al señor (como la comentada anteriormente), un indicio de la oposición antiseñorial que empieza a manifestarse en el lugar, orientada al recorte del poder jurisdiccional y político de los dueños de

-----

<sup>96</sup> Es precisamente la mayor duración del cargo de los asesores -que depende del parecer del señor- el argumento alegado por la parte del Ayuntamiento para justificar sus atribuciones en el nombramiento del mismo, puesto que excedería las competencias propias de la jurisdicción alfonsina: "(...). El otro absurdo consiste en que como el Nombramiento de dicho Asesor General es quando no perpetuo, á lo menos sin termino, y al parecer durante la voluntad del Dueño Territorial, y por lo mismo dura muchos años, se ve, que siendo así que los dueños que tienen jurisdicción Alfonsina, como en todo caso el de Busot, solo pueden nombrar Oficiales de Justicia y gobierno para un año, se abrogaria tambien la facultad que no tiene de nombrar Asesor á los Alcaldes, y Ayuntamientos, que virtualmente usa de los efectos de jurisdicción en nombre del Alcalde, y Ayuntamiento, mediante el Concejo dado a éstos, no solo para un año, si para muchos, lo que no sufre el derecho (...)" ARV. Real Audiencia. Escribanías de Cámara, Exp. 47, f. 41 vto.

<sup>97</sup> Por ejemplo, los casos de Lorenzo Giner de Pascual y de Lorenzo Mallol; este último, que fue arrendador de los derechos dominicales de Agost, ejerció durante tres años como alcalde ordinario de Busot.

Busot<sup>98</sup> y, por consiguiente, a la obtención de una mayor autonomía de los responsables del gobierno local. Una oposición que más adelante se plasmará en la cuestión de las percepciones dominicales por razón del dominio directo del señor sobre la tierra.

La problemática generada en torno al nombramiento de este cargo denota también la trascendencia de su control por la señoría (junto a los de procurador general o escribano), por lo que representa para garantizar la subordinación del lugar y la resolución, a favor de la misma, de los conflictos suscitados entre dueño y vasallos por la cuestión de la percepción de los diversos derechos dominicales.

La parcialidad que preside los pleitos contra el señor es objeto de las críticas de los vecinos y el ayuntamiento; críticas también dirigidas contra la prepotencia y el absentismo de los dueños del lugar, que han vivido en Alicante, alejados de Busot, aprovechando "la pobreza y rusticidad de los alcaldes" para lograr el respeto y la subordinación de los vasallos<sup>99</sup>:

-----

<sup>98</sup> Así por ejemplo, en palabras del abogado de la Marquesa del Bosch, la actitud del alcalde ordinario de Busot, debe ser reformada porque constituye "un visible despojo de la antigua posesion en que mi parte se halla para nombrar dichos empleados, siendo tanto mas extraño el procedimiento quando és efecto de particulares quejas, y resentimientos que le há obligado á manifestar publicamente que en su año há de cortar lo que él llama perjudiciales abusos de la Poblacion, quando realmente son preheminiencias, y derechos de la Señoria; (...)" ARV. Real Audiencia. Escribanías de Cámara. Exp. 47, f. 16.

<sup>99</sup> ARV. Real Audiencia. Escribanías de Cámara. Exp. 47, f.36 vto.

"A lo dicho se añade, el que tanto por parte del Ayuntamiento; como los particulares vecinos, ó Terratenientes de Busot tienen con frecuencia diferentes Pleytos con el Dueño territorial sobre pago de derechos Dominicales, y otras cosas, tanto por el Juzgado del Alcalde de Busot, como por otros tribunales, para lo cual es menester confiera el Ayuntamiento, y tome sus disposiciones con acuerdo de su Asesor, y que éste sea á menos indiferente, e imparcial, para que sin respeto, con pureza, integridad, y secreto la dirija, y de las mismas condiciones sea el Asesor de que se valga el Alcalde, lo que no podria verificarse si éste, y el Ayuntamiento, huvieran de estar sugetos al Dictamen del Abogado, que con titulo de Asesor General les nombrase el Dueño, por el respeto, gratitud, y atencion que á éste le guardaria por el mismo hecho de haverle nombrado tal Asesor; y esto aun en terminos que no fuere Abogado del mismo Dueño. (...).

(...). Demas de estos concurre el que si se permitiera dicho Nombramiento de Asesor General de que pretende el Dueño de Busot el amparo, se seguirian dos absurdos, y notorios atentados: es uno, el que seria mas participe de la Jurisdiccion del Alcalde el mismo Asesor, obrando con mas despotiquez éste que no áquel, persuadido, ó esperanzado de que no podria el Alcalde obrar, ó hacer justicia sin el Dictamen de dicho Asesor, y por lo mismo que en éste recidiria virtualmente la mayor parte de la

jurisdiccion. (...)"<sup>100</sup>.

La subordinación política y económica del lugar al dueño del mismo se ve acrecentada si tenemos en cuenta, como apunta el anterior fragmento, que, con frecuencia, los cargos de asesor general y abogado señorial recaían en una misma persona<sup>101</sup>. Estas circunstancias conferían un estatus especial al sujeto que desempeñaba estas funciones, cuyo despótico y preeminente comportamiento era objeto de las quejas del vecindario (maltratos y amenazas a los alcaldes si no seguían sus dictámenes, hacerse acompañar de soldados, ocupar los asientos de Justicia y Gobierno en la Iglesia, dar mandamientos para que el alguacil guardase su casa, dictaminar sus providencias sin la citación ni intervención de los interesados, ...). Algunas de sus actitudes reflejan la animadversión y temor de los vecinos hacia estos funcionarios señoriales<sup>102</sup>.

La señoría del lugar disfrutaba del derecho de nombrar el cargo de Asesor General de la Justicia de Busot desde 1767 (derecho que también ostentaban los señores de Agost y Villafranqueza); derecho que mantuvo hasta 1781 (año en que fue designado por el alcalde ordinario), puesto que, por sentencia de

-----  
<sup>100</sup> ARV. Real Audiencia. Escribanías de Cámara. Exp. 47, fs. 41-41 vto.

<sup>101</sup> "sino que es mas bien una costumbre, que los abogados de las casas territoriales, suelen ser por lo común Asesores de los pueblos de los mismos señores, y nunca se han declarado nulos (...)" ARV. Real Audiencia. Escribanías de Cámara. Exp. 47, f. 16 vto. Fragmento que forma parte del alegato del procurador de la Marquesa en defensa de la compatibilidad de estos dos cargos en una misma persona.

<sup>102</sup> ARV. Real Audiencia. Escribanias ... Exp. 47, fs. 41-43 vto y 51-57.



9-I-1782, la Real Audiencia dictaminaba "no haver lugar a la manutencion, amparo, y reintegro de posesion que solicita D<sup>a</sup>. Lorenza Martinez de Vera, Marquesa del Bosque y Dueña de la Universidad de Busot de nombrar al Abogado que fuere de su satisfaccion por Asessor del Juzgado de Busot"<sup>103</sup>. A pesar de la apelación de la señoría, la sentencia no fue modificada, pasando a depender del criterio del alcalde ordinario el nombramiento del asesor.

Con toda probabilidad, en el resultado final del pleito influyó decisivamente el hecho de que con anterioridad a 1767 la facultad de nombrar asesores generales hubiera recaído en los alcaldes ordinarios. La explicación de esta situación radica en el secuestro al que, parece ser, estuvo sometido "el señorío y los frutos del referido lugar de Busot" desde 1684 a 1767, año en que fue levantado por Decreto de la Real Audiencia de 14-IX-1767, mandándose devolver su posesión a D<sup>a</sup> Luisa Bosch, Marquesa del Bosque, "en el todo de su jurisdiccion, regalías y demas derechos"<sup>104</sup>.

El señorío fue secuestrado por sentencia de la Real Audiencia de fecha 10-III-1684, siendo su dueño D Francisco Martínez de Vera, "a instancias de los acrehedores censalistas del mismo lugar por tan grandes atrasos, que padecían, y hasta tanto, que se fuesen extinguiendo, o poniendo corrientes

---

<sup>103</sup> ARV. Real Audiencia. Escribanías de Cámara. Exp. 47, f. 193.

<sup>104</sup> ARV. Real Audiencia. Escribanías de Cámara. Exp. 47, f. 199.

(...)"<sup>105</sup>.

Este secuestro, que fue presentado como prueba en la apelación del procurador señorial, pudo permitir, según palabras del mismo, "por la omision, descuido y contravencion hechos por los gobernadores en ese momento, algunas acciones contra la Señoria de Busot, como el nombrar Asesor. Pues estos al no ser legitimos dueños, suelen mirar con abandono los derechos, preminencias y regalías de los pueblos secuestrados (...)"<sup>106</sup>. De lo expuesto parece deducirse que el poder político y jurisdiccional del señor se vio reducido en algunos aspectos, a tenor del largo periodo en que fue administrado por personas ajenas a los titulares del mismo. Esta situación tendría consecuencias posteriores en el campo de las relaciones entre el dueño del lugar y los vecinos de mismo, y el mantenimiento de los derechos señoriales, cuya repercusión se hará patente en la posición de las autoridades municipales ante el nuevo marco político y legislativo creado tras la abolición del régimen señorial.

En este sentido, el Ayuntamiento de Busot apoyará a los enfiteutas en los diversos enfrentamientos mantenidos con el dueño territorial de la Universidad, principalmente en lo que atañe al pago de prestaciones. Otro hecho a destacar es la

-----

<sup>105</sup> El extravío de los autos hacía dudar de la certeza del secuestro, pero la confesión de la Marquesa del Bosque y Condesa de Villafranqueza, sobre hallarse en secuestro las rentas, regalías y jurisdicción del lugar de Busot, pareció aclarar definitivamente el asunto. ARV. Real Audiencia. Escribanías ..., Exp. 47, fs. 200-201.

<sup>106</sup> ARV. Escribanías ..., Exp. 47, fs. 202-206 vto.

incautación y administración por el ayuntamiento de todas las propiedades señoriales, incluyendo aquellas que, poseyendo en propiedad plena, tenía arrendadas (caso de la Heredad de Cabrafich, el huerto de la señoría, situado a la entrada del lugar, o los diversos hornos), tras la promulgación del decreto de 6-VIII-1811.

1.3.El funcionamiento económico del señorío. Elemento territorial y rentas asociadas al ejercicio de la jurisdicción.

El funcionamiento económico del señorío (además de la regulación del mercado local y del control de la actividad agraria, que vendrían establecidos por la carta puebla -de la que se carece en este caso-) viene determinado por la percepción de una serie de derechos y rentas procedentes tanto de la propiedad de la tierra (diversas, por tanto, según el régimen de tenencia predominante) como del ejercicio de la jurisdicción (regalías principalmente; capitaciones por diversos conceptos, generalmente propias de señoríos de mayor entidad, y las derivadas del ejercicio de la justicia) o la participación en diezmos.

Por lo que respecta a la participación del señor en los diezmos, las referencias han sido casi inexistentes, por lo que no se puede afirmar con total rotundidad la percepción de esos ingresos. Solamente en un documento de la segunda mitad del siglo XVI se menciona el derecho del señor a cobrar el tercio-diezmo (la Iglesia de Busot y el Obispo de Orihuela figuran como

copartícipes también)<sup>107</sup>. Las alusiones que existen en fuentes más recientes (escrituras de establecimiento, escrituras notariales de venta en las que se menciona las cargas a las que se encuentran sujetas las fincas, ...) van vinculadas a establecimientos enfiteúticos con particiones en especie diferentes del séptimo (que es la que aparece en otras ocasiones), expresadas como la de dos diezmos (en algún documento se asimila a un doceavo). De ahí proviene la dificultad de determinar si ése cánón responde a una prestación por razón del dominio directo de la finca censida o, por el contrario, a esa contribución de raíz originariamente eclesiástica. En este último caso, el mantenimiento de ese diezmo determinaría la exclusión de cualquier otro tipo de partición.

Por lo que respecta a las rentas procedentes del patrimonio territorial señorial (algo indiscutible en estos señoríos, pues en todos ellos es un elemento previo al logro de la jurisdicción), éstas están íntimamente ligadas al tipo de régimen de tenencia predominante en ellas. Por este motivo es esencial destacar la gran trascendencia de la enfiteusis. Particiones de frutos (censos en especie) y censos en metálico se verán acompañados de la percepción de otros derechos vinculados a este sistema de explotación indirecta, como son el luismo y la concesión de licencia señorial. El recurso al establecimiento enfiteútico se verá completado con el empleo del arrendamiento en las zonas más rentables del señorío.

-----  
<sup>107</sup> AMA. Arm. 3, Lío 1, n° 2.

La división de dominios respecto a la propiedad de la tierra es apuntada ya en el documento de venta de 1423, mencionado en páginas anteriores. Alberola Romá ha verificado, a partir del análisis de protocolos notariales del s. XVII, la gran extensión de la enfiteusis, de modo que la mayor parte del término se hallaba censido a los pobladores del mismo. Los censos en metálico (a percibir por el señor en San Juan o San Miguel) eran frecuentes, aunque de cuantía muy reducida, probablemente debido a la antigüedad de los establecimientos; detectándose también la partición de frutos, generalmente el ters de las algarrobas y el aceite y la setena de las almendras y cualquier tipo de granos. Incluso señala la conjunción de cánones en especie y pensiones en metálico generalmente en aquellos casos en los que, para adquirir el dominio útil, el nuevo enfiteuta se veía obligado a recurrir a un préstamo del señor, que gravitaba en forma de censal sobre la heredad<sup>108</sup>.

La imposición de partes alícuotas de la cosecha había sido apuntada en documentos anteriores al siglo XVII, o en referencias a ellos posteriores, aunque sin especificar la proporción correspondiente al señor<sup>109</sup>. Sin embargo, no aparece en ellos ninguna referencia explícita a la existencia de censos

-----  
<sup>108</sup> ALBEROLA ROMA, A. (1984): Op. Cit., pp. 436-437.

<sup>109</sup> AMA. Arm. 3, Lío 1, n.º 2, Pedimento de 1576 del Síndico de Alicante y del procurador de D. Pedro Juan Martínez de Vera; En otro documento de 1520, también mencionado con anterioridad, se ratificaba al dueño del lugar de Busot el derecho de percibir diezmos, terrajes, tanto de "bints" como de árboles, así como el resto de derechos. AMA. Autos de la ciudad de Alicante conta Busot sobre apeo y deslinde, 1773, fs. 129 vto-133.

en metálico. La exigencia del tercio y setena de todos los frutos que recolectasen los vasallos (de modo particular en la Hoya del Cabeçó) era asimismo confirmada en un testimonio de un documento datado en 1662, como también lo eran las competencias jurisdiccionales necesarias para llevar a cabo el secuestro de los frutos en el caso de retrasos en la satisfacción de las cargas, o la imposición de penas y multas en el caso de acciones fraudulentas dirigidas a evitar la contribución señorial<sup>110</sup>.

En los *Autos de la ciudad de Alicante contra Busot sobre apeo y deslinde*, donde se hallan recogidas algunas de las alusiones anteriores, se han localizado menciones de censos en especie de una cuantía diferente a los ya señalados.

Así por ejemplo, la alusión a una venta de dominio útil, realizada el 10-X-1621 (por precio de 680 libras -600 destinadas a quitar el censal y 80 a la cancelación de la pensión pendiente-, con sus cargas y derechos), de una heredad de tres "cafirades" de tierra, plantadas de almendros y otros árboles, localizada en la partida de la Alquedra, en la que se contribuía al señor " (...) a la dotzena, ço es de dotze hu, y al delme tambe de dotze hu, aixi de tot gra com de almelles (...) "<sup>111</sup>. Es ésta una partición más suave, que, como señala Alberola, no puede generalizarse a todo el señorío, dado el predominio del tercio y séptimo en las escrituras notariales, y el hecho de ser ésta la única referencia localizada<sup>112</sup>.

-----  
<sup>110</sup> AMA. Autos ..., 1773, fs. 136-156.

<sup>111</sup> AMA. Autos ..., f. 34.

<sup>112</sup> ALBEROLA ROMA, A. (1984): Op. Cit., p. 438.

Sin embargo, la obligación fijada en dos establecimientos de la segunda mitad del siglo XVIII de satisfacer a la señoría "de los granos que se cojiesen en dicha tierra de doze barchillas una que vulgarmente se dize de dos diezmos, como tambien el Alfarrás de las Garrofas que se cojiese en dichas tierras segun costumbre, (...)"<sup>113</sup>, la imposición tanto del séptimo como de la partición "de dos diezmos" en los establecimientos otorgados durante los últimos años del siglo XVIII y los primeros del XIX<sup>114</sup>, y las referencias presentes en el capítulo de cargas de las escrituras de venta de tierras hasta principios de la década de los veinte del siglo XIX (cuando se llegue a un acuerdo con la señoría para sustituir las particiones de frutos por pensiones fijas en metálico) nos dan idea de la difusión posterior de los dos tipos de cánones en especie.

En las dos escrituras de establecimiento, de 8 y 10 jornales de "tierra inculta de secano" respectivamente, otorgadas, en 1756, a dos vecinos de Busot por Simón Giner de Vicente, vecino de Busot y procurador general de la señoría de dicha Universidad, en representación de D. Manuel Ayarsa (vecino de Valencia y administrador general del secuestro de la señoría por el Duque de Caylus, Capitán General y presidente de la Real Audiencia de Valencia), se especificaban, como condiciones complementarias para la cesión del dominio útil, además de los

-----  
<sup>113</sup> AMA. Autos de la ciudad de Alicante ..., f. 115 vto.-119 vto.

<sup>114</sup> ANJ. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu, Ps. 19-22 (1794-1806).

pechos en especie expresados, la sujección de las tierras al luismo (1 real por libra), fadiga y demás derechos enfiteúticos; la obligación de solicitar licencia señorial en las enajenaciones y transmisiones del dominio útil, bajo pena de comiso; y la exigencia de panificar las tierras en un plazo máximo de 6 años, exponiéndose, en caso contrario, a su libre establecimiento por la señoría a otro nuevo enfiteuta<sup>115</sup>.

El análisis de la serie de protocolos notariales de Tomás Brotons y Bernabeu, entre 1794 y 1811<sup>116</sup>, junto con la consulta más puntual de las escrituras de otros notarios alicantinos, nos permiten obtener una visión de la situación en vísperas de la abolición del régimen señorial.

La enfiteusis se sigue constituyendo como el régimen de tenencia predominante, no sólo por la perduración de los establecimientos realizados en periodos anteriores, sino por su plena vigencia en estos momentos finales del Antiguo Régimen, como se pone de manifiesto en las nuevas cesiones de dominio útil de la tierra realizadas hasta 1803 (hasta 1806 en el caso de solares) en Busot.

El señor de Busot continúa recurriendo a la cesión de tierras en régimen de propiedad compartida para la puesta en cultivo de nuevas zonas de su señorío (aunque en ocasiones los establecimientos incluyen una porción de terreno ya panificada), mientras que, desde mediados del siglo XVIII, e incluso con

-----  
<sup>115</sup> AMA. Autos de la ciudad de Alicante ..., fs. 111-119 vto.

<sup>116</sup> ANJ. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu, Ps. 19-23.



anterioridad, se tiende, en amplias zonas del Reino de Valencia, a la sustitución de este sistema de tenencia por el arrendamiento, y, en menor medida, por la explotación directa.

Así se ha comprobado en diversos señoríos del Bajo Segura, donde en el último tercio del siglo XVIII el censo enfiteúutico había entrado en regresión, empleándose excepcionalmente para la puesta en cultivo de terrenos de poca calidad o costosa roturación, mientras las fincas en plena propiedad (tanto las así retenidas, como las procedentes de la consolidación de dominios a través del ejercicio de la fadiga y el comiso) eran explotadas mediante el arrendamiento a corto plazo, la aparcería (terraje) o, más raramente, la explotación directa<sup>117</sup>.

En otras zonas del País Valenciano esa tendencia se detecta ya a finales del s. XVII (caso de Alfara del Patriarca, donde el arrendamiento era utilizado con bastante

---

<sup>117</sup> GIL OLCINA, A. y CANALES MARTINEZ, G. (1988): Op. Cit., pp. 264-267. Millán también señala la generalización de los arrendamientos durante el siglo XVIII (una vez finalizada la fase decisiva de la colonización -empleo de, la enfiteusis-), aunque perviven los establecimientos en condiciones progresivamente más duras. Este relevo en las fórmulas de tenencia de la tierra, que tiene su reflejo de igual modo en las rentas, ha sido posibilitado por la coyuntura favorable del crecimiento agrícola, unido al éxito comercial de ciertos productos. El atractivo del arrendamiento a corto plazo indujo, por otra parte, un proceso de adquisición de tierras por compra, así como el acaparamiento de las situadas en el realengo. MILLAN Y GARCIA-VARELA, J. (1984): Op. Cit., pp. 226-235, 279-288, 306-311 y 377-380.

anterioridad<sup>118</sup>); aunque hay que señalar también algún caso, como es el de Aguas Vivas, donde el tradicional predominio de los arrendamientos a largo y corto plazo (estipulados a partición de frutos) durante el siglo XVIII, se vió contrarrestado por el empleo de la enfiteusis en la fundación del nuevo lugar de Santa María de Aguas Vivas (otorgamiento de la carta de población en 1787, y adiciones en 1796)<sup>119</sup>.

La utilización de este régimen de tenencia no se puede desligar, sin embargo, de las características físicas del ámbito en el que se implanta y de la extensión de la actividad agrícola a zonas marginales, libres hasta el momento de cultivo. Son zonas de secano, próximas a los sectores más montañosos (e, incluso, insertas en ellos) y, generalmente sin roturar; localizadas, con frecuencia (aunque no en todos los casos), en algunas de las partidas más alejadas del núcleo de población (Gorgonera, Rincón

-----  
<sup>118</sup> Durante el siglo XVIII se observa ya un claro cambio en la política económica y administrativa del Colegio del Corpues Christi, que ahora se decanta, sobre todo en las tierras adquiridas, por el recurso al arrendamiento frente a los establecimientos enfiteúticos o los debitorios, predominantes en etapas anteriores; ante la tendencia al alza de los arrendamientos frente a la devaluación de las rentas proporcionadas por las otras dos fórmulas. PESET, M; MANCEBO, M<sup>a</sup> F. y GRAULLERA, V.: "El señorío de Alfara del Patriarca (1601-1845)". *Estudis d'història contemporània del País Valencià*, n<sup>o</sup> 2, Valencia, 1981, pp. 26-30 y 35-43.

<sup>119</sup> Sin embargo, el endeudamiento posterior de ese campesinado enfiteuta daría lugar, durante los primeros años del siglo XIX, a la adquisición del dominio útil por el colegio, y tras la consolidación de dominios, al otorgamiento de arrendamientos sobre esas tierras a los antiguos enfiteutas. FRANCH BENAVENT, R.: "El régimen señorial del convento de Aguas Vivas durante el siglo XVIII". *Estudis*, n<sup>o</sup> 8, Valencia, 1979-80, pp. 223-271; y "Un caso de señorío eclesiástico valenciano. El convento de Aguas Vivas durante el Siglo XVIII". *Anales Valencinos*, n<sup>o</sup> 11, Valencia, 1980, pp. 83-117.

de la Yedra, Collado del Cabeçó, Llano de la Gralla, del Espino, ...). Sin olvidar, por otra parte, el hecho de que algunas de las parcelas censadas estaban ya parcialmente panificadas cuando se concedió el establecimiento, lo que nos induciría a considerar la probabilidad de que el dueño del lugar tratara de evitar y corregir las usurpaciones y roturaciones ilícitas de tierras de su propiedad por los vecinos del lugar, legalizando la situación y garantizando, de este modo, por lo menos la posesión del dominio directo de las mismas y el resto de derechos enfiteúuticos correspondientes. También se ha encontrado algún caso en el que el establecimiento se otorga sobre tierras que, cultivadas con anterioridad, se encontraban abandonadas<sup>120</sup>.

Como se observa en los cuadros I y II, las fincas establecidas, en ocasiones fraccionadas en varias parcelas, presentan una reducida extensión superficial, que oscila entre los 3 (1,44 ha.) y los 10 jornales (4,8 ha.), quizá determinado por el carácter más accidentado de esos terrenos, como consecuencia de la extensión de la roturación a las áreas más montañosas. A este respecto se puede establecer una cierta correspondencia entre las superficies de mayor tamaño y los sectores donde se impone un cánón en especie, generalmente las zonas más alejadas del núcleo de Busot y próximas, e incluso

---

<sup>120</sup> A.N.J. Prot. Not. T. Brotons y Bernabeu, P. 20, año 1796, fs. 98 y ss.

insertas, a los relieves montañosos (en su mayoría lindando con el Cabeçó d'Or: Ptda. Gorgonera, del Espino, Rincón de la Yedra, Llano de la Gralla, Collado del Cabeçó).

Setena de granos y almendras<sup>121</sup> y el cánon denominado de "dos diezmos" que, a pesar de no especificar su cuantía las escrituras de establecimiento, en un documento anterior se identifica con  $1/12$ <sup>122</sup>, son las particiones de frutos que los nuevos enfiteutas debían entregar al Marques del Bosque. El hecho de imponer en estas fechas una u otra parte alícuota, e incluso un cánon en metálico, de la cosecha está determinado, entre otros factores, por la costumbre vigente en las tierras contiguas a la del establecimiento (las roturadas en una época más antigua estarían sujetas a setena). Así se ha puesto de manifiesto en algunas escrituras de establecimiento. Este es el caso del concedido en 1799 a Mosen Lorenzo Climent, donde, de los 9,5 jornales cedidos, 6,5 contribuían a setena y 3 jornales con un censo en metálico<sup>123</sup>. Asimismo, el establecimiento de 4 jornales de tierra inculta y sin atochas (esparto), situados en la partida del Llano de la Gralla, se hacía con "la obligación de pagar (al Marques) a dos diezmos de lo que se recoja en ella, y alfarras de

-----

<sup>121</sup> En las escrituras de establecimiento se indica únicamente la proporción de la cosecha a entregar al señor, pero no se especifican los productos sujetos a partición. Sólo se hace referencia, de modo general, a los frutos que se cogiesen. En las escrituras de venta del dominio útil las alusiones a las cargas a las que se halla sometida la finca, con frecuencia recogen la partición de granos y almendras, tanto en el caso de  $1/7$  como de  $1/12$ .

<sup>122</sup> A.M.A, Autos de la ciudad de Alicante ..., f. 34.

<sup>123</sup> A.N.J. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu, P. 21, año 1799, fs. 17 vto-19.

algarrovas, segun y como me satisfacen en las tierras contiguas, quedando dicha tierra sujeta al Luismo, y fadiga, y demas derechos enfiteuticales, y que puedan vender, empeñar, y permutar dicha tierra con licencia señorial, pagando 1 real por libra el precio que se vendiese, bajo pena de comiso"<sup>124</sup>.

En ambos casos (1/7 y 1/12), se contempla también la percepción por el señor del alfarraz de algarrobas (prestación que no siempre aparece especificada en los establecimientos), cuya cuantía no aparece detallada en ningún caso. Es ésta, según Ciscar Pallarés<sup>125</sup>, una forma de partición, estipulada en algunas cartas pueblas, que consiste en una valoración o estimación aproximada de la cosecha, sin realizar ninguna medida ni pesada, y que afecta generalmente a las moreras<sup>126</sup> y algarrobo, y, en menor medida, a la vid. Una vez efectuado el alfarrazgo, por dos expertos nombrados por el señor (o las autoridades municipales) y los vecinos del lugar, se entregaba la parte correspondiente al señor en especie, o en algunos casos también en dinero.

Si Ciscar justifica el empleo de este procedimiento por el deseo de facilitar y agilizar la partición en aquellos

-----  
<sup>124</sup> A.N.J. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu, año 1799, fs. 83 vto.-84 vto.

<sup>125</sup> CISCAR PALLARES, E. (1977): Op. Cit., pp. 247-248.

<sup>126</sup> En Aguas Vivas, por ejemplo, el alfarraz era una de las dos formas de partición empleada para la hoja de morera en el caso de tierras incultas; era un procedimiento realizado por dos expertos nombrados por la señoría y los vecinos. Si las tierras establecidas estaban ya cultivadas y plantadas se estipulaba la división de la cosecha en tres partes, entre las que se elegiría una para el convento. FRANCH BENAVENT, R. (1979/80): Op. Cit., p. 256.

cultivos poco importantes, Chiquillo<sup>127</sup> considera el alfarrazgo como el único medio de control efectivo para conocer la producción de cada finca, de un modo aproximado, antes de la recolección; control al que siempre se negaron los campesinos.

No se ha encontrado ninguna referencia que especifique el cánón al que se hallaban sujetas las algarrobas. La partición exigida durante el siglo XVII, según apunta Alberola Romá<sup>128</sup>, era al tercio, proporción que parece demasiado elevada para haberse mantenido hasta estos momentos finales del siglo XVIII y principios del XIX, cuando parece apreciarse una suavización de las exigencias señoriales en lo que respecta a la reducción de los pechos en especie (imposición de particiones al 1/12 junto al 1/7). Además, en este sentido, el informe emitido por el Ayuntamiento de Alicante sobre las condiciones del establecimiento otorgado por D. Pedro Burgunyo y Juan en su propiedad de la Vallonga, puede aclarar la cuestión, pues en él se menciona la existencia de particiones al 1/8 y al 1/12 en Busot y Agost para algunos frutos, así como al 1/16 en el caso de las algarrobas en el primero de estos dos lugares (en Agost no parte este fruto)<sup>129</sup>.

Otra serie de establecimientos realizados durante esta etapa se otorgan sujetos al pago de censos anuales en metálico, de una cuantía de 18 dineros por jornal a entregar en San Miguel

-----

<sup>127</sup> CHIQUILLO PEREZ, J. A.: "Aproximación al estudio del régimen señorial valenciano en el siglo XVIII". *Estudis*, n° 7, Valencia, 1978, p. 245.

<sup>128</sup> ALBEROLA ROMA, A. (1984): Op. Cit., p.437.

<sup>129</sup> A.M.A. Arm. 12, Lib. 64, fs. 279-292 vto.

(29-IX); cuantía estipulada a razón de un 2,5 %, aproximadamente, del capital en el que se valora o justiprecia inicialmente la porción de tierra censida (dato que no siempre aparece recogido en las escrituras de establecimiento). Así por ejemplo, el establecimiento de 4 jornales de tierra inculta y sin atochas, situados en la partida del Cabrafich, se hacía "por 12 pesos moneda corriente, que han de quedar como censo enfiteutico perpetuo a favor del Marques y sus sucesores en los vinculos que posee de Martinez de Vera, como señor directo de las tierras, debiendo pagar perpetuamente cada año y día de San Miguel (...) el canon de 6 S. que es al respecto de 18 dineros el jornal"<sup>130</sup>. La única excepción a este hecho la constituye el cánón de 24 sueldos por jornal impuesto sobre la 1/2 tahulla situada en las afueras de la población de Busot, lindante con el huerto de la señoría, y valorada en 5 libras (cánón impuesto al 3 %). Esta proximidad al núcleo de población, más la posibilidad de su riego (procedente, a través de una "Ayguera o asequia", de las vesantes de la calle y el castillo<sup>131</sup>) explicarían su superior valor.

Segun se desprende de las cantidades contenidas en los cuadros I y II, son muy bajas las valoraciones de estas fincas, como corresponde a unos terrenos sin roturar. El evidente beneficio que representa para el Marqués su puesta en cultivo por el enfiteuta se pone de manifiesto en las transferencias de estas

-----  
<sup>130</sup> A.N.J. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu, P. 21, año 1800, fs. 3-4.

<sup>131</sup> A.N.J. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu, P. 20, año 1796, fs. 98 y ss.

CUADRO I. ESTABLECIMIENTOS ENFITEUTICOS DE TIERRAS ENTRE 1794 Y 1811. CENSOS EN METALICO

Licencia	Fecha Establec.	Estabiliente	Enfiteuta	Profesión	Vecindad	Superf. (jorn.)	Caract.	Localiz. (Ptda.)	Cánon (din./jornal)	Justip. (Libr.)	Tipo Impos.
18-IX-1794	18-IX-1794	A. Canicia y Pascual	V. Climent de Joseph	tirador de vidrio	Busot	3 (1,44h)	parte cultiv. parte incultos sin atochas	Creueta	18 -S Miguel (4 s. 6 d.)	9	2,5 %
29-III-1796	23-XI-1796	R. A. Canicia Vaillo de Llanos	L. Giner de Lorenzo	trabajador	Busot	1/4 (0,12h)	cultivados	afueras* población	288 (24 s/j) (3 s) S. Miguel	5	3 %
9-III-1799	31-III-1799**	R. A. Canicia Vaillo de Llanos	Mosen L. Climent	presbítero	Busot	3 (1,44h)	inculta y sin atochas	Malladar	18 -S. Miguel (4 s. 6 d.)		
3-I-1800	19-I-1800	R. A. Canicia Vaillo de Llanos	L. Puch	tirador de vidrio	Busot	4 (1,92h)	inculta y sin atochas	Cabrafach	18 -S. Miguel (6 s.)	12	2,5 %
9-III-1800	12-III-1800	R. A. Canicia Vaillo de Llanos	Mosen L. Climent	presbítero	Busot	3*** (1,44h)	incultos	Malladar	18 -S. Miguel (4 s. 6 d.)		
29-IX-1803	6-X-1803	R. A. Canicia Vaillo de Llanos	J. García de Martí	trabajador del campo	Busot	3 (1,44h)	inculta y sin atochas	Cabrafach	18 -S. Miguel (4 s. 6 d.)	9	2,5 %

\*Indante con tierras del Huerto de la Señoría

\*\*En la misma escritura le fueron establecidos, a partición de frutos, 6,5 jornales en la Ptda. del Cabeçó.

\*\*\*En la misma escritura le fueron establecidos, a setena, 6,5 jornales en la Ptda. del Cabeçó.

Fuente: A.N.J. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu. Elaboración Propia.



CUADRO II. ESTABLECIMIENTOS ENFITEUTICOS DE TIERRAS ENTRE 1794 Y 1811. CENSOS EN ESPECIE

Licencia	Fecha Establec.	Estabiliente	Enfiteuta	Profesión	Vecindad	Superficie (Jornales)	Características	Localiz. (Ptda.)	Partición de Frutos
30-X-1793	23-II-1794	A. Canicia y Pascual	V. Pérez	labrador	Busot	5 (2,40 ha)	incultos	Gorgonera	dos diezmos
	22-XI-1796	R.A. Canicia* Vaillo de Llanos	G. García		Aguas	9 (4,32 ha)	parte cultiv.(sec) parte incultas sin atochas	del Espino alfarráz de algarrobos	setena
16-III-1799	31-III-1799	R.A. Canicia Vaillo de Llanos	Fco Giner de Pablo	trabajador del campo	Busot	5 (2,40 ha)	incultas y sin atochas	Rincón de la Yedra	dos diezmos
9-III-1799	31-III-1799**	R.A. Canicia Vaillo de Llanos	Mosen L. Climent	presbítero	Busot	4,5 (2,16 ha) 2 (0,96 ha)	incult,sin atochas incultas	Collado del Cabegó	setena
2-VI-1799	1-XII-1799	R.A. Canicia Vaillo de Llanos	L. Giner de Pascual	labrador	Busot	4 (1,92 ha)	incultas y sin atochas	Llano de la Gralla	dos diezmos
9-III-1800	12-III-1800 ***	R.A. Canicia Vaillo de Llanos	Mosen L. Climent	presbítero	Busot	4,5 (2,16 ha) 2 (0,96 ha)	incult,sin atochas incultas	Collado del Cabegó	setena
15-II-1794	9-IV-1804 ****	R.A. Canicia Vaillo de Llanos	C. Brotons	labrador	Busot	10 (4,80 ha)	parte cultivadas parte incultas	Hoya del Boticario	dos diezmos

\*Realizado en su nombre por D. Vicente Fuster, apoderado señorial y vecino de Alicante.

\*\*En la misma escritura le fueron establecidos 3 jornales en la partida del Malladar, sujetos a un censo enfiteutico de 18 d/j.

\*\*\*Idéntica a la nota anterior.

\*\*\*\*Realizado en nombre del Marqués por D. Diego Ortiz de Almodóvar, caballero de Santiago, Coronel de Caballería y vecino de Alicante.

\*\*\*\*\*Subdelegado de Montes de la Universidad de Busot y Pago de Aguas.

Fuente: A.N.J. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu.  
Elaboración Propia.

fincas cuando han sido revalorizadas por su explotación, por los ingresos que corresponden al titular del dominio directo, a tenor de la percepción de ciertos derechos enfiteúticos como el luismo o laudemio. Así por ejemplo, en la transacción de esta media tahulla realizada a favor del Marqués del Bosch por el dueño del dominio útil, en 1816, el señor del lugar se retenía 12 L. y 6 S. (5 L. "por el capital que hasen los tres sueldos", y 7 L. 6 S. "que higuamente se retiene por el real por libra de luismo", de las 78 L. en que fue vendida la finca)<sup>132</sup>; una cantidad que supera el doble del valor inicial de estos terrenos.

Exceptuando el caso de la media tahulla, la extensión de las fincas censadas con cánones en metálico oscila entre los 3 y 4 jornales. Aunque situadas también en el límite de la zona cultivada, se hayan ubicadas en partidas más próximas al núcleo de Busot, y en las cercanías del barranco del Cabrafich, con la posibilidad de recurrir a los eventuales caudales que por él pudieran circular.

-----  
<sup>132</sup> A.N.J. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu, P. 25, año 1816, fs. 80 vto. y ss. Aunque hay que tener en cuenta que en esa cantidad de 78 L. podrían ir incluidos los atrasos por la pensión de 3 sueldos -hecho que, de modo general, cuando se produce se indica en la escritura de venta-. Pues el comprador (D. R. A. Canicia y Vaillo de LLannos, Marqués del Bosque) se obliga "a no demandar al contenido vendedor cantidad alguna por razón de la sitada propiedad, que la misma señoría le tenía establecida; todo lo qual cumplira el dicho Apoderado, y su principal. Llanamente y sin Pleyto alguno con las costas de la cobranza, y demas que huviese lugar, mediante quedar satisfecho del Capital y atrasos de los tres sueldos a que estava tenuta (...)"

Entre las condiciones requeridas para la cesión del dominio útil, reservándose el señor el mayor o directo, figuraba -además de la obligación de contribuir al señor con los pechos en metálico o en especie- la sujeción a los derechos de fadiga, luismo (cuya cuantía se estipula en 1 r. por L., es decir, la décima parte del precio de venta del bien enajenado, según se establece en los fueros valencianos<sup>133</sup>) y resto de los enfiteúticos.

La necesidad de solicitar y obtener la licencia señorial (del "legítimo dueño"<sup>134</sup>) de modo previo a la venta, permuta o gravamen de la finca censida, bajo la pena de comiso en caso de contravención de esta norma; la fijación de un plazo máximo de 4 años para llevar a cabo la panificación de las tierras concedidas en enfiteusis (en el caso de no haber finalizado la roturación una vez transcurrido el plazo señalado, el señor disponía de la facultad de establecerlo de nuevo a otro enfiteuta); el otorgamiento de la correspondiente escritura a cargo del enfiteuta, en la que debía ir incluida la licencia señorial, y la entrega de una copia franca y auténtica de la misma al señor (requisitos que no siempre van detallados en la escritura de establecimiento); junto a la pena de invalidación del establecimiento que conllevaba el incumplimiento de alguna de estas condiciones, consituyen cláusulas comunes a la mayor parte

-----  
<sup>133</sup> En el fuero tercero de la rúbrica "De feudis" se fija en 1/10 el valor del luismo por concepto de venta o permuta, y de 1/20 por el de hipoteca. GIL OLCINA, A. (1979): Op. Cit., pp. 45.

<sup>134</sup> A.N.J. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu, P. 21, año 1799, fs. 17 vto.-19.

de las escrituras otorgadas .

En algunos casos se exigía que el enfiteuta tuviera que "sacar amargen a uso, y costumbre de buen labrador" dichas tierras<sup>135</sup>, mientras en otros se observa un interés del señor por asegurarse el aprovechamiento de las utilidades rústicas de las zonas incultas susceptibles de ser puestas en explotación, plasmado en las limitaciones y prohibiciones impuestas por el señor a la recogida del esparto<sup>136</sup> o la tala de los pinos existentes en esos terrenos, que, en este último caso, el enfiteuta no podía realizar sin solicitar antes la correspondiente licencia señorial<sup>137</sup>.

Un último aspecto a comentar es el periodo de tiempo transcurrido entre la concesión de la licencia señorial y el otorgamiento de la correspondiente escritura de establecimiento, que, aunque normalmente, no excede del mes, en algunos casos se aproxima al medio año, llegando, incluso, en una ocasión, a

-----  
<sup>135</sup> A.N.J. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu, P. 21, año 1799, fs. 16 vto.-17 vto.

<sup>136</sup> En el establecimiento de 5 jornales de tierra incultos, situados en la Partida de la Gorgonera, el enfiteuta debía panificar las tierras otorgadas en el plazo de cuatro años, con la condición de que "no coxa atochas si las huviese en dichos cinco Jornales de tierra". A.N.J. Prot. Not. de T. Brotons, P. 19, año 1794, fs. 15-16 vto.

<sup>137</sup> A.N.J. Prot. Not. de T. Brotons, P. 21, año 1799, fs. 16 vto-17 vto.

transcurrir 10 años<sup>138</sup>. Este hecho puede explicar, en parte, la existencia en el momento de otorgar las escrituras de porciones de terreno ya cultivadas.

Otros datos a tomar en consideración son el avecindamiento de todos los enfiteutas en el poblado de Busot o en sus proximidades (Aguas), y la relación existente entre las menores parcelas establecidas y los enfiteutas de más baja condición social; jornaleros y trabajadores del vidrio que optarían a esos establecimientos como complemento de los ingresos obtenidos como trabajadores asalariados en las tierras propiedad de otros enfiteutas o alodiales, mediante una actividad artesanal.

En último lugar sería interesante destacar el hecho de que la mayor parte de los establecimientos son concedidos directamente por el Marqués del Bosque (exceptuando dos, en 1796 y 1799, en que fueron otorgados por el apoderado señorial); actitud que refleja un mayor interés señorial por mantener un control más directo del lugar y sus vecinos, y que contrasta con el absentismo y alejamiento posterior de los titulares del señorío.

Estos aspectos se han completado con el análisis de las escrituras de venta de fincas cedidas en enfiteusis entre 1794 y 1821 contenidas en la serie notarial de T. Brotons y Bernabeu, y las que, de modo más puntual, aparecen en los protocolos de otros

---

<sup>138</sup> A.N.J. Prot. Not. de T. Brotons, P. 22, año 1804, fs. 20 vto-22.

notarios alicantinos<sup>139</sup>. En estas escrituras de venta del dominio útil se detallan las cargas a las que estaban sometidas las fincas. Junto a censos de tipo consignativo aparecen recogidos también los de origen enfiteútico, además del resto de derechos asociados a esta fórmula de tenencia; aunque no siempre se especifica la cuantía de los mismos, tanto en especie como en metálico. Sin embargo, en ocasiones, únicamente se reconoce el dominio mayor y directo del Marqués del Bosch o el censo enfiteútico con que se halla gravado (situación más frecuente en el caso de las particiones en especie) prescindiéndose del resto de prerrogativas señoriales. En estos casos se añade "segun practica, uso y costumbre; y por franca y libre de cualquier otro cargo de censo, tributo, vinculo, señorío, dotacion, ..."140. Estos casos, aunque más frecuentes con posterioridad al decreto de 1811 por todo el proceso de relajación en el cumplimiento de las exigencias señoriales que éste conlleva, también se producen en los momentos precedentes.

Próximo a 1821 y con anterioridad a 1825, tendría lugar el acuerdo entre los Marqueses del Bosque y los vecinos y terratenientes de Busot para sustituir todas las particiones de frutos por censos en metálico. Por esta razón, el muestreo se ha realizado hasta 1821. No se ha localizado ningún nuevo establecimiento con posterioridad a los expuestos en los cuadros I y II.

-----  
<sup>139</sup> J. Marco y Alted, L. A. Navarro, J. Rovira y F. Sala y Cantó.  
<sup>140</sup> AHPA. Prot. Not. de J. Marco y Alted, P. 1149, año 1781, fs. 99-101 vto.

Normalmente se reconocen también los derechos de luismo, fadiga y demás derechos enfiteuticos, y se incluye, asimismo, la licencia señorial autorizando la enajenación, previo pago del luismo y la cantidad fijada por la concesión de la licencia (10 sueldos), y el compromiso del nuevo propietario del dominio útil de aceptar todas las prerrogativas señoriales y cumplir los requisitos exigidos por la señoría (pago del luismo y solicitud de licencia en el caso de futuras enajenaciones de la finca).

La cuantía del luismo se establece de modo general en 1 real por libra del precio de venta, aunque existen algunos casos (generalmente cuando el cánón es en especie) en los que se reduce esa proporción, fijándose en 1 sueldo por libra<sup>141</sup> (pasa del 10 al 20 % del precio de venta).

La responsabilidad de satisfacerlo, (aunque no se indica nada al respecto en las escrituras, o bien se descuenta su valor del precio fijado, reteniéndose dicha cantidad el comprador para efectuar él dicho pago) recae en el vendedor; así parece deducirse del pago previo del derecho de luismo para la concesión de la licencia, del compromiso del nuevo propietario de la finca de respetar los derechos señoriales y pagar el derecho de luismo y solicitar la licencia, y de una referencia en la que se afirma que el derecho de 1 real por libra de luismo "compete satisfacer al Marques por los citados vendedores, y 3 S., y 3 d. por el

-----

<sup>141</sup> ANJ. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu, P. 25, año 1816, fs. 27-29, 29-30 vto, 32 vto.-34 vto. y 62 vto.-64 vto; y 1818, fs. 20-22.

enfiteutico correspondiente a los 3 jornales, a que devera obligarse el comprador, y a no poder vender sin obtener el correspondiente permiso del citado señor"<sup>142</sup>. Gil Olcina recoge la opinión de Benlloch al respecto, quien matiza que, aunque por costumbre correspondía al vendedor, por derecho debía ser una responsabilidad del comprador, por razón de la investidura que de nuevo vasallo recibe de su señor. En el Código Civil se atribuía, en 1910, esta responsabilidad al adquirente, salvo el caso de que se hubiera acordado lo contrario<sup>143</sup>.

En algún caso se ha apuntado también la percepción de este derecho por el arrendatario de los derechos dominicales. Así por ejemplo, en 1784, a pesar de ser concedida la licencia señorial por D<sup>a</sup> Lorenza Martínez de Vera y Bosch, Marquesa del Bosch, fue D. Vicente Giner de Simón, como arrendatario de los derechos señoriales, quien recibió las 7 L. que le correspondían por la venta de 1,5 tahúllas de tierra huerta, situadas en el Pago de las Huertas<sup>144</sup>.

Por este concepto, el Marqués pudo percibir, entre 1781 y 1821, cantidades que oscilaban entre 3 L. 12 S. y 37 L. 15 S. 12 D., cuando el laudemio se sitúa en 1 r. por L., y entre 2 L. y 15 L., cuando se sitúa en 1 s. por L., por cada una de las ventas

-----

<sup>142</sup> ANJ. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu, P. 25, año 1818, fs. 12 vto.-14 vto.

<sup>143</sup> GIL OLCINA, A. (1979): Op. Cit., p. 46.

<sup>144</sup> AHPA. Prot. Not. de L. A. Navarro, P. 1311, año 1784, fs. 38-40.



realizadas por los enfiteutas, dependiendo, dichas cantidades de los cultivos, la extensión superficial y la localización de la finca.

Los 10 sueldos percibidos por la concesión de la licencia señorial aparecen detallados solamente en escrituras datadas hacia 1816; no existen alusiones a la cuantía de este derecho en las fechadas a finales del siglo XVIII. La inclusión de las licencias en las escrituras de venta (exigencia señorial que no se lleva a la práctica en todas las ocasiones) empieza a disminuir hacia 1817, siendo ya escasas en 1818 y 1819 las escrituras que las contienen. En todas ellas se justifica su obtención por la posibilidad, de que en el caso de no solicitarla, la señoría ejerza el derecho de comiso. La obligación de conseguir la autorización señorial no se limita a la venta del dominio útil de las tierras, sino que se hace extensivo del mismo modo a los escasos caudales hídricos empleados para el riego de las mismas<sup>145</sup>.

Por lo que respecta a los censos enfiteúticos, las particiones de frutos apenas se detallan, señalándose, en algunos casos, las partes alícuotas, para granos y almendras, ya mencionadas en los establecimientos, además del alfarraraz de las algarrobas, o bien, simplemente, el pago de particiones de frutos según uso y costumbre, sin mencionar tampoco las fechas de su

-----

<sup>145</sup> Así ocurría, por ejemplo, en la venta de 2 tahullas situadas en la partida de las Huertas, y de los 12 dedos de agua en enero, y otros 8 en mayo, que, procedentes de la Balsa de la Señoría, disponían para su riego. ANJ. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu, P. 25, año 1817, fs. 35-38.

entrega al señor. En cuanto a los censos en metálico, es más difícil establecer su cuantía, pues además de su posible variación con el tiempo, en ocasiones no se distingue claramente si el canon impuesto corresponde a la finca vendida o es el que originariamente se satisfacía por la finca completa antes de su posible fragmentación, e, incluso, si es de origen enfiteútico o no<sup>146</sup>. En otros casos, la dificultad estriba en el hecho de figurar una única carga cuando la heredad presenta zonas en "regadío" y secano, o cuando ésta corresponde tanto a la tierra como a los escasos caudales que éstas llevan asociados para su riego.

A pesar de estas limitaciones, se puede intentar establecer su valor, deduciéndolo de las cargas insertas en las escrituras de venta de principios del siglo XIX (Cuadro III). En general, se les puede considerar de una mayor antigüedad que los señalados en los Cuadros I y II, por su menor valor tanto para tierras calificadas de secanos como para las que cuentan con algunos caudales de agua, bien procedentes de balsas que recogen las proporcionadas por fuentes o manantiales, o bien del aprovechamiento de las aguas que circulan por barrancos y

-----

<sup>146</sup> En la venta de 3 jornales de tierra, situados en la partida de las Huertas Viejas, en el capítulo de cargas se hacía constar: "Sujeta al Luismo, y fadiga, y demas derechos enfiteuticos, y á un censo de capital de 29 Libras, quince sueldos y tres dineros con la anualidad de dies, y siete sueldos, y onse dineros al referido Ylustre Señor Marqués, el qual tiene cargado sobre las demas tierras de la referida Partida". En este caso no está claro si el censo impuesto es de tipo enfiteútico a no. Más tarde si se señalaba la sujección de esta finca a un censo enfiteútico de 3 S. y 3 D. ANJ. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu, P. 25, año 1818, fs. 12 vto.-14 vto.

CUADRO III. VENTAS DE TIERRAS GRAVADAS CON CENSOS ENFITEÚTICOS EN METÁLICO

Fecha Venta	Superf. (Th.)	Localiz. (Partida)	Precio (Lib.)	L/Th	Cánon S. Miguel	Din./jornal	Cultivo	Tipo	Recursos Hídricos	Precedencia
1784	1,5	Huertas	70	46,7	1s	32		"Huerta"	sin especificar	Balsa Señoría
1806	8	Cabrafich	100	12,5	1s	6		Secano		
1816	1	Agua Amarga	377	47,12	4d	2	parras, árb. frutales almendros, otros árb.	"Huerta"	sin especificar	Balsón pral, bco.
7								Secano		
1816	1	Agua Amarga	253	253	6d	24 (2s/J)	parras, algarrobos	"Huerta"	4 días de cada 8	Balsa dentro bco.
1816	8	Cabrafich	156	19,5	1s	6	arbolado	Secano		
1816	0,5	Afuera Busot	78	156	3s	288 (24s/j)		Secano	agua vesantes	Calle y Castillo
1817	1	Afuera Busot	220	220	4s	192 (16s/j)		"Huerta"	3 dedos	Balsa Señoría
1817	2	Huertas Viejas	113	56,5	8s	192 (16s/J)		"Huerta"	12 dedos en enero 8 en Marzo	Balsa Señoría
1817	2	Huertas Viejas	200	100	12s	288 (24s/J)		"Huerta"	24 dedos en enero 16 en mayo	Balsa Señoría
1817	4	Creueta	50	12,5	6d	6	almendros y olivos	Secano		
1818	12	Huertas Viejas	350	29,17	3s3d	6	arbolado	Secano		
1818	8	Cabrafich	120	15	2s	12	algarrobos			
1818	5	La Cenía	84	16,8	1s6d	14,4	arbolado	Secano		
1821	10	Agua Amarga	220	22	6d	2,4		"Huerta"-Secano		

1 jornal= 4 tahúllas

1 tahúlla= 1201 m2

1 libra= 20 sueldos

1 sueldo= 12 dineros

Fuente: A.N.J. Protocolos Notariales de T. Brotons y Bernabeu.  
Elaboración Propia.

vesantes. La cuantía de los pechos en metálico oscila en los terrenos de secano (Cabrafich, Creueta, La Cenia, Huertas Viejas) entre los 6 y los 14 dineros por jornal, mientras que en las tierras consideradas como "huerta" se sitúa entre los 24 y los 192 dineros por jornal (2 sueldos y 16 sueldos por jornal respectivamente).

En relación a este último aspecto, conviene señalar la devaluación a la que se ven sometidos con el paso del tiempo (fechas de imposición, revalorización posterior de las tierras con ellos gravadas, procesos inflacionistas, ...), a diferencia de lo que ocurre con los censos en especie. Este hecho puede deducirse de los datos consignados en los cuadros III y IV: valor de las fincas vendidas (según diversos factores como el carácter de regadío o secano, la localización, el tipo de cultivos entre otros), cánones a los que se hallan sujetas, proporción que representan estos últimos sobre el precio de venta, etc. Aunque es necesario matizar que estos datos poseen sólo un valor aproximativo y referencial, a tenor de una serie de limitaciones, como la falta de homogeneidad en las fechas en las que realizan las transacciones, afectadas por tanto por distintas coyunturas<sup>147</sup> (lo que incide en el valor de venta de las mismas), o la falta de fiabilidad de las cantidades declaradas en las escrituras de venta (con el objeto de reducir la cuantía del luismo). Los casos en los que esa proporción se sitúa entre

-----  
<sup>147</sup> Aunque este periodo está caracterizado en general por la existencia de conflictos bélicos, años de malas cosechas, hambre y epidemias.

el 1 y el 7 % deben relacionarse con una fecha de imposición mucho más reciente.

CUADRO IV

Año	Superf	Tipo	Precio	Cánon	%(C/P)
Venta	(th)		(Lib.)		
1784	1,5	H	70	1s	0,071
1806	8	S	100	1s	0,05
1818	8	H-S	377	4d	0,004
1816	1	H	253	6d	0,0099
1816	8	S	156	1s	0,03
1816	0,5	S	78	3s	3,85
1817	1	H	220	4s	1,82
1817	2	H	113	8s	7,08
1817	2	H	200	12s	0,3
1817	4	S	50	6d	0,05
1818	12	S	350	3s3d	0,075
1818	8		120	2s	0,083
1818	5	S	84	1s6d	0,089
1821	10	H-S	220	6d	0,011

H: "Huerta"

S: Secano

Por lo que respecta al establecimiento de solares y casas, Alberola Romá señala que respetar los derechos de luismo y fadiga y entregar una gallina, en concepto de adehala, por Navidad, son las únicas obligaciones de los propietarios; salvo algunos casos excepcionales en los que además debían satisfacer algunas cantidades en metálico en San Miguel<sup>148</sup>. En este sentido, en la escritura de establecimiento de un solar en Busot, también a mediados del siglo XVII, se hacía constar, además de sendas licencias concedidas por los dos dueños del lugar (Magdalena Martínez de Vera, Condesa de Cirat, y Francisco Martínez de Vera y Bosch, éste último por medio de su curador), la sujeción a un gravamen de "16 sueldos por censos y una gallina cada año a la señoría del dicho lugar"<sup>149</sup>.

En las escrituras otorgadas entre 1794 y 1808<sup>150</sup> se añaden, a las condiciones ya mencionadas, la obligación de fabricar las casas en un plazo de 4 años (en algunos casos no se fija ninguno), "y en su defecto pueda el Marqués comisarlo y establecerlo de nuevo"<sup>151</sup>; la de solicitar la licencia señorial

-----  
<sup>148</sup> A mediados del Siglo XVII, cantidades que oscilaban entre los 6 y los 17 sueldos anuales. ALBEROLA ROMA, A. (1984): Op. Cit., p. 439.

<sup>149</sup> Así se recoge en el escrito presentado, en 3-1X-1658, por Vicente Climent para justificar, ante la justicia de Busot, las obras que había realizado en un solar para edificar una casa en el lugar de Busot. AMA. Arm. 5, Lib. 218, fs. 44 y ss. (Incluido en Lib. 13, *Manos Judiciarias de los tribunales de Justicia Civil Portante Veces de Gobernador, y del lugar de Busot. Años 1657-1674*).

<sup>150</sup> ANJ. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu, P. 19-23, años 1794-1811.

<sup>151</sup> ANJ. Prot. Not. T. Brotons, P. 19, año 1794, fs. 55 vto.-57.

para las transacciones del dominio útil y la satisfacción de un real por libra de luismo, bajo pena de luismo; y la de entregar, a sus costas, una copia auténtica de la escritura a la señoría.

Sólo en uno de los casos localizados, el establecimiento se concedía tras haber transcurrido varios años desde la construcción de la casa, además sin ningún tipo de penalización, puesto que se le perdonaba "todo el atraso que hasta el día había devengado por no haber obtenido antes este permiso de que se le releva todo el perjuicio que se le podía seguir por el comiso en que había incurrido"<sup>152</sup>.

El censo en metálico exigido junto a la gallina en épocas anteriores no vuelve a ser mencionado; aunque, a partir de 1816, en algunas escrituras de venta del dominio útil, se apunta la posibilidad de sustituir la prestación de la gallina por un censo en metálico de 10 sueldos, a entregar anualmente en la misma fecha<sup>153</sup>. El pago de 10 sueldos por derecho de licencia, el compromiso de los nuevos enfiteutas de respetar y satisfacer los derechos señoriales y, en algunas ocasiones, la deducción, del precio de venta, de las cantidades satisfechas por el comprador en concepto de luismo y licencia señorial, son algunos de los datos proporcionados por ellas. En algunos casos, el comprador se retiene también el valor del resto de cargas

---

<sup>152</sup> ANJ. Ibidem, P. 23, año 1808, fs. 70 vto-72.

<sup>153</sup> ANJ. Ibidem, P. 25, año 1816, fs. 54-55.

existentes sobre al finca (capital impuesto sobre la casa<sup>154</sup>, e, incluso, la cuantía de algún luismo atrasado<sup>155</sup> o de los "gastos de alcalde y escribano"<sup>156</sup>).

A pesar de ser la enfiteusis el régimen de tenencia predominante en el señorío de Busot, se ha de señalar también la presencia del arrendamiento a corto plazo. A él recurren tanto los sucesivos dueños del lugar como los vecinos y terratenientes del mismo, enfiteutas en su mayor parte. Es éste un hecho del que existe constancia desde el siglo XVIII. En este sentido, en el Padrón demográfico-económico del Reino de Valencia, analizado por Camarena Mahiques<sup>157</sup>, ya se señala la importancia de los arrendatarios en el término. Por otra parte, son numerosas las escrituras de arrendamiento contenidas en los protocolos notariales de Busot; aunque en este caso es difícil determinar si los otorgantes son enfiteutas o no. La estructura de la propiedad y las fórmulas de tenencia a ella asociadas han sido objeto de diversos estudios en el País Valenciano, tanto en términos de señorío como en los de realengo; en ellos se pone de manifiesto la generalización del arrendamiento a corto plazo (sobre todo en los señoríos en los que los censos son en metálico y de escasa cuantía). A él recurren, entre otros, los pequeños enfiteutas,

-----

<sup>154</sup> ANJ. Ibidem, P. 24, año 1813, fs. 90-92. En este caso, un censo de capital 100 libras y ánuia pensión de 3 L. por San Miguel, impuesto en 4-XII-1640 a favor de D. Alfonso Martínez de Vera. Sin embargo, ésta es la única carga con la que está gravada la casa.

<sup>155</sup> Ibidem, P. 25, año 1816, fs. 37-39 vto.

<sup>156</sup> Ibidem, P. 25, año 1816, fs. 43 vto.-46.

<sup>157</sup> CAMARENA MAHIQUES, J. (1966): Op. Cit., pp. 62-63.



que completan así sus ingresos, figurando como arrendatarios de los terratenientes destacados del lugar, o bien de propietarios foráneos, residentes en las capitales provinciales y regional o en los núcleos más importantes de la zona (incluyendo en este grupo a la nobleza), principalmente <sup>158</sup>.

Los Marqueses del Bosch recurrieron al arrendamiento, en aquellas fincas que poseían en propiedad plena, en mucho menor grado que a la enfiteusis en el término de Busot (al igual que el él de Aguas); y al contrario de lo que sucedía con las tierras que poseían en otros términos municipales. Solamente tenemos noticias de su empleo en Busot en dos fincas de distinta envergadura. El "Huerto de la Señoría", situado en las

-----

<sup>158</sup> Así lo ponen de manifiesto diversos estudios realizados en el ámbito del País Valenciano, contando como fuentes principales los padrones de riqueza del equivalente, los padrones de riqueza rústica y los libros de amillaramientos entre otras de fuentes. MORANT DEUSA, J.: *Economía y Sociedad en un señorío del País Valenciano. El Ducado de Gandía. (ss. XVIII-XIX)*. Gandía, 1978, 112 pp.; ROMERO GONZALEZ, J.: *Propiedad agraria y sociedad rural en la España Mediterránea: Los casos valenciano y castellano en los ss. XIX y XX*. MAPA, Servicio de publicaciones agrarias, Madrid, 1983; AGUADO, A.M. : "Aproximació a l'estructura de classe i conflictes socials en el senyoriude Montesa. Sueca al segle XVIII". *Estudis d'història contemporània del País Valencià*, n° 2, Valencia, 1981, pp. 99-114; ANAYA, C., DOMENEC, J., ANDRES ENGUIX, I., PEREZ, F. y PUIG, F.: "Estructura de la propietat als senyorijs valencians a les darreries de l'Antic règim: Tavernes de Valldigna, Albalat de la Ribera y Gandía". *Estudis d'història contemporània del País Valencià*, n° 5, Valencia, 1984, pp. 159-205; ROMERO GONZALEZ, J.: "Les estructures de propietat de la terra i de les unitats d'explotació al País Valencià. Mètode i fonts per al seu estudi". *Economia agrària e Història Local. I Assemblea d'història de la Ribera*. Institució Alfons el Magnànim, Valencia, 1981; ROMERO GONZALEZ, J. y CUCO GINER, J.: "La estructura de la propiedad de la tierra y los cultivos en la Ribera Baixa durante el s. XIX: El caso de Cullera". *Cuadernos de Geografía*, n° 24, Valencia, 1979, pp. 55-78.

inmediaciones del poblado, y con una cabida aproximada de 2 jornales (8 th.) de tierra huerta y derecho a regar 32 dedos de agua de la balsa principal del pueblo cada tanda de 19 días<sup>159</sup>, y la heredad de Cabrafich, con una extensión superficial de unos 60 jornales (en 1804), parte secano y parte regadío, con aguas de la Fuente de la heredad. Aunque esta última incrementó bastante sus dimensiones, ante las anexionen por compra de terrenos a ella limítrofes, en años posteriores<sup>160</sup>. Las condiciones que presentaban estas fincas, proximidad al núcleo de población y ciertas posibilidades de riego, hacían del arrendamiento la fórmula más rentable para su explotación; no implicaba la cesión del dominio útil de una propiedad bastante valorada, a la vez que permitía la revisión y el alza de las rentas.

Alberola Romá señala como ya en el siglo XVII estas dos fincas eran cedidas en arrendamiento a corto plazo. La heredad de Cabrafich, en un principio (hacia 1642), era arrendada por terceras partes, generalmente por un periodo de 8 años, 4 de ferm-de obligado cumplimiento-, y 4 de respit -voluntarios-. Sin

-----  
<sup>159</sup> ANJ. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu, P. 26, año 1826, fs. 47 vto.-49. En otros documentos posteriores presenta una cabida ligeramente superior, en torno a las 9 o 10 tahúllas de tierra huerta arbolada. AHPA. Prot. Not. de J. Cirer y Palou, P. 501, año 1851, 1<sup>er</sup> Tomo, fs. 201-207 vto., y P. 526, año 1861, fss. 2375 vto.-2378. La superficie consignada en el Registro de la Propiedad a comienzos del s. XIX, se aproximaba a 1,4 ha. Registro de la Propiedad de Jijona, Finca 883, T. 427, Lib. 22, Busot, f. 174.

<sup>160</sup> En un arrendamiento concedido en 1810 figura con una extensión de 72 jornales (12 jornales de tierra anexa adquiridos a un labrador, parte de ellos sin cultivar). AHPA. Prot. Not. de F. Aracil, año 1810, fs. 94 vto.-96 vto. En el Registro de la Propiedad, la cabida de esta finca supera las 50 ha. (29,5 de ellas cultivables y el resto de monte.

embargo, con posterioridad (hacia 1660), la finca era cedida entera, siendo los 8 años de obligado cumplimiento. Con el tiempo, ante la revalorización de la heredad y el interés despertado en los vecinos, tuvo lugar la reducción del contrato a 4 años, así como la elevación de los cánones anuales a satisfacer por San Miguel (las 25 libras a que ascendía su cuantía en la década de los cuarenta del siglo XVII fueron cuadruplicadas en la de los sesenta, llegando a superar las 165 libras a mediados del siglo XVIII<sup>161</sup>).

Estas rentas anuales quedan lejos de las 400 libras concertadas entre el Marqués del Bosque y Mariano Alberola, labrador residente en la misma heredad, en 1804<sup>162</sup>. La cuantía del canon hacía necesaria su división en tres pagos, en Navidad, Pascua de Resurrección y Espíritu Santo. El tiempo de duración sigue siendo de 8 años, sin llegar a especificarse si alguno de ellos es voluntario; probable indicativo de la continuación de la tendencia anterior.

Con las condiciones estipuladas, el dueño de la finca intentaba garantizar el mantenimiento y la mejora continuada de la propiedad, y controlar los cultivos implantados en la misma; aunque no se indica de modo expreso las especies a cultivar (que, en ocasiones, si se especificaban en otros señoríos, como es el caso de la Vallonga de Burgunyo).

-----  
<sup>161</sup> ALBEROLA ROMA, A. (1984): Op. Cit., pp. 441-442.

<sup>162</sup> AHPA. Prot. Not. de F. Sala y Cantó, P. 1624, fs. 2 vto.-3 vto.

En este sentido, se exigía, en primer lugar, que el arrendatario trabajase la tierra a uso y costumbre de buen labrador (de igual modo sucedía con la casa como inquilino). Las obligaciones de "ingerir" (injertar) de buena calidad todos los algarrobos que hubiere de mala calidad a sus costas" y de plantar todos los árboles que la señoría estimase necesario, procurándole ésta los pies, sin solicitar por ello una reducción del precio del arrendamiento; el deber del arrendatario de limpiar toda la acequia y de realizar su reparación parcial (a partir de la balsa hacia las tierras, puesto que hasta la balsa eran por cuenta del señor), por causa de "avenidas de aguas pluviales o por cualquier otro motivo"; y la prohibición de permutar o vender el agua de que disponía a otros vecinos, requiriéndose su empleo permanente en el riego de la heredad eran algunos de los capítulos contenidos en la escritura y que reflejan el interés señorial.

D. Rafael Canicia Vaillo de Llanos se aseguraba también el aprovechamiento de las utilidades rísticas, al reservarse para sí los troncos de los árboles que se secasen, correspondiendo al colono únicamente los ramajes. Al contrario de lo que señala Alberola Romá en relación a las mejoras realizadas en la heredad en períodos anteriores, las cuales, evaluadas por dos expertos (nombrados por el señor y el arrendatario) tras la finalización del arriendo -junto con los gastos ocasionados por las mismas-, eran, en parte, abonadas por el dueño, en esta ocasión se hace constar expresamente que el arrendatario no recibirá ninguna cantidad por este concepto, puesto que el arrendamiento "se hace

con la condicion de que han de ir siempre en aumento y no en disminucion". Por último, el señor intentaba garantizar la percepción íntegra de la renta anual acordada (de modo que las consecuencias de una mala cosecha recayeran únicamente sobre el cultivador) incluyendo la advertencia de que este último no pudiese solicitar ninguna deducción en el precio del arriendo por causa de "piedra, niebla, esterilidad, peste, agua, guerras, langosta, ...".

A pesar de la cesión en arrendamiento de la heredad por un período de 8 años, en 1810 era arrendada de nuevo, a otro vecino y labrador de Busot, probablemente pariente del anterior cultivador (José Alberola)<sup>163</sup>; aunque ahora con una cabida de 72 jornales (288 tahúllas -34,59 ha.-), los 60 que ya contenía la finca, más los 12 jornales de tierra anexa añadidos posteriormente tras su compra (2,5 jornales plantados de árboles y el resto inculto). La duración de este contrato era más reducida, fijada en 6 años "precisos y obligatorios", y seguía manteniéndose el pago fraccionado de la renta anual (ahora 406 libras). Se añadían en este caso una serie de nuevas exigencias, como "tregillar"<sup>164</sup> las tierras siempre que fuese necesario (ordenándolo hacer el señor a costa del colono en caso contrario), roturar cada año medio jornal de los que permanecen incultos, y presentar fiadores que se responsabilizaran del cumplimiento de las condiciones de arrendamiento.

-----

<sup>163</sup> AHPA. Prot. Not. de F. Aracil, P. 96, fs. 94 vto.-96 vto.

<sup>164</sup> Allanar o igualar la tierra con una trailla (especie de cogedor o allanador movido por tracción animal o mecánica).

Por lo que respecta al "Huerto de la Señoría", durante el S. XVII, el dueño del lugar lo arrendaba por periodos de 8 años, aunque a partir de la década de los setenta se reducen a 4; sin embargo, el cánón anual se mantendrá durante todo el siglo, con algunas oscilaciones, entre las 44 y 50 libras, incrementándose su cuantía en la centuria siguiente (superan las 75 libras a mediados de siglo). Aparecen también recogidos algunos de los requisitos expuestos para Cabrafich, como el pago de la escritura por cuenta del arrendatario, la necesidad de dar fianza o la negativa a realizar cualquier tipo de deducción del precio del arrendamiento ante los avatares meteorológicos, incendios, entre otros posibles desastres<sup>165</sup>.

En el contrato de arrendamiento otorgado en 1798 por Mateo Arnau (arrendatario del lugar de Busot y sus derechos dominicales) a un labrador y vecino de Busot para un periodo de 8 años (1800-1807), no se modifican ninguna de las condiciones señaladas; sino que, al contrario, el nivel de precisión y la preocupación por regular la forma de explotación de esas tierras son mucho menores. Unicamente se alude a la necesidad de presentar fiador. La renta anual, que ya se sitúa sobre las 125 libras (una cantidad relativamente mucho más alta que la que percibía por la cesión de Cabrafich), debía entregarse en una

---

<sup>165</sup> ALBEROLA ROMA, A. (1984): Op. Cit., p. 442.

sola paga el 31 de diciembre (El "día de cabo del año")<sup>166</sup>.

En último lugar, y al margen de los ingresos percibidos por el señor en función del ejercicio directo de la jurisdicción, resta mencionar los derechos de monopolio, comúnmente conocidos como regalías (derechos exclusivos, privativos y prohibitivos), de gran importancia en el montante global de las rentas señoriales.

Alberola Romá ha documentado, para el s. XVII, la existencia de un variado grupo de regalías (molino, hornos de pan y vidrio, tienda, taberna, fleca o panadería, "herbatje", y, en ocasiones, la sisa de la carne y treta de mercaderías<sup>167</sup>), aunque más reducido que el que aparece en otros ámbitos<sup>168</sup>, cuya gestión solía ceder el señor en arrendamiento (mediante contratos de carácter anual -aunque, a partir de la década de los 60, se incrementa, en algunos casos, el periodo de concesión hasta 4 o 6 años-, y percibiendo cantidades entre las 20 y las 50 libras anuales por cada uno de los derechos), generalmente de manera individual, rematando los diferentes derechos del lugar en

-----

<sup>166</sup> Este huerto, en el momento de la concesión de la escritura, se encontraba todavía arrendado (finalizando el contrato en 1799), y probablemente al mismo arrendatario. Así se justificaría la falta de especificación de las condiciones que regulen el arrendamiento. ANJ. Prot. Not. de Tomás Brotons y Bernabeu, año 1798, P. 21, fs. 44-44 vto.

<sup>167</sup> El derecho de treta regulaba las cantidades que se debían pagar a la señoría por cada producto que se pretendiera sacar del término particular del lugar para ser vendidos en otras zonas. En 1640, su arriendo fue adjudicado al Justicia y Jurados de Busot por 12 libras y 7 sueldos. ALBEROLA ROMA, A. (1984): Op. cit., p. 448.

<sup>168</sup> CISCAR PALLARES, E. (1977): Op. Cit., pp. 228-236; GUAL CAMARENA, M. (1989): Op. Cit., pp. 73-81; GIL OLCINA, A. (1979): Op. Cit., pp. 52-55.

ública subasta, aunque también se ha localizado algún ejemplo de arrendamiento global del lugar y sus derechos dominicales, (práctica más escasa durante este periodo); así como el recurso, ante la falta de algunas dependencias señoriales, a ciertos acuerdos para el abastecimiento de la población<sup>169</sup>.

Sin embargo, tras la consulta de los protocolos notariales (correspondientes al periodo comprendido entre 1794 y 1811) de T. Brotons y Bernabeu, sólo tenemos constancia del arrendamiento de un grupo de regalías más reducido que el constituido durante el siglo anterior. La inexistencia de referencias a los arriendos del molino, derecho de treta, sisa de

---

<sup>169</sup> Por ejemplo, al carecer el lugar de almazara, el señor tenía arbitrado el abasto de aceite al mismo, el cual era arrendado anualmente al mejor postor, en función del precio al que pensaba vender la libra de aceite. ALBEROLA ROMA, A. (1984): Op. Cit., pp. 443-450.



la carne o herbatje del lugar<sup>170</sup>, probablemente, venga determinada por la naturaleza de las fuentes consultadas (protocolos), una cesión al ayuntamiento como propios o arbitrios (sisa de la carne, abastecimiento de aceite y aguardiente, o la regalía del "cubillo" -abastecimiento de cereales-) para el sostenimiento de los gastos del municipio (reparaciones, contribuciones del equivalente, veredas, ...), o, incluso, su posible desaparición. La aleatoriedad que caracteriza las fuentes notariales<sup>171</sup> y la probable reducción experimentada por el espacio forestal del término parece ser las razones más adecuadas ante la carencia de noticias acerca del herbaje. En un

-----

170 El arrendamiento de este derecho se realizaba con carácter temporal, otorgado generalmente a vecinos de Jijona, aunque con una trascendencia económica muy inferior a la que revestía en otras zonas del Reino de Valencia o del Reino de Aragón. En este último caso es significativo el ejemplo del "Estado de Luna", donde el señor, además de las numerosas tierras de pastos de que disponía en propiedad, también participaba del aprovechamiento de las tierras del común, sobre las que ejercía un estricto control. El arrendamiento a corto plazo de los pastos (generalmente a favor de la burguesía agraria -que a su vez los subarrendaba al vecindario- o de los ganaderos de la región, y, en el caso de los cortinales, a los vecinos de sus términos), con las contrapartidas que conllevaba (como la satisfacción del diezmo del ganado que pastase en ellos, el aprovechamiento del estiércol, o el costeamiento de los gastos de mantenimiento por el arrendatario), y no sólo para el desarrollo de una actividad pecuaria, sino de otro tipo de actividades como carboneo, caza, pesca entre otros (aunque menos rentables), proporcionaba cuantiosos ingresos al señor. ORTEGA, M.: "El aprovechamiento de las tierras de pasto en el "Estado" de Luna durante el s. XVIII", *Agricultura y Sociedad*, n.º 43, 1987, pp. 145-162; GARAY MONZO, J. M.: "Los señoríos de la Hoya de Buñol y los Serranos en el s. XVIII", *Estudis*, n.º 9, 1981-1982, Valencia, pp. 267-303.

171 Aunque en este caso contrasta el hecho de que se hayan localizado escrituras de subarrendamiento de la mayor parte de las regalías señoriales (por Mateo Arnau, arrendatario de los derechos señoriales de Busot), y entre éstas no figure ninguna del arrendamiento del herbaje. La explicación puede residir en el recurso a otros notarios residentes en otras zonas.

testimonio librado por T. Brotons en cumplimiento de la requisitoria que exigía a los pueblos de la zona (Muchamiel, Villafranqueza, Busot, Agost y San Juan) la presentación de los títulos de pertenencia de las regalías de pesos y medidas, pilón de carnicería y herbajes que estaban disfrutando, se declaraba que había sido el apoderado del señor territorial el que había cobrado desde tiempo inmemorial "el pago de herbajes y daños" hasta 1811, fecha a partir de la cual dicho derecho pasó a depender de la Justicia de Busot<sup>172</sup>.

En este sentido, existen testimonios que revelan esa situación de disminución de espacios forestales derivada, por una parte, de las talas realizadas con el fin de obtener leña destinada a los hornos existentes en el lugar (hornos de vidrio, de pan, "de cal y yeso", tejar,...). Así, en un expediente instado por los Marqueses del Bosch y Condes de Torrellano (R. A. Canicia y Vaillo de Llanos y C. Pascual de Riquelme y Vergara) oponiéndose al traslado de un horno de vidrio establecido a un particular, desde Aguas Altas (Aguas de Busot) a Busot, se pone de manifiesto esta situación: "(...), porque se cuentan en Busot cinco Ornos de pan cocer, una fabrica de vidrio, dos de tejas, y sobre quince à veinte ornos de cal y yeso, de suerte que para sostener todos estos artefactos de continuo consumo tienen talados no solo los montes de aquel termino sino los delos inmediatos. Cede asimismo en perjuicio del Real Patrimonio, porque por consecuencia de este abuso y dela falta de leña que

-----

<sup>172</sup> ARV. Bailía, E, Expediente n° 3345, año 1827, fs. 1-4 vto.

ya se observa, vendran a cerrarse ó quedar sin uso todos los establecimientos (...)"<sup>173</sup>. Otro de los motivos a destacar serían las roturaciones efectuadas en estos espacios ante el crecimiento demográfico del siglo XVIII; y cuya gran extensión por el término ya revela Madoz: "El terreno que comprende la jurisdiccion de Busot es desigual, sembrado de cerros y lomas, cuasi todas reducidas a cultivo, y plantado de viñedos, almendros y algarrobos; que forman una especie de frondosos y espesos bosques (...)"<sup>174</sup>.

A finales del siglo XVIII y durante los primeros años del siglo XIX, hasta la abolición del régimen señorial, las regalías del lugar, así como el resto de los derechos señoriales, no fueron cedidos en arrendamiento independientemente unos de otros, como había sido la norma de actuación predominante a lo largo del siglo anterior, y, probablemente, de la primera mitad del siglo XVIII, si no que fueron arrendados de forma global a Mateo Arnau, labrador y vecino de Busot, quien figura como

-----  
<sup>173</sup> ARV. Bailía, E, Expediente 3.553, año 1830, folios 8-10

<sup>174</sup> MADOZ, P. (1845): Op. Cit., p. . Este hecho es también puesto de manifiesto en el expediente anteriormente mencionado, donde se señala la utilización como leña de las especies arbóreas cultivadas: "(...) que en esta Universidad de Busot hay mucho arbolado de Algarrobos, Almendros, olivos, e Higueras enterminos que abunda en exeso esta especie de Leña de modo que de tres partes que consume de leña el horno de vidrio de la Marquesa del Bosque, dos partes son leña de arbol que venden los Labradores al arrendador de dicha Fabrica y este la compra al precio de tres o quatro quartos la arroba (...)" ARV. Bailía, E, Exp. 3.553, año 1830, pp. 90 vto.-91.

"arrendador (arrendatario) del lugar y sus derechos dominicales", ya con anterioridad a 1795, manteniéndose en este puesto hasta la entrada en vigor del decreto de 6-VIII-1811<sup>175</sup>.

Mateo Arnau, probable integrante de la familia de artesanos que tradicionalmente se había encargado del horno de vidrio señorial<sup>176</sup>, subarrendaba a su vez cada una de estas regalías, generalmente a "trabajadores" (jornaleros o asalariados) residentes en Busot, aunque en alguna ocasión los beneficiarios de estos contratos residían en otras localidades (muy próximas a Busot -Muchamiel por ejemplo-) y desempeñaban actividades relacionadas con el comercio ("tragineros", "tratantes"). La continuidad de los arrendatarios variaba considerablemente de unas regalías a otras, aunque, por lo general, los arrendamientos no solían prorrogarse más de un nuevo contrato.

-----

175 En un subarrendamiento del tejat de la señoría realizado por Arnau en 1805, la duración del contrato se fijó en tres años, los mismos "que le quedan de arrendamiento de este pueblo". ANJ. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu, P. 22, año 1805, fs. 22-22 vto. El arrendamiento del lugar y sus derechos le fue renovado con posterioridad por otros 6 años más, como lo atestiguan las escrituras de arrendamiento de los diversos derechos de monopolio, otorgadas a diferentes vecinos de Busot por un periodo de 6 años o el tiempo que restase hasta finalizar el año 1813. ANJ. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu, P. 23, año 1807, fs. 18-19 y 106 vto.-107 vto., año 1808, fs. 1 vto.-2 vto. y año 1809, fs. 43-43 vto. La abolición del régimen señorial y la consiguiente supresión de los derechos privativos, exclusivos y prohibitivos probablemente ocasionaron la interrupción y rescisión del contrato.

<sup>176</sup> ALBEROLA ROMA, A. (1984): Op. Cit., p. 445.

La duración de los contratos de arrendamiento<sup>177</sup> oscilaba entre los cuatro y los ocho años, dependiendo del derecho de que se tratara<sup>178</sup>. Este periodo de tiempo se verá posteriormente reducido, cuando, tras la implantación del nuevo marco político y legal, las regalías hayan desaparecido, permaneciendo únicamente como propiedad señorial las diferentes edificaciones e instalaciones "industriales".

Por lo que respecta a las condiciones de cesión, son muy escasas, casi inexistentes, las exigencias y obligaciones que contienen las escrituras anteriores a 1811. El único requisito que se hace constar siempre es la necesidad de presentar un fiador que asuma las responsabilidades del arrendatario. Esta falta de regulación tal vez encuentre su justificación en el hecho de ser subarrendamientos en los que ya se den por aceptadas las cláusulas establecidas en el "arrendamiento principal" realizado por los marqueses; puesto que este capítulo es cuidadosa y detalladamente configurado en las escrituras posteriores a 1814. En ellas, y al margen de las condiciones estipuladas específicamente para cada uno de los establecimientos considerados en el pasado como regalías, se incluyen, como cláusulas comunes a la mayor parte de los contratos de

-----  
<sup>177</sup> Más propiamente de subarrendamiento, pues de los contratos de arrendamiento del conjunto de los derechos señoriales otorgados por el Marqués directamente, o por medio de su apoderado, no hemos localizado ninguna escritura.

<sup>178</sup> Las escrituras de arrendamiento eran otorgadas bien a finales del año antecedente al del inicio del arrendamiento (octubre-diciembre), bien durante los primeros meses del mismo (enero-marzo), aunque en alguna ocasión se apreciaba un considerable retraso en la formalización de la escritura.

arrendamiento, la exigencia de presentar fiador, el mantenimiento de edificios e instalaciones por cuenta del arrendatario, la obligación de satisfacer los gastos que ocasionase la concesión de la escritura, así como de proporcionar una copia franca y auténtica de la misma al otorgante entre otras. Además, y respondiendo al intento de los marqueses de garantizar la percepción íntegra de las rentas derivadas de ellos, se añade la advertencia de que "por ningún caso fortuito pensado o impensado, que suceda, no pueda pedir rebaja de Pension ni moderación alguna del precio de este arrendamiento, por hacerse a todo riesgo y peligro de ... (del beneficiario)"<sup>179</sup>.

Los dos hornos "de pancocer" ("el de abajo", más antiguo, y "el de arriba", también "llamado del arrabal"), que por estas fechas poseían los Marqueses del Bosch en el lugar de Busot, eran arrendados tanto conjuntamente a una misma persona, como por separado, aunque también se da el caso de que el arrendatario de los dos hornos subarrendase posteriormente uno de ellos a otra persona<sup>180</sup>. La duración del contrato de arrendamiento, siempre a corto plazo, variaba en función de esta circunstancia; entre 4 y 6 años si se arrendaban los dos hornos a una misma persona, y sobre 8 años si eran dos personas diferentes.

-----  
<sup>179</sup> ANJ. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu, P. 26, año 1826, fs. 45 vto.-46 vto.

<sup>180</sup> Por ejemplo, J. Espí, "hornero", vecino de Busot, daba "en subarrendamiento el Orno titulado el de arriba que lo es del Arraval a M. Planelles, trabaxador de esta propiedad", por un periodo de 6 años y una renta de 3 reales de vellón diarios (73 libras), puesto que "no puede llevar corriente mas que uno. P. 23, año 1807, fs. 79-79 vto.

La renta anual percibida variaba notoriamente de un horno a otro, pues mientras por el arrendamiento del horno más antiguo la renta estipulada, en 1799, superaba las 100 libras, el del más reciente solamente reportaba la mitad de esa cantidad<sup>181</sup>. En conjunto, el arrendatario de los derechos señoriales obtenía por esta regalía unos ingresos que oscilaban entre las 120 libras, en 1795, y las 200 libras, en 1807, "pagaderas todos los meses mes cumplido mes pagado al tanto que corresponde"<sup>182</sup>.

Por lo que respecta a las condiciones específicas impuestas en la concesión del arrendamiento, únicamente se mencionan la obligación de "atisar los cuatro años del arrendamiento pagandole el tanto corriente de cinco reales vellón cada día"<sup>183</sup> y el compromiso asumido por el otorgante de pagar todas las costas, daños y perjuicios de producirse la interrupción del mismo<sup>184</sup>.

El algesar de Busot, "que pertenece al Marques del

-----  
181 ANJ. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu, P. 21, año 1799, fs. 2 vto.-3 y 3 vto.-4.

182 ANJ. Prot. Not. T. Brotons y Bernabeu, P. 20, año 1795, fs. 98-99.

183 estar de atizador en el horno de vidrio. ANJ. Prot. Not. de T. Brotons, P. 20, 1795, fs. 98-99.

184 Aunque ésta es una forma de garantizar al arrendatario la continuidad del arrendamiento durante el tiempo convenido, puede asegurar, asimismo, al otorgante la posibilidad de su interrupción siempre que asumiera costas, daños y perjuicios. ANJ. Prot. Not. T. Brotons, P. 23, año 1807, fs. 18-19.

Bosque como a señor directo de esta Universidad"<sup>185</sup>, era igualmente subarrendado por Mateo Arnau, aunque, en este caso, a vecinos de Muchamiel principalmente. Los periodos de arrendamiento oscilan entre 4 y 6 años, predominando los primeros; situándose el precio anual entre las 60 y las 86 libras, cuyo pago se efectuaba, en una sola entrega, el día de Navidad o el "día de cabo de año". A este respecto, se ha de señalar el importante descenso experimentado en la cuantía de estas rentas desde 1799. Con posterioridad a 1808 no se ha localizado ningún nuevo contrato de arrendamiento, hecho justificable bien por esa pérdida de rentabilidad, bien por la nueva coyuntura sociopolítica.

Este descenso en la cuantía de las pensiones anuales afecta de igual modo a los arrendamientos del tejar, aunque en este caso han sido dos solamente las escrituras halladas. Mientras en 1796 era cedido en arriendo por un periodo de 8 años y un rento anual de 53 libras, a satisfacer en S. Miguel de septiembre<sup>186</sup>, en 1805 la duración del mismo se reducía a 3 años (tiempo que restaba de arrendamiento al "arrendador" de los derechos dominicales) y su cuantía se fijaba en 45 libras anuales<sup>187</sup>. Tras la promulgación del decreto de abolición de

-----

<sup>185</sup> ANJ. Ibidem, P. 21, año 1799, fs. 84 vto.-85. Sin embargo, en alguna escritura aparece localizado en el término de Alicante, tal vez el área que habiendo pertenecido a Busot pasó a Alicante tras el deslinde y amojonamiento de ambos términos en 1773, o bien un sector comprendido en el término de Aguas Altas.

<sup>186</sup> ANJ. Ibidem, P. 20, año 1796, fs. 96-97.

<sup>187</sup> ANJ. Ibidem, P. 22, año 1805, fs. 22-22 vto.



señoríos, continuará la tónica apuntada tanto para las rentas como para el tiempo de duración de los contratos (situado en 4 años).

Probablemente, el horno de vidrio fue llevado personalmente por M. Arnau -cuya familia había desempeñado tradicionalmente esta actividad- hasta 1809, fecha en que fue otorgada la única escritura de arrendamiento anterior a 1811 que se ha podido localizar. Las 134 libras en que fue establecida la cuantía de su arriendo se aproximan bastante a la cantidad fijada para el del horno de pan más antiguo, a pesar de la diferencia existente entre ambas actividades. La duración del contrato depende, como en casos anteriores, del tiempo de arrendamiento que aún le restaba por cumplir al arrendatario de los derechos señoriales<sup>188</sup>.

La única condición recogida en la escritura es la que advierte que "siempre que llegase el caso de que invadiesen esta gobernacion los enemigos, o llegase el caso de contagiarse por alguna epidemia, haya de cesar el arrendamiento de dicho horno, por aquel tiempo en que estuviera infectado dicho terreno, pero pasado uno u otro, hayan de continuar los susodichos en el arriendo"; destacable por su singularidad, puesto que el arrendador toma en consideración las posibles dificultades que puedan tener lugar en un futuro, admitiendo la suspensión del arriendo durante el tiempo que se prolonguen las mismas, sin

-----  
<sup>188</sup> En este caso 4 años precisos y obligatorios, más lo que quedaba del año de concesión de la escritura. ANJ. Ibidem, P. 23, año 1809, fs. 43-43 vto.

exigir ninguna compensación económica y reconociendo el derecho, a la vez que obligación, de los arrendatarios a proseguir con el arrendamiento. En la difícil coyuntura de estos momentos (guerras, epidemias, avatares meteorológicos, hambre)<sup>189</sup> encontraríamos una posible explicación a este hecho.

En una única ocasión, fueron, de igual modo, subarrendadas las regalías de tienda, taberna y panadería por M. Arnau, las cuales fueron cedidas conjuntamente a Pablo Alemany (trajinante, vecino de Busot) por un precio anual de 340 libras, cuyo pago era efectuado de una sola vez el día de Navidad, y durante un periodo de 6 años precisos y obligatorios; periodo que no llegaría a completarse ante la supresión de los derechos de monopolio señoriales a raíz de la promulgación del decreto de 6-VIII-1811. Las exigencias de presentar fiador y de procurar abastecer suficientemente la tienda, de acuerdo a los capítulos establecidos con ese fin, son las únicas condiciones mencionadas en la escritura<sup>190</sup>. A este respecto, Alberola Romá, además de señalar la importancia que adquieren para ejercer un estricto control del mercado local por el señor, recoge como normas de obligado cumplimiento el acudir exclusivamente ahí para

-----  
<sup>189</sup> ARDIT LUCAS, M.: *Revolución liberal y revuelta campesina. Un ensayo sobre la desintegración del régimen feudal en el País Valenciano (1793-1840)*, Ariel, Barcelona, 1977, pp. 79-87; PALOP RAMOS, J.M.: *Hambre y lucha antifeudal. Las crisis de subsistencia en Valencia (s. XVIII)*, Siglo XXI, Madrid, 1977, pp. 197-219; BADENAS MARTIN, M.A. y BERNAT MARTI, J.S.: "Epidemias y hambre en la crisis del "Antiguo Régimen". Estudio demográfico (1808-1814)". *Estudis d'història contemporània*, n° 2, Valencia, 1981, pp. 115-137.

<sup>190</sup> ANJ. Ibidem, P. 23, año 1807, fs. 106 vto.-107 vto.

abastecerse de lo necesario, el estar suficiente surtida de productos de primera necesidad -bajo la pena de 10 sueldos-, y la total prohibición de la venta de cualquier género, exceptuando los sábados (día de mercado)<sup>191</sup>.

La estimación del montante global de los ingresos del arrendatario de los derechos señoriales presenta diversas dificultades<sup>192</sup>, al desconocerse, en este caso, la cuantía de la porción correspondiente al señor, así como el total de la renta extraída del arrendamiento de las regalías, puesto que algunas (horno de vidrio, tienda, taberna y panadería) fueron, durante un tiempo, llevadas por él personalmente. De igual modo se ignora (pues no se ha encontrado ninguna escritura de arrendamiento otorgada entre M. Arnau y el Marqués del Bosch) si en el arrendamiento del lugar y sus derechos dominicales figuran incluidos, junto a las regalías y otros derechos derivados del ejercicio de la jurisdicción, los dimanantes de la propiedad de la tierra. De los datos obtenidos, se puede evaluar una renta anual que oscila entre las 200 y las 300 libras desde 1796 a 1807 (no siempre en continuo incremento, aunque el descenso de las rentas procedentes de unos derechos, se ven compensado por el

-----  
<sup>191</sup> ALBEROLA ROMA, A. (1984): Op. Cit., pp. 445-446.

<sup>192</sup> La participación de estos arrendatarios en la renta señorial, a pesar de las dificultades que conlleva su evaluación, ha sido destacada por diversos autores. Así, en este sentido se ha señalado la importancia de los beneficios que generaba esta actividad, desempeñada generalmente por los labradores acomodados de los distintos lugares (incluyendo también a algún comerciante). Este es el caso de Mateo Arnau, labrador y probable miembro de la familia encargada tradicionalmente del horno de vidrio. MORANT DEUSA, I. (1984): Op. Cit., pp. 113-116.

alza de otras, generalmente relacionadas con la producción de productos de primera necesidad), y las 600 y 734 libras (con la inclusión del arriendo de la tienda, taberna y panadería) desde 1808 hasta la supresión de las regalías.

Si hemos localizado una escritura de arrendamiento del molino harinero conocido como "el de Busot" otorgada directamente por D. Rafael Canicia Vaillo de Llanos, Marqués del Bosque, el 13-XI-1803, a los hermanos Llopes, molineros y vecinos de Muchamiel<sup>193</sup>. El molino, situado en la partida de Monnegre, se arrendaba, con su muela corriente y los "aderentes necesarios", junto a la casa de habitación y 12 jornales de tierra, por un periodo de 4 años y una renta anual de 317 L., en un sólo pago a efectuar el día de San Miguel. Al inicio del arriendo se procedía al justiprecio por peritos de los arreos y muela del molino, y si al finalizar éste se hubiera reducido su valor, los arrendatarios estaban obligados a satisfacer al marqués la diferencia. En caso contrario, eran los nuevos arrendatarios, y en su defecto, el marqués, los encargados "de bonificar el exceso".

Las condiciones establecidas abarcaban diversos aspectos, como el adecuado cultivo de las tierras (se exigía trabajar las tierras a uso y costumbre de buen labrador, aunque las mejoras quedaban "a beneficio de la casa", sin obtener rebaja del precio por ello el arrendatario), el mantenimiento de las instalaciones de la finca, en el que participaban las dos partes

-----  
<sup>193</sup> AHPA. Prot. Not. de F. Sala y Cantó, P. 1624, fs. 106 vto.-109 vto.

(aunque en mayor medida el arrendatario)<sup>194</sup>, y la garantización de la percepción de la renta anual establecida. En este último punto se incidía bastante, pues además de hacer constar que no habría rebaja del precio del arriendo por ninguna causa, y que, en caso de no satisfacer alguna de las pagas, podrían ejecutarlas por su importe y costas, y, pasados 20 días del requerimiento, retirar el arrendamiento, se exigía la hipoteca de varias fincas de los arrendatarios. Por último, además de la renta anual, estaban obligados a entregar diversas adehalas (un cerdo de 11 a 12 arrobas durante el mes de diciembre, y 12 gallinas el 21 de ese mes), llevándolas a la casa de la señoría, y sin solicitar una reducción del precio de arrendamiento.

Por otra parte, en el ayuntamiento del lugar había recaído la tarea de otorgar en arrendamiento, en pública subasta y remate al mayor postor, una serie de regalías relacionadas con el abastecimiento y la venta "por menudo" de productos de primera necesidad (aceite, aguardiente, harina de trigo, cebada o panizo-cubillo-, nieve), cuyos ingresos pasaban a engrosar el caudal de propios y arbitrios, destinados a cubrir los gastos municipales. Así es puesto de manifiesto en varias escrituras notariales,

-----  
<sup>194</sup> Por ejemplo, los gastos que ocasionara "la presa del agua hasta el partidador de enfrente del Molino, que posee el conde de Almodóvar" (D. Rafael Ortiz) serían costeados por el arrendatario. El marqués se encargaría de mantener en condiciones la acequia, debiendo avisarle los arrendatarios cuando ésta se encontrase en malas condiciones. Asimismo, todo el estiércol producido en el corral o la casa debía ser echado a las tierras arrendadas junto al molino; y al finalizar el arriendo, el arrendatario tenía que dejar allí 12 cargas de estiércol, pagando lo que faltase al precio corriente, aunque podría quedarse con el excedente en caso de existir éste.

donde se menciona la entrega de las cantidades estipuladas por estos arrendamientos de carácter anual -bien por tercias (anticipándose su pago si fuera necesario)<sup>195</sup>, bien a lo largo del año según las urgencias, satisfaciendo lo que restase al finalizar el año en una sola paga<sup>196</sup>-, para sufragar las contribuciones por veredas, tercias del Equivalente<sup>197</sup> u otro tipo cualquiera de gastos.

La cuantía de estas cantidades varía según el producto de que se trate y de unos años a otros, puesto que no es un cánon impuesto de antemano, sino que su valor depende de los remates al mejor postor. En el caso del arrendamiento de la nieve, por uno o dos años, la renta se satisfacía en dos plazos fijos, de cuantía diferente según el importe anual, uno en el día de la Virgen de agosto, y el otro en el día de Todos los Santos.

-----  
<sup>195</sup> En el caso del arrendamiento de la regalía del aceite se establece la obligación de "dar al depositario de Propios las tercias adelantadas o anticipadas del tanto porque se arrendase, según fueren las urgencias". ANJ. Ibidem, P. 20, año 1794, fs. 3-4.

<sup>196</sup> "que haya de pagar entre el año las cantidades que se necesitaren para las veredas y demas gastos que ocurran, según las urgencias, y el resto al Cabo de el año en una sola paga". ANJ. Ibidem, P. 21, año 1797, fs. 77 vto.-78 vto.

<sup>197</sup> Este era el destino de la renta extraída del arrendamiento del aguardiente: "el producto de este arrendamiento se ha de pagar para contribuir las urgencias de las pagas de las tercias del Equivalente de la Universidad cuando se necesite". P. 21, 1797, fs. 68 vto.- 69 vto.

CUADRO V

AÑOS	ACEITE	AGUARDIENTE	CUBILLO	NIEVE
1795	40L 10s	14L	70L	28L
1796	67L 10s	24L 10s	58L 5s	
1797	123L	31L 10s	78L	
1798	106L 5s	21L 10s	61L 10s	
1799	72L	20L 10s	104L 10s	95L
1800				95L
1806		103L		

Fuente: ANJ. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu.

Elaboración propia.

Para poder formalizarse la cesión en arrendamiento de estas regalías era necesario que la "postura" en la subasta alcanzase como mínimo  $\frac{2}{3}$  del valor de la renta obtenida el año anterior. Por este motivo, la concesión del arrendamiento del cubillo correspondiente a 1795 no pudo realizarse a finales de 1794, como era la norma habitual, sino que hubo de aplazarla hasta los inicios del año siguiente<sup>198</sup>. Sin embargo, se ha

-----  
<sup>198</sup> ANJ. Ibidem, P. 20, 1975, fs. 1-2.

comprobado, que a pesar de haberse aceptado una postura y otorgado la correspondiente escritura, si se formulaba posteriormente otra oferta mejor, era esta última la que optaba al arriendo, anulándose la anterior<sup>199</sup>.

La regalía del aceite llevaba agregado el abastecimiento de sal, para el que se había establecido una ganancia de 45 dineros por cada fanega (15 en la venta, y 30 por el porte desde la ciudad de Alicante -15 dineros por cada legua, "según Real Orden-)"<sup>200</sup>.

Por lo que respecta a los arrendatarios, la mayor parte eran vecinos de Busot, observándose, en algunos casos, la obtención del arrendamiento de varias regalías durante el mismo año, o en años distintos, por la misma persona.

En lo referente a las condiciones de arrendamiento, se pueden destacar una serie de puntos en los que inciden la mayor parte de las escrituras. La presentación de fianza en el acto de remate; la obligación de suministrar productos de buena calidad, comprobada por los regidores o diputados<sup>201</sup>; el establecimiento de los precios manteniendo como referencia el existente en otras

-----  
<sup>199</sup> Asi, a finales de noviembre de 1795 era arrendada la regalía del cubillo a Carlos Climent de Carlos, vecino de Busot, por 47 libras; arrendamiento que fue revocado un mes más tarde, para ser concedido de nuevo a favor de Joseph Giner, también vecino de Busot, por 58 libras 5 sueldos. ANJ. Ibidem, P. 20, año 1795, 99 vto.-100 vto. y 119 vto.-120 vto.

<sup>200</sup> ANJ. Ibidem, P. 21, año 1798, fs. 62-63 vto.

<sup>201</sup> Por ejemplo, en el caso del arrendamiento de la regalía del aceite se establece que "el arrendador debe tener el aceite de buena calidad, y antes de ponerlo en las tinajas manifestarlo al regidor del mes, o diputados para que comprueben su calidad, ...". ANJ. Ibidem, P. 21, año 1797, fs. 77 vto.-78 vto.



zonas próximas, lo que se traducía en una ganancia de 5 sueldos por arroba, en el caso del aceite, y de 2 dineros por libra, en el del aguardiente, a partir del precio de venta en la ciudad de Alicante<sup>202</sup>; o la penalización con multas de diversa cuantía (3 libras por lo general) de producirse una carencia de productos para el consumo diario, durante un tiempo superior al permitido para estos casos<sup>203</sup>, son algunos de estos aspectos.

Se ha de señalar además la existencia de otras normas específicas para cada una de las regalías. En este sentido, en el caso del cubillo se exigía "vender harina de trigo y cebada en todo el tiempo del año, y en los meses de Diciembre, enero y febrero de Paniso, sin que le falte, teniendo la de trigo trece arrovas y media cada cahíz; la de cebada nueve y medio y la de Panizo doce arrobas, toda de buena calidad"<sup>204</sup>; así como avisar a los regidores o diputados para que actuasen en consecuencia, si, una vez cumplidos los tres meses estipulados en el abastecimiento de harina de panizo, el arrendatario no quisiera traer más. También se incluyen diversas prohibiciones impuestas a los

-----  
<sup>202</sup> El precio de venta fijado en Alicante tenía que ser hecho constar por el arrendatario a los regidores por escrito o de otra forma, para evitar la existencia de fraudes o abusos. "(...) haciéndoles constar por escrito o en otra forma el tanto de su valor para que lo venda al mismo precio que se vende en Alicante con el beneficio de 5 sueldos por cada arroba, moneda corriente, (...)". AJN. Ibidem, P. 20, 1794, fs. 3-4.

<sup>203</sup> El tiempo necesario para proceder a su compra en la ciudad de Alicante, en el caso del aceite, 10 horas en el del suministro de aguardiente, y 6 horas para la regalía del cubillo (abastecimiento de harina).

<sup>204</sup> ANJ. Ibidem, P. 21, 1797, fs. 65-66. En algunas ocasiones se observa una ligera variación en el número de arrobas que componían el cahíz (13 en el caso de harina de trigo, 9 en la de panizo).

trajineros, como la de traer harina a alguien en particular sin participarlo antes a los miembros del ayuntamiento y al "cubillero"<sup>205</sup>, o la de vender harina en las casas de los vendedores, debiendo realizar las ventas en la plaza del lugar, retirando el género sobrante, los vecinos del lugar, a sus casas, y, los forasteros, a casas de la población, aunque situadas lejos de la plaza<sup>206</sup>.

Por último, resta mencionar la costumbre de entregar al finalizar el arrendamiento una cantidad en metálico -la bestreta- que pasa de unos arrendatarios a otros, cuya cuantía asciende a 15 libras en el caso del aceite y a 35 en el del cubillo.

Al margen de estas regalías, el Ayuntamiento remataba en pública subasta, anualmente, el abasto de carne "de macho y oveja", a favor del postor que ofertara la libra de ambas clases de carne al precio más bajo. Este podía oscilar, según los años, entre los 64 y los 102 dineros por libra la carne de macho, y los 44 y los 66 dineros por libra la de oveja.

Durante los meses de julio y agosto el abasto debía de ser de carne de oveja, y de macho el resto del año, penándose su carencia durante un periodo superior a las 4 horas. Tanto el

-----

<sup>205</sup> En algún caso se precisa que la persona a la que vaya destinada dicha mercancía, ha de ser labrador y poseer un par de labranza. ANJ. Ibidem, P. 20, año 1775, fs. 1-2.

<sup>206</sup> "cualquier vecino traginero que viniese a vender harina lo pueda ejecutar en la plaza, y en la frontera de la Casa de Ayuntamiento, sin poder vender en las casas de los vendedores, y la que sobre se la hayan de llevar los del Lugar a sus casas y los forasteros la puedan dejar en las casas del lugar pero no en lo que mira a la cercanía de la plaza, para que no haya fraude, bajo la misma pena y aplicaciones". ANJ. Ibidem, P. 21, año 1797, fs. 65-66.

momento de realizar la matanza<sup>207</sup> como la forma de preparar la res para la venta<sup>208</sup> estaban perfectamente regulados. Estaba también estipulada la satisfacción por el abastecedor de varias cantidades en metálico, 15 libras por el derecho de pilón (que debía entregar al cortante como salario)<sup>209</sup> y 10 libras para el mantenimiento y conservación del local que hacía las veces de carnicería<sup>210</sup>. Por último señalar como en una escritura concedida en 1797 se limita a 160 ovejas y 8 machos el número de cabezas que el abastecedor podía mantener paciendo en el bovalar del lugar<sup>211</sup>.

-----  
207 "Que no pueda matar el carnicero hasta que quede media hora de sol, y esto cuando no hay necesidad, y arromanar que no hayan pasado seis horas despues de muerto, y caso de necesitarse matar de refresco se haya de avisar al Regidor del mes, dandosele al Carnicero media libra de refresco, y teniendo el regidor derecho para estar presente si quisiere al matar y arromanar". ANJ. Ibidem, P. 21, 1797, fs. 69 vto.-70 vto.

208 "El carnicero no pueda cortar de la res las degolladuras, la mitad de la capa dura, tela, ni entretela ni la punta del cuello, y que la Cabeza la deba cortar por la primera junta del cuello, y que no pueda cortar la tripacular sino es con el cuchillo llano, de modo que a la res no le falte mas que dicha tripacular, y la haya de arrancar a presencia del Abastecedor al tiempo de arromanar". ANJ. Ibidem, P. 21, año 1797, fs. 69 vto.-70 vto.

209 Así se pone de manifiesto en otro testimonio expedido por T. Brotons en 1819, a raíz de lo solicitado en la requisitoria mencionada en páginas anteriores. En este se declara que el abastecedor debe dar, por derecho de pilón, al cortante 15 libras "por el trabajo de matar, suma que este ha percibido desde tiempo inmemorial como salario". ARV. Bailía, E, Exp. 3345, 1827, f. 4.

210 "(...) siempre que se la pidan por el señor alcalde para invertirlas en lo que se necesite componer en ella.". ANJ. Ibidem, P. 21, año 1797, fs. 69 vto.-70 vto.

211 ANJ. Ibidem, fs. 69 vto.- 70 vto.

2.-Reacción antiseñorial, evolución de las prestaciones  
y pérdida del elemento solariego tras la abolición  
del régimen señorial.

La abolición del régimen señorial, que en otros enclaves señoriales de la zona (Peñacerrada, La Vallonga de Burgunyo) apenas revistió trascendencia en lo referente a la conservación de los patrimonios rústicos señoriales, fue, sin embargo, decisiva en el caso del señorío de Busot. A este hecho se une la incidencia de las disposiciones desvinculadoras y de otra serie de factores ligados, en algunos casos, al nuevo marco sociopolítico por él creado, para dar lugar a un proceso, generalizado en la mayor parte del Reino de Valencia, de supresión de hecho de los derechos señoriales y de descomposición de los patrimonios nobiliarios<sup>212</sup>; aunque con la excepción de algunas zonas, como el Bajo Segura, donde el proceso de disgregación y desmoronamiento de los antiguos patrimonios

-----  
<sup>212</sup> ARDIT LUCAS, M.: *Revolución Liberal y revuelta campesina. Un ensayo sobre la desintegración del régimen feudal en el País Valenciano*. Ariel, Barcelona, 1977; GIL OLCINA, A (1979): Op. Cit.; "La extinción de la propiedad señorial en territorio valenciano", *Estudios Geográficos*, n° 154, 1979, pp. 51-74; "Declive y ocaso de la enfiteusis señorial valenciana", *Agricultura y Sociedad*, n° 49, Madrid, 1988, pp. 293-318; MOXO, S. de: *La disolución del régimen señorial en España*, Madrid, 1965; MORANT DEUSA, I. (1984): Op. Cit.

señoriales ha sido más tardío<sup>213</sup>.

Fue menor, sin embargo, la incidencia de las disposiciones desvinculadoras, ante la decidida actitud de los titulares, tendente a la preservación del patrimonio territorial conservado (no establecido enfiteúticamente o bien recuperado mediante la adquisición del dominio útil). No fue posible su transmisión monolítica a un único titular, pero si se procuró transferir las diversas propiedades familiares en una serie de bloques constituidos de la forma más homogénea posible, así como evitar su posterior liquidación mediante diversos procedimientos (cesiones en usufructo, transmisiones proindiviso, favorecimiento de los primogénitos, ...), con desigual fortuna según los ámbitos afectados (Busot o Aguas frente a los señoríos del Bajo Segura -Algorfa, Formentera-); aunque, en el peor de los casos, el parcelamiento y disgregación de estos patrimonios y su enajenación a personas ajenas a la familia no se produjo hasta mediados del presente siglo<sup>214</sup>.

2.1.-La reacción antiseñorial inmediata al decreto de  
6-VIII-1811.

La incidencia del decreto de señoríos fue inmediata en el señorío de Busot desde el momento en que se tuvo noticia del mismo en dicha universidad. Desde el 24-IX-1811, en que fue hecho

-----  
<sup>213</sup> GIL OLCINA, A y CANALES MARTINEZ, G. (1988): Op. Cit.

<sup>214</sup> GIL OLCINA, A. y CANALES MARTINEZ, G. (1988): Op. Cit., pp. 241-255.

público, dejaron de respetarse las prerrogativas señoriales, así como de satisfacerse los derechos dominicales, tanto los derivados del ejercicio de la jurisdicción como los inherentes a la propiedad de la tierra, al Marqués del Bosch.

En contraposición a lo señalado por Ardit sobre la falta de difusión de los decretos y demás disposiciones legales promulgadas por las Cortes<sup>215</sup>, esta ley fue conocida y aplicada en su sentido más amplio en la mayor parte de los pueblos de señorío valencianos, exceptuando los situados bajo la ocupación francesa, en los que se mantuvo un estricto control del pago de las prestaciones señoriales<sup>216</sup>, a tenor de las necesidades financieras del ejército francés y la actitud colaboracionista de una gran parte de la nobleza valenciana<sup>217</sup>. La gran nobleza castellana con intereses en el Reino de Valencia se mantendría, sin embargo, de modo predominante, fiel a Fernando VII, resultando de ello la incautación de sus señoríos. Así sucedió con los señoríos propiedad de la Duquesa de Gandía<sup>218</sup>.

Al margen de los testimonios contenidos en los diferentes pleitos entre el titular del señorío y sus anteriores vasallos por la cuestión de los derechos dominicales, las escrituras de transferencias del dominio útil otorgadas por diversos enfiteutas entre 1811 y 1814 ilustran esta situación de reacción antiseñorial<sup>219</sup>.

-----  
<sup>215</sup> ARDIT LUCAS, M. (1977): Op. Cit., pp. 193-195.

<sup>216</sup> Ibidem, pp. 206-209.

<sup>217</sup> Ibidem, pp. 199-205.

<sup>218</sup> MORANT DEUSA, I. (1984): Op. Cit., pp. 224-225.

<sup>219</sup> ANJ. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu, P. 23 y 24.

Desde el 6-VIII-1811 al 24-IX-1811 continuaron reconociéndose los derechos señoriales y el dominio mayor y directo del Marqués del Bosque, incluyéndose, además, en las escrituras, la licencia señorial autorizando la enajenación del dominio útil (incluso, en alguna de ellas, se hace mención expresa del pago del luismo al arrendatario de los derechos señoriales, Mateo Arnau, "como arrendador de la señoría y apoderado general del Marques del Bosque, como dueño territorial", quien también concedía los permisos para la transmisión, en algunos casos, verbalmente)<sup>220</sup>. Sin embargo, a partir de esa fecha no se admite la existencia de ninguna carga o gravamen sobre los bienes transferidos, siendo la publicación del decreto de abolición de señoríos el motivo aducido primordialmente:

"(...) franca y libre de todo cargo, gravamen, obligación especial ni general que no tiene sobre si (segun el Real Decreto expedido por S.M. sobre señoríos, que se publico en esta Universidad, en veinte, y quatro de Setiembre ultimo de este corriente año. (...)"<sup>221</sup>.

Se ha verificado asimismo la presencia de varios ejemplos, más numerosos a partir de los últimos meses de 1812, en los que únicamente se indica la franqueza de gravámenes, sin indicar las razones que justifiquen esa nueva situación.

-----

<sup>220</sup> ANJ. Ibidem, P. 23, año 1811, fs. 75 vto-77 y 77-79.

<sup>221</sup> Así se declaraba en el apartado de cargas de la escritura de venta de 6 jornales de arar, secano arbolado, otorgada por J. Llorca, trabajador del campo, a J. Climent, trajinante, ambos vecinos de Busot. ANJ. Ibidem, P. 23, año 1811, fs. 82-83 vto.

Aunque es éste un hecho generalizado (que no afecta del mismo modo a los gravámenes contraídos a favor de los beneficios, parroquias o particulares -de naturaleza distinta a la enfiteútica-) y mayoritario se ha detectado la existencia de una serie de excepciones, escrituras en las que se reconoce la sujeción de la finca a un gravamen en metálico de satisfacción anual por San Miguel, o bien en especie, a favor del Marqués del Bosque, sin indicar la causa de esta carga, y haciendo notar que la finca era "en lo demas franca y libre de todo gravamen"<sup>222</sup>. No se puede desdeñar la posibilidad de que en estos casos, exista algún tipo de vinculación de los enfiteutas con el marqués.

El decreto de abolición de señoríos no repercutió solamente sobre el patrimonio rústico cuyo dominio útil había sido cedido a los enfiteutas, sino que incidió de modo similar sobre los predios que los Marqueses de Bosch poseían en plena propiedad, así como sobre los edificios e instalaciones en los

-----  
<sup>222</sup> ANJ. Ibidem, P. 24, año 1813, fs. 18-19 vto. y 95-97; año 1814, fs. 84-86 y 102-103 vto. Por ejemplo, M. Pérez (Viuda de J. Arnau), sirvienta en Alicante, vendía a V. Giner (labrador) ambos vecinos de Busot, tres jornales de tierra secano arbolado con derecho de aljibe, era pan trillar y casa, "sugeta á dies, y seis libras trese sueldos, y quatro dineros de capital, que se corresponde al Señor Marqués del Bosque, su anuapencion dies sueldos, juntamente con otros; y en lo demas franca y libre (...)" (P. 24, 1813, fs. 18-19 vto.). Asimismo, J. Ripoll (tratante) había transferido a V. Llorca (labrador), ambos vecinos de Busot, 1 tahulla de tierra huerta "con derecho de regar dos dedos de agua de la Balsa de la Universidad en 19 en 19 dias,...", sujeta a 4 sueldos cada año y día de S. Miguel a favor del Marqués del Bosque, y en lo demás franca y libre de todo gravamen (P. 24, 1813, fs. 95-97).



que se habían venido ubicando las regalías. Estas propiedades señoriales fueron objeto de secuestro por el ayuntamiento del lugar, quien las arrendaba en pública subasta al mejor postor.

Se ha comprobado que así ocurrió con el "Huerto de la Señoría", constituido por 10 u 11 th. de tierra huerta con 32 dedos de agua para riego de la balsa de la universidad, y situado a las afueras de la población, y con los hornos de cocer pan y el horno de vidrio del lugar.

El huerto y los dos "Ornos de pan coser" fueron arrendados por el ayuntamiento a J. Brotons (labrador y vecino de Busot) por un periodo de tiempo superior a los dos años (del 24-IX-1811 al 31-XII-1813). Tanto las condiciones en que se efectuó dicho arriendo como el precio estipulado anualmente nos son desconocidos, puesto que las referencias conseguidas proceden de un ápoça otorgada, el 10-V-1815, por el apoderado señorial (V. Pérez, vecino de Busot), en la que reconocía haber recibido de dicho arrendatario 2.518 r<sup>s</sup> 16 mrvd v<sup>n</sup> (en torno a las 168 L.) como parte de la cantidad adeudada por razón del arrendamiento, puesto que "respecto á que las demas cantidades á que ascendían los citados arriendos se pasaron en cuenta de reparos delas obras de las casas referidas (hornos de pan), y entregado á los Ayuntamientos que fueron de los sitados años sobre que resulta haver formalizado transaccion entre estos, y el Apoderado de dicha Ylustre Señora D<sup>n</sup> Vicente Fuster, segun consta por el

Cabildo selebrado en treinta de Abril proximo pasado"<sup>223</sup>.

El huerto fue nuevamente cedido en arrendamiento el 19-IX-1813 a favor de J. Valor, también labrador y vecino de Busot<sup>224</sup>. En esta ocasión si se especificaron las condiciones de arrendamiento, aunque limitadas a la obligación de dar fianza y a realizar el cultivo a uso y costumbre de buen labrador, según el estilo y la práctica de la universidad. El precio fue estipulado en 160 L., y la duración del arrendamiento en un año; periodo claramente inferior a los cuatro años en que fue concedido al año siguiente a favor de J. Brotons, anterior arrendatario, por 168 L. anuales. Este, a su vez, lo rearrendó a Marcos Soler con las mismas condiciones con las que él lo obtuvo<sup>225</sup>.

Por lo que respecta al horno de vidrio, este fue subarrendado por M. Arnau, como arrendatario de los derechos señoriales, en 1809, a J. y V. Ripoll, por un periodo superior a los 4 años (hasta finales de 1813) y 134 L. anuales. Parece que, a pesar del decreto de 1811 y sus consecuencias, se mantuvieron en el arrendamiento hasta 1815, sin satisfacer las cantidades estipuladas a M. Arnau, quien tampoco las entregó a los Marqueses<sup>226</sup>.

-----  
<sup>223</sup> ANJ. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu, P. 24, año 1815, fs. 34 vto-35 vto. La fecha de la celebración del cabildo, coincide con la del otorgamiento de la concordia entre el apoderado señorial de una parte, y el ayuntamiento y los vecinos de Busot de otra.

<sup>224</sup> ANJ. Ibidem, P. 24, año 1813, fs. 80-81.

<sup>225</sup> ANJ. Ibidem, P. 24, año 1814, fs. 80 vto.-81 vto. Este arrendamiento fue otorgado el 25-IX-1814, sólo 10 días después de la promulgación de la Real Cédula de 15-IX-1814.

<sup>226</sup> ANJ. Ibidem, P. 24, año 1815, fs. 49 vto.-50.

De la información obtenida tras la consulta de los protocolos notariales no se puede deducir una situación similar con respecto al resto de propiedades señoriales, incluida la heredad de Cabrafich, aunque así parece sugerirlo un fragmento de la concordia firmada, en 30-IV-1815, por el apoderado señorial de una parte, y el ayuntamiento y parte de los vecinos de Busot de otra:

"Ygualmente se obligan la Justicia, Ayuntamiento, y demas comparesientes á entregar al citado Marqués una (carta de pago) delo que adeudan los Arrendadores delas fincas porlos arrendamientos vensidos durante el tiempo que lo fueron sequestrados sus rentas, y abonar al expresado Marques lo que de estos sehuvieren consumido en gastos de obras, equivalente, y otros presisos. Y todo ello sin perjuicio de mayor, y perfecta liquidación sobre dichos atrasos, para lo qual authorisan para este efecto la Justicia, Ayuntamiento, y demas comparesientes, á Josef Alberola, y Carlos Francisco Peres, afin de que pueda enmendarse, ó corregirse qualquiera equivocación, ó mejorar la liquidacion delas referidas rentas; (...)"<sup>227</sup>.

---

<sup>227</sup> ARV. Real Audiencia, Escribanías de Cámara, Año 1818, Exp. 77, fs. 14 vto.-15.

En este sentido, Ardit recoge diversos testimonios señoriales con quejas por hechos de similar naturaleza, en los que se hacía referencia al dictamen de la Audiencia de Valencia que establecía, mientras se contestaba a sus consultas, el secuestro de las rentas señoriales y el nombramiento por los justicias de los pueblos de recaudadores y depositarios de las mismas, con la intervención de los dueños territoriales. Disposiciones que sin embargo no fueron seguidas, pues ni los justicias quisieron realizar los nombramientos, ni los nombrados aceptaron los cargos, sin olvidar, por otra parte, la resistencia de los vecinos a satisfacer los derechos<sup>228</sup>.

Y es que efectivamente, la nobleza afrontó esta situación recurriendo a la vía judicial para denunciar el despojo del que había sido objeto, y reclamar el reintegro de sus derechos, así como las rentas no satisfechas. "Comenzaba con ello un forcejeo legal en torno a las disposiciones abolicionistas que originaría abundante jurisprudencia"<sup>229</sup>.

También los Marqueses del Bosque siguieron esa vía, instando, en noviembre de 1811, expediente contra el ayuntamiento y síndicos de la universidad de Busot en el juzgado de dicha universidad. La resolución del pleito se logró con la firma de una concordia por los miembros del ayuntamiento, parte del vecindario de Busot y D. Vicente Fuster, "como Apoderado especial de la Ylustre señora D<sup>a</sup> Maria Catalina Pasqual y Vergara Condesa

-----

<sup>228</sup> ARDIT LUCAS, M. (1977): Op. Cit., pp. 223-225.

<sup>229</sup> GIL OLCINA, A. (1979): "La extinción de la propiedad ...", p. 59.

de Torrellano, Marquesa del Bosque como Administradora General de todos los bienes, y rentas de su marido el Ylustre Señor D. Rafael Canicia Vaillo de Llanos segun poderes que ha exhibido otorgados en la Ciudad de Alicante á veinte y dos del actual, ante el escribano, Pedro Fuentes, y Sanchez en la cláusula especial de transigir concordar, y ajustar con qualquiera personas de la calidad, clase, y condicion que sean en razon de las prestaciones reales, derechos, y demas, que como a Dueño territorial de esta Universidad, que es su citado esposo le pertenescan (...) "<sup>230</sup>.

En esta concordia otorgada en 30-IV-1815 "al obxeto de transigir, y orillar el pleyto que pendia en el Juzgado sobre el embargo, ó detencion de las rentas de dicho Señor Marques, y demas derechos de que ahora segun el Decreto de su Magestad, se halla reintegrado segun el contexto de dicho Real Decreto; De consiguiente sera relativa la presente transaccion al pago de los atrasos de las rentas que actualmente disfruta por el mismo decreto", se tomaron una serie de acuerdos que hacían referencia a tres aspectos importantes:

.-En primer lugar, el marqués condonaría a los vecinos del pueblo todos los atrasos que se le adeudaban por los derechos de setena, dos diezmos y alfarraz de algarrobas desde el 24-IX-1811 al 31-XII-1814, debiendo satisfacer, sin embargo, las particiones correspondientes al año 1815.

-----  
<sup>230</sup> ARV. Real Audiencia, Escribanías de Cámara, Exp. 77, año 1818, pp. 13-13 vto.

.-En segundo lugar, puesto que las Justicias de los años anteriores habían dispuesto de 17.572 r<sup>s</sup> v<sup>n</sup> (1.171 L.) de las rentas señoriales, con el objeto de sufragar las raciones para el suministro de las tropas que correspondían a la universidad de Busot, el marqués se conformaba con percibir 15.000 r<sup>s</sup> v<sup>n</sup> (1000 L.), que deberían entregarle la Justicia y Ayuntamiento del lugar en representación del pueblo (7.500 r<sup>s</sup> v<sup>n</sup> durante la navidad de 1815, y los 7.500 restantes durante la de 1816). Por lo que respecta a la cantidad restante hasta completar los 17.572 r<sup>s</sup> v<sup>n</sup>, se le entregaría una carta de pago "que deven reportar de la Yntendencia de Valencia, ó de quien corresponde por rasón de dichos Suministros al tiempo en que le sean abonados al Pueblo"<sup>231</sup>.

.-En tercer lugar, la Justicia, el Ayuntamiento y el resto de comparecientes se comprometían a entregar una carta de pago por razón de las deudas contraídas por los arrendatarios de las fincas señoriales (en plena propiedad) por los arrendamientos vencidos durante el tiempo que le fueron secuestradas las rentas, así como a abonar al marqués la cantidad consumida en gastos de obras, equivalente, y de cualquier otro tipo<sup>232</sup>.

No cabe duda de que las disposiciones emanadas del Tribunal Supremo, que amparaban la permanencia del elemento territorial en los antiguos señoríos jurisdiccionales, y por

-----  
<sup>231</sup> ARV. Escribanías de Cámara, Exp. 77, f. 14 vto.

<sup>232</sup> ARV. Real Audiencia, Escribanías de Cámara, Exp. 77, fs. 12 vto.-15 vto.

tanto el disfrute de los derechos a él inherentes<sup>233</sup>, y la nueva etapa absolutista iniciada con la vuelta al poder de Fernando VII, determinaron la evolución seguida por el pleito suscitado entre los vasallos y el señor de Busot.

La vuelta de Fernando VII supuso una involución de la cuestión señorial. El Real Decreto de 4-V-1814 que anulaba la Constitución y los decretos promulgados por las Cortes (y por tanto tácitamente el de abolición de señoríos), y la Real Cédula de 15-IX-1814, que establecía "que los llamados señores jurisdiccionales fueran reintegrados en la percepción de todas sus rentas, frutos, emolumentos, prestaciones y derechos de su señorío territorial y solariego y en la de todas las demás que hubiesen disfrutado antes del 6 de Agosto de 1811, y no traigan notoriamente su origen de la jurisdicción y privilegios exclusivos ..." <sup>234</sup>, devolvieron a los señores la percepción de los derechos derivados de la propiedad de la tierra que habían dejado de percibir tras la promulgación del decreto de 1811. Sin embargo, ni las jurisdicciones señoriales ni las regalías fueron reinstauradas con este última cédula.

-----  
<sup>233</sup> Hecho que ha sido puesto de manifiesto por varios autores: MOXO, S. de (1965): Op. Cit.; ARDIT LUCAS, M. (1977): Op. Cit., pp. 184-185 y 222; GIL OLCINA, A (1979): "La extinción de la propiedad ...", pp. 59-62; GIL OLCINA, A. (1979): *La propiedad señorial* ..., pp. 131-134.

<sup>234</sup> *Diccionario de la Administración Española*. Compilación de la Novísima legislación de España. En todos los ramos de la administración pública. Fundado por D. M. MARTINEZ ALCUBILLA, Madrid, 1930, 6ª Ed., T. XIII, p. 779.

Sin embargo, a pesar de la promulgación de la Real Cédula de 1814, no se resolvió la cuestión. Se mantuvo durante bastante tiempo, en la mayor parte del Antiguo Reino de Valencia, una situación generalizada de oposición antiseñorial y de resistencia al pago de los derechos dominicales reintegrados a los señores territoriales<sup>235</sup>, en la que adquieren gran protagonismo tanto los Ayuntamientos como los principales enfitetutas de los antiguos lugares de señorío<sup>236</sup>.

En el caso de Busot da idea de este contexto la providencia de la Real Audiencia de 15-VII-1815, promulgada apenas tres meses después de la concordia, en la que se ordena librar certificación "para que se haga saber por medio de bando publico á los vesinos de la Universidad de Busot, que baxo la multa de cincuenta libras, y en cumplimiento de la Real Cedula de quinse de setiembre ultimo, satisfagan las prestaciones devengadas, y que se devengaren desde primero de Enero del corriente año, segun el convenio de treinta de Abril proximo con arreglo á la practica que se observaba hasta el dia seis de Agosto de mil ochosientos onse; siendo el Alcalde el primero que lo cumpla sin permitir la más minima contravencion baxo su propia responsabilidad.

Y para que conste al Alcalde ordinario de la Universidad de Busot, á quien se le haga saber por qualquier escrivano publico que sea requerido, á efecto lleve a devida

-----  
<sup>235</sup> ARDIT LUCAS, M. (1977): Op. Cit., pp. 229-252.

<sup>236</sup> ARDIT LUCAS, M. (1977): Op. Cit., pp. 223-225; MORANT DEUSA, I. (1984): Op. Cit., pp. 228-234.



execución, y cumplimiento lo mandado por la sala en el preinserto Decreto en todas sus partes; (...) "<sup>237</sup>, y que refleja el ambiente contrario a tal solución de compromiso.

La negativa del alcalde ordinario de Busot a actuar según lo dispuesto, aludiendo a su vinculación afectiva con los vecinos del lugar y a la resistencia de los mismos al pago de los derechos dominicales que adeudaban al titular del señorío territorial, y la solicitud del nombramiento de un juez comisionado para sustituirle ponen de manifiesto la oposición de las autoridades municipales y la existencia de una actitud totalmente reacia al mantenimiento de las prerrogativas y rentas señoriales derivadas del dominio directo de la tierra, a pesar de la concordia de 1815<sup>238</sup>. Una situación similar, aunque mucho más radical, se ha detectado en los lugares que integraban el Marquesado de Bélgida, pues, aunque se alcanzó un acuerdo (con posterioridad a la vuelta absolutista de 1814) entre los distintos pueblos y los representantes señoriales, las cantidades fijadas no fueron hechas efectivas en los plazos señalados. A pesar de los sucesivos pactos que reducían la cuantía y alcance

-----

<sup>237</sup> ARV. Real Audiencia. Escribanías de Cámara, Exp. 77, fs. 9-9 vto.

<sup>238</sup> Esto se hace presente en una diligencia de 11-VIII-1815, en la que el alcalde ordinario de Busot, Ramón Mallol, "solicita que por ser lego y hallarse su asesor residiendo en Alicante, a quatro leguas de Busot, y por ser la mayor parte de sus vecinos cosecheros parientes o amigos suyos; y ante la resistencia de todos al pago de los derechos dominicales que adeudaban al señor territorial, no puede ejecutar con exactitud lo que se le encomendo, sin riesgo de su persona, por lo que solicita que la sala nombre otro juez comisionado". ARV. Real Audiencia, Escribanías de Cámara, Exp. 77, fs. 10 vto.-11.

de las mismas, todavía en la década de los treinta no se habían satisfecho ninguna de las prestaciones devengadas, o bien la cuantía de los pagos era ridícula<sup>239</sup>. Ante la reiterada negativa de los enfiteutas a satisfacer los derechos derivados del dominio directo de la tierra, a pesar de las diversas sentencias favorables al marqués, se acordó la redención perpetua de todos los derechos señoriales en 1858<sup>240</sup>

Por este motivo, en 21-IX-1815, el alcalde mayor y teniente corregidor de la ciudad de Alicante, D. Joaquin de Medina y Maeso, juez comisionado en estas diligencias, "(...) a fin de que se cumplan los decretos de la Real Audiencia de este Reyno: Dixo: Devia mandar y mando se haga saber por medio de bando público que se publique en la Plaça de esta Universidad, y fixe ante las puertas de la Casa de Ayuntamiento, que todos los vesinos, y terratinientes de esta Universidad, dentro el presiso, y perentorio termino de tersero dia paguen, y satisfagan á la Ylustre Señora Condesa de Torrellanos Marquesa del Bosque, ó a su legitimo Apoderado, todas las prestaciones devengadas, y que se devengaren desde primero de Enero del corriente año, con arreglo á la práctica que se observara hasta el dia seis de Agosto de mil ochosientos onse, relativas aquellas, á las que se conosen con el nombre de Setenados, Diezmos, alfarrazgo de Algarrovas,

-----  
<sup>239</sup> MAHIQUES ALBEROLA, D. : "La renda senyorial en l'etapa final de la transició al capitalisme: El Marqués de Bèlgida". *Estudis d'història contemporània del País Valencià*, n° 6, Valencia, 1986, pp. 46-47.

<sup>240</sup> MAHIQUES ALBEROLA. D. (1986): Op. Cit., pp. 50-51.

Luismos<sup>241</sup>, fadigas, Censos, y Gallinas baxo la multa de cinquenta libras, y pasado dicho termino sin cumplirlo se prosederá segun haya lugar contra los morosos breve, y sumariamente al cobro de dichas prestaciones, á la extraccion de las cinquenta libras de multa, y se les condenará al pago de costas que en su exacción se causare, y se prevenga que ninguna persona desfixe el edicto baxo la multa de cinquenta libras, y demas que corresponde hasiéndose saber esta providencia y demas que ocurra a D. Ygnacio Ruis Apoderado General de la Ylustre Señora Marquesa del Bosque, ..."<sup>242</sup>.

Además de estos testimonios, existen otros indicios que reflejan el clima antiseñorial existente en el lugar. Así por ejemplo, hasta 1815 son todavía numerosas las escrituras de enajenación del dominio útil en las que se declara ser la finca franca y libre de todo señorío; aunque ya a finales de 1814 comienza a detectarse una vuelta a la situación anterior a 1811, a través del reconocimiento en estas escrituras de las cargas señoriales (no incluyéndose las solicitudes de licencia señorial

---

<sup>241</sup> En la concordia no se menciona la condonación de las rentas derivadas de los derechos de luismo, fadiga, ni de los diversos censos en metálico. Sólo se mencionan de modo expreso las particiones en especie.

<sup>242</sup> ARV. Real Audiencia. Escribanías de Cámara, Exp. 77, fs. 11 vto-12.

autorizando la venta hasta octubre de 1815)<sup>243</sup>.

Los protocolos notariales recogen asimismo casos en los que se accede por los enfiteutas al pago de los derechos derivados del señorío solariego tras la resolución del correspondiente expediente en el juzgado de Alicante. Así ocurre en relación al pago del derecho de luismo de los bienes vendidos por Simón Giner (vecino de Busot). Al ser condenados al pago de este derechos los herederos del mencionado enfiteuta, acordaron aceptar el resultado del pleito y pagar cada uno la parte de las costas correspondiente<sup>244</sup>. Este tipo de escrituras de obligación y convenio forzadas por una resolución judicial local se han localizado más frecuentemente a partir de la década de los treinta.

Al margen de las dificultades momentáneas para el cumplimiento de los acuerdos establecidos en la concordia o del rechazo a reconocer los derechos señoriales en las escrituras

-----

<sup>243</sup> En este sentido, en la venta realizada, el 31-XII-1814, de 2,5 jornales de tierra de secano arbolado, por V. Lloret (jornalero) a F. Giner (labrador), ambos vecinos de Busot, se reconocía la existencia de una partición en especie a favor del Marqués del Bosque (setena y alfarrás de algarrobas), aunque se declaraba ser franca y libre de todo gravamen en lo demás. ANJ. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu, P. 24, año 1814, fs. 102-103 vto. De modo similar, J. Arnau y su padre vendieron 2,5 jornales de secano arbolado sujetos a responder, anualmente y en el día de San Miguel, 10 sueldos al Marqués del Bosque, siendo también franca y libre en todo lo demás. ANJ. Ibidem, P. 24, año 1814, fs. 84-86.

<sup>244</sup> ANJ. Ibidem, P. 25, año 1816, fs. 7-8. En esta escritura se incluía también una cláusula en la que una de las herederas se comprometía a satisfacer anualmente el pecho de media gallina, así como la décima parte del valor alcanzado en las enajenaciones y a solicitar la correspondiente licencia para ello; gravámenes a los que se hallaba sujeta la media casa que ésta había retenido en su poder.

notariales, existe un claro deseo en los vecinos y demás enfiteutas del lugar de liberarse de los gravámenes de origen señorial y de convertirse, de modo definitivo, en propietarios plenos de la tierra, objetivo que pretenderán alcanzar mediante el recurso a la vía judicial. Pocos meses después de la firma de la concordia, se iniciará un proceso en el que se planteará una demanda de tanteo y reversión del lugar a la corona.

El clima antiseñorial y de rechazo al pago de los derechos correspondientes al titular del señorío territorial, mayoritario en un principio (hasta la proclamación del decreto de 1814 y la firma de la concordia de 1815), siguió manteniéndose con posterioridad, aunque de modo predominante se normalizó la situación, derivando las reivindicaciones de los enfiteutas hacia otros cauces, como es el señalado con anterioridad.

En este sentido, por una parte se ha verificado, a través de las escrituras de obligación y reconocimiento de deudas de los campesinos a favor de los marqueses, el pago, por diversos enfiteutas, de los atrasos acumulados por razón de los derechos de luismo o de los censos con los que se hallaban gravadas las fincas; cantidades que, satisfechas en uno o dos pagos iguales, superaban las cuarenta y tres libras<sup>245</sup>. Se ha localizado algún

-----

<sup>245</sup> Vicenta Valor, viuda y vecina de Busot, declaraba, en 1815, deber a la marquesa, como administradora de los bienes de su marido, 69 libras 7 sueldos y 3 dineros, "cantidad resultante de liquidación de cuentas del censo y demás que anualmente responde a dicha Señora por las tierras y casas que posee, cuya suma se obliga a satisfacer a la Marquesa, en dos pagas iguales, la primera en el día de Todos los Santos del año 1815, y la segunda en igual día del próximo año 1816". ANJ. Prot. Not. de T. Brotons, P. 24, año 1815, fs. 52 vto.-53.

caso en el que la satisfacción de los atrasos, además de la opción de entregar una cantidad equivalente en metálico, podía llevarse a cabo realizando algún trabajo para los marqueses<sup>246</sup>. En cuanto a las rentas que debían percibir en concepto de los arrendamientos de las propiedades secuestradas por el ayuntamiento, del valor total alcanzado se descontaban las cantidades entregadas a las autoridades municipales, así como el importe de las mejoras realizadas en las mismas<sup>247</sup>.

Por otra parte tiene lugar la presentación de una demanda de tanteo y de reversión a la corona del señorío por parte de los enfiteutas de Busot. El 8-VIII-1815 los miembros del ayuntamiento de Busot otorgaban a D. Luis Fita y D. José Gallo, procuradores de número de la Real Audiencia de Valencia y residentes en dicha ciudad, un poder especial para que en su nombre "puedan comparecer ante los Señores del Real Acuerdo, y allí constituidos solicitar el poder, ó facultad correspondiente, para que puedan selebrar una Junta general de estos vesinos, y Terratinientes, para la solicitud del tanteo, y dehución á la Corona, de este lugar de Busot"<sup>248</sup>. Esta solicitud fue aceptada por el Real Acuerdo en un decreto de fecha 2-X del mismo año, a

-----  
<sup>246</sup> F. Tortosa, carpintero y vecino de Busot, podía entregar en efectivo, durante el mes de febrero de 1816, las 43 L. 14 s. que debía a los marqueses, o bien satisfacer su deuda "en jornales y madera que invistiere en los reparos de Carpinteria, que a dicha Señora se le ofreciesen y que fuere llamado a los Baños, donde se deberá presentar para el trabajo, según lo tiene convenido con la referida Marquesa; siempre que sea la citada operacion antes de cumplir el expresado plazo". ANJ. Ibidem, P. 24, año 1815, fs. 52-52 vto.

<sup>247</sup> ANJ. Ibidem, P. 24, año 1815, fs. 34 vto-35 vto y 49 vto-50.

<sup>248</sup> ANJ. Ibidem, P. 24, año 1815, fs. 43 vto-44.

tenor del cual se convocó una Junta General de vecinos y "terratenientes" de Busot, en la que se acordó solicitar la correspondiente acción de tanteo y la incorporación a la corona de la universidad, delegando para ello en las personas de Carlos F<sup>CO</sup>. Pérez, Josef Alberola y Bartolomé Ripoll, labradores y vecinos de Busot.

Tras la aprobación de estas diligencias por el Real Acuerdo el 8-I-1816, los representantes del colectivo de enfiteutas de Busot concedieron a su vez otro poder, el 15 de febrero de 1819, a D. Ramón Ramos y Poveda, agente de los Reales Consejos y vecino de Madrid, para que se encargara de "la demanda de tanteo compareciendo ante Su Magestad, y Señores del Real, y Supremo Consejo de Hacienda, y con la exprecion tambien de que es para que pueda acudir con la misma calidad y representacion ante Su Magestad y Señores del Real, y Supremo Consejo de Castilla en solicitud de que se le conseda facultad, ó permiso para repartimiento ó derrama hasta en cantidad de 20.000 reales entre los vesinos, terratinientes de esta Universidad y los terratinientes que antes del deslinde eran de esta Jurisdiccion, y en el dia se hallan agregados al termino dela Ciudad de Alicante, los mismos que pagan en la actualidad los derechos Dominicales á esta señoria; (...)"<sup>249</sup>. Con toda probabilidad, esta iniciativa dio lugar al pleito que desde 1819 se desarrolló en la Audiencia de Valencia entre la Marquesa del Bosque y los enfiteutas de Busot (vecinos y terratenientes), sobre pago de

-----  
<sup>249</sup> ANJ. Ibidem, P. 25, año 1819, fs. 3 vto-4.

derechos dominicales<sup>250</sup>. El lamentable extravío de este expediente en el Archivo del Reino de Valencia ha impedido conocer los pormenores del caso y el resultado del mismo; aunque no cabe la menor duda de que la sentencia final fue favorable totalmente al titular del señorío, como lo ponen de manifiesto los documentos posteriores y las referencias al respecto contenidos en protocolos notariales, Contaduría de Hipotecas y Registro de la Propiedad. Resultado de este pleito pudo ser, sin embargo, el acuerdo alcanzado entre los enfiteutas y los dueños del lugar, que ocasionó la sustitución de las particiones en especie por cantidades equivalentes en metálico. Tampoco se ha podido localizar este documento, aunque sí se tiene noticia del mismo a partir de las escrituras de transmisión del dominio útil posteriores a 1823 en las que se alude de modo constante a este hecho<sup>251</sup>.

Ya hemos manifestado la relativa vuelta a la normalidad en lo que respecta al pago de prestaciones, así lo traducen las escrituras de transmisión del dominio útil, en las que, desde 1816 a 1820, se reconocen las diversas cargas señoriales derivadas del dominio directo de la tierra a las que se hallan sujetas las fincas (mencionadas ya con anterioridad en otro apartado), y las escrituras de obligación y reconocimiento de deudas, también comentadas páginas atrás. Sin embargo, ha de

-----

<sup>250</sup> ARV. Real Audiencia. Escribanías de Cámara, Exp. 55, año 1819.

<sup>251</sup> ANJ. Prot. Not. de F. Miralles, P. 26 (1825-1827) y V. Alberola, P. 28 (1828-1829). AHPA. Prot. Not. de F. Sala y Cantó, P. 1.628 (1821-1828), y J. Cirer y Palou, P. 501 (1851).



destacarse la existencia de episodios, de los que se tiene noticia de forma más puntual, que revelan la permanencia de ese clima antiseñorial.

Un ejemplo de esta índole es el pleito suscitado entre Manuel García (maestro sangrador vecino de Busot) y la Marquesa del Bosque sobre el pago del derecho de setena. Desarrollado en el Juzgado ordinario del lugar de Busot durante el año 1818, en el se cuestiona la sujeción al pago de setena de una serie de tierras situadas en la partida de Bonalva. El apoderado señorial denunciaba la violación realizada por el enfiteuta del bando "que desde muy antiguo se publica (...) en los paraxes acostumbrados de esta Universidad, preceptivo de que ningun cosechero alze, o retire los granos de la Hera en que trille sin avisar antes al Apoderado, ó Arrendador de los derechos Dominicales para acudir, y cobrar el de setena que pagan muchos, y otros de dos Diezmos<sup>252</sup>".

Por su parte, el acusado alegaba desconocer el pecho a que estaban tenidas las tierras: "por no presentarme documento alguno, que acredite dicha setena, siendo assi, que estoy pagando de dichas tierras onse libras, diez y ocho sueldos, y dos dineros, acreditado por los recibos hechos por dicho Peres (el apoderado señorial), negandose á sacar el cargamiento del

-----

<sup>252</sup> En el mismo pedimento de la parte señorial se inserta un mandato de la justicia de Busot, de principios de mayo de 1818, en el cual se establece la prohibición de mezclar los granos de las tierras pechadas con los de las francas, sin previo consentimiento del apoderado señorial o del arrendatario, bajo una multa de tres pesos. ARV. Real Audiencia. Escribanías de Cámara, Exp. 77, año 1818, fs. 1-2 vto.

capital, es el motivo de haver trillado sin darle parte, ni avisarle"; y además añadía que "siendo el motivo de que en este Señorío solamente se paga setena, ó dos diesmos, las que no tienen zenso, ú otro pecho, en la ora que presente documentos correspondientes estoy pronto á corresponderle á dicho señor quantos derechos le correspondan, de lo contrario me reservo el derecho de poder contradecir la denuncia (...)"<sup>253</sup>.

Por ambas partes se aducía la obligación de la parte contraria de presentar los títulos de posesión que legitimasen las respectivas posturas. El representante señorial, además de acudir a la Real Cédula de 15-IX-1814 (en la que se establecía que la presentación de los títulos de posesión no era necesaria para continuar en la percepción de las rentas), recordaba los decretos promulgados por la Real Audiencia con motivo de la firma de la Concordia de 1815, en la que participó el enfiteuta denunciado, quien compareció ante el juez comisionado el 24-IX-1815, obligándose a pagar las prestaciones señoriales (por los peritos le fue impuesta una arroba para el alfarrazgo de algarrobas). El fallo de la justicia de Busot, anunciado el 9 de julio de 1818, fue favorable a la dueña territorial. La sentencia promulgada por la Real Audiencia en 22-IX-1819, con motivo de la apelación interpuesta por M. Garcia, confirmaba el auto anterior del alcalde ordinario del lugar, revocándose la pena impuesta en el mismo de 50 pesos<sup>254</sup>.

-----  
<sup>253</sup> ARV. Real Audiencia, Ibidem, Exp. 77, fs. 3 vto-4.

<sup>254</sup> ARV. Real Audiencia, Ibidem, Exp. 77.

La cuestión desatada en torno a la responsabilidad de la probanza de la legitimidad de los títulos (si correspondía al señor demostrar la veracidad de sus exigencias, o si por el contrario era el campesino enfiteuta el encargado de verificar su improcedencia), junto a la disyuntiva de conservar en manos de los antiguos señores jurisdiccionales el señorío territorial, en los casos en que ambos elementos van unidos, son dos importantes aspectos que el decreto de abolición de señoríos de 1811 no aclaró suficientemente. La ambigüedad de este decreto, señalada por numerosos autores partiendo de las afirmaciones iniciales de Moxó<sup>255</sup>, propiciará el afianzamiento del clima antiseñorial reinante, patente en la resistencia generalizada al pago de los derechos señoriales derivados del elemento territorial, como consecuencia de la amplia interpretación del mismo por las autoridades y vecinos de los pueblos de señorío<sup>256</sup>. Esta situación de enfrentamiento entre señores y vasallos dará lugar al planteamiento de un importante número de pleitos, con distintos aspectos en litigio<sup>257</sup>, figurando como ejemplo de este proceso los diversos conflictos mantenidos en Busot.

-----  
<sup>255</sup> ARDIT LUCAS, M. (1977): Op. Cit., pp. 222-225; GIL OLCINA, A. (1979): Op. Cit., pp. 127-129; GIL OLCINA, A. (1979): "La extinción de la propiedad señorial ...", pp. 56-62.

<sup>256</sup> En este sentido, Ardit afirma "a la vista de estos hechos cabe afirmar que los pueblos de señorío fueron más allá de la letra del decreto de 6 de agosto de 1811 y lo interpretaron como abolición total del señorío, tanto jurisdiccional como territorial". ARDIT LUCAS, M. (1977): Op. Cit., p. 224.

<sup>257</sup> BLESÁ CUÑAT, A.: "Aportación al estudio de los pleitos de señorío posteriores al decreto de 1811". *1<sup>er</sup> Congreso de Historia del País Valenciano*, Vol. IV, Valencia, 1974, pp. 249-262.

2.2. La evolución del señorío de Busot hasta la 2ª mitad del siglo XIX. Desaparición de particiones en especie e inicio del proceso de extinción del elemento solariego.

Durante el trienio liberal la situación retomó el cariz que había tenido tras la promulgación del decreto de 6-VIII-1811. El 7-III-1820 se convocaban de nuevo las Cortes, y el 13-IV-1820 se promulgaba el Real Decreto que reforzaba la incorporación de los señoríos jurisdiccionales a la nación y la abolición de los privilegios exclusivos, dando paso a otra etapa en la que la conflictividad social y la negativa de los pueblos al pago de los derechos señoriales volvían a estar a la orden del día, mientras se gestaba la nueva ley de señoríos; ley que, sin embargo, apenas se mantuvo en vigor, dada la rápida vuelta al poder de Fernando VII.

La ley de 3-V-1823, que pretendía aclarar los puntos más confusos del decreto de 6-VIII-1811, presentaba un planteamiento mucho más radical, destacando entre sus distintas disposiciones aquella que confería la responsabilidad de probar el carácter territorial del señorío (y su no inclusión en el grupo de los incorporables a la nación) al titular del mismo, presentando los títulos de adquisición. Mientras no se pronunciase sentencia admitiendo dicho carácter, los pueblos afectados se verían libres de prestaciones. La reducción del

laudemio a la quincuagésima (un 2%), la supresión del pago del derecho de fadiga y su nuevo carácter de reciprocidad y las posibilidades de redención en las enfiteusis de señorío y alodiales también fueron instauradas.

Esta situación ha podido ser verificada, al igual que en el caso anterior, a través de la consulta de las escrituras de transmisión del dominio útil (generalmente de fincas de pequeña superficie -sobre 2 th. en regadío y 1-3 jornales en secano-) contenidas en los protocolos notariales entre 1820 y 1823<sup>258</sup>. En ellas se hace constar, de modo general, la inexistencia de cualquier tipo de carga o gravamen relacionado con el dominio señorial sobre las diversas fincas.

Son frecuentes los casos, sobre todo por lo que respecta a las escrituras otorgadas en fechas menos recientes (1820), en los que no se indica la razón de esa nueva condición; a pesar de ubicarse en partidas (Cabrafich, Pissella, ...) en las que, con anterioridad a 1811, nunca se había puesto en duda la legitimidad de los derechos señoriales. En la transmisión de una casa y la porción de tierra anexa a la misma se hace mención, incluso, a pesar de declarar la franqueza de gravámenes, del establecimiento enfiteúutico del que había sido objeto tras la concesión de la licencia señorial en 2-X-1786<sup>259</sup>.

-----  
<sup>258</sup> ANJ. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu, P. 25.

<sup>259</sup> ANJ. Ibidem, P. 25, año 1820, fs. 75-76.

Existen también numerosos ejemplos en los que se alude a toda la legislación promulgada hasta la fecha sobre abolición de señoríos y privilegios inherentes a la jurisdicción. En este sentido, en la venta de 2 jornales de secano situados en la partida del Cantalar (realizada el 22-V-1820 por Madalena Giner a favor de Jayme López -jornalero-, ambos vecinos de Busot), en el capítulo de cargas de la escritura, se declaraba ser la finca "franca y libre de todo cargo, gavamen (segun y en virtud del Real Decreto de las Cortes de" 6-VIII-1811, el de 19-VII-1813<sup>260</sup> y el de 13-V-1820 "sobre abolición de señoríos)"<sup>261</sup>.

En otra serie de escrituras se tomaba en consideración la posibilidad de que el señor de Busot viera confirmada la propiedad del señorío territorial y los derechos derivados de la misma, por lo que, en previsión de este hecho, se destinaba una cantidad del precio de venta para sufragarlos, a condición de ser devuelta al transferente de no consolidarse esta probabilidad. Así, V. Brotons y Giner, en la escritura de transacción de 3 th. de tierra huerta arbolada a favor de otro labrador y vecino de Busot, hacía constar que, en lo referente a cargas, su finca

-----  
<sup>260</sup> Este decreto tenía menos relación con este asunto, pues iba dirigido de modo específico a la extensión de los preceptos de abolición de los derechos privativos y prohibitivos de los lugares de señorío a las zonas de realengo, donde se suprimirían el dominio directo que tradicionalmente se había reservado el Real Patrimonio y los derechos a él inherentes, condediéndose una total libertad de edificación e instalación de las antiguas regalías, y la entrega de su uso a los pueblos según las reglas del derecho común y las normas municipales. *Diccionario de la administración española*. (...). Fundado por M. MARTINEZ ALCUBILLA, Tomo XIII, 6<sup>a</sup> Ed., Madrid, 1930, pp. 778-779.

<sup>261</sup> ANJ. Ibidem, P. 25, año 1820, fs. 33 vto-35.

estaba "tenida a 3 Libras 5 sueldos de senso, su anua pencion 1 Libra al Señor Marques del Bosque, (de manera que si segun las Ordenes de abolicion de señorios no se pagara anualidad devera el dicho comprador reintegrar del dicho Capital al vendedor segun clausula y convenio expresivo entre ambos de obligarse ...). Y en lo demas franca y libre (...)" . Este compromiso hacía referencia a las 33 L. 5 s. que, para responder a la ánuia pensión, se retuvo el comprador del precio de venta (485 L.). el nuevo propietario, por su parte, "se obligava á corresponder, y pagar la anualidad de una libra á que esta afecta; y si por casualidad resultase no pagar el referido capital debolvera á el notado vendedor segun asi está pactado, ..." <sup>262</sup>.

Ya promulgada la ley de señoríos de 3-V-1823, vuelven a incluirse indicaciones de este tipo <sup>263</sup>, en esta ocasión, acordes al artículo 4<sup>º</sup> de la referida ley, en el que se establece que: "Mientras que por sentencia que cause ejecutoria no se declare

-----  
<sup>262</sup> 28-IX-1820. ANJ. Ibidem, P. 25, año 1820, fs. 85-86 vto.

<sup>263</sup> Por ejemplo, F<sup>ca</sup>. Giner, en la escritura otorgada con motivo de la venta de 4 jornales de secano situados en la partida del Llano del Cabeçó, declara estar la finca libre de todo cargo, tributo y señorío, pero puesto que "(...) dichas tierras estaban antes sugetas al dominio maior y directo del Ylustre Señor Marques del Bosque y apagar los dineros correspondientes por rason de Luismo si llegara el caso pagar la competente cantidad al mismo señor Marques por rason del Luismo se retiene el comprador seis libras para pagarlas á su Señoria en caso de tener efecto el pago del referido luismo (...)" . De igual modo, el adquirente (A. Company, arriero, vecino de Busot) "(...) promete y se obliga pagar y que pagará á dicho Ylustre Señor Marques del Bosque ó, a quien su derecho y causa representare las seis libras por el Luismo causado en esta enajenacion siempre que se le obligue á ello y en su defecto entregarlas alos vendedores llanamente y sin pleyto alguno (...)" . 12-X-1823. AHPA. Prot. Not. de F. Sala y Cantó, P. 1.628, año 1823, fs. 70 vto-72 vto.

que los señores territoriales y solariegos no son de los incorporables á la Nación, y que se han cumplido en ellos las condiciones con que fueron concedidos, los pueblos que antes pertenecieron á estos señoríos no están obligados á pagar cosa alguna en su razón á los antiguos señores; pero si éstos quisieren presentar sus títulos, deberán los pueblos dar fianzas seguras de que pagarán puntualmente todo lo que hayan dejado de satisfacer, y corresponda según el artículo 3º de este Decreto, (...)"<sup>264</sup>.

Tras la instauración de nuevo del absolutismo, la situación volvió a sus antiguos cauces, aunque en este ocasión con una modificación importante, puesto que desaparecen las particiones en especie sustituidas por censos en metálico.

El documento que establecía la sustitución de los cánones en especie por otros en metálico fue probablemente firmado con posterioridad a 1823. Las primeras referencias proceden de una escritura otorgada el 9-XII-1824, en la que, de modo muy escueto y en relación a la venta de 2 jornales de secano, se declara estar sujeta dicha tierra "al nuevo reglamento que se corresponde al Ylustre Señor Marques del Bosque"<sup>265</sup>. Podría aventurarse su vinculación con el pleito de tanteo e incorporación a la Corona que estaban siguiendo los vecinos y terratenientes de Busot contra el Marqués del Bosch. Tanto el resultado del mismo como la fecha de su finalización nos son

-----  
<sup>264</sup> *Diccionario de la Administración*, ..., T. XIII, p. 779.

<sup>265</sup> AHPA. Prot. Not. de F. Sala y Cantó, P. 1628, fs. 84 vto-86 vto.



desconocidos, aunque los acontecimientos posteriores y la inexistencia de alusiones al respecto hacen suponer un fallo favorable al dueño territorial y una duración relativamente corta (no prolongándose después de 1824-1825).

La firma de este convenio podría constituir un acuerdo alcanzado para orillar el enfrentamiento judicial, solución similar a la adoptada en 1815; acuerdo que implicaría una efectiva mejora de las condiciones del campesinado enfiteuta a la vez que una importante disminución de las rentas señoriales inherentes a la propiedad de la tierra. Tal vez la ley de señoríos de 1823 incidió de modo favorable en el logro de esta solución, aunque la veloz reinstauración del antiguo marco legislativo sobre señoríos con la Real Cédula de 15-VIII-1823<sup>266</sup> sin duda pudo mitigar su alcance.

La imposibilidad de localizar el documento que reproducía los términos del acuerdo nos impide conocer tanto las condiciones establecidas en el mismo, como los derechos señoriales por él afectados o los criterios seguidos a la hora de transformar las particiones de frutos en cánones en metálico proporcionales o equivalentes. El único medio del que se ha dispuesto para aproximarnos a la nueva situación han sido las escrituras de transmisión del dominio útil, a través de las cláusulas que hacen referencia a las cargas a las que se hallan

-----  
<sup>266</sup> Esta orden dispuso "que conforme á lo prevenido en la Real Cédula de 15 de Septiembre de 1814, se reintegrase á los señores territoriales y solariegos en la prestación de sus rentas, etc.. según las tenían antes del 7 de Marzo de 1820." *Diccionario de la Administración Española*, T. XIII, p. 780.

afectas las fincas, así como una serie de observaciones y puntualizaciones, más o menos detalladas, relacionadas con esta cuestión, u otro tipo de datos como pueden ser los precios de venta de las fincas.

A tenor de este material se ha verificado en primer lugar la sustitución de las distintas modalidades de partición (setena y dos diezmos de granos y frutos, pues el alfarraz de algarrobas probablemente fue englobado con ambas a la hora de evaluar las nuevas cantidades impositivas) por cánones en metálico anuales de diversa cuantía, a satisfacer el día de Santo Tomás (21-XII); al tiempo que los antiguos censos en metálico no experimentan alteración alguna, y continúan percibiéndose el día de San Miguel (29-IX).

Ha sido imposible confeccionar un criterio que permitiera asentar los parámetros elegidos para evaluar las cantidades que correspondían a cada enfiteuta en lugar de las antiguas prestaciones en especie; pues, como se observa en el cuadro V, las cantidades impuestas en concepto de canon por jornal de tierra establecido resultan bastante dispares. Cabe suponer que entre los factores tomados en consideración se situarían la localización de la finca (su mayor o menor proximidad al núcleo poblacional), la calidad y las características físicas del terreno, la extensión superficial, la rentabilidad y las condiciones de explotación (secano-regadío, tierra campa o arbolada) de los predios entre otros; parámetros

que, considerados globalmente, determinan sin duda el valor de las heredades. No se debe omitir tampoco el tipo de partición al que anteriormente estuviese sujeta la finca.

En este sentido, de la observación de los cuadros VI y VII y VIII, se desprende, por una parte, la mayor cuantía de los cánones impuestos sobre predios gravados tradicionalmente al séptimo; hecho lógico, puesto que la parte alícuota de la cosecha que se reservaba el señor por este concepto era superior a la que le correspondía por el pecho a dos diezmos, por el que se partía al doceavo. Por otra parte es de destacar cómo las pensiones anuales más elevadas afectan generalmente a las heredades más cotizadas, de acuerdo a su precio de venta. No hay que olvidar, sin embargo, la posibilidad de ocultaciones y fraudes respecto a los precios realmente estipulados en las transacciones, que incidiría en una posible disparidad y falta de relación entre los factores mencionados.

CUADRO VII. RELACION PRECIOS DE VENTA-NUEVOS CANONES

<u>Dos Diezmos</u>		<u>Setena</u>	
<u>Precio</u>	<u>Cánon</u>	<u>Precio</u>	<u>Cánon</u>
<u>Lib./Jorn.</u>	<u>Din./Jorn.</u>	<u>Lib./Jorn.</u>	<u>Din./Jorn.</u>
74	38,60	131,70	82,3
12,73	10,14	67	47
15	11,76	41,50	50,35
85	38,10	41,3	38,6
18,33	7	90	96
80	37,65	24,22	22,60
80	51,76	22,86	23,10
		27	26,30
		147,50	154,80
		70	87,50
		36	27,30
		150,80	99,76
		45	43,80
		64	65,90
		114,40	75,29
		38,67	100,70
		136,80	137,40

CUADRO VI. PRECIOS DE VENTA, CARACTERÍSTICAS DE LAS FINCAS Y CANONES ENFITEUTICOS.

FECHA	PRECIO(L)	PREC(L)/JORNAL SUPERF. (TH)	TIPO	LOCALIZ. (PTDA)	ANTIGÜO CANON	NUOVO CANON	DIN/JORN	RS MVS/JORN
1824	10	5	Sec.	Llano de la Gralla	---	---	---	---
1825	42	0,50	hta. -agua	Bajo la Torreta	---	---	---	---
1825	120	10	Sec. campu	la Gralla	---	---	---	---
1825	98	8	---	Llano de la Gralla	Dos Dieznos	---	---	---
1825	140	131,70	Sec.	Pisnella	Setena	5 rs 16 mrvds	82,30	5 rs 5 ms
1826	67	67	Sec.	Pisnella	Setena	2 rs 32 mrvds	47	2 rs 32 ms
1826	83	41,50	Sec. arb.	Runcal	Setena	6 rs 10 mrvds	50,35	3 rs 5 ms
1826	124	41,33	Sec. arb.	Pisnella	Setena	7 rs 8 mrvds	38,60	2 rs 14 ms
1826	90	90	Sec. arb.	Hoya de Jaime	Setena	6 rs	96	6 rs
1826	72,50	24,22	Sec. arb.	Eco Paret	Setena	4 rs 8 mrvds	22,60	1 rs 14 ms
1826	80	22,86	Incultas	Algepsar	Setena	5 rs	23,10	1 rs 15 ms
1826	27	27	Sec. campu	Llano de Pisnella	Setena	1 rs 22 mrvds	26,30	1 rs 22 ms
1826	590	147,50	Sec. arb.	Del Espino	Setena	38 rs 24 mrvds	154,80	9 rs 23 ms
1826	70	70	Sec. arb.	Collado de Pisnella	Setena	5 rs 16 mrvds	87,50	5 rs 16 ms
1826	90	36	Sec.	Mallada de Pisnella	Setena	4 rs 8 mrvds	27,30	1 rs 24 ms
1826	74	74	Incultas	Hoya de Blasco	Dos Dieznos	2 rs 14 mrvds	38,60	2 rs 14 ms
1826	140	12,73	Sec. arb.	Alto del Cabeço	Dos Dieznos	6 rs 33 mrvds	10,14	21,5 ms
1826	30	15	---	Llano de la Gralla	Dos Dieznos	1 rs 16 mrvds	11,76	25 ms
1826	170	85	Sec. arb.	Hoya Berenguer	Dos Dieznos	4 rs 26 mrvds	38,10	2 rs 13 ms
1826	55	18,33	Sec.	Llano de la Gralla	Dos Dieznos	21 dineros	7	15 ms
1826	40	80	Sec. arb.	Madroñal	Dos Dieznos	1 rs 6 mrvds	37,65	2 rs 12 ms
1827	54	54	Sec. arb.	Vercheret	Setena	---	---	---
1827	358	89,50	Sec. arb.	Fonalla	Setena	---	---	---
1827	72	48	Sec. arb.	Hoya Cabot	---	---	---	---
1827	24	192	Sec. arb.	Cabeço	---	5 rs 8 mrvds	56	3 rs 17 ms
1827	37,70	0,50 (casa)	Sec.	Maret	---	8 dineros	64	4 rs
1828	90	150,80	Sec. arb.	Vercheret	Setena	1 rs 19 mrvds	99,76	6 rs 8 ms
1828	16	45	Sec. arb.	Verdiel	Setena	5 rs 16 mrvds	43,80	2 rs 25 ms
1828	515	64	Sec. arb.	Pisnella	Setena	1 rs 1 mrvds	65,90	4 rs 4 ms
1828	38,67	114,40	Sec. arb.	Hoya del Mas	Setena	21 rs 6 mrvds	75,29	4 rs 24 ms
1828	342	38,67	Sec. arb.	Hoya del Cabeço	Setena	6 rs 10 mrvds	100,70	6 rs 10 ms
1828	40	136,80	Sec. arb.	Gorgonera	Setena	21 rs 16 mrvds	137,40	8 rs 20 ms
1829	80	2	Sec. arb.	---	Dos Dieznos	1 rs 21 mrvds	51,76	3 rs 8 ms

Fuente: ANJ. Prot. Not. de F. Miralles y V. Alberola. Elaboración Propia.

AJPA. Prot. Not. de F. Sala y Cantó.

1 jornal= 4 tahúllas= 4.804 m<sup>2</sup>. 1 sueldo= 12 dineros  
1 Libra= 20 sueldos= 15 reales 1 real= 34 maravedíes

CUADRO VIII. RELACION PRECIOS DE VENTA, CARACTERISTICAS DE LAS FINCAS Y CANONES EN METALICO SUBSISTENTES

FECHA VENTA	PRECIO (LIB.)	LIB./JORN.	SUPERFICIE (TAHUILLAS)	TIPO	LOCALIZACION	CANON	DIN./JORN.
1825	34	12	---	Hta.-agua balsa	Agua Amarga	1 d	---
1825	610	---	---	Hta.-agua/sec.	Cabrafich	2 s 2 d	---
1825	400	640	2,50	Hta.-agua balsa	Barranquet	---	---
1825	30	480	0,25	Secano	Detrás de la Sierra	1 s 3 d	240
1825	42	84	2	Sec. campo	Rallistera	6 d	12
1826	85	340	1	Secano	Pohuet	2 d	8
1826	290	773,33	1,50	Hta.-agua balsa	De las Huertas	4 s 2 d	133,32
1826	200	400	2	Hta.-agua balsa	De las Huertas	5 s	120
1826	40	106,66	1,50	Secano	Huertas Viejas	3 d	8
1827	112	112	4	Sec. arb.	Pohuet	2 s	24
1828	155	124	5	Sec. arb.	Hondo de Luis	1 r 16 ms	18,80
1828	62	165,33	1,50	Hta.-agua balsa	Agua Amarga	2 d	---
1829	125	---	---	Hta.-agua	Hoya del Espino	10 r 16 ms	5,3
	80	---	---	Secano	Pisnalla	9 r 6 ms	---

FUENTE: ANJ. Prot. Not. de F. Miralles y V. Alberola. Elaboración propia.

Por último, de la comparación con los gravámenes satisfechos tradicionalmente en metálico, resulta evidente la mayor cuantía de los impuestos en sustitución de las particiones, dado el continuo proceso de devaluación al que han estado sometidos los primeros desde el momento de su establecimiento; proceso por el que se verán afectadas de igual modo con el tiempo las nuevas cargas, y que redundará por tanto en perjuicio del señor territorial; quien tal vez se viera obligado a aceptarlo como un mal menor ante la continuada resistencia de los enfiteutas al pago de los derechos señoriales a pesar de los fallos judiciales obtenidos a su favor. Así ha sucedido en otras partes del País Valenciano. Ejemplo de ello son los casos de Bèlgida, Ráfol de Salem, Salem<sup>267</sup> o la baronía de Antella, donde la reducción de las percepciones subsistentes aceptada por el Conde de Rótova en 1832 supuso la disminución de las particiones de frutos de la quinta a la doceava parte<sup>268</sup>. No cabe duda que este fue uno de los factores que incidieron en el descenso de las rentas señoriales, y, a la larga y junto a otras causas, en el proceso de desintegración de los patrimonios señoriales en el antiguo Reino de Valencia<sup>269</sup>. La menor cuantía de los censos en metálico subsistentes puede comprobarse tanto en los cuadros expuestos en páginas anteriores (Cuadro III) como en el Cuadro VIII (ha de tenerse en cuenta, sin embargo, la existencia de

-----  
<sup>267</sup> MAHIQUES ALBEROLA, D. (1986): Op. Cit., pp. 46-47.

<sup>268</sup> GIL OLCINA, A. (1979): "La extinción de la propiedad ...", p. 65; GIL OLCINA, A. (1979): *La propiedad señorial ...*, p. 138.

<sup>269</sup> GIL OLCINA, A. (1979): "La extinción de la propiedad ...", pp. 65-66; MAHIQUES ALBEROLA, D. (1986): Op. Cit., pp. 48-50.

algunas excepciones, debidas a una mayor calidad y valor de la tierra o a un establecimiento tardío, durante los últimos años del siglo XVIII o la primera década del siglo XIX).

En segundo lugar, es importante destacar la reducción de la cuantía del derecho de luismo en las transacciones de las heredades antiguamente sujetas a partición de frutos. A partir de la firma del acuerdo, se pagará por este concepto 1 sueldo por libra del precio de venta estipulado, la mitad de la proporción exigida con anterioridad (1 real por libra= 2 sueldos por libra), que sí se mantiene, sin embargo, en el caso de enajenaciones de fincas gravadas con censos en metálico desde un principio.

En tercer lugar, por lo que respecta a los solares y fincas urbanas, se aprecia la sustitución de la prestación de la gallina por un cánon anual en metálico de 10 sueldos, a satisfacer por Santo Tomás.

Por último, cabe señalar que el resto de derechos inherentes al dominio directo permanecen sin modificaciones de ningún tipo. Así se desprende de las distintas declaraciones de cargas contenidas en las escrituras de venta. En este sentido, V. Blasco, en la escritura de venta de 1 jornal de secano situado en la Hoya de Blasco otorgada a favor de J. Giner (ambos labradores y vecinos de Busot), hacía constar que dicha porción de tierra "esta tenuta al canon de dos reales y catorce maravedises vellon en cada un año y dia de Santo Tomás veinte y uno de Diciembre por razon delos dos Diezmos; al Dominio mayor y directo, al de



fadiga, al de un sueldo por cada una libra de Luismo, y demas enfiteuticales a Dicho Señor Marques del Bosque, como Señor directo de Dicha Universidad de Busot"<sup>270</sup>.

En otras ocasiones no se enumeran todos los derechos, únicamente el luismo y la señoría directa del marqués sobre las fincas, e incluso, en algunos casos, bastante frecuentes, solamente se menciona el nuevo cánon impuesto (o se alude a la sustitución de las antiguas prestaciones sin especificar en que consisten las nuevas)<sup>271</sup>, y, en alguna ocasión, junto a ello la franqueza de gravámenes de cualquier tipo.

Las escrituras analizadas incluyen, además, la concesión de la licencia señorial autorizando la enajenación, la certificación del pago del luismo (generalmente realizado por el vendedor en el momento de solicitar la licencia) y el compromiso adquirido por el nuevo propietario, quien se obliga "a responder las pensiones de los censos a la Marquesa, a quien reconoce por Dueña y Señora Territorial, y guardar y cumplir las condiciones, penas de comiso y demas que contenga la escritura de establecimiento"<sup>272</sup>. En algún caso, incluso la asunción por el adquirente de las pensiones atrasadas adeudadas por el anterior propietario del dominio útil<sup>273</sup>.

-----  
<sup>270</sup> ANJ. Prot. Not. de F. Miralles, P. 26, año 1826, fs. 1-2 vto.

<sup>271</sup> En la escritura de venta de 2,5 jornales de secano situados en la partida de la Gralla, se declara estar "sujetas dichas tierras al Dominio Territorial de mi Principal y al pago del anuo fixo en subrogacion de antiguas prestaciones ó derechos Dominicales". ANJ. Ibidem, P. 26, año 1825, fs. 16 vto-18.

<sup>272</sup> ANJ. Ibidem, P. 26, año 1825, fs. 12-14.

<sup>273</sup> ANJ. Ibidem, P. 26, año 1826, fs. 25-27 vto.

A pesar de todo lo expuesto, se ha localizado también alguna escritura que todavía sigue recogiendo las antiguas particiones de setena y dos diezmos<sup>274</sup>, y la entrega de la gallina en el caso de casa y solares.

La firma del acuerdo y la nueva abolición de las leyes sobre señoríos del trienio liberal no se ven acompañados del cese de la oposición antiseñorial y de la resistencia al pago de las prestaciones enfiteúticas derivadas del dominio directo. Testimonio de ello siguen siendo las escrituras de obligación y reconocimiento de deudas, en las que los propietarios del dominio útil se comprometen a responder a la marquesa de los atrasos procedentes de censos redimibles y cánones enfiteúuticos<sup>275</sup>.

Algunas de estas acciones, en más de una ocasión, se habían visto precedidas de la denuncia de los titulares del dominio directo ante el juzgado de Busot y la tramitación del correspondiente expediente ejecutorio para reclamar el pago de esos derechos. Así, en este sentido, tras el fallo favorable a la Marquesa del Bosque, J. Brotons, V. y J. Brotons y Pérez, y J. Valor y Ramos (todos labradores y vecinos de Busot) fueron condenados a pagar los atrasos y las costas del juicio seguido

-----  
<sup>274</sup> ANJ. Ibidem, P. 26, año 1825, fs. 15-16 vto. y 22-24, y año 1826, fs. 4-5.

<sup>275</sup> V. Ripoll y García, arrendatario de la tienda, taberna y panadería de Busot, y arrendatario, también, por un período de 6 años, de la finca establecida enfitéuticamente a J. García, se comprometía a entregar a la marquesa las 25 libras anuales estipuladas por el arriendo hasta completar los 1.460 reales 4 maravedíes (97 L. 6 s. 10 d.) que J. García adeudaba a la misma en concepto de atrasos de censos redimibles y cánones enfiteúuticos hasta 1830. ANJ. Prot. Not. V. Alberola, P. 29, año 1830, fs. 20-21.

contra ellos. Estos enfiteutas se comprometieron, en diversas escrituras otorgadas en 1835, a satisfacer en una sola paga el día 1-VI-1836 (y en casa del marqués) las cantidades adeudadas en concepto de "atrasos de los derechos de canon, Adehalas y censos Enfiteusis, y redimibles incluso el presente año mil ochocientos treinta y cinco", que ascendían a 957 rs. 26 ms (63 L. 17 s.), 835 rs. 5 ms (55 L. 13 s. 6 d.), 965 rs. (64 L. 6 s. 8 d.) y 855 rs. 19 ms. (57 L. 9 d.), respectivamente. Además, cada uno de los acusados estaba obligado a entregar 55 rs. 30 ms. por los derechos del abogado encargado de la causa ("incluso el papel de los escritos presentados en la ejecución instada") y 26 rs. por los del escribano y el alcalde ("como actuario y juez en dicho expediente")<sup>276</sup>.

Las deudas podían suponer, sin embargo, sumas mucho más elevadas; este es el caso de los 26.000 rs. (1.733 L. 6 s. 8 d.) que J. Arnau e Iborra (vecino de Aguas Altas) adeudaba en 1851 a D. José Vaillo de Llanos, antes Rojas y Canicia, y que se obligaba a responder en el plazo de un año en una sola paga, dando para ello en fianza todos sus bienes y rentas, y concretamente 11 fincas, 9 de ellas rústicas (con una superficie total, entre secano y huerta -con sus correspondientes tandas de agua-, superior a las 84 tahúllas -10,0884 ha.-)<sup>277</sup>.

-----  
<sup>276</sup> ANJ. Ibidem, P. 30, año 1835, fs. 22vto-25.

<sup>277</sup> AHPA. Prot. Not. de J. Cirer y Palou, P. 502, año 1851, fs. 1772-1775 vto.

Esta situación de resistencia de los enfiteutas al pago de los derechos señoriales se mantendrá y se prolongará durante el resto del siglo, culminando en la elusión de la inscripción de las cargas señoriales en las Contadurías de Hipotecas y el Registro de la Propiedad, llegando incluso a figurar, en una anotación en este último, la negativa del ayuntamiento a reconocer su existencia.

La presentación de los títulos que legitimaban la posesión del señorío territorial, de acuerdo a lo establecido por el Real decreto de 26-VIII-1837, -que restablecía y modificaba las leyes de señoríos de 6-VIII-1811 y 3-V-1823 dando lugar a una ley de carácter más moderado-<sup>278</sup>, no varió la situación.

La documentación pertinente (una copia certificada de la escritura de venta del lugar y castillo de Busot otorgada por las herederas de Bonafonat de Vallebrera a Pere Fernández de Mesa en 1423) fue presentada en el Juzgado de la ciudad de Alicante por el encargado del archivo señorial el 21-X-1837, dentro del plazo de 2 meses concedido por la ley.

-----  
<sup>278</sup> Esta ley liberaba a los señores que no hubiesen disfrutado del señorío jurisdiccional de presentar los títulos acreditativos del mismo, convirtiendo el señorío territorial en propiedad particular. La misma disposición regía para aquellos señores que en juicio de incorporación o reversión hubiesen obtenido sentencia favorable. Además, en caso de presentar los dueños del señorío territorial los títulos, continuarían percibiendo las rentas derivadas del mismo hasta la promulgación de la sentencia. AMA. *Colección de Decretos. 1816-1848*. Madrid, Imprenta Real, T. 23 (años 1835-1837 por D. J. M<sup>a</sup> Riera), pp. 150-154.

D. Gil Mira, procurador en nombre del Marqués de Algorfa como curador del Marqués del Bosch<sup>279</sup>, en las diligencias iniciadas con motivo de esta cuestión, tramitó un escrito aludiendo al artículo tercero de la ley de 1837<sup>280</sup> como eximente de la obligación de presentar los títulos de señorío, por haber accedido a ellos por compra, acreditando su afirmación mediante la escritura de compra del lugar de Busot. El auto dictado por D. F<sup>CO</sup> Carbonell, Alcalde Primero Constitucional y Juez Accidental del Juzgado de Primera Instancia de Jijona, en Mayo de 1838, establecía que se daba "por cumplido al Señor Marqués del Bosque, representado por Gil Mora, lo prevenido en el artículo tercero del Real Decreto de 25 de Agosto de 1837 al presentar debidamente la Escritura de adquisición del lugar y término de Busot, tal como se le requería legalmente"<sup>281</sup>.

-----

279 El poder en lo referente a pleitos le fue otorgado el 21-V-1831 por D. Pablo Manchón y Soriano -apoderado general de D. José Vaillo de Llanos, antes Rojas y Pérez de Sarrió (Conde de Torrellano y Marqués del Bosch) desde 28-III-1831, ratificado por los tutores y curadores testamentarios del conde el 5-VII-1833-.

280 El contenido de este artículo era el siguiente: "Tampoco estan obligados los poseedores á presentar los títulos de adquisicion para no ser perturbados en la posesion de los predios rústicos y urbanos y de los censos consignativos y reservativos que estando sitos en pueblos y territorios que fueron de su señorío jurisdiccional, les han pertenecido hasta ahora como propiedad particular. Si ocurriere duda ó contradiccion sobre esto, deberán los poseedores justificar por otra prueba legal y en un juicio breve y sumario la cualidad de propiedad particular independiente del título de señorío, ... La resolucion que recaiga en estos juicios, decidirá solo sobre la posesion, quedando salvo el de propiedad."

281 AMB. Sin Número, s/f. Cortesía de D. Miguel Giner González.

Por otra parte, cabría añadir alguna puntualización acerca de los regímenes de tenencia empleados en el patrimonio señorial durante este periodo. Aunque la enfiteusis continúa predominando, se ha verificado, como en etapas anteriores, el recurso al arrendamiento para la puesta en explotación de los predios en plena propiedad del Marqués del Bosch.

Salvo las escrituras de arrendamiento de las instalaciones y edificios destinados a las antiguas regalías, el resto de escrituras localizadas corresponden al arrendamiento del "Huerto de la Señoría" -situado a las afueras de la población de Busot-, exceptuando la otorgada el 2-V-1834 por el apoderado señorial (José Giner) a favor de T. Alemañ (vecino de Busot), por un periodo de tres años y una pensión anual de 25 libras, a entregar en una sola paga el día de Navidad. Las dos parcelas arrendadas, de 12 y 8 jornales de secano, situadas en las partidas de Bonalba y Pissnella respectivamente, eran en realidad propiedad de José García, quien las había cedido en usufructo, tal vez en compensación de alguna deuda, al Marqués del Bosque<sup>282</sup>.

En 1826, el "huerto de la señoría" -"2 jornales (8 tahúllas) de tierra huerta con derecho de regar 30 dedos de agua de la balsa principal del Pueblo, propios de la Marquesa, plantado de diferentes árboles"- fue cedido en arrendamiento a V. Giner (labrador, vecino de Busot) durante un periodo de 4 años,

-----

<sup>282</sup> ANJ. Prot. Not. de V. Alberola, P. 29, año 1834, fs. 10 vto.-11 vto.

por un precio anual de 140 libras, a entregar en dos pagas, una el día de Navidad y la otra el de Pascua de Resurrección<sup>283</sup>. Las escrituras otorgadas posteriormente reflejan la cesión conjunta de esta finca y el horno de vidrio a varios labradores vecinos de Busot.

José de Rojas y Canicia (vecino de Alicante) otorgaba, en una misma escritura, 10 tahúllas de huerta arbolada con su casa de habitación a favor de V. Giner Pérez, y el horno o fábrica de vidrio a favor de Lorenzo Climent y Morant y J. Pérez y García. Tanto la duración como el precio del arrendamiento eran diferentes, situándose en torno a los cuatro años y unos 1.800 reales (120 libras) en el primer caso, y sobre los dos años y unas 100 libras en el segundo<sup>284</sup>. V. Giner se había obligado, además, a satisfacer al marqués los 9.000 reales (600 libras) que le adeudaba en concepto de atrasos por el arrendamiento anterior del horno de vidrio y varias fincas, a cuya seguridad hipotecaba una serie de heredades de su propiedad<sup>285</sup>.

Sin embargo, el arrendamiento siguiente se realizó por el mismo periodo de tiempo en ambos casos, manteniéndose las cantidades anteriores. En esta ocasión, los nuevos arrendatarios, V. Brotons Antón y L. Eus (labradores vecinos de Busot) obtuvieron dicho contrato por un periodo de 6 años, hipotecando igualmente a la seguridad del mismo diversas propiedades. Ambos

-----  
<sup>283</sup> ANJ. Prot. Not. de F. Miralles, P. 26, 1826, fs. 47 vto.-49.

<sup>284</sup> AHPA. Prot. Not. de J. Cirer y Palou, P. 501, año 1851, fs. 201-207 vto.

<sup>285</sup> AHPA. Ibidem, fs, 207 vto.- 210 vto.

arrendatarios recibieron del marqués un préstamo de 20.000 reales, al 6 % de interés, que se comprometían a reintegrar durante los seis años de arrendamiento (pudiendo entregar cantidades parciales de 7.000 reales cada una), dando por fianza las mismas fincas<sup>286</sup>. Tanto el préstamo como la deuda contraída por los atrasos del arrendamiento (19.800 reales) fueron cancelados el 15-IX-1868<sup>287</sup>.

Las condiciones de arrendamiento no varían demasiado de unos casos a otros. Las únicas disparidades provienen de la inclusión de las normas dirigidas al adecuado mantenimiento del horno de vidrio en aquellas escrituras en las que se arriendan conjuntamente ambas propiedades. Las condiciones establecidas van encaminadas a garantizar una serie de aspectos al propietario de las fincas. La cuidadosa realización de las labores de cultivo, "en terminos que siempre vaya de aumento, y nunca en disminución", costeando el arrendatario los perjuicios que ocasionase en caso contrario; la percepción íntegra de las rentas estipuladas ante cualquier tipo de circunstancia desfavorable;

-----  
286 El arrendamiento fue concedido el 5-III-1855, otorgándose en 1861 por los arrendatarios carta de pago reconociendo la deuda contraída por los seis años de arriendo y el préstamo de 20.000 reales más los intereses convenidos por el mismo. AHPA. Ibidem, p. 526, año 1861, fs. 2.375 vto.-2.378.

287 Este dato procede de los libros de la Contaduría de Hipotecas, conservados en el Registro de la Propiedad de Jijona. *Libro 2º de translaciones de dominio de fincas rústicas correspondientes al pueblo de Busot. Años 1846-1852*. Estos libros reflejan asimismo las obligaciones hipotecarias existentes sobre las fincas rústicas y urbanas, impuestas como fianza de arrendamientos, préstamos, etc.



o el ejercicio de un cierto control del predio, exigiendo la concesión de la licencia señorial para otorgar algún contrato de subarrendamiento son algunos ejemplos.

Otro conjunto de requisitos interesantes, presentes siempre en este tipo de contratos, son los que hacen recaer sobre el arrendatario los gastos de mantenimiento y adecuación al cultivo de la finca, permitiendo además imponer una serie de directrices sobre el cultivo de la misma. Así en este sentido, se exige que el arrendatario deje emparradas y con puntales todas las parras del huerto al finalizar el arriendo (pues así se le entregaron); que mantenga corrientes todas las "aygueras" o cauces que conducen las aguas pluviales para el riego del mismo; plantar a su costa los injertos y pies aportados por el señor o su apoderado; que conserve en buen estado las márgenes existentes en las tierras del huerto, reparándolas por su cuenta. Por último, suele correr con los gastos de escritura y de las copias necesarias también el arrendatario.

Por lo que respecta al horno de vidrio, los arrendatarios deberán costear tanto los gastos de las obras y reparaciones que tengan lugar en el molino donde se muele la barrilla, como los daños ocasionados en caso de incendio del resto de instalaciones, siempre que éste sea debido a un descuido de ellos mismos.

El último arrendamiento del huerto del que se tiene noticia es el otorgado por Zoilo Martinez Blanquer, apoderado de D<sup>a</sup> Mariana Moreno como usufructuaria del mismo, a favor de D. José Giner Alemañ (vecino de Busot) el 8-V-1917. En esta ocasión

se declaraba una superficie de 1,3561 ha., cultivada con almendros, higueras, limoneros y algarrobos, y con derecho a 32 horas de agua de la balsa del pueblo cada tanda de 19 días, aunque suspendido por falta de inscripción previa<sup>288</sup>.

El huerto fue arrendado por un periodo de 4 años, prorrogable indefinidamente bajo las mismas condiciones, si con seis meses de anticipación a la finalización del contrato no existía ninguna oposición a su continuación. El cánón estipulado ascendía a 865 pts. anuales a satisfacer el 21 de diciembre, además de 6 gallinas a entregar por Navidad en el domicilio del apoderado de la usufructuaria.

Respecto a las condiciones de arrendamiento no existen grandes disparidades. Se incluyen algunas disposiciones nuevas, como la prohibición de establecer cualquier tipo de servidumbre o derecho sobre la tierra; la imposición por la propietaria de las condiciones que le parezcan en caso de autorizar el subarriendo de la finca; o la obligación de plantar a costa del arrendatario un árbol nuevo en lugar del arrancado, previo consentimiento del dueño, por estar seco, aunque quedándose con el tronco y el ramaje.

En este sentido, Altamira señala como en Busot, Aguas y otros pueblos de la huerta de Alicante "que están ya en la sierra" es frecuente "la aparcería por mitad en el arbolado y

---

<sup>288</sup> Registro de la Propiedad de Jijona, Finca 883, Tomo 427, Libro 22, f. 174.

viñas, y en ese caso los arrendatarios se llaman medieros *michers*, y también *vel-lats*, porque velan por la noche para que no les roben el fruto"<sup>289</sup>.

### 2.3.-La cuestión de las regalías.

La supresión de los privilegios exclusivos, prohibitivos y privativos por el decreto de 6-VIII-1811 y el secuestro de que fueron objeto las instalaciones y edificios en los que se habían desempeñado estas actividades por el ayuntamiento del lugar de Busot ya han sido tratados en epígrafes anteriores. El acuerdo firmado en 1815 contemplaba su devolución a los Marqueses del Bosque, así como las rentas devengadas de los arrendamientos realizados por el ayuntamiento.

Es así como tiene lugar la transformación de algunas de esas dependencias en propiedades señoriales, aunque desprovistas de todo carácter monopolista. Es éste un proceso que tiene lugar en otras zonas valencianas como el marquesado de Bèlgida, aunque con resultados más favorables para el señor territorial, quien intentará poner de nuevo en vigor, después de 1814, los monopolios señoriales con un cierto éxito, oponiéndose a los establecimientos solicitados por los vecinos<sup>290</sup>.

-----  
<sup>289</sup> ALTAMIRA, R.: *Derecho consuetudinario y economía popular de la provincia de Alicante*. Instituto de Estudios "Juan Gil-Albert", Facsimil, Alicante, 1985, p. 26.

<sup>290</sup> MAHIQUES ALBEROLA, D. (1986): Op. Cit., p. 48.

Este conjunto de derechos que había proporcionado ingresos importantes a los titulares de los señoríos, a la vez que permitido un estrecho control de la actividad económica de sus lugares, a pesar de no ser restaurado por la Real Cédula de 1814, fue objeto de numerosos pleitos con resultados dispares<sup>291</sup>.

La situación de las antiguas regalías no resultó homogénea en Busot tras la configuración del nuevo marco legislativo. En el expediente tramitado con motivo del envío de requisitorias por el juez administrador de la Real Bailía de Alicante a varias poblaciones situadas en las cercanías de esta ciudad, para que presentaran los títulos de pertenencia o los reales privilegios de las regalías de pesos y medidas, pilón de carnicería y herbajes que estaban disfrutando<sup>292</sup>, se pone de manifiesto la evolución seguida por alguno de estos antiguos privilegios.

La regalía del pilón de carnicería no fue cuestionada por el procurador patrimonial, que aceptó su posesión inmemorial por el ayuntamiento. En páginas anteriores ya se comentó el disfrute de esta regalía por el ayuntamiento (probablemente por cesión del señor territorial), quien la arrendaba al postor que

-----

<sup>291</sup> BLESÁ CUÑAT, A. (1974): Op. Cit., pp. 255-256.

<sup>292</sup> Estas requisitorias responden al contenido del Real Decreto que establece el mantenimiento de los derechos del Real Patrimonio, y, por tanto, de la facultad de establecer o arrendar "los artefactos, pesos, medidas, y demas que por las Leyes Patrimoniales le corresponden desde el tiempo de la Conquista en Aragón, Valencia, Cataluña, y Mallorca, y que á todos los enfiteutas a quienes se hayan concedido Establecimientos, ó los obtengan en lo sucesivo, se los guarden y cumplan exactamente las condiciones de las Escrituras, ...". ARV. BAILIA, E, Expediente n° 3.345, año 1827, 23 fs.

ofertara más barata la libra de carne. La de pesos y medidas no corrió la misma suerte, pues el procurador patrimonial defendió su pertenencia al Real Patrimonio, solicitando que por la Contaduría de Hacienda se formularan los capítulos necesarios para su arriendo en pública subasta.

Las alegaciones del ayuntamiento de Busot basadas en un decreto del Real Acuerdo<sup>293</sup> de fecha 4-VI-1810, que establecía que "los fondos públicos de Busot provean de Amotasen de marco, y pesos, y medidas destinándose á los Propios los productos sin necesidad de otra Administracion, que el mismo Amotasen servido alternativamente, entre los Regidores y Diputados por meses", fueron consideradas insuficientes para acreditar la posesión. El ayuntamiento protestó ante la solicitud de arrendamiento presentada por el fiscal patrimonial, puesto que, desde la abolición de los derechos señoriales de origen jurisdiccional, los pesos y medidas habían sido agregados a los propios; pero la sentencia final promulgada en Valencia en 22-IX-1830 declaraba la pertenencia de dichas regalías al Real Patrimonio<sup>294</sup>.

Por lo que respecta al herbaje, este documento incluye un testimonio del escribano del lugar, Tomás Brotons y Bernabeu, de fecha 14-VI-1819, en el que se declara que hasta 1811 había sido el apoderado del señor territorial el que había cobrado

-----  
<sup>293</sup> Dictado a resultas del expediente instado por el diputado y síndico personero de Busot ante los abusos de los regidores, "para que cesen los Regidores de Manejar y disponer arbitrariamente del ramo de pesos y medidas y que el Ayuntamiento lo arriende o administre". ARV. Ibidem, fs. 2 vto-4.

<sup>294</sup> ARV. Ibidem, fs. 22 vto-23.

desde tiempo inmemorial el arrendamiento de los herbajes y los pagos por los daños ocasionados por los ganados; fecha a partir de la cual había pasado a ser responsabilidad de la Justicia de Busot, y los ingresos obtenidos destinados a "la Composicion de la Casa de Ayuntamiento, y Carcel; respecto a que el Señor Territorial quedó privado de los derechos privativos, y exclusivos en virtud de la Real Orden de tantos de Septiembre en que recayó esta posesion"<sup>295</sup>. A pesar de la puntualización realizada por el procurador patrimonial, favorable a la devolución de este derecho al dueño del lugar porque, a pesar de que la Real Cédula de 15-IX-1814 no reintegra a los señores los privilegios privativos y exclusivos, "este derecho es inherente al dominio territorial y solariego el que les fue devuelto por ... (dicha Real Cédula)"<sup>296</sup>, parece que la situación no se modificó en lo más mínimo, permaneciendo esa regalía en manos del ayuntamiento de Busot.

Esta posibilidad podría verse corroborada por las alusiones, contenidas en un expediente sobre el traslado de una fábrica de vidrio desde la partida de Aguas Altas a la universidad de Busot<sup>297</sup>, relativas al perjuicio que ocasionaría al común el excesivo aprovechamiento de las leñas para el funcionamiento de los hornos existentes en el lugar; por ser éste uno de los derechos del común.

-----  
<sup>295</sup> ARV. Ibidem, f. 4 vto.

<sup>296</sup> ARV. Ibidem, f. 9.

<sup>297</sup> ARV. BAILIA, E, Expediente n<sup>o</sup> 3.553, año, 1830, 125 fs.

La posesión de las hierbas y montes fue uno de los derechos más disputados por los señores y sus antiguos vasallos, quedando como propiedad señorial en la mayor de los pleitos suscitados al respecto. Ejemplo de ello son los casos de Bétera (en 1814, contra el Marqués de Dos Aguas), Suera (en 1816, contra el Duque de Medinaceli), el Valle de Almonacid (en 1814, contra el Marqués de Castellrodrigo) o Crevillente (en 1813, contra el Marqués de Astorga)<sup>298</sup>.

Podría ser éste, por tanto, un caso de monte de origen señorial<sup>299</sup> -a pesar de los diversos testimonios existentes acerca de la mancomunidad de pastos entre Busot y Alicante y Jijona- posteriormente gestionado por el ayuntamiento en concepto de bienes de propios o bien de propiedad comunal. En este sentido, 410 ha. de monte del municipio de Busot presentan el carácter de monte de utilidad pública propiedad del ayuntamiento<sup>300</sup>.

Las regalías que regulaban el abastecimiento de productos de primera necesidad, tradicionalmente en manos del ayuntamiento de Busot, continuaron bajo ese mismo régimen,

-----

<sup>298</sup> BLESÁ CUÑAT, A. (1974): Op. Cit., p. 255.

<sup>299</sup> En la escritura de venta del lugar y castillo de Busot se incluyen entre otros bienes: "tots los Valls, Masos et habitacions qualsevols, é ab tots honors, monts, valls o Plans, é colls, camps, terres, orts, vinyes, olivarts, garrofers e garroferals, é altres qualsevol arbres fructificans, et no fructificans, é Boscatyes, Prats, Molins, Fons, Forns, Aygues, pons, y torrens, cases é deheses é tots altres lochs terres é posesions ... cultes com incultes ..".

<sup>300</sup> MONTIEL MOLINA, C.: *Los montes de utilidad pública en la provincia de Alicante*. Universidad de Alicante-Caja de Ahorros Provincial de Alicante, Alicante, 1990, pp. 72-76 y 79-95.

agregándose a ese grupo algunas de las ostentadas por el señor de Busot hasta 1811, como es el caso de la tienda, taberna y panadería.

Las noticias obtenidas al respecto son escasas y fragmentarias, pues no abarcan todo el conjunto existente; pero permiten señalar la continuidad de los arrendamientos de carácter anual otorgados por el ayuntamiento al mejor postor como medio de gestión. Las condiciones estipuladas para la concesión de estos contratos no figuran en las escrituras (exceptuando la exigencia de presentar fianza), remitiendo a los capítulos establecidos por el ayuntamiento al respecto. Es de suponer que no se mantendrán diferencias sustanciales con las fijadas en periodos anteriores, salvo en lo referente a los precios de venta y ganancias permitidas a los arrendatarios.

La venta al por menudo de harina fue arrendada por 47 libras, en noviembre de 1815, a V. Ripoll (vecino de Busot), quien al año siguiente cedía la mitad del arrendamiento a V. Giner (de la misma vecindad) "debiendo tener puerta abierta, estar sugeto al pago de la mitad del Arrendamiento, abastecer al Comun de Arina", y, en el caso de realizar la venta en la plaza, ofertarla al precio más bajo "quando no esté higual en ambas aseguradas"<sup>301</sup>.

---

<sup>301</sup> ANJ. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu, P. 25, año 1816, fs. 11-11 vto.



El 8-II-1817 fue otorgado a J. Ripoll (arrendatario de la tienda de aceite) en arrendamiento "el ramo de sal excedente a 100 fanegas que es la cuota señalada a este pueblo, por su acopio, deviendola vender pelada a 20 maravedies la libra, sin que ningún vecino pueda mercar ni vender de este género, y se obliga a extraer de la administración de la ciudad de Alicante las 6 fanegas referidas y consumirlas en esta población por el año 1817"<sup>302</sup>.

La tienda, taberna y panadería fueron arrendadas conjuntamente, en 1825, a V. Giner y Pérez (vecino de Busot y, durante largo tiempo, arrendatario del horno de vidrio propiedad de los Marqueses del Bosch) por un precio de 370 libras (de las que 100 correspondían a la tienda)<sup>303</sup>.

Las instalaciones y edificaciones que habían permanecido como propiedades señoriales fueron explotadas igualmente mediante el arrendamiento a corto plazo. Como en el caso anterior, la precariedad de los datos disponibles no permite realizar más que una aproximación a la cuestión.

La duración de los contratos oscilaba entre los 2 y los 8 años, dependiendo del objeto del arrendamiento: 2 años en el caso de los hornos de pan, 4 años en el caso del tejar, y de 2 a 8 años en el caso del horno de vidrio. También variaba, según el tipo de fábrica, el precio anual estipulado; aunque puede señalarse la existencia de una tendencia común a la baja. Las

---

<sup>302</sup> ANJ. Ibidem, P. 25, año 1817, fs. 8 vto.-9.

<sup>303</sup> ANJ. Prot. Not. de F. Miralles, P. 26, año 1825, fs. 14-14 v.

cantidades exigidas, entre las 24 y las 140 libras, eran generalmente satisfechas en un solo pago el día fijado para ello, que no siempre coincidía con una fecha significativa (Navidad, el 9 de marzo, el 31 de diciembre, el 1 de octubre).

Así por ejemplo, la cuantía del arrendamiento de los dos hornos de pan, otorgado por separado, ascendía, en 1831, a 43 y 40 libras respectivamente<sup>304</sup>. En el caso del tejar (que se arrendaba junto a parte de las tandas de agua pertenecientes al huerto de la señoría), la cantidad exigida había descendido desde 40 a 24 libras entre 1816 y 1834<sup>305</sup>. En último lugar, por el arrendamiento del horno de vidrio, otorgado con una serie de dependencias auxiliares<sup>306</sup>, los propietarios percibieron cantidades situadas en torno a las 140 (en 1828)<sup>307</sup> y las 100 libras (en sendos arriendos concedidos en 1851 y 1855)<sup>308</sup>.

Finalmente, un dato a considerar es la relativa continuidad de los arrendatarios en los arrendamientos. El tejar estuvo en manos de la familia Climent desde 1816 a 1838 (con posterioridad a esta fecha no hemos obtenido ningún dato más) y, en cuanto al horno de vidrio, aunque fue llevado por diversos

-----  
<sup>304</sup> ANJ. Prot. Not. de V. Alberola, P. 29, año 1831, fs. 6 v-8 v.

<sup>305</sup> ANJ. Prot. Not. de T. Brotons, P. 20, año 1816, fs. 6-6 vto, y 1820, fs. 22 vto.-23; y de V. Alberola, P. 29, año 1834, fs. 19 vto.-20 vto.

<sup>306</sup> Un corralón para almacenar la leña, un molino con su artesa para moler la barrilla necesaria, varios almacenes para colocar el vidrio, las pilas para "bañar los hierros" y el depósito de arena.

<sup>307</sup> Este es el único caso localizado en el que los pagos se satisfacían con una periodicidad mensual. ANJ. Prot. Not. de V. Alberola, P. 28, año 1828, fs. 26-27.

<sup>308</sup> AHPA. Prot. Not. de J. Cirer y Palou, P. 501, fs. 201-201 vto. y P. 526, fs. 2375 vto.-2378.

individuos, y durante periodos más cortos, la duración de los mismos es también relativamente importante<sup>309</sup>. El disfrute del horno señorial coincidía, en algunas ocasiones, con el de otros hornos propiedad de varios particulares.

Las condiciones de arrendamiento contemplan la mayor parte de los aspectos mencionados en ocasiones anteriores. El arrendatario ha de costear los gastos derivados de la realización de obras y reparaciones en las instalaciones y edificios, así como del mantenimiento general en buenas condiciones de las mismas<sup>310</sup>, de modo que a la finalización del arriendo presenten el mismo estado con que fueron entregados<sup>311</sup>. También eran por cuenta del arrendatario los derechos de escritura y la copia franca solicitada por el propietario.

-----  
<sup>309</sup> 5 años en el caso de J. Climent Javaloyes, 6 años en el caso de V. Brotons y L. Eus por una parte, y L. Climent Morant y J. Pérez García por otra, y 13 años en el caso de V. Giner Pérez. Al finalizar sus respectivos arriendos alguno de ellos continuaba llevando los hornos que, pertenecientes a otros particulares, existían en el término.

<sup>310</sup> Mantener corrientes las tapaderas y boca del horno de pan, terraplenar los pisos y entradas de los hornos cuando así lo disponga el otorgante, mantener en buen estado "puertas, cerrajes y llaves", ocuparse de los desperfectos del molino de barrilla anexo al horno de vidrio, ...

<sup>311</sup> Se han localizado, sin embargo, algunas excepciones al respecto. En la escritura de arrendamiento del horno de pan otorgada en 1831, se hacía constar que la reparación de los tejados en caso de goteras sería costeada por ambas partes. ANJ. Prot. Not. de V. Alberola, P. 29, año 1831, fs. 6 vto.-8 vto. En este mismo sentido, y por lo que se refiere al tejar, las reparaciones del almacén de tejas serían responsabilidad del propietario, mientras que las de la "olla del horno" correrían a cargo del arrendatario. ANJ. Ibidem, año 1834, fs. 19 vto-20 vto.

Por otra parte, el arrendatario pretende garantizar la percepción íntegra de sus rentas y quedar eximido de cualquier tipo de riesgos, advirtiéndolo, para ello, que no habrá lugar a reducciones del precio de arrendamiento por ningún concepto, y que, en caso de catástrofes mayores como los incendios, las reparaciones y los daños serán asumidos por el arrendatario. En este sentido, en el arrendamiento del horno de vidrio otorgado en 1826 a J. Morant, se establecía que si por cualquier causa "aconteciese alguna desolacion del edificio, tanto en los almacenes del vidrio como en la fabrica y demas perteneciente a la misma, sea de cuenta y cargo del arrendatario el vidrio que se rompa y pierda en dicha ruina"<sup>312</sup>. En este mismo orden de cosas, el otorgante prohibía la concesión de subarriendos sin licencia suya; exigía la satisfacción de las pensiones en los plazos señalados al respecto, bajo pena de anular el arrendamiento<sup>313</sup>, y la presentación de fianza suficiente a la seguridad de la misma<sup>314</sup>.

-----  
<sup>312</sup> ANJ. Prot. Not. de F. Miralles, P. 26, año 1826, fs. 45 vto.-46 vto.

<sup>313</sup> El retraso durante más de 8 días en los pagos mensuales correspondientes al arriendo del horno de pan, reportaba la anulación de dicho contrato. ANJ. Prot. Not. de V. Alberola, P. 29, año 1831, fs. 6 vto.-8 vto.

<sup>314</sup> En la escritura de arrendamiento otorgada a L. Climent en 1816, éste obligaba sus bienes y rentas "havidas, y por haver, dando poder cumplido á las Justicias, y Jueses de Su Magestad de qualquier partes que sean, y en espesial á las de esta Universidad para que a ello se le competa, y apremie por todo rigor como sentencia difinitiva de Jues Competente dada (...)" ANJ. Prot. Not. de T. Brotons, P. 25, año 1816, fs. 6-6 vto.

Otras cláusulas más específicas expresaban la obligación del otorgante de procurar al arrendatario del tejar "un dedo de agua de la balsa principal en cada tanda que se riegue el huerto para que este pueda hacer el barro para hacer la teja"<sup>315</sup> (con la prohibición expresa a éste de darle un uso distinto), y la facultad de realizar las modificaciones que le pareciesen oportunas en sus instalaciones sin que el arrendatario pudiera oponerse o solicitar una reducción del cánón por ello, teniendo lugar, en caso contrario, la anulación del arrendamiento<sup>316</sup>.

A pesar de la liberación de las actividades económicas que traía consigo la supresión de los privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos, los principales establecimientos "industriales" del lugar siguieron estando bajo control señorial, pues, por una parte, subsistieron transformados en propiedades señoriales los edificios e instalaciones que acogieron las antiguas regalías (aunque no gestionadas directamente por los marqueses, sino por arrendatarios), y, por otra, fueron escasas las nuevas iniciativas de particulares, fuertemente obstaculizadas por la señoría del lugar.

El expediente instado por D<sup>a</sup> Catalina Pascual y Vergara ante la Real Audiencia de Valencia en 1830, para evitar el traslado del horno de vidrio, solicitado por Carlos F. Pérez,

---

<sup>315</sup> ANJ. Prot. Not. de V. Alberola, P. 29, año 1834, fs. 19 v-20.

<sup>316</sup> ANJ. Ibidem, año 1831, fs. 6 vto.-8 vto.

desde Aguas Altas a Busot<sup>317</sup>, pone de manifiesto la situación existente en esa fecha, así como las pretensiones señoriales de seguir ejerciendo el monopolio de ciertas actividades industriales y comerciales, oponiéndose a la concesión de nuevos establecimientos por el Real Patrimonio a particulares, evitando de este modo el desarrollo de cualquier iniciativa local que escapase a su control. Actitud mantenida por los dueños del lugar en otras ocasiones en las que se dio esa posibilidad<sup>318</sup>.

Las alegaciones del representante señorial que mencionaban la existencia en Busot de "cinco Ornos de pan cocer, una fabrica de vidrio, dos de tejas, y sobre quince á veinte ornos de cal y yeso"<sup>319</sup> fueron desmentidas por los testigos presentados por la parte contraria, quienes sólo admitieron la existencia de 4 hornos de pan (únicamente 3 en funcionamiento),

-----  
<sup>317</sup> Carlos F. Pérez, labrador y vecino de Busot, presentó, el 23-IV-1830, un memorial dirigido a la Real Bailía de Alicante, en el que solicitaba la autorización por el Real Patrimonio del traslado del horno de vidrio que tenía establecido en la partida de Aguas Altas. Aducía para ello la falta de leña existente en el término de Aguas, la carencia de mano de obra dispuesta a emplearse en esa actividad, y la ruinosa situación en que se encontraba su edificio, sin posibilidades de reedificarlo de nuevo. C. Pérez pretendía ubicarlo en las inmediaciones de la almazara que le fue establecida por el Real Patrimonio en 1819, en un solar censido enfiteúticamente a los Marqueses del Bosch. ARV. BAILIA E, Expediente 3.553, fs. 1-1 vto.

<sup>318</sup> En 1779, D<sup>a</sup> Lorenza Martínez de Vera, Marquesa del Bosque, estableció a Miguel Ripoll un nuevo horno en Busot, que fue anulado por el Real Patrimonio al considerar que ésta era una regalía que competía al rey, y no a la señoría del lugar. Ante esta reacción, M. Ripoll elevó una nueva solicitud al Real Patrimonio, pero la marquesa se opuso a ella, ejerciendo el derecho de fadiga y haciéndose con el establecimiento del horno. ALBEROLA ROMA, A. (1984): Op. Cit., pp. 380-381.

<sup>319</sup> ARV. Ibidem, 2<sup>a</sup> parte, fs. 8-10.

uno de vidrio, otro de yeso y un tejár<sup>320</sup>.

La Marquesa del Bosch (como administradora de los bienes de su esposo, D. Rafael Canicia Vaillo de LLanos) se opuso abiertamente a la concesión del traslado de dicho establecimiento, puesto que éste suponía un "notable perjuicio de los intereses del vínculo que administra, de aquel vecindario, y aun del mismo Real Patrimonio, disfrutando á mayor abundamiento de derechos particulares sobre la finca en que se trata de Construir el referido artefacto, (...)"<sup>321</sup>.

Los efectos negativos que el traslado podía reportar venían derivados de las excesivas talas necesarias para sostener el consumo de leña por los hornos (en el caso del común de vecinos), de la pérdida de ingresos por el Real Patrimonio ante el cierre de los establecimientos ocasionado por la falta de leña, y, en el caso de los dueños territoriales, "porque la pretendida translacion de la citada fabrica de vidrio arruinaria la que esta tiene establecida en dicho pueblo de Busot desde tiempo inmemorial, no siendo por cierto acreedora á que se miren

---

<sup>320</sup> ARV. Ibidem, fs. 80-94 vto. Estos establecimientos desaparecerían con el tiempo, como se deduce de las noticias aportadas por Madoz y Figueras Pacheco. El primero de ellos todavía menciona la fabricación en Busot de vidrio, tejas y espartería; pero Figueras sólo alude a la existencia de una cerámica en su Geografía de la provincia de Alicante. MADDOZ, P. (1845): Op. Cit., p. ; FIGUERAS PACHECO, F.: Op. Cit., p. 957.

<sup>321</sup> Así se expresaba el apoderado señorial, D. Pablo Manchón y Soriano, en el escrito presentado a la Real Bailía de Alicante el 1-VI-1830. ARV. Ibidem, 1ª parte, f. 9.

con indiferencia sus intereses, pues seguramente es la persona que mas rentas satisface al Real Patrimonio en los diferentes establecimientos que tiene (...)"<sup>322</sup>.

Estos argumentos fueron rebatidos por el procurador de C. F. Pérez aduciendo que el supuesto elevado consumo de leña no era suficiente motivo para impedir la instalación de nuevas industrias, y que, en caso de desabastecimiento, los propios interesados procurarían solucionar el problema, abundando ésta en el término de Busot (procedente de cultivos arbóreos) y en los aledaños. Además pone de manifiesto las reticencias suscitadas ante las verdaderas intenciones señoriales:

"(...) nos da bien a entender que no la anima en su oposición otra cosa mas que el interes propio, pues claramente nos dice que de verificarse la translacion de la fabrica de vidrio de mi representado al pueblo de Busot, han de seguirsela perjuicios causando la ruina de la que ella tiene establecida en el mismo Lugar desde tiempo inmemorable, y que no es acreedora á que se miren con indiferencia sus intereses (...). Cabalmente habla la Señora Marquesa de un punto contrario á la disposicion de la ley de Partida que expresamente manda no se prohiba el establecimiento ó construccion de cualquier artefacto porque otro tercero alegue que sufriria perjuicio en el suyo ó menguarían las utilidades que de el resultan: No faltaba mas que por tener en Busot la Marquesa del Bosque una fabrica de vidrio, hubiera de tener sugetos á todos y sin la libertad que permiten las leyes

-----

<sup>322</sup> ARV. Ibidem, 2ª parte, fs. 8-10.



para pretender unos establecimientos que prestan utilidad en general, y en particular, y son beneficiosos al Real Patrimonio, al paso que hermocean, hacen honor á la poblacion, la aumentan, y producen otros miles bienes tan atendibles en una buena Estadística. (...)"<sup>323</sup>.

Las pretensiones señoriales no fueron atendidas, siendo desestimadas por el procurador patrimonial las alegaciones presentadas, al no constituir razón suficiente para denegar el traslado. Tras este dictamen, la Real Audiencia pronunció sentencia definitiva el 22-XI-1832, otorgando a F. Pérez Giner (sucesor del anterior) el permiso solicitado, "deviendo sugetarse en la plantificacion del artefacto y leñero a lo que manifiesta el perito Ramon Alemany (...), y con la obligacion de reconocer en Su Magestad el dominio mayor y directo satisfaciendo á su Real Patrimonio el censo anuo y perpetuo que la Contaduría imponga (5 sueldos) y los demas derechos de luismo fadiga y enfiteuticales."<sup>324</sup>.

A tenor de este fallo, F. Pérez Giner arrendaba, el 30-X-1833, a J. Morant "un corral de encerrar ganado para la constitución de una fabrica de horno de vidrio"; quien a su vez la subarrendó en 1835, por un periodo de 4 años y 50 libras anuales a satisfacer el día de Navidad, a Vicente Rafael Pérez, con la condición de no realizar ninguna obra en el horno sin licencia del propietario y de abonar los enseres, el material, la

-----

<sup>323</sup> Memorial presentado por Manuel Rubio y Cortina en marzo de 1831. ARV. Ibidem, 2ª parte, fs. 16-19 vto.

<sup>324</sup> ARV. Ibidem, 2ª parte, f. 106.

leña y el vidrio fabricado al anterior arrendatario<sup>325</sup>. Por estas mismas fechas, las escrituras notariales parecen mencionar la existencia de otro horno situado en las proximidades de éste. Los diversos individuos que llevaron ambos hornos obtuvieron durante diferentes periodos el arrendamiento del horno de vidrio señorial.

2.4.-La fase final del proceso de extinción del señorío solariego censido enfiteúticamente. Contaduría de Hipotecas y Registro de la Propiedad.

La resistencia de los enfiteutas a satisfacer los derechos y prestaciones derivados del señorío territorial conduciría finalmente a la extinción de los patrimonios rústicos que lo habían constituido. Es éste un proceso que no puede desligarse de la profunda imbricación existente entre el régimen señorial valenciano y la enfiteusis (régimen de tenencia y forma jurídica de propiedad de la tierra a la vez); puesto que es el elemento jurisdiccional del señorío el que salvaguardaba y

---

<sup>325</sup> ANJ. Prot. Not. de V. Alberola, P. 30, año 1835, fs. 13 v-14.

confería un carácter eminente al dominio mayor y directo<sup>326</sup>. Existen, además, en los establiments valencianos aspectos que exceden los límites del contrato entre particulares (inclusión de regalías, participación en los diezmos, ...). Es ésta una realidad que no pudieron soslayar los señoríos de jurisdicción alfonsina, a pesar de que la distinción entre los elementos territorial y solariego era más plausible, dado que la propiedad de la tierra había precedido siempre a la concesión del ejercicio de la jurisdicción. Este proceso fue sufrido, por tanto, por los señoríos alfonsinos más antiguos, mientras que no tuvo lugar en aquellos señoríos en los que su tardía fundación (o un régimen de tenencia distinto a la enfiteusis) permitió desligar más claramente ambos aspectos. Este es el caso de la Vallonga de Burgunyo o Peñacerrada, en los que sin duda predominaba el carácter de explotación agraria.

La pérdida de ese elemento jurisdiccional tras la abolición del régimen señorial, el nuevo marco legal y sociopolítico creado, y la abierta resistencia de los pueblos al pago de las prestaciones señoriales contribuyeron a debilitar el dominio mayor y directo, fortaleciendo, en cambio, el dominio útil que ostentaban los enfiteutas. Como señala Gil Olcina, el dominio mayor y directo perdió su carácter eminente y se vió

-----  
<sup>326</sup> "el establiment reservaba al censualista un dominio eminente, con derecho de comiso y firme apoyo en el ejercicio de la jurisdicción. La división de dominios característica de la enfiteusis alodial queda en la de naturaleza señorial disminuida y mediatizada por la componente jurisdiccional". GIL OLCINA, A.: "Declive y ocaso de la enfiteusis señorial valenciana", *Agricultura y Sociedad*, n.º 49, 1988, p. 303.

transformado en un "ius in re aliena", e incluso, en un gravamen ilusorio y nominal, carente de contenido real, que los pueblos se negaron a admitir<sup>327</sup>; a pesar de las numerosas sentencias judiciales que ampararon los derechos señoriales.

Esta situación induciría, durante la segunda mitad del siglo XIX, a una serie de señores territoriales (o a los nuevos propietarios del dominio directo, adquirido por compra o en pago de deudas) a optar por una solución de compromiso con los enfiteutas de sus lugares<sup>328</sup>; bien la concesión de escrituras de transacción de los antiguos derechos y de los predios establecidos (el Conde de Cervellón en Pedreguer en 1862<sup>329</sup>, o el Marqués de Bèlgida en Bèlgida, Salem y Ràfol de Salem en 1858<sup>330</sup>), bien la redención de censos colectivos (el Marqués de Dos Aguas, en 1878 y sin mediación del ayuntamiento, en Bétera<sup>331</sup>, y, en 1858, en Picassent<sup>332</sup>; D. Francisco de Estrada -acreedor del Conde de Altamira- en Elche, Crevillente y Aspe en 1851<sup>333</sup>; el Conde de Lumiares en Benifayó en 1851, y D. Antonio de Arrózpide en Nàquera en 1908<sup>334</sup>) o a título particular.

-----  
327 "(...) carece de sentido hablar de propiedad dividida en los predios enfiteúticos de los antiguos señoríos, ya que el dominio directo no sólo ha perdido su antigua condición eminente sino que aparece reducido a mero derecho real, difícil de ejercitar por otra parte, in re aliena, que resulta propiedad del enfiteuta".

GIL OLCINA, A. (1988): Op. Cit., pp. 303-306.

328 GIL OLCINA, A. (1979): *La propiedad señorial ...*, pp. 142-147.

329 BLESÀ CUÑAT, A. (1974): Op. Cit., Vol. IV, p. 26.

330 MAHIQUES ALBEROLA, D. (1986): Op. Cit., pp. 50-52.

331 GIL OLCINA, A. (1979): "La extinción de ...", pp. 71-72.

332 ROMERO GONZALEZ, J: *Propiedad agraria y sociedad rural en la España Mediterránea. Los casos valenciano y castellano en los siglos XIX y XX*. MAPA, Madrid, 1983, Ap., pp. 433-439.

333 GIL OLCINA, A.; Ibidem, pp. 72-73.

334 GIL OLCINA, A.; Ibidem, pp. 69-71.

Romero González, en este sentido, apunta los beneficios que podían reportar a la nobleza señorial las nuevas disposiciones sobre la redención de censos, en cuanto a su calidad de enfiteutas en otros términos de señorío o de realengo; una mínima compensación a la pérdida de sus patrimonios territoriales establecidos enfitéuticamente<sup>335</sup>.

La consulta de los libros de translaciones de dominio de fincas rústicas de Busot, pertenecientes a la Contaduría de Hipotecas, entre 1845 y 1862, y de los libros del Registro de la Propiedad de Jijona correspondientes a Busot, no ha aportado ningún indicio que permitiera deducir la adopción de una solución similar en los señoríos de Busot y Aguas. Las únicas anotaciones relativas a redenciones de censos que se han localizado responden a las realizadas, durante el año 1856, por D. José María de Rojas y Canicia, por un importe superior a los 27.280 reales<sup>336</sup>. Los censos redimidos (de carácter consignativo)<sup>337</sup>, cuyo capital total ascendía a unas 4.634 libras (y el valor de sus pensiones ánuas a unos 2.175 reales)<sup>338</sup>, habían sido impuestos sobre las

-----  
<sup>335</sup> ROMERO GONZALEZ, J. (1983): Op. Cit., pp. 285-286.

<sup>336</sup> Como se observa en el cuadro IV, se desconoce la cuantía de una de las redenciones efectuadas.

<sup>337</sup> El censo consignativo es el constituido a raíz de la imposición de un capital sobre un bien inmueble ajeno a la propiedad del censualista (mecanismo similar al préstamo hipotecario), quien recibe a cambio una renta o pensión anual. Este censo es de carácter redimible y perpetuo, puesto que se mantiene indefinidamente hasta su redención por el censatario. El Código Civil establece que "Es consignativo el censo cuando el censatario impone sobre un inmueble de su propiedad el gravamen del canon o pensión que se obliga a pagar al censualista por el capital que de éste recibe en dinero".

<sup>338</sup> Impuestos sobre el 3 %.

rentas del vínculo de los Martínez de Vera en la Universidad de Busot y varias fincas situadas en dicha universidad, a favor de diversas comunidades religiosas y otras instituciones.

Al margen de estas redenciones, reflejadas en el Cuadro IX, el 15-XII-1850, D. José María de Rojas y Canicia adquirió, por 19.590 reales 22 maravedíes, dos censos impuestos sobre "el pueblo de Busot, la hacienda de Cabrafich y otras fincas de las que no se expresa partida, cabida ni lindes", de 15.058 reales 28 maravedíes y 4,517 reales 22 maravedíes de capital. Las pensiones correspondientes, cuya cuantía se elevaba a 451 reales y 26 maravedíes y 135 reales 18 maravedíes respectivamente, eran satisfechas al convento de Dominicos de Orihuela.

Otros señores pretendieron hacer prevalecer sus derechos y consiguieron inscribir el señorío solariego de términos enteros en el Registro de la Propiedad, aunque con distintos resultados; en unos casos obtuvieron la redención del dominio directo (Benifayó o Náquera), mientras que en otros ese gravamen perduró convertido en una reliquia, sin contenido real alguno (Cox, Benilloba)<sup>339</sup>.

Tampoco fue éste el caso de Busot o Aguas de Busot. En ambos términos no tuvo lugar la inscripción registral global del señorío solariego, ni siquiera la inscripción del dominio directo de alguna de las fincas antiguamente establecidas. Si se produjo, sin embargo, con motivo de la inscripción por los enfiteutas de las fincas cuyo dominio útil poseían, la inclusión en las mismas

-----

<sup>339</sup> GIL OLCINA, A. (1988): Op. Cit., pp. 310-311.

CUADRO IX. REDENCIONES DE CENSOS EFECTUADAS POR EL MARQUES DEL BOSQUE EN BUSOT.

FECHA REDENCION	CAPITAL DEL CENSO	PENSION ANUA Reales/Cént.	% IMP.	OBJETO CENSADO	CENSUALISTA	VALOR REDENCION Reales/Céntimos
25-VIII-1856	2,000 Ls.	903 rs 53 cs	3,012	Rentas vínculo Martínez de Vera en Busot	Convento Dominicos-Orihuela	11,294 rs
25-VIII-1856	30 Ls.	13 rs 53 cs	3,007	Rentas vínculo Martínez de Vera en Busot	Carmelitas-Alicante	135 rs 30 cs
27-VIII-1856	500 Ls.	225 rs 90 cs	3,012	Rentas vínculo Martínez de Vera en Busot	Clero-Alicante	2,893 rs 75 cs
27-VIII-1856	300 Ls.	135 rs 53 cs	3,012	Heredad de Cabrafich (50 jorn. sec-reg)	Clero Sta María-Alicante	5,308 rs
27-VIII-1856	30 Ls.	13 rs 53 cs	3,007	Rentas vínculo Martínez de Vera en Busot	Clero-Busot	135 rs 30 cs
27-VIII-1856	266 Ls. 248 Ls.	120 rs 48 cs 112 rs 18 cs	3,019	Rentas vínculo Martínez de Vera en Busot	Iglesia Parroquial-Busot	2,908 rs 28 cs
1-IX-1856	*110 Ls.	130 rs 59 cs	-----	Rentas vínculo Martínez de Vera en Busot	Sta. María-Alicante	2,347 rs 50 cs
15-X-1856	11,250 rs.	338 rs 83 cs	-----	Rentas vínculo Martínez de Vera en Busot	Monjas Madalenas-Valencia	-----
15-X-1856	6,000 rs	180 rs 71 cs	3,012	Rentas vínculo Martínez de Vera en Busot	Hospital de Valencia	2,258 rs 18 cs

\* Cantidad que engloba 4 capitales de censo

FUENTE: Libro 3º de translaciones de dominio de fincas rústicas de Busot.  
Contaduría de Hipotecas. Registro de la propiedad de Jijona. Elaboración Propia.

de declaraciones de cargas en las que se hacía referencia al dominio mayor y directo del Marqués del Bosch y al resto de derechos enfiteúticos. Aunque éste no fue el hecho más frecuente. En los libros del Registro de la Propiedad predominan los casos en los que la finca inscrita no aparece sujeta a ningún tipo de gravamen ni señorío. Esta situación se manifiesta del mismo modo en los libros de translaciones de dominio de fincas rústicas y urbanas de la Contaduría de Hipotecas.

La documentación procedente de esta institución, creada por el Real Decreto de 23-V-1845, hace evidente la actitud totalmente reacia de los enfiteutas a declarar las cargas a las que se hallaban afectas las fincas cuando se producía una translación de dominio. Esta actitud pone de manifiesto tanto el impago casi generalizado de los derechos señoriales como la pérdida de significado del dominio directo. Este hecho no dejará de tener importancia, puesto que los datos aquí consignados pasarán posteriormente al Registro de la Propiedad como anotaciones preventivas.

Los libros de translaciones de dominio recogen de forma resumida el contenido de las diversas escrituras otorgadas con motivo de ventas, divisiones hereditarias de bienes, imposiciones de obligaciones hipotecarias sobre fincas rústicas y urbanas, o redenciones y reconocimiento de censos (los reconocimientos de censos hallados, poco numerosos, corresponden en su totalidad a fincas situadas en el término de Aguas de Busot).



Las declaraciones de cargas efectuadas en las anotaciones ofrecen un panorama desalentador. La inexistencia de cargas o la falta de precisión de las mismas son los testimonios más frecuentes. Cuando se reconocen los gravámenes a los que se halla afecta la finca únicamente se menciona la sujeción a la señoría directa o al dominio mayor y directo del Marqués del Bosque, o bien el cánón, generalmente en metálico, impuesto sobre la misma. Son muy contadas las alusiones al resto de derechos que acompañan al dominio directo (luismo, fadiga), y, cuando se especifica la cuantía del censo, raras veces se aclara su naturaleza (Censo de carácter enfiteúutico o consignativo).

En ocasiones, se ha comprobado como una finca declarada inicialmente libre de cargas (o bien carente de referencias sobre esa cuestión en los títulos presentados), tras ser objeto con posterioridad de una obligación con hipoteca o una venta a favor del marqués, es inscrita de nuevo incluyendo en la anotación correspondiente el reconocimiento de la señoría directa y de las cargas inherentes a la misma. También se han hallado ejemplos de cargas detalladas en la primera inscripción, pero omitidas en las siguientes.

La situación comentada aparece reflejada en el Cuadro X, donde se pone de manifiesto el escaso número de translaciones de dominio en las que se ha hecho constar los gravámenes existentes y la sujeción al dominio directo. Al margen de la existencia de tierras francas en Busot (como se desprende de diversos testimonios), no cabe duda de la excesiva cuantía de los porcentajes correspondientes a las fincas, que objeto de alguna

CUADRO X. DECLARACIONES DE CARGAS SEGUN EL NUMERO DE TRANSLACIONES DE DOMINIO Y LA SUPERFICIE AFECTADA POR ELLAS ENTRE 1845 Y 1852.

AÑO	CON CARGAS SEÑORIALES			NO SE EXPRESAN			LIBRES DE CARGAS			TOTAL		
	NO TRANSL.	%	SUPERF. (HA)	NO TRANSL.	%	SUPERF. (HA)	NO TRANSL.	%	SUPERF. (HA)	NO TRANSL.	%	SUPERF. (HA)
1845-46	7	2.64	7.51678	20	7.55	31.9466	25	9.43	45.6380	52	19.62	85.1078
1846-47	2	0.76	0.7206	12	4.53	12.1301	29	10.94	24.20015	43	16.23	37.05085
1848	----	----	----	6	2.26	5.5246	22	8.31	32.24685	28	10.57	37.77145
1849	2	0.76	0.54045	3	1.13	4.3236	15	5.56	14.71225	20	7.55	19.5763
1850	----	----	----	5	1.39	9.8482	34	12.83	34.1084	39	14.72	43.9566
1851	7	2.64	3.6030	26	9.21	41.58462	12	4.53	11.4095	45	16.98	58.59712
1852	2	0.75	3.8432	22	8.30	25.5813	14	5.28	11.70975	38	14.33	41.13425
TOTAL	20	7.55	16.22403	94	35.47	130.93902	151	56.98	174.0249	265	100.00	321.18795

FUENTE: Registro de la Propiedad de Jilona. Contaduría de Hipotecas. Libros de Translaciones de Dominio de Fincas Rusticas de Busot. Años 1845-52.

Elaboración Propia.

transacción, se declaran libres de cargas o bien faltas de información sobre ese aspecto. A tenor de estos resultados, la superficie del término cuyo dominio directo poseía el Marqués del Bosch sería irrelevante en comparación con la poseída en plena propiedad por los vecinos y terratenientes de Busot.

En este sentido, de las 265 transalaciones de dominio efectuadas entre 1845 y 1852, sólo en 20 casos (un 7,55 %) se hace constar algún tipo de gravamen (generalmente son de tipo señorial, aunque se ha recogido alguno de carácter consignativo a favor de comunidades religiosas), afectando a una superficie de 16,22403 Ha. (un 5,05 % de la superficie afectada por estas operaciones). Las anotaciones de transacciones en las que no se expresa ningún tipo de cargas representan el 35,47 % de los casos (el 40,77 % -130,93903 Ha.- de la superficie afectada), mientras las efectuadas sobre fincas libres (el 54,28 % -174,0249 Ha.- de la superficie) suponen el 56,98 %. Asimismo, de un total de 550 inscripciones realizadas entre 1853 y 1862, sólo un 5,27 % (29) de las mismas reconoce el dominio mayor y directo del Marqués del Bosch, y especifica el cánon, generalmente en metálico, impuesto<sup>340</sup>.

Aún así, el hecho de que fueran declaradas y anotadas las cargas que soportaban las fincas no implica que en realidad fueran hechas efectivas por los enfiteutas (hasta la década de

-----  
<sup>340</sup> Tomando en consideración la cifra global de translaciones efectuadas entre 1845 y 1862, el porcentaje se reduce a un 6,01 % (sólo en 49 de las 815 fincas afectadas por algún tipo translación de dominio se reconocen los derechos señoriales).

los 30 si se ha ratificado el pago de ciertos derechos señoriales -luismos, pensiones atrasadas, ...-, a través de las escrituras de transmisión del dominio útil y las de obligación y reconocimiento de deudas).

El Registro de la Propiedad refleja una situación en la que las actitudes contrarias al reconocimiento de los derechos señoriales se han visto agudizadas. Por otra parte, las noticias recogidas de las Contadurías sobre los derechos señoriales subsistentes, incorporadas primero como anotaciones preventivas y luego agregadas a las inscripciones definitivas realizadas por los antiguos enfiteutas, no pasan de ser alusiones de carácter informativo. En definitiva, podemos afirmar que en Busot se produjo, casi sin excepción, la pérdida del patrimonio solariego establecido enfiteúticamente; mientras los enfiteutas consolidaron su derecho de propiedad sobre las fincas cuyo dominio útil ostentaban gracias a su inscripción en el Registro de la Propiedad.

Este proceso por el que los enfiteutas pasaron a ser propietarios plenos de hecho antes de serlo de derecho vino propiciado por la negativa de los mismos a reconocer y efectuar el pago de los derechos señoriales, y, por tanto, a declararlos e incluirlos en las inscripciones registrales. No hay que olvidar, sin embargo, el protagonismo alcanzado por el propio Registro de la Propiedad en el proceso de extinción del dominio directo, al dificultar la inscripción del mismo por el rigor de los asientos registrales. Así lo ha señalado Gil Olcina, quien afirma que

éstos ejercieron "una función de filtro que dejó por completo fuera de ellos, mediante denegación de inscripciones multitud de establiments o los redujo a simples anotaciones preventivas"<sup>341</sup>.

No cabe duda que este proceso tuvo lugar a pesar de las consignas defendidas por algunos autores sobre el significado de las inscripciones registrales, como la que define como premisas erróneas "la de creer que los artículos 23 y 25<sup>342</sup> determinan que la inscripción es modo de adquirir, y la de pensar que el registrador puede ser juez inapelable que decida, al extender las inscripciones, acerca del derecho que hay en el otorgante para hacerlas."<sup>343</sup>. Tampoco tuvieron una mayor incidencia las sentencias del Tribunal supremo que establecieron el hecho de no ser necesaria la inscripción del gravamen para demostrar la

---

<sup>341</sup> La situación litigiosa de muchos señoríos valencianos, la existencia de datos incompletos o ambiguos, la presentación de cabreves desfasados y las identificaciones poco claras (al no constar debidamente los lindes de las fincas sujetas a los gravámenes, o sus propietarios) fueron razones que llevaron a la denegación de las inscripciones de los derechos señoriales. GIL OLCINA, A. (1988): "Declive y ocaso ...", pp. 314-315.

<sup>342</sup> Artículos que disponen que los títulos sujetos a inscripción y no inscritos no podrán perjudicar a tercero, y que los títulos inscritos surtirán efecto, en cuanto a tercero, desde la fecha de la inscripción. MARTINEZ ALCUBILLA, M.: "Diccionario de ...", VOZ HIPOTECAS, Tomo VIII, p. 572.

<sup>343</sup> MARTINEZ ALCUBILLA, M.: "Diccionario de ...", VOZ Hipotecas, p. 573. A continuación exponía que "la inscripción no es modo de adquirir, sino medio de asegurar los derechos reales, porque cuando falta título legítimo la inscripción es nula, conforme a la ley hipotecaria y antes y después de la promulgación del Código Civil". Ibidem, p. 574.

existencia del mismo<sup>344</sup>, o la procedencia de la inscripción de un censo cuando sus "poseedores o dueños útiles han reconocido la existencia del expresado derecho, haciendo expresa mención del mismo reiteradamente en las inscripciones extendidas en los libros del Registro moderno" <sup>345</sup>.

Por lo que respecta a las inscripciones registrales de las fincas situadas en el término de Busot, efectuadas en el registro de la Propiedad de Jijona, ya se ha puesto de manifiesto que son escasas las que mencionan el dominio directo a que se halla sujeta la finca. En el caso de efectuarse la declaración de cargas, el contenido de las mismas difiere bastante. En unos casos únicamente se alude a la señoría directa del Marqués del Bosque:

"4 jornales y medio de tierra secana, (...), sitas, á saber tres y medio en el término de Busot, partido Cabrafich, lindantes con (...), tenuta a la Señoría Directa del Sr. Conde de Torrellanos; y un jornal en la misma partida (...), con tres días de agua de la Balsa pequeña cada 14 días, y derecho al vesante de la Sierra, ..." <sup>346</sup>.

-----  
<sup>344</sup> El Tribunal Supremo declaró en sentencia de 5-III-1904 que "la falta de inscripción no implica la inexistencia ni la nulidad del gravamen, y la mención hecha en el Registro por los censatarios y al mismo tiempo titulares del patronato, suponen en cuanto á los mismos la constitución y el reconocimiento del derecho real y surte efecto contra tercero desde la fecha del asiento de presentación". MARTINEZ ACUBILLA, Ibidem, Voz CENSO, Tomo III, p. 237.

<sup>345</sup> Resolución de 27-VII-1899. MARTINEZ ACUBILLA, Ibidem, pp. 237-238.

<sup>346</sup> Inscripción de 7-VII-1863. Registro de la Propiedad de Jijona. Libro 1º Busot, Tomo 7º, Finca 12, f. 24.

"Esta finca se halla tenida a la Señoría directa del Sr. Conde de Torrellano sin que conste otra circunstancia; no pudiéndose expresar si tiene otras cargas, por no tener concluídos los índices de las inscripciones que se hallan en Alicante, de dicho pueblo"<sup>347</sup>.

En otros, además de la señoría se mencionan el luismo, la fadiga y el resto de derechos entitúticos, de manera más o menos detallada; incluyendo en ocasiones el tipo de canon que grava la finca:

"Certifico igualmente que careciendo la inscripción preinserta de algunas de las circunstancias que exige la ley, las adiciono con arreglo a la escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca y ha presentado D. Sebastián Mira en los términos siguientes: ...

Se asegura en dicho documento que la espresada finca se halla tenida á la Señoría del Marquesado del Bosque con pago de decima por luismo de las enagenaciones y demas derechos de la enfiteusis, y ademas á la septima parte de todos los frutos que produzca (...)"<sup>348</sup>.

"Esta finca según la inscripción del Folio 5, Lib. 4<sup>º</sup> de fincas rústicas y urbanas del antiguo registro, correspondiente al propio Pueblo de Busot se halla sujeta al

-----

<sup>347</sup> 8-VII-1863. Ibidem, Lib. 1<sup>º</sup> Busot, Tomo 7<sup>º</sup>, Fca. 13, fs. 26-27 vto.

<sup>348</sup> Inscripción de fecha 9-I-1867. Ibidem, Lib. 1<sup>º</sup> Busot, Tomo 7<sup>º</sup>, Fca. 90, fs. 239-239 vto. Al producirse dos segregaciones de esta finca, en las dos nuevas inscripciones resultantes se hizo constar la misma declaración de cargas.

dominio mayor y directo, luismo y fadiga del Ylustre Señor Marqués del Bosch, sin expresarse el cánón que se paga; é hipotecada ... También resulta por certificación librada por el Registrador de Alicante, con fecha 22 de los corrientes, que al Folio 1<sup>º</sup> del libro del año 1804, de aquel registro, se halla tenida al dominio mayor y directo del Señor Marques del Bosque y á dos diezmos el primero de los banales; y el otro á uno, á 6 sueldos de censo enfiteúutico perpetuo, en cada uno año y dia de San Miguel; y á otro censo de 5 Libras, parte de otro de 10, sin que se exprese a favor de que persona; sin que aparezca gravada con otra carga."<sup>349</sup>.

También se han hallado casos en los que lo único que se menciona es el censo o cánón que gravita sobre la finca:

"Esta finca (4 jornales de secano, partida del Llano de la Loma), según dicha inscripción (descripción contenida en el folio 120 del lío de las remitidas desde Alicante) está tenida a seis reales treinta y tres maravedis por setena al Marques del Bosch; sin que aparezca gravada con otra carga"<sup>350</sup>.

Son muy numerosas las inscripciones en las que se aduce la falta de índices, donde consten las fincas gravadas y las cargas que éstas soportan, para justificar el hecho de que no conste ningún gravamen en las mismas:

---

<sup>349</sup> Inscripción de fecha 27-VI-1863. Ibidem, Fca. 11, fs. 22-23.

<sup>350</sup> Inscripción de fecha 14-IV-1864. Ibidem, Fca. 35, f. 85.



"No pueden expresarse las cargas que acaso tenga esta finca por falta de índices" (Anotación Letra A). En una inscripción posterior se establece lo siguiente: "La anotación Letra A de esta n<sup>o</sup> 7 (finca), tomada por falta de índices, queda convertida en inscripción definitiva, en razón á que habiéndose terminado la confección de dichos índices concluyó la causa que la motivó. Al efecto examinados los referidos índices, y no aparecer que el predio rústico a que se contrae la indicada anotación se halla afecto a otra obligación, impuesta por los propietarios que correlativamente han inscrito su dominio en este Registro en los últimos 30 años"<sup>351</sup>.

Se ha verificado igualmente la existencia de casos en los que, si bien no se desprendía ninguna carga de los títulos de posesión presentados, la consulta de los informes remitidos por el registrador de Alicante o de las anotaciones procedentes de la contaduría evidenciaba una situación totalmente contraria. Este es el caso de la inscripción que pretendía realizar Teresa Yborra Gozalbez (vecina de Busot) de una finca, constituída por 4 tahúllas tierra huerta, con derecho a regar 2 días en cada tanda de 10 de la fuente y Balsa grande llamada de Cabrafich, y 4 tahúllas de secano, que había adquirido de José Pérez y García (tratante y vecino de Busot). Este es un caso curioso, porque es el único localizado en el que se formaliza la cancelación de

---

<sup>351</sup> Anotación de fecha 11-IX-1863, e Inscripción de fecha 14-VI-1867. Ibidem, Fca. 7, f. 14 vto.

la inscripción a favor de la interesada por no haber cumplido los requisitos a los que se hallaba sujeta la finca con motivo de estar afecta a la señoría directa del Marqués del Bosque:

"De la escritura presentada no resulta que dicha finca se halle gravada á responsabilidad alguna; mas al folio 249 del legajo de inscripciones, remitido por el registrador de la propiedad de Alicante, correspondiente al pueblo de Busot, resulta que se halla tenuta a la Señoría directa del conde de Torrellanos sin que resulte gravada con otra carga. (...)

Teresa Yborra y Gozalbez pretende inscribir su título de compraventa, más hallandose tenuta la finca a la señoría directa del Conde de Torrellano y no habiendose obtenido lisensia para la venta se suspende la inscripción tomando esta anotación por defecto subsanable y se debuelve el documento a la interesada, para que haga la subsanación dentro de sesenta dias (...). (Jijona, 19-X-1864)

La anterior anotación preventiva, señalada con la letra A, al folio anterior, que se consituyó en 19 de octubre último, por defecto subsanable del título de compra venta que se presentó, queda cancelada, porque ha transcurrido desde su fecha el plazo de 60 días que señala la ley hipotecaria para su duracion, sin que se haya subsanado el defecto de dicho título. Así resulta del asiento expresado. Y siendo conforme con el mismo firmo la presente en Jijona día dos de Enero de mil ochocientos sesenta y cinco"<sup>352</sup>.

-----  
<sup>352</sup> Ibidem, Fca. 47, fs. 116-117.

En este sentido resulta interesante mencionar una sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 22-V-1889, relacionada con este hecho. En ella se expone lo siguiente: "El artículo 29 de la ley hipotecaria prescribe que surtirá efecto contra tercero el dominio ó cualquier derecho real que se mencione expresamente en las inscripciones o anotaciones preventivas, aunque no consignado en el Registro por medio de una inscripción separada y especial; y aunque en el párrafo segundo del mismo artículo se añade que lo dispuesto en el primero se entenderá sin perjuicio de la obligación de inscribir especialmente los referidos derechos, no quita á la simple mención los efectos contra tercero, pue no lo dice, y además el artículo no tendría sentido y sería contradictorio"<sup>353</sup>.

Sin embargo, es éste un caso excepcional, y no sólo por la cancelación de la inscripción, sino por la causa que la motiva. Como contradicción al mismo en cierto sentido, puede mencionarse un dictamen pronunciado con motivo de la suspensión de una inscripción realizada por un registrador, al darse la circunstancia de que de los documentos presentados para efectuar la misma se desprendía que la finca se hallaba libre de cargas, cuando en el Registro constaba lo contrario. La Dirección General de Registros le ordenó "que en lo sucesivo no suspenda la inscripción de ningún título por la circunstancia mencionada, sino que inscriba desde luego los que se le presenten, si no

-----  
<sup>353</sup> MARTINEZ ALCUBILLA, M.: *Diccionario de la Administración ...*, Voz HIPOTECAS, T. VIII, p. 729.

fueran defectuosos por otro concepto, si bien haciendo expresa mención de las cargas que aparezcan del Registro, aunque en el documento de que se trate se diga que la finca ó derecho objeto del mismo está libre de ellas"<sup>354</sup>.

Resulta clarificadora, en relación al clima antiseñorial existente en Busot y al punto al que había llegado la cuestión de los derechos señoriales existentes sobre los predios antiguamente establecidos, la solución adoptada con motivo de la inscripción de una porción de tierra de la misma procedencia que la finca cuya inscripción registral fue denegada, y con la misma situación por lo que respecta al incumplimiento de la obligación de solicitar la licencia señorial en caso de enajenación. En esta ocasión, sin embargo, el resultado fue totalmente distinto, e incluso contrario, al que prevaleció en el caso anterior. Es interesante señalar que el acto de inscripción de ambas fincas fue iniciado en la misma fecha.

Tras ser denegada, por el mismo motivo y con un procedimiento similar al del caso anterior, la inscripción del título de compraventa<sup>355</sup> de 1 tahúlla y dos octavas tierra huerta (con medio día de agua en cada tanda de 10 de la balsa de Cabrafich) solicitada por M<sup>a</sup> Teresa Puch e Yborra, la presentación de una certificación del ayuntamiento que denegaba la existencia del gravamen modificó la situación y permitió la

-----  
<sup>354</sup> Esta resolución fue pronunciada el 5-I-1872. Ibidem, T. VIII, p. 747.

<sup>355</sup> La escritura de la venta fue otorgada por José Pérez García a favor de M<sup>a</sup> Teresa Puch e Yborra (vecina de Argel) el 7-IX-1864.

formalización de la inscripción registral. También es diferente la actitud del registrador, más acorde en esta ocasión con lo expuesto anteriormente sobre el dictamen de la Dirección General de Registros, puesto que efectúa la inscripción indicando que ésta por si misma ni confirma ni anula la existencia del gravamen señorial.

El contenido de la inscripción, que incluye el documento proporcionado por el ayuntamiento, revela abiertamente la postura de las instancias municipales y la situación a la que había desembocado la oposición antiseñorial y el rechazo al pago de los derechos subsistentes; puesto que se llega a afirmar que en Busot nunca se habían satisfecho derechos señoriales. Este contenido es del tenor siguiente:

"M<sup>a</sup> Teresa Puig e Yborra inscribe su título de compraventa. Este contrato se ha celebrado además bajo los siguientes precedentes:

1<sup>º</sup>. - La licencia dada a la adquirente por su marido ...

2<sup>º</sup>. - El gravamen dominio mayor y directo en favor del Conde de Torrellanos de que se hace merito al principio de la presente inscripción por cuya causa se tomaron las dos anotaciones letras A y B que anteceden suspendiendose la inscripción de la escritura que motiva esta hasta tanto se obtuviera la licencia del citado señor directo aun cuando no puede considerarse quitado, sin embargo se acompaña por él interasdo una instancia y certificado del Municipio del pueblo de Busot negando él indicado gravamen razón por la cual sin que se entienda perjudicado derecho alguno acerca la afirmativa ó

negativa del referido gravamen inscribo el contrato de que nos ocupa; y la nominada instancia y Certificación que la subsigue literal dice así: "Señor Alcalde= Ramon Garcia y Cano, casado, albañil, de cuarenta y cuatro años de edad, y de esta vecindad, segun la cedula personal que exhibe ante V. con el debido respeto expone: Que necesitando acreditar que en este pueblo no se pagan derechos de señorío directo o territorial= A V. Suplica se le libre certificación que acredite dicho extremo; gracia que espera merecer de la recta justificación de V.= Busot 14 de Septiembre de 1874= Ramón García= D. Vicente Brotons y Brotons Secretario del Ayuntamiento Constitucional de Busot= Certifico: Que de los datos de esta Secretaría de mi cargo e informes tomados al efecto, no resulta que se pague en este termino municipal derechos de señorío directo o territorial alguno. Y para que conste á requerimiento de Ramon García y Cano libro la presente con el Visto Bueno del señor Alcalde en Busot á 14 de Setiembre de mil ochocientos setenta y cuatro= (...)" (Inscripción efectuada en Jijona con fecha 24-V-1875).

En una inscripción posterior se hace constar lo siguiente: "La finca de este número, cuya situación, cabida, linderos, y demás circunstancias resultan de los anteriores asientos a los cuales me refiero por ser conforme la descripción que se hace de esta finca en el título ahora presentado.

Cargas. Del título que se inscribe y libros del Registro no resulta sobre esta finca carga ni obligación alguna, salvo la indicación de hallarse tenuta a la Señoría Directa del Conde de Torrellanos que resulta hecha en la anterior anotación

letra A, si bien tal carga aparece no existir de los Documentos reseñados en la anterior inscripción primera" (Jijona, 10-II-1881)<sup>356</sup>.

En definitiva, podemos apuntar que cuando la oposición de los enfiteutas a reconocer los derechos señoriales y el apoyo que esta actitud encuentra en las autoridades municipales trasciende al Registro de la Propiedad, se consolida el proceso de extinción del patrimonio señorial en favor de los antiguos poseedores del dominio útil, convertidos ahora de hecho en propietarios de pleno derecho.

En segundo lugar, debemos mencionar la incidencia del principio de prescriptibilidad de los censos, íntimamente ligado al carácter ilusorio del dominio directo y a la generalización del impago de las pensiones. No cabe duda que gran parte de los censos inscritos o declarados como cargas en las inscripciones registrales realizadas por los antiguos enfiteutas subsistieron como meras alusiones, sin llegar a ser satisfechas en la realidad. Esta situación daría lugar a que las fincas poseídas como libres durante un periodo superior a 30 años adquiriesen definitivamente ese carácter ante la prescripción de los censos. En este sentido, Gil Olcina afirma que "la caducidad del censo por prescripción ratifica en el orden legal la liquidación fáctica del mismo por la negativa generalizada de los enfiteutas a reconocer su vigencia"<sup>357</sup>.

-----  
<sup>356</sup> Registro de la Propiedad de Jijona, Lib. 1º Busot, Tomo 7, Fca. n.º 48, fs. 119-124.

<sup>357</sup> GIL OLCINA, A. (1988): "Declive y ocaso ...", p. 313.

Son numerosas las sentencias del Tribunal Supremo que establecen este hecho. Las pronunciadas el 24-I-1863<sup>358</sup>, el 4-VII-1870<sup>359</sup>, el 30-IV-1883<sup>360</sup>, el 23-VI-1886, u otras posteriores (23 y 26-II-1908, 21-III-1912 o 16-II-1915) constituyen ejemplos de ello.

La prescripción de los censos aparece reflejada en el caso de Busot de diversas maneras. En este sentido cabe mencionar los casos en los que solamente se hace alusión al dominio directo del Marqués del Bosque en la primera inscripción, omitiéndose cualquier referencia a esa cuestión en las siguientes, o bien aquellos ejemplos en los que se hace constar

-----

<sup>358</sup> Por sentencias de 24-I y 9-III de 1863 había declarado el T. S. "que no era doctrina admitida la de que no tiene lugar la prescripción en los capitales de censo y que la acción real hipotecaria que compete al censalista quedaba prescrita cuando transcurre más tiempo que el señalado en la ley recopilada (la ley 63 de Toro -Ley 5<sup>a</sup>, Tit. VIII, Lib. X, Novís. Recop.-), sin que por parte de aquel se haya deducido reclamación alguna. Pero es necesario si se excepciona la prescripción probar que en el tiempo legal no se ha hecho ninguna reclamación, pues de lo contrario la exacción del censo es legal y justa (Sent. 9 Junio 1866)". MARTINEZ ALCUBILLA, M.: *Diccionario de la ...*, Voz CENSO, T. III, p. 243.

<sup>359</sup> "La acción mixta de hipotecaria y real producida por el contrato enfiteútico, no puede tener eficacia cuando han pasado treinta años sin hacerse uso de ellas conforme á lo que dispone la ley 63 de Toro, (...) y la jurisprudencia, acordada con ella, que tiene establecida el T. S. (Sala 1<sup>a</sup>, Sent. 4 Julio 1870)". Ibidem, T. III, p. 243, n<sup>o</sup> 56.

<sup>360</sup> El T. S. casó y anuló la sentencia que condenaba al Ayuntamiento de Salamanca a pagar los 52 últimos años de la pensión de un censo, a pesar de la excepción de prescripción que había utilizado, "Considerando que es doctrina legal fundada en la ley 63 de Toro que la duración de las acciones reales y mixtas es de treinta años no interrumpidos, quedando prescritas y extinguidas si no se ejercitan dentro de este término; en cuya prescripción están comprendidas las acciones para reclamar, no solo las pensiones vencidas de un censo, sino también el reconocimiento del capital del mismo censo, como tiene declarado con repetición este T. S.". Ibidem, T. III, p. 243, n<sup>o</sup> 57.



que la finca no tiene cargas (a pesar de lo manifestado en la primera inscripción). Así, en este sentido, a pesar de declararse en la primera inscripción de una heredad, compuesta por 20 tahúllas de tierra huerta y secana, que ésta se hallaba sujeta al Señorío directo del marqués y al resto de derechos enfiteúuticos, la tercera inscripción de la misma, se realiza del modo siguiente: "Esta finca se halla afecta al censo enfiteúutico del Marquesado del Bosque y a la hipoteca ...= En el documento que se inscribe, se dice no tiene cargas= (...)"<sup>361</sup>.

Dentro de este grupo podemos situar también el ejemplo ya citado con motivo de las alusiones a la falta de índices como causa de no haber agregado a las inscripciones las declaraciones de cargas. Casos numerosos son aquellos en los que en las sucesivas inscripciones de la finca se remite a los gravámenes detallados en la realizada en primer lugar (o bien se menciona de modo muy somero la sujección a la señoría directa en todas ellas), hasta que llega un momento bastante tardío (años 20, 30, e, incluso incios de los 40) en que estas referencias llegan a desaparecer<sup>362</sup>.

-----  
<sup>361</sup> Registro de la Propiedad de Jijona, Lib. 1<sup>o</sup> Busot, T. 7, Fca. 56, fs. 141-144.

<sup>362</sup> Por ejemplo, en 1942, era efectuada la última inscripción de una finca urbana destinada (desde 1929) a cuartel de la Guardia Civil, haciendo constar todavía la existencia de esas cargas. Ibidem, Lib. 1 Busot, T. 8, Fca. 91, fs. 241-242 vto, y T. 231, f. 195. En el caso de otra finca, comprensiva de 2 jornales, la alusión a la señoría directa, todavía realizada en 1928, desaparece ya en la efectuada en 1941. Ibidem, Lib. 8 Busot, T. 164, Fca. n<sup>o</sup> 600, f. 245; T. 435, Lib. 23 Busot, f. 227.

En relación a esta perduración, cabe señalar que el hecho de efectuarse la reiteración de los gravámenes en las sucesivas inscripciones no implicaba la anulación de su prescripción. Así se establece, por ejemplo, en el siguiente fragmento de una sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21-III-1911: "Considerando además que la expresión en los documentos públicos de las cargas reales á que vienen afectos los bienes inmuebles que son objeto de transmisión y el hecho mismo de constar estos gravámenes relacionados en las inscripciones del Registro de la Propiedad, no implica un reconocimiento de su existencia por parte del adquirente de los inmuebles gravados que pueda motivar la interrupción de la prescripción, pues son circunstancias que independientemente del abandono en que tengan sus derechos las personas á quienes favorecen, están obligados á consignar los notarios y registradores en las escrituras y asientos del Registro con arreglo á la Instrucción sobre la manera de redactar estos documentos y disposiciones de la ley Hipotecaria, en tanto que las indicadas cargas reales no se encuentran formalmente canceladas; y esto supuesto, la Sala sentenciadora no ha infringido las leyes ..., al no estimar que interrumpía la prescripción el conocimiento que tenía el recurrido como comprador, de la inscripción en el Registro de gravamen, porque, de aceptar la teoría contraria, toda transmisión de dominio de las fincas gravadas haría cesar el tiempo transcurrido para prescribir, y se atribuiría al adquirente un reconocimiento que no estuvo en su voluntad hacer, porque muy otro fué el objeto del contrato á que prestó su

consentimiento: (...)"<sup>363</sup>.

Estas menciones, meras reliquias sin contenido real, que habían ido transmitiéndose en las sucesivas inscripciones perdurarían hasta la promulgación de la ley Hipotecaria de 6-II-1946, en la que se dispuso la cancelación, de oficio o a instancias de particular, de "a) Las menciones de cualquier clase que en 1º de julio de 1945 tuviesen quince o más años de fecha. b) Las menciones de legítima o afecciones por derechos legitimados que se refieran a sucesiones causadas con más de treinta años de antigüedad en 1 de enero de 1945 ..." <sup>364</sup>. Ejemplos de ello también constan en las inscripciones registrales de Busot.

En definitiva, podemos afirmar que la extinción del elemento solariego del señorío de Busot se produjo durante la segunda mitad del siglo XIX, sin mediar ningún tipo de convenio o transacción con los antiguos enfiteutas. La negativa de los mismos a reconocer y satisfacer los derechos señoriales y el debilitamiento y pérdida de significado del dominio directo en favor del útil, fueron los factores que determinaron dicho proceso. La extinción del dominio directo, propiciada tanto por la falta de inscripción del mismo (ante las ocultaciones de los enfiteutas con motivo de la translación de sus títulos de propiedad al Registro, la renuncia de los titulares a intentar

-----

<sup>363</sup> MARTINEZ ALCUBILLA, M.: *Diccionario de ...*, Voz CENSO, T. III, pp. 243-244, n.º 62.

<sup>364</sup> GIL OLCINA, A. (1988): "Declive y ocaso, ...", p.312.

inscribirlos o las dificultades impuestas por el mismo Registro dada la rigurosidad con que se efectuaban los asientos registrales) como por la prescripción de las escasos gravámenes inscritos o declarados, y legalizada bien entrado el siglo XX, supondría la implantación en las estructuras de propiedad de la tierra de la fragmentación y división que había caracterizado al dominio útil.

Aunque no hemos realizado ningún estudio al respecto, sirva de muestra para ilustrar este hecho la escasa superficie de las fincas que constan inscritas tanto en la Contaduría de la Hipotecas como en el Registro de la Propiedad. De los datos obtenidos de la Contaduría se desprende que, en el caso de las tierras de huerta, la cabida de las heredades se solía situar entre las 4 octavas y los dos jornales, predominando las parcelas que comprendían entre 3 y 5 tahúllas; mientras que, en el caso del secano, ésta oscilaba entre la tahúlla y los 12 jornales, siendo las más frecuentes las constituídas por una extensión superficial que abarcaba entre 1 y 4 jornales, y, en menor medida, hasta los 6 jornales. Esto no implica que no existieran predios de mayores dimensiones; pero los datos conseguidos sobre patrimonios íntegros (procedentes de divisiones de bienes, y muy escasos) no desmienten la situación.

Los casos localizados muestran patrimonios integrados por una extensión superficial, muy fragmentada en diversas parcelas, que oscila entre 1 y 47 hectáreas, predominando aquellos en que ésta se sitúa en torno a las 5 hectáreas.

## 2.5.-El patrimonio solariego subsistente.

El patrimonio solariego conservado por los descendientes de los antiguos titulares del señorío de Busot es muy inferior al que éstos consiguieron salvaguardar en Aguas. En Busot, este patrimonio señorial se vió reducido a aquellos predios que habían poseído siempre en plena propiedad, sujetos a un régimen de tenencia distinto a la enfiteusis (el arrendamiento), y a las fincas urbanas y solares sobre las que se habían asentado las antiguas regalías que permanecieron en sus manos tras la supresión de las mismas (convertidos en el momento de su inscripción en el Registro de la Propiedad en meros solares con edificios en ruinas). A este grupo se añadirían las fincas adquiridas con posterioridad a la abolición del régimen señorial y durante el proceso de desmantelamiento del antiguo elemento territorial señorial.

El análisis del proceso de disgregación y extinción del patrimonio nobiliario señorial de Busot requiere por tanto, y ya en último lugar, tomar en consideración la incidencia de una serie de disposiciones, de gran trascendencia para la liberalización del mercado de la tierra, que establecieron la supresión de los vínculos y mayorazgos. La legislación desvinculadora (Ley de 27-IX-1820 restablecida por el Real Decreto de 30-VIII-1836, y disposiciones aclaratorias de 15 y

19 de mayo y 19 de junio de 1821) propició la desaparición de estos patrimonios al favorecer la división hereditaria de los mismos y eliminar la protección legal frente al endeudamiento con la que hasta el momento habían contado.

Tras la muerte de D<sup>a</sup> Catalina Canicia de Franqui y Pascual de Riquelme, Marquesa del Bosch, ocurrida en 23-VI-1833, los bienes que constituían el vínculo de los Martínez de Vera pasaron por herencia a D. José M<sup>a</sup> de Rojas y Canicia, sucesor al mismo<sup>365</sup>. La inscripción de los mismos -muy mermados tras la pérdida de los establecidos enfitéuticamente- en el Registro de la Propiedad fue efectuada por D. Aureliano Yborra Monzoni (vecino de Alcante), en concepto de administrador general y apoderado de la testamentaria de D. José de Rojas y Canicia (Marqués del Bosch, Conde de Casa Rojas y Torrellano), el 18-I-1891 (tres años después del fallecimiento de dicho marqués).

La superficie inscrita por este motivo ascendía a un total de 51,81427 hectáreas, entre predios rústicos y solares. Estas fincas fueron las siguientes:

-La heredad de Cabrafich, integrada por una casa de habitación, y 29,4854 hectáreas (245 tahúllas 4 octavas) de tierra de labor y 20,8027 hectáreas (173 tahúllas 1 octava 21 brazas) "de lomas". Su valor declarado fue de 35.000 pts<sup>366</sup>.

-----  
<sup>365</sup> Registro de la Propiedad de Jijona, Lib. 5 Busot, T. 290, Fca. 882, fs. 152-156.

<sup>366</sup> Ibidem, fs. 152-156.

-El huerto de la Señoría, comprensivo de una casa habitación y 1,3561 hectáreas (11 tahúllas 2 octavas 11 brazas) de tierra huerta. Fue valorada en 5.950 pts., aunque, según una certificación catastral realmente sobrepasaba las 7.933 pts<sup>367</sup>.

-12,96 áreas (1 th. 8 brazas) "con casa y ruinas de un horno de cocer ladrillo, que fueron fábrica de alfarería o tejar situado en Busot, junto a la balsa de la fuente del pueblo"; a las que correspondían "2 dedos de agua de la balsa del pueblo cada 19 días".<sup>368</sup>

-3,1218 áreas que constituían un "solar o edificio en ruinas, que estuvo destinado a horno de vidrio"<sup>369</sup>.

-0,9252 áreas, cabida de un "solar que fue horno de pan de forma irregular"<sup>370</sup>.

Posteriormente, durante los primeros años del siglo XX, serían inscritas por D. José de Rojas y Galiano algunas de las fincas adquiridas por sus antecesores (por tanto integradas en el conjunto de bienes libres de los mismos), cuya cabida total ascendía a 6,9668 Ha. de tierra secana campa, situadas en la partida de Cabrafich (y colindantes a la heredad del mismo nombre). 1,2010 ha. (10 th. plantadas de algarrobos y olivos) fueron adquiridas, a Vicenta Valor, en 1830 por D. Rafael

-----  
<sup>367</sup> Ibidem, Fca. 883, fs. 157-60.

<sup>368</sup> Valorada en 125 pts. Ibidem, Lib. 13 Busot, T. 290, Fca. 884, fs. 161-163.

<sup>369</sup> Valorado en 200 pts. Ibidem, Fca. 885, fs. 164-166.

<sup>370</sup> Valorada en 50 pts., aunque según el Catastro excedía de 200 pts. Ibidem, Fca. 886, fs. 167-169.

Canicia Vaillo de Llanos<sup>371</sup>; y las 5,7649 Ha. restantes en 1845 por D. José M<sup>a</sup> de Rojas y Canicia, a D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Luisa de Rojas y Canicia, quien las obtuvo por herencia de sus padres<sup>372</sup>.

Con toda seguridad, esta finca procedía de los bienes libres de D<sup>a</sup> Catalina Canicia Pascual de Riquelme. Desconocemos el montante global y la distribución posterior de los mismos. A este respecto cabe señalar que no ha sido localizado ningún asiento a favor de los diversos herederos (exceptuando los correspondientes a D. José de Rojas y Canicia), salvo el realizado por D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Luisa de Rojas de una finca urbana que a su muerte pasó por herencia a su hermano Joaquín de Rojas (su único heredero), quien la vendería, en 1891, a un vecino de Busot<sup>373</sup>. Este hecho (junto a otra venta de una casa "con su olla u horno de pan coser" efectuada por la misma interesada)<sup>374</sup> hace suponer que los bienes procedentes, en concepto de libres, de la herencia de D<sup>a</sup> Catalina Canicia fueron vendidos a distintos particulares de Busot, exceptuando los adquiridos (por compra o herencia) por D. José de Rojas y Canicia.

-----  
<sup>371</sup> Adquisición realizada por D<sup>a</sup> Catalina Pascual de Riquelme y Vergara en nombre de su esposo. ANJ. Prot. Not. de V. Alberola, P. 29, año 1830, fs. 14-15 vto.

<sup>372</sup> Registro de la Propiedad, Lib. 21 Busot, T. 400, Fca. 1407, fs. 101-102.

<sup>373</sup> La cuantía de la herencia de D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Luisa de Rojas y Canicia ascendía a un total de 42.163,10 pts., integrada por varias fincas. Ibidem, Lib. 5 Busot, T. 290, Fca. 853, fs. 31 y ss.

<sup>374</sup> El 10-XI-1851, Luisa de Rojas y Canicia (vecina de Almansa) transfería a V. Giner y Brotons (Vecino de Busot) esta finca, "gravada a la señoría directa del Marquesado del Bosch, con pago de luismo y demás derechos del enfiteusis", por un precio de 6.000 reales. Para dicha venta fue solicitada la licencia señorial. AHPA. Prot. Not. de José Cirer y Palou, P. 502, año 1851, fs. 1804 vto.-1808.



Estas adquisiciones reflejan el interés de los propietarios por agrandar los predios que poseían en plena propiedad mediante la anexión de fincas limítrofes a los mismos. Probablemente este proceso haya sido más amplio de lo que hacen suponer los datos existentes, aunque sin duda bastante inferior al que tuvo lugar en Aguas de Busot.

Estas acciones que propiciaban la consolidación de dominios -a través de la adquisición del dominio útil por el titular del directo- se realizaron, en algunos casos, aprovechando el endeudamiento del campesinado enfiteuta a favor de los señores territoriales. Así se ha verificado en el caso, anteriormente mencionado, de la compra realizada a V. Valor, puesto que las 122 Libras 19 sueldos 4 dineros, en que fue estipulado el precio, fueron satisfechas de la siguiente manera:

"por el canon, gallina y Enfiteusis, de las tierras de la otorgante desde los años mil ochosientos veinte y ocho al veinte y nueve dos libras trece sueldos y siete dineros, por el Luismo de la presente venta doce libras dos sueldos, por el derecho de la Licencia diez sueldos y 9 dineros y ciento siete libras trece sueldos que adeudava su difunto Marido á la nominada compradora la Ylustre Señora Marquesa del Bosque de atrasos de los arrendamientos de la fabrica de vidrio de esta Universidad que tubo á su cargo segun consta por la Escritura de obligación otorgada por dicho su difunto marido José Climent en esta Universidad á cinco de Agosto del pasado año mil ochocientos

veinte y siete"<sup>375</sup>.

No cabe ninguna duda de lo ventajosas que resultaban para el Marqués del Bosque este tipo de ventas; puesto que, además de recuperar la plena propiedad de las fincas, deducía del precio estipulado el importe del luismo, del derecho de fadiga y de los posibles atrasos pendientes en concepto de pensiones. Este hecho se refleja de igual modo en la adquisición (a V. Giner, labrador y vecino de Busot), de media tahúlla de secano-regada con agua procedente de varias vesantes- lindante con el huerto de la Señoría, efectuada por la Marquesa del Bosque en 1816. De las 78 Libras acordadas la marquesa retuvo 5 Libras "por el capital que hasen los tres sueldos" (pensión ánuade carácter enfitéutico), 7 Libras y 6 sueldos "que higuamente se retiene por el real por libra de luismo"<sup>376</sup>. Esta finca no aparece registrada; probablemente porque, dada la antigüedad de su adquisición, sería integrada con el tiempo en la heredad conocida como el Huerto de la Señoría.

-----  
<sup>375</sup> ANJ. Prot. Not. de V. Alberola, P. 29, 1830, fs. 14-15.

<sup>376</sup> Finalmente se establecía que el comprador se obligaba "a no demandar al contenido vendedor cantidad alguna por rason de la sitada propiedad, que la misma señoría le tenía establecida; todo lo qual cumplira el dicho Apoderado, y su principal llanamente y sin Pleyto alguno con las costas de la cobranza, y demas que huviese lugar, mediante quedar satisfecho del Capital y atraso de los tres sueldos a que estava tenida ...". ANJ. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu, P. 25, año 1816, fs. 80 vto.-81 vto.

El patrimonio subsistente<sup>377</sup> tras la muerte de D. José de Rojas y Canicia sí se vió afectado por las disposiciones desvinculadoras, puesto que, de acuerdo a la ley de 27-IX-1820 (restablecida por el Real Decreto de 30-VIII-1836), la mitad del mismo se constituía como de libre disposición, asignándose la mitad restante al sucesor del extinto mayorazgo, D. José de Rojas y Galiano. Sin embargo, las disposiciones testamentarias adoptadas por él mismo en relación a la mitad de libre disposición atenuaron la fragmentación que la habría caracterizado; puesto que legaba la mejora del tercio y el remanente del quinto de todos sus bienes en plena propiedad y de libre disposición a dos de sus hijos, y en usufructo a los cuatro restantes, a cuyo fallecimiento (con o sin sucesión) pasarían igualmente, en propiedad y por partes iguales, a los dos anteriores:

"(...). Consigna a los efectos oportunos que habiendo recaído en él la posesión de los bienes pertenecientes á varias vinculaciones, de los cuales con arreglo a las leyes vigentes de

-----

<sup>377</sup> Era una patrimonio de enorme envergadura, pues al margen de las propiedades ubicadas en los términos de Busot, Aguas de Busot, Alicante, Elche, y otras zonas pertenecientes a ámbitos distintos de la provincia de Alicante, a D. José de Rojas y Canicia habían correspondido, a la muerte de D. Carlos Pérez de Sarrió en 1855, la mayor parte de los bienes poseídos por éste en los señoríos de Formentera y Algorfa. Las 1.188,4454 hectáreas que constituían esta heredad le fueron adjudicadas íntegramente. De las 425 ha. que ocupaba el término de Formentera, percibió 205,9794 Ha. (junto a varias fincas urbanas, granero, horno, almazara, ...); siendo atribuidas 54,5442 Ha., una casa y un molino harinero, a su hermano Joaquín de Rojas y Canicia. La superficie restante fue distribuída entre los descendientes de los antiguos enfiteutas. GIL OLCINA, A. y CANALES MARTINEZ, G. (1988): *Residuos de propiedad ...*, pp. 244-245 y 251-253.

desvinculación, corresponde una mitad a su hijo mayor D. José de Rojas Galiano Marqués del Bosch de Ares, se limitará a disponer tan solo de la otra mitad libre que le pertenece= Mejora en el tercio y lega el remanente del quinto de todos sus bienes, derechos y acciones, presentes y futuras, a sus seis hijos, D. José, D. Rafael, D. Carlos, D<sup>a</sup> Luisa, D<sup>a</sup> Rosario y D<sup>a</sup> Dolores Rojas y Galiano, en cuanto al D. José y D. Carlos, en propiedad y de libre disposición, y en cuanto a D. Rafael, D<sup>a</sup> Luisa, D<sup>a</sup> Rosario y D<sup>a</sup> Dolores, tan sólo en usufructo, para que sin exigirles fianza fructuaria ni otra caución alguna los disfruten durante los días de su vida, y a medida que ocurra el respectivo fallecimiento de estos últimos, tengan o no sucesión, pasará en propiedad y por partes iguales, la parte de bienes que cada uno haya usufructuado por razón de dicha mejora de tercio y legal de remanente del quinto á los referidos sus hijos D. José y D. Carlos Rojas y Galiano ó á sus hijos y descendientes respectivos en su representación, pudiendo disponer de ellos libremente y sin restitución ni limitación de ninguna clase (...)"<sup>378</sup>.

Hay que tener en cuenta, que una parte de ese patrimonio de libre disposición correspondería a D<sup>a</sup> Rosario Galiano y Enríquez de Navarra en concepto de pago de aportaciones

---

<sup>378</sup> Registro de la Propiedad, T. 290, Lib. 5 Busot, Fca. 882, fs. 152-156.

matrimoniales<sup>379</sup>.

La muerte de D. Carlos de Rojas en 1893 propició que la nuda propiedad, a él correspondiente, de los bienes usufructuados por D<sup>a</sup> Luisa, D<sup>a</sup> Dolores y D. Rafael de Rojas y Galiano (Marqués de Algorfa) pasara totalmente a manos de D. José de Rojas y Galiano.

Todas las propiedades existentes en Busot fueron asignadas a D. José de Rojas y Galiano, que recibió un total de 58,78107 hectáreas<sup>380</sup>. Las dimensiones de las mismas han sido mencionadas con anterioridad, la única que contaba con una cierta envergadura era la heredad de Cabrafich, con una cabida ligeramente superior a las 50 ha. La política de adquisiciones de parcelas anexas a los predios que integraban su patrimonio rústico fue continuada por el nuevo titular, aunque solamente se

-----

<sup>379</sup> Por este concepto le fueron adjudicadas la heredad de Algorfa y las propiedades existentes en Formentera. La heredad de Algorfa sería adjudicada tras su muerte a D. Rafael de Rojas y Galiano, y las propiedades de Formentera a dos de sus hijas, Dolores y Luisa (aunque por el fallecimiento de esta última, su legado pasó directamente a su hija, Rosario Pardo de Donlebún). La parcelación de ambas herencias sería iniciada a partir de la década de los 50 del siglo XX. GIL OLCINA, A. y CANALES MARTINEZ, G. (1988): *Residuos de propiedad ...*, pp. 245-247 y 251-254. Además, por el fallecimiento de su hijo Carlos adquirió, como heredera abintestato, todos los bienes poseídos por éste en plena propiedad. Registro de la Propiedad, Lib. 21 Busot, T. 400, fs. 96 y ss.

<sup>380</sup> Por lo que le correspondía en concepto de mitad de bienes vinculados, legítima, sexta parte de la mejora del tercio y legado del quinto en propiedad, sexta parte de los mismos usufructuada por su hermana Rosario, y la nuda propiedad de los tres sextos de la mejora del tercio y legado del remanente del quinto usufructuados por el resto de sus hermanos, José de Rojas percibió un total de 2.776.160,39 pts. Para su pago le fueron adjudicadas una serie de fincas en varios distritos, varios bienes y efectos, 7 fincas en el término y poblado de Busot, y 38 fincas en el término de Aguas de Busot.

ha ratificado la adquisición, en 1902, de 2,2909 ha. situadas también en la partida de Cabrafich<sup>381</sup>.

La nueva fragmentación que implicaba el fallecimiento de D. José de Rojas y Galiano (2-VI-1908) y la división hereditaria de sus bienes entre sus tres hijos (Miguel, Carlos y José de Rojas y Moreno) fue en parte soslayada de nuevo gracias a la adopción de medidas testamentarias destinadas a impedir la disgregación y enajenación del patrimonio familiar. En este caso se recurrió nuevamente a la cesión en usufructo de una parte importante del patrimonio de los Rojas, aunque su distribución se realizó por partes iguales, sin primar a ninguno de los herederos.

Las disposiciones testamentarias establecidas fueron las siguientes:

-José de Rojas y Galiano legaba a su esposa Mariana Moreno y Pérez de Vargas el resto del tercio de sus bienes para que los disfrutara en vida, y dispusiera libremente de ellos mortis causa a favor de sus hijos. (Esta, a su vez, los cedería también en usufructo y por partes iguales).

-mejoraba a sus tres hijos en el tercio de todos sus bienes, por partes iguales, "entendiéndose en usufructo vitalicio, prohibición de enajenar o gravar".

---

381 Registro de la Propiedad de Jijona, Lib. 18 Busot, T. 346, Fca. 1204, fs. 101-103.

-el tercio restante, de libre disposición, sería distribuído entre sus tres hijos por partes iguales (adjudicando a cada uno de ellos uno de sus títulos nobiliarios).

-el "Balneario de Busot" con todas las tierras que lo rodeaban, montes y bosques inmediatos, y edificaciones y bienes muebles existentes, junto a todos los bienes que poseía en el término de Aguas, debían de adjudicarse en un único lote (por sorteo o de común acuerdo). A quienes no correspondiera el balneario se les atribuiría, en usufructo y con ciertas limitaciones, las dos casas u hoteles existentes en las cercanías del mismo ("Los Nogales" y "Casa Blanca")<sup>382</sup>.

A tenor de esta cláusula, los bienes incluídos en el lote reseñado fueron adjudicados a D. Miguel de Rojas y Moreno, Marqués del Bosque, aunque no en su totalidad, puesto que su valor excedía con mucho el de su legítima correspondiente.

Respecto al resto de bienes existentes en Busot no se efectuó ninguna indicación especial. La división de los mismos reportó la siguiente distribución:

-A D<sup>a</sup> Mariana Moreno correspondió, en usufructo, un total de 4 fincas (entre ellas el huerto de la Señoría), con una cabida global de 1,4857 hectáreas. Este fue cedido poco después a D. Miguel de Rojas y Moreno, a quien le fue embargado por deudas en 1916.

---

<sup>382</sup> Ibidem, T. 290, Lib. 5 Busot, fs. 157-160.

-A D. José de Rojas y Moreno le fueron adjudicadas -en usufructo y en concepto de mejora del tercio- 61,072018 hectáreas, entre ellas las que integraban la heredad de Cabrafich. A este montante fueron añadidas, tras la muerte de D. Miguel de Rojas (1940), las fincas que a éste habían pertenecido en usufructo por herencia materna. Se ha de incluir también en este caso, las 5 fincas que adquirió en 1934, con una superficie total de 5,8849 ha. (todas ellas de secano y situadas en la partida de Cabrafich), a Piedad Brotons Poveda, para subrogarlas, en el usufructo instituido, en sustitución de la "Casa Blanca" que a él había correspondido.

Los datos consignados al respecto, no coinciden sin embargo con los extraídos del Registro de la Propiedad Expropiable. La importancia de esta fuente para el estudio de la gran propiedad, y especialmente de la gran propiedad nobiliaria de origen señorial, ha sido señalada por diversos autores<sup>383</sup>.

Efectivamente, la Ley de Bases para la Reforma Agraria establecía en el apartado 6<sup>º</sup> de la Base 5<sup>a</sup> la expropiación de las aquellas fincas rústicas que habían constituido señoríos jurisdiccionales y se habían transmitido a sus actuales dueños por herencia, legado o donación; así como de las transmitidas por

-----  
<sup>383</sup> GIL OLCINA, A. (1979): *La propiedad señorial en ...*, pp. 151-162; GIL OLCINA, A y CANALES MARTINEZ, G. (1988): *Residuos de propiedad señorial ...*, pp. 155-162; MATA OLMO, R. Y ROMERO GONZALEZ, J.: "Fuentes para el estudio de la propiedad agraria en España (siglos XVIII-XX). Balance provisional y análisis crítico". *Agricultura y Sociedad*, n.º 49, 1988, pp. 209-292; ROMERO GONZALEZ, J. (1983): *Op. Cit.*, pp. 301-342.



el vendedor con la fórmula de a riesgo y ventura, o de aquellas en las que se hubiera consignado por el cedente que no vendría obligado a la evicción o saneamiento conforme a derecho, porque enajenaba su propiedad en las mismas condiciones en que la venía poseyendo. Sin embargo, la propiedad señorial valenciana figuraría en los Registros de la Propiedad Expropiable más que por éste concepto por otros en los que se contemplaba la indemnización (artículos 10, 11, 13, y, fundamentalmente, el 12 de la Base 5ª)<sup>384</sup>.

Al margen de la aplicación real de la Ley, los Registros de la Propiedad Expropiable son una fuente de gran valor para indicarnos la situación de la gran propiedad de origen señorial en la década de los treinta. En el caso concreto de Busot, y aunque con ligeras diferencias en relación a los datos extraídos del Registro de la Propiedad de Jijona, nos pone de manifiesto el grado de descomposición al que había llegado el patrimonio solariego de los Martínez de Vera.

Esta fuente establece la extensión superficial del patrimonio señorial subsistente en 70,7855 Ha. Dicha superficie se encontraría distribuída, en diferente medida, entre D. José de Rojas y Moreno, Conde de Casa-Rojas, y una compañía mercantil catalana, la Omnium Barcelonés, S. A. (como usufructuaria mientras viviera D. Miguel de Rojas y Moreno, a quien le había sido embargada por dicha empresa en 1916).

-----

<sup>384</sup> GIL OLCINA, A. (1979): *La propiedad señorial ...*, pp. 150-152.

El grueso de la propiedad rústica del término aparece atribuido a la compañía anteriormente mencionada, dividida en una serie de grupos según el tipo de aprovechamiento dominante, mientras que como propiedad del Conde de Casa Rojas sólo constan 1,3501 hectáreas de tierra huerta. Esta superficie, que ascendía a un total de 69,4354 Ha., estaba distribuida de la siguiente manera<sup>385</sup>:

-Regadío: 25,3416 Ha.

-Huertas, cereales y pastos: 33,9827 Ha.

-Huertas y jardines: 9,0000

-Almendros y arbolado de seco: 1,1111 ha.

Finalmente, tras la muerte sin heredero legítimo de D. José de Rojas y Moreno, los bienes pertenecientes al antiguo señorío territorial de Busot pasaron a manos de D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Teresa de Rojas y Roca de Togores (hija del conde de Torrellano, D. Carlos de Rojas y Moreno) en concepto de libre disposición, como única heredera de los mismos de acuerdo a las disposiciones testamentarias establecidas por sus abuelos. La actual Marquesa del Bosque donó en 1987, por terceras partes indivisas, todas las

-----  
<sup>385</sup> Los datos procedentes del Registro de la Propiedad Expropiable han sido amablemente cedidos por Antonio GIL OLCINA.

fincas que poseía, tanto en el término de Aguas como en el de Busot, a sus tres hijas, M<sup>a</sup> José, Ana y Leticia de Borbón y Rojas.

**LA EXTINCION DEL ELEMENTO SOLARIEGO EN  
LOS SEÑORIOS DE JURISDICCION ALFONSINA  
RADICADOS EN LAS COMARCAS DEL  
CAMPO DE ALICANTE Y BAJO VINALOPO**

**Ana Rosa Candela Hidalgo**

**TOMO II**

## B.-EL SEÑORIO DE AGUAS

El término de Aguas de Busot, con una extensión aproximada de unas 1.860 hectáreas, se encuentra situado en el sector septentrional de la comarca del Campo de Alicante, en la parte alta del Valle de Busot. La mitad occidental de su término se encuentra enmarcada por las estribaciones meridionales de la Sierra del Cabeçó d'Or, y las septentrionales de las Sierras de Bonalba y Ballestera.

Este señorío presenta unas características propias que lo distinguen del señorío de Busot. La inexistencia del elemento jurisdiccional, y la tardía adquisición del señorío solariego (a comienzos del siglo XVII por compra a D. Francisco Rocamora, Señor de Novelda, Castillo de la Mola, Mogente, Agost y La Granja), en los momentos inmediatamente anteriores al extrañamiento de los moriscos (el edicto fue publicado en Valencia el 22-IX-1609, y la transacción fue efectuada el 29 de junio de dicho año), determinarán una trayectoria bastante diferenciada a la de este último, aunque existan similitudes importantes entre ambos.

Un hecho a destacar en el caso de Aguas de Busot es la conservación de gran parte de la superficie montuosa del término por los descendientes de los antiguos señores territoriales; así como la política, desarrollada principalmente durante la segunda mitad del siglo XIX, de adquisiciones del dominio útil. Las tierras de esta procedencia, fundamentalmente superficie cultivada de regadío y seco, representarán un volumen considerable del patrimonio territorial de los Rojas.

1.-Las noticias proporcionadas por cronistas y autores contemporáneos.

El pago de Aguas de Busot, situado al pie del Cabeçó d'Or, permanece integrado en el término municipal de Alicante hasta el año 1841, momento en que tiene lugar su segregación de dicha ciudad y la demarcación de sus lindes (a pesar de haber sido solicitada dicha separación ya en 1805)<sup>386</sup>. Por esta razón no aparece recogido en ninguna de las relaciones de lugares pertenecientes al Reino de Valencia manejadas con anterioridad.

La subordinación administrativa, política y jurisdiccional respecto a la ciudad de Alicante es señalada por la mayor parte de los cronistas, quienes mencionan su inclusión en el término de la misma a raíz del Privilegio otorgado el

-----  
<sup>386</sup> AMA. Arm. 1, Lib. 79 (Reales Provisiones), fs. 59 y ss.

29-VIII-1252 por Alfonso el Sabio. Otros detalles recogidos con frecuencia son su situación como mojón delimitador de los Reinos de Aragón y Castilla en tiempos de Jaime I, y la vinculación existente entre el nombre del lugar y la abundancia de fuentes y manantiales en el paraje.

Martín de Viciano, al margen de la alusión a los Baños de agua caliente existentes en la zona, atribuye la pertenencia de Agost y Busot a los Vallebrera y Martínez de Vera respectivamente, y responsabiliza a la ciudad de Alicante de los nombramientos de los oficiales municipales de los lugares integrados en su término (Muchamiel, San Juan, Benimagrell, Ravalet), entre los que no se encuentra Aguas, probablemente por estar escasamente poblado en esas fechas<sup>387</sup>.

Escolano se limita a tratar las cuestiones etimológicas y a señalar su situación como límite de demarcación de las zonas de conquista aragonesa y castellana en tiempos de Jaime I<sup>388</sup>.

-----  
<sup>387</sup> V. MARTINEZ MORELLA: *Alicante en la "Crónica de la inclita y coronada ciudad de Valencia y su reyno"*. De Martín de Viciano. Ayuntamiento de Alicante, Alicante, 1970, pp. 40-41.

<sup>388</sup> "...por un pueblo deste nombre, no muy remoto del mar, que por nacer de unas fuentes de agua calidissimas, que se toman por baños saludables para muchas enfermedades, al pueblo llamaron Aguas; y al río que se forma de ellas, Río de Aguas; de quien haze mencion el Rey Don Iayme en su conquista, como mojón antiguo del Reyno de Valencia, antes que se incorporara con el la parte del de Murcia." G. ESCOLANO; Op. Cit., T. IV, Lib. VI, p. 92.

29-VIII-1252 por Alfonso el Sabio. Otros detalles recogidos con frecuencia son su situación como mojón delimitador de los Reinos de Aragón y Castilla en tiempos de Jaime I, y la vinculación existente entre el nombre del lugar y la abundancia de fuentes y manantiales en el paraje.

Martín de Viciana, al margen de la alusión a los Baños de agua caliente existentes en la zona, atribuye la pertenencia de Agost y Busot a los Vallebrera y Martínez de Vera respectivamente, y responsabiliza a la ciudad de Alicante de los nombramientos de los oficiales municipales de los lugares integrados en su término (Muchamiel, San Juan, Benimagrell, Ravalet), entre los que no se encuentra Aguas, probablemente por estar escasamente poblado en esas fechas<sup>387</sup>.

Escolano se limita a tratar las cuestiones etimológicas y a señalar su situación como límite de demarcación de las zonas de conquista aragonesa y castellana en tiempos de Jaime I<sup>388</sup>.

-----  
<sup>387</sup> V. MARTINEZ MORELLA: *Alicante en la "Crónica de la inclita y coronada ciudad de Valencia y su reyno"*. De Martín de Viciana. Ayuntamiento de Alicante, Alicante, 1970, pp. 40-41.

<sup>388</sup> "...por un pueblo deste nombre, no muy remoto del mar, que por nacer de unas fuentes de agua calidisimas, que se toman por baños saludables para muchas enfermedades, al pueblo llamaron Aguas; y al río que se forma de ellas, Río de Aguas; de quien haze mencion el Rey Don Iayme en su conquista, como mojón antiguo del Reyno de Valencia, antes que se incorporara con el la parte del de Murcia." G. ESCOLANO; Op. Cit., T. IV, Lib. VI, p. 92.



Bendicho atribuye la propiedad del lugar (en tiempos anteriores únicamente castillo con algunas casas y, por esas fechas, ya derruido) a D. Alfonso Martinez de Vera, quien habría emprendido las primeras obras de acondicionamiento de los baños (construyendo algunas casitas) hacia 1630<sup>389</sup>.

En la obra de los padres L. López y J. B. Maltés, Aguas y Barañes, este último despoblado ("porque Barañes, Cotella, y otros, aunque conservan el nombre, perdieron la población")<sup>390</sup>, aparecen incluidos en los términos particulares y generales de la ciudad de Alicante, estando subordinados jurisdiccionalmente a la misma, siendo su Justicia Mayor el encargado de designar los oficiales de gobierno de ambas partidas, y careciendo su dueño, por tanto, de jurisdicción sobre ellas<sup>391</sup>. Atribuyen la propiedad del lugar a los Martínez de Vera, a través de la compra efectuada por D. Pedro Martínez de Vera a los Vallebrera (datos que no son

-----  
389 "Aguas, era sólo un castillo con algunas casas, pero fuerte y bien murado; hay señales de que tenía tres muros; ahora está derruido, sólo queda el nombre al territorio y al río que corre por él. (...). Estos baños, de primero, el que iba, llevaba la pensión hacer albergue o choza para su novena, pero ahora ya hay más comodidad, porque Alfonso Martinez de Vera (de quien es Aguas), con licencia de la ciudad, ha labrado un cortijo con algunas casas alrededor del baño, en el año 1630. Y una hermita del nacimiento de Cristo Señor Nuestro, con que a menos coste y a mayor comodidad están los enfermos. V. BENDICHO; Op. Cit., pp. 89-90.

390 L. LOPEZ y J. B. MALTES; Op. Cit., p. 163.

391 "En esta partida (Barañes) y la de Aguas tan propia del termino particular de Alicante, que el Señor, ó Dueño no tiene Jurisdiccion alguna en ellas. El Justicia Mayor de la Ciudad todos los años señala Sub-Tenientes de Aguas, y de Barañes; assi como señalaba Thenientes de los Arrabales de la Redonda, y de San Juan. En la Lapida sepulcral del Marques del Bosque, que está en el Templo de las Capuchinas, leemos, que entre los Titulos de Marques del Bosch, y Conde de Ares, se le pone tambien Varon de Aygues, y de Barañes". Ibidem, p. 174.

totalmente exactos); y al referirse a los Baños, señala como propietaria de los mismos a la ciudad de Alicante, y del territorio de las casas al Marqués del Bosch, incidiendo en lo inadecuado de las instalaciones allí existentes para el acomodo de los enfermos<sup>392</sup>. En último lugar, se alude al despoblamiento de Barañes, que, a pesar de haber estado habitada en "Tiempo de Moros", sólo conservaba algunos vestigios y ruinas y algunas casas de labradores dispersas; y se detalla el carácter de su producción agrícola, limitada a algunos cereales, algarrobas y miel.

Cavanilles, como ya se comentó en páginas anteriores, no hace ninguna referencia al señorío o a las competencias jurisdiccionales en sus descripciones, sino que se limita a aportar datos de carácter demográfico (unas 150 familias habitaban en Aguas a finales del siglo XVIII), agrícola (la abundancia de zonas reducidas a cultivo, y el tipo de cultivos -cereales, almendros, algarrobas, barrilla, olivos, vid, ...-) o paisajístico (condiciones montuosas de la zona, existencia de manantiales -destacando los de la Cogolla y los Baños-, ...) <sup>393</sup>.

-----

<sup>392</sup> "Este lugar es de los Martinez de Vera por compra que de el hizo de los Vallebreras Pedro Martinez de Vera; son celebres y frequentados en esta parte del Reyno los Baños de Agua Calida, que ay en esse territorio. Los baños son de la Ciudad pero el territorio de las Casas es de los Marqueses del Bosque. Ojala se fabricassen buenas Casas de posada en esse territorio, que darian mucha renta á su Dueño, y no estaria tan mal assistido, que no se puede habitar en las Casitas que ay sin mucha descomodidad. (...). Mas descomodidad se padecia antes en la habitacion de este Cortijo, aora ya no es tanta, y ay en el una hermita, dedicada al Nacimiento de Christo.". Ibidem, p. 173.

<sup>393</sup> A. J. CAVANILLES; Op. Cit., T. II, p. 246.

Las noticias proporcionadas por Madoz van referidas a los mismos aspectos tratados por Cavanilles. Señala la existencia de unos 256 vecinos (1.250 personas) a mediados del siglo XIX, incremento que relaciona con la proximidad a los baños y aguas minerales, y recoge algunos datos sobre las actividades económicas del lugar (agrícola, ganadera -lanar, vacuna y avícola entre otras- e industrial -minas de ocre, tejedurías, telares de lienzo y molinos harineros-)<sup>394</sup>.

La única novedad aportada por Viravens es la desposesión sufrida por la ciudad de Alicante de los "Baños de Busot", en virtud del decreto de la Real Audiencia de Valencia de fecha 12-VII-1816, en el que "como administradora de los bienes de su marido, se dio el uso y disfrute de las aguas, de los baños, de su caserío y de las demás aguas, balsas y terrenos de aquel término" a la Marquesa del Bosch<sup>395</sup>.

Figueras Pacheco, por último, se basa en la obra de Cavanilles y Viravens al tratar la evolución histórica del lugar, aunque cuestiona las afirmaciones de éste último en lo relativo a la consideración del lugar como señorío de los Martínez de Vera, e incide en su inclusión en el término de la ciudad de

---

<sup>394</sup> P. MADOZ; Op. Cit., p.

<sup>395</sup> R. VIRAVENS PASTOR; Op. Cit., pp. 57-58 y 396.

Alicante<sup>396</sup>. Recoge asimismo la pérdida de la posesión de los baños en favor de los Marqueses del Bosch, la segregación de Aguas del término de Alicante en 1841, y una serie de datos cuantitativos sobre población, hábitat (existencias de varios caseríos en las partidas del Alted, las Eras, la Palmera, la Venteta y los Baños), superficie cultivada, y cultivos y especies ganaderas predominantes (no menciona ninguna actividad industrial o artesanal)<sup>397</sup>. Las observaciones que realiza sobre los Baños serán comentadas más adelante.

## 2.-Configuración del señorío territorial.

### 2.1.-La adquisición del elemento territorial

El señorío de Aguas de Busot se constituye únicamente como señorío solariego, en el que el titular del mismo carece de competencias jurisdiccionales. Diversos documentos y

-----

<sup>396</sup> "Estas afirmaciones no pueden aceptarse incondicionalmente, pues, según un privilegio de D. Alfonso el Sabio, expedido en 1252, citado en otros pasajes de esta obra, Aguas fue incluido por aquel Monarca en los términos de la municipalidad de Alicante, á raíz de haberse realizado la Reconquista, prueba evidente de que había ya en aquella época un núcleo de población en este lugar por pequeño que fuese. Bajo el reinado de D. Fernando el Católico, se elevó á ciudad la villa de Alicante, y se ratificó la inclusión del lugar de Aguas en los términos de su municipalidad." F. FIGUERAS PACHECO; Op. Cit., p. 954.

<sup>397</sup> Ibidem, pp. 953-955.

testimonios de épocas diferentes inciden en la subordinación jurisdiccional del lugar respecto a la ciudad de Alicante, de cuyo término particular y general formó parte desde 1252 (según el privilegio otorgado en dicha fecha por Alfonso X). Es este un hecho que tampoco es desmentido por parte de los dueños del lugar.

El patrimonio territorial que lo conforma había sido poseído en un principio por la familia Vallebrera, una de las más antiguas y relevantes de la oligarquía alicantina. Perteneciente a la pequeña nobleza alicantina, había ostentado la titularidad de otros señoríos, como Agost y Torremanzanas, e incluso Busot, que transfirió a Pedro Fernández de Mesa a principios del siglo XV<sup>398</sup>. En estos momentos, a tenor de su emparentamiento con los Maça de Lizana, además del señorío de Agost, estaban en posesión de las baronías de Mogente, Novelda y del Castillo de la Mola. La política matrimonial como medio de engrandecer y fortalecer los patrimonios nobiliarios será una de las estrategias comunes a la mayor parte de las casas señoriales tanto las más importantes, como las de menor envergadura.

A la muerte de D. Juan de Vallebrera y Maça de Lizana, señor de Agost y de las baronías antes mencionadas, parte de sus propiedades pasaron a manos de su hermana Isabel (esposa de D.

-----  
<sup>398</sup> Así lo señala el Padre Arqués: "Todos los ascendientes de esta Familia han sido los primeros en todos los actos positivos de Nobleza en el Gobierno de la Ciudad. Son los mas antiguos concurriendo a quantas insaculaciones ha habido del gremio de los Caballeros. Han sido señores de la Torre de las Manzanas, y muchos años del lugar de Agost". A. ARQUES JOVER; Op. Cit, pp. 78-79.

Francisco de Rocamora y Ruiz, señor de La Granja), mientras que el señorío de Agost y las heredades de Aguas y Baranyes (estas últimas procedentes de la herencia de su tío D. Luis de Vallebrera y Maiquez) fueron otorgadas a su viuda, Ana Belluvis; quien, el 12-V-1609, vendía a los primeros dicho señorío, incluyendo en la transacción ambas heredades, con la condición de que se responsabilizaran de la cancelación de los censales impuestos sobre todas las propiedades, y del pago de las pensiones correspondientes<sup>399</sup>.

Un mes más tarde, el 29-VI-1609, las heredades de Aguas y Barañes eran vendidas por D. Pedro Maça, antes D. Francisco Rocamora (Señor de las Baronías de Novelda, Mogente y Castillo de la Mola, y de los lugares de La Granja y Agost) a D. Alfonso Martínez de Vera y Martínez de Vera, emparentado con los dueños de Busot, y posteriormente heredero del vínculo de los Martínez de Vera.

Las condiciones en que fue efectuada dicha adquisición, así como las circunstancias que la precedían, revelan el grave endeudamiento y las dificultades económicas en que se hallaba la casa de los Vallebrera y Maça. Este hecho confirma la maltrecha situación de las economías señoriales y la crisis en la que, a finales del siglo XVI e inicios del XVII -en vísperas de la expulsión de los moriscos-, se encontraba el régimen señorial valenciano, a consecuencia de la devaluación de las rentas

---

<sup>399</sup> ARV. Real Audiencia. Procesos de Madrid, A, Leg. 2.220, n<sup>o</sup> 312, año 1614, fs. 4-5.

señoriales en metálico (procedentes de censos enfiteúticos o bien en concepto de diversos derechos sustituidos por cantidades fijas en dinero), la desorganización de la administración señorial, la suavización de las primitivas condiciones de repoblación, los excesivos gastos que exigía el mantenimiento de su nivel de vida o el sostenimiento de largos y costosos pleitos<sup>400</sup> entre otros factores<sup>401</sup>.

El extrañamiento de los moriscos, positivo a largo plazo para la mayor parte del estamento nobiliario ante la posibilidad de incrementar sus patrimonios territoriales y reactualizar sus rentas, acentuó, sin embargo, la problemática existente en torno a los censales, enormemente extendidos entre todas las clases sociales y corporaciones, incidiendo de manera particular en los impuestos sobre señoríos (especialmente los poblados o cultivados por moriscos)<sup>402</sup>. Esta situación afectará especialmente al señorío de Agost, caso que será comentado con posterioridad.

Las razones que motivaron la venta de las heredades de Aguas y Barañes (tanto a D. Fco. Rocamora y D<sup>a</sup> Isabel Maça, como a D<sup>a</sup> Ana Belluvis), de índole fundamentalmente económica

-----

<sup>400</sup> Por ejemplo, parte de los censales existentes sobre el señorío de Agost (por valor de 11.000 libras), habían sido cargados por D. Francisco Vallebrera y Maíquez para sostener el pleito suscitado por la sucesión en el Estado de Maça, entre D<sup>a</sup> Isabel Maça, su esposa, de una parte, y Gonzalo Maça y otros, de otra. ARV. Real Audiencia. Procesos de Madrid, A, Leg. 2.220, n<sup>o</sup> 312, fs. 49 vto-50 y 59.

<sup>401</sup> E. CISCAR PALLARES (1977); Op. Cit., pp. 53 y 107-118. T. HALPERIN DONGHI (1980); Op. Cit., pp. 43-45 y 58-63.

<sup>402</sup> E. CISCAR PALLARES (1977); Op. Cit., pp. 136-149 y 154-169. T. HALPERIN DONGHI (1980); Op. Cit., pp. 248-267.

-endeudamiento y carencia de efectivo para satisfacer las pensiones ánuas de los censales y cancelar los mismos-, se hacen evidentes ante la cuantía de las cargas impuestas sobre las mismas, cuyo montante global ascendía a 2.730 libras de capital (5.085 sueldos -254 L. 5 s.- anuales en concepto de pensiones), muy lejano sin embargo de las 26.000 libras cargadas sobre Agust. La relación de propietarios de los censales existentes sobre ambas heredades, en general pertenecientes a la pequeña nobleza o al patriciado urbano -como se deduce tanto de los apellidos presentes como de la cuantía de los censales, no excesivamente elevados-, residentes de forma predominante en la ciudad de Alicante, es la siguiente:

-Michael Martínez Pascual (Alicante): 350 L. de capital de censo, y 525 s. de pensión ánuas.

-Ludovico Salafranca (Valencia): 900 L. por el capital de tres censos y 1.800 s. de pensión ánuas.

-Herederos de Jacobo Calatayud (Alicante, Señor de Agres y Sella): 300 L. de capital y 600 s. de pensión ánuas.

-Francisco Canicia (Alicante, militar): 200 L. de capital y 400 s. de pensión ánuas (cada 10-I).

-Ludovico Rotla (antes Fco. Canicia): 240 L. de capital y 400 s. de pensión ánuas (cada 2-VII).

-Pedro Seva Bayuls (Aspe): 200 L. de capital y 400 s. de pensión ánuas (en julio).

-Mariana Malla (Elche): 200 L. de capital y 400 s. de



pensión ánuu.

-Juan Garrigós (Onil): 300 L. de capital y 500 s. de pensión ánuu (cada 1-XI).

-Cristóbal Martínez de Vera (Alicante, Señor de Busot): 40 L. de capital y 60 s. de pensión ánuu.

Por otra parte, los términos en que fue otorgada la escritura de venta, en la que no se hace mención de ningún tipo de señorío o jurisdicción, reafirman ese carácter exclusivamente solariego del señorío existente sobre el lugar, íntimamente ligado al régimen de tenencia elegido para su puesta en explotación, la enfiteusis; aunque en este caso no se implanta sobre un territorio totalmente inculto. Así se desprende tanto de la escritura de venta, como de algunos testimonios de establecimientos enfiteúuticos concedidos durante las primeras décadas posteriores a la compra de las heredades.

La enfiteusis lleva aparejada la división de dominios respecto a la propiedad de la tierra, el útil cedido al enfiteuta, y el mayor y directo que se reserva el propietario de la misma, este último salvaguardado por una serie de derechos que además garantizan la percepción de las rentas de él derivadas.

Su adquisición como simples heredades y sin connotaciones de señorío será un argumento defendido, a la vez que reivindicado, en pleitos posteriores, tanto por el Ayuntamiento de la ciudad de Alicante como por diversos enfiteutas; quienes señalan como en la venta realizada por D. Pedro Maza, "éste se tituló dueño y señor de Novelda, Mogente y

Castillo de la Mola, la Granja y Agost, pero no de Aguas y de Barañes, comprendidas en la venta, lo que prueba que no lo era, y aunque lo hubiese sido no transportó y enajenó tal privilegio, ..., sólo adquirió el dominio de la compra a censo de las heredades, habiéndolas enajenado del mismo modo que él las compró a los vecinos de Aguas ..."403.

Algunos cronistas, como los padres L. López y J.B. Maltés, señalan que ambas partidas estaban escasamente pobladas y de modo disperso, a pesar de haber estado habitadas "en tiempo de moros" (caso de Barañes). Los asentamientos posteriores realizados mediante establecimientos enfiteúuticos supondrían la adquisición por el señor de la jurisdicción que va unida a este régimen de tenencia, limitada exclusivamente a las relaciones en torno a la tierra, que de alguna manera se pudo ver acentuada o influenciada por la proximidad del señorío de Busot, donde los titulares si gozaban de ciertas competencias jurisdiccionales (jurisdicción media o alfonsina).

Por medio de esta venta (con un precio estipulado de 3.529 L. 13 s. 9 d.), D. Alfonso Martínez de Vera adquiriría las heredades de Aguas y Barañes, situadas en el término de Alicante y plantadas de viñas y árboles, con todas las casas, la torre, la ermita y las fuentes de agua existentes, junto a las tierras a

---

403 ARV. Real Audiencia. Escribanías de Cámara, Año 1799, Exp. n° 23, f. 143 vto.

ellas pertenecientes, tanto cultas como incultas. En el documento notarial se hacía constar, aunque de modo muy poco preciso, los límites de dichas fincas.

"(...) do vendo, concedo actrado seu quasi trado vobis Alfonsio Martinez de Vera militi in Civitate Alicantis domiciliato absenti tanque presenti notario tamen Infraescripto ut publica et autentica persona pro vobis et omnibus illis quorum Inter est vel Interesse poderit legitima estipulante et recipiente et vestris hereditates quas ego habeo et possideo intermino dicta Civitatis Alicantis vulgariter nuncupatas Aygues et Baranyes plantatas vineys et arboribus unacum domibus turre heremita et fontibus aqua ineis existentibus et cum omnibus terris cultis et incultis illarum pro ut confrontantur en termino generali jam dicta Civitatis, et cum termino Loci Busot y Cabrafich, et cum termino de Vilajosa y Cabeçó, et cum aliis montibus regiis (...)"<sup>404</sup>.

## 2.2.-Sistemas de tenencia

Un factor íntimamente ligado a los sistemas de tenencia predominantes en una zona es sin duda el potencial demográfico que caracteriza a la misma. Ya ha sido comentado con anterioridad

-----  
<sup>404</sup> ARV. Real Audiencia. Procesos de Madrid, A, Leg. 2.220, n° 312, año 1614, fs. 7-12.

el escaso volumen de población residente en Aguas desde el siglo XVI al XVIII, aunque a finales de este último siglo ya se sitúa, según Cavanilles, en torno a las 150 familias<sup>405</sup>, y, a mediados del siglo XIX, alcanza los 1.250 habitantes (256 vecinos)<sup>406</sup>.

El régimen de tenencia predominante será, al igual que en Busot, la enfiteusis, que permitirá además de la puesta en explotación de la propiedad (tanto por lo que se refiere al mantenimiento de las zonas ya roturadas como la reducción a cultivo de nuevos espacios) el asentamiento de población de forma permanente.

Sin embargo, los establecimientos enfiteúuticos serán otorgados en unas condiciones diferenciadas de las imperantes en el caso de Busot, tanto en lo que atañe a las prestaciones impuestas a cambio, como a la manera de efectuar dicha cesión en enfiteusis (cuyo carácter será discutido con posterioridad por los enfiteutas de los Marqueses del Bosch).

A pesar de la escasez de documentación relativa a esta cuestión, que impide la realización de un análisis exhaustivo, se ha tratado de ofrecer, a partir de la información disponible, una visión aproximada de las características y extensión del contrato enfiteúutico en el lugar de Aguas.

Un factor destacable es la falta de homogeneidad existente en el tipo de prestaciones impuestas como contrapartida a la cesión del dominio útil; puesto que en los establecimientos

---

<sup>405</sup> A.J. CAVANILLES; Op. Cit., T. II, p. 246.  
<sup>406</sup> P. MADDOZ; Op. Cit., p.

realizados se estipula la satisfacción tanto de censos enfiteúticos en metálico como de particiones en especie, llegando, incluso, en algunos casos, a existir conjuntamente ambos gravámenes sobre una misma finca.

Podemos efectuar, sin embargo, una diferenciación entre los establecimientos otorgados durante el siglo XVII, fundamentalmente en su primera mitad, y los más tardíos, concedidos durante la primera década del siglo XIX.

Las cesiones de tierras en enfiteusis, en los momentos posteriores a la adquisición del paraje por los Martínez de Vera, suelen caracterizarse por una considerable envergadura superficial (en términos relativos), puesto que las parcelas establecidas oscilan entre los 26 jornales (12,4904 ha.) y los 58 jornales (27,8632 ha.). Este es un hecho que se corresponde sin duda con el escaso grado de ocupación del territorio en esos momentos, afectado posiblemente por la expulsión de los moriscos.

Por otra parte, no son terrenos incultos, sino que una gran parte de los mismos está reducida a cultivo, predominando la vid, el algarrobo, el olivo, y diversas especies de sembradura; asimismo están dotados de agua para su riego, procedente de las diversas fuentes que nacen en el término (los Baños, Gasparet o de los Yvorras, la Mata o la Murta, los Campellos o el Cañar).

Por lo que respecta a las prestaciones, sólo en dos de los cinco establecimientos localizados (la "heredad del Pí" y la "heredad de Barañes"), probablemente los más antiguos, se impone un censo enfiteútico en especie, denominado de "dos diezmos" (uno a favor de la Iglesia de Busot, y otro a favor del titular del

señorío); aunque desconocemos el valor de la proporción de la cosecha entregada al titular del dominio directo (décima parte, parte alícuota similar a la que con el mismo calificativo regía en Busot, u otra distinta de ambas). Tanto el apelativo del mismo como el hecho de considerar como destinatario a la Iglesia de Busot, no deben inducirnos a prescindir de su carácter de pensión enfiteútica. En este sentido hay que señalar, por una parte, las dudas que plantea la existencia del tercio-diezmo en un pequeño señorío territorial, gravamen del que no se hace mención en la escritura de venta de las primitivas heredades que posteriormente constituirán el lugar de Aguas; y, por otra, porque en una de las escrituras de reconocimiento del dominio mayor y directo otorgadas en 1851 a favor del Marqués del Bosch, es aceptada y mantenida por los enfiteutas esta prestación, aunque sustituyendo la entrega de una parte de la cosecha por la satisfacción de una cantidad fija en metálico anualmente<sup>407</sup>.

En ambos casos se impone, además, un censo enfiteútico en metálico de distinta cuantía. Así, el 14-XI-1612, D. Alfonso Martínez de Vera cedía en enfiteusis a Nicolás Giner un total de 47 jornales de tierra (22,5788 ha.), 25 (12,01 ha.) de sembradura y 22 (10,5688 ha.) de viña, arbolado y tierra campa, con el derecho a regar con agua procedente de las fuentes de los Baños, Gasparet (Yvorras) y de la Mata (Pino), exigiendo, además de la prestación de los "dos diezmos" de los frutos, un cánon

---

<sup>407</sup> AHPA. Prot. Not. de José Cirer y Palou, P. 502, año 1851, 2º tomo, fs. 1.595 vto-1.607 vto.

enfitéutico anual de 5 sueldos, a satisfacer el 29 de septiembre (San Miguel)<sup>408</sup>. Desconocemos, sin embargo, la fecha en la que tuvo lugar el establecimiento de la heredad de Barañes, pero las referencias contenidas en las escrituras de transferencia del dominio útil de parcelas antiguamente integradas en dicha heredad aluden a la partición de "dos diezmos", y con bastante frecuencia, aunque no de una manera generalizada, a la prestación de 6 Libras "por el trigo"<sup>409</sup>.

Una característica común, no sólo a estos establecimientos sino a todos los realizados durante el siglo XVII, es la imposición, además de las pensiones de naturaleza enfiteútica, de un censo redimible de carácter consignativo, de valor variable y pensión ánuas al 5 % (aunque el valor de estas pensiones se verá reducido al 3 %, a tenor de la aplicación del Real Decreto de 6-VII-1750), a satisfacer también en San Miguel de septiembre. La cuantía del mismo en el caso de la heredad del Pí (la cedida a N. Giner) es relativamente moderada, puesto que no supera las 250 libras de capital (con una pensión ánuas al 3 %), frente a las 1.000 libras de capital a que asciende el cargado sobre la heredad de Barañes. La mayor parte de las fincas

-----

<sup>408</sup> Ibidem, fs. 1595 vto-1597.

<sup>409</sup> Por ejemplo, en la venta a carta de gracia de 3/4 de 1 tahulla huerta (con el derecho a 6 horas de agua cada tanda de la balsa de Barañes, otorgada por José Yvorra (labrador) a Agustín Yvorra, ambos vecinos de Aguas, se declaraba en el capítulo de cargas estar la parcela "tenida y gravada ala prestación de dos diezmos subrogada en canon anuo y al capital de mil Libras en la parte que le toca y seis libras que letoca por el trigo con los demas derechos de la Señoria enfiteusis con el Luismo de un real por libra (...)" ANJ. Prot. Not. de V. Alberola, P. 28, fs. 38-39 vto.

gravadas con este tipo de censal figuran en la documentación como adquisiciones por compra del dominio útil por parte de los enfiteutas al titular del lugar de Aguas, no como una cesión de la tierra; aunque este hecho no impida la sujeción de la misma al dominio mayor y directo del dueño del lugar.

Los censales de esta naturaleza impuestos sobre el resto de fincas otorgadas en enfiteusis presentan igualmente valores importantes, aunque no siempre se ven acompañados por otro tipo de cargas o gravámenes. Podemos exponer varios ejemplos para ilustrar este hecho :

-El 25-XII-1645, D. Lorenzo Martínez de Vera, Señor de Busot, establecía en enfiteusis a Juan Arnau (labrador, vecino de Aguas) 46 jornales (22,0984 ha.) de tierra con arbolado, con su casa, corral y fuente (del Cañar), cargados con un cánon perpetuo e irredimible (enfitéutico, al que se alude como "censo perpetuo fadiga") de 3 L. 10 s., a responder cada 29 de septiembre, y otro redimible de 1.200 L. de capital y 1.200 s. de pensión ánu a satisfacer en la misma fecha<sup>410</sup>. 26

Sin embargo, este no fue el caso de otras dos cesiones de dominio útil efectuados en 31-VIII-1625 y 19-XII-1656 por D. Alfonso Martínez de Vera y D. Cristóbal Martínez de Vera

---

<sup>410</sup> AHPA. Prot. Not. de José Cirer y Palou, P. 502, año 1851, 2º Tomo, fs. 1.555 vto-1.569 vto.



(curador de D. Fco. Martínez de Vera y Bosch) respectivamente. En ambas ocasiones, el único gravamen existente sobre la tierra era el censo de carácter consignativo.

-El 31-VIII-1625 fueron establecidos a Lorenzo Bernabeu (labrador, vecino de Aguas) 26 jornales (12,4904 ha.) de tierra cultivada arbolada, con derecho a 7 días de agua de la balsa de los Baños (cada tanda de 18,5 días) y 10 días de la del Gasparet (cada tanda de 18 días), gravadas con un capital de censo redimible de 720 Libras, y pensión anual (al 5 %) de 720 sueldos, a satisfacer por San Miguel<sup>411</sup>.

-El 19-XII-1656, Luis Cantó y Morales (labrador, vecino de San Juan) recibía parte de una heredad de 58 jornales (27,8632 ha.), plantada de viñas y otros árboles (almendros y algarrobos), y con derecho a 5 días de agua de la fuente de los Baños y 6 días de agua de la del Gasparet, cargado con un capital de censo redimible de 600 libras y 600 sueldos de pensión anual<sup>412</sup>.

Esta peculiaridad en la forma de llevar a cabo los establecimientos enfiteúticos será aprovechada por los enfiteutas para reivindicar la inexistencia del dominio mayor y directo, en periodos posteriores. Aducirán para ello el carácter franco de sus propiedades, dado que fueron transferidas por los antecesores

---

<sup>411</sup> AHPA. Prot. Not. de J. Cirer y Palou, P. 502, año 1851, 2º Tomo, fs. 1.574-1.577. ARV. Real Audiencia, Escribanías de Cámara, año 1799, Exp. nº 23, fs. 3-7 y 16-17.

<sup>412</sup> AHPA. Prot. Not. de J. Cirer, P. 502, año 1851, 2º Tomo, fs. 1.570-1574.

de los Marqueses del Bosch mediante una venta a censo, de modo que el precio de la misma quedase cargado sobre la heredad con la obligación de satisfacer una pensión anual al 5 %<sup>413</sup>.

Desconocemos las razones que motivaron la elección de esta forma de establecimiento, que implicaba la imposición de unas condiciones bastante suaves para el enfiteuta (favorecido en el futuro por la devaluación de los censos en metálico), quien recibía, además, tierras en su mayor parte ya roturadas, con lo que eludía el coste adicional que hubiera supuesto su acondicionamiento inicial para el cultivo; mientras que en otras ocasiones, esas condiciones más óptimas en la cesión de las tierras habían supuesto una mayor dureza de las prestaciones (por ejemplo en la Vallonga de Burgunyo, aunque en este caso se ha de tomar en cuenta también la cercanía de dichas tierras a la ciudad de Alicante, y la presión demográfica sobre la tierra del último cuarto del siglo XVIII). Probablemente esté relacionado con el escaso grado de ocupación del territorio y con la reducida población residente en el mismo, en una coyuntura socioeconómica en la que destaca como hecho fundamental el esfuerzo repoblador tras el extrañamiento de los moriscos.

Sin embargo, en un pleito suscitado entre los enfiteutas y D. Rafael Canicia Vaíllo de Llanos, Marqués del Bosch y Conde de Torrellano, al rechazar éstos la señoría directa sobre las tierras cedidas mediante este sistema (y por

---

<sup>413</sup> ARV. Real Audiencia, Escribanías de Cámara, Exp. 23, fs. 13-14.

tanto el mantenimiento de los derechos a ella inherentes, fundamentalmente el de luismo), el procurador señorial reafirmaba su entidad como establecimientos enfiteúuticos y justifica la existencia del dominio directo "a pesar de ser una venta a censo, y con la responsión ordinaria, no considerandolo como contrato excesivo y reprobado, pues al transferirse unas fincas ya fructíferas, no debían gobernar en ese contrato las reglas generales de la enfiteusis, pues según su significado y etimología es propio para el establecimiento, o concesión de las tierras incultas y de los solares en que aún no se edificó (...)"<sup>414</sup>.

No cabe dudar del carácter enfiteúutico de estas cesiones de tierras (por tanto en dominio útil), pues, al margen del tipo de prestaciones en metálico o en especie impuestas, en todas ellas se hace reserva del dominio mayor y directo por parte del dueño de la tierra, y se incide en la adquisición por el mismo de los derechos de luismo (percepción por el señor directo de la décima parte del precio de venta de la finca censida), fadiga y comiso, y la obligación del enfiteuta de respetarlos y solicitar la licencia señorial en caso de enajenación o transferencia del dominio útil; derechos destinados a salvaguardar el dominio directo del estabiliente y garantizar la percepción de las rentas de él derivadas. Además, se ha verificado que toda la superficie integrada en las heredades mencionadas en los ejemplos, fue objeto de reconocimiento del

---

<sup>414</sup> ARV. Ibidem, fs. 99-108 vto. Escrito fechado el 2-VI-1801.

dominio directo existente a favor de D. José de Rojas y Canicia, Marqués del Bosch, en las escrituras otorgadas el 7-X-1851 ante el notario alicantino D. José Cirer y Palou (en estas escrituras se aceptaban y reactualizaban, además, las pensiones que por distintos conceptos percibía el marqués)<sup>415</sup>.

Esta práctica de cargar con censales consignativos, redimibles, y por tanto distintos de los enfiteúticos, las tierras establecidas, cuyo censualista era el titular del señorío, ha sido detectada en Busot, y también durante el siglo XVII, por Alberola Romá. Este autor señala su utilización en los casos de ventas del dominio útil entre enfiteutas en los que el futuro propietario carece del efectivo suficiente para concluir la operación, viéndose obligado, por tanto, a solicitar un préstamo hipotecario en metálico al titular del señorío, a cuya seguridad lo carga como censal sobre la propiedad recién adquirida, incluyéndo la pensión anua correspondiente en las cláusulas de la enfiteusis<sup>416</sup>.

La importancia de la enfiteusis en el lugar desde el momento de su adquisición por los Martínez de Vera (pues desconocemos el sistema de tenencia implantado bajo la posesión de sus anteriores propietarios, los Vallebrera) y su vinculación con la tipificación del mismo como señorío solariego y territorial queda reflejado en el siguiente fragmento,

-----

<sup>415</sup> AHPA. Prot. Not. de José Cirer y Palou, P. 502, año 1851, 2º Tm., fs. 1.555 vto-1.569 vto, 1.570-1.595, y 1.595 vto-1.607 vto.  
<sup>416</sup> A. ALBEROLA ROMA (1984); Op. Cit., p. 437.

perteneciente a la escritura de donación de las heredades de Aguas y Barañes otorgada, el 19-IX-1642, por D. Alfonso Martínez de Vera (caballero y señor de Busot, baile de la ciudad de Alicante, y su receptor y depositario general en la Bailía General de sa Sexona) a favor de su hijo D. Lorenzo Martínez de Vera y Tallacarne, con motivo de su matrimonio con Bernarda Martínez de Vera Bosch (nieta y sobrina de ambos respectivamente). Escritura que recoge además las dos formas de enajenación del dominio útil por parte del titular del directo:

"(...). Li fa donacio al dit Llorens Martines de Vera son fill present y acseptant pura propia e irrevocable que es dita en termins de les heretats dites de Aygues Barañes, y Bañs dits de Aygues ab ses Torres, y cortijos contiguos ad aquells, y cortijo dels Bañys ab ses fons, y Baces de Aygua juntament ab la Señoria directa, imposada en totes les terres establides y en les venudes ab los drets dels sensals carregats en son favor ab actes Rebutts per March Antoni Bernabeu Notari en subserts calendaris, y generalment a hentrades, y eixides, fons, baces, Arbres, y qualsevol altre dret que a dit Alfons Martinez li pertanyga, y puga pertañer les gerals eretats de Aygues, Barañes, y Bañys son tengudes ab respondre cent y huit lliures, sesse sous y huit diners sensalts carta de gracia cascum que de les iglesies, y parroquies de San Salvador, y San Esteve de la Ciutat de Valencia, y per pacte especial entre lo dit Alfonso Martinez de Vera fa la precent Donacio ab

carrech de la dita responcio de cent y guit lliures, sesse sous y huit diners, les quals a sa de fer y respondre lo dit donatari a les dites eclesies desde huit de octubre de este any en avant. (...)"<sup>417</sup>.

Las tierras entregadas a los enfiteutas (generalmente labradores procedentes de zonas y poblaciones cercanas al lugar: S. Juan, Busot, el mismo Aguas, ...) durante este periodo (bien mediante la cesión enfiteútica, bien mediante la venta del dominio útil por parte del titular del directo) se hallan situadas en las proximidades de los Baños, donde se concentra la mayor parte de las fuentes y manantiales explotados en el lugar, y en torno a la zona donde posteriormente se ubicaría el nucleo poblacional. En periodos posteriores se procederá a la ampliación del sector roturado hacia espacios más alejados, generalmente incultos y de carácter montañoso.

Las escrituras de transmisión del dominio útil entre enfiteutas reflejan en sus capítulos de cargas el tipo de gravamen predominante. Se reconoce en ellas la responsión tanto de cánones ánuos en metálico, de carácter enfiteútico y también consignativo, como de censos en especie (la partición de dos diezmos de los frutos, que, en el caso de la tierras integradas en la heredad de Barañes, será sustituida a mediados de la década

---

<sup>417</sup> ARV. Real Audiencia, Escribanías de Cámara, Exp. 23, fs. 146-148.

CUADRO XI. TIPOS DE CARGAS IMPUESTAS EN AGUAS DE RUSOT SOBRE LAS FINCAS ESTABLECIDAS EMPÍRICAMENTE.

FECHA	VENTA	SUP (TH)	CARACT.	LOCALIZACION	CANON ENFIT.	CANON INDET.	CENSO CONSIG.	PART. FRUTOS	OBSERVACIONES
22-II-1781	2		hta.-arb.		1s 8d (29-IX)				señoría directa, luismo, fadiga
31-X-1805	3,5		hta.-agua	Alto del Alted					señoría directa, luismo, fadiga concesión licencia, resto dchos
4-IX-1806	12		reg.	Heredad de Barañes		42d (29-IX)			señoría directa, luismo, fadiga
6-I-1813	6		sec.	Ciscaret			capital-20L(3%)		deducción del luismo del precio
	4		inculta						pago si marqués tuviera derecho
4-III-1813	6		sec.-arb.	Ciscaret			capital-9L 10s		deducción del luismo del precio
									pago si marqués tuviera derecho
12-IV-1813	2,5		reg.-agua	Heredad de Barañes			capital-5L 17s pensión-3s 6d	dos diezmos	deducción del luismo del precio
									pago si marqués tuviera derecho
2-VI-1813	12		sec.	del Parranco			capital-6L 4s		obligación a partición y censo
	20		inculta						deducción del luismo del precio
18-VI-1813	12		sec.-arb.	Heredad de Barañes			capital-9L (3%)		luismo ya satisfecho al marqués
	8		inculta						libre de cualquier otra carga
17-XII-1813	2,50		reg.-agua	Heredad de Barañes			capital-21L 10s	dos diezmos	obligación a partición y censo
30-IX-1816	16		sec.-arb.	Ciscaret de Morant	7s 3d (29-IX) 12L 1s 8d cap)				señoría directa, luismo, fadiga concesión licencia (10s 8d)
3-VIII-1820	8		sec.-arb.	del Planet			capital-15L(3%)		reducción de 15 L del precio
9-X-1826	10		arbolado	Hoya de Wallol		4s 2d (29-IX)			señoría directa, luismo, licencia
28-X-1826	8		sec.-arb.	Hoya de Wallol		1s (29-IX)			señoría directa, luismo, licencia

Continúa en el folio siguiente

Continuación del Cuadro XI

31-X-1826	6	hta.-arb. agua	Heredad de Barañes	capital-37L 10s pensión-1L 2s 6d (subst. met.)	dos diezmos (subst. met.)	luismo, licencia y demás dchos censo parte de 1.000L (Barañes)
16-IV-1827	1	reg.-agua	Heredad de Arnaus	pensión-13s 4d		parte censo de 1.200L (H. Arnaus) señoría, luismo, licencia, y demás
29-XI-1827	6	sec.	Cantal del Pallier			señoría directa, luismo, fadiga demás dchos enf. Para pensiones
22-XII-1827	8	sec.-arb.	Blano de Pérez	6s (29-IX) capital 10 L)		señoría directa, luismo, fadiga licencia (10s 8d). Estab. en 1804
7-IX-1828	4	sec.	Heredad de Barañes		dos diezmos (subst. met.)	señoría directa, luismo, licencia demás derechos enfiteuticos
24-X-1828	0.75	hta.-agua	Heredad de Barañes	6L por trigo	parte cap-1.000L (subst. met.)	derechos del señorío, licencia pago de luismo por comprador
31-X-1828	12	sec.-arb.	Hoya de Mallol	1r 16md (29-IX)		señoría directa, luismo, licencia
1-XI-1828	8	sec.-arb.	Heredad de Barañes	6L por trigo pens-5r (29-IX)	capital-11L (subst. met.)	dos diezmos señoría, luismo, licencia, y demás censo parte de 1.000L (Barañes)
18-XII-1828	0.50	hta.-agua	Heredad de Barañes	parte 6L trigo	capital-3L 15s (subst. met.)	dos diezmos licencia, luismo y demás dchos censo parte de 1.000L (Barañes)
4-II-1829	1	sec.-arb.	Llano de Emedio	11md (29-IX)		señoría, luismo, licencia, y demás
27-XI-1829	2	sec.	Hoyeta del Telar			señoría, luismo, licencia, y demás
7-XII-1829	6	sec.	Ginebral	1s 6d (29-IX)		señoría, luismo, licencia, y demás
7-III-1830	1	hta.-agua	Baseta Campellos		capital-3L 15s pensión-2s 5d	señoría directa, luismo, licencia censo parte de 1.500L (Vorras)

PUNTE: AHFA Y ANJ. Protocolos Notariales. Elaboración Propia.



de los veinte -contemporáneamente a la de Busot- por una cantidad fija en metálico, de valor equivalente); aunque también se dan casos en los que no se precisa la naturaleza de la carga.

A este respecto se hace necesario mencionar la escasez de escrituras localizadas, en comparación con las detectadas por el mismo medio en Busot, probablemente debido a una mayor relación con los notarios de Alicante, San Juan o Muchamiel que con los de Busot<sup>418</sup>.

En la mayor parte de las mismas se reconoce la señoría directa y los derechos señoriales de luismo (10% del valor del precio estipulado de venta) y fadiga, así como el resto de derechos enfitéuticos y se menciona el pago del derecho de luismo, bien por el comprador deduciendo su valor del precio estipulado de venta, bien por el comprador al solicitar la licencia señorial para la enajenación del dominio útil. Por la concesión de la licencia señorial el señor percibía una cantidad situada en torno a los 10 sueldos 9 dineros.

Los establecimientos otorgados a principios del siglo XIX, muy escasos, afectan a superficies de tierra de tamaño mucho más reducido, entre 1 y 7 jornales (de acuerdo a los datos disponibles), parte incultas y parte ya cultivadas, al haber sido

---

<sup>418</sup> ANJ. Prot. Not. de Tomás Brotons y Bernabeu, P. 23-25; de Fco. Miralles, P. 26, y V. Alberola, P. 28-29. AHPA. Prot. Not. de J. Marco y Alted, P. 1.149; Fco. Aracil, P. 82, 84, 94, 96, y Fco. Sala y Cantó, P. 1624-1628.

objeto de ocupación con carácter previo al establecimiento<sup>419</sup>.

Se hace difícil fijar un criterio homogéneo respecto al valor del cánon anual, de carácter enfitéutico, que se encuentran obligados a satisfacer los enfiteutas -generalmente labradores y residentes en Aguas-, dada la escasez de los datos obtenidos; aunque en varios casos éste se sitúa en torno a los 18 dineros (1 sueldo y 6 dineros) por jornal, cantidad similar a la impuesta en Busot en los establecimientos otorgados por esas fechas.

Esta fue, en efecto, la pensión anual con la que quedaron gravados los 7 jornales de tierra (panificados 6 de ellos y el restante inculto) cedidos en establecimiento el 22-XI-1808 por D. V. Fuster, como apoderado de D<sup>a</sup> Catalina Pascual y Vergara, Marquesa del Bosch, a V. Arnau (labrador y residente en Aguas). Además de reservarse el dominio mayor y directo de la parcela establecida y de percibir un total de 10 sueldos y 6 dineros anuales por San Miguel, el propietario de la misma exigía, por parte del enfitauta, el mantenimiento de los derechos de luismo y fadiga, la solicitud de la licencia señorial en el caso de efectuar la enajenación del dominio útil, "pagando la desima por derecho de Luismo, según el precio en que se

-----

<sup>419</sup> Así por ejemplo, el 8-X-1807, D. V. Fuster, apoderado del Marqués del Bosch, D. Rafael Canicia y Vaillo de Llanos, cedía en enfiteusis a B. Bernabeu (labrador y vecino de Aguas) 1 jornal de tierra ya panificada, situada alrededor del solar que le había sido establecido por D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Luisa Martínez de Vera en 10-I-1769. Sobre esta porción de tierra que, había sido panificada sin solicitar el establecimiento previo, se impuso el cánon enfitéutico ánuo de 1 sueldo, a satisfacer por Santo Tomás, y la obligación de obtener licencia señorial en caso de realizar cualquier enajenación. ANJ. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu, P. 23, año 1807, fs. 59-60 vto.

transportare, bajo la pena de comiso", y la entrega, a sus costas, de una copia auténtica de la escritura<sup>420</sup>. Se han localizado también ejemplos en los que el cánón anual exigido es inferior a los 18 dineros, como se ha puesto de manifiesto en la nota anterior.

Los censos predominantes durante esta segunda etapa serán los satisfechos en metálico, tanto los de carácter perpetuo e irredimible (enfiteutico) como los redimibles (consignativos) así es puesto de manifiesto en los libros de translaciones de dominio del lugar de Aguas pertenecientes a la Contaduría de Hipotecas. Este es el tipo de gravamen predominante en las declaraciones de cargas efectuadas con motivo del registro de las transacciones realizadas; puesto que las únicas cargas en especie mencionadas van referidas a fragmentos de las haciendas originarias del Pi y Barañes. Sin embargo, se hace necesario señalar que gran parte de las fincas consignadas se declaran libres de cargas, o bien se alega al anotarlas que no expresan ningún gravamen los documentos presentados al respecto. Hechos estos últimos que evidencian claramente el proceso de ocultación y rechazo a las prestaciones de origen señorial, o por lo menos enfiteutico, por parte de los titulares del dominio útil; proceso muy similar al que tuvo lugar en Busot, aunque parece ser que de una manera mucho más acentuada, y que será tratado en un epígrafe posterior.

---

420 ANJ. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu, P. 23, año 1808, fs. 63 vto.-65.

Los problemas que conlleva la enfiteusis para los titulares del dominio directo en relación a la conservación del patrimonio territorial objeto de esta división de dominios, a tenor de la gran repercusión que sobre este régimen de tenencia van a tener la abolición del régimen señorial y el resto de disposiciones promulgadas durante la primera mitad del siglo XIX, confieren un carácter excepcional al establecimiento realizado por el Marqués del Bosch, D. José de Rojas y Canicia, en 1851. Es éste un periodo en el que se pone de manifiesto claramente la oposición del enfiteuta al reconocimiento y satisfacción de las antiguas prestaciones señoriales derivadas de la propiedad de la tierra; por lo que el recurso a este sistema de tenencia resulta anacrónico y paradójico, al tener lugar en un momento en el que se hacen evidentes las implicaciones que había tenido su implantación para el proceso de desintegración de los patrimonios nobiliarios valencianos (del que resultó principal beneficiario el campesinado enfiteuta), tras la instauración del nuevo marco abolicionista. Y más cuando desde hacía bastante tiempo se venía consolidando la tendencia de utilizar el arrendamiento como sistema de explotación indirecta predominante en detrimento de la enfiteusis, principalmente en el realengo, aunque también se asumió este sistema de tenencia en algunos señoríos (previa adquisición de tierras francas o del dominio útil de aquellas en

las que era titular del directo<sup>421</sup>.

A pesar de los reconocimientos de la señoría directa que había obtenido por parte de un número importante de enfiteutas de las tierras que comprendían las antiguas heredades del Pi, de los Yvorras, y de los Arnaus (así como de la aceptación y clarificación de las prestaciones que cada uno de ellos debía responder), en la zona de Aguas, no cabe olvidar la pérdida, de todo el patrimonio rústico cedido en enfiteusis, experimentada por esta casa señorial en su lugar de Busot. A este respecto cabe señalar, por una parte, la carencia de competencias jurisdiccionales en el lugar de Aguas, al margen de las que le confería el contrato enfiteúutico, lo que podía repercutir en una menor intensidad de la oposición antiseñorial y del rechazo hacia las cargas con este origen, y por otra, el hecho de que la tierra cedida permanecía sin roturar, y era éste tal vez el único medio de conseguir su reducción a cultivo sin que de ello se derivara un coste importante para el propietario de la misma.

No podemos asegurar, dado el carácter de la fuente consultada (protocolos notariales) que éste haya sido el único caso de establecimiento tardío en el lugar de Aguas.

---

<sup>421</sup> PESET, M. y OTROS (1979): Op. Cit., pp. 7-53; GIL OLCINA, A. y CANALES MARTINEZ, G. (1988): Op. Cit, pp. 48, 60-64, y 264-267; y BERNABE GIL, D.: *Tierra y sociedad en el Bajo Segura. (1700-1750)*. Universidad de Alicante-Caja de Ahorros provincial de Alicante, Alicante, 1982, pp. 147, 152, 170-177 y 185-187.

Las circunstancias socioeconómicas y políticas existentes a mediados del siglo XIX y la problemática que afecta a la enfiteusis y los patrimonios nobiliarios puestos en explotación mediante este sistema de tenencia se perciben de una manera implícita en las condiciones estipuladas en este contrato enfitéutico otorgado el 31-X-1851, que en el protocolo notarial viene definido como una venta a censo enfitéutico. Se trata de un caso similar a los efectuados durante el siglo XVII, aunque en esta ocasión el censo impuesto se reconoce como enfitéutico, es decir, perpetuo e irredimible.

Así, en este sentido, D. José de Rojas y Canicia, Marqués del Bosch y Conde de Torrellano (vecino de Alicante), vendía a Antonio García y Brotons (labrador y vecino de Aguas) 2 jornales de tierra inculta (pertenecientes al vínculo de los Martínez de Vera) situadas en la partida del Llano de Enmedio, por un precio estipulado de 334 rs. vn. (resultado del justiprecio realizado por peritos nombrados por ambas partes), cantidad que "queda á censo enfiteutico irredimible sobre la misma finca, mediante á no haverla satisfecho el comprador, ..."422.

Las cláusulas fijadas en este contrato inciden de modo especial en aquellos aspectos que garanticen al máximo tanto la satisfacción del canon enfitéutico y resto de rentas derivadas del dominio directo, como la salvaguarda de los derechos de dicho

---

422 AHPA. Prot. Not. de J. Cirer y Palou, año 1851, P. 502, 2ª Tomo, fs. 1.775 vto.-1783 vto.

dominio, empleando para ello, con cierta frecuencia, el derecho de comiso; preservando, incluso, la señoría directa del peligro de quedar eliminada ante la actuación del principio de prescripción.

En primer lugar, en la escritura otorgada se hace hincapié en el conjunto de derechos enfitéuticos tradicionales, introduciendo los matices necesarios para asegurarlos. La percepción anual de 5 rs. vn. cada 29 de septiembre (San Miguel) en concepto de cánon enfitéutico, o la necesidad de obtener la licencia señorial en caso de enajenar el dominio útil son algunos de estos derechos; matizando respecto al segundo que "aunque se les conceda, no han de venderla, trocarla ni empeñarla, donarla ni enagenarla á Yglesia, Monasterio, Mayorazgo, Patronato, Capellanía, Hospital, congregación comunidad eclesiástica ni secular ni persona muy pobre ó poderosa (...)". En relación a este derecho se estipula, además, que si el titular del dominio directo (el "señor del censo") no otorgase dicha licencia al enfiteuta en un plazo de 30 días, este último podría enajenarla sin realizar ninguna diligencia para ello, haciendo constar en la escritura el requerimiento, con el fin de que el señor del directo no pudiese ejercer el derecho de comiso.

La autorización señorial debía ser solicitada igualmente en el caso de las donaciones o cesiones por herencia, señalándose al respecto "que en caso de que se haga con ella o sin ella con fraude y en perjuicio del señor del dominio directo, por no satisfacerle lo que le corresponde, pretestando que solo por la venta se causa, ha de estar obligado el enfiteuta, y en su

defecto el comprador, donatario o cesionario, a pagársele, valiéndose de peritos nombrados por el señor y el enfiteuta", cayendo en comiso si no satisficiera las prestaciones exigidas durante los 30 días posteriores al requerimiento judicial. En este sentido, se exigía el permiso del señor para proceder a la fragmentación del dominio útil entre dos o más herederos, reservándose el titular del directo el derecho de solicitar los réditos pendientes íntegramente a uno sólo de los nuevos enfiteutas, o bien la parte correspondiente a cada uno de ellos, remarcando que el hecho de escoger una de estas formas en un momento determinado no invalidaba sistemáticamente la otra opción.

El derecho de luismo o laudemio (al que ya se ha aludido implícitamente), que debía satisfacerse al señor con motivo de cualquier enajenación del dominio útil de la tierra, se estipula en la décima parte del precio de venta (a pesar de las disposiciones que reducían su cuantía al 2 % de dicho precio, a quincuagésima), "que el señor otorgante se reserva para si sus herederos y sucesores perpetuamente sobre ellas (las tierras), sin que para girarla se deba hacer mas deducción quela del duplo capital correspondiente álos cinco reales anuales". Solamente en caso de que el señor recurriese a la prerrogativa del tanteo o fadiga se dejaría sin efecto dicho derecho; puesto que entonces "ha de pagar al enfiteuta el precio líquido de la venta sin hacerse mas deducción que del importe del duplo capital á tres por ciento y reditos quedaba á la razon como si fuera comprador extraño, puesto que se consolidan ambos dominios".



Al margen de este conjunto de derechos, el estabiliente trataba de asegurar la puesta en explotación y el mantenimiento de la propiedad de una manera efectiva. Con este objeto se requería la panificación de las tierras establecidas en un plazo máximo de 4 años, cultivándolas según la costumbre del país, cayendo en caso contrario en pena de comiso, y pudiendo apoderarse de ellas el Marqués del Bosch sin necesidad de practicar ninguna diligencia y sin ninguna opción de reclamación para el enfiteuta. En este sentido, se exigía también labrarla adecuadamente, sin estar obligado el dueño directo a retribuir las mejoras o aumentos de la finca; pudiendo el marqués compeler a los enfiteutas, cobrándose del producto de la misma los costes ocasionados por el apremio, o bien ejercer el derecho de comiso a su arbitrio.

La garantización de la percepción de los réditos fijados es otra de las preocupaciones reflejadas en la escritura. La aplicación del derecho de comiso en caso de no satisfacerse la pensión anual de los 5 rs. vn. durante un periodo superior a los 2 años, y la denegación de deducciones en la cuantía de los cánones anuales por ningún motivo son ejemplos de ello. Por lo que respecta al ejercicio del mentado derecho de comiso, se matiza que "aunque no se intente esta acción una ni muchas veces que suceda el atraso del pagamento, no por eso hade entenderse que lo perdió o renunció, ni que prescribió, y antes bien ha de quedar en su fuerza y vigor para usar de ella siempre que quiera sin que pueda alegar nunca el enfiteuta prescripcion ni posesión del no uso".

En último lugar resta mencionar una serie de capítulos destinados a salvaguardar el dominio directo de las tierras cedidas, destacando los siguientes:

-prohibición a los enfiteutas de realizar cualquier clase de vinculación o sujeción a beneficiado o patronato de la tierra, así como de imponer ningún tipo de gravamen sobre la misma, bajo la pena de comiso.

-tanto el censo enfiteútico como el resto de derechos con ese origen no podrán ser objeto de confiscación por los delitos cometidos por los enfiteutas.

-en caso del extravío de la escritura original de establecimiento, y a fin de que el titular del dominio directo no se vea privado de ninguno de sus derechos, "es condición y pacto expreso que siempre que el señor de este censo acredite el dominio directo y su identidad con un solo reconocimiento hecho por cualquiera poseedor de la tierra ha de tenerse y estimarse por documento y título tan bastante como esta escritura".

-todo nuevo propietario del dominio útil ha de renovar y reconocer a su costa el censo enfiteútico impuesto en un plazo máximo de 30 días, entregando, además, al dueño una copia de dicha escritura, suficiente para poder emprender cualquier acción legal.

-"el derecho de executar por los reditos y decimas no hade prescribir aunque pasen veinte, treinta, cuarenta ciento y más año, sin embargo de lo que dispone la ley sesenta y tres de Toro que espresamente renuncia el enfiteuta".

-cualquier escritura de reconocimiento podrá ser utilizada para actuar contra los enfiteutas, sin estar obligado el señor "ha manifestar copia de esta dación o censo, ... y no obstante que aleguen no ser suficiente han de poder ser compelidos á ello, sin que se puedan escusar con pretesto de que el reconocimiento sin la escritura original no es bastante ...".

Es interesante poner de manifiesto, además, como esta escritura deja abiertas dos vías hacia la consolidación de dominios nuevamente en manos de una sola persona, bien sea el enfiteuta o el estabiliente; al establecer, por una parte, la posibilidad de "reducir el censo perpetuo a redimible" por parte del dueño del dominio útil, previo expreso convenio con el titular del directo, y, por otra, al especificar que, en caso de que el marqués no pueda mantener dicho establecimiento o no quiera hacerlo, se verá obligado a abonar al enfiteuta las mejoras realizadas o, en su defecto, a entregarle otra porción de tierra de igual cabida y con el mismo precio y condiciones.

Un último punto a reseñar en relación a las cesiones de tierras en enfiteusis es la posibilidad de que la percepción de las pensiones enfiteúticas impuestas en especie fuera arrendada y no gestionada directamente por los marqueses o sus apoderados. Así puede deducirse del arrendamiento otorgado en 1810, por un periodo de 6 años, a favor de Gregorio y Gabriel Yborra (padre e hijo respectivamente, residentes en Aguas). En este contrato se arrendaba "el derecho de Diezmos" de la heredad de Barañes, junto a la hacienda de la Torreta y el "cortijo de los Baños", por la cantidad anual de 350 libras, en una sola

entrega por Navidad. La cuantía específica del arriendo de dichas particiones no aparece detallada en la escritura, como tampoco las condiciones estipuladas con motivo del mismo, por lo que es imposible precisar más esta cuestión. Igualmente desconocemos la incidencia que pudo tener la abolición del régimen señorial tras la promulgación del decreto de 1811 sobre esta práctica.

Los establecimientos enfitéuticos, además de afectar las fincas que integraban el patrimonio territorial de los Martínez de Vera, fueron empleados igualmente por lo que respecta a la cesión de solares para la edificación de casas, a favor de los habitantes de la partida de Aguas Altas. En un primer momento parece que se procedía, como contrapartida a dicha cesión, a la imposición de un censo enfitéutico consistente en la entrega de una gallina por Santo Tomás (21-XII), censo que aparece sustituido en los establecimientos otorgados durante los primeros años del siglo XIX por un cánón en metálico, de carácter perpetuo y anual, cuya cuantía asciende a 6 sueldos, a satisfacer por San Miguel (29-IX). La escasez de las escrituras localizadas nos impiden asegurar que esta sea la única pensión existente, pero de ser ese un hecho cierto, nos reflejaría unas condiciones ligeramente más suaves a las existentes en Busot, donde los cánones impuestos por este concepto se sitúan en 10 sueldos anuales.

Un ejemplo del primer caso mencionado lo constituye el establecimiento otorgado el 10-I-1769 por D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Luisa Martínez de Vera, Marquesa del Bosch, a favor de B. Bernabeu (labrador,

residente en Aguas); en el que, además de la entrega de una gallina por Navidad, se exigía al enfiteuta el compromiso de respetar los derechos de luismo y fadiga y se hacía, por parte de la estabiliente reserva del dominio mayor y directo<sup>423</sup>.

Dos casos ilustran de igual modo la segunda situación. El 8-X-1807 D<sup>a</sup> Catalina Pascual y Vergara, por medio de su apoderado D. V. Fuster, cedía un solar de 40 X 60 palmos a F. Cortés (vecino de Aguas), imponiendo por ello la satisfacción, anualmente por San Miguel, de 6 sueldos, además de requerir, junto al resto de derechos enfitéuticos mencionados con anterioridad, la entrega de una copia de la escritura<sup>424</sup>; y el 5-VII-1810 dicha señora otorgaba en enfiteusis a J. Sala (labrador, vecino de Aguas) un solar de idénticas dimensiones, que debía edificar en el plazo de 4 años, estimado en 12 libras, que quedarían impuestas a censo enfitéutico perpetuo a favor del Marqués del Bosch (siendo su valor los 6 sueldos comentados)<sup>425</sup>.

Las escrituras de venta del dominio útil de casas o solares localizadas han sido muy poco numerosas, y, aunque sus declaraciones de cargas incluyen la mayor parte de los derechos derivados del dominio directo (estipulándose como valor del luismo la décima parte del precio de venta, y como prestación vinculada a la concesión de la licencia señorial con motivo de la misma la satisfacción de una cantidad del orden de los 10 sueldos

-----  
<sup>423</sup> ANJ. Prot. Not. de T. Brotons Bernabeu, P. 23, año 1807, f.59.

<sup>424</sup> Ibidem, fs. 60 vto.-62.

<sup>425</sup> AHPA. Prot. Not. de F. Aracil, P. 96, año 1810, fs. 88 vto.-89 vto.

9 dineros)<sup>426</sup>, no precisan, sin embargo, el tipo de cánon enfitéutico impuesto (pensión en metálico o en especie -gallina-) ni su cuantía.

A pesar de ser la enfiteusis el régimen de tenencia predominante en el señorío solariego de Aguas, no ha sido el único empleado en la puesta en explotación del patrimonio territorial a él perteneciente.

Los testimonios que apoyan y documentan esta afirmación son prácticamente inexistentes, aunque si se tiene constancia de una circunstancia con la suficiente entidad para sostener esta hipótesis. La inscripción en el Registro de la Propiedad de un cierto número de fincas -al margen de las superficies básicamente montuosas- poseídas plenamente por los Marqueses del Bosch, e integradas en el vínculo de los Martínez de Vera y no adquiridas por compra, fundamenta la interpretación realizada, induciéndonos a sugerir el empleo en dichas heredades de aquellos sistemas de tenencia que no implicasen la división y separación de dominios, con la consiguiente entrega del útil al enfiteuta. Entre las diversas formas de tenencia existentes con estas características (arrendamiento, aparcería, explotación directa), nos inclinamos por el arrendamiento -a pesar de la insuficiente documentación-, a tenor de la actitud adoptada a este respecto por los dueños del señorío en otras zonas. En efecto, se ha verificado el empleo

---

426 ANJ. Prot. Not. de T, Brotons y Bernabeu, P. 25, año 1816, fs. 70-73.

del arrendamiento en otros términos de señorío como Busot, Algorfa o Formentera<sup>427</sup>, así como de realengo<sup>428</sup> (como será puesto de manifiesto en las páginas siguientes).

Este recurso a otras formas de tenencia se ve apoyado además por las escrituras que recogen la concesión de poderes para la administración de bienes, por parte de los marqueses a favor de personas residentes en los términos donde radicasen estas propiedades, o bien a personas, lo más allegadas posible, que actuasen como administradores generales<sup>429</sup>.

De estos documentos se desprende que los Marqueses del Bosch habían tomado en consideración el empleo tanto del arrendamiento como de la aparcería o la explotación directa. Así, el 2-IV-1807 D<sup>a</sup> Catalina Pascual y Vergara confería a D. Diego Ortiz de Almodóvar poder para arrendar y dar a partido "todos sus bienes, raíces, sitios, poblaciones, señorías directas y demás que tiene y posee", entre otras acciones<sup>430</sup>. Esta misma escritura pone de manifiesto como la cesión en enfiteusis seguía siendo una

-----  
<sup>427</sup> GIL OLCINA, A. y CANALES MARTINEZ, G. (1988); Op. Cit., p. 241-255; MILLAN GARCIA-VARELA, J. (1984); Op. Cit., pp. 307-308.

<sup>428</sup> ROMERO GONZALEZ, J (1983); Op. Cit., p. 210.

<sup>429</sup> Así sucedía por ejemplo en 1807, cuando D<sup>a</sup> Catalina Pascual y Vergara, otorgaba a D. Diego M<sup>a</sup> Ortiz de Almodóvar y Capdevila -caballero de Santiago y maestrante de la Real de Sevilla-, familiar de su esposo D. Rafael Canicia y Vaillo de Llanos, poder "para que se encargue del manejo general de su casa, y bienes raíces, por no permitírselo sus muchas ocupaciones, y por no dejarlos expuestos á la intervencion y manejo de personas estrañas que por excesivos que fuesen sus desvelos jamas podrian llenar las ideas de las intenciones de la Ylustre Señora compareciente, ni mirar sus asuntos y negocios con el amor inteligencia y desinterés que su mencionado tío...". AHPA. Prot. Not. de F. Aracil, P. 92, año 1807, fs. 75-79.

<sup>430</sup> Ibidem.

opción a tener en cuenta para la puesta en cultivo de aquellas propiedades que todavía no habían sido roturadas<sup>431</sup>. En otro poder otorgado el 24-VIII-1861 a D. Cayetano Belda (vecino de Elche), para encomendarle la gestión de las fincas de su propiedad ubicadas en el término de Elche, se contempla, además del arrendamiento, la explotación directa<sup>432</sup>.

Los únicos datos de que disponemos sobre el recurso al arrendamiento son los proporcionados por la escritura otorgada, el 7-VIII-1810, por el apoderado de D<sup>a</sup> Catalina Pascual y Vergara, Marquesa del Bosch y Condesa de Torrellano (en nombre de su esposo D. Rafael Canicia Vaillo de Llanos), a favor de Gregorio y Gabriel Yborra (residentes en Aguas, y padre e hijo respectivamente)<sup>433</sup>.

-----  
<sup>431</sup> En esta escritura se capacitaba a D. Diego Ortiz de Almodóvar para que pudiera "establecer y dar licencia á fin de que establezcan terrenos para fabricar casas, y panifiquen tierras incultas, pertenecientes al referido Señor Marqués del Bosque su marido en los terminos de su dominio directo á la persona, ó personas que le pareciere, sugetandolas á Señoria directa, luismo y fadiga á dicho Señor Marques del Bosque y sus sucesores, con el canon, ó pensión anua que tuviere por combeniente, imponerles, y demas cargas que se obliguen cumplir con los devidos reconocimientos á su tiempo". AHPA. Ibidem, pp. 75-79.

<sup>432</sup> "para que en su representación pueda administrar las fincas que posee el Conde en Elche, dándole los cultivos y reparos necesarios, no pudiéndolas arrendar sin que antes proceda orden del Señor compareciente, para lo cual deberá remitir a la direccion de la casa el pliego de las condiciones bajo las cuales se ha de proceder al arriendo a fin de que merezca la aprobación por medio de carta misiva, con la que podrá verificar dichos arriendos. Para que pida, reciba y cobre los productos que den dichas fincas, así como las cantidades que por arrendamiento de las mismas se le deban en lo sucesivo ...". AHPA. Prot. Not. de J. Cirer y Palou, P. 526, año 1861, pp. 1473-1475.

<sup>433</sup> AHPA. Prot. Not. de F. Aracil, año 1810, P. 96, fs. 96 vto.-98.



Mediante este contrato era cedida en arrendamiento, por un período de 6 años y una renta anual de 350 libras (en una sola entrega, el día de Navidad), la hacienda de La Torreta, constituida por 20 jornales (9,6080 ha.) de tierra, parte regadío y parte secano, plantados de algarrobos y almendros, con casa, torre, y derecho a regar de la balsa de la Cogolla y de otra recién creada en dichas tierras. En él se incluían, además, el arrendamiento de la partición de dos diezmos que el marqués percibía de la "Hacienda de Barañes" y el del establecimiento de los Baños (integrado por 20 casas y una ermita).

Las condiciones estipuladas iban referidas fundamentalmente a la tierra; la única indicación al margen era la que permitía al arrendatario subarrendar los baños durante un periodo idéntico al que él disfrutaba, siempre que la pensión anual fuese satisfecha directamente por el arrendatario original.

Una parte importante de los capítulos van dirigidos a asegurar el cobro de las rentas anuales -haciendo constar que "por ningún caso fortuito de esterilidad, piedra, fuego, langosta, guerra, niebla, avenidas de agua, no puedan pedir descuento del precio anual del arrendamiento, por efectuarlo a todo riesgo suyo, y por lo mismo quedar ya hecha rebaja en el valor estipulado"; como también la exigencia de presentar fiador que responda del cánón- y garantizar la explotación de la finca en las condiciones adecuadas -requiriendo la realización del cultivo a uso y costumbre de buen labrador, llevando a cabo las tareas necesarias; el riego de las tierras con el agua de las balsas allí existentes (la procedente de la Cogolla y la

correspondiente de la nueva, dos días de cada 16); y la entrega, al finalizar el arrendamiento y a sus costas, de la mitad de las tierras de secano labradas a dos rejas<sup>434</sup>- abonando, en caso contrario, los daños y perjuicios ocasionados.

Las obras de mantenimiento, reparación y mejora de la finca quedaban situadas bajo la responsabilidad del arrendatario, quien debía "tener limpias y corrientes" las acequias, vertientes, márgenes y balsas; ampliar las casas existentes; y "retejar" todos los años las casas, pisos y cocinas de todas las casas, mientras que el único cometido del propietario era el de rehacer las paredes que amenazasen ruina. El marqués estaba facultado para efectuar una inspección y reconocimiento del estado de los bienes arrendados, ordenando, en caso de ser éste deficiente, su acondicionamiento a expensas del arrendatario.

La heredad podía ser subarrendada durante el periodo en que dichos arrendadores dispusieran de ella, siempre que quedase bajo su responsabilidad el cumplimiento de las condiciones establecidas y la satisfacción directa de la pensión anual al dueño de la finca; y finalizado dicho arrendamiento no podrán solicitar prórroga alguna, abandonando la heredad a menos que se les otorgue de un nuevo contrato.

---

434 En el mismo estado en que fueron entregadas al padre de los actuales arrendatarios en el primer arrendamiento que le fue otorgado.

Como hemos avanzado anteriormente, el arrendamiento fue el régimen de tenencia empleado con mayor frecuencia en las propiedades que los marqueses poseían en el realengo alicantino. Junto a fincas de tamaño considerable (entre las 11 y las 28 ha.) eran cedidas en arriendo otras de extensión superficial más reducida (entre las 2 y las 7 ha.), principalmente de regadío o huerta, con sus instalaciones y edificios anexos y las cantidades de agua para riego correspondientes. En estos contratos, de corta duración, el período acordado oscila entre los 4 y los 8 años (en este último caso, sólo en una ocasión se hace la distinción entre años de obligado cumplimiento -6- y años voluntarios -2-)<sup>435</sup>, predominando los arrendamientos de 6 años. Las pensiones anuales impuestas en dichos contratos oscilan entre las 27 y las 570 libras, en función de factores como la extensión, el carácter de seco o regadío, las disponibilidades hídricas, el tipo de cultivos, las instalaciones y edificios complementarios o la ubicación de la finca (Cuadro XII). Su satisfacción era efectuada por los arrendatarios (labradores principalmente -también algún comerciante- y residentes en las zonas donde están ubicadas las fincas) tanto en una (Pascua, Navidad, 15-II), como en dos pagas

-----  
<sup>435</sup> El 3-VII-1792 era cedidos en arriendo por D<sup>a</sup> Luisa Pérez de Sarrió (Condesa viuda de D. Carlos Cayetano Vaillo de Llanos) a F. Asensi (dispensario del Real Hospital de militares enfermos de Alicante, vecino de Alicante) un huerto de 12 jornales con derecho a riego de la fuente de la Fuensanta, plantado de higueras, algarrobos, moreras y almendros, durante un periodo de 8 años, 6 obligatorios y 2 voluntarios. En caso de no desear proseguir esos dos últimos años de arrendamiento, debía comunicarlo a la propietaria el 1 de junio del sexto año, pues en caso contrario se daba por continuado. AHPA. Prot. Not. de P. Montllor, P. 1.242, año 1792, fs. 108-110 vto.

CUADRO XII. ARRENDAMIENTOS OTORGADOS POR LOS MARQUESSES DEL ROSQUE EN EL REALENGO ALICANTINO Y OTRAS AREAS. SIGLO XIX.

FECHA ARREND.	SUPERF. (TH)	LOCALIZACION	CARACTERISTICAS	TIEMPO	PRECIO ANUAL	PRECIO/SUP.	OBSERVACIONES
VII-1792	48 (5,748 Ha)	Alicante (afueras)	hta arb. (hig., moreras, otros)	8 años (6 prec., 2 vol.)	36 L. (1-XI, 25-XII)	1,72 L/Th 14,92 L/Ha	casas, aljibes, balsa con riego de la fuente de la Puensanta
II-1808	54 (6,484 Ha)	San Juan (Alcalali)	hta arb.-campa (vid, hig, mor, otros)	6 años (precisos)	300 L. (Pascua)	5,56 L/Th 46,26 L/Ha	riego pantano, 1 kilo agua vieja casa, cubo, bodega y ermita
III-1808	232 (27,8632 Ha)	Alicante (Bacarot)	sec arb.-campa	5 años (precisos)	45 L. (25-XII)	0,19 L/Th 1,62 L/Ha	casa de habitación y cisterna
XI-1808	124	Rojales (Berna)	reg. camp	6 años (precisos)	310 L.	2,50 L/Th 20,82 L/Ha	
VI-1809	32 (3,8432 Ha)	Alicante (Sueca)	reg arb.-campa secano	8 años (precisos)	1.800rs (120L) (15-II)	2,73 L/Th 22,71 L/Ha	casa principal, agua para riego
-1809	16 (1,9216 Ha)	Alicante (Sueca)	hta arb.-campa (moreras, higueras) secano	6 años (precisos)	320 L. (24-IX, 25-XII)	12,22 L/Th 101,77 L/Ha	casa principal, agua de la bal- sa del Baile
VIII-1809	32 (3,8432 Ha)	Alicante (Sueca)	reg arb.-campa (hig., moreras, otros) secano		406 L. 14 L.	12,69 L/Th 105,64 L/Ha	casa principal, agua para riego
	12 (1,4412 Ha)					1,17 L/Th 9,71 L/Ha	
	16 (1,9216 Ha)	Alicante (Sueca)	reg/sec arb.-campa (moreras, higueras) huerta, regadio	6 años (precisos)	206 L.	12,87 L/Th 107,20 L/Ha	agua para riego
	22 (2,6432 Ha)	Alicante (Sueca)			200 L.	7,92 L/Th 65,95 L/Ha	casa principal, agua para riego de la fuente de la Puensanta
X-1809	156 (18,7356 Ha)	Alicante (Condomina)	reg/hta arb.-campa (frut, olivo, vid, otros)	6 años (precisos)	570 L. (1-II, Pascua)	3,65 L/Th 65,95 L/Ha	casa, bodega, 3 cubos. Agua vieja: 10h invm: 22d.)-6,5h ver(m: 15d)
II-1829	96 (11,5296 Ha)	Alicante (Rusafa)	sec arb.-campa	4 años (25-XII)	27 L. (25-XII)	0,28 L/Th 2,34 L/Ha	
XII-1851	Hto. 3 <sup>a</sup> Ana (Baval Roig)	Alicante (Baval Roig)	hta arb.-campa (higueras)	8 años (25-XII)	675 rs (45 L) (25-XII)		

FUENTE: AHPA. Protocolos Notariales. Elaboración Propia.

(Todos los Santos y Navidad, S. Miguel y Navidad, 1-II y Pascua). En ocasiones se establecía además la entrega, por Santo Tomás, de animales (generalmente aves de corral) en concepto de adehalas<sup>436</sup>.

Las condiciones estipuladas en las diversas escrituras de arrendamiento regulan una serie de aspectos de gran importancia para el dueño de las propiedades, y muy similares a las comentadas en el capítulo dedicado a la Vallonga de Burgunyo. En primer lugar, y común a todos los arrendamientos, es el intento del otorgante de garantizar la conservación y mejora de la finca, exigiendo para ello la realización de las labores agrícolas (labrar, cavar, podar, estercolar, mantener márgenes, ...) "a uso y costumbre de buen labrador", de acuerdo a las prácticas seguidas en la zona, y el riego de las fincas (siempre que se disponga de recursos) en los tiempos adecuados<sup>437</sup>; pagando a sus costas, en caso contrario, los perjuicios causados. El arrendatario debía devolver la finca (así como las instalaciones existentes para su cultivo y la transformación de los productos agrícolas) en el estado en el que le había sido entregada al inicio del arriendo; estado que, en ciertas ocasiones, era comprobado por peritos enviados por el dueño (quienes, previamente a la cesión, habían justipreciado la finca y sus

-----  
<sup>436</sup> 6 gallinas en el arrendamiento del huerto de la Torre (18 th.) y 18 en el de la heredad de la Condomina (156 th.), ambos otorgados en 1809. Ibidem, F. Aracil, P. 94, año 1809, fs. 122-125 y 171-175.

<sup>437</sup> AHPA. Prot. Not. de F. Aracil, P. 94, año 1808, fs. 61 v.-65.

anexos)<sup>438</sup>. En caso de confirmarse el menoscabo de los bienes cedidos, los arrendatarios debían abonar la diferencia al dueño de la hacienda.

Las obras de mantenimiento, reparación y acondicionamiento de la finca para el cultivo son responsabilidad del arrendatario, quien debe realizarlas a sus expensas; pudiendo ser compelido y ejecutado por su importe en caso contrario. Así sucede con la limpieza y reparación de balsas y acequias, el costeamiento "de las hijuelas o tahúllas de los brazales"<sup>439</sup>, o el acondicionamiento y mejora de los edificios comprendidos en las haciendas, sin poder solicitar ninguna compensación por ellas<sup>440</sup>.

Otro grupo importante de cláusulas van encaminadas a asegurar al propietario un cierto margen de intervención en el cultivo y administración de la finca; plasmado en la imposición de un determinado tipo de cultivo (unas veces costeada dicha inversión entre propietario y colono, y otras a expensas únicamente de este último), la prohibición de otros en ciertas

-----

<sup>438</sup> Ibidem, año 1808, fs. 61 vto.-65, y año 1809, fs. 171-175. El caso del arrendamiento del Huerto del Chorret se facultaba al colono para realizar las variaciones que quisiera, siempre que no estuvieran en contradicción con el requisito anterior y no modificasen el cercado primitivo. Ibidem, año 1809, fs. 84-85 vto.

<sup>439</sup> AHPA. Prot. Not. de P. Montllor, P. 1242, año 1792, fs. 108-110 vto; y F. Aracil, P. 94, año 1809, fs. 171-175.

<sup>440</sup> Ibidem, F. Aracil, P. 94, año 1809, fs. 84-85 vto. Una excepción a esta situación la constituye el contrato de arrendamiento de una finca de 58 jornales de secano (situada en el Bacarot) otorgado en 1808, en el que se obliga al arrendatario a reparar la casa pequeña de la hacienda, aunque los gastos ocasionados por esa tarea serían abonados deduciendo su valor de las pensiones anuales. Ibidem, año 1808, fs, 84-86.

áreas de las fincas, la exigencia de mantener y emprender los riegos necesarios o la aplicación de unas técnicas de cultivo concretas según las especies, entre otros aspectos. Además de este objetivo, se lograba la continua mejora y aumento de la finca, principalmente a expensas del arrendatario.

Por ejemplo, el relación a la viña, se exige su amorgonamiento anual (avisando al propietario del día de inicio de la faena, por si quisiera enviar a alguien, y dividiendo los costes entre éste y el colono)<sup>441</sup>, su poda a "yermo y braguero" (mandándolo hacer, en caso contrario, el marqués a costa del colono)<sup>442</sup>, o su riego dos veces al año (debiendo utilizar para ello todas las martavas de agua del pantano comprendidas en el arrendamiento)<sup>443</sup> entre otras labores. En caso de que algunos bancales de este cultivo hubieran de ser arrancados, el colono debía dar aviso al dueño y obtener su consentimiento, debiendo replantarlos nuevamente, abonándosele 10 libras por cada millar plantado, aunque era de su competencia el amorgonamiento y cuidado de las mismas. El número de vides a replantar o el periodo de tiempo concedido para la tarea no siempre se

-----  
<sup>441</sup> El desembolso correspondiente le sería abonado al arrendatario en la última paga de cada año. Ibidem, año 1808, fs. 61 vto.-65, y 1809, fs. 171-175.

<sup>442</sup> Ibidem.

<sup>443</sup> Tanto de "agua nueva" como "vieja", bajo la multa de 25 libras por cada hora que deje de regar, "a menos que antes no hubiese dado mas agua, y no necesitasen las tierras, debiendo constar al fin del año haber regado todo el agua que correspondía a la hacienda". Ibidem, año 1808, fs. 61 vto.-65.

especifican<sup>444</sup>.

Medidas similares eran establecidas para otros cultivos arbóreos, como el almendro (solamente se permitía sembrar estas tierras en años alternativos<sup>445</sup> y, en algún caso, se exigía dejar en el último año de arrendamiento la mayor parte de los bancales de almendros labrados a 2 rejas<sup>446</sup>), el olivo (prohibición de cualquier tipo de sembradura), la morera (debía ser escardada en los momentos correspondientes, y, en alguna ocasión, se ordena plantar hortalizas como rastros en los bancales de moreral<sup>447</sup>), o las higueras.

El agua solía arrendarse conjuntamente con la tierra para asegurar el riego de la misma, tanto la procedente de fuentes y balsas cercanas a las heredades (del Baile, de la Fuensanta, ...) como del pantano ("agua Nueva" y "Agua Vieja"). A tenor de la importancia que adquiere este recurso en el ámbito mediterráneo, caracterizado por la irregularidad y precariedad de las precipitaciones, se incluyen una serie de disposiciones que garanticen su empleo en las fincas a las que van asociadas y su correcta distribución cuando ha de ser compartido por varias

-----  
444 En el arrendamiento otorgado a C. Selles de una hacienda de unas 54 tahúllas ubicada en S. Juan, se imponía un límite de dos años para realizar la replantación, pudiendo plantar mientras tanto hortalizas en dichos bancales. Ibidem, año 1808, fs. 61 vto.-65. En otro otorgado al año siguiente, de una heredad de 156 tahúllas situada en la Condomina, se exigía un mínimo de 1.600 plantas anuales, realizándose dicha replantación en tres fases, y conviniéndose, además, la entrega al otorgante de 150 arrobas de cepas. Ibidem, año 1809, fs. 171-175.

445 Ibidem, año 1808, fs. 61 vto.-65.

446 Ibidem, año 1809, fs. 171-175.

447 Ibidem.



heredades<sup>448</sup>. Se prohibía la derivación de esos caudales hacia otros fines (venta), multándose cada hora que se dejara de regar con 25 L. Para evitar esa posibilidad se exigía dar aviso al dueño del momento del riego dos horas antes de tomar el agua<sup>449</sup>.

A la regulación del aprovechamiento de las utilidades estaban destinados otro grupo de capítulos, comunes a la mayor parte de los contratos de arrendamiento. Generalmente, cuando se secaba un árbol el señor se quedaba con el tronco, correspondiendo el ramaje al arrendatario, quien con mucha frecuencia se veía obligado a arrancarlo y reponerlo a sus expensas, sin que esta labor reportara reducciones en el precio del arriendo<sup>450</sup>, y necesitando el previo consentimiento del dueño

-----  
<sup>448</sup> Por ejemplo, el agua que provenía de la fuente del Baile y entraba al huerto del Chorret (pda. La Sueca, Alicante), sólo podía ser aprovechada parcialmente en el mismo, puesto que ese agua debía abastecer igualmente el huerto situado en sus inmediatas proximidades. AHPA. Prot. Not. de F. Aracil, P. 94, año 1809, fs. 84-85 vto.

<sup>449</sup> Ibidem, año 1808, fs. 61 vto.-65, y año 1809, fs. 171-175. En relación a este último punto, y para la heredad de 54 th. situada en San Juan, se hacía constar la "obligación de sacar el agua de la Administración en las 18 martavas que corresponden hacerse al año, de las cuales deberá pagar las dos primeras (el arrendatario), y las dieciseis las abonará el Marqués cada año, si es que se sacan de la Administración".

<sup>450</sup> AHPA. Prot. Not. de Juan José Sesse, P. 1.675, año 1829, fs. 4 vto.-7 vto. En el contrato de arrendamiento del huerto de la Torre (comprensivo de 16 th., parte campa y parte plantada de moreras e higueras, y 2 th de secano, situado en la partida de La Sueca), se estipulaba que, en el caso de secarse algunas moreras o higueras, el arrendatario debía replantarlas a sus expensas, costeadando asimismo los plantones jóvenes, sin poder solicitar ninguna deducción del canon anual. Ibidem, F. Aracil, año 1809, fs. 122-125.

para emprender dicha tarea<sup>451</sup>. En algunas ocasiones, sin embargo, era el propietario el que proporcionaba los pies al colono, determinando de este modo el tipo de árbol a replantar<sup>452</sup>. En uno de los arriendos concedidos, el propietario se reservaba el producto del cañar existente en la finca<sup>453</sup>.

El alfarrás que el arrendatario debía dejar en la hacienda al finalizar el arrendamiento era regulado en la mayor parte de las escrituras. En todos los contratos otorgados se exigía un alfarrás valorado en una cantidad en metálico, de diversa cuantía en función de las características y tamaño de la finca, que solía coincidir con el cánón anual<sup>454</sup>. El arrendatario debía satisfacer en metálico la diferencia con la cantidad acordada, pero el alfarrás excedente no le sería abonado, quedando, de este modo, a beneficio de la finca, a menos que el nuevo arrendatario decidiera pagarle su valor<sup>455</sup>.

-----

<sup>451</sup> AHPA. Prot. Not. de J. Cirer y Palou, P. 502, año 1851, 2º Tomo, fs. 1.941-1.945. En estos contratos de arrendamiento más tardíos, las condiciones incluidas son menos detalladas, recogiendo solamente los aspectos más comunes.

<sup>452</sup> Ibidem, F. Aracil, P. 94, año 1809, fs. 171-175. Por ejemplo, en la hacienda situada en San Juan, cuando se secaba alguno de los árboles, el señor entregaba pies de almendros al arrendatario. Ibidem, año 1808, fs. 61 vto.-65.

<sup>453</sup> "como los arrendatarios se encautan del cañar, deberán dejar las cañas en el mismo a disposición de la Marquesa, en el último año de arrendamiento. Ibidem, F. Aracil, P. 94, año 1809, fs. 171-175.

<sup>454</sup> Sólo en el arrendamiento del huerto de la Fianza (pda. La Sueca, Alicante), concedido en 1809, y en el del huerto de Santa Ana (situado en el Raval Roig, Alicante), otorgado en 1851, el alfarrás era inferior al precio estipulado (160 libras frente a 200 libras en el primer caso, y 130 rs. frente a 675 rs. en el segundo). Ibidem, F. Aracil, P. 94, año 1809, fs. 127 vto.-131; y J. Cirer y Palou, P. 502, año 1851, 2º T., fs. 1.941-1.945.

<sup>455</sup> Ibidem, Prot. Not. de F. Aracil, P. 94, año 1808, fs. 84-86; año 1809, fs. 127 vto.-131.

Los propietarios de las fincas, en ciertas ocasiones, reservaban para su uso personal parte de las instalaciones de las heredades, sobre todo en lo que atañe a las casas existentes en las mismas. De este modo, solían ser exceptuadas del arrendamiento, íntegra<sup>456</sup> o parcialmente<sup>457</sup>, algunas de las casas principales y de sus edificios anexos<sup>458</sup>

Otra serie de condiciones iban dirigidas a garantizar, por parte del arrendatario, el abandono de la finca al término del arrendamiento (en caso de no ser renovado su contrato) y el pago de las pensiones anuales. Con este último objetivo se requería la presentación de fianza o fiador, se advertía la denegación de cualquier deducción del precio de arrendamiento ante la incidencia de ningún tipo de factores<sup>459</sup>, y se hacía constar la anulación del arrendamiento en caso de no satisfacer los réditos anuales<sup>460</sup>.

-----  
<sup>456</sup> Ibidem, P. Montllor, P. 1.242, año 1792, fs. 108-110 vto. Al colono correspondía la casa accesoria, que debía habitar y ciudar él mismo o, en su defecto, instalando allí una familia.

<sup>457</sup> Ibidem, F. Aracil, P. 94, año 1809, fs. 84-85 vto. El arrendatario recibía la parte baja y los cuartos existentes en la casa principal, pudiendo realizar las modificaciones que deseara para su propia comodidad, exceptuando las perjudiciales para el edificio, y sin poder solicitar ninguna compensación monetaria por ellas.

<sup>458</sup> Por ejemplo, en la Hacienda del Chorret los propietarios se reservaban el huerto cercado con el agua correspondiente, todos los altos de la casa de habitación, el cuarto del jardinero y la cocina anexa. Ibidem, año 1809, fs. 127 vto.-131.

<sup>459</sup> Solamente en un arriendo se recoge una excepción. Siempre que "el castigo fuese universal de todos los frutos de la hacienda" se rebajaría la cantidad que indicasen los peritos. Ibidem, F. Aracil, P. 94, año 1808, fs. 61 vto.-65.

<sup>460</sup> Ibidem, año 1809, fs. 122-125 y 171-175.

Se ha de destacar como la mayor parte de los costes de mejora y adecuación de la finca recaían en el arrendatario. Así ha sido puesto de manifiesto en el comentario de las condiciones de arriendo, y se hace también evidente en una cláusula incluida en el arrendamiento otorgado en 1851 del huerto de Santa Ana. Se hace constar en la escritura la existencia de agua en las tierras de dicho huerto, y se autoriza al colono a emprender las excavaciones que desee (avisando previamente al dueño), corriendo con la mitad de los gastos (la otra correspondería al dueño) si resultaban infructuosas, y costeándolas íntegramente el propietario en caso contrario, en cuyo caso se procedería al incremento del precio del arriendo tras la valoración efectuada por peritos nombrados por ambas partes<sup>461</sup>.

Por último, el arrendatario debía responder igualmente de otro tipo de gastos, como los procedentes de la firma y entrega de copia de la escritura o los correspondientes a ciertos impuestos<sup>462</sup>.

---

<sup>461</sup> Ibidem, J. Cirer y Palou, P. 502, año 1851, 2º Tomo, fs. 1.941-1.945.

<sup>462</sup> Debía pagar el impuesto del vino para el muelle de Valencia y cualquier otro establecido sobre los frutos de la hacienda. Ibidem, año 1809, fs. 171-175.

### 2.3.-La Propiedad de las Aguas

Según se desprende de la escritura de venta del lugar de Aguas en 1609, las aguas del paraje eran también propiedad de los titulares del señorío solariego. Procedentes de fuentes y manantiales u obtenidas tras la realización de excavaciones (generalmente a expensas de los enfiteutas), eran recogidas en balsas y cedidas en enfiteusis por los Marqueses del Bosch, quienes se reservaban el dominio directo de las mismas y el resto de derechos enfitéuticos (luismo, fadiga, cánon, exigencia de autorización señorial para las enajenaciones,...). Una parte de estos recursos eran retenidos por los dueños en plena propiedad, para dotar de riego las fincas de su entera posesión. Durante el siglo XIX, la política de compra de tierra (del dominio útil en unos casos, y la plena propiedad en otros) se vio acompañada por otra similar de compra de agua.

El aprovechamiento de las aguas para riego y, por tanto, el ordenamiento de esta actividad, requieren la implantación de un sistema de distribución y regulación de los caudales hídricos; sistema que, fundamentado en un cómputo horario, cuenta como unidad básica de división con la hora de agua, agrupadas en turnos o tandas de distinta duración según el caudal de la fuente de que se trate (aunque siempre inferiores a 20 días). Es, por tanto, un sistema similar al adoptado en otras áreas provinciales de regadío tradicional, como la huerta de

Alicante o el Campo de Elche<sup>463</sup>.

Al igual que en los ejemplos mencionados, es característica la disociación entre propiedad de la tierra (o dominio útil de la tierra) y propiedad del agua (o dominio útil del agua). El agua, aunque se transfiere de manera general conjuntamente con la tierra (en estos casos no se suele especificar por separado el precio de cada uno de los bienes incluidos en la transacción), en bastantes ocasiones es objeto de venta independiente, y de establecimiento por el señor del mismo modo.

Los alumbramientos existentes en el lugar presentan una distinta antigüedad, y en su mayor parte se han agotado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Así se pone de manifiesto por ejemplo en el Registro de la Propiedad o con motivo de alguna venta. En una inscripción registral del último cuarto del s. XIX, se recoge el testimonio de la inutilización de la Balsa Nueva (situada en las cercanías de los Baños):

-----

<sup>463</sup> ALBEROLA ROMA, A. (1984): Op. Cit., pp. 159-193; *El pantano de Tibi y el sistema de riegos en la Huerta de Alicante*. Instituto Juan Gil-Albert, Alicante, 1984; "Las disponibilidades hídricas en la huerta alicantina: un problema tradicional" en *Demanda y Economía del agua en España*, Alicante, 1988; COSTA MAS, J.: "La cuestión del agua en un área de tradicional regadío deficitario: Elche", *Demanda y ...*, pp. 379-387; GIL OLCINA, A.: "El regadío en Elche", *Estudios Geográficos*, Madrid, 1968, XXIX; GOZALVEZ PEREZ, V.: *El Bajo Vinalopó. Geografía Agraria*. Valencia, 1977, pp. 201-243; LOPEZ GOMEZ, A.: "Riegos y cultivos en la Huerta de Alicante. Evolución y estado actual", *Estudios geográficos*, nº 45, Madrid, 1951, pp. 701-771; "Riegos y cultivos en las huertas valencianas", *Cuadernos de Geografía*, nº 1, Valencia, 1965. pp. 1-23.

"El referido Lorenzo García Yborra declara que en la escritura de fundación de la balsa nueva otorgada en 13 Enero de 1803, ante el Escribano que fue de Alicante D. Pedro Fuentes aparece la siguiente= Claúsula 7ª= Y ultimamente es condicion que si se secare en todo la agua que sale de dicha escavacion, y no fluyese alguna, quedará nula y de ningún valor ni efecto esta escritura y todos los interesados, como estaban antes de su celebración= En acta notarial otorgada en 6 Noviembre de 1879 por V. Brotons y Beviá se hace constar haberse secado el manantial y dejado de fluir el agua en la Balsa Nueva, y por tanto= "Que por tales motivos, en concepto del que declara, caducaron sus derechos a dicha balsa y agua, pero si algunos pudiera tener, los enajena y renuncia por la presente, sin que pueda utilizarlos ni reclamarlos bajo ningún concepto, dejando espeditos los que correspondan al Ylustre Señor, Marques del Bosch"<sup>464</sup>.

En el caso de las aguas en plena propiedad de los Marqueses del Bosch, a pesar de ir transfiriéndose por herencia hasta M<sup>a</sup> Teresa Rojas y Roca de Togores, se pone de manifiesto, de igual modo, la pérdida de valor y el agotamiento de dichas fuentes. Así ocurre, por ejemplo, con 431 horas de agua recibidas por esta última, puesto que, carentes de valor por no existir ya

---

<sup>464</sup> Registro de la Propiedad de Jijona. T. 194, Lib. 11, Fca. 426, f. 26.

ni las aguas ni las balsas (del Cañar, del Cantal, de los Baños, Nueva, del Ciscar), les fue asignado un valor simbólico de 10 pts. por hora de agua.

La mayor parte de estas resurgencias, como ya se apuntó con anterioridad, se encontraban situadas en las proximidades de los Baños. Las escrituras de establecimiento localizadas han sido muy escasas, por tanto, han resultado de gran ayuda los libros de translaciones de dominio de la Contaduría de Hipotecas. Esta fuente, sin embargo, presenta el inconveniente de la falta de veracidad de las anotaciones registradas por lo que respecta a las declaraciones de cargas, puesto que, como ocurría en el caso de Busot, se hace patente en ella la resistencia de los enfiteutas a reconocer y satisfacer los derechos señoriales. Por este motivo, en relación al agua procedente de un mismo manantial, se hace constar tanto la inexistencia de gravámenes, como el desconocimiento de éstos en el caso de que los hubiera o su aceptación y reconocimiento. Las principales fuentes existentes en el término son las siguientes:



CUADRO XIII

BALSAS	TANDAS	CARGAS SEÑORIALES
de la Mata	18 días	No se expresan/No/Sí
Horno de Vidrio	16 días	No
del Castelled		No
de los Campellos	15 días	No se expresan/No/Si
de los Baños	18,5 días	No se expresan/No/Si
del Cañar	15 días	No se expresan/No/Si
de los Yborras	18 días	No se expresan/No/Si
Nueva	16 días	No se expresan/No/Si
del Cantal del Paller	15 días	No/Si
del Ciscar	16 días	No/Si
<u>de la Alquería</u>	<u>15 días</u>	<u>No se expresan</u>

No= Sin cargas      Fuente: Libros de Contaduría de Hipotecas.

Si= Con cargas      Registro de la Propiedad de Jijona.

La Mata=La Murta      Elaboración Propia.

Yborras=Gasparet

Cantal P.=Baraños

A pesar de la confusión que parece desprenderse del cuadro, no cabe la menor duda de que la mayor parte de las aguas pertenecían al patrimonio de los Marqueses del Bosch (exceptuando aquellas que estuvieran radicadas en terreno realengo), quienes las habían establecido enfitéuticamente a los labradores de Aguas. La cesión en enfiteusis de aguas (tanto las sobrantes -las que se perdían una vez regados los campos o las

que circulaban por torrentes y barrancos-, como las captadas de los ríos o las subterráneas), para la puesta en regadío de tierras y la construcción de molinos harineros, o con otros fines meramente especulativos, era una práctica igualmente empleada en el realengo alicantino por el Real Patrimonio<sup>465</sup>.

Las condiciones de los establecimientos de aguas han sido deducidas del apartado de cargas incluido en las escrituras de venta del dominio útil, dada la práctica inexistencia de este tipo de contratos durante el último cuarto del siglo XVIII y siglo XIX. A los derechos enfitéuticos característicos (luismo -10% del precio de venta-, fadiga, obtención de licencia señorial en caso de enajenaciones, ...) se une un canon ánuo y de carácter perpetuo impuesto preferentemente en metálico (aunque existen casos en los que el pecho es de otra naturaleza). La cuantía del mismo varía de unos casos a otros, y ha sido imposible establecer un pecho homogéneo por hora de agua, puesto que varía de una balsa a otra e, incluso, en relación a una misma balsa. Hecho que probablemente responda a diferentes periodos de establecimiento, a las condiciones y compensaciones que incluía el contrato enfiteúutico originario, o al caudal de las diversas fuentes. Así por ejemplo, con respecto a la balsa del Cañar, en varias anotaciones de los libros de Contaduría de Hipotecas se declara

---

<sup>465</sup> ALBEROLA ROMA, A.: "Los establecimientos de aguas en el Realengo alicantino: Una forma de aplicar el contrato enfiteúutico por el Real Patrimonio a fines del siglo XVIII", *Revista de Historia Moderna*, nº 3, Alicante, año 1983, pp. 99-113.

la sujeción a un canon de 17 maravedíes por hora de agua<sup>466</sup>, mientras que, en una venta realizada en 1854 de 6 horas y 45 minutos de agua procedente de esta misma balsa, se reconocía como gravamen un canon de 10 rs. 2 mrds (más de 50 mrds. por hora de agua), al margen del pecho correspondiente a la parte del censo consignativo de 1.200 L. impuesto sobre la finca de los Arnaus<sup>467</sup>.

Censos de carácter redimible (consignativos) eran los únicos que en ocasiones gravaban el agua establecida enfiteúticamente, resultado de la imposición del mismo sobre el total de la finca inicialmente cedida. Un ejemplo de ello es el agua procedente de la Balsa de los Yborras (Gasparet). Se ha de señalar, sin embargo, que, con frecuencia, no era detallada la cuantía de los cánones ni en las escrituras recogidas en los protocolos notariales<sup>468</sup> ni en las anotaciones registrales de la Contaduría de Hipotecas y el Registro de la Propiedad; y, en los casos en que tierra y agua eran vendidas conjuntamente, tanto el

-----  
<sup>466</sup> Registro de la Propiedad de Jijona. Contaduría de Hipotecas, Lib. 3º de translaciones de dominio, años 1854 y 1855.

<sup>467</sup> Registro de la Propiedad de Jijona. T. 395, Lib. 22, Fca. 1.421, f.169; y Contaduría de Hipotecas. Lib. nº2 de translaciones de dominio.

<sup>468</sup> La escritura de venta de 2 horas de agua de la balsa de los Baños, otorgada el 31-X-1805 por L. García a favor de G. García (ambos labradores y vecinos de Aguas), incluía la licencia señorial, y en ella se reconocían el dominio directo del Marqués del Bosch y la obligación del enfiteuta de respetar y satisfacer los derechos de luismo, fadiga y el resto de los enfiteúuticos, aunque no mencionaba explícitamente ningún tipo de canon (ni su cuantía). AHPA. Prot. Not. de F. Sala y Cantó, P. 1.624, año 1805, fs. 130-131 vto.

precio como el canon mencionados englobaban los específicos de cada uno de los dos bienes objeto de venta.

El agua procedente de otra serie de balsas (balsa del Ciscar o balsa Nueva) había sido gravada con un censo distinto, consistente en 1 vaso de agua por cada día de agua, manteniendo de igual modo el resto de derechos<sup>469</sup>.

La única escritura de establecimiento de aguas localizada es la otorgada por D. Rafael Canicia Vaillo de Llanos en 1803 a un colectivo de labradores residentes en Aguas. En ella, se les concedía licencia para fabricar una balsa, conocida como la balsa Nueva, en el paraje de la Cogolla, en las cercanías de los Baños. La obtención de estas aguas de origen subterráneo, en unos terrenos propiedad de los Marqueses, había exigido la realización de las obras de perforación, previa licencia señorial, a expensas de los futuros enfiteutas. Así se pone de manifiesto en el siguiente fragmento de dicha escritura:

"(...) Que como poseedor que es de los vínculos de Martinez de Vera, y como tal Dueño directo del Pago de Aguas Altas, término y jurisdicción de esta referida ciudad por la presente escritura establece, y dá Licencia a Gregorio Yborra de Pedro Antonio, Bautista

-----

<sup>469</sup> El 10-X-1851, D. José Rojas y Canicia, Marqués del Bosch adquiriría de R. Mallol y Giner (labrador, vecino de Aguas) 2 días de agua de la balsa del Ciscar (cada tanda de 16 días) por 750 rs., sujetos a un pecho de 1 vaso de agua por cada día de agua; logrando, además, la consolidación de dominios de la misma. AHPA. Prot. Not. de J. Cirer y Palou, P. 502, año 1851, 2º Tomo, fs. 1.625 vto.-1.629 vto.

Bernabeu de Bartolomé, Lorenzo Brotons de Lorenzo, Rafael García, Antonio García, Francisco García, y Lorenzo García, hermanos, los siete de ejercicio Labradores, moradores en dicho Partido de Aguas Altas, para que puedan fabricar una Balsa en la nominada Partida, y particular de la Cogolla del Camino por arriba para recoger el Agua que actualmente sale de la escavacion nueva que han hecho los referidos siete arriba nombrados, con licencia de su Señoría, de ancho y largo que les parezca suficiente, y pudiendo abrir sanjas para conducir la referida agua a sus tierras, concediendoles tambien dicho Ylustre Señor Marques licencia para fabricar otra Balsa del Camino por abajo en caso nesessario para condusir el agua, que no pueda recogerse en la antecedente Balsa de arriba, cuyo establecimiento les consede con formal transpaso Cesion de la mencionada agua en favor de los enunciados ..."<sup>470</sup>.

A resultas de las condiciones impuestas en este establecimiento, tanto los costes ocasionados por el alumbramiento de las aguas como por su posterior distribución y almacenamiento recaían en los nuevos enfiteutas, mientras que el Marqués obtenía con ello importantes beneficios sin efectuar ningún desembolso. Efectivamente, los enfiteutas debían llevar a

-----

<sup>470</sup> ARV. Bailía E, nº 405 Apéndice, año 1816, fs. 5-12.

cabo, a sus expensas, las obras iniciales de excavación, y una vez obtenidas las aguas, la construcción de la balsa y las acequias necesarias para su conducción a las tierras. El señor directo, además de lograr la creación de la nueva balsa sin ningún costo, conseguía el dominio directo del agua contenida en dicha balsa y las rentas inherentes a dicho dominio (principalmente las procedentes del luismo o de la solicitud de la licencia señorial en caso de enajenación), junto a la plena propiedad de dos días de agua en cada tanda de 16 días; sin olvidar los beneficios indirectos que dicha agua le reportaría a tenor de la revalorización de las tierras, cuyo dominio directo poseía, ante la posibilidad de introducir el regadío. Por esta razón, el canon enfiteútico impuesto, consistente en un vaso de agua por cada uno de los enfiteutas, no debía resultar demasiado gravoso para el enfiteuta, quien había corrido con todos los gastos de la empresa.

Las condiciones impuestas en dicho establecimiento fueron las siguientes:

-Los enfiteutas han de costear a sus expensas la balsa (o balsas) que se construyera, encargándose igualmente de su reparación y mantenimiento en correctas condiciones, al igual que de las acequias, sin poder solicitar ninguna compensación por ello.

-Se establece una tanda de 16 días para el riego, correspondiendo 2 días a cada uno de los enfiteutas y otros 2 días al señor directo; quien no se verá obligado a participar de los gastos de reparación o mantenimiento.

-Los enfiteutas en caso de enajenación del agua y las tierras deberán obtener la licencia señorial y avisar al señor un mes antes de la venta, para que éste pueda ejercer el derecho de fadiga, puesto que tendrá preferencia en la adquisición de las mismas. En caso contrario caerán en "las penas del enfiteusis" (comiso), careciendo de valor la transacción efectuada.

-Se impone un canon o pensión ánuas de 1 vaso de agua a cada uno de los enfiteutas, quienes están obligados, además, a pagar el luismo en las enajenaciones, a razón del 10 % del precio estipulado.

-La acequia que ha de fabricarse para conducir el agua desde esta balsa hasta la otra de los Baños han de costearla los enfiteutas, sin que ninguno de los propietarios de las tierras por donde circule dicha agua pueda pedirles nada por ello.

-Todos los enfiteutas deben permitir que por sus tierras pasen las conducciones de agua, de modo que todos estén en condiciones de regar sus tierras.

-En caso de secarse la fuente, quedaría anulada la escritura de establecimiento.

La superficie regada con estas aguas no fue muy elevada, puesto que en 1816 se habían visto beneficiadas 17 tahúllas 1 octava (2,0567 ha.), distribuídas en pequeñas parcelas entre 0,5 y 2,5 tahúllas; pero las 3.200 libras en que fueron valoradas las 384 horas de agua resultantes<sup>471</sup> (8,33 L./hora de

-----  
<sup>471</sup> Ibidem, fs.13-16.

agua) da idea de la importancia de las mismas (aunque esa cuantía es bastante inferior a la que alcanzarán a mediados de siglo tanto las horas de agua procedentes de esa balsa como las de otras balsas).

Sin embargo, estas acciones de los marqueses fueron rechazadas en diversas ocasiones por los procuradores del Real Patrimonio, quienes denunciaban la ilegalidad de tales establecimientos aduciendo para ello el carácter de realengos de los terrenos en los que radicaban las fuentes, o bien que solamente el Real Patrimonio tenía competencias para establecer aguas subterráneas.

Así sucedía en 1816 en relación al establecimiento de la balsa Nueva, pues, el 26 de abril de ese año, los enfiteutas anteriormente mencionados fueron acusados por el fiscal patrimonial de usurpar tierras y aguas realengas sin solicitar las correspondientes licencias de establecimiento<sup>472</sup>. La Marquesa del Bosch, D<sup>a</sup> Catalina Pascual y Vergara, presentó, para contrarrestar dicha acusación, la copia del decreto de la Real Audiencia de Valencia de fecha 12-VII-1816, en el que se la amparaba en el uso y posesión de todas las aguas de los Baños de Busot y del resto de balsas y terrenos del lugar de Aguas:

-----

<sup>472</sup> "a pesar de la invitación a los poseedores de terrenos y edificios realengos a que se delatasen para ser indultados, no lo han cumplido, sin embargo de estar disfrutando una fuente para regar sus tierras sacada en terreno realengo, de poco tiempo a esta parte, en la parte de arriba del paraje "la Cogolla". ARV. Ibidem, fs. 1-2.



"se mantiene y ampara, y en caso necesario rehintegra a la Marquesa del Bosque, Condesa de Torrellano, como Administradora de los vienes y rentas de su marido en el uso, gose y Posecion de disponer de las aguas de los Baños de Busot, de su caserío, de las demas aguas, balsas y terrenos de dicho termino, cuya posecion no perturben la Ciudad de Alicante, su Junta de Sanidad, Administrador de la Baylia ni otras personas, ni innoven en cosa alguna, reponiendo qualquiera novedad al estado anterior a ella, baxo la pena de doscientas libras, con reserba a estos para que usen del derecho que entiendan tener para lo contrario en el Juicio Plenario de Poseción o de Propiedad, ..."473.

El fiscal patrimonial aducía los argumentos anteriormente mencionados, a la vez que criticaba el descuido y desinterés del procurador patrimonial de la Bailía de Alicante que había permitido que ese hecho tuviera lugar hacía trece años. A pesar de sus recomendaciones de exigir a la marquesa la presentación de los títulos de posesión y disfrute de las aguas y la fuente, parece ser que el expediente no prosiguió<sup>474</sup>. Además, los acontecimientos y testimonios posteriores, que siguen reconociendo a los marqueses como los dueños directos de dichas aguas, demuestran la continuidad en éstos de dicha posesión.

-----  
<sup>473</sup> Ibidem, fs. 19-19 vto.

<sup>474</sup> Ibidem, fs. 19 vto.-20 vto.

Un enfrentamiento similar, esta vez en torno al establecimiento de 4 jornales de tierra en el paraje del Colladet y del agua obtenida tras la realización de una excavación en dicho terreno, tuvo lugar en 1819 entre la Marquesa del Bosch y la ciudad de Alicante; aunque en esta ocasión el proceso fue inverso.

El 16-VI-1819 un grupo de 30 personas (29 labradores y vecinos de Aguas, y un cirujano, vecino de Alicante) solicitaron del Real Patrimonio que les fuera establecido un terreno de unos 4 jornales, que consideraban de realengo, en el que habían excavado y descubierto un pozo a sus expensas; sin que hubiese existido ninguna oposición por parte de nadie a dichas obras, y puesto que reclamaban la propiedad del agua que habían obtenido a sus costas<sup>475</sup>. Todos los solicitantes, incluídos el Prior de San Agustín de Alicante y el Marqués de Peñacerrada, regaban con

-----

<sup>475</sup> En el memorial presentado al procurador patrimonial de la Bailía de Alicante se alude a las obras de alumbramiento emprendidas en el Colladet, donde "habían observado de tiempo inmemorial mucha humedad, y brollar a las veces una pequeña fuente en tiempos de abundancia que producía cenagares perjudiciales a la salud pública por cuya razón la Real Junta de Sanidad en cierto año hubo de acordar y acordó abrir cauce y dar salida a las aguas encharcadas que venían entonces á parar a la acequia propia del riego del exponente y demás interesados, quienes ultimamente obligados por la sequedad de la tierra en estos años motivada por la escasez y falta de las lluvias y entendiéndose autorizados por el Real Decreto de Su Majestad dado en el mes de Junio de 1816 en favor de la Agricultura e iluminación de Aguas, verificaron la inspección del sitio dicho el colladet por medio de un perito hidráulico y procedieron a sus costas a la cava indicada logrando por esta diligencia hacer brotar una copiosa fuente que produce un pie cubico de agua. Debe el exponente manifestar a V. S. que el terreno de que se habla se halla abandonado, abarrancado y herial de inmemorial, sin más propietario que el Real Patrimonio.(...)". ARV. Bailía E, nº 500, Apéndice, año 1819, fs. 1-1 vto.

anterioridad sus tierras con agua de la fuente de los Baños, con la que comunicaba la descubierta. Da idea de la tensión existente entre los marqueses y la bailía y la ciudad de Alicante el hecho de que a los primeros no les fuera notificada la realización de estas diligencias en una zona comprendida en el término de Aguas.

Así se desprende del auto dictado por el juez administrador de la Bailía de Alicante, D. Manuel Sorribas, quien, al ordenar el reconocimiento, fiteo y justiprecio del terreno a los peritos, exige que "rindan Declaracion con citación de los vecinos confinantes a la tierra y aguas, y respecto á que los Síndicos Procurador General y Personero de este Caserío lo son dos de la citada Ciudad de Alicante en atención á corresponder la jurisdicción á aquellos el precente Esscribano lo verificará a su regreso, evitándose por haora la del Ylustre Marqués del Bosque Supuesto Señor Territorial hasta instruir el Expediente con la Declaración que se manda (...)"<sup>476</sup>.

Los peritos enviados reconocieron la zona como de realengo, juzgando el establecimiento como beneficioso para la agricultura y el incremento de las rentas del Real Patrimonio, y sin ninguna incidencia negativa en relación al aprovechamiento de los pastos, montes y leñas<sup>477</sup>; sin embargo, D. Gil Mariano Pascual de Riquelme y Vergara, Marqués de Peñacerrada, señalaba, en su respuesta a la notificación, que el terreno y la fuente objeto de establecimiento eran en realidad propiedad de los

-----  
<sup>476</sup> Auto de fecha 30-VII-1819. Ibidem, fs. 10 vto.-11.

<sup>477</sup> Ibidem, fs. 8-9 vto.

Marqueses del Bosch<sup>478</sup>.

A tenor de esta declaración, se proclamaba el siguiente auto el 7-XII-1819: "Resultando por la notificación hecha al Marques de Peñacerrada que se supone Dueña de ese terreno a la Marquesa del Bosque, ignorándose tal circunstancia, tanto porque en el termino de Aguas, es Dueño directo el Real Patrimonio de muchas de las fincas que dicha Señora posee en dominio util, como por ignorarse tambien en esta Admistración en favor de aquella tal derecho; hagasele saber á la misma (...) sin perjuicio de los que legitimamente corresponden al Real Patrimonio, sin que se considere por este hecho como Señora Territorial, á menos no lo acredite documentalmente ante Tribunal Competente que si creyese asistirla aquel, lo dedusca en el del Señor Bayle General de este Reyno, (...)"<sup>479</sup>.

La marquesa consiguió también esta vez, presentando de nuevo como prueba el decreto de amparo de 12-VII-1816, sentencia favorable de la Real Audiencia. Así, el 29-X-1819 eran anulados por esta institución los establecimientos otorgados por el administrador de la Bailía de Alicante. A este respecto, cabe señalar como, en los casos en que el establecimiento de aguas subterráneas requería la perforación en un terreno propiedad de un tercero, el Real Patrimonio paralizaba los trámites de producirse la oposición de este último<sup>480</sup>. En este caso, sin embargo, no se pone solamente en duda la pertenencia o no de ese

-----  
<sup>478</sup> Ibidem, f. 10.

<sup>479</sup> Ibidem, fs. 10 vto.-11.

<sup>480</sup> ALBEROLA ROMA, A. (1983): Op. Cit., p. 102.

paraje a la Marquesa, sino también su derecho a las aguas subterráneas, y, por ende, su capacidad para establecerlas enfitéuticamente. Aunque el expediente parece quedar inconcluso, puesto que la subsiguiente protesta del administrador de la bailía de Alicante no tuvo ninguna respuesta, lo cierto es que, con posterioridad, aparece como propiedad de los Marqueses del Bosch y destinada al abastecimiento de los Baños una fuente conocida como la Cogolla<sup>481</sup>.

Como ha sido señalado con anterioridad, los titulares del señorío solariego poseían el dominio directo del agua de la mayor parte de las fuentes del término, a la vez que se habían reservado en plena propiedad una parte de las mismas. En este sentido, en la inscripción registral del establecimiento de los Baños se declaran como de uso y disfrute para el servicio de los mismos las fuentes o manantiales de San Ignacio (antes Colladet) y de los Baños, y para la bebida el manantial de la Cogolla: "El primero y el último de dichos manantiales pertenecen en su totalidad y absoluto dominio a la citada testamentaria (del Conde de Casas Rojas, D. José de Rojas y Canicia), y el de los Baños, después de utilizarlo para éstos, lo sobrante para el riego es dueño de 49 horas en cada tanda (no fijos los días) siendo o teniendo en las demas horas de agua del mismo la señoría directa"<sup>482</sup>.

-----  
<sup>481</sup> Registro de la Propiedad de Jijona, T. 276, Fca. 885, fs. 174-179 vto.

<sup>482</sup> Ibidem, f. 174.

Al margen de estos recursos mencionados, el Marqués del Bosch poseía el dominio directo de gran parte de las aguas de las fuentes y balsas del lugar. Tratando de consolidar ambos dominios y conseguir de este modo la plena propiedad de las mismas, D. José de Rojas y Canicia llevará a cabo, durante toda la segunda mitad del siglo XIX, una política de adquisición del dominio útil del agua de riego; política paralela a la que desarrollará en relación a la tierra. Este proceso de adquisición está motivado por la importancia que reviste este recurso para garantizar las producciones agrícolas, dada la precariedad e irregularidad de las precipitaciones. Sin embargo, hay que matizar que la puesta en regadío afecta solamente a pequeñas parcelas, inferiores generalmente a una hectárea (y con frecuencia muy alejadas de esa superficie), a tenor de los escasos recursos disponibles y las condiciones físicas de este espacio.

D. José de Rojas y Canicia había adquirido entre 1847 y 1888 un total de 963 horas 33 minutos de agua (ver cuadro XIV), distribuidas del siguiente modo<sup>483</sup>:

- Balsa Nueva: 306 h. 3 m. (79,70 % de la tanda)
- Balsa del Ciscar: 168 h. (43,75 % de la tanda)
- Balsa de los Campellos: 12 h. (3,33 % de la tanda)
- Balsa del Cañar: 62 h. 30 m. (17,36 % de la tanda)

-----

<sup>483</sup> El total de las horas de agua adquiridas ascendía a 957 h. 33 m. El resultado expresado representa la cantidad final de agua propiedad del Marqués, tras la permuta realizada de 12 horas de la balsa de los Baños por 18 horas de la balsa Nueva.

CUADRO XIV. RECURSOS HIDRICOS (HORAS DE AGUA) ADQUIRIDOS POR D. JOSE DE ROJAS Y CANICIA EN AGUAS DE BUSOT.

FECHA COMPRA	AGUA (HORAS)	BALSA	PRECIO	PRECIO/HORA	TRANSPARENTE	PROP-RESID	CARGAS	OBSERVACIONES
23-X-1847	3 h. 33 m.	Nueva	700 Rs. 175 pts	197.18 R/H 49.30 P/H	T. Yborra Cabod	-Aguas	señoría directa	
21-XI-1847	5 h. 24 m.	Nueva			A. Bernaben Yborra	-Aguas	señoría directa	previamente libre de cargas
26-X-1848	5 h. 24 m.	Nueva			E. Bernaben Yborra	-Aguas	señoría directa	previamente libre de cargas
6-XI-1848	24 h.	Nueva			J. Bernabe Arnau	-Aguas	señoría directa	previamente libre de cargas
							Censo de Climent	
15-II-1849	12 h.	Nueva	3.000 Rs. 750 pts	250 R/H 62.50 P/H	N. Protons Systems		señoría directa	
2-X-1849	5 h. 24 m.	Nueva			J. Bernaben Yborra	-Aguas	señoría directa	
2-X-1849	5 h. 24 m.	Nueva			J. Bernaben Yborra	-Aguas	señoría directa	previamente libre de cargas
							dos censos	venta en pago de deudas al Mg
20-X-1849	14 h. 30 m.	Nueva	3.000 Rs. 750 pts	206.90 R/H 51.72 P/H	G. Yborra Arnau	-Aguas	señoría directa	previamente libre de cargas
								pago de luiso
-1850	48 h.	Nueva					señoría directa	compra en subrogac. de casa
								vinculada vendida por el Mg.
19-II-1850	26 h. 24 m.	Nueva			R. Mallol Giner	lab.-Aguas	señoría directa	junto a 5 Th, censo:cao, 246R
11-V-1850	84 h.	Ciscar	1.317Rs 22Ms 329.41 pts	15.69 R/H 3.92 P/H	J. García Arnau	-Aguas	sin cargas	
10-X-1851	48 h.	Ciscar	750 Rs. 187.50 pts	15.62 R/H 3.91 P/H	R. Mallol Giner	lab.-Aguas	señoría directa	obtención licencia señorial
							1 vaso agua/día	satisfacción del luiso
12-XII-1853	3 h. 15 m.	Cañar			A. Cabod García	-Aguas	señoría directa	
							pens. anua 1r 26md	capital del censo 58rs. 28ms.
17-III-1854	6 h. 45 m.	Cañar			F. Sala	abogado	señoría directa	previamente libre de cargas
							pens. anua 10r 2md	parte censo 1.200 L (Arnaus)
26-XI-1854	2 h. 36 m.	Cañar			J. Baeza Cortés	-Aguas	señoría directa	venta condicional
							pens. anua 17md/h.	
26-XI-1854	6 h.	Baños	1.775 Rs. 443.75 pts	295.86 R/H 73.96 P/H	J. Arnau Vilaplana	-Aguas	señoría directa	venta condicional
							pens. anua 17md/h.	

Continuación del cuadro XIV

FECHA COMPRA	AGUA (HORAS)	BALSA	PRECIO	PRECIO/HORA	TRANSFERENTE	PROF-RESID	CARGAS	OBSERVACIONES
16-XII-1854	2 h.	Cañar			L. Arnau Yborra	-Aguas	señoría directa pens. anual 17md/h.	
19-VI-1856	12 h.	Cañar			F. Yborra García	-Aguas	señoría directa dos censos (enf-red) redimible: parte del de Arnau	
15-IV-1857	7 h.	Cañar			L. Arnau Yborra	-Aguas	señoría directa venta condic. Retroventa: 1350	
11-III-1858	6 h.	Baños			M <sup>a</sup> Torregrosa	Muchamiel	señoría directa pens. anual 3 rs.	
14-XII-1859	12 h.	Ciscar			A. Gómez	-Orán	señoría directa	
12-VIII-1861	24 h.	Sils			L. Giner Yborra	-Busot	señoría directa (?)	
28-VIII-1862	5 h.	Nueva			R. Mallol García	-Aguas	señoría directa	
29-VIII-1863	288 h.	Horno Vidrio			Hnos. Antón Giner	jorn-Much.	señoría directa censo red: cap 40L licencia señorial: condonación	
22-X-1863	6 h. 24 m.	Cañar			F. Baeza Cortés		señoría directa dos censos (enf-red) (precio + 2% int. arrend.)	
24-VII-1871	8 h.	Baños			Hnos Roca Ing. Pérez	-Orih.	señoría directa deducción del precio de venta dos censos redim. de los dos capitales de censo	
16-IV-1872	8 h. 48 h.	Baños Nueva	15.148 Rs. 3.787 pts	315.85 P/H 78.90 P/H	L. Pascual R. Gómez	prop-Murc.	señoría directa condonación luismo (+ tierra) sin cargas	
20-VI-1876	12 h. 48 h.	Nueva Ciscar			L. Pascual del Pobil	milit-Alic.	señoría directa varios censos	
15-VIII-1879	un tercio de 29 h. 30 m.	Cañar			M. Méndez Soláez y I. Méndez Lloris	prop-Alic. -Alic.	señoría directa reconoc. censos (1851): demanda créditos hipotec. ejecutiva por deudas: retrato	
22-VIII-1879	12 h.	Nueva			C. Sellés Yborra	labr-Aguas	señoría directa deducción del precio de capi- dos censos tales censos y pensiones vend.	
20-XI-1879	24 h.	Yborras			Hnos L. Arnau Yborra		señoría directa demanda ejecutiva por deudas: créditos hipotec. retrato: liquid deudas: laud. con	
12-VI-1880	2 tercios de 29 h. 30 m.	Cañar			R. Varó		señoría directa reconoc. censos (1851): demanda créditos hipotec. ejecutiva por deudas: retrato	
24-XII-1880	12 h.	Nueva			Ant <sup>a</sup> Arnau García J. Sala Brotons	-Aguas labr-Aguas	señoría directa cesión por deudas: caduca el 2 censos, deudas derecho de agua.	



Continuación del cuadro XIV

FECHA COMPRA	AGUA (HORAS)	BALSA	PRECIO	PRECIO/HORA	TRANSPARENTE	PROP-RESID	CARGAS	OBSERVACIONES
13-I-1881	1 h.	Baños	1.500 Rs. 375 pts	1.500 R/H 375 P/H	J. García Valor	labr-Busot	sin cargas	
23-XI-1881	5 h.	Nueva			Jos <sup>a</sup> Mallol García	-Aguas	señoría directa	reconoc. censos (1851); licenc.
9-XII-1881	36 h.	Nueva			J. Yborra Arnau	jorn-Aguas	dos censos (enf-Red)	condonac.pens. venc. 1/2 laud.
9-XII-1881	3 h.	Baños	800 Rs. 200 pts	266,67 R/H 55,57 P/H	L. García Yborra	prop-Aguas	señoría directa	condonac. luismo y licencia:
9-XII-1881	3 h.	Baños	800 Rs. 200 pts	266,67 R/H 55,57 P/H	L. García Yborra	prop-Aguas	señoría directa	condonac. luismo y licencia:
1-VII-1885	14 h.	Baños	7.000 Rs. 1.750 pts	500 R/H 125 P/H	A. Yborra Yborra	-Aguas	censo redimible	renuncia al aquafuente seca
15-IX-1885	13 h.	Nueva			J. Brotons García	labr-Aguas	señoría directa	condonac. luismo y licencia
28-X-1885	18 h.	Nueva	6.000 Rs. 1.500 pts	333,33 R/H 83,33 P/H	Hnos Yborra Alberola	labr-Aguas	señoría directa	sin cargas en índices y antec.
17-XI-1885	12 h.	Baños	6.000 Rs. 1.500 pts	500 R/H 125 P/H	P. Arnau Yborra	prop-Aguas	señoría directa	condonac. luismo y licencia
10-I-1886	1 h.	Nueva	250 Rs. 62,50 pts	250 R/H 62,50 P/H	P. Brotons García		señoría directa	reconocimiento señoría (1851)
10-I-1886	1 h.	Nueva	250 Rs. 62,50 pts	250 R/H 62,50 P/H	M <sup>a</sup> Brotons García	-Aguas	señoría directa	condonac. luismo-pens. vencid
12-IX-1886	12 h.	Baños	6.000 Rs. 1.500 pts	500 R/H 125 P/H	V. Yborra Giner	prop-Aguas	señoría directa	condonación del luismo
1-XII-1886	5 h.	Nueva	1.250 Rs. 312,50 pts	250 R/H 62,50 P/H	R. Arnau Yborra	viuda-Aguas	señoría directa	reconocimiento señoría (1851)
8-VI-1888	5 h.	Nueva	1.250 Rs. 312,50 pts	250 R/H 62,50 P/H	C. Mallol García		censo redimible	condonac. luismo-pens. vencid
8-VII-1888	1 h.	Nueva			C. Mallol García		señoría directa	sin cargas en 1 <sup>as</sup> inscripc.
							dos censos (enf-Red)	condonac. luismo-pens. vencid

**PUNTE:** Libros de inscripciones registrales de Aguas de Busot. Libros de translaciones de dominio de la Contaduría de Hipotecas. Elaboración Propia.  
Registro de la Propiedad de Alicante.

-Balsa de los Baños: 73 h. (16,44 % de la tanda)<sup>484</sup>

-Balsa de los Yborras: 24 h. (5,55 % de la tanda)

-Balsa de los Gils: 24 h.

-Balsa del Horno de Vidrio: 288 h.

Este proceso de adquisición del dominio útil del agua y la tierra en el lugar de Aguas fue continuado posteriormente por D. José de Rojas y Galiano, heredero del patrimonio vinculado de su antecesor radicado en Aguas; quien compró, a su vez, un total de 663 horas de agua 27 minutos (ver cuadro XV) durante el periodo comprendido entre 1892 y 1907. Su distribución es la siguiente<sup>485</sup>:

-Balsa Nueva: 58 h. 27 m. (15,22 % de la tanda)

-Balsa de los Baños: 106 h. (23,87 % de la tanda)

-Balsa del Cantal del Paller: 31 h. (8,61% de la tanda)

-Balsa de la Mata: 288 h. (66,67 % de la tanda)

-Balsa del Ciscar: 180 h. (46,87 % de la tanda)

-----  
<sup>484</sup> Esas 73 junto a las 49 vinculadas al Balneario representan el 27,48 % de la tanda).

<sup>485</sup> El total de horas de agua adquiridas por D. José de Rojas y Galiano no se corresponde enteramente con lo reflejado por el cuadro correspondiente, puesto que de alguna de estas compras se tiene noticia por referencias posteriores, en las que no se incluye ningún dato más. En conjunto, el Marqués del Bosque habría entrado en posesión de unas 1.567 horas de agua 36 minutos (al margen de las destinadas al balneario) según el Registro de la Propiedad; de las cuales 904 h. 9 m. procederían de la herencia de su padre D. José de Rojas y Canicia (cantidad que sin embargo no coincide con la señalada anteriormente en manos de este último, tal vez debido a un posible proceso de venta).

CUADRO XV. RECURSOS HIDRICOS (HORAS DE AGUA) ADQUIRIDOS POR D. JOSE DE ROJAS Y GALIANO EN AGUAS DE BUSOT.

FECHA COMPRA	AGUA (HORAS)	BALSA	PRECIO	PRECIO/HORA	TRANSPARENTE	PROP RESID	CARGAS	OBSERVACIONES
24-VIII-1891	18 h.	Cantal P.	2.700 pts	150 P/H	V. Brotons Gomis	labr Alic.		en pago de deuda (2.575 pts)
22-IX-1891	4 h.	Nueva	160 pts	40 P/H	R. Mallol		señoría directa	1ª sin cargas: reconoc. señoría
26-VI-1892	6 h.	Baños			Hnos. Giner Arnau	Aguas	señoría directa	
14-VII-1892	24 h.	La Mata			F. Giner Yborra	labr Jijona	libre de cargas	venta con tierra
14-VII-1892	156 h.	La Mata			P. A. Giner Yborra		señoría directa	previa licencia señorial: con-
	24 h.	Baños						donación luismo y resto dchos
12-XI-1892	96 h.	La Mata	2.000 pts	20.83 P/H	M. Arnau Yborra	-Aguas	señoría directa	venta con tierra
							censo redim: 3,68 pts	
27-VIII-1896	5 h.	Cantal P.			M. Sala Lloret	Orán	libre de cargas	venta con tierra
18-XI-1896	2 h.	Baños			Hnos. Brotons Yborra	Argel	señoría directa	
	1 h.	Nueva						
30-XII-1897	2 h.	Cantal P.	400 pts	200 P/H	J. Lillo Galvo	Aguas	libre de cargas	
4-II-1898	6 h.	Cantal P.	1.500 pts	250 P/H	V. Brotons Gomis	labr Alic.		
26-IV-1898	3 h. 45 m.	Nueva			D. García Yborra	prop-Aguas	señoría directa	
	30 h.	Ciscar					dos censos	
23-XII-1898	20 h.	Baños	2.000 pts	100 P/H	M. Brotons Yborra	Aguas	señoría directa	condonac. luismo: saldar deudas
23-XII-1898	10 h.	Baños	1.000 pts	100 P/H	P. Yborra Brotons	prop-Aguas	señoría directa	condonac. luismo: saldar deudas
23-XII-1898	6 h.	Baños	600 pts	100 P/H	V. E. Yborra Giner	labr-Aguas	señoría directa	condonac. luismo: saldar deudas
23-XII-1898	2 h.	Baños	200 pts	100 P/H	M. García Valor			en pago de deuda (234,18 pts)
26-IV-1899	3 h.	Baños	225 pts	75 P/H	J. L. Mallol García	-Aguas	señoría directa	reconocimiento de censo (1851)
5-XII-1899	12 h.	La Mata	375 pts	31.25 P/H	P. Yborra Giner	prop-Aguas	señoría directa	
	6 h.	Baños	690 pts	115 P/H			censo redimible	
5-XII-1899	6 h.	Baños	690 pts	115 P/H	M. Yborra Giner		señoría directa	
							censo redimible	
5-XII-1899	8 h.	Baños	920 pts	115 P/H	P. Yborra Brotons	labr-Aguas	señoría directa	
							censo redimible	
14-II-1900	3 h.	Baños	300 pts	100 P/H	V. Sala Brotons	labr-Aguas	señoría directa	
							censo redimible	
2-III-1900	45 m.	Nueva			A. García Yborra	labr Argel	señoría directa	
	6 h.	Ciscar					dos censos	
21-VI-1907	12 h.	Baños	1.080 pts	90 P/H	J. Yborra Giner	-Aguas	libre de cargas	

PUNTO: Libros de inscripciones registrales de Aguas de Busot. Libros de translaciones de dominio de la Contaduría de Hipotecas. Elaboración Propia. Registro de la Propiedad.

El estudio de las condiciones de venta del agua (precio, gravámenes, deducciones, ...) presenta diversas dificultades. En primer lugar, las referencias localizadas en los libros de la Contaduría de Hipotecas y del Registro de la Propiedad y en los protocolos notariales no son siempre completas; y, en segundo lugar, al producirse frecuentemente la venta conjunta de tierra y agua, estas fuentes recogen los datos globales de la misma (por este motivo los cuadros realizados aparecen incompletos en algunos casos, puesto que no reflejan la cuantía de las cargas o el precio de venta).

En un principio, estas adquisiciones fueron realizadas en condiciones muy ventajosas por los titulares del señorío solariego, puesto que del precio estipulado solían deducirse el importe del luismo, la cantidad satisfecha por la concesión de licencia señorial, y los capitales de censo que gravaban la finca. Rentas éstas que el Marqués había dejado de percibir o percibía con grandes dificultades, ante el rechazo de los enfiteutas a reconocer los derechos señoriales y satisfacer las pensiones derivadas de los mismos. Los cuadros XIV y XV evidencian como con motivo de las ventas al Marqués se reconoce la señoría directa, cuando en las inscripciones precedentes de las fincas en el registro, en las anotaciones de los libros de la contaduría o en los títulos presentados para la inscripción registral se declaran las fincas libres de cargas. También recogen como el agua procedente de una determinada balsa en unas ocasiones se declara libre de cargas y en otras gravada (ejemplo Balsa del Ciscar).

Por lo que respecta a las cargas (que desaparecen al producirse la consolidación de dominios), generalmente no suele expresarse la cuantía de los censos, ni especificarse su carácter. Cuando éste se detalla, el enfiteútico suele responder al agua vendida independientemente de la tierra; y en las ocasiones en que se declara uno redimible (acompañando o no al enfiteútico) la transacción ha afectado a la tierra y al agua conjuntamente.

A partir de los años setenta, y con mayor frecuencia durante la década de los ochenta, el marqués recurre a la condonación del derecho de luismo y de la licencia, y, en menor medida, a la de las pensiones atrasadas y los capitales de censo, tal vez como incentivo a las ventas, y ante la imposibilidad de su cobro, en unos momentos en que habrían podido prescribir ya todos los derechos de este tipo.

El interés del titular del dominio directo por obtener el útil y consolidar la plena propiedad tanto en lo referente al agua como a la tierra, se hace evidente en el proceso seguido para efectuar alguna compra. Así, en este sentido, se ha podido verificar el empleo del tanteo y el retracto en varios casos en los que había instado demanda ejecutiva por impago de deudas (generalmente previa adquisición a otros acreedores de los créditos hipotecarios impuestos sobre las fincas). En estas ocasiones, el marqués, sin efectuar ningún desembolso, además de lograr la plena propiedad, conseguía cobrar el derecho de luismo, las pensiones vencidas, los capitales de censo impuestos,

y la deuda y sus intereses correspondientes<sup>486</sup> (estos casos serán tratados más adelante con motivo de las adquisiciones de tierras y la situación existente durante la segunda mitad del siglo XIX). También se han dado ejemplos en los que, a pesar de suponer la venta una cesión en pago de las deudas contraídas a favor del marqués, se produce la condonación del luismo y otros derechos señoriales<sup>487</sup>.

Otro aspecto a señalar es la gran diferencia existente entre los precios de venta estipulados por hora de agua según la procedencia de la misma y el caudal de las diversas fuentes. Así, frente a cantidades próximas a las 4 pts/hora (16 rs/hora) en el caso de la fuente del Ciscar, a principios de la década de los cincuenta, se exigían, en fechas similares, cantidades bastante superiores a las 50 pts/hora (200 rs./hora) en el de las balsas Nueva y de los Baños. Se observa en general una tendencia

-----  
<sup>486</sup> Por ejemplo, con motivo de la adquisición de 29,5 horas de agua de la balsa del Cañar (junto con una parcela de tierra), a M. y T. Méndez en 15-VIII-1879. Registro de la Propiedad de Jijona. Fca. 44, Tomo 8, Lib. 1 Aguas, fs. 137-142; T. 143, Lib. 7 Aguas, fs. 2-5 vto y T.154, Lib. 8 Aguas, fs. 240-244 vto. Un caso similar es el de la compra a los herederos de L. Arnau Yborra de 24 horas de la balsa de los Yborras (o del Gasparet) en 26-XI-1879. Ibidem, Fca. 678, T. 174, fs. 192-196 vto.

<sup>487</sup> Por ejemplo, las 6 horas de agua de la balsa de los Baños vendidas por V. y F. Yborra Giner a D. José de Rojas y Galiano el 23-XI-1898. Registro de la Propiedad de Jijona, T. 352, Fca. 1.138, f. 8 y Fca. 1.144, f. 28. De igual modo sucedía con la venta, de 24 horas de agua de la misma balsa, efectuada por F. y A. Giner Yborra el 14-VII-1892. Así se pone de manifiesto en el siguiente testimonio recogido en una anotación registral: "El Excelentísimo Señor D. José de Rojas y Galiano en concepto de Marqués del Bosch inscribe su título de compra-venta del dominio útil de la finca de este número, y renuncia al cobro de los derechos que como tal Marques, podría reclamar de los vendedores por luismo y demás; cuya renuncia hace en concepto de Marqués del Bosch". Ibidem, Fca. 857, T. 276, fs. 184-186 vto.

ascendente de los precios del agua procedente de los diferentes manantiales hasta finales de la década de los ochenta y principios de la de los noventa, momento en que comienzan a experimentar un descenso; aunque hay que señalar la oscilación existente de un año a otro<sup>488</sup>. La hora de agua más cotizada, hasta la década de los noventa (aunque teniendo en cuenta que desconocemos las diferencias de caudal existentes entre las diversas fuentes del término), es la correspondiente a la balsa de los Baños (73,96 pts/hora -295 rs/h.- en 1854; 125 pts/h. -500 rs./h.- en 1886; 100-115 pts/h. en 1898-1899; o 90 pts/h. en 1907); puesto que a partir de esta fecha disminuyen la mayor parte de los precios (40 pts/h. de la balsa Nueva en 1892, cuando en 1849 se había situado en 62,50 o en 1872 en 78,90 pts/h.) exceptuando los fijados para el agua procedente de la balsa del Cantal del Paller, cuyas horas de agua siguen incrementando su valor (250 pts/h. establecidas en 1898, frente a las 150 de 1891 o las 200 de 1897). Una evolución similar presenta la balsa de la Mata, aunque con valores mucho más reducidos (20,83 pts/h. en 1892; 31,25 pts/h. en 1899).

Estos bienes, a pesar de su paulatina pérdida de valor (tanto por la desecación de la mayor parte de las fuentes -así ha sido puesto de manifiesto en páginas anteriores- como por el abandono de la actividad agrícola) fueron pasando de unos

---

<sup>488</sup> El caso más evidente son los 1.500 rs (375 pts) pagados por una hora de agua de la balsa de los Baños en 1881, cuando ese mismo año se habían pagado 266,67 rs. (66,67 pts) por la hora de agua de esa procedencia.

herederos a otros hasta la última Marquesa del Bosch, D<sup>a</sup> Teresa de Rojas y Roca de Togores, quien las donó en su gran mayoría a sus tres hijas, por iguales terceras partes proindiviso. El interés por mantener la propiedad de este recurso refleja la gran importancia que adquiere en esos momentos.

2.4.-La subordinación jurisdiccional a la ciudad de Alicante. Conflictos por la delimitación del señorío territorial y el realengo.

El señorío de Aguas de Busot se configura como un señorío de carácter exclusivamente territorial. La subordinación jurisdiccional del mismo a la ciudad de Alicante es apuntada por todos los cronistas e historiadores contemporáneos de la ciudad; quienes recogen el privilegio otorgado por Alfonso X el 19-VIII-1252, por el que se concedían a la ciudad como aldeas y términos suyos varias poblaciones de su entorno (Novelda, Aspe el Viejo y el Nuevo, Monforte, Agost, Busot y Aguas), con todos sus lugares, castillos, rentas, derechos, montes, fuentes, ríos, pastos, etc.

El ejercicio de la jurisdicción implicaba el nombramiento anual de los oficiales del gobierno municipal, así como el control de la actividad económica del lugar de Aguas. Este tipo de competencias en un término de señorío, aunque únicamente solariego, llevaría aparejada la génesis de conflictos



entre la ciudad y el titular del mismo; por ejemplo en lo relativo al establecimiento de regalías, tierras o aguas, o a la propiedad de estas últimas en una zona en la que los límites entre señorío y realengo no estaban delineados con claridad.

La localización de varias actas capitulares del siglo XVIII (posteriores a la derogación de los fueros y, por tanto, insertas ya en el nuevo sistema de organización municipal, establecido a semejanza del modelo castellano) ha permitido la verificación de este hecho. En ellas se recoge el procedimiento de designación de alcaldes y otros oficiales municipales para los diversos lugares de su jurisdicción; aunque hay que tener en cuenta el funcionamiento de la ciudad con instrucciones provisionales hasta la publicación en 1747 del Reglamento que organizaba la vida económica ciudadana y la constitución del gobierno municipal<sup>489</sup>.

Así, durante el primer cuarto del siglo XVIII y en el caso de los municipios de mayor entidad, eran los oficiales cesantes los que debían "proponer los sujetos buenos vasallos del rey y hábiles para servir en este año los empleos de alcaldes y regidores de dicha villa (Muchamiel)". Una vez efectuada la propuesta en el ayuntamiento alicantino, era el cabildo el

---

<sup>489</sup> ALBEROLA ROMA, A. (1984): *Jurisdicción y propiedad ...*, p. 159.

encargado de realizar el nombramiento<sup>490</sup>. En el caso de poblaciones de menor entidad, era el cabildo el que designaba directamente a las personas que desempeñarían esos cargos municipales: 2 alcaldes en San Juan (primer y segundo alcalde) y uno en Benimagrell y Aguas. Una vez librados los nombramientos, eran enviados al gobernador de Alicante, quien a su vez los remitía al gobernador y capitán general del reino quien debía dar su aprobación. Obtenida ésta, los nuevos oficiales debían acudir al ayuntamiento "a jurar de cumplir bien y fielmente con la obligación de sus encargos"<sup>491</sup>.

Los nombramientos eran de carácter anual, pero se ha comprobado como podían ser desempeñados por un mismo individuo en años sucesivos (aunque no se han encontrado periodos superiores a los dos años). Este es el caso de V. Poveda en Muchamiel en 1714 y 1715 (comentado ya en una nota anterior) o el de Francisco Arnau en Aguas durante el bienio 1715-16<sup>492</sup>. Esto mismo había

-----

<sup>490</sup> AMA. Arm 9, Lib. 5, f. 14. En el cabildo de 12-I-1715 fueron propuestos para formar el ayuntamiento pedáneo de Muchamiel (constituído por un alcalde y 4 regidores) 2 personas para el cargo de alcalde y 7 para el de regidor. El acuerdo adoptado fue el siguiente: "Teniendo muy presente el haber cumplido con la obligación de su encargo en el año antecedente, V. Poveda, alcalde, y que tiene la dirección y prudencia que pide dicho empleo y que con ella, y con gran actividad, y celo y sin exortaciones, hizo efectiva la contribución de dicho año 1714 y que con la misma ha hecho el reparto del presente quartel, sin haber dado lugar a quejas; por todos estos justos motivos y procedimientos del dicho Poveda que el señor gobernador acredita en su carta de 10 de los corrientes le nombraron, y continuaron el nombramiento de Alcaldes de dicha Villa, para que le sirva y ejerza en este corriente año, y de Melchor Alberola quien le sirva en las ausencias y enfermedades del dicho Poveda, y por regidores a ...".

<sup>491</sup> AMA. Arm. 9, Lib. 4, f. 13.

<sup>492</sup> AMA. Arm. 9, Lib. 5, f. 14 y Lib. 6, f. 8.

sucedido también en Aguas durante el periodo 1713-1714, puesto que "siendo un pago de 6 a 7 heredades, y que solo tiene otros tantos vecinos, no hallándose otro afecto a su Majestad que Blas Vizco que lo es actualmente, le nombraron sus señorías nuevamente por tal Alcalde de dicho Pago ..."<sup>493</sup>.

El 8-I-1722, en una carta enviada al ayuntamiento de Alicante (ante la falta de instrucciones contenidas en la Real Orden de febrero de 1719 con respecto a las elecciones de oficiales municipales en los "arrabales"), se atribuía a la ciudad de Alicante el nombramiento de los alcaldes y regidores de todos los lugares con ayuntamiento de su jurisdicción. Por lo que se refiere a los lugares pedáneos, sin ayuntamiento, es el "Justicia mayor", el corregidor, el responsable del nombramiento de "Assesor, Justicias, o Lugarthenientes de los arrabales, contornos de S. Juan, Venimagrell y Aguas y Baranes", puesto que "estos ministros sólo son unos comissionados del corregidor ; y siendo unos Arrabales sin Ayuntamiento no creo pueda ser perjuicio de Vs"<sup>494</sup>.

De igual modo, al estar el lugar de Aguas comprendido en un término de realengo, el control de la actividad económica del lugar y las regalías era competencia del Real Patrimonio, y por tanto de la Bailía de Alicante. La concesión de establecimientos de hornos y molinos (regalía reservada al monarca desde la conquista del reino), tiendas, etc fue asumida

-----  
<sup>493</sup> AMA. Arm. 9, Lib. 14, f. 13, Cabildo 27-I-1714.

<sup>494</sup> AMA. Arm. 11, Lib. 46, Cartas recibidas año 1722.

en algunas ocasiones por el ayuntamiento de la ciudad<sup>495</sup>. Así por ejemplo, por resolución capitular de fecha 2-XII-1726 era concedido a Lorenzo Arnau el establecimiento de un horno de vidrio en la partida de Aguas, "con calidad de no poder usar de las leñas de este termino, ... ni lugares de la huerta para el consumo de dicho horno"<sup>496</sup>.

También fue solicitado, aunque bastante tardíamente, el establecimiento de una tienda de comestibles. La carencia de actividades de este tipo evidencia la escasa entidad poblacional del lugar, así como la inexistencia de un interés señorial que sin duda hubiera potenciado su instalación. Un acta capitular de fecha 28-V-1756 recogía la petición efectuada en este sentido por Josep Yvorra, como alcalde pedáneo de Aguas y en nombre de todos sus vecinos:

suplican que por ser la maior parte destos vesinos gentes pobres, y muy distantes de otras poblaciones, carecen de todo género de comestibles para el alimento corporal por el motivo de no aver en dicha partida suxeto obligado, a el abasto, de pan, vino, aseite y demas vituallas, presisas para el sustento, del querpo. Por cuios motivos, suplican a V. S. se sirvan permitir en dicha partida, se aga arrendamiento, de una Tienda como en otras poblaciones, obligando, a quien la

-----  
<sup>495</sup> ALBEROLA ROMA, A. (1984): *Jurisdicción y propiedad ...*, pp. 357-362.

<sup>496</sup> AMA. Arm. 9, Lib. 16, f. 188.

arrendase, a que no le faltase nada de lo presiso, en ella, que siempre que le fatare incurra en la pena a VS bien vista y que esta i el arrendamiento de dicha tienda sirva para aiuda de mantener i socorer las mas precisas urgencias de la iglesia= Cuio favor esperan de la piedad de V.S., (...) "<sup>497</sup>.

La solicitud fue aceptada, aunque los trámites fueron bastante dilatados en el tiempo, puesto que hasta el mes de noviembre de 1766, diez años después de la presentación del memorial en el ayuntamiento de Alicante, el alcalde mayor y gobernador de la ciudad no recibió la respuesta del Conde de Aranda desde Madrid. Efectivamente, en la carta fechada el 27-XI-1766 se expresaba lo siguiente: "no solo hallo por combeniente que a estos moradores se les permita tener tienda publica de comestibles, y poderla arrendar como es practica en los demas pueblos , si tambien por muy precissa, y util estta providencia a los mismos vezinos y concurrentes a los Baños de Busott, para su promptto surtimiento, y que deva quedar a beneficio de los vezinos el producto del arriendo de dichas tiendas, para ayuda de sostener las cargas de la desentte manutencion de la Yglesia a que están obligados, sin que essa ciudad pueda tener justo derecho para esta utilidad; en cuya inteligencia providenciara Vuestra Excelencia desde luego lo condusente a que assí se executte, y no se impida a dichos

-----

<sup>497</sup> AMA. Arm. 9, Lib. 46, f. 73.

moradores, el establecimiento de otra tienda, según, y en los terminos que la tienen y vivan los demás pueblos, quedando a salvo el conocimiento que compete a la Justicia Ordinaria de essa ciudad y la económica jurisdicción que tuviere el Ayuntamiento para el arreglo de pesos y medidas, y demás providencias de esta esfera"<sup>498</sup>.

El auto subsiguiente fue promulgado en Alicante, por el gobernador y corregidor de la ciudad y su partido, el 13 de diciembre de dicho año; siendo recogido en el expediente instado por el síndico procurador general de la ciudad de Alicante.

En relación a este hecho, todavía durante el primer tercio del siglo XIX seguía otorgando el arrendamiento de la tienda de Aguas, tras el remate del mismo en pública subasta, el fabriquero y depositario de fondos de la iglesia de Aguas. Desconocemos las condiciones estipuladas inicialmente, así como las modificaciones introducidas con el tiempo; puesto que las escrituras de arrendamiento no las recogen, remitiéndose a ellas únicamente. El arrendatario se obligaba a cumplir los capítulos establecidos, abasteciendo de todo el género señalado en los mismos, a presentar fiador (tanto para garantizar el surtido de la tienda como el pago del precio del arrendamiento<sup>499</sup>) y a entregar las 50 libras de bestreta que pasaban de unos arrendatarios a otros al finalizar el arrendamiento. Menos común es la exigencia de que el arrendatario disponga, durante la

-----

<sup>498</sup> AMA. Arm. 1, Lib. 42, f. 130.

<sup>499</sup> ANJ. Prot. Not. de F. Miralles, P. 26, año 1827, fs. 16 vto-17 vto.

primavera, de otra tienda en los Baños, con el mismo surtido de la de Aguas y en la casa que le fuera señalada para ello, para el abastecimiento de los que acudieran al balneario en esa época<sup>500</sup>. Tener pan de panizo o cebada durante todo el año fue una de las condiciones requeridas en el arrendamiento de la tienda, taberna, fleca, panadería y cubillo, ubicado todo conjuntamente en la casa destinada a ello. Se advertía, además, que si algún vecino deseaba amasar esa clase de pan debería venderlo a 2 maravedíes menos por libra del precio existente en la tienda panadería<sup>501</sup>.

Predomina (en atención a las escasas escrituras localizadas) el arrendamiento bianual, otorgado tanto a vecinos de Aguas como de Busot. Sólo en un caso el contrato fue efectuado por un año<sup>502</sup>. El precio del arrendamiento presenta oscilaciones importantes, dado que estaba condicionado por el valor del remate en la subasta pública. Las cantidades fijadas, que entre 1817 y 1828 se situaron entre las 254 y las 326 libras anuales<sup>503</sup>, eran satisfechas, de modo general, en dos plazos (uno el 24-VI, y otro el 31-XII); aunque en un caso fue exigido su pago mensualmente<sup>504</sup>.

-----  
<sup>500</sup> ANJ. Ibidem, P. 26, fs. 16 vto.-17 vto.

<sup>501</sup> ANJ. Prot. Not. de Vicente Alberola, P. 28, año 1828, fs. 36 vto.-38.

<sup>502</sup> ANJ. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu, P. 25, año 1817, fs. 5-6 vto.

<sup>503</sup> 1817: 310 L. 10 s.; 1818-19: 252 L. 10 s.; 1827-28: 352 L. 10 s.; 1829-30: 245 L.

<sup>504</sup> ANJ. Prot. Not. de V. Alberola, P. 28, año 1828, fs. 36v.-38.

La subordinación jurisdiccional del lugar de Aguas a Alicante es mentada y utilizada por el ayuntamiento de la ciudad en los pleitos suscitados contra los Marqueses del Bosch. Así sucedía, por ejemplo, en el entablado entre 1826 y 1828 por la posesión de los Baños y el ejercicio de la jurisdicción en los mismos (nombramiento del personal, posesión de las llaves del recinto, instalación del escudo de la ciudad). En un pedimento presentado por el ayuntamiento de Alicante con motivo de esta cuestión, y en relación al derecho que tenía sobre los Baños y la posesión en que se encontraba antes de ser despojado por los Marqueses del Bosch, se expone lo siguiente:

"En fuerza de estos antecedentes y privilegios, fue desde su expedición, y lo ha sido y es hasta el día parte de su territorio y termino el caserio y Pago de Aguas, ejerciendo en él la plena jurisdicción la Real Justicia de Alicante, y el Gobierno Económico el Ilustre Ayuntamiento mi parte, que en principios del siglo anterior continuaba Alcaldes Pedaneos, estableció una tienda de comestibles para que el producto de su arriendo sirviera para los gastos del culto Divino de su Iglesia proyecto que fue aprobado por el Excelentísimo Señor Presidente del Consejo real y Supremo; y por último, ha celebrado el mismo Ayuntamiento los abastos de Carnes, arreglo de pesos y medidas y todo lo demás concerniente a las funciones de



amotacenia, y gozado los vecinos del aprovechamiento de pastos comunes, sin contradicción de persona alguna"<sup>505</sup>.

La falta de competencias jurisdiccionales en Aguas había supuesto para los Marqueses la imposibilidad de gozar de las regalías, y, por tanto, de controlar la actividad económica del lugar; puesto que el establecimiento de hornos, molinos o tiendas entre otros, era llevado a cabo por el ayuntamiento y la bailía de Alicante. Sin embargo, intentarán lograrlo haciendo prevalecer su posición y su condición de señores directos del lugar, al oponerse a los establecimientos solicitados al Real Patrimonio por otros enfiteutas de Aguas y Busot y obtenerlos para sí.

En este sentido, los Marqueses del Bosch habían conseguido poseer la mayor parte de los hornos construidos en Busot (de vidrio, pan, tejares, ...); hornos que subarrendaba junto a otras regalías (como ya se comentó en páginas anteriores). Sin embargo, el último establecimiento lo obtuvo tras grandes dificultades. Establecido el horno inicialmente por la marquesa en 1779, D<sup>a</sup> Catalina Pascual y Vergara, fue anulado por el Real Patrimonio al considerar que este tipo de concesiones no eran competencia señorial, sino una regalía real. El enfiteuta lo solicitó de nuevo al Real Patrimonio, aunque la marquesa se

---

<sup>505</sup> AMA. Arm. 9, Lib. 121, s/f. Cabildo de 28-IX-1827.

hizo con él ejerciendo el derecho de fadiga<sup>506</sup>.

También después de algunos inconvenientes, obtuvo D. Antonio Canicia y Pascual de Ibarra, en 1790, el establecimiento de un horno de pan en la partida de Aguas, con la imposición de una pensión anual de 3 libras a satisfacer por San Miguel de Septiembre. Solicitado en 1788, fueron paralizados los trámites al denunciar un labrador de Aguas la pretensión del marqués de ubicar dicho horno en un terreno de su propiedad. La licencia fue concedida una vez alcanzado un acuerdo entre las dos partes y tras la renuncia del denunciante a ejercer otro tipo de acción<sup>507</sup>.

Un proceso similar fue desencadenado con motivo del establecimiento de un molino harinero en el lugar de Aguas, en una zona próxima al realengo. Diversos vecinos de Aguas solicitaron al Real Patrimonio la concesión de licencia para construir un molino harinero en el cauce del barranco o río de Aguas, en el punto en que las aguas que fluyen por él "se congregan y pasan a regar las tierras del partido de Aguas de Abajo" (zona conocida como Hoyas de Compañy y Moñinos o partida del Río), así como del establecimiento de medio jornal de tierra inmediato al mismo<sup>508</sup>. Los trámites fueron iniciados el 14 de diciembre de 1763 por D. Lorenzo Pérez (párroco de la iglesia de Aguas) y Francisco Yvorra (diputado de justicia de ese mismo

-----

506 ALBEROLA ROMA, A. (1984): *Jurisdicción y propiedad ...*, pp. 380-381.

507 Ibidem, pp. 396-397.

508 ARV. Bailía, E, Exp. n° 2.242, año 1806.

lugar), obteniendo dicho establecimiento el visto bueno de los expertos delegados por el Real Patrimonio; quienes adscribieron el terreno al realengo y señalaron los efectos positivos que reportaría "a todo el común de aquella partida, evitándose el trabajo o incomodidad de ir a moler a los molinos de Villajoyosa, Busot y Orcheta, distantes dos leguas de dicha partida"<sup>509</sup>.

A comienzos del año siguiente (23-I-1764), fue también solicitado por otro grupo de labradores y vecinos del lugar (Joseph y Juan Arnau, y Pedro, Lorenzo y Juan Arnau de Gabriel), quienes alegaron su conveniencia para el común y ofrecieron destinar los beneficios del mismo (una vez deducidos los gastos de construcción, mantenimiento y conservación) al pago de las 80 libras que anualmente debía entregar el común al cura parroquial. El fiscal patrimonial se pronunció a favor de la segunda solicitud, asumiendo la propuesta de las 80 libras, aunque incluyendo en la concesión del establecimiento a F. Yvorra, quien sin embargo renunció a su pretensión, manifestando las dudas que le inspiraban los verdaderos propósitos de los demás interesados, y exigiendo por ello la inclusión en la escritura de cesión de una serie de compromisos<sup>510</sup>. Tras el acuerdo alcanzado por ambas

-----  
<sup>509</sup> ARV. Ibidem, f. 4 vto.

<sup>510</sup> Además de la escritura de obligación con las condiciones impuestas, exigía la finalización de la construcción en un plazo de tres o cuatro meses y que le fueran abonados los gastos ya efectuados en materiales y maestros de obras (según tasación de peritos), así como que las costas del expediente fueran asumidas por el resto de interesados en el establecimiento. ARV, Ibidem, fs. 15-16 vto.

partes<sup>511</sup>, fue concedido el establecimiento por auto pronunciado en Alicante el 6-IV-1764.

Sin embargo, la marquesa inició, en cuanto tuvo noticia de ello, las diligencias necesarias para oponerse a dicha concesión; puesto que consideraba que era a ella a quien correspondía conceder dichas licencias, a tenor del dominio directo que tanto ella como sus antecesores habían poseído en el territorio de Aguas, "(...) cuyos moradores terratenientes son feudatarios de particulares Canones, bajo los cuales, y con el derecho de luismo, y fadiga les fueron establecidos a los primitivos pobladores que han sido tambien censualistas, de que permanecen diferentes cargas (...) "<sup>512</sup>. El procurador de D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Luisa Bosch y Bosch (Marquesa del Bosch y Condesa viuda de Villafranqueza) presentó un memorial en el que rechazaba todo lo practicado hasta la fecha y prevenía a los moradores de Aguas para que acudiesen a la señoría en relación a la construcción del molino, reservándose el derecho de su representada a edificarlo a sus expensas gestionando su funcionamiento, o bien "concurrir con los fines" presentados por los interesados. Exigía igualmente la revisión de lo manifestado por los peritos, puesto que el terreno elegido pertenecía al señorío, al estar comprendido en la

-----  
<sup>511</sup> En la escritura de convenio, otorgada el 17-III-1764, se acordó prorratar las costas ocasionadas por los autos, el salario de los maestros de obras y la preparación de los materiales de construcción (3 L 14 s. en total por estas dos últimas partidas) en seis partes, una de las cuales correspondería a F. Yvorra. Además, el establecimiento correría a cargo de los interesados en él. ARV, Ibidem, fs. 32-35.

<sup>512</sup> ARV, Ibidem, fs. 42-44 vto.

adquisición realizada por D. Alfonso Martínez de Vera en 1609 a D. Francisco de Rocamora; y defendía ser competencia de la marquesa, y no del Real Patrimonio, en dicho ámbito los cauces de las aguas, tanto manantiales como de avenida<sup>513</sup>. A este respecto exponía lo siguiente:

"Y para edificar, y construir el molino ha de preseder el que se obtenga y conseda su permiso, al modo que si hubiese de levantarse en un río navegable había de otorgarle el Príncipe á cuyo Dominio perteneciese: si publico del senado, ó Ayuntamiento de quien fuese el Alveo, ó Cause por donde fluyen las aguas á menos que se pensase su construcción sobre ellas, porque siendo el uso común á qualquiera es licito edificarlo sobre tablas ó barcas, que no toquen ni penetren el suelo, ó terreno: y si a la orilla ó ribera del Río se ha de buscar el dueño á quien pertenesca para el otorgamiento de la lisencia"<sup>514</sup>.

Ante esta intervención, el fiscal patrimonial reconoció el derecho de la marquesa al territorio de Aguas, estimando que se debía "sobreceder en el establecimiento pretendido", y responsabilizando a los interesados en el mismo de las costas causadas<sup>515</sup>. Tras el nuevo reconocimiento del terreno se

-----  
<sup>513</sup> ARV. Ibidem, fs. 54-59 vto.

<sup>514</sup> ARV. Ibidem, f. 58 vto.

<sup>515</sup> Memorial de fecha 8-V-1764. ARV, Ibidem, fs. 61-64 vto.

admitieron como pertenecientes al patrimonio señorial el medio jornal de tierra destinado a la balsa, acequia y ensanche del molino, y los terrenos de los que procedían las fuentes de las que manaba el agua que fluía por la rambla (a excepción de la fuente del Castellet y de otras dos que nacían dentro del cauce); mientras que se consideraba realengo el punto de construcción del molino, por hallarse dentro del cauce<sup>516</sup>. En un nuevo memorial, el procurador señorial reconocía el establecimiento de molinos como regalía de carácter real, y exponía lo siguiente:

"(...) que sin embargo de la ninguna urgencia ni presicion, que se ofrese en el levantamiento del Molino por si en adelante paresiese a la Ylustre Marquesa mi parte su construcción, y fábrica reconociendo, que el permiso para ello toca en las regalías de S. M. que no ha pretendido, ni piensa disputar ni vulnerar, ni menos que el Real Patrimonio sufra el menor quebranto por razon de esta Ynstancia, y oposicion al pretenso establecimiento que solo mira á la conservacion de sus derechos en el continente de los heredamientos está pronta á contribuir á la Real Hacienda aquel tanto anual que se estime en el prudente arbitrio de Vuestra Excelencia para corresponderle á la manera que los demas lo avían de hacer entendiendose con solo el título del citado permiso, quedando en libertad de la

---

<sup>516</sup> ARV. Ibidem, fs. 96 vto.-99.

Ylustre Marquesa la ocnstrucción o no del molino, y que sirva para que en adelante resuelva por mas combeniente a sus intereses. (...)"<sup>517</sup>.

A este respecto, el fiscal patrimonial afirmaba que "siendo cierto que el establecer molinos y ornos de pan cozer, es regalía peculiar del Principe con innibicion á qualquiera de poderlos hazer aunque sea en sus propias tierras y aguas (...), supuesto que siempre le es indispensable obtener formal establecimiento de esta Superintendencia, y responder el canon o pencion que se asignase, y sujetase á los demas gravámenes y cargas de Luismo y fadiga"<sup>518</sup>; solicitando, además, la concesión del establecimiento y la reclamación de las costas a los Arnau y a F. Yvorra.

Finalmente, por auto publicado en Alicante el 19-IV-1765, fue otorgado el establecimiento del molino a la marquesa por si decidiera empezar su construcción, con la obligación de satisfacer un canon de 5 sueldos anuales el dia de San Miguel, con el resto de derechos de la enfiteusis. Este auto recogía igualmente lo dispuesto en relación a la pertenencia al señorío o al realengo del territorio afectado por el establecimiento, y la condena al resto de los aspirantes al mismo a pagar las costas ocasionadas por el expediente iniciado al

---

<sup>517</sup> ARV. Ibidem, fs. 115-115 vto.  
<sup>518</sup> ARV. Ibidem, fs. 118 vto.-119.

suponer de realengo las aguas y el medio jornal de tierra (las del establecimiento y de la inspección ocular debían ser a expensas de la Marquesa)<sup>519</sup>.

Son evidentes los grandes beneficios que obtenían de estas concesiones mediante su arrendamiento, dadas las pequeñas cantidades que les eran impuestas por el Real Patrimonio en concepto de canon<sup>520</sup>. El recurso al arrendamiento de estas instalaciones era una práctica frecuente entre los caballeros y nobles de Alicante, principales enfiteutas del Real Patrimonio en la ciudad y su entorno. Estos optaban en algunas ocasiones por la gestión directa, empleando en ellos a personal de su confianza, a tenor de las grandes ganancias que reportaba en momentos de carestía de pan (gracias al aumento de los precios) y de la seguridad de mantener un cierto nivel de ingresos durante todo el año<sup>521</sup>.

Ya comentamos en apartados anteriores la utilización del arrendamiento en la gestión de las regalías de Busot. En Aguas de Busot, los marqueses emplearan el mismo método para la explotación de los establecimientos de este tipo de actividades

-----  
<sup>519</sup> ARV. Ibidem, fs. 119 vto-121 vto.

<sup>520</sup> Generalmente 5 sueldos en el caso de hornos y molinos, aunque en ocasiones fueron fijadas cantidades superiores. Tras la realización del cabreve por la bailía de Alicante a finales del siglo XVIII, y la promulgación de la Real Cédula de 1783, los nuevos establecimientos otorgados fueron gravados con cantidades situadas en torno a las 5 libras; aunque esta orden concedía una cierta flexibilidad, puesto que contemplaba la fijación de cantidades superiores en las ciudades y bastante más reducidas en los pueblos y pequeños lugares. ALBEROLA ROMA, A. (1984): *Jurisdicción y propiedad* ..., p. 395.

<sup>521</sup> ALBEROLA ROMA, A. Ibidem, pp. 380-388 y 393-397.



logrados del Real Patrimonio. El horno de pan fue arrendado, generalmente, a vecinos del lugar, según se desprende de la serie localizada<sup>522</sup>, y con contratos a corto plazo. El tiempo de arrendamiento oscila entre los 6 y los 4 años, predominando este último periodo (con posterioridad a la abolición del régimen señorial). Sólo en un caso se ha localizado un contrato concedido por un periodo inferior, 2 años. La renta extraída de los mismos presenta ciertas oscilaciones, aunque dentro de una tendencia general de descenso desde 1808<sup>523</sup>. Su cuantía se sitúa entre las 32 y las 60 libras, a satisfacer "por medias anualidades anticipadas" (cada 21-22 de febrero y 21-22 de agosto); con la excepción del otorgado en 1851, en el que el pago fue estipulado en un solo plazo y por anualidades vencidas (por San Miguel).

Un hecho a destacar es la continuidad de Lorenzo Llorca, labrador y vecino de Aguas, como arrendatario del horno; puesto que obtiene este contrato desde 1808 a 1833, como mínimo. En 1851 ya aparece otorgado a favor de Cristobal Yborra Arnau y Cristobal Yborra Giner, padre e hijo, también labradores y vecinos de Aguas.

-----  
<sup>522</sup> Esta serie abarca desde 1808 a 1851, aunque existen importantes lagunas en ella. Los datos proceden de protocolos notariales recogidos en el AHPA (Prot. Not. de F. Aracil, P. 94, año 1808, fs. 58 vto.-60 vto., y año 1809, fs. 76-78 vto; y J. Cirer y Palou, P. 502, año 1851, 2<sup>o</sup> Tomo, fs. 1.608-1.610 vto.) y ANJ (Prot. Not. de Tomás Brotons y Bernabeu, P. 25, año 1818, fs. 7-8; F. Miralles, año 1826, P. 26, fs. 50 vto-51 vto; y V. Alberola, P. 28, año 1829, fs. 14-14 vto.).

<sup>523</sup> 1808-1814: 60 libras; 1818-1822: 40 libras; 1826-1828: 32 libras; 1829-1833: 40 libras; y 1851-1855: 34 libras anuales.

Las condiciones impuestas en estos contratos responden a la tónica general señalada para todos los arrendamientos. Las obras de acondicionamiento y reparación y el mantenimiento de los bienes arrendados por cuenta del arrendatario (enlosado del horno, conservación en buen estado de la boca del horno y su tapadera, reparación de los daños en caso de incendio), sin derecho a ninguna compensación por ello; la devolución en buenas condiciones de las instalaciones y el instrumental entregado; la entrega de copia franca de la escritura o la exigencia de fianza como garantía del pago del arrendamiento son ejemplos de ello. Se advierte, además, la denegación de cualquier tipo de deducción porque el arrendamiento se hace a todo riesgo, y se prohíbe el subarrendamiento sin previo permiso del otorgante.

Un capítulo interesante es el que hace constar que "si llegase el caso que en el espresado poblado de aguas altas, durante el tiempo de este arrendamiento se costruyese algun horno nuevo en el mismo día que se ponga este corriente, quedará sin efecto este arrendamiento, sin estar obligado el Lorenzo Llorca a continuarle por el tiempo que reste"<sup>524</sup>. Este hecho nos refleja lo que podía representar obtener el monopolio de estas actividades y desempeñarlas sin ningún tipo de competencia; puesto que ante la posibilidad de instalar otro horno se plantea la anulación del arrendamiento.

---

<sup>524</sup> ANJ. Prot. Not. de F. Miralles, P. 26, año 1826, fs. 50 vto-51 vto.; y V. Alberola, P. 28, año 1829, fs. 14-14 vto.

Otro aspecto a señalar es la entrega, como adelanto, de parte de la renta estipulada en el mismo acto de otorgamiento de la escritura, tal vez como garantía del pago de la misma o por necesidades económicas de la administración señorial.

Con el resto de establecimientos poseídos por el marqués parece suceder lo mismo que con los hornos de pan. Un ejemplo de ello es el arrendamiento del molino harinero "de llacer", situado en la partida de Canelles (San Juan). Este contrato fue otorgado en 1809, por un periodo de 4 años y un precio anual de 120 libras -a satisfacer por tercias anticipadas de 40 libras cada una (cada 17 de enero, 17 de mayo, y 17 de septiembre)-, más la entrega de 4 gallinas por Santo Tomás, a favor de Josef Puerto, molino y vecino de esa misa partida, por D<sup>a</sup> Catalina Pascual y Vergara<sup>525</sup>.

En otro orden de cosas, el hecho de que en el paraje de Aguas entrasen en contacto, sin una delimitación clara, el realengo alicantino y los dominios señoriales de los Marqueses del Bosch daría lugar a una serie de conflictos importantes, en torno a la propiedad de esos terrenos y la facultad para otorgar establecimientos de tierras en ellos, entre la ciudad de Alicante y los titulares del señorío territorial.

La existencia de tierras francas de señorío comprendidas en el término de Aguas ha sido puesta de manifiesto en los expedientes promovidos tanto por el Real Patrimonio contra

-----  
<sup>525</sup> AHPA. Prot. Not. de F. Aracil, P.94, año 1809, fs. 76-78 vto.

diversos labradores y moradores de Aguas por no respetar los derechos enfitéuticos<sup>526</sup>, como por los mismos enfiteutas para solicitar el establecimiento o el suplemento de títulos de aquellas tierras ocupadas y roturadas sin licencia<sup>527</sup>.

Sin embargo, numerosos establecimientos otorgados por el Real Patrimonio, una vez efectuado el reconocimiento de peritos y calificado el terreno como realengo, fueron revocados con posterioridad, al ser denunciados como usurpaciones por los marqueses, y verificarse su pertenencia al dominio señorial. Así sucedió, por ejemplo, con el establecimiento de 12 jornales de tierra con sus vesantes, situados "en la Montaña llamada del Pla de Cantal del Paller y el Pla de Pérez", concedido el 24-II-1736 por el gobernador corregidor y juez subdelegado de rentas a favor

-----

<sup>526</sup> Así, en 1804, Manuel Sala de Brotons (labrador, vecino de Aguas) era denunciado por el procurador patrimonial de la bailía de Alicante por haber adquirido unas tierras de realengo (situadas en la partida del Barranco Hondo), establecidas en enfiteusis y gravadas con un cánon de 1 sueldo 6 dineros por jornal, sin satisfacer los derechos de luismo y sin solicitar la licencia para la venta. ARV. Bailía, E, Exp. 2.136, año 1804.

<sup>527</sup> En 1805, Lorenzo García de Gabriel (labrador y vecino de Aguas) se acogía a la Real Orden de 1-VII-1805 (orden que concedía 60 días de plazo para declarar los rompimientos de tierras efectuados en terreno realengo sin licencia, y obtener así el suplemento de títulos) para que le fuera otorgada la escritura de suplemento de títulos de las 6 tahullas que roturó ilegalmente en la zona de las Hoyas de Senia en 1802. Dicha escritura la obtuvo en 1807, tras la valoración de peritos (en 15 libras) y la consiguiente imposición de un canon de 1 sueldo 6 dineros por jornal. El mismo proceso, y con el mismo fin, siguió Vicenta M<sup>a</sup> Lledó (viuda y vecina de Barañes) respecto a las 8 tahúllas que roturó, también sin licencia, en la misma zona, y que, valoradas en 24 libras, fueron gravadas con un canon similar. Lorenzo Arnau de Lorenzo (labrador y vecino de Aguas) obtuvo el suplemento de títulos de forma idéntica, aunque de una superficie de tierra muy superior, 76 tahúllas, situada en la partida del Plá o Foyeta de Vic y valorada en 148 L. ARV. Bailía E, Exp. 2.181, s/f.

de Pedro Antonio Yborra (vecino de Aguas), con la obligación de respetar los derechos de la enfiteusis y satisfacer anualmente por San Miguel, en concepto de canon, la cantidad de 2 s. 6 d. (2,5 d/j). El establecimiento fue anulado por el auto de fecha 14-VI-1736 -tras la realización de nuevo de las diligencias de reconocimiento del terreno<sup>528</sup> y la comprobación de su inclusión en el patrimonio de los marqueses-, "reservando Sus derechos de Dominio En la referida Heredad y tierra de Barañes con sus confines, terminos y linderos a la Ylustre Marquesa del Bosch, (...), y por el fraude que resulta contra el dicho Yvorra se el condena En las costas y se le aperciba no perturbe la pertinencia de reales haveres baxo las penas de derecho (...)"<sup>529</sup>.

No cabe duda de que a los labradores y vecinos de Aguas les debía resultar menos gravoso ser enfiteutas del Real Patrimonio que de los Marqueses del Bosch; aunque en estos establecimientos más tardíos solían imponerse en ambos casos censos en metálico (en los establecimientos de la primera mitad del siglo XVIII parece ser inferior el cánón exigido por el Real Patrimonio -por ejemplo los 2,5 d/j anteriores-, pero en los efectuados a finales de siglo los cánones parecen ser similares a los impuestos en Busot y Aguas por los titulares del señorío territorial -18 d/j-).

-----  
<sup>528</sup> Efectuadas por el escribano de rentas reales , D. Juan Bautista Campos (abogado fiscal de rentas patrimoniales), y estando presentes Salvador Arnau (alcalde de Aguas), Roque Castelló (escribano), Pablo Navarro y Pedro Antonio Yborra.  
<sup>529</sup> ARV. Bailía, E, Exp. n° 2.242, fs. 48-52 vto.

Las quejas señoriales ante las usurpaciones de tierras efectuadas por los vecinos de Aguas en sus dominios -ocupaciones ilegales refrendadas en ocasiones por las licencias concedidas por el Real Patrimonio- fueron bastante frecuentes. A este respecto, en un memorial presentado por el procurador de D<sup>a</sup> Luisa Bosch y Bosch en 1754, son calificadas de "cautelosas diligencias" las solicitudes de establecimiento requeridas por los vecinos del lugar al Real Patrimonio, "conspirando a defraudar el antiguo Dominio y Poseción que la Marquesa tiene, y en que se halla por si, y sus Causantes de mas tiempo de ciento, y cinquenta años del territorio, sus montes, Vertientes, y aguas, estableciendolas con Censos, Luismos y fadigas percibiendo, y cobrando sus Canones, y Penciones, exercitando los lexitimos actos de Señoria directa para reparar los perjuicios (...)"<sup>530</sup>.

Esta situación motivaría, a raíz del expediente abierto sobre el etablecimiento de un molino harinero en una zona de señorío que los enfiteutas y el Real Patrimonio consideraron de realengo, la petición de la marquesa (en 1764) de efectuar el apeo y deslinde de todo el heredamiento de Aguas y Barañes al tiempo que se llevaba a cabo el reconocimiento del área por peritos. El fiscal patrimonial rechazó la propuesta, posponiendo su realización a la finalización de las diligencias de reconocimiento, alegando la cautela y precisión con que debía ser emprendida la demarcación (creación de una comisión), y

---

<sup>530</sup> ARV. Ibidem, f. 54.

responsabilizando de sus costes a la titular del señorío<sup>531</sup>.

El procurador señorial incidiría de nuevo en la importancia del deslinde, tanto por la usurpación de tierras efectuada por algunos particulares en Aguas como en lo relativo a los lindes con la villa de Villajoyosa, donde "cautelosamente se han introducido tambien varios vezinos de aquella estableciendo terrenos incultos en perjuicio de los Derechos e indubitado Dominio de la Ylustre Marquesa (...)"<sup>532</sup>.

A pesar de la insistencia señorial, el 19-XII-1764 fue promulgado en Alicante un auto que denegaba la realización del amojonamiento y deslinde, compeliendo a la marquesa a acudir a las instancias correspondientes para obtener su autorización. La interesada se vio obligada, por tanto, a replantear su petición, solicitando simplemente un reconocimiento del interior de sus dominios que permitiera comparar las tierras roturadas con los establecimientos concedidos por ella<sup>533</sup>.

En dicho reconocimiento se comprobó la existencia de zonas cultivadas declaradas tanto de señorío como de realengo. Tras la presentación de títulos exigida, fueron expuestas 16 escrituras de establecimiento otorgadas por el Real Patrimonio en Aguas, entre 1740 y 1760 y de una extensión diversificada, en unos casos superior a las 20 hectáreas, y en otros inferior a 1 hectárea (aunque con un claro predominio de las parcelas situadas

-----  
531 ARV. Ibidem, f. 78.

532 ARV. Ibidem, fs. 85-86.

533 ARV. Ibidem, fs. 86 vto.-93.

entre las 5 y las 9 ha.)<sup>534</sup>.

El procurador patrimonial, expresando sus dudas sobre la veracidad de las declaraciones de peritos favorables a la marquesa, apoyó la concesión del dominio útil a los enfiteutas encausados, quienes manifestaron su desconocimiento de los derechos señoriales sobre esas tierras. D<sup>a</sup> Luisa Bosch, por su parte, solicitó, el 3-III-1766, la declaración de posesión de los terrenos disputados y el reintegro de frutos, costas y perjuicios, pues "por las Declaraciones de los expertos nombrados por las partes (...) se hallan demarcadas las porciones de terreno injustamente establecidas, y que consideraron los mismos comprendidas en el Heredamiento de Aguas y Barañes conforme titulo de Compra, que tiene mi parte exhibido (...); y en estos terminos los establecimientos, que en un modo clandestino han obtenido, deven desestimarse como conseguidos con falsa Causa, y aparentando en el Juzgado de Vuestra Excelencia el ningun perjuicio que se seguia á tercero, quando en realidad era notorio el que se seguia á mi parte como que con ellos tiraron á privarle del uso, goze, y Dominio de las tierras, que á sus antecesores vendio D. Pedro Maza allias D. Francisco Rocamora (..) "<sup>535</sup>.

El expediente quedó interrumpido por el abandono del pleito por parte de los enfiteutas encausados y las dificultades del fiscal patrimonial para presentar la probanza de testigos,

-----  
<sup>534</sup> ARV. Ibidem, fs. 129-225.

<sup>535</sup> ARV. Ibidem, fs. 231-233 vto.



dada la negativa de los vecinos y labradores de Aguas a declarar en el tribunal, "(...) siendo el motivo, seguro se me ha asegurado el temor, ó respeto á la parte otra por ser los mas ó todos de los recidentes en dicho Pago sus feudatarios, y aun los mismos posehedores litigantes, que con igual causa han abandonado este pleito"<sup>536</sup>. Sin embargo, el 21-V-1768 fue pronunciada la sentencia con un fallo favorable a la marquesa, puesto que 11 de los 16 establecimientos fueron declarados comprendidos en el heredamiento señorial y por tanto revocados, y sólo 5 de los establecimientos otorgados por el Real Patrimonio fueron tenidos por válidos y sobre terreno realengo<sup>537</sup>.

Por otra parte, algunos labradores y vecinos de Aguas se negaron a reconocer el dominio directo de los Marqueses del Bosch sobre todo el territorio de Aguas<sup>538</sup>, acusandoles de pretender usurpar las tierras francas de señorío y extender sobre ellas el dominio directo. En estos expedientes los enfiteutas requieren la presentación, por parte del marqués, de aquellos privilegios o títulos que acrediten su señorío territorial, puesto que éste únicamente desea "la opresión para

-----  
<sup>536</sup> ARV. Ibidem, fs. 273-275.

<sup>537</sup> Sentencia dictada por D. Guillermo, Conde de Baillecourt, Mariscal de campo de los Reales Ejércitos y Gobernador político y militar y Juez Superintendente subdelegado de las Aduanas, rentas reales y contrabando de Alicante y su departamento, con acuerdo de D. Francisco Alvaro, abogado de los Reales Consejos, Alcalde Mayor y Teniente Corregidor, su Asesor en ella. ARV. Real Audiencia, Escribanías de Cámara, fs. 75-77 vto.

<sup>538</sup> Así fue puesto de manifiesto en páginas anteriores en relación al pleito suscitado por D. Rafael Canicia y Vaillo de Llanos contra varios enfiteutas de Aguas, ante su negativa a satisfacer los derechos de luismo y reconocer la señoría directa. Real Audiencia, Escribanías de Cámara, año 1799, Exp. n.º 23.

subyugar a los labradores á reconocimientos, y pechos nocivos y perjudiciales para sus intereses", sin justificar sus pretensiones<sup>539</sup>.

Los enfiteutas alegan como causa de esta situación la inexistencia de una clara delimitación de los lindes de la propiedad señorial: "por falta de fitas no puede saberse hasta donde se extiende la heredad denominada heredamiento de la Marquesa del Bosque, hallándose por los Confines que ella pretende muchas tierras francas de censo, contribucion, que fueron adquiridas a sus anteriores particulares sin solicitar licencia (...)"<sup>540</sup>. También recurrirán a la exclusión del marqués en las diligencias de deslinde de términos, realizadas en 1771, entre la ciudad de Alicante y Orcheta, Villajoyosa y Relleu, para rechazar la señoría directa<sup>541</sup>, aunque no lograrán sus propósitos.

Durante la primera mitad del siglo XIX, los titulares del dominio directo conseguirán una sentencia de la Real Audiencia que les confirmará de modo definitivo en la posesión de las aguas de los Baños de Busot, de su caserío, y del resto de aguas, balsas y terrenos del término de Aguas; sentencia que aducirán en pleitos posteriores con resultados siempre positivos. Así, en 1816, en las diligencias promovidas en Alicante por el procurador patrimonial contra Gregorio Yvorra (labrador de Aguas y arrendatario de la Marquesa del Bosch) por

-----

<sup>539</sup> ARV, Ibidem, fs. 41-43 vto y 51 vto.-59.

<sup>540</sup> ARV. Ibidem, fs. 117-131 vto.

<sup>541</sup> ARV, Ibidem, 2ª parte (apelación), fs. 37-44.

usurpación de terrenos realengos en el pago de Aguas (paraje del baladrar) -una vez confirmada dicha acción por el reconocimiento de peritos-, posteriormente proseguidas por el subsíndico del ayuntamiento de Alicante<sup>542</sup>, D<sup>a</sup> Catalina Pascual y Vergara obtenía sentencia favorable tras presentar copia de la providencia de la Real Audiencia de fecha 12-VII-1816, providencia que reza del tenor siguiente:

"se mantiene y ampara y en caso necesario se reintegra á la Marquesa del Bosque, Condesa de Torellano, como Administradora de los Bienes y Rentas de su marido el huso, goce, y Posesión de disponer de las aguas de los Baños de Busot, de su caserio, de las demás aguas, Balsas y terrenos de dicho termino cuya posesión no perturben la ciudad de Alicante, su Junta de Sanidad, Administrador de la Baylía ni otra persona, ni inoven en cosa alguna, reponiendo qualquiera novedad al estado anterior á ello, baxo la Pena de dóscientas libras, con reserva á estos para que usen del derecho que entiendan tener para lo contrario en el juicio Plenario de posesión ó de propiedad, sin que por esta Providencia se le impida á la Junta de Sanidad hacer analizar las aguas quantas veces estime conducentes en beneficio de la Salúd publica (...)"<sup>543</sup>.

-----  
<sup>542</sup> ARV. Bailía, E, Exp. 404, Apéndice, año 1816.

<sup>543</sup> ARV. Ibidem, fs. 18-18 vto.

La usurpación de terrenos de realengo por los Marqueses del Bosch fue un hecho denunciado por los administradores de la bailía de Alicante, quienes además criticaron el amparo de la Real Audiencia, en algunas ocasiones, a los intereses señoriales. En el caso anterior ya se ha demostrado la existencia de posturas contrapuestas por parte de estas dos instancias, así como la parcialidad del ayuntamiento, bailía y justicia de la ciudad de Alicante en estos asuntos. Este conflicto es reflejado en un fragmento de un memorial presentado por el administrador de la Bailía de Alicante, D. Manuel Sorribas, con motivo de la disputa por la pertenencia de las tierras y fuente del paraje del Colladet<sup>544</sup>. En él se hace constar la plena propiedad que la Marquesa del Bosch tiene de dos haciendas situadas en el caserío de Aguas, y como ésta abortó las acciones instadas por él diez años atrás para acreditar las propiedades señoriales y delimitar definitivamente el realengo, consiguiendo incrementar el territorio situado bajo su dominio directo:

"(...) y quando el Expediente se hallaba en el estado mas crítico, en favor del Ramo, pudo conseguir por medio de una horden del Señor Yntendente de aquel tiempo arrancar las diligencias de este Tribunal las que ni se sabe su paradero, ni el giro que han podido llevar; de cuyo echo ha resultado hacerse dueña directa

-----  
<sup>544</sup> ARV. Bailía, E, Exp. n° 500, Apéndice, año 1819.

la dicha Ylustre Marquesa de una escesidísima porción de terreno, y para ebitar en algun tanto qualesquier reclamacion del Real Patrimonio en el momento se dirigió a la sitada Real Audiencia con el fin de que le ampare en la posesión de unos derechos fundados en sus primitibas dos haciendas; unico apoyo y baxo del qual ocultaba sus miras de usurpacion al expresado Real Patrimonio (...)"<sup>545</sup>.

No cabe la menor duda de que la sentencia de fecha 12-VII-1816, mencionada con anterioridad, tuvo una gran repercusión en la cuestión suscitada en torno a la posesión y jurisdicción sobre los Baños, uno de los principales y más extensos conflictos mantenidos entre la ciudad de Alicante y los titulares del señorío solariego de Aguas. Así se pone de manifiesto en el siguiente fragmento:

"al paso que la de la Señora Marquesa en las aguas y terrenos de que consiguió el amparo, se halla sometida a contradicciones irrefutibles que se deducirán con oportunidad, a fin de que repuesto el Real Patrimonio en el pleno goce de sus derechos en las mencionadas aguas y territorio, puedan disfrutar de ellas los

---

<sup>545</sup> ARV. Ibidem, fs. 12-13.

particulares a quienes ahora de se ahuyenta baxo el falso pretexto de un supuesto dominio con que se cohorrecta esta escandalosa usurpacion"<sup>546</sup>.

Ya han sido comentados algunos aspectos sobre los Baños a través de las aportaciones de los cronistas, quienes atribuían la posesión de los Baños, y la jurisdicción sobre ellos, a la ciudad de Alicante, y la propiedad del caserío y demás edificios adyacentes a los mismos a los marqueses. En 1766, la ciudad de Alicante, en contestación a las preguntas que le fueron formuladas de acuerdo a la orden general del intendente (de octubre de 1765), menciona la existencia en su término de aguas y baños medicinales propios, buenos y bastante concurridos, aunque con instalaciones incómodas y deterioradas y ciertas carencias en lo relativo a la asistencia y al cuidado de la salud<sup>547</sup>.

D. Antonio Canicia Pascual, Marqués del Bosch, como "Dueño y Posehedor de las Casas inmediatas a los Baños", había reconocido, en un memorial presentado el 23-II-1788, a la ciudad de Alicante como propietaria de los mismos, solicitando además permiso para efectuar una amplicación de las instalaciones existentes construyendo 10 casa más dentro del recinto<sup>548</sup>. El proyecto fue aprobado en la sesión capitular de 3-III-1788, aunque con la condición de que la llave del recinto permaneciera

-----  
<sup>546</sup> AMA. Arm. 9, Lib. 121, s/f, cabildo 28-IX-1827. Por cortesía de D. Miguel Giner Gonzalez.

<sup>547</sup> AMA. Arm. 12, Lib. 21, fs. 6 vto.-12.

<sup>548</sup> AMA. Arm. 9, Lib. 83, s/f, cabildo de 29-II-1788.

en manos del bañero nombrado por la ciudad (pudiendo el marqués reservarse otra)<sup>549</sup>. La obligación otorgada por el titular del señorío de Aguas (vecino y de la clase de nobles de la ciudad de Alicante) en 7-IV-1788 en favor de la ciudad, a raíz de la concesión de la licencia para construir casas en la partida de los Baños, refleja la asunción por éste del pleno dominio de la ciudad de Alicante sobre los Baños:

"Atento a lo cual y de reconocer su Señoría conforme la expresada resolución, por no ser su ánimo perjudicar en modo alguno los derechos de dominio absoluto que considera tiene dicha ilustre ciudad en el precitado Baño, se ofrece anuente y propicio de que la llave de la puerta del expresado circuito, la haya y deba tener la persona encargada de Dicho Baño por la ciudad, a reserva de poder tener otra su señoría o al sugeto que en su nombre cuide y rija las expresadas casas como propias suyas, y en estos términos ofrece llevar a efecto la obra de su indicado proyecto reconociendo por Dueño y Señor absoluto del citado Baño a la referida Ilustre Ciudad, sin que por el hecho de la verificación de dicha obra, pueda ni deva conceptuarse Su Señoría con derecho ni acción alguna a dicho Baño, si únicamente a sus casas, y promete no contravenir en manera alguna el permiso que en dichos términos se le

---

<sup>549</sup> AMA. Ibidem, Cabildo de 3-III-1788.

ha concedido, y tiene ofrecido en el presente documento, y que lo mismo observarían sus herederos y sucesores, quienes caso de intentar lo contrario, no sean ohidos en juicio ni extrajudicialmente. (...)"<sup>550</sup>.

A pesar de esta escritura y el reconocimiento implícito de la posesión de los Baños por el ayuntamiento de Alicante, lo cierto es que tanto los Baños como el caserío adyacente pasaron a ser propiedad de los Marqueses del Bosch. Este proceso que fue configurándose de hecho paulatinamente, obtuvo su primera confirmación legal con el Real Decreto de la Real Audiencia de fecha 12-VII-1816, promulgado a raíz de la queja presentada por la Marquesa del Bosch ante la intromisión del ayuntamiento de Alicante a través de la Junta Municipal de Sanidad, que pretendía analizar las aguas de los Baños pretextando la pertenencia de los mismos y el territorio anexo a dicha ciudad<sup>551</sup>.

Las posiciones en cierto modo antagónicas de la Real Audiencia y la Bailía y el Ayuntamiento de Alicante son puestas de manifiesto en un fragmento del memorial presentado por la Marquesa en el que se relataba el suceso de 1816: "Fue tan cumplida la justificación que mi principal produjo en crédito de los referidos extremos y del despojo causado por el Procurador del Baylio de Alicante en el uso y distribución de las aguas a

-----  
<sup>550</sup> AMA. Arm. 8, Lib. 61, fs. 46-47, Libro de arrendamientos y fianzas (1787-1788).

<sup>551</sup> AMA. Arm. 9, Lib. 121, s/f, Cabildo de 29-XI-1827. Por cortesía de D. Miguel Giner Gonzalez.



instancia de aquel Administrador y su Ayuntamiento que por su merito la justificacion de V. E. en decreto de doce de julio del propio citado año mil ochocientos diez y seis no pudo menos que amparar, mantener y en caso necesario reintegrar a mi principal en el uso (...)".

Posteriormente, se desató un nuevo enfrentamiento entre la ciudad de Alicante y la Marquesa del Bosch, puesto que esta última arrancó de los Baños, en 1826, el escudo y las armas de la ciudad, símbolo del dominio que ésta ejercía sobre los mismos (también despidió a los bañeros designados por el ayuntamiento alicantino)<sup>552</sup>. La ciudad interpuso un pedimento solicitando la devolución de los Baños tras el despojo realizado por la marquesa, alegando los privilegios reales concedidos a la ciudad que incluían el pago de Aguas en su término (sometiéndolo a la jurisdicción de la justicia de la ciudad y al gobierno económico del Ayuntamiento); la promoción realizada por el ayuntamiento del establecimiento de los Baños minerales de Busot y la construcción de las pilas y el edificio que los encierra; la colocación del escudo de armas de la ciudad y la facultad de nombrar bañeros para la asistencia de los enfermos; el reconocimiento efectuado por D. Antonio Canicia y Pascual de los derechos de la ciudad de Alicante o la inexistencia de establecimientos otorgados a los marqueses en ese sector, entre otras razones<sup>553</sup>.

-----  
<sup>552</sup> AMA. Arm. 9, Lib. 121, s/f, Cabildo de 10-VII-1827.

<sup>553</sup> AMA. Arm. 9, Lib. 121, s/f, Cabildo de 28-IX-1827.

Tras la probanza de testigos, fue promulgado en Alicante un auto de fecha 24-VIII-1827, por el que el Alcalde Mayor y Teniente Corregidor de la ciudad establecía que "se ampara y en caso necesario reintegra al expulsado Real Ayuntamiento en la posesion del Baño de Busot; en la prerrogativa de tener fixado el Escudo de las Armas sobre la puerta del Edificio que lo circuye, nombramiento de Bañeros y Bañeras, y uso de la llave para los fines estipulados en la Escritura autorizada por la presencia del Escribano Juan Francisco Perez Cuevas en siete de Abril del año pasado 1788; entendiendose todo bajo las formalidades establecidas por derecho para casos de igual naturaleza: En cuia consecuencia hagase saber a la parte de la referida Señora Marquesa del Bosch, que en lo sucesivo no inquiete, moleste, ny perturbe a aquella corporacion en el particular, pues en dicha forma se le exigira la multa de cincuenta libras en que desde ahora se le condena, con la aplicacion ordinaria; (...)"<sup>554</sup>.

La Marquesa promovió, a raíz de esta sentencia, un expediente pretendiendo el establecimiento de los Baños de Busot por el Real Patrimonio (a lo que el Ayuntamiento se opuso)<sup>555</sup>, e interpuso igualmente un recurso ante la Real Audiencia el 28 de agosto de ese año, en el que se quejaba de la actitud del Ayuntamiento y la Justicia de Alicante (paralización del proceso por el Alcalde Mayor permitiendo al ayuntamiento, mientras tanto,

-----  
<sup>554</sup> AMA. Ibidem, Cabildo de 28-IX-1827.

<sup>555</sup> AMA. Ibidem, Cabildo de 9-X-1827. Por cortesía de D. Miguel Giner Gonzalez.

la presentación de una demanda de reintegro al margen de estas diligencias)<sup>556</sup> y justificaba su posesión de los Baños presentando las sentencias de la Real Audiencia que confirmaban este hecho.

Finalmente, la Real Audiencia fallaba a favor de la marquesa, promulgando el 27-V-1828 la sentencia del tenor siguiente: "se deja sin efecto todo lo obrado por el Alcalde Mayor de la Ciudad de Alicante a instancia del Ayuntamiento del mismo, y manda se repongan las cosas al ser y estado que tenían antes que el Diputado D. Ignacio Pelegrin practicara las gestiones de que se quejo la Marquesa del Bosch, sin perjuicio de que verificado use dicho Ayuntamiento de la reserva contenida en el decreto de doce de julio de mil ochocientos diez y seis, (...) "<sup>557</sup>.

A pesar del cumplimiento de la Real Provisión de la Audiencia (arranque del escudo de la ciudad y entrega de llaves

-----  
<sup>556</sup> "(...), pues a pesar de haber transcurrido tantos días, no ha recaído providencia al escrito ultimo privando a mi principal con tales arbitrios e ilegales procedimientos de los medios de defensa que le facilitan Las Leyes, mientras por otra parte prevalido el Ayuntamiento de la proteccion que le dispensa aquel Alcalde Mayor, ha presentado una demanda de reintegro por separado de las Diligencias instructivas que quedan referidas, ofreciendo justificación de su pretendida posesion, y solicitando que por su merito se reponga el Escudo de Armas, procediendo con tanta precipitacion como que se pidio y acordó la habilitacion de la noche del día diez y ocho del presente mes, habiendose en la misma recibido la justificacion ofrecida todo sin audiencia de mi principal". ARM, Ibidem, Cabildo de 29-XI-1827.

<sup>557</sup> AMA. Arm. 9, Lib. 122, s/f, Cabildo de 4-VII-1828. Por cortesía de D. Miguel Giner Gonzalez.

de los Baños)<sup>558</sup>, el cabildo alicantino tomó el acuerdo de solicitar la apertura del juicio en el Consejo de Castilla<sup>559</sup>, criticando abiertamente la carestía y las deficientes instalaciones y servicios de los Baños<sup>560</sup>. Sin embargo, parece que dicha solicitud no prosperaría, puesto que el establecimiento de los Baños sería inscrito en el Registro de la Propiedad por los titulares del antiguo señorío territorial.

La delimitación del término particular de Aguas del de la ciudad de Alicante no tendría lugar hasta la consumación de la segregación de este lugar y la constitución de un ayuntamiento totalmente independiente de la misma. A pesar de que la independencia jurisdiccional de Alicante y el establecimiento de

-----  
<sup>558</sup> AMA. Ibidem, Cabildo de 4-VII-1828. No sin las dificultades derivadas del rechazo de los asesores designados a actuar como tales.

<sup>559</sup> AMA. Ibidem, Cabildo de 20-VI-1828. Por cortesía de D. Miguel Giner Gonzalez.

<sup>560</sup> "(...) pues reynando la arbitrariedad por parte de los dueños que se titulan de este establecimiento y de los arrendadores que como en el presente año lo han tenido en el exorbitantisimo precio de doce mil reales vellon, de consiguiente el absurdo que se observa de llevar diariamente Diez y once reales por unas zahurdas mas bien que casas, desprovistas de toda comodidad y precaucion de la salud de los dolientes que no van alli a divertirse sino a buscar el restablecimiento de aquella; que ademas de esto los abastecedores de la carne son los mismos arrendadores, que no estando a la vigilancia de esta corporacion, muy rara o ninguna vez son de la calidad que deven ser y a los precios regulares, sino muy crecidos estos, cuyo exceso se nota en todos los demas articulos de que forzosamente se necesita en el tiempo de los Baños: Que igualmente es un perjuicio notorio el que el primitivo baño que havia y se ha llamado siempre Baño de la Ciudad, y servía para los pobres se haya separado del Ayuntamiento, pues siendo de la dueña de los Baños y comprendido en los demas del arriendo, solo se permitira usar de el a los que por tener casas alquiladas acomode a los Bañeros (...). AMA. Ibidem, Cabildo de 4-VII-1828.

un alcalde ordinario y dos regidores, con el resto de dependencias necesarias, había sido solicitado en 1805 por el común de vecinos de Aguas<sup>561</sup>, las diligencias de deslinde no fueron iniciadas hasta 1837 -ordenadas por la Diputación Provincial en fecha 9-XI-1837-<sup>562</sup>. El desinterés y la oposición del ayuntamiento alicantino hacia esta segregación se hace evidente en la actitud adoptada por éste; actitud que motivó el envío de continuas requisitorias por la Comisión (para que se informara suficientemente y notificara su disposición a realizar la demarcación del lugar) y la gran dilación experimentada por el proceso. La ciudad con estas diligencias pretendía conservar los derechos que pudiera tener sobre la Cogolla y los Baños, obtener la libertad de venta de artículos de consumo en los mismos y la inclusión en su término de los caseríos de Aguas Bajas y Barañes, y mantener los lindes con Villajoyosa, Orcheta, Relleu y Busot<sup>563</sup>; lo que obtuvo tras la configuración del acta de deslinde en 21-III-1841. Entre otros aspectos, se establecía la comunidad y reciprocidad de aguas, pastos, leñas, caminos, veredas y resto de aprovechamientos, y el ayuntamiento de Aguas se comprometía a no gravar los artículos de consumo en los Baños, permitiendo su libre venta, y a respetar los acuerdos alcanzados entre la ciudad y los municipios colindantes, a la vez que reconocía "la propiedad que desde tiempo inmemorial tuvo

-----  
<sup>561</sup> AMA. Arm. 1, Lib. 79, f. 59. (Reales Provisiones).

<sup>562</sup> AMA. Arm. 14, Carpeta sobre la segregación de San Vicente y Aguas. Oficio del Ayuntamiento<sup>to</sup>. consistorial de Aguas, 17-VII-1838.

<sup>563</sup> AMA. Ibidem, escrito del comisionado del Ayuntamiento de Alicante al mismo de fecha 23-III-1841.

el de Alicante a las Pilas del Baño y agua de la Cogolla, de que fue desposeído por el Marques del Bosque", obligándose "a no contrariar cualquiera acción contra el detentador"<sup>564</sup>.

3.-La situación posterior al decreto de abolición de señoríos. La importancia del proceso de adquisición del dominio útil en la conservación del antiguo patrimonio señorial.

Con anterioridad al decreto de 6-VIII-1811, los titulares del señorío solariego de Aguas habían mantenido algunos enfrentamientos con varios de sus enfiteutas en torno a los derechos derivados del dominio directo. Ya han sido mencionados los conflictos suscitados entre los marqueses, el ayuntamiento y la bailía de Alicante, y diversos vecinos de Aguas por la adscripción al señorío o al realengo de ciertas heredades. En 1797, D. Rafael Canicia Vaillo de Llanos instaba un expediente contra Lorenzo Arnau y otros labradores de Aguas ante la negativa de éstos a satisfacer el luismo y a reconocer la señoría directa de los Marqueses del Bosch sobre sus heredades y el resto de derechos enfitéuticos<sup>565</sup>.

-----

<sup>564</sup> AMA. Ibidem, Acta de deslinde del lugar de Aguas.

<sup>565</sup> ARV. Real Audiencia. Escribanías de Cámara, año 1799, Exp. n° 23. El desarrollo de este pleito y los argumentos aducidos por las dos partes han sido ya mencionados en páginas anteriores.

En un primer momento, el pleito tomó un cariz adverso para el dueño territorial del lugar, puesto que D. Rafael Echevarri, alcalde mayor y teniente corregidor de Alicante, por auto de fecha 16-X-1799 absolvía a los enfiteutas de la demanda del mencionado señor<sup>566</sup>. No mejoró tampoco la situación tras la interposición de apelación en la Real Audiencia, puesto que, por sentencia hecha pública el 18-VII-1801, era confirmado el auto pronunciado en 1799<sup>567</sup>. Finalmente, la presentación de nuevas pruebas (varias escrituras en las que antiguos poseedores de las fincas en litigio reconocían los derechos señoriales) motivó la promulgación, el 5-XII-1803, de una sentencia de signo totalmente contrario, en la que se disponía lo siguiente:

"Por lo nuevamente alegado y justificado se mejora la sentencia de vista de 18 de Julio de 1801, y en consecuencia se condena a Lorenzo Arnau y demás demandados como poseedores de las fincas del heredamiento que vendió D. Alfonso Martinez de Vera a Lorenzo Bernabeu, a que reconozcan al Marqués del Bosque por dueño directo de ellas; con reserva de su derecho a las partes paa que sobre los luismos devengados puedan usar de el donde, como y contra quien les convenga (...)"<sup>568</sup>.

---

566 ARV. Ibidem, fs. 148 vto.-149.

567 ARV. Ibidem, 2<sup>a</sup> parte (apelación), fs. 110 vto.-112.

568 ARV. Ibidem, 2<sup>a</sup> parte (apéndice), f. 336 vto.

La información de que disponemos sobre la situación existente en Aguas tras la abolición del régimen señorial es bastante escasa, pero de ella parece deducirse una reacción antiseñorial menos acentuada que la de Busot. La diferencia entre ambos señoríos vendría determinada por la carencia de competencias jurisdiccionales del señor territorial del lugar de Aguas. La incidencia del decreto de 6-VIII-1811 y de la ley de 3-V-1823 sobre el régimen señorial valenciano fue comentada de manera más extensa al tratar la evolución experimentada por el señorío de Busot. Bastaría mencionar, por tanto, el hecho de que actuaban únicamente contra las jurisdicciones señoriales preservando los patrimonios territoriales; aunque sin olvidar matizar el papel que desempeñaron en la desintegración de esos patrimonios en aquellas zonas en las que primó la enfiteusis como régimen de tenencia, dado el nuevo clima sociopolítico creado, caracterizado por una abierta oposición antiseñorial.

A pesar de los puntos 5º y 6º del decreto de abolición de señoríos de 1811 -que establecían respectivamente que "Los señoríos territoriales y solariegos quedan desde ahora en la clase de los demás derechos de propiedad particular, si no son de aquellos que por su naturaleza deban incorporarse a la Nación, ó de los en que no se hayan cumplido las condiciones con que se concedieron, lo que resultará de los títulos de adquisición" y que "Por lo mismo los contratos, pactos ó convenios que se hayan hecho en razón de aprovechamiento, arriendo de terrenos, censos ú otros de esta especie, celebrados entre los llamados señores y vasallos, se deberán considerar desde ahora como contratos de



particular á particular"<sup>569</sup>-, el titular del señorío solariego tuvo algunas dificultades momentáneas para mantener los derechos del dominio directo y el pago de las prestaciones de ellos derivadas, aunque no fue una situación generalizada<sup>570</sup>.

Un cierto ambiente de oposición antiseñorial y de rechazo al pago de las prestaciones con este origen se detecta en algunas de las escrituras de venta del dominio útil otorgadas durante este periodo. Aunque se reconocen los censos y pensiones ánuas existentes a favor del Marqués del Bosch (sin indicar la naturaleza de esos censos en la mayor parte de las ocasiones; aunque parecen ser de carácter consignativo), se declaran libres de cualquier tributo y señorío, y hacen constar que satisfacerían el derecho de luismo en el caso de que el señor territorial tuviera derecho a él. Por este motivo, el comprador deduce la cuantía del luismo del precio de venta, señalando su entrega al marqués sólo en caso de verificarse dicho derecho señorial<sup>571</sup>.

-----  
<sup>569</sup> ALCUBILLA. *Diccionario de la Administración Española*, Op. Cit, p. 778.

<sup>570</sup> Es necesario señalar que la documentación localizada en esta ocasión ha sido mucho menor, en comparación con la utilizada en el caso de Busot.

<sup>571</sup> En la escritura de venta otorgada en 1813 por Gabriel García a favor de Lorenzo Ortuño (ambos labradores y vecinos de Aguas), de 1,5 jornales de secano y otro jornal inculto situados en la partida del Ciscaret, se estipulaba la retención por el comprador de 28 libras del precio acordado en la transacción (20 por el capital de censo impuesto sobre la finca y 8 en concepto de luismo). Igualmente, en la adquisición efectuada por Vicenta Morant de 6 tahúllas de secano arbolado, se reducían de las 100 libras estipuladas 9 L 10 s, por el capital de censo, y 10 L. por el luismo. AHPA. Prot. Not. de F. Sala y Cantó, P. 1.626, año 1813, fs. 7-9 y 32 vto.-33 vto.

Así por ejemplo, en la escritura de venta de 2,5 tahullas de regadío con 3 horas 45 minutos de agua de la balsa de Barañes, otorgada en 12-IV-1813 por F. Yvorra (jornalero, vecino de Busot) a favor de A. Yvorra (labrador, vecino de Aguas-Barañes), se declara estar la finca gravada a dos diezmos y a un capital de censo de 5 libras 17 sueldos (3 sueldos 6 dineros de ánuua pensión) a favor del Marqués del Bosch, y en lo demás franca y libre; a pesar de señalarse que el comprador se retiene, de las 95 libras estipuladas como precio, 5 L. 17 s. por el capital y 8 L. 19 s. 8 d. "que tambien se retiene por las resultas de que si deve pagar el Luismo que antes del Real Decreto expedido por su Magestad, sobre extincion de Señorios, al dicho Señor Marques se correspondía, quedando á cargo del susodicho las resultas que huviese en esta parte, y en caso de no pagarse dicho laudemio; se obliga á abonar dicha suma al vendedor, siempre que fuese requerido, y desidido el asunto referido (...)"<sup>572</sup>.

Resulta curioso el hecho de que el enfiteuta se obligue a pagar los dos diezmos y el censo anuo y solamente se plantee la satisfacción o no del luismo; probablemente debido a la vinculación de esas cargas a la tierra, y su no identificación como derechos derivados de la jurisdicción (proceso que tiene lugar, en mayor o menor medida, en otras áreas, dada la profunda imbricación existente entre el régimen señorial valenciano y la enfiteusis).

---

<sup>572</sup> ANJ. Brotons y Bernabeu, T., P. 24, año 1813, fs. 31 vto.-34.

Otras escrituras de venta mencionan únicamente los capitales de censo, y sus pensiones ánuas correspondientes, o las particiones en especie, declarando la finca libre de cualquier otro tributo<sup>573</sup>. Sin embargo, se ha tenido igualmente constancia de casos en los que se siguen reconociendo y satisfaciendo las prestaciones señoriales sin ningún tipo de reserva. En la escritura de venta otorgada, el 2-VI-1813, por J. Ferrandis (trabajador de la tierra y vecino de Villajoyosa) a favor de G. García (labrador y vecino de Aguas) de 3 jornales de tierra secana y 5 jornales sin cultivar, situados en la partida del Barranco, se declara estar la finca sujeta a la responsión de un censo de capital 6 L. y 4 s. a favor del marqués, y se afirma haber sido ya satisfecho el luismo por el comprador (36 L. 12 s.)<sup>574</sup>.

Tras la promulgación de la Real Cédula de 15-IX-1814, que reitegraba a los señores la percepción de todas las rentas, frutos, prestaciones y derechos del señorío territorial (pero no las jurisdicciones ni tampoco las regalías), la situación volvió a la normalidad, respetando los enfiteutas de nuevo todos los derechos inherentes al dominio directo de la tierra, y satisfaciendo las rentas de él derivadas al titular del mismo. Sin embargo, el nuevo periodo liberal instaurado en 1820 trajo consigo una vuelta a la dinámica anterior. Los testimonios localizados no reflejan ningún tipo de matización o reserva,

---

<sup>573</sup> AHPA. Ibidem, fs. 87 vto.-89 y 157-158.

<sup>574</sup> AHPA. Ibidem, fs. 74-75 vto.

señalando únicamente la inexistencia de gravámenes sobre las tierras<sup>575</sup>, y aludiendo, en algún caso, al proceso de extinción de señoríos<sup>576</sup>.

Esta nueva situación de rechazo antiseñorial y negativa a satisfacer las rentas derivadas del señorío territorial tuvo una escasa vigencia, puesto que, por la Real Orden de 15-VIII-1823, se reintegraba a los señores territoriales y solariegos la percepción de las prestaciones y rentas disfrutadas con anterioridad al 7 de marzo de 1820. En este sentido, las escrituras notariales otorgadas con posterioridad a esta fecha se hacen eco de ello, puesto que reflejan una situación de normalidad.

El restablecimiento y modificación de la ley de 3 de mayo de 1823, a través de la promulgación de la ley de 23-26 de agosto de 1837, no alteró la posesión en que se hallaba el marqués del lugar de Aguas. El señor territorial tampoco se vio obligado, de acuerdo con la ley, a presentar los títulos de adquisición del señorío, puesto que en ningún momento había disfrutado de competencias jurisdiccionales; pasando a ser considerados los censos, pensiones, rentas y propiedades situadas en dicho lugar como propiedad particular.

-----

<sup>575</sup> AHPA, Ibidem, P. 1.628, año 1823, fs. 78-82.

<sup>576</sup> Por ejemplo, en la escritura otorgada con motivo de la venta de un solar situado en la partida de Barañes, en octubre de 1820, por J. Ortuño y V. Yvorra (trabajadores y vecinos de Busot) a favor de P. Aracil (labrador y vecino de Aguas), esta finca es considerada "franca y libre de todo cargo (...); mediante la extinción de Señoríos". ANJ. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu, P. 25, año 1.820, fs. 86 vto.-88.

A pesar de la confirmación de los derechos señoriales sobre las tierras establecidas en enfiteusis, el señorío de Aguas experimentaría una evolución similar a la de otros señoríos (como por ejemplo el de Busot, colindante a él y en manos de los mismos titulares). En Aguas, con el avance del siglo, se hace evidente igualmente, aunque de una manera menos acentuada, la resistencia de los enfiteutas a satisfacer las rentas señoriales. Resultado de ello es la falta de veracidad existente en los asientos de los libros de la contaduría de hipotecas, puesto que se evita en numerosas ocasiones declarar las cargas de esa naturaleza. Un proceso similar es detectado en los libros del Registro de la Propiedad. En estos últimos, y en relación a la inscripción de las fincas adquiridas por D. José de Rojas y Canicia y D. José de Rojas y Galiano a diversos enfiteutas de Aguas, se hace patente el abandono de los pagos de las rentas señoriales por parte de los enfiteutas desde la segunda mitad del siglo XIX.

En los libros de translaciones de dominio de la antigua Contaduría de Hipotecas se hace presente la reticencia de los antiguos enfiteutas a reconocer ese tipo de cargas. Son frecuentes los casos en los que sobre una finca declarada inicialmente libre de cargas (o en cuyo asiento se señalaba no expresarse ninguna carga en los títulos presentados al efecto) se reconoce la sujeción a la señoría directa, al ser objeto de alguna transacción en la que interviene el Marqués del Bosch (venta, reconocimiento de censo, obligación hipotecaria, ...).

También se ha tomado constancia del caso inverso, en el que las pensiones son declaradas en la primera inscripción, pero no en las siguientes.

Un proceso de idénticas características tiene lugar en relación a las inscripciones de fincas cedidas en enfiteusis por los titulares del lugar; aunque en el caso de Aguas es más frecuente la inclusión de las cargas señoriales en las inscripciones registrales. Al procederse a la inscripción de algunas de las fincas adquiridas por el marqués (en lo relativo únicamente al dominio útil), son comprendidas en esos asientos las cargas de origen señorial que las gravaban, aunque no siempre de una manera detallada (cargas que desaparecen al producirse la consolidación de dominios en manos del titular del directo), haciéndose notar la inexistencia de gravámenes en los títulos presentados con motivo de la inscripción o en los asientos precedentes del registro. Con motivo de la inscripción en el Registro de 1,1206 hectáreas de secano, vendidas por J. Yvorra Arnau, se hace constar lo siguiente:

"Que de los títulos reseñados, la deslindada finca esta libre de toda clase de gravamen y seguro; pero manifiestan los otorgantes que se hallan sujetas al Dominio mayor y directo del señor Conde de Casas-Rojas, condonando dicho Señor Conde lo que se le adeuda por el

referido gravamen"<sup>577</sup>.

Resulta significativo mencionar como de las 93 adquisiciones de fincas realizadas por D. José de Rojas y Canicia (tanto de tierras, como de horas de agua o de ambos bienes conjuntamente), en un 37,63 % de los casos (35 adquisiciones) estas habían sido declaradas inicialmente libres, o bien se había procedido a un reconocimiento tardío de la señoría directa a la que se hallaban sujetas (1851). Por lo que respecta a las compras efectuadas por D. José de Rojas y Galiano, el porcentaje se reduce a un 8,77 % (5 casos en 57 adquisiciones), aunque es necesario matizar que, dada la época en la que éstas se llevan a cabo, muchos de los gravámenes podían haber ya prescrito, dando como resultado un porcentaje muy alto de fincas adquiridas libres de cargas.

No obstante, el proceso de ocultación de este tipo de pechos y de rechazo a su reconocimiento y satisfacción por los enfiteutas (y por tanto la imposibilidad de efectuar la inscripción del dominio directo en el Registro de la Propiedad) es menos extremado que el que tuvo lugar en Busot, donde se llegó a certificar por el ayuntamiento (como constaba en el Registro) la inexistencia de derechos señoriales en el municipio. Testimonio de esta situación son diversas inscripciones de fincas en las que, además de hacerse una relación de las cargas

---

<sup>577</sup> Registro de la Propiedad de Jijona. Fca. 734, T. 228, Lib. 1 Aguas, fs. 14-17 vto.

señoriales, se refleja el respeto a los derechos del dominio directo, por ejemplo a través de la mención en inscripciones posteriores, motivadas por el cambio de titular, de la obligación del nuevo propietario para con el marqués, reconociendo sus derechos<sup>578</sup>. Igualmente, se ha de mencionar la protección de las prerrogativas señoriales que, en algunos casos, ejercía el Registro, al acometer la denegación de la inscripción de las fincas de aquellos propietarios que hubieran infringido alguno de los derechos señoriales<sup>579</sup>.

En este mismo sentido, se ha de señalar que los libros de la contaduría recogen un número mayor de declaraciones de cargas señoriales, aunque no se haya realizado una estimación cuantitativa de las mismas.

-----  
<sup>578</sup> Con motivo de la venta de un solar inscrito, incluyendo en el asiento la sujeción a la señoría directa y a los derechos de la enfiteusis, se hacía constar lo siguiente: "V. Brotons Baeza, inscribe su título de compraventa. Este contrato se ha celebrado simple llanamente y sin mas condiciones que las naturales del mismo y así lo acepta espontaneamente el comprador el que reconoce al señor Marques del Bosque por dueño territorial de la deslindada finca y se obliga á pagarle los derechos de Luismo en sus engenaciones y demás del enfiteusis que le correspondan (...)" . Ibidem, Fca. 33, T. 8, Lib. 1 Aguas, fs. 98-98 vto.

<sup>579</sup> En 1865 fueron canceladas las anotaciones preventivas de inscripción, y denegada finalmente la definitiva, de un solar cuyo propietario había adquirido la finca sin satisfacer el derecho de luismo. Declarada dicha finca libre de cargas, de acuerdo al documento presentado para realizar la inscripción, se comprobó posteriormente su sujeción al dominio directo del Marqués del Bosch, y a la pensión anual de 6 sueldos. Por estos motivos se expresaba lo siguiente: "Las anotaciones preventivas señaladas con las letras A y B (...) por defecto subsanable de hallarse tenida la finca al dominio del Marquesado del Bosch, y no haberse impetrado la oportuna licencia para la venta, quedan canceladas por que ha transcurrido desde sus fechas el plazo de 60 días que señala la Ley Hipotecaria para su duracion, sin que se haya subsanado el defecto de dicho título. (...)" . Registro de la Propiedad, Ibidem, Fca. 19, fs. 56-58 vto.



Respecto a las prestaciones señoriales consignadas en el Registro de la Propiedad, en el caso de Aguas tendría lugar un proceso similar al analizado ya en Busot. Vacías de contenido real, prescribirían al no ser efectivas, y permanecerían como meras reliquias, sin ningún valor, pasando de unas inscripciones a otras, hasta desaparecer definitivamente del Registro a tenor de las leyes promulgadas ya en el siglo XX (la Ley de Bases para la Reforma Agraria de 1932, y la Ley Hipotecaria de 1946). En algunos casos, continuarán mencionándose las cargas de origen señorial (frecuentemente remitiendo a las inscripciones anteriores) hasta épocas muy recientes (ya en nuestro siglo)<sup>599</sup>.

El relativo valor que todavía mantiene el dominio directo en el señorío de Aguas y sus posibilidades de conservación (en relación al de Busot) se hacen patentes en dos hechos importantes. Por un lado, en la obtención por el Marqués del Bosque de varias escrituras de reconocimiento de la señoría directa sobre una serie de fincas, otorgadas por los enfiteutas poseedores del dominio útil de dichas heredades; y por otro, en el proceso de adquisición del dominio útil de fincas antiguamente cedidas en enfiteusis llevado a cabo durante la segunda mitad del

-----  
<sup>599</sup> A los 330 reales, parte del capital de un censo, a los que se hallaban sujetas 7 tahullas de tierra seguía haciendo alusión la octava inscripción de esta finca, efectuada el 2-I-1990. Registro de la Propiedad de Jijona, Fca. 1, T. 8, Lib. 1 Aguas, fs. 2-3 vto. La pensión de censo redimible de 9,78 rs. anuales, junto a otra de ese mismo carácter de 2 rs. 12 mrds, una enfitéutica de 8 rs. 24 mrds y el diezmo de la cosecha, existentes sobre una finca comprensiva de 2 tahullas de secano arbolado, eran mencionados todavía en 1966. Ibidem, Fca. 7, f. 20-22 vto.

siglo XIX por los titulares del directo, recurriendo, en ocasiones, al ejercicio de los derechos de fadiga y retracto, y logrando, aunque no de manera general, la satisfacción de las pensiones atrasadas y el reintegro de los capitales de censo impuestos sobre las fincas (mediante la deducción del valor de los mismos del precio estipulado en la venta).

Los reconocimientos del dominio directo logrados serán de gran utilidad en el proceso de adquisición mencionado, puesto que fundamentarán las demandas y exigencias de los marqueses sobre ciertas fincas.

El 7-X-1851, D. Antonio Rojas y Canicia obtenía el reconocimiento y confirmación del dominio directo sobre las tierras (y recursos hídricos) comprendidas en las antiguas heredades conocidas como heredad del Pi<sup>600</sup>, heredad de los Yvorras<sup>601</sup> y heredad de los Arnaus<sup>602</sup>, situadas en los alrededores de los Baños y el núcleo poblacional de Aguas, y en esos momentos muy fragmentadas entre los diversos enfiteutas que otorgaron conjuntamente las escrituras (una por cada heredad).

Con esta acción, el titular del antiguo señorío solariego de Aguas conseguía reafirmar los derechos de la señoría directa, actualizar las rentas de ella derivadas y garantizar su

---

600 AHPA. Prot. Not. de J. Cirer y Palou, P. 501, año 1851, 2<sup>o</sup> T. fs. 1.595 vto-1.607 vto.

601 AHPA. Ibidem, fs. 1.570-1.595.

602 AHPA. Ibidem, fs. 1.555-1.569 vto.

percepción (incluso la de las pensiones vencidas), y controlar a los nuevos enfiteutas resultantes de la fragmentación del dominio útil.

La heredad de los Yvorras había sido configurada mediante la unión de dos porciones establecidas en enfiteusis a Lorenzo Bernabeu (el 31-VIII-1625) y Luis Cantó Morales (el 19-XII-1656) respectivamente, con una extensión aproximada de 84 jornales -336 tahullas- (26 jornales la parte perteneciente a L. Bernabeu, y 58 jornales la de L. Cantó), y una dotación bastante cuantiosa de agua de riego (12 días de la balsa de los Baños -288 horas- y 16 días de la del Gasparet -384 horas). La heredad estaba gravada asimismo por un censo de carácter consignativo de 1.560 libras de capital, constituido por dos censos; uno impuesto a favor del marqués con motivo de los establecimientos por una cuantía de 1.320 libras, y otro de 240 libras, cargado en un principio a favor de Gabriel Arnau y adquirido posteriormente al mismo por el marqués.

Al margen del censo de carácter consignativo, no estaba sujeta a ninguna otra carga, aunque sí a los derechos de luismo, fadiga, y demás de la enfiteusis. Tras varias segregaciones, el dominio útil se encontraba fragmentado, en el momento del reconocimiento de censo, entre 63 enfiteutas, con porciones de tierra de diversa entidad, que oscilaban entre 0,25 y 40 tahúllas, aunque el grupo mayoritario era el integrado por las parcelas inferiores a las 5 tahullas.

Como resultado de estas diligencias consiguió reafirmar el dominio directo sobre una superficie de tierra de 412, 75 tahullas -49,571275 ha- (cantidad que difiere bastante de la consignada inicialmente en los establecimientos, debido seguramente a la imprecisión de las mediciones efectuadas entonces) y 470,50 horas de agua de la balsa de los Baños (19,60 días, cómputo erróneo, por cuanto que la tanda de dicha balsa solamente constaba de 18,50 días de agua), 432 horas de la del Gasparet o de los Yborras (18 días, la tanda completa) y 347,50 horas de la de los Campellos (14,48 días, la tanda casi completa). Es evidente que no coinciden los bienes incluidos en la escritura de reconocimiento con los que parecían existir al principio, bien por posibles agregaciones posteriores a los diversos fragmentos de la heredad inicial, bien por la incorrección de las mediciones.

Las pensiones satisfechas por estas fincas oscilaban entre los 60 reales y los 6 maravedíes, dependiendo de la extensión y las características de la misma (huerta, secano), así como de su dotación hídrica para riego. En conjunto, D. Antonio de Rojas había conseguido el reconocimiento y la admisión de pensiones anuales por valor de 757 reales 6 maravedíes (aunque descontando los 9,25 reales correspondientes a las 16 tahullas de huerta de su propiedad), puesto que no es posible afirmar la total percepción de las mismas.

En definitiva, en esta escritura se otorgaba lo siguiente:

"En su consecuencia todos juntos de mancomún y cada uno de por si Otorgan: así en sus nombres propios como en el de sus hijos, herederos y sucesores y de quien en lo sucesivo fueren dueños de las espresadas tierras y aguas; que reconocen por señor del dominio directo de la propia tierra y agua al prenombrado Señor D. José Martínez de Vera y Bosque, antes Rojas y Canicia, Conde de Casa Rojas y de Torrellanos y Marqués del Bosque, y a sus sucesores en este último título, y por lo mismo se obligan á pagarle, ó a quien sus veces hiciere, en dinero efectivo, con exclusion de todo papel moneda creado o por crear, el dia veinte y nueve de setiembre de cada un año la pensión del censo enfiteutico que á cada uno queda señalada en esta escritura, entendiéndose mientras posehan las tierras y agua. Yguualmente se obligan a no vender, ceder, permutar, donar, ni de otra manera disponer respectivamente de la deslindada tierra y agua sin preceder la correspondiente licencia y permiso de dicho señor y el pago tambien en metálico, por razón de laudemio, de la decima del valor porque se enagena, y no hasiéndolo caherá en comiso la finca y lo mismo si dejasen de satisfacer la pencion por dos años, sin que sobre ello valgan ni puedan escepcionar ninguna costumbre, disposición en contrario, ni prescripción de ningún género; asi mismo se obligan á no partir ni dividir dicha finca entre dos ó mas coherederos sin previo

aviso del Señor directo, sin que esto obste para que el referido señor pueda pedir los reditos á uno solo de los partícipes el que mejor le parezca ó á cada uno de estos insolidum. Y para mayor seguridad por la presente escritura constituyeron de nuevo el espresado gravamen; de modo que si por cualquier cuento faltase la escritura primitiva de consitución o imposición se entienda subrogada por la presente la cual deberá producir los mismos efectos que aquella, y en tal concepto los otorgantes se obligan como constituyentes y á sus sucesores á cumplir lo pactado en dicha escritura y en la presente, é igualmente á conservar la finca en el mejor estado, haciendo los cultivos necesarios para que siempre vaya en aumento. Del propio modo se obligan por si y á sus herederos y sucesores á otorgar escritura de reconocimiento de dicho gravamen inmediatamente lo requiera el Señor directo, sin que se entienda por no hacerlo menoscabado en lo mas minimo los derechos que correspondan a dicho señor. Y por ultimo á que cuando enagenen dichas fincas podrá usar el señor Directo del derecho de tanteo con arreglo á derecho. Y al cumplimiento de todo lo pactado quieren ser apremiados los otorgantes y sus sucesores en vista de la presente escritura ó su copia sin que el Señor del dominio directo actual ó sucesivo tenga nesesidad de manifesar la primordial porque de ello le relevan enforma, hipotecando de nuevo la deslindada finca sin

aviso del Señor directo, sin que esto obste para que el referido señor pueda pedir los reditos á uno solo de los partícipes el que mejor le paresca ó á cada uno de estos insolidum. Y para mayor seguridad por la presente escritura constituyeron de nuevo el espresado gravamen; de modo que si por cualquier cuento faltase la escritura primitiva de consitución o imposición se entienda subrogada por la presente la cual deberá producir los mismos efectos que aquella, y en tal concepto los otorgantes se obligan como constituyentes y á sus sucesores á cumplir lo pactado en dicha escritura y en la presente, é igualmente á conservar la finca en el mejor estado, haciendo los cultivos necesarios para que siempre vaya en aumento. Del propio modo se obligan por si y á sus herederos y sucesores á otorgar escritura de reconocimiento de dicho gravamen inmediatamente lo requiera el Señor directo, sin que se entienda por no hacerlo menoscabado en lo mas minimo los derechos que correspondan a dicho señor. Y por ultimo á que cuando enagenen dichas fincas podrá usar el señor Directo del derecho de tanteo con arreglo á derecho. Y al cumplimiento de todo lo pactado quieren ser apremiados los otorgantes y sus sucesores en vista de la presente escritura ó su copia sin que el Señor del dominio directo actual ó sucesivo tenga nesesiidad de manifesar la primordial porque de ello le relevan enforma, hipotecando de nuevo la deslindada finca sin

perjuicio de obligación general que hacen de todos sus bienes y rentas havidos y por haver (...)"<sup>603</sup>

De este modo, se fijan una serie de cláusulas que garanticen la percepción de nuevo de las pensiones, a la vez que el ejercicio del derecho de comiso en caso contrario, haciendo constar que no podrá recurrirse a ninguna disposición ni a la prescripción de las prestaciones para evitarlo. Se sigue manteniendo la cuantía del luismo en la décima parte del valor del objeto enajenado, a pesar de su reducción a la quincuagésima establecida por las leyes de abolición de señoríos (ley de 3-V-1823, restablecida y modificada por las de 20-I/2-II-1837 y 23/26-VIII-1837); así como el derecho de tanteo del titular del dominio directo en caso de enajenaciones del útil (derecho que, efectivamente, será utilizado por D. Antonio de Rojas y Canicia). Se intenta, igualmente, salvaguardar el dominio directo, exigiendo a los enfiteutas dar aviso al titular de éste de las divisiones del útil entre dos o más herederos, y otorgar cuando el señor lo solicite escritura de reconocimiento del gravamen (sin que por no ejercer este derecho se vea perjudicado).

La heredad del Pí había sido vendida a censo por D. Alfonso Martínez de Vera a Nicolás Giner el 14-XI-1612, sujeta al pecho de dos diezmos (uno para la iglesia y otro para el Marqués del Bosque), a un cánón enfiteúutico en metálico de 5 sueldos anuales y a otros derechos de la enfiteusis (luismo, fadiga,

-----  
<sup>603</sup> AHPA. Ibidem, fs. 1.593-1594 vto.



solicitud de licencia señorial en caso de enajenaciones, ...), y, además, a un censo redimible, de carácter consignativo, de 250 libras de capital y pensión anua al 3 % (a satisfacer cada 29 de septiembre).

En 1651 fue adquirida por Gabriel Arnau, cuyo nieto, en el cabreve efectuado el 6-II-1730, estimaba la cabida de la finca en 47 jornales (188 tahullas: 22,5788 hectáreas), 25 de ellos de sembradura y 16 de viña y campa, además del derecho a regar con agua de las fuentes del Pino, de los Baños y del Gasparet. Tras el reconocimiento realizado por los 20 enfiteutas poseedores, en ese momento, del dominio útil de la antigua heredad -fragmentado en parcelas cuya superficie oscilaba entre 0,50 y 64 tahullas (aunque con un claro predominio de las situadas sobre las 2-3 th.)-, el marqués veía confirmado su dominio directo sobre un total de 47,75 jornales (191 tahullas: 22,9391 ha.) de tierra huerta y secano y sobre varios derechos de agua, 430 horas (17,92 días, casi la tanda completa) de la balsa de la Mata y 84 horas de la balsa de los Baños (3,5 días)<sup>604</sup>.

En relación a las pensiones que gravaban la finca, así como a los atrasos en el pago de las mismas se llegó en la escritura al acuerdo siguiente:

-----

<sup>604</sup> No dejan de resultar extraños esos 3,5 días de agua de la balsa de los Baños, puesto que en la heredad de los Yvorras se había procedido al reconocimiento de un número de horas de agua de esta balsa superior, incluso, a las comprendidas en la tanda. La explicación podría residir en un error de cómputo en uno de los dos casos, o bien en el hecho de figurar ese agua de una manera independiente de la tierra, mencionada únicamente como un recurso que se aplicaba a su riego, y no incluida en el reconocimiento.

"En este estado y atendiendo á que hace muchos años que no se han satisfecho las pensiones de dicho capital de censo redimible, á que es mas ovio y conveniente tanto para los otorgantes como para el señor Directo de dicha finca satisfacer en metálico el Diezmo de frutos que le corresponde por cuyo medio se evitan vejaciones y dispendios que son consiguientes, si se percibiesen frutos, han convenido con el Señor D. José Martinez de Vera, antes Rojas y Canicia Conde de Casas Rojas y de Torrellano, Marques del Bosque y como tal Señor Directo de dicha hacienda del Pi en las condiciones siguientes:

1<sup>a</sup>-Que por razón del diezmo de frutos que percibía dicho Señor sobre la espresada heredad pagaran en dinero metalico los dueños de las tierras y agua que comprende dicha finca por si y por sus sucesores la cantidad de 409 r<sup>s</sup> v<sup>n</sup> en cada un año el día veinte y nueve de Setiembre.

2<sup>a</sup>-Que respecto á los atrasos que adeudan á dicho Señor por el referido Diezmo se fijaran en diez anualidades y se pagaran tambien en metalico haciendolo de la pencion corriente y otra por las diez convenidas en el mismo día veinte y nueve de Setiembre y en metalico.

3<sup>a</sup>-Que igualmente pagaran la pencion enfiteutica de 5 sueldos anuales en el propio día veinte y nueve de Setiembre, haciéndolo tambien de una pención corriente

y otra atrasada; pagando tambien las diez pensiones atrasadas por este concepto en los mismos terminos espresados en la anterior condicion.

4<sup>a</sup>-Que por lo que respecta á las pensiones del capital de censo redimible de 250 Libras la satisfaran igualmente en metalico al respecto del tres por ciento y en el mismo día veinte y nueve de Setiembre una pension corriente y otra atrasada, pagando tambien las diez pensiones atrasadas en los mismos terminos espresados en la condicion segunda.

5<sup>a</sup>-Y que reconocen de nuevo la señoría y dominio directo que dicho Marqués del Bosque tiene sobre dicha heredad y agua"<sup>605</sup>.

Por este motivo, los enfiteutas se comprometieron a satisfacer al señor del dominio directo un total de 111 reales y 23 maravedíes en concepto de censo redimible, y 415 reales por los diversos cánones de carácter enfiteúutico. Además de las obligaciones que hemos mencionado para el caso de la heredad de los Yvorras, los dueños del dominio útil aprobaban y ratificaban la liquidación efectuada, comprometiéndose a no impugnarla por ningún motivo y señalando que "si hubiese alguna diferencia en perjuicio de los otorgantes, en la cantidad que sea hacen donacion al Señor Marqués del Bosque y a sus sucesores en dicho

-----  
<sup>605</sup> AHPA. Ibidem, fs. 1.597 vto-1.598 vto.

vinculo"<sup>606</sup>.

El 5-XII-1645 D. Lorenzo Martínez de Vera dio en establecimiento a Juan Arnau (vecino de Aguas) una porción de tierra, con su casa, corral, fuente y balsa, posteriormente conocida como la heredad de los Arnaus. En posteriores actos de cabreve (en 1730 y 1738) fue declarado el dominio directo sobre un total de 46 jornales de tierra, con derecho a regar de la balsa del Cañar. Por lo que respecta a las cargas, junto a los derechos de origen enfitéutico -un censo perpetuo irredimible de 2 L. 10 s. de pensión anua, luismo, fadiga, licencia señorial en caso de enajenaciones, ...- estaba impuesto sobre la finca un censo redimible de 1.200 L. de capital y 1.200 s. de pensión anua, a satisfacer (al igual que el enfitéutico) el 29 de septiembre.

Los 31 enfiteutas, poseedores del dominio útil de parcelas de tierra situadas entre 1 y 30 tahullas (aunque con un claro predominio de las inferiores a 10 tahullas), reconocieron el dominio directo del Marqués del Bosque sobre un total de 225 tahullas (56,25 jornales: 27,0225) y 390 horas de agua (372 horas de la balsa del Cañar -15,50 días, casi la tanda completa- y 18 horas de la balsa de los Campellos); que resultaron gravadas con un censo redimible de 554 reales y 19 maravedíes y otro enfitéutico de 37 reales y 17 maravedíes.

-----

<sup>606</sup> AHPA. Ibidem, fs. 1.605-1.605 vto.

En esta escritura, además de obligarse al cumplimiento de los derechos de origen enfiteútico según el modelo comentado anteriormente para la heredad de los Yvorra, los enfiteutas se obligaban a pagar "en dinero efectivo con exclusión de todo papel moneda creado o por crear, el día 29 de Setiembre de cada un año, la pensión del capital de censo redimible y la del enfiteutico que a cada uno queda señalada en esta escritura, entendiendose mientras posean las tierras y agua y mientras no rediman el capital de censo redimible, por lo que respecta á este, y no por lo que hace al enfiteutico por ser perpetuo e irredimible"<sup>607</sup>.

Las particiones en especie ya habían sido sustituidas, con anterioridad, durante la década de los veinte, por otras en metálico en las tierras que formaban parte de la antigua heredad de Barañes. Así se deduce de las declaraciones de cargas comprendidas en las escrituras de venta del dominio útil. Un ejemplo de ello lo constituye el fragmento siguiente, incluido en una escritura otorgada el 31-X-1826, con motivo de la venta de 1,5 jornales de tierra huerta con 15 horas de agua de la balsa de Barañes: "tenidas y gravadas a la parte de capital de censo de mil Libras que le corresponde, del que se paga entre todos los interesados de dicha heredad de Barañes, y al canon dels dos Diesmos, én razon y én lugar de las antiguas prestaciones, con pago de Real Valenciano por Libra de Luismo en sus enajenaciones,

-----  
<sup>607</sup> AHPA. Ibidem, fs. 1.567 vto.-1.568.

con los demás derechos de la enfiteusis, con dos penciones anuas, cada una de una Libra dos sueldos y seis dineros, y ambas en el día veinte y nueve de setiembre"<sup>608</sup>.

Desconocemos tanto las condiciones como el criterio elegido para efectuar la conversión de los pechos en especie en otros equivalentes en metálico, satisfechos igualmente el día 29 de septiembre. Las cargas declaradas en las escrituras notariales no demuestran ninguna similitud o relación proporcional entre ellas, aunque si se hace evidente la incidencia en su cuantía de la calidad de la tierra, la disposición o no de agua para el riego, el tipo de cultivos o el grado de aprovechamiento de la finca. Así, en este sentido, frente al caso anterior (1 L. 2 s. 6 d. por 1,5 jornales de tierra huerta) habían sido impuestos, por ese mismo concepto, 4 dineros sobre una parcela de 1 jornal de seco; o 2 s. 9 d. sobre media tahulla huerta con derecho a regar 1,5 horas de la balsa de Barañes<sup>609</sup>. Hay otra serie de escrituras que reflejan un mayor número de cargas, puesto que además del censo redimible de carácter consignativo, y el canon enfitéutico en metálico subrogado en lugar de las antiguas prestaciones, declaran la existencia de otra cantidad en metálico satisfecha por la cosecha de trigo: "gravadas con un

-----  
<sup>608</sup> ANJ. Prot. Not. de F. Miralles, P. 26, año 1826, fs. 85 vto.-87.

<sup>609</sup> ANJ. Prot. Not. V. Alberola, P. 28, año 1828, fs. 48-49. En esta ocasión también menciona el gravamen existente en relación a las cosechas de trigo: "tenida á parte del capital de mil libras y la del trigo al canon de dos sueldos nueve dineros en lugar de las antiguas prestaciones de dos diezmos y de los demás derechos del Enfiteusis con pago de Luismo de un real por libra".

capital de censo de once libras parte del de mil libras impuestos en la heredad de Barañes y seis libras por el trigo con la pension anua de cinco reales vellon el dia de San Miguel con el canon anuo de otros cinco reales en dicho día en subrogacion de las antiguas prestaciones. Al pago de un real por libra de luismo en sus enagenaciones el qual dexa satisfecho por la presente con los demas derechos del Enfiteusis en el dominio directo del Marquesado del Bosque"<sup>610</sup>.

En páginas anteriores se ha venido aludiendo a la importancia del proceso de compra de fincas emprendido por D. José de Rojas y Canicia y D. José de Rojas y Galiano durante la segunda mitad del siglo XIX; proceso que les permitiría recuperar el dominio útil de parte de las fincas cedidas antiguamente en enfiteusis y consolidar así la plena propiedad de las mismas.

Este proceso había sido ya iniciado durante las primeras décadas del siglo por sus antecesores, aprovechando el endeudamiento existente a favor de los marqueses, resultado de los atrasos en el pago de los cánones de arrendamiento de bienes propiedad de los mismos, o de atrasos en la satisfacción de las pensiones de carácter enfiteútico. Así había ocurrido en la adquisición del dominio útil de una porción de tierra secana, parte arbolada y parte panificada, de 3,5 jornales (1,6814 ha.) de cabida, cedido el 18-VI-1820 por M<sup>a</sup> Teresa Cabot (viuda y vecina de Aguas) a los Marqueses del Bosque, en pago de la deuda contraída por su marido (de una cuantía de 150 libras, aunque

-----

<sup>610</sup> ANJ. Ibidem, fs. 44 vto.-45 vto.

sólo fueron exigidas las 125 L. en que estaba valorada la finca) en concepto de atrasos del arrendamiento del molino harinero y las tierras anexas al mismo<sup>611</sup>. De idéntico modo, había conseguido D<sup>a</sup> Catalina Pascual y Vergara 4 jornales (1,9216 ha.) de secano arbolado; cedidos el 20-I-1831 por A. Yborra ("hornero de pan" de Busot) en pago de los "atrasos de las gallinas, censos o derechos Enfiteusis cánon y por lo que le resta del arrendamiento del horno de Pancocer que ha tenido a su cargo, perteneciente al Marquesado del Bosque"<sup>612</sup>.

D. José de Rojas y Canicia llevó a cabo este proceso de ampliación de su patrimonio territorial en Aguas (tanto mediante la adquisición de fincas libres como establecidas antiguamente en enfiteusis) entre 1845 y 1888. La importancia de estas adquisiciones es mayor de lo que a primera vista pudiera parecer, puesto que la parte más considerable de dicho patrimonio era la constituída por terreno de monte y lomas incultas, transmitido en su mayor parte por herencia de sus antecesores. Un 83,19 % de las propiedades inscritas en el Registro de la Propiedad (un total de 775,33547 ha., exceptuando la superficie ocupada por el balneario de Busot) eran terrenos montuosos (645,0685 ha.). Este hecho refleja el mantenimiento del patrimonio señorial constituído por las zonas de pastos y montes, gracias a la carencia de competencias jurisdiccionales de los titulares del señorío de Aguas, a diferencia de Busot, donde los montes y pastos,

-----

<sup>611</sup> ANJ. Prot. Not. de T. Brotons y Bernabeu, P. 25, año 1820, fs. 42 vto.-44.

<sup>612</sup> ANJ. Prot. Not. de V. Alberola, P. 29, año 1831, fs. 2 v.-4.



considerados como regalías tras la promulgación del decreto de abolición de señoríos, pasaron a ser regentados por el ayuntamiento del lugar, perdiendo el Marqués del Bosque cualquier derecho de propiedad sobre ellos. Un 96,02 % de la superficie de montes y lomas incultas inscrita en el Registro de la Propiedad le había sido transmitida por herencia, habiendo adquirido solamente el 3,98 restante.

CUADRO XVI. DISTRIBUCION DEL PATRIMONIO RUSTICO DE D. JOSE DE ROJAS Y CANICIA SEGUN SU ORIGEN Y SUS CARACTERISTICAS (Hectáreas)

TIPO	COMPRA	%	HERENCIA	%	TOTAL	%
MONTE	25.3989	3,27	619,6696	79,92	645,0685	83,19
REGADIO	32,855865	4,24	20,564228	2,65	53,420093	6,89
SECANO	49,8434	6,43	13,293875	1,72	63,137675	8,15
HTA/SEC	13,7092	1,77	----	----	13,7092	1,77
TOTAL	121,80777	15,71	653,5277	84,28	775,33547	100,00
-----						

Las adquisiciones suponen el 15,71 % del total del patrimonio rústico de D. José de Rojas y Canicia, pero si nos atenemos exclusivamente a las tierras cultivables, ese porcentaje se incrementa hasta el 74,01 % del total (130,26697 ha.). Si consideramos válidos los datos apuntados por Figueras Pacheco en

su Geografía de la Provincia (850 ha. de superficie cultivable y 1.007 ha. de superficie inculta en Aguas)<sup>594</sup>, el Marqués del Bosque poseería en torno al 64,06 % de la superficie inculta del término y al 15,33 % de la cultivada. Este último valor nos pone de manifiesto la pérdida de patrimonio rústico experimentada por los titulares del señorío -a pesar de su política de adquisición de tierras-, como consecuencia de la incidencia de los decretos de abolición del sistema señorial en aquellas zonas en las que la enfiteusis había sido el régimen de tenencia predominante.

Las diferencias cualitativas entre los bienes transferidos por herencia y los adquiridos mediante compra son bastante apreciables. Por lo que respecta a la superficie adquirida por compra, un 26,97 % de la misma corresponde a regadío, un 40,92 % a seco, un 11,26 % a huerta y seco indiferenciado (en total, un 79,15 % son tierras cultivables), y solamente un 20,85 % a monte y lomas incultas. Sin embargo, en relación a las fincas transmitidas por herencia (entre las que se incluyen las compras efectuadas por sus antecesores), la superficie montuosa e inculta es la predominante, con un 94,82 %, mientras que el regadío y el seco sólo suponen un 3,15 y un 2,03 % respectivamente (5,18 % el total de tierras cultivables).

Las dimensiones de las fincas integradas en el patrimonio de D. José de Rojas y Canicia, Marqués del Bosque, son reflejadas en el cuadro siguiente :

---

<sup>594</sup> FIGUERAS PACHECO, F.; Op. Cit., p. 955.

CUADRO XVII. DISTRIBUCION DEL PATRIMONIO RUSTICO DE D. JOSE DE ROJAS Y CANICIA SEGUN SU ORIGEN Y TAMAÑO (Hectáreas).

TAMAÑO	ADQUISICION POR COMPRA				ADQUISICION POR HERENCIA			
	SUPERFICIE	%	Nº	%	SUPERFICIE	%	Nº	%
<1 Ha.	13,206023	10,84	25	47,17	-----	---	--	---
>1-3	20,667142	16,97	14	26,42	-----	---	--	---
>3-5	28,1471	23,11	7	13,21	3,8432	0,59	1	4,35
>5-10	30,1171	24,72	5	9,43	24,9621	3,82	4	17,39
>10-20	29,6704	24,36	2	3,77	99,2161	15,18	6	26,09
>20-50	-----	---	--	---	332,1381	50,82	11	47,82
>50-100	-----	---	--	---	-----	---	--	---
>100	-----	---	--	---	193,3682	29,59	1	4,35
TOTAL	121,80777	100,00	53	100,00	653,5277	100,00	23	100,00

Si atendemos al tamaño de las fincas adquiridas, se hace evidente que en las compras ha predominado la parcela de pequeñas dimensiones, con una alta concentración de las inferiores a 1 hectárea. Este grupo supone aproximadamente la mitad de las transacciones, y solamente representa el 10,84 % de la superficie adquirida. En conjunto, un 86,80 % de las adquisiciones corresponden al grupo inferior a las 5 hectáreas, afectando a un 50,92 % de la superficie obtenida por compra;

mientras que sólo un 13,2 % de las fincas presentan un tamaño superior a las 5 hectáreas -aunque inferior a 20 hectáreas-, y, sin embargo, suponen el 49,08 % de la superficie.

Respecto a los bienes rústicos transmitidos por herencia, son inexistentes las fincas que cuentan con una cabida inferior a las 3 hectáreas, constando un único caso inferior a 5 hectáreas; mientras que las fincas con un tamaño superior a las 20 hectáreas constituyen el grupo más importante, suponiendo más de la mitad de las heredades y una extensión superficial ligeramente superior al 80 % del total de los predios heredados.

Las adquisiciones de tierras fueron llevadas a cabo por D. José de Rojas y Canicia en el período de tiempo comprendido entre 1846 y 1888. Se ha observado una cierta continuidad en esta actividad, exceptuando el sexenio 1865-1870 en el que no tuvo lugar ninguna transacción. Tanto respecto al número de operaciones efectuadas como a la superficie involucrada en ellas, no se ha observado una gran diferencia entre las décadas 50-60 de una parte, y 70-80 de otra; aunque sí en lo relativo a los procedimientos y las condiciones establecidas en dichas adquisiciones. Así se desprende del siguiente cuadro:

CUADRO XVIII. DISTRIBUCION DE LAS ADQUISICIONES EFECTUADAS  
POR D. JOSE DE ROJAS Y CANICIA SEGUN LA FECHA DE COMPRA

<u>FECHA</u>	<u>SUPERF(ha.)</u>	<u>%</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>
1846-52	28,7425	23,60	18	33,97
1853-58	12,7370	10,45	5	9,43
1859-64	12,7639	10,48	5	9,43
1865-70	----	---	--	---
1871-76	12,2026	10,02	6	11,36
1877-82	44,021023	36,14	12	22,64
1883-88	11,340742	9,31	7	13,21
TOTAL	121,80777	100,00	53	100,00

Al margen de las propiedades adquiridas que aparecen inscritas en el Registro de la Propiedad (las reflejadas en los diferentes cuadros), tuvieron lugar otras compras que no llegaron a ser registradas, probablemente porque no llegaron a consolidarse como posesiones del Marques del Bosque, bien por ser ventas a carta de gracia o con pacto de retrovendo en las que se verificó la reversión de la tierra al anterior propietario (tras la devolución de la cantidad estipulada como precio de venta en el plazo de tiempo señalado), bien porque esas fincas fueron vendidas de nuevo por el propietario.

Estas adquisiciones que, a pesar de constar en los protocolos notariales o los libros de la contaduría de hipotecas, no aparecen inscritas en el Registro de la Propiedad, afectan a heredades de variadas dimensiones, entre las 2 y las 56 tahullas, y en total a una superficie de 125,5 tahullas, aproximadamente 15 hectáreas (15,07255 ha.). Cantidad que puede resultar errónea por lo que respecta a la medición de la auténtica cabida de las fincas. Así ocurre con una gran parte de las propiedades (65 fincas) de D. José de Rojas y Canicia, cuya cabida fue corregida en 1906 por su hijo, D. José de Rojas y Galiano. Por este motivo, se siguió un expediente supletorio en el Juzgado Municipal de Aguas, aprobado el 3-III-1906, para inscribir a favor de D. José de Rojas y Canicia las fincas de su propiedad con su auténtica cabida<sup>595</sup>.

Todas las adquisiciones, tanto las de tierras como las de agua para el riego, han sido realizadas en condiciones similares. De un total de 90 compras llevadas a cabo por D. José de Rojas y Canicia, en un 91,11 % de los casos (82 adquisiciones) se reconocía la sujeción a la señoría directa de los Marqueses del Bosque; aunque en una alta proporción de las mismas (un 42,68 %), había sido denegada inicialmente, por los enfiteutas, la existencia del dominio directo sobre sus propiedades -haciéndose constar, en los títulos presentados con motivo de la inscripción en el Registro o en las anotaciones

-----  
<sup>595</sup> Registro de la Propiedad de Jijona. Fca. 475, T. 395, Lib. 22 Aguas, f. 56.

precedentes a dicha inscripción, la franqueza de gravámenes de la finca-<sup>596</sup>, o bien dicho dominio directo había sido objeto de un reconocimiento tardío (en 1851, por ejemplo, tuvo lugar el reconocimiento de la señoría directa, comentado en páginas anteriores, sobre las heredades del Pi, de los Yvorras y de los Arnaus). El 8,89 % restante se distribuía entre los casos en los que se declaraba la finca libre de cargas, un 5,56 % (5) -generalmente en relación a las horas de agua; sólo 6,2452 ha., que no aparecen registradas por una posible venta posterior-, y los casos en los que no se hacía ninguna mención al respecto, un 3,33 % (3).

Si nos atenemos exclusivamente a la tierra, sobre toda la superficie adquirida y registrada había sido reconocida la señoría directa (121,80777 ha.); lo que no había sucedido con la superficie no registrada, pues, al margen de las retroventas, sólo se había reconocido ese gravamen sobre 2,46205 hectáreas.

Las compras en las que se reconocía el dominio directo resultaban bastante ventajosas para el Marqués del Bosque, puesto que, a raíz de este hecho, podía deducir del precio de venta los

-----

<sup>596</sup> Así se hace patente en la inscripción registral de 1,1206 ha. de secano, en la que se señala no estar gravada la finca según los asientos precedentes, aunque en la escritura los interesados hacen constar la sujeción al dominio directo del Conde de Casas Rojas. En dicho contrato de venta se expresaba lo siguiente: "Que de los títulos reseñados, la deslindada finca está libre de toda clase de gravamen y seguro; pero manifiestan los otorgantes que se hallan sugetas al Dominio mayor y directo del señor Conde de Casa-Rojas, condonando dicho Señor conde lo que se le adeude por el referido gravamen". Escritura otorgada el 25-I-1887 por V. Brotons y Beviá, vecino de Aguas. Ibidem, Fca. 734, T. 228, Lib. 12 Aguas, fs. 14-17 vto.

capitales de censo impuestos sobre la finca (cuando se especifica su naturaleza, hecho no demasiado frecuente, suelen ser definidos como censos redimibles), la cuantía del luismo e, incluso en algunas ocasiones, las pensiones atrasadas. Así por ejemplo, de los 2.400 reales estipulados como precio de venta de 0,09 hectáreas y 24 horas de agua de la balsa dels Gils y otras 12 horas de la de los Campellos, por D. José de Rojas y Canicia y Lorenzo Giner Yvorra (Busot), fueron deducidos 67 reales y 66 céntimos por la cuantía del capital de censo redimible impuesto sobre la finca, de 2 reales 3 céntimos de pensión anual<sup>597</sup>.

El pago de las pensiones vencidas era algo más infrecuente, aunque también hemos localizado algún ejemplo de ello. En este sentido, el 22-VIII-1879 tenía lugar la venta, efectuada por C. Sellés Yborra (labrador) y F. Sellés García (ambos vecinos de Aguas), de 1,2809 ha. de huerta y 12 horas de agua de la balsa Nueva gravadas con dos censos, por un precio de 3.000 pts. De esta cantidad fueron deducidas 128,75 pts en concepto de la cuantía de los dos capitales de censo, y 30,96 pts. por los atrasos de las pensiones vencidas durante los últimos 8 años (en relación a una pensión anual de 3,87 pts)<sup>598</sup>.

La satisfacción de este tipo de derechos solía conseguirse cuando la venta había ido precedida de una demanda judicial por impago de deudas. En estas ocasiones, el marqués

-----  
<sup>597</sup> AHPA. Prot. Not. de J. Cirer y Palou, P. 526, año 1861, fs. 1.383 vto.-1.387.

<sup>598</sup> Registro de la Propiedad de Jijona. Fca. 608, T. 162, Lib. 9 Aguas, fs. 12-14.



percibía, además del importe de las pensiones vencidas, la cuantía del luismo, de los capitales de censo cargados sobre la finca, y de los créditos hipotecarios con sus intereses. Esos créditos hipotecarios habían sido constituidos directamente a favor del marqués, con motivo de los préstamos por él efectuados, o bien habían sido adquiridos por D. José de Rojas a otros acreedores.

Este es el caso de los dos créditos hipotecarios que, con un valor respectivo de 4.914 y 7.500 pts, fueron cedidos por D. Miguel Carratalá España y José Arnau Yborra a D. José de Rojas y Canicia el 3-V-1872. Transcurrido el plazo señalado sin que los deudores satisficiesen el importe de ambos créditos, el marqués interpuso demanda ejecutiva en el Juzgado de Primera Instancia de Alicante contra los herederos de L. Arnau Yborra por uno de los dos créditos (el de 7.500 pts.)<sup>599</sup>. Con objeto de evitar el pleito de remate, los interesados procedieron a la liquidación de créditos y deudas, cuya cuantía ascendía a un total de 21.080,64 pts., distribuidas del siguiente modo:

-por los dos préstamos y sus correspondientes

intereses: 16.326,25 pts.

-por las costas del juicio: 701 pts.

-por la cuantía del luismo: 1.500 pts<sup>600</sup>.

-----  
<sup>599</sup> Registro de la Propiedad de Jijona. Fcas. 475 y 476, T. 124, Lib. 6 Aguas, fs. 133-142.

<sup>600</sup> El 10 % de las 15.000 pts. por las que se había de vender al Conde de Casas Rojas dos trozos de tierra, con su casa y corral.

- por el capital de censo impuesto sobre la finca, de 47 rs. 55 cént. de pensión anual (al 3 %): 396,25 pts (1.585 rs. vn.).
- por las pensiones vencidas de 29 años y dos tercios de otro que se le adeudan (deducido el importe de las contribuciones por las fincas): 262,62 pts<sup>601</sup>.
- por una obligación hipotecaria a favor del marqués: 1.894,52 pts.

Con este objeto, fue acordada, el 26-X-1878, la cesión de dos fincas de 16,7456 ha. y 12,9248 ha. de superficie por un precio de 15.000 pts (8.000 y 7.000 pts respectivamente), pagando el resto de la deuda entre los herederos, al 6 % de interés, en el plazo de un mes. También se decidió mantener la hipoteca existente sobre dos bancales de tierra huerta de 0,720623 ha. (6 th.) de cabida y un día de agua de la balsa de los Yvorras (que había sido cedida al marqués en la misma fecha que los otros dos créditos hipotecarios), y continuar con el juicio ejecutivo de no satisfacerse el resto de la deuda. Esta pieza de tierra pasó finalmente a manos del Conde de Casa Rojas, puesto que, al no llevarse a cabo la liquidación final de la deuda, prosiguió la demanda ejecutiva, subastándose y rematándose

-----

<sup>601</sup> La pensión anual estaba establecida en 47 rs. 55 cént. El total adeudado en concepto de pensiones vencidas ascendía a 1.400 rs. 65 cént.; de ellos fueron deducidas 350 pts de la contribución que corresponde a dichas pensiones de censo al 25 %, dando como resultado la cantidad de 262,62 pts (1.050 rs. 65 cént.).

ambos bienes el 29-VII-1879 por 3.000 pts a favor de José Sala y Arnau, quien cedió dicho remate, por la misma cantidad, al conde. Dado que la deuda ascendía a un total de 6.421,16 pts (deuda principal y los intereses vencidos, luismo, capital de censo y costas), sólo fue cubierta parcialmente por el valor de la finca embargada. La escritura de venta tuvo que ser otorgada de oficio (el 26-XI-1879) ante la negativa de los demandados a otorgarla dentro de los 8 días de plazo señalados a ese efecto<sup>602</sup>.

Esta situación nos pone de manifiesto una serie de aspectos. En primer lugar, nos verifica el hecho de que una gran parte de las rentas derivadas del dominio directo ya no eran satisfechas por los antiguos enfiteutas; en segundo lugar, nos evidencia el mantenimiento de una oposición y un rechazo a los antiguos derechos señoriales, reflejados en la negativa de los demandados a otorgar la escritura de venta tras el ejercicio por el marqués del derecho de retracto, y, en tercer lugar, hace patente la importancia de los reconocimientos de señoría directa realizados en 1851 en la reivindicación de D. José de Rojas y Canicia de aquellos derechos del dominio directo (fadiga y retracto) que le permitirían obtener la propiedad de las fincas antiguamente cedidas en enfiteusis.

Otro caso similar, aunque con mayores dificultades por rechazar los enfiteutas el derecho de retracto, lo constituyó la adquisición de la heredad conocida como "Huerto de Llopis o dels

-----  
<sup>602</sup> Ibidem, Fca. 678, T. 174, fs. 192-196 vto.

Arnaus". En esta ocasión, el Marqués del Bosque se vio obligado a obtener los créditos hipotecarios para acceder a la plena posesión de la finca, pues tanto los propietarios (quienes habían reconocido el dominio directo del marqués sobre la finca en 1855) como el adquirente de la misma se negaron a aceptar el derecho de retracto.

Esta finca, comprensiva de 6,2454 ha. (5 jornales antes de la rectificación de cabida realizada por D. José de Rojas y Galiano)<sup>603</sup>, casa, patio, corral, huerto y derecho a 24,5 horas de agua de la balsa del Cañar, y gravada con un "censo enfiteutico redimible"<sup>604</sup> de 50 rs. 8 mrds., fue dividida por herencia entre Trinidad Méndez Llopis y D<sup>a</sup> Remedios Varó. D. Miguel Carratalá y España (propietario, vecino de Alicante) estaba en posesión de 3 créditos hipotecarios impuestos sobre dicha finca, por un valor conjunto de 7.447,50 pts. (uno de 500 pts contra T. Mendez, otro de 1.950 contra M. Mendez, y otro de 4.997,50 pts contra R. Varó)<sup>605</sup>.

D. M. Méndez Solaez, en nombre de su hija, solicitó autorización al Juez de primera instancia de Alicante, el 15-X-1877, para efectuar la venta de las 2,0818 ha. que le habían correspondido. Concedida la licencia el día once de

-----  
<sup>603</sup> 52 tahullas: 21 th. de lomas incultas (2,5221 ha.) y 31 th. de tierra regadío (3,7232 ha.). Ibidem, Fca. 44, T. 174, Lib. 10 Aguas, fs. 50-54 vto.

<sup>604</sup> Gravamen, censo parte enfiteúutico y parte redimible -impuesto con motivo del establecimiento otorgado a Juan Arnau el 25-XII-1645-, reconocido por D<sup>a</sup> Remedios Varó el 12-II-1855.

<sup>605</sup> Ibidem, T. 8, Lib. 1 Aguas, fs. 137-142; y T. 143, Lib. 7 Aguas, fs. 2-5 vto.

noviembre, fue fijado el remate el día 5-I-1878, siendo adquirida la finca en dicha subasta por D. Ramón García Valor por 2.687 pts. Al solicitar la correspondiente licencia señorial con motivo del otorgamiento de la escritura de venta, el marqués requirió del rematante la cesión de la finca en virtud del derecho de retracto el 14-II-1878. "No habiendo producido los espresados medios los resultados apetecidos, El Señor Conde de Casas Rojas, Marques del Bosch interpuso demanda de retracto contra el rematante García y contra D. V. Mayor Pérez como marido de la dueña util D<sup>a</sup> Trinidad, y aplazados en forma consignó en la Caja de Depósitos de la Provincia las 2.687 pts precio de la venta en cuestion= seguido el pleyto por sus trámites legales, en 24 Abril de 1879 recayó Sentencia, que adquirió el carácter de firme, condenando al Garcia a la cesión del remate y a D<sup>a</sup> Trinidad al otorgamiento de la escritura de venta con condena de costas"<sup>606</sup>.

D. José de Rojas y Canicia había adquirido, con anterioridad a la promulgación de dicha sentencia, los créditos hipotecarios impuestos sobre la finca a favor de D. M. Carratalá; quien, a su vez, había instado demanda ejecutiva por impago de deudas, el 25-II-1878, contra los bienes de R. Varó, por una cuantía de 8.457 pts (6.947,50 pts de deudas, más 1.509,50 pts de intereses), y, el 8-III-1878, contra los bienes de D<sup>a</sup> T. Méndez, por una cuantía de 674,73 pts (500 el crédito,

---

<sup>606</sup> Ibidem, T. 154, Lib. 8 Aguas, fs. 240-244 vto.

y 174,73 pts de intereses)<sup>607</sup>. Esta cesión de créditos fue efectuada, el 24-IV-1878, a cambio del importe de los mismos y sus intereses correspondientes (9.131,73 pts), y de la mitad de los gastos de los autos ejecutivos instados contra los deudores.

La escritura de venta a favor del Conde de Casas Rojas fue otorgada, el 5-VIII-1879, por el Juez de primera instancia de Alicante, ante la rebeldía de R. García Valor. De las 2.687 pts estipuladas como precio de venta, D. José de Rojas se retuvo 1.400,37 pts para cubrir las deudas procedentes de las siguientes partidas:

- por el crédito cedido y sus intereses: 659,73 pts.
- por las costas del juicio con Carratalá: 195 pts.
- por las costas del juicio de retracto: 311,19 pts.
- por la tercera parte del censo enfiteútico impuesto sobre la finca: 139,55 pts.
- por las pensiones vencidas de dicho censo: 41,16 pts.
- por la cuantía del luismo (el 2 %): 53,74 pts<sup>608</sup>.

D. José de Rojas y Galiano da "así por pagados los creditos. Cancela la hipoteca y deja sin efectividad las anotaciones anteriores relativas a los censos enfiteuticos".

-----  
<sup>607</sup> Ibidem, T. 8, Lib, 1 Aguas, fs. 165-168 vto., y T. 124, f. 158.

<sup>608</sup> Es éste el único caso localizado en el que se detalla como cuantía del luismo la quincuagésima parte (un 2 %) del precio de venta estipulado.

Las 4,1636 ha. que correspondieron a D<sup>a</sup> Remedios Varó fueron adquiridas por un procedimiento similar. Gravadas con dos préstamos hipotecarios a M. Carratalá (uno impuesto por R. Varó por si, y otro como fiadora de M. Méndez), de una cuantía de 5.897,50 pts, fueron vendidas a Ramón Sarrió Valor; aunque el Marqués del Bosque interpuso "demanda de tanteo" en el Juzgado de primera instancia de Alicante para adquirirlas por la cantidad en que habían sido valoradas (el 7-III-1878). El marqués obtuvo estos créditos (como ya se puso de manifiesto) una vez interpuesta demanda por impago de deudas por el anterior propietario acreedor<sup>609</sup>, mostrándose como parte en los mismos. Tras la subasta ordenada por el Estado para satisfacer las deudas (siendo justipreciada la finca en 9.981 pts) y no haberse rematado la finca por falta de postor, D. José de Rojas solicitó su adjudicación en pago de sus créditos, por las dos terceras partes de su tasa pericial, el 12-I-1880. La escritura de cesión en pago fue otorgada por el Estado el 12-VI-1880, ante la muerte de la encausada y la carencia de herederos. En la inscripción de la finca a su favor, el marqués hacía constar la cancelación de las 3 hipotecas y el hecho de dejar sin efecto los dos capitales de censo, "pues con esta adquisición el Marqués reúne la propiedad y usufructo de la finca, puesto que esos capitales de censo respondían a su favor, como Marqués del Bosque"<sup>610</sup>.

-----  
<sup>609</sup> Ibidem, Fca. 52, T. 8, Lib. 1 Aguas, fs. 165-168 vto., y T. 124, f. 158.

<sup>610</sup> Ibidem, Fca. 44, T. 154, fs. 243-244 vto.

El acceso a la propiedad plena de la tierra por los antiguos titulares del señorío no vino posibilitado por el endeudamiento campesino más que en algunas ocasiones. Al margen de las ya expuestas (en las que precisó la compra de las obligaciones hipotecarias), existen algunos casos de cesiones de tierras en pago de deudas, en las que no se menciona el empleo de ninguna medida de fuerza. Por este procedimiento fueron adquiridas tan sólo 2,4999 ha. de tierra de secano y huerta y 17 horas 24 minutos de la Balsa Nueva (en tres operaciones de compra).

Más frecuente que el cobro de pensiones atrasadas y el resto de las rentas derivadas del dominio directo, fue la condonación de las mismas, de manera más generalizada a partir de los años 70. Entre 1872 y 1886 (de modo predominante en esta última década) fueron condonados por D. José de Rojas y Canicia los luismos, pensiones y censos existentes sobre las fincas obtenidas en 23 adquisiciones (tierra y agua conjuntamente), con un total de 29,722642 ha. (24,40 % de toda la superficie adquirida). Sólo en un caso (según los datos proporcionados por los libros del Registro de la Propiedad), esta condición fue acordada con anterioridad a los setenta; en 1863 fue perdonada la satisfacción del luismo correspondiente a la venta, de 6,2454 ha. de huerta y secano y 12 horas de agua de la balsa del "Horno de Vidrio" (gravadas con un censo redimible de 40 libras), efectuada por los hermanos Antón Giner a favor del Marqués del



Bosque<sup>611</sup>.

A la condonación del luismo se alude más comúnmente, la condonación de los capitales de censo y las pensiones atrasadas se produce en un menor número de ocasiones, o por lo menos son más escasas las referencias existentes al respecto.

Un ejemplo del primer caso lo constituye la adquisición de 1,0008 ha. de tierra huerta arbolada y 13 horas de agua de la balsa Nueva, efectuada en 1885 por 3.500 pts. El importe de los dos censos redimibles que gravaban la finca (de 4 rs. 18 cént, y 3 rs. de pensión anua respectivamente), fueron condonados por el marqués, quien hizo constar en la anotación registral que "(...) como tambien se resumen en el repetido señor Marqués del Bosque el dominio directo y útil de la misma finca de este asiento, resulta que aparece libre ahora de toda responsabilidad ó gravamen (...)"<sup>612</sup>.

Por lo que respecta al segundo caso, es significativa, igualmente, la compra, por 4.000 pts, de 1,321142 ha. huerta, gravadas con un capital de censo redimible de 2,85 pts de pensión anual (según el reconocimiento de censo efectuado en 1851), a R. Arnau Yvorra (viuda, Aguas) en 1886, a quien le fueron condonadas las deudas por luismo (625 pts) y por las pensiones atrasadas de 19 anualidades (66,29 pts), en una cuantía total de 691,29 pts<sup>613</sup>.

---

<sup>611</sup> Ibidem, Fca. 6, T. 8, Lib. 1 Aguas, fs. 16-19 y 64.

<sup>612</sup> Ibidem, Fca. 741, T. 228, Lib. 12 Aguas, fs. 43-47 vto.

<sup>613</sup> Ibidem, Fca. 281, T. 228, Lib. 12 Aguas, f. 249 vto.

D. José de Rojas y Galiano continuó el proceso de ampliación de su patrimonio rústico en Aguas iniciado por su padre, aunque los totales adquiridos fueron mucho más reducidos. La distribución de ese patrimonio en atención a su origen (adquisición por herencia o por compra) y a las características de cultivo de la tierra aparece reflejada en el cuadro XVI<sup>614</sup>. Al igual que en los cuadros anteriores, referidos a la propiedad de D. José de Rojas y Canicia, en los siguientes tampoco aparecerá comprendida en el total la superficie ocupada por el balneario de Aguas de Busot.

---

<sup>614</sup> La ligera diferencia existente entre el total del patrimonio inscrito a nombre de D. José de Rojas y Canicia y el que aparece registrado a nombre de D. José de Rojas y Galiano en concepto de herencia es una consecuencia de alguna corrección de cabida efectuada por este último, con motivo de las agrupaciones de fincas que llevó a cabo.

CUADRO XIX. DISTRIBUCION DEL PATRIMONIO RUSTICO DE D. JOSE DE ROJAS Y GALIANO SEGUN SU ORIGEN Y CARACTERISTICAS.

TIPOS	COMPRAS		HERENCIAS		TOTAL	
	SUPERF(Ha)	%	SUPERF(Ha)	%	SUPERF(Ha)	%
MONTE	-----	---	693,28641	85,33	693,28641	85,33
REGADIO	5,074515	0,62	39,631782	4,88	44,706297	5,50
SECANO	26,054344	3,21	33,686738	4,15	59,741082	7,36
HTA/SEC	6,05	0,75	8,6474	1,06	14,6974	1,81
TOTAL	37,178859*	4,58	775,25233	95,42	812,43119	100,00

FUENTE: Registro de la Propiedad de Jijona. Elaboración Propia.

\*De este total han sido deducidas dos adquisiciones con una cabida de 0,2403 ha. huerta, permutadas por 1,0825 ha. secano, incluidas en el cómputo.

En esta ocasión, la superficie adquirida, en la que predomina el secano, representa una pequeña proporción del patrimonio total, pues sólo supone el 4,58 % de toda la superficie registrada. Considerando únicamente las tierras cultivables, esa proporción aumenta hasta el 31,20 %, pero no llega a alcanzar las cotas anteriores, puesto que el 68,80 % (81,96592 ha.) de esta superficie (119,14478 ha.) le ha sido transmitida por herencia (en su mayor parte producto de las adquisiciones realizadas por D. José de Rojas Canicia). A pesar de la realización de estas operaciones de compra, la superficie montuosa e inculta continúa constituyendo la parte más importante

de su patrimonio, concentrando el 85,33 % de su patrimonio rústico, mientras que las tierras cultivadas sólo suponen el 14,67 % del mismo.

Si comparamos los datos ofrecidos por este cuadro con los reflejados en el cuadro XIII, comprobaremos una diferencia cualitativa entre los diversos grupos que integran la superficie que D. José de Rojas y Galiano obtuvo por herencia de D. José de Rojas y Canicia, y los que integraban el total del patrimonio poseído por este último. Es significativo el cambio experimentado, evidenciado en un incremento de la superficie de monte, alrededor de las 48 hectáreas (48,21791 ha.), y un considerable decremento relativo de la superficie de secano (alrededor de 30 hectáreas -29,450937 ha.-), regadío (próxima a las 14 hectáreas -13,788311 ha.-) y secano y regadío indiferenciado (5,0618 ha.); puesto que la superficie cultivada en conjunto ha sufrido una reducción del 37,08 %. Este cambio de uso del suelo probablemente venga motivado, bien por el abandono del cultivo en ciertos sectores, ante sus bajos rendimientos o la dificultad de su laboreo, bien por la reconversión de ciertas áreas a espacios de monte, generalmente pinadas, en algunas de las nuevas fincas creadas a partir de la unión de otras de reducidas dimensiones adquiridas por D. José de Rojas y Canicia. Este cambio de dimensiones es perceptible en los cuadros XVII, XVIII Y XIX.

Y es que efectivamente, D. José de Rojas y Galiano, además de proseguir la ampliación de su patrimonio rústico mediante la adquisición de tierras, se ocupó de concentrar gran

parte de la superficie que, fragmentada en pequeñas unidades, le había sido transmitida por herencia en fincas de mayor tamaño, entre las 20 y las 40 hectáreas, inscribiéndolas en 1906. Este es el caso de heredades como la "Hoya del Castellet", con una cabida de 36,0071 hectáreas e integrada por 3 fincas<sup>615</sup>; "Las Cisternas", constituida por 37,692703 hectáreas y 29 fincas<sup>616</sup>, o "La Cava", con 25,6960 hectáreas e integrada por 9 fincas<sup>617</sup>; e incluso de otras de menores dimensiones, como la "heredad del Collado", con una cabida de 2,4020 hectáreas (20 th.) secana y huerta e integrada por 9 fincas<sup>618</sup>, o el "Huerto de Llopis", con 6,2454 hectáreas (52 th.)<sup>619</sup>.

---

<sup>615</sup> Ibidem, Fca. 734, T. 395, Lib. 22 Aguas, fs. 56-58. En total 305 tahullas 1 octava 7 brazas, distribuidas entre 14,4124 ha. (120 th) de tierra panificada plantada de almendros, algarrobos y olivos, y 21,5947 ha. (185 th. 1 oct. 7 br.) de lomas vesantes; con casa y corral de ganado.

<sup>616</sup> 312 th. 5 oct. 30 br. distribuidas del siguiente modo: 6,0652 ha. (54 th. 4 oct.) de tierra huerta; 11,904913 ha. (99 th. 1 oct.) de secano, y 19,72259 (159 th. 30 br.) de terreno montuoso e inculto. Ibidem, Fca. 1.424, T. 395, Lib. 22 Aguas, fs. 178-183 vto. y T. 425, Lib. 24 Aguas, fs. 118-124.

<sup>617</sup> 213 th. 7 oct. 19 br., distribuidas entre 10,138127 ha. (84 th. 3 oct. 10 br.) de huerta y 15,557873 ha. (129 th. 4 oct. 9 br.) de lomas con algunos pinos; con fuente de nacimiento y balsa, casa, garroferal y corral. Ibidem, Fca. 1.378, T. 395, Lib. 22 Aguas, fs. 48 vto-51.

<sup>618</sup> Ibidem, Fca. 1.425, T. 395, fs. 184 y ss., y T. 449, f. 39.

<sup>619</sup> 2,5222 ha. (21 th.) de lomas incultas y 3,7232 ha. (31 th.) de huerta, con 29,5 horas de agua de la balsa del Cañar, y con casa, 3 corrales, bodega, galería y cuadra. Ibidem, Fca. 44, T. 174, Lib. 10 Aguas, fs. 50-54 vto.

CUADRO XX. DISTRIBUCION DEL PATRIMONIO RUSTICO DE D. JOSE DE ROJAS Y GALIANO SEGUN SU ORIGEN Y TAMAÑO

TAMAÑO	ADQUIRIDAS POR COMPRA				ADQUIRIDAS POR HERENCIA			
	SUPERF(Ha)	%	N <sup>o</sup>	%	SUPERF(Ha)	%	N <sup>o</sup>	%
<1 Ha	8,930162	24,02	27	77,14	2,008523	0,26	5	13,89
>1-3	10,094997	27,15	6	17,14	4,2318	0,55	2	5,55
>3-5	-----	---	--	---	7,5611	0,97	2	5,55
>5-10	6,05	16,27	1	2,86	37,4529	4,83	6	16,67
>10-20	12,1037	32,56	1	2,86	99,2161	12,80	6	16,67
>20-50	-----	---	--	---	431,4137	55,65	14	38,89
>50-100	-----	---	--	---	-----	---	--	---
>100	-----	---	--	---	193,3682	24,94	1	2,78
TOTAL	37,178859	100,00	35	100,00	775,25232	100,00	36	100,00

FUENTE: Registro de la Propiedad de Jijona. Elaboración Propia.

En lo que respecta a las fincas adquiridas por compra, continúan predominando aquellas que presentan una cabida inferior a la hectárea, que suponen el 77 % de este grupo, mientras concentran solamente el 24,02 % de la superficie adquirida. Las fincas con una cabida inferior a las 5 ha. acumulan solamente el 51,17 % de la superficie, cuando representan el 94,28 % de las fincas adquiridas. En el otro extremo, las fincas superiores a esta cabida (pero inferiores a 13 ha.) suponen solamente el 5,72 % de las fincas adquiridas, y sin embargo concentran cerca de la mitad de la superficie adquirida (48,83 %).

Por lo que se refiere a los bienes transmitidos por herencia el cuadro refleja una situación inversa. La mayor proporción de superficie y de fincas corresponde al grupo que integra las heredades situadas entre las 20 y las 50 ha (tanto superficies montuosas como fincas de tierra cultivable -tanto las transferidas con esas dimensiones como las agrupadas-). Las fincas inferiores a 1 hectárea no suponen más que el 13,89 % de las parcelas, y concentran únicamente el 0,28 % de la superficie. En conjunto, el grupo inferior a las 5 hectáreas comprende menos del 25 % (24,99 %) de las fincas heredadas, y reúne sólo el 1,78 % de la superficie; sin embargo, el superior a las 20 hectáreas acumula más del 80 % de la superficie mientras no supera el 42 % (41,67 %) de las fincas registradas en concepto de herencia.

Si comparamos la distribución del total del patrimonio de D. José Rojas Canicia con la que presenta el patrimonio heredado por D. José Rojas y Galiano, comprobaremos el cambio experimentado en la misma (cuadro XVIII), resultado del proceso de concentración comentado con anterioridad. Disminuye el número global de fincas registradas, así como la proporción de los tres grupos inferiores a las 5 hectáreas, mientras se incrementan los restantes, especialmente el que agrupa a las fincas situadas entre las 20 y las 50 hectáreas. Por lo que respecta a la superficie comprendida en estos grupos, sufre una evolución similar; aunque la disminución relativa no es tan considerable, como tampoco lo son los incrementos, que no se producen en todos los grupos superiores a las 5 ha, si es importante tanto el decremento como el aumento en valores absolutos.

CUADRO XXI. DISTRIBUCION DE LAS PROPIEDADES DE D. JOSE DE ROJAS CANICIA Y D. JOSE DE ROJAS GALIANO SEGUN SUS DIMENSIONES.

TOTAL PROP. DE J.R. CANICIA					TOTAL PROP. DE J.R. GALIANO				
TAMAÑO	SUPERF(Ha)	%	N <sup>o</sup>	%	SUPERF(Ha)	%	N <sup>o</sup>	%	
<1 Ha.	13,206023	1,70	25	32,89	10,938685	1,35	32	45,07	
>1-3	20,667142	2,67	14	18,42	14,326797	1,76	8	11,27	
>3-5	31,9903	4,13	8	10,53	7,5611	0,93	2	2,81	
>5-10	55,0792	7,10	9	11,84	43,5029	5,36	7	9,86	
>10-20	128,8865	16,62	8	10,53	111,3198	13,70	7	9,86	
>20-50	332,1381	42,84	11	14,47	431,4137	53,10	14	19,72	
>50-100	-----	---	--	---	-----	---	--	---	
>100	193,3682	24,94	1	1,32	193,3682	23,80	1	1,41	
TOTAL	775,33457	100,00	76	100,00	812,43119	100,00	71	100,00	

FUENTE: Registro de la Propiedad de Jijona. Elaboración Propia.

Las condiciones en que son efectuadas estas adquisiciones son similares a las descritas para el caso anterior; aunque en esta ocasión es menor el número de fincas en las que se declara la sujeción a la señoría directa del Marquesado del Bosch. Hay que tener en cuenta la época en la que estas compras se producen (de modo general entre 1891 y 1907, y



como excepción alguna en 1884), a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando los derechos y rentas señoriales derivados del dominio directo eran difíciles de mantener, y, en numerosas ocasiones, ya habían prescrito, ante la reticencia de los antiguos enfiteutas a satisfacer las cargas señoriales y a reconocer la señoría directa sobre las tierras cuyo dominio útil poseían; actitud que sin duda se habría acentuado durante los últimos años del siglo. Así lo refleja un fragmento consignado en los libros del Registro de la Propiedad de Jijona, con motivo de la inscripción de la finca a favor del marqués después de su adquisición. En esta anotación se hace constar como a pesar de estar sujeta la finca a la señoría directa del Marquesado del Bosch, según atestiguan los asientos precedentes, "(...) ahora en la escritura que se inscribe aun interviniendo dicho Marques nada dice sobre el particular (...) <sup>620</sup>.

Así es como se explica que sólo en el 50,88 % de los casos (considerando conjuntamente adquisiciones de tierra y de agua), que concentran el 31,21 % de la superficie adquirida (1,604922 ha.), se reconozca la señoría directa, frente al porcentaje superior al 90 % alcanzado en las compras efectuadas por D. José de Rojas Canicia. Por lo que se refiere a las adquisiciones restantes, en un 40,35 % de los casos (23) se declara la finca libre de cargas, concentrando el 67,82 % de la superficie adquirida (25,213337 ha. -ya descontadas 0,2403 ha.

-----  
<sup>620</sup> Inscripción efectuada el 30-IV-1884. Ibidem, Fca. 323, T. 194, f. 200.

permutadas por otra finca de cabida superior a la hectárea-), y en un 8,77 % de los mismos, que afectan al 0,97 % de la superficie (0,3606 ha.), no se hace ninguna mención al respecta.

El propósito de D. José de Rojas Galiano se hace patente en el poder notarial conferido a D. Zoylo Martínez Blanquer, en 1892, "Para que pueda comprar absolutamente ó por retracto convencional, en nombre del señor otorgante, bienes inmuebles de toda clase con las condiciones que considera ventajosas, cuyo precio pagará al contado ó á plazos; así como podrá también admitir y aceptar cesiones de bienes en pago de credits que se le deban al Señor otorgante. (...)"<sup>621</sup>.

De la utilización del derecho de retracto no hemos tenido ninguna constancia en los libros del Registro de la Propiedad, aunque si de la cesión por deudas de ciertos bienes, horas de agua únicamente. De este modo fueron obtenidas un total de 56 horas de agua, 38 de la balsa de los Baños<sup>622</sup>, en 1898, y 18 de la balsa del Cantal de Paller, en 1891, de diferentes

-----  
<sup>621</sup> Ibidem, Fca. 743, T. 228, fs. 56-57 vto.

<sup>622</sup> El 23-XII-1898, M<sup>a</sup> García Valor, Irene y M<sup>a</sup> Brotons Yborra, Fco. Yborra Brotons y Vte. y Fco. Yborra Giner cedieron al marqués la propiedad de ese agua como pago de parte de la deuda de 4.976,55 pts que tenían contraída con él con motivo de un pleito seguido por los interesados contra la Sociedad emplazadora de Aguas "La continuación", cuyos gastos fueron abonados por D. José de Rojas Galiano al carecer de metálico dichos litigantes. Las 38 horas de agua fueron vendidas por un total de 3.800 pts, y la cantidad restante hasta completar el total importe de la deuda fue entregado en metálico por los distintos interesados. Ibidem, Fca. 88, T. 228, fs. 184-185.

propietarios<sup>623</sup>. En la transacción de las 38 horas de agua fue condonado por el Marqués del Bosch el derecho de luismo; este hecho tuvo lugar igualmente, junto a la condonación del resto de derechos, en el caso de la venta de tres fincas (con una cabida total de 6,530407 ha. huerta y secano, y 6,5 días de agua de la balsa de la Mata y un día de la de los Baños) efectuada, en 1892, por los hermanos Giner Yborra<sup>624</sup>. En relación a este punto, hemos de reincidir en la situación de rechazo al reconocimiento de la señoría directa, y en la posibilidad de que el marqués se viera obligado a realizar esas condonaciones si pretendía obtener la plena propiedad de las fincas.

Al margen de estas adquisiciones, intentó realizar otras con la fórmula del pacto de retrovendo que, sin embargo, no pudo culminar, al tener lugar la devolución por el transferente, en el plazo convenido, de la cantidad estipulada en el contrato

-----  
<sup>623</sup> D. José de Rojas y Galiano, Marqués del Bosch, acordó el 22-VIII-1891 entregar por cuenta de V. Brotons y Gomis 4.572 pts (en concepto de créditos e intereses pendientes) a D. Ramón Senabre Lledó para cancelar la hipoteca impuesta por V. Brotons. Este último se comprometía a ceder, a cambio, a dicho marqués la propiedad de 18 horas de agua por un valor de 150 pts la hora, a la vez que hipoteca 2,5 tahullas de tierra, 6 horas de agua de la balsa del Cantal del Paller y una casa también a favor del marqués, por el resto del montante de la deuda satisfecha. Ibidem, Fca. 634.

<sup>624</sup> Esta venta fue efectuada el 14-VII-1892 por un total de 12.750 pts. A este respecto, en su inscripción registral a favor de D. José de Rojas y Galiano se hacía constar lo siguiente: "El Excelentísimo Señor D. José de Rojas y Galiano en concepto de Marqués del Bosch inscribe su título de compra-venta del dominio útil de la finca de este número, y renuncia al cobro de los derechos que como tal Marqués, podría reclamar de los vendedores por luismo y demas; cuya renuncia hace en concepto de Marqués del Bosch". Ibidem, Fca. 857, T. 276, fs. 184-186 vto; y T. 306, Fca. 226, fs. 118-121 vto. y Fca. 228, fs. 123-125 vto.

de venta. Estas operaciones de compra, realizadas durante 1884 (20 fincas radicadas en Aguas, de las que fueron retrovendidas, en 1885, 18 a A. Yborra -las dos restantes las obtuvo el marqués por medio de un tercero-) y 1894 (2 fincas que fueron retrovendidas en 1896 a J. Brotons García), afectaron tanto a fincas rústicas como a horas de agua. La cuantía de estas adquisiciones, descontando aquellas que consiguió consolidar, ascendía a un total de 40 horas de agua (16 horas de la balsa de los Baños y 24 horas de la de los Yborras) y 14,9684 ha. de superficie (0,6801 ha. de huerta y 14,2883 ha. de secano), al margen de las casas, eras y corrales.

Las condiciones fijadas en estas ventas a carta de gracia, en las que en unas ocasiones las fincas eran declaradas libres y en otras sujetas al dominio directo, suponían el establecimiento de un corto periodo de tiempo para la retroventa, entre 2 y 6 años, durante el cual los transferentes debían llevar dichas tierras en arrendamiento<sup>625</sup>, siendo desahuciados en el caso de no satisfacer las rentas anuales; a la vez que la obligación para el interesado de abonar los gastos ocasionados por las contribuciones o la reparación y conservación de las heredades.

-----  
<sup>625</sup> A. Yborra vendió de esta forma 22 fincas (20 situadas en Aguas y 2 en Alicante) por un total de 12.500 pts, más las 1.000 pts fijadas por los arrendamientos vencidos. En esta ocasión, el plazo establecido para la retroventa fue de 3 años, más una prórroga de 3 meses. Ibidem, Fca. 622, T. 162, fs. 87-88 vto. A J. Brotons García le fueron concedidos 2 años de plazo, durante el cual mantendría arrendadas las fincas por un precio anual de 75 pts. Ibidem, Fca. 743, T. 228, fs. 56-57 vto y T. 328, f. 81.

#### 4.-El patrimonio solariego subsistente

Al tratar el señorío de Busot quedaron ya consignadas las principales disposiciones testamentarias de los diferentes poseedores del antiguo patrimonio de los Martínez de Vera; disposiciones que evidencian su voluntad integradora y el intento de preservar los restos del antiguo patrimonio solariego de la disgregación, tanto en lo que se refiere a los bienes vinculados como a los libres (adquiridos por diversas vías, principalmente a través de compras, por los sucesivos titulares de ambos señoríos). Este objetivo sería conseguido mediante la cesión en usufructo del cuerpo de bienes comprendido en la herencias (exceptuando las legítimas correspondientes) o la distribución del patrimonio en bloques más o menos homogéneos desde el punto de vista de su ubicación geográfica, entre otras vías; tratando de paliar la incidencia de la legislación desvinculadora, que abrió el camino a la fragmentación de esos patrimonios señoriales.

El enorme patrimonio poseído en el siglo XIX por la casa de Rojas, fruto de la política matrimonial desarrollada por los diversos sucesores de los vínculos (Marqueses del Bosch, Condes de Torrellano, Condes de Casas Rojas, Marqueses de Algorfa), estaba a finales de ese siglo en manos de D. José de Rojas y Canicia, último heredero al que los vínculos propiedad de la familia pasaron intactos, al entrar en su posesión con

anterioridad al restablecimiento, en 1836, de la ley de desvinculación de mayorazgos de 1820. Los bienes libres si fueron objeto de división entre los diversos herederos, que en el caso de Aguas fueron vendidos por éstos a terceros (habitantes del lugar) o a los sucesivos Marqueses del Bosch.

Tras su fallecimiento en 1888, todas las propiedades ubicadas en Aguas de Busot fueron transferidas a D. José de Rojas y Galiano (un total de 38 fincas -tras la concentración efectuada- entre rústicas y urbanas), a quien habían correspondido igualmente todas las situadas en Busot<sup>626</sup>. A su muerte éste mantuvo la tónica de su predecesor, puesto que, exceptuando los bienes que les correspondían en concepto de legítima, el resto fue cedido en usufructo a sus herederos, pasando ya a ser de libre disposición a los descendientes de éstos últimos.

De acuerdo a las disposiciones testamentarias establecidas por D. José de Rojas y Galiano (el 25-XI-1907, ante

---

<sup>626</sup> Ibidem, Fca. 851, T. 276, fs. 156-160 vto, y T. 425, Lib. 24 Aguas, fs. 96-100 vto.

Lorenzo Irizar Avilés)<sup>627</sup> los bienes radicados en Aguas fueron distribuídos entre D<sup>a</sup> Mariana Moreno Pérez de Vargas y D. Miguel de Rojas y Moreno. A D<sup>a</sup> M. Moreno le correspondió el usufructo vitalicio de 61 fincas en pago del remanente del tercio -de las que 41 eran rústicas, representando un total de 155,28613 ha.-, y otras 19 por la cuota viudal -todas ellas rústicas, con una cabida total de 589,99282 ha.-, además de otra en pleno dominio por la mitad de gananciales (de 2,6444 ha. de superficie). En conjunto, obtuvo la propiedad de 747,92335 ha. y de 1.045 horas de agua 6 minutos. Las horas de agua procedían de las siguientes balsas:

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| -Baños: 94 h.            | -Nueva: 84 h.             |
| -Cañar: 56 h. 6 m.       | -Cantal del Paller: 31 h. |
| -Campellos: 12 h.        | -Yborras: 24 h.           |
| -Gils: 24 h.             | -Mata: 288 h.             |
| -Horno de Vidrio: 288 h. | -Ciscar: 228 h.           |

-----

<sup>627</sup> El patrimonio de D. José de Rojas y Galiano ascendía a un total de 3.404.079,21 pts (1.169.723,93 pts en concepto de gananciales). Cada uno de sus tres hijos recibió del mismo, en concepto de legítima, 377.975,45 pts, y, por el remanente de la mejora del tercio (755.550,94 pts tras la deducción de la cuota viudal usufructuaria, que ascendía a 377.675,47 pts, y de la que correspondería a cada hijo por la nuda propiedad 125.891,83 pts), otras 251.783,65 pts. La hijuela de D. Miguel de Rojas y Moreno estuvo constituida por bienes localizados en Aguas y en Busot. El patrimonio recibido por D<sup>a</sup> Mariana Moreno estaba valorado en un total de 2.057.726 pts, 809.793,22 pts por los bienes que obtuvo en pleno dominio (en concepto de bienes aportados al matrimonio -224.931,25 pts-, del importe de la mitad de gananciales -584.861,97 pts-, y otros gastos (25.280,29 pts), y 1.222.652,50 pts en usufructo vitalicio (por la cuota viudal -377.675,47 pts- y el legado del tercio de libre disposición -844.977,02 pts-). Ibidem, Fca. 851, T. 276, fs. 156-160 vto.

El "balneario de Busot" con las tierras que lo rodeaban, montes, bosques inmediatos y edificaciones en él enclavadas, junto con todos los bienes radicados en Aguas debían ser adjudicados por sorteo, como un sólo lote, a uno de los herederos. El valor del mismo vendría dado por el consignado en las hijuelas del anterior propietario y las escrituras de adquisición, más un incremento de 400.000 pts por las mejoras realizadas. En caso de que ese valor superase el importe de la legítima estricta, y hubiese de adjudicársele parte del lote en usufructo en concepto de mejora, tendrían ese carácter las fincas más alejadas del establecimiento, y los bosques y montes que lo rodean. El exceso subsistente tras este ajuste sería paliado con la deducción del lote de las fincas necesarias<sup>628</sup>.

Este bloque de la herencia correspondió, mediante sorteo, a D. Miguel de Rojas y Moreno; pero a tenor de su excesiva valía, varias fincas inmediatas al balneario fueron adjudicadas en concepto de mejora; el resto le sería adjudicado en usufructo tras la muerte de D<sup>a</sup> Mariana Moreno. Además del balneario (que tras diversas modificaciones presentaba una cabida de 3,9925 ha.), obtenido en plena propiedad, por la herencia de D. José de Rojas Galiano recibiría el usufructo vitalicio (por su parte del tercio de mejora) de 60,795512 ha. (al margen de las fincas urbanas, eras, corrales u horas de agua).

---

<sup>628</sup> Ibidem, Fca. 851, T. 425, Lib. 24 Aguas, fs. 96-100 vto.



D<sup>a</sup> Mariana Moreno (fallecida en 1929) dispuso en su testamento (testamento particional en 9-IV-1926, ante L. Irizar) que los bienes que le había legado su marido en usufructo pasaran con ese mismo carácter a sus hijos<sup>629</sup>. La parte de esos bienes ubicada en Aguas fue distribuída entre D. Miguel y D. José de Rojas y Moreno; correspondiendo, al primero de ellos, 128,18644 ha. del tercio de libre disposición y 589,99282 ha. por la cuota viudal; mientras que el segundo sólo recibía 27,089685 ha. por el concepto señalado en primer lugar. Este hecho nos refleja el interés de los sucesivos propietarios por mantener una cierta unidad e identidad de las fracciones segregadas del antiguo patrimonio de los Rojas.

Por todos estos conceptos, D. Miguel de Rojas, Marqués del Bosch, obtuvo, en Aguas de Busot (y al margen de otras propiedades situadas en otros términos como Alicante, Elche o Lorca), 778,98477 ha. en usufructo, además del Balneario, en plena propiedad, y 1.205 horas de agua procedentes de 9 de las

-----

629 Los bienes fueron adjudicados en usufructo vitalicio, estableciéndose (al igual que hizo D. José de Rojas y Galiano) que si alguno de los herederos carecía de "descendientes legítimos y de legítimo matrimonio canónico", su herencia pasaría, a su fallecimiento, a sus hermanos, por partes iguales y también en usufructo. Si alguno de sus herederos tuviera descendientes con las condiciones señaladas, éstos adquirirían, al fallecimiento de sus padres, el pleno dominio del patrimonio adjudicado en usufructo (bien directamente bien adquirido por sucesión de sus hermanos). En caso de carecer de descendientes legítimos, el último usufructuario podrá disponer de ellos libremente por testamento. La venta de estos bienes estaba permitida con la condición de subrogar otros bienes de un valor equivalente (preferentemente inmuebles y valores públicos) en su lugar, y siempre que lo hubiese puesto en conocimiento del resto de herederos. Ibidem, Fca. 857, T. 463, fs. 203-206, y Fca. 1.378, T. 395, Lib. 29, f. 49.

fuentes que habían existido en el lugar (a pesar de su desecación, estos derechos seguían inscritos en el Registro de la Propiedad), distribuídas del siguiente modo:

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| -Baños: 85 h.            | -Nueva: 368 h. 30 m.     |
| -Cañar: 29 h. 30 m.      | -Cantal del Paller: 2 h. |
| -Campellos: 12 h.        | -Yborras: 24 h.          |
| -Gils: 24 h.             | -Ciscar: 372 h.          |
| -Horno de Vidrio: 288 h. |                          |

La importancia del Registro de la Propiedad Expropiable para analizar el estado de la gran propiedad de origen señorial a principios del siglo XX ha sido ya puesto de manifiesto en páginas anteriores. Los datos que esta fuente nos aporta reafirman lo expuesto tras la consulta de los libros del Registro de la Propiedad, aunque, como en el caso de Busot, no son totalmente coincidentes, tal vez porque parte de las fincas no estuviera comprendida en la categoría de las expropiables o por irregularidades en la inscripción. A este respecto diversos autores han señalado los inconvenientes que puede presentar esta

fuentes<sup>630</sup>.

La superficie ubicada en Aguas propiedad de D. Miguel de Rojas y Moreno, en concepto de usufructuario fiduciario, consignada en el Registro de la Propiedad Expropiable ascendía a un total de 535,9701 ha. distribuídas del siguiente modo<sup>631</sup>:

- regadío: 67,6229 ha.
- inculto, pastos y pinos: 424,1346 ha.
- almendros y arboricultura de secano: 42,8915.
- cereales: 1,3211 ha.

D. José de Rojas y Moreno, Conde de Casas Rojas, según esta fuente estaba en posesión de 25,7467 ha., distribuídas en:

- huerta: 7,6713 ha.
- almendros, algarrobos y arboricultura de secano:  
4,4256 ha.

-----

<sup>630</sup> En relación a las dudas que puede albergar la veracidad de los datos (si se produjo o no una completa remisión de los estadillos, si todas las tierras afectadas fueron declaradas por los propietarios; si existió una comprobación de las ocultaciones intencionadas), al excesivo grado de generalización por lo que respecta a la orientación productiva de los cultivos, o al hecho de que al utilizar una base municipal, los patrimonios distribuídos entre diversos términos no fueran incluidos finalmente. ROMERO GONZALEZ, J. y SALORT VIVES, S: "Pequeña y gran propiedad en Alicante ante la Reforma Agraria, 1933/34. Estudio preliminar". *Investigaciones Geográficas*, nº 8, Alicante, 1990, p. 43. MATA OLMO, R. y OTROS: "Aspectos de la propiedad de la tierra en la provincia de Madrid durante los años 30. Una valoración de los datos del Registro de la Propiedad Expropiable". *Estudios Geográficos*, nº 185, 1985, pp. 137-143.

<sup>631</sup> Datos cedidos por cortesía de D. Antonio Gil Olcina

-pastos: 13,6498 ha.

En conjunto, el Marqués del Bosque había visto incluídas en este registro, en atención a lo dispuesto por el apartado 13 de la base 5ª, 877,9274 ha. de su patrimonio radicado en la provincia de Alicante (situadas en Aguas de Busot y Campello); y el Conde de Casa Rojas 241,4211 ha. (situadas en Rojales, Alicante, Elche, Busot y Aguas de Busot) por los apartados 10º y 12º<sup>632</sup>.

A la muerte de D. Miguel de Rojas, fueron declarados, por el Juzgado de primera instancia de Albacete, herederos abintestato D. Carlos y D. José de Rojas y Moreno, Conde de Torrellano y Conde de Casas Rojas respectivamente, otorgándose la consiguiente escritura de partición el 5-II-1940 (ante Mariano Castañón, Alicante). Todo el patrimonio ubicado en Aguas, aunque más reducido, fue adjudicado a D. José de Rojas y Moreno, al igual que había sucedido con el radicado en Busot. Efectivamente, el endeudamiento de D. Miguel de Rojas propició la pérdida del balneario, bien que poseía en pleno dominio, y, aunque existía demanda de embargo contra diferentes fincas situadas en ese término, pudo evitarse su pérdida por el hecho de haber sido poseídas únicamente en usufructo. Con ese carácter fueron

---

<sup>632</sup> ROMERO GONZALEZ, J. y SALORT VIVES, S. (1990): Op. Cit., pp. 42-43 y 46-49.

gestionadas por los distintos acreedores hasta la muerte del Marqués del Bosch, momento en que fueron transferidas, también en usufructo, a sus hermanos.

D. Emilio Degoy promovió en el Juzgado de primera instancia del Distrito de Atarazanas (Barcelona), en 1916, autos ejecutivos contra D. Miguel de Rojas, en reclamación de cantidad (61.800 pts). En ellos fue sentenciado el embargo del usufructo vitalicio de 24 fincas que habrían de corresponderle a la muerte de D<sup>a</sup> Mariana Moreno, su madre. Por providencia de fecha 20-V-1916, el Juez de primera instancia de Jijona ordenó la anotación preventiva de embargo<sup>633</sup>. También la S.A. "Omniun Barcelonés" instó una demanda de ese tipo (en el Juzgado de primera instancia del distrito de la Barceloneta, Barcelona) contra el Marqués del Bosch, para hacer efectivo un préstamo de 350.000 pts -al 5 % de interés y con un plazo de 12 años-<sup>634</sup>; en garantía del cual dicho marqués había hipotecado el derecho de usufructo sobre 11 fincas y el pleno dominio de otra, el balneario de Aguas de Busot (escritura de préstamo con hipoteca

-----  
<sup>633</sup> Ibidem, Fca. 1.378, T. 395, Lib. 22 Aguas, f. 50.

<sup>634</sup> D. Miguel de Rojas adeudaba a dicha compañía 100.000 pts en metálico, y las 250.000 restantes por el importe de 1.000 acciones, de 250 pts de capital nominal cada una e interés al 5,5 % anual, emitidas por la S.A. "Crédito y Fomento de Ahorros" (Barcelona), que había adquirido la compañía por orden suya. A la seguridad de la devolución de la suma adeudada, el pago de dos años vencidos, de los intereses y parte correspondiente de la 3<sup>a</sup> anualidad, y de otras 25.000 pts (costas y perjuicios en caso de juicio), D. Miguel de Rojas hipotecó las fincas mencionadas.

otorgada el 25-VI-1914)<sup>635</sup>.

En la tercera subasta efectuada, fue adjudicado el balneario, junto al usufructo de las 11 fincas, a la S.A. "Omniun Barcelonés", por un total de 310.000 pts, a pesar de la apelación interpuesta por D. Miguel de Rojas ofreciendo una cantidad mayor (auto de aprobación del remate promulgado en 3-X-1916, en el Juzgado de primera instancia del distrito de la Barceloneta)<sup>636</sup>.

Tras este suceso, D. José de Rojas y Moreno recibió (al margen de las fincas rústicas o de otro tipo) por la herencia de su hermano el usufructo vitalicio de 774,70404 ha., que añadidas a las que le había legado su madre en Aguas, configuraron un patrimonio de 801,79372 ha., el 43,11 % de la superficie del término. Además. D. José de Rojas tenía inscrita la propiedad de 1.585 horas de agua 6 minutos (procedentes de las

-----  
<sup>635</sup> La compañía "Omniun Barcelonés" promovió autos ejecutivos contra el marqués por haber tenido lugar una de las causas del vencimiento de la obligación; puesto que, a pesar de haberse requerido del deudor el compromiso de no constituir ninguna hipoteca más sobre la misma, éste la había hipotecado también a favor de D. Emilio Degoy, en garantía de un préstamo de 100.000 pts al 5 % de interés. Al igual que en la otra obligación, se establecía el vencimiento del plazo de no abonarse puntualmente los semestres, se exigía un seguro de incendio sobre la finca, y se fijaba el precio de subasta de la misma (en caso de que fuera necesaria) en 400.000 pts.

<sup>636</sup> La S.A. "Omniun Barcelonés" ofreció 245.000 pts por el balneario, y 65.000 pts por el segundo lote (las fincas poseídas únicamente en usufructo). El demandado subió la oferta a 550.000 pts por el primer lote y 100.000 pts por el segundo, y, aunque en un principio le fue admitida la postura (a condición de satisfacer su importe en 5 días), fue denegada finalmente en 9-VI-1916, fecha en la que se estableció como definitiva la postura de la citada compañía. Ibidem, Fca. 885. T. 425, Lib. 24 Aguas, fs. 90-95 vto., y T. 437, Lib. 25 Aguas, fs. 191-197 vto.

diversas herencias)<sup>637</sup>:

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| -Baños: 128 h.           | -Nueva: 368 h. 30 m.      |
| -Cañar: 56 h. 36 m.      | -Cantal del Paller: 31 h. |
| -Campellos: 12 h.        | -Yborras: 24 h.           |
| -Gils: 24 h.             | -Mata: 288 h.             |
| -Horno de vidrio: 288 h. | -Ciscar: 372 h.           |

A su muerte (ocurrida el 2-III-1973), fueron declaradas herederas de las propiedades que poseía plenamente su viuda, D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Binto Da-Silva, y su hija adoptiva, D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Victoria de Rojas y Rosado-Giménez, (escritura de partición en 22-V-1975), puesto que los bienes que poseía únicamente en usufructo (por herencia de D. José de Rojas y Galiano, D<sup>a</sup> Mariana Moreno Pérez de Vargas y D. Miguel de Rojas y Moreno) fueron adjudicados a D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Teresa de Rojas y Roca de Togores, única descendiente consanguínea legítima, ya de libre disposición, de acuerdo a las disposiciones testamentarias de sus antecesores. La nueva propietaria mantuvo la tónica seguida por los anteriores poseedores, puesto que, al margen de una finca de dimensiones importantes (27,2751 ha.), procedente de la herencia de D. José de Rojas, cedida a M<sup>a</sup>

-----

<sup>637</sup> Su cuantía no coincide con el total poseído por D. José de Rojas y Galiano, tal vez debido a los diferentes ajustes realizados o a la falta de inscripción en un principio de alguna de las fincas.

Victoria de Rojas<sup>638</sup> y 6 pequeñas segregaciones por venta (un total de 2,718787 ha.), donó, en 1987, la mayor parte de esas fincas por terceras partes proindiviso a su tres hijas (M<sup>a</sup> José, Ana y M<sup>a</sup> Leticia de Borbón y Rojas).

Las disposiciones testamentarias establecidas y las características de la línea sucesoria de la casa de Rojas han preservado el patrimonio territorial conservado del antiguo señorío solariego de Aguas de Busot de la fragmentación y la extinción, procesos éstos que han sufrido la mayor parte de los antiguos patrimonios señoriales tras la abolición del régimen señorial y la promulgación de una serie de normativas legales como las leyes desvinculadoras y desamortizadoras. El mantenimiento final de la mayor parte de ese elemento territorial en manos de un único poseedor, se pone de manifiesto en el siguiente cuadro que recoge los bienes rústicos recibidos por los distintos sucesores al antiguo patrimonio de los Rojas en Aguas de Busot.

-----  
<sup>638</sup> Por una escritura de fecha 31-XII-1972, D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Teresa de Rojas cedió -como única persona a la que actualmente corresponden los derechos que su abuelo, D. José de Rojas y Galiano, estableció para los descendientes de sus hijos- los derechos que pudiera tener el futuro sobre la finca de "La Torreta" a favor de su tío D. José de Rojas y Moreno (actual usufructuario) para que pudiera adquirir el pleno dominio y disponer de ella libremente. Ibidem, Fca. 851, T. 425, Lib. 24 Aguas, fs. 96-100 vto.



CUADRO XXII. DISTRIBUCION DEL PATRIMONIO RUSTICO DE LOS ROJAS EN AGUAS EN RELACION A SUS TITULARES Y SUS CARACTERISTICAS (HECTAR.)

TITULAR	MONTE	REGADIO	SECANO	REG/SEC	TOTAL
J. Rojas Can.	645,0685	53,420093	63,137675	13,7092	775,33547
J. Rojas Gal.	693,28641	44,706297	59,741082	14,6974	812,43118
M. Moreno P.	659,34438	33,987028	42,296544	12,2954	747,92335
M. Rojas Mor.	675,92661	41,163312	53,249775	8,645075	778,98477
J. Rojas Mor.	689,10588	40,89609	57,096677	14,695075	801,79372
M.T. Rojas R.	679,85798	29,20129	57,096677	14,695075	780,85102

FUENTE: Registro de la Propiedad de Jijona. Elaboración Propia.

Las segregaciones efectuadas por los distintos propietarios de las fincas integradas en la herencia de D. José de Rojas y Galiano en Aguas fueron bastante escasas. En conjunto, no sobrepasaron las 15 segregaciones, afectando a una superficie ligeramente superior a las 40 ha. (40,048715 ha.); superficie en la que se hallaban comprendidas las 27,2751 ha. que constituían la finca legada por D. José de Rojas y Moreno a D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Victoria de Rojas y Giménez Rosado (gracias a la cesión en pleno dominio efectuada por D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Teresa de Rojas a su tío, quien la poseía únicamente en usufructo). Por lo que respecta al resto de la propiedad segregada, en una cuantía próxima a las 8 Ha. (7,410428 ha.) pasó a formar parte de los terrenos del balneario, en unas ocasiones por decisión de los marqueses, propietarios del mismo -3,709994 ha. en 1911, tras la partición de bienes de D. José de

Rojas y Galiano-, y en otras por expropiación forzosa cuando ya no pertenecía el balneario a los Rojas -5 expropiaciones, en 1932, por un total de 3,700434-. Las 5,363187 ha. restantes fueron vendidas a terceros. D<sup>a</sup> Mariana Moreno vendía, en 1910, 2,6444 ha. de secano arbolado (que había recibido en pleno dominio de la herencia de su esposo D. José de Rojas y Galiano en pago de su mitad de gananciales) a Angela Saval Soler, vecina de Busot. D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Teresa de Rojas y Roca de Togores efectuó 6 segregaciones, todas de pequeñas dimensiones -entre las 0,179250 ha. y las 0,7705 ha. de secano-, por un total de 2,718787 ha. entre 1978 y 1980<sup>639</sup>.

Finalmente, por lo que respecta al balneario, éste fue objeto de diferentes mejoras por los sucesivos propietarios. Con motivo de su inscripción, en 1891, por la testamentaria de D. José de Rojas y Canicia, aparece descrito, con una cabida de 0,282506 ha. del siguiente modo:

"Dicho Establecimiento es una plaza que se aproxima a la forma rectangular, atravesada por una calle de 4 metros cincuenta centímetros de ancho. Dentro de esta misma plaza y en la misma alineación de la calle, está

---

<sup>639</sup> El 30-VIII-1978 vendió a J.A. Pomata Hospitales (profesor mercantil, Alicante) 0,179250 ha. huerta con un día de agua de la balsa de la Mata; el 26-VII-1979 a A. Prats de la Viña (perito industrial Alicante) 4 fragmentos del Monte Saleretes, por un total de 2,1925 ha. (anexas a otras propiedades de ese comprador), y el 10-V-1980, 0,347037 ha. a Fco. Cortes Ripoll (transportista, Alicante).

el pabellón destinado a balneario, todo de cantería con 8 casetas con sus pilas de marmol correspondientes, 2 piezas de descanso, sin pasillo central y el vestíbulo. En cada rincon de la plaza y formando la misma hay un grupo de casas de planta baja y principal, destinadas a los bañistas, y las cuales se designan con la denominación de grupos del N (varias casas, el horno y la tienda), S, E (varias casas, y 3 pabellones de planta baja a las espaldas -"el baño de los pobres, el asilo de los mismos y la administración"-) y W<sup>640</sup>.

Bajo la posesión de D. José de Rojas y Galiano fue incrementada su superficie hasta una cabida total de 3,9925 ha, y se realizaron modificaciones en las instalaciones. Además de la antigua casa de los Baños propiamente dicha, el recinto incluía el Hotel Miramar (con 4 plantas y habilitado para fonda y casino, en cuya planta baja estaba situado el nuevo establecimiento balneario), el Hotel Villaclementina (2 plantas), grupos de casas destinados a los bañistas y otras dependencias de servicio y ocio, más parques, montes, paseos, jardines y tierras de labor y huerta.

Tras su adjudicación a la S.A. "Omniun Barcelonés", fue vendido por esta compañía al Patronato Nacional Antituberculoso (autorizado por Orden del Ministerio de la Gobernación en

---

<sup>640</sup> Ibidem, Fca. 855,

26-II-1941) por 1.125.000 pts. Dicho Patronato fue suprimido por Decreto-Ley de 29-XII-1972, pasando sus bienes al Organismo Autónomo de Administración Institucional de la Sanidad Nacional, dependiente de la Dirección General de Sanidad; quedando integrado posteriormente (por decreto de 4-VII-1977), tras la reestructuración de la administración estatal, en el Ministerio de Sanidad y Consumo. En 25-XI-1986 fue incorporado al Patrimonio del Estado, y, por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 27-I-1989 (con una cabida de 9 ha.), fue declarado bien alienable, anunciándose, el 26-II-1988, la venta directa de esta finca con promoción pública de ofertas. En 20-VII-1989, se otorgaba la escritura de venta a la empresa madrileña "PROGNOSIS, S.A." (única pretendiente), que ofreció 123.374.855 pts por la finca.

CAPÍTULO 5

EL SEÑORÍO DE AGOST

## EL SEÑORIO DE AGOST

El término de Agost, con una extensión superficial de 6.578 hectáreas, se encuentra situado al noroeste del municipio de Alicante, en el límite occidental de la comarca del Campo de Alicante. Aunque algunos autores señalan su pertenencia, desde el punto de vista paisajístico, al Valle del Vinalopó, se inclinan por ubicarlo en la comarca del Campo de Alicante, dada su situación en la transición a la misma y su vinculación con la capital alicantina<sup>1</sup>. Presenta un carácter montañoso y allanado, puesto que está configurado por un conjunto de relieves montañosos, fundamentalmente cretácicos, que lo bordean (la Serreta Larga y las estribaciones meridionales de la Sierra del Cid al oeste; el Maigmó y el Ventós al Norte; las Sierras del Castellar y los Tajos al Este, y la Sierra de las Aguilas al sureste), enmarcando un valle longitudinal que se abre y ensancha al suroeste (hacia el valle del Vinalopó), cubierto de depósitos cuaternarios y con glacis bien desarrollados<sup>2</sup>.

-----  
<sup>1</sup> LOPEZ GOMEZ, A.: "El Campo de Alicante", en *Geografía de la Provincia de Alicante*, dirigida por A. López Gómez y V.M. Roselló Verger, Excma. Diputación Provincial de Alicante, 1978, p. 53.

<sup>2</sup> Ibidem, p. 533.

Transferido por el Rey Jaime II a D. Jaime Burgunyó en el año 1320, se constituye, junto con Busot, en el señorío más antiguo de la comarca. Las competencias jurisdiccionales propias de la jurisdicción alfonsina serían obtenidas por los titulares del señorío tras acogerse al privilegio promulgado por el rey Alfonso IV de Aragón en 1329. Su configuración como señorío de carácter mixto (en el que coexisten la propiedad de la tierra y el ejercicio de la jurisdicción) y la implantación de la enfiteusis como régimen de tenencia predominante, determinarán una evolución similar a la experimentada por los señoríos de Busot y Villafranqueza.

Efectivamente, la profunda imbricación de esta forma de tenencia con el régimen señorial en el caso valenciano, propiciará la confusión e identificación entre los derechos derivados del ejercicio de la jurisdicción y los inherentes al dominio directo de la tierra, dando lugar, tras la abolición del régimen señorial y la instauración del nuevo marco legislativo, a la desintegración de los patrimonios nobiliarios de origen señorial. Este será un proceso bastante acusado en el caso de Agost, a pesar de ser un hecho claro la adquisición del elemento territorial con carácter previo a la jurisdicción. En efecto, las escasísimas propiedades, tanto rústicas como urbanas, que los dueños del lugar consiguieron inscribir en el Registro de la Propiedad, serían enajenadas en su totalidad a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX por los descendientes de los antiguos señores de Agost.

A pesar de la falta de documentación referente a alguna de las fases del proceso, se ha tratado de realizar un estudio de los rasgos que definen al señorío y la evolución experimentada por éste, condicionada en última instancia por esos elementos.

**1.-Las noticias aportadas por los cronistas y los autores y fuentes contemporáneos.**

La mayor parte de los cronistas y autores contemporáneos aluden generalmente a una serie de aspectos comunes. Disquisiciones sobre la etimología del lugar, la inclusión del mismo en los términos generales de Alicante, la identidad de los titulares del señorío o algunos datos de carácter demográfico o económico son algunos de los principales puntos tratados por éstos. Característico de todos ellos es la toma de posturas a favor de la ciudad en las referencias a las cuestiones jurisdiccionales o al aprovechamiento de las utilidades rústicas de los términos de señorío.

Viciana, en la segunda mitad del siglo XVI, atribuye la pertenencia de Agost con su castillo a Mosen Luys Juan de Vallebrera, caballero, y el ejercicio de las competencias jurisdiccionales propias de la Suprema ("jurisdiccion en el



crimen") a la ciudad de Alicante<sup>3</sup>.

Escolano establece en 70 el número de casas de moriscos existentes en el lugar. La denominación del lugar derivaría de un nombre morisco, aunque señala que "los Christianos lo atribuyen á ser tanta y tan cierta la cosecha en el, que merecio el nombre del mesmo Agosto". Menciona a la familia Vallebrera, radicada en la gobernación de Orihuela desde la conquista del Murcia, como propietaria del lugar<sup>4</sup>.

Bendicho, ya a mediados del siglo XVII, mantiene la cifra de población apuntada por Escolano, y, por lo que respecta a la denominación del lugar, aunque alude también a la bondad de las cosechas, plantea su posible vinculación con la existencia de una "fuente de sanísima y bonísima agua, a quien los moriscos llamaban aguast, y de allí le vino Agust". En relación a la cuestión del carácter señorial del término, aunque manifiesta que "fue primero posesion de los Borgonyones, despues de los Ballebreras, caballeros que quedaron heredados en Alicante, en la conquista de Murcia. Pero hoy lo posee el Conde de la Granja, don Francisco Rocamora (...)", señala su inclusión en el término general de Alicante a tenor del privilegio otorgado por Alfonso X el 29-VIII-1252, y la obtención por la ciudad de una sentencia favorable a la misma, que establecía la prohibición de instalar

-----  
<sup>3</sup> MARTINEZ MORELLA, V.: *Alicante en la "Crónica de la inclita y coronada ciudad de Valencia y su reyno" de Martín de Viciano*. Ayuntamiento de Alicante, Serie Minor IV, Alicante, 1970, p. 40.

<sup>4</sup> ESCOLANO, G.: *Década Primera de la Historia de Valencia*, Reproducción Facsímil, Universidad de Valencia, Dpto. de Historia Moderna, 1972, Tomo IV, Lib. VI, col. 77.

hornos de vidrio en Agost, y de impedir "el pasto y herbaje" de sus ganados en dicho lugar<sup>5</sup>. Aseveraciones que, como se comprobará más tarde, no serán ciertas en su totalidad.

A mediados del siglo XVIII, los padres Maltés y López recogen algunos de los aspectos apuntados con anterioridad por Bendicho (la comprensión del lugar en el término de Alicante y las diversas interpretaciones etimológicas), y reflejan el incremento de la población, situada en torno a las 200 casas (con más de 300 vecinos). Menciona como titulares del mismo a los señores de Cortes; concretamente, "por casamiento de la heredera D<sup>a</sup> Josefa Tallada (Pallás de Vallebrera y Tallada), es de Don Jacinto Forner, hijo del Varon de Finestrat, y señor de Benasant"; aunque se hace evidente su apoyo a la ciudad de Alicante y a la supremacía jurisdiccional de ésta sobre el lugar. En este sentido, afirma la carencia de jurisdicción propia en el señorío, a la vez que alude de nuevo a la sentencia que prohibía al lugar de Agost el vedamiento de los pastos y "herbajes" de su término a los ganados de la ciudad de Alicante, y la implantación de un horno de vidrio<sup>6</sup>.

Cavanilles (a finales del siglo XVIII), obvia, como ya se ha comentado en anteriores ocasiones, cualquier tipo de referencia al carácter señorial del lugar, centrándose en la  
-----

<sup>5</sup> BENDICHO, V.: pp. 84 y 90.

<sup>6</sup> LOPEZ L. y MALTES, J.B.: *Ilice Ilustrada (Historia de las antigüedades, grandezas, y prerrogativas de la muy noble y siempre leal Ciudad de Alicante)*, que escribió el Padre D. Juan B. Maltés, de la Compañía de Jesús y aumentó, la completó y puso en orden, y estilo el P. Lorenzo López de la misma Compañía. Collegii Societatis Alonensis, Alicante, 1907, pp. 159 y 174.

descripción de aspectos físicos, demográficos y económicos. Señala la abundancia de barrancos y cerros en el término, así como la carencia de aguas para el riego y la existencia de tentativas dirigidas a paliar esa deficiencia por parte de algunos de los vecinos del lugar. Por lo que respecta a la cuantía poblacional, estima en 440 el número de familias residentes en el municipio, dedicadas a la agricultura, la alfarería y al trabajo del esparto. La producción agrícola del lugar estaría constituida por cereales (cebada, trigo, avena, maíz y centeno), arbolado (almendros, algarrobos, olivos, higueras), vid, barrilla, y algunas hortalizas, cominos, anís y alfalfa<sup>7</sup>.

A mediados del Siglo XIX, Madoz atribuye la fundación del lugar a los árabes, señalando su pertenencia en 1681 a "los caballeros de Ballebreras". El resto de la información proporcionada va referida a cuestiones de tipo físico o paisajístico (contraste entre unas áreas de superficie llana y otras montañosas, existencia de suelos más o menos productivos para la agricultura, escasez de lluvias, o carencia de espacios de bosque o monte -sólo cultivos arbóreos-), o económico; en este último caso relacionadas con el desarrollo de actividades agrarias (agrícolas -producción de cereales, almendros y

-----  
<sup>7</sup> CAVANILLES, A.J.: *Observaciones sobre la Historia natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia*, Madrid, 1797. Facsímil, Valencia, 1972, Tomo II, pp. 254-256.

algarrobos, vino, aceite, higos y barrilla- y ganaderas -lanar-), cinegéticas e industriales (alpargatería, telares de lienzo, alfarerías -3-, almazaras -2-, o explotación de canteras)<sup>8</sup>.

La obra de Viravens, ya a finales del siglo XIX, no ofrece ninguna aportación importante, puesto que se limita a reiterar algunas de las consideraciones realizadas por cronistas anteriores (inclusión del lugar en el término general de Alicante, carencia de jurisdicción propia y subordinación en este punto a la ciudad de Alicante, posesión del señorío por las casas de Burgunyo, Vallebrera y Rocamora, entre otras aseveraciones)<sup>9</sup>.

Por último, Figueras Pacheco<sup>10</sup>, a principios del siglo XX, sitúa la fundación del lugar en un periodo bastante anterior al señalado por sus predecesores<sup>11</sup>, y critica las interpretaciones etimológicas por ellos expuestas (principalmente a Escolano, Maltés y López, y Viravens), calificándolas de poco serias. Afirma, al igual que los autores mencionados con anterioridad, la pertenencia del lugar de Agost al término de Alicante, y recoge los datos demográficos proporcionados por éstos, estimando, por su parte, en 2.958 habitantes la población de hecho existente en Agost en 1900, y en 3.152 habitantes la

-----  
<sup>8</sup> MADRIZ, P.: *Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar*. Madrid, 1845, pp.

<sup>9</sup> VIRAVENS PASTOR, R.: *Crónica de la muy ilustre y siempre fiel ciudad de Alicante*, 1896. Facsímil, Alicante, 1976, pp. 51 y 54.

<sup>10</sup> FIGUERAS PACHECO, F.: "Geografía de la Provincia de Alicante" en *La Geografía General del Reino de Valencia*. Dirigida por F. CARRERAS CANDI, Barcelona, pp. 1.013-1.016.

<sup>11</sup> "Aunque no está plenamente demostrado, es lo más probable que este pueblo ocupe el mismo solar de los antiguos icositanos, contribuyentes de la colonia romana Ilice". Ibidem, p.

residente en 1910.

Dedica una atención importante tanto a la superficie cultivada, predominantemente de secano, constituida por 4.520 hectáreas (frente a las 2.058 hectáreas de superficie inculta, en la que aparecen integrados varios montes públicos a cargo del Ministerio de Hacienda<sup>12</sup>) ocupadas por algarrobos, olivos, almendros, viña, cereales y legumbres, hortalizas, alfalfa y frutales, como a la actividad industrial, orientada principalmente a la alfarería (22 fábricas y unos 200 obreros), de gran tradición en el término y apoyada en la existencia de yacimientos de arcillas<sup>13</sup>.

Al margen de su comprensión, desde 1252, en los términos generales de Alicante, lo que nos confirma su existencia y consolidación como entidad de población en esas fechas, se encuentra incluido en diversos índices elaborados con la intención de tomar constancia de los núcleos de población de una cierta importancia existentes en el Reino de Valencia, su cuantía demográfica o el importe de sus contribuciones a la hacienda real.

-----

<sup>12</sup> Esquena del Gos, Lomas de Sarganella, Ventós, Lomas del Paller, Puntal del Carreter, Loma del Pantanet, Lomas del Oliver del Estrecho, Cervera, Solana del Maigmo y Castelled.

<sup>13</sup> "La alfarería es industria principal de Petrel y Agost, donde se fabrican en gran cantidad, cántaros, jarras, alcarrazas, botijos, tinajas, cazuelas y otras vasijas que, en pequeña parte, se exportan á las repúblicas hispanoamericanas", FIGUERAS PACHECO. F; Op. Cit, p. 286.

En 1646 ya aparece recogido en el *Index de les Ciutats, Viles, y demes Universitats del Regne de Valencia; y de les Casses que te Cascuna, conforme les Certificatories, autentiques, Remeses, per los Justisies, y Jurats de aquelles (...)*<sup>14</sup>, señalándose la existencia de 94 casas. Durante la primera mitad del siglo XVIII, el Padrón demográfico-económico del Reino de Valencia, estudiado por Camarena Mahiques<sup>15</sup>, a pesar de las diversas objeciones que presenta como fuente<sup>16</sup>, nos permite aproximarnos a la situación que presenta el señorío, por lo que respecta a una serie de variables como el número de vecinos, el valor de las propiedades existentes en el término (tanto de propietarios autóctonos como foráneos), las rentas obtenidas y las cargas que soportan, o el importe de los ingresos y los gastos municipales.

Según esta fuente, Agost es, entre los señoríos de la comarca, el que cuenta con un mayor número de contribuyentes, 104 (al margen de los 10 vecinos calificados como pobres de solemnidad) frente a los 71 computados en Busot o los 79 en Villafranqueza. La propiedades radicadas en el término (tanto pertenecientes a vecinos del lugar como a propietarios foráneos, y sin especificar si son propiedades rústicas o urbanas, o censales) presentan un valor superior al de las situadas en los

-----  
<sup>14</sup> ARV. VARIA, Caja nº 5, nº 26, año 1646.

<sup>15</sup> CAMARENA MAHIQUES, J.: *Padrón demográfico-económico del Reino de Valencia, ¿1735?*. Valencia, 1966, 88 pp. El original se encuentra en ARV. VARIA, Lib. 883.

<sup>16</sup> CAMARENA MAHIQUES, J. (1966): Op. Cit., pp. 9-12.

otros dos señoríos mencionados, 50.262 Libras en Agost frente a las 40.358 L. y las 30.010 L. de Busot y Villafranqueza rspectivamente.

La propiedad foránea si bien no es excesiva -representa un 20,61 % (10.357 L.) mientras las propiedades de los vecinos del lugar suponen el 79,39 % (39.905 L.)-, sí es relativamente importante si la comparamos con la proporción que caracteriza al señorío de Busot, un 6,04 %. Este hecho vendría propiciado por la mayor proximidad y vinculación del lugar de Agost con la ciudad de Alicante y otros núcleos de población cercanos, como Monforte o Novelda. En relación a los patrimonios de los propietarios foráneos se ha de señalar como se procede a su cultivo, en proporciones bastante similares, tanto a través del arrendamiento como de la explotación directa, aunque con un ligero predominio de la última de las formas de tenencia mencionadas (un 57,84 % -5.991 libras de renta- frente al 42,16 % -4.366 libras- de las propiedades arrendadas).

Puede considerarse relativamente importante el grupo de vecinos que no obtienen sus ingresos de la propiedad de la tierra o de otro tipo de bienes, incluyéndose en este colectivo, junto a tratantes, oficiales municipales y artesanos, los jornaleros, arrendatarios, "medieros y los que trabajan al quinto"<sup>17</sup>; puesto que acumulan el 37,30 % de las rentas de la población residente en el señorío (991 L. frente a las 1.666 de los propietarios residentes), proporción que desciende al 31,13 % si incluimos en

-----  
<sup>17</sup> ARV. VARIA, Lib. 883, pp. 110-110 vto.

el cómputo las rentas de los propietarios foráneos (526 L. que suponen el 16,56 %).

Por último, esta fuente nos refleja un cierto déficit en el balance económico municipal, puesto que "percibe el comun de esta villa por sus propios y arbitrios 80 L., y hallandose obligado a satisfacer por cargas de Justicia 204 L., le faltan para su cumplimiento 124 L."<sup>18</sup>. Entre los propios y arbitrios que proporcionan recursos a la villa, se encuentra la regalía de pesos y medidas, que, cedida por el señor del lugar, sería gestionada por los oficiales municipales, hasta su recuperación por el Real Patrimonio a finales de la segunda década del siglo XIX. En este sentido, cabe señalar igualmente la cesión por el titular del señorío de la mitad de los ingresos percibidos por el herbaje (arrendamiento de los pastos del término).

Ya en 1776, el *"Estado general por orden alfabético de los pueblos de que se compone el Reyno de Valencia, divididos en sus trece gobernaciones o partidos con demostracion del numero de vecinos de que cada uno consta, excluso solo el Estado Ecclesiastico Secular y Regular; Señorío á que pertenece, y nombres de los Dueños o Señores particulares; leguas que distan de la capital; y repartimiento general, ó cupo que satisface anualmente á S.M. por la Contribucion Equivalente á Rentas Provinciales, Utensilios, Pajas y Forrajes, Estanco del Aguardiente, y Real de la Sal, (...)"*<sup>19</sup>, lo incluye dentro de la

-----  
<sup>18</sup> Ibidem, f. 110 vto.

<sup>19</sup> ARV. Mapas y Planos, nº 291, Valencia, 1776.



Gobernación de Alicante, con un vecindario superior al de los otros señoríos comarcales (334 vecinos frente a los 225 de Busot o los 213 de Villafranqueza), aunque sin embargo le corresponde una contribución del equivalente inferior a la de Busot (500 L. de a quince reales de vellón en Agost, frente a las 521 de Busot). Atribuye su pertenencia a Doña Josefa Pascual de la Verónica y Pallás de Vallebrera, incluyendo el lugar en el término de Alicante y confiriendo al señorío un carácter solariego, sin competencias jurisdiccionales.

Sin embargo, en 1804, la *"Noticia de la actual población del Reyno de Valencia (...)"*<sup>20</sup> de Franco (que ya menciona Peñacerrada, aunque no la Vallonga de Burgunyo) no aporta ningún dato relativo a Agost, a pesar de atribuir el señorío directo de Cortés de Pallás (en la Gobernación de Cofrentes), con los despoblados de "Roaya" y "Boxet", a D. Antonio Frígola, titular igualmente del señorío analizado.

---

<sup>20</sup> FRANCO, V. I.: *"Noticia de la actual población del Reyno de Valencia: la de sus despoblados desde la Conquista por el Rey Don Jayme Primero: las leguas que distan de la Capital: los Señoríos directos que los poseen: y las Diócesis a que pertenecen. Se notan en trece estados"*, 1804, Valencia, copia facsímil, 1979.

2.-Constitución y características del señorío de Agost.  
Situación y evolución en vísperas de la abolición  
del régimen señorial.

2.1.-Un señorío de carácter mixto: elemento territorial  
y jurisdiccional.

Las noticias de mayor antigüedad obtenidas sobre el señorío de Agost proceden del primer cuarto del siglo XIV, y corresponden a la escritura de venta del "lugar", franco y libre de toda carga, otorgada el 10-IV-1320 por el rey Jaime II a favor de Jaime Burgunyo, "civis majoricarum" de Alicante<sup>21</sup>. Este documento nos confirma la adquisición del elemento territorial del señorío por los titulares del mismo con carácter previo al logro de la jurisdicción alfonsina (al amparo del fuero promulgado en 1329 por Alfonso IV de Aragón y II de Valencia), a la vez que el ejercicio de unas ciertas competencias jurisdiccionales sobre la población del mismo (de carácter mixto, integrada por cristianos y moros) y el disfrute de los derechos exclusivos, privativos y prohibitivos existentes en el término o que en un futuro pudieran existir (molinos, hornos y carnicerías). Así se pone de manifiesto en el siguiente fragmento

-----

<sup>21</sup> ARV. Bailía E, Exped. 1.418, pp. 9 vto.-18 vto.

de la mencionada escritura:

"(...). Id circo auctoritate pradicta quafungor expradicti Domini Regi, et voluntate, ac expresso ascensu eiusdem domini Regis, volentis, et firmantis, Vendo, concedo, et tanquam plus danti, et promittenti, Trado, aut quasi trado Vobis Jacobo Burgundi suppradicto, presenti, et recipienti, et vestris ad imperium pradictum Castrum, et Liberium alodium ab omni Onere, Censu, et alterius servitutis, et obligationis expeditum, et deliberatum, cum omnibus Alqueriis pradicti Castri, et cum turribus, fortitudinibus, Ortis, campis, vineis, Terris cultis et incultis, hermis, et populariis, et cum omni servitute ademprivo, adque domino quam et quod pradictus Ferrarius de Cortillo habebat, et habere debebat in hominibus, et feminis, tam Christianis, quam sarracenis, aut cuiuscunque legis, aut conditionis existant in pradicto Castro, et eius termino habitantibus, et habitaturis et cum arboribus fructiferis, et infructiferis, et cum omnibus redditibus, exhitibus, proventibus coffis, almagravis, censualibus, et omnibus aliis juribus, et servitutibus et cum montibus, et plantis, silvis, et garrifis, montaneis, nemoribus, venationibus, pratis, pastus, amargralibus, et Siccanis, molendinis, furnis, et carniceriis, que infradictum terminum pradicti Castri sunt, vel erunt, et cum fontibus, stagnis,

aquis, Cequis, et aquaductibus, et cum omni plena jurisdictione, et dominatione, et cum omnibus aliis plenis dominiis, et proprietatibus, servitutibus, terminis, juribus, pertinentiis universis pradioti Castri, pro ut pradiotum Castrum, et omnia alia, et singula supradicta, pradioto Ferrario de Cortilio pertinebant et pertinere debebant titulo emptionis, ideo etiam de jure, for, vel consuetudine, vel alia qualibet ratione, (...) vel causa vobis, et vestris perpetuo pro franco, et libero alodio, Vendo, Concedo, trado, aut quasi trado, pretio videlicet Quindecim mille, Centum solidorum regalium valentia (...)"<sup>22</sup>.

El castillo y término de Agost -integrado en esa época en el término general de Alicante, y limítrofe con los lugares de Alicante, Elche, Monforte, Novelda, Petrel y Tibi<sup>23</sup>- había pertenecido con anterioridad, y en las mismas condiciones, a Ferrario Cortillo, Baile General del Reino de Valencia. A su muerte fue objeto de subasta, hecha pública en Alicante, Elche, Orihuela, Jativa y Valencia, siendo adjudicado -por Jacobo Andrés, Baile General del Reino de Valencia, con la aprobación

-----  
<sup>22</sup> ARV. Ibidem, fs. 13 vto.-16.

<sup>23</sup> "(...); Quod Castrum est in termino dicti Loci Alacantis, pro ut confrontatur cum Termino dicti Loci Alacantis, et cum termino de Elche, et cum Termino de Monpot, et cum termino de Novella, et cum termino de Tibi; jam dictum itaque Castrum de Agosto pro ut superius confrontatur, et Terminatur videlicet cum omnibus Alquereis ipsius Castri, et cum Turribus,...". ARV. Ibidem, fs. 14 vto-15.

real- por un importe de 15.100 sueldos a favor de Jaime Burgunyo.

Esta subasta venía motivada por la necesidad de hacer frente, con los bienes comprendidos en la herencia del anterior propietario, a las deudas contraídas por el mismo con el Real Patrimonio, por razón de la administración de la bailía, y con otros acreedores, así como para satisfacer la dote y el aumento dotal que correspondían a su viuda<sup>24</sup>.

Este lugar permanecerá en manos de la familia Burgunyo (que, procedente de Cataluña, participaría en la conquista del Reino de Valencia con el rey D. Jaime)<sup>25</sup> hasta la segunda mitad del siglo XV, momento en que, a raíz de la transmisión del mismo por línea femenina, pasará, por medio del enlace matrimonial entre Isabel Burgunyo y Rotla y Juan Puig de Vallebrera, a la familia de los Vallebrera. Ambas familias, de las más antiguas y nobles de la ciudad, formaban parte del grupo que controlaba los órganos del poder local, desempeñando sus miembros, como señala

---

<sup>24</sup> ARV. Ibidem, fs. 9 vto.-13 vto.

<sup>25</sup> FINESTRAT, Barón de: *Nobiliario Alicantino*. Alicante, 1983, p. 91.

el padre Arqués, los más importantes cargos del poder municipal<sup>26</sup> (Joan Puig de Vallebrera sería justicia en 1506 y jurado en 1518)<sup>27</sup>.

La práctica de la endogamia como vía para lograr el ascenso social y el incremento de los patrimonios es una característica que distingue tanto a la pequeña como a la gran nobleza valencianas. Los titulares del señorío de Agost siguieron de igual modo esta política de uniones matrimoniales con casas si no más importantes si por lo menos de un status y poder económico equiparable. Muestra de ello son las uniones dinásticas con familias como los Bosch, Rotlá, Maiquez, Belluis, Tallada, Vallebrera o Pascual de la Verónica, entre otros (ver figura 1), y los intentos no consolidados, por falta de sucesión, de emparentar con linajes nobiliarios de mayor importancia, como los

-----

<sup>26</sup> En relación a la familia de los Burgunyo el padre Arqués expone, además de la pertenencia a esta casa del señorío de Agost desde la reconquista, lo siguiente: "desde 1366 que son los primeros oficiales de la Ciudad que se hallan, siempre han ejercido los mas honoríficos oficios. Y en la insaculación del señor Rey D. Fernando que fue en 10 de Julio de 1493, vino insaculado Em Perot Borgoño Doncell". Respecto a los Vallebrera, afirma de igual modo su abolengo: "Todos los ascendientes de esta Familia han sido los primeros en todos los actos positivos de Nobleza en el Gobierno de la Ciudad. Son los mas antiguos concurriendo a quantas insaculaciones ha habido del gremio de los Caballeros. Han sido señores de la Torre de las Manzanas, y muchos años del lugar de Agost". ARQUES JOVER, A Fr.: *Nobiliario Alicantino*. Transcripción, adiciones, notas y comentarios de L. Más y Gil y J.M. Esquerdo Ribera. Alicante, 1966, pp. 41-42 y 78-79.

<sup>27</sup> FINESTRAT, Barón de (1983): Op. Cit., p. 349.

# LOS TITULARES DEL SEÑORIO DE AGOST

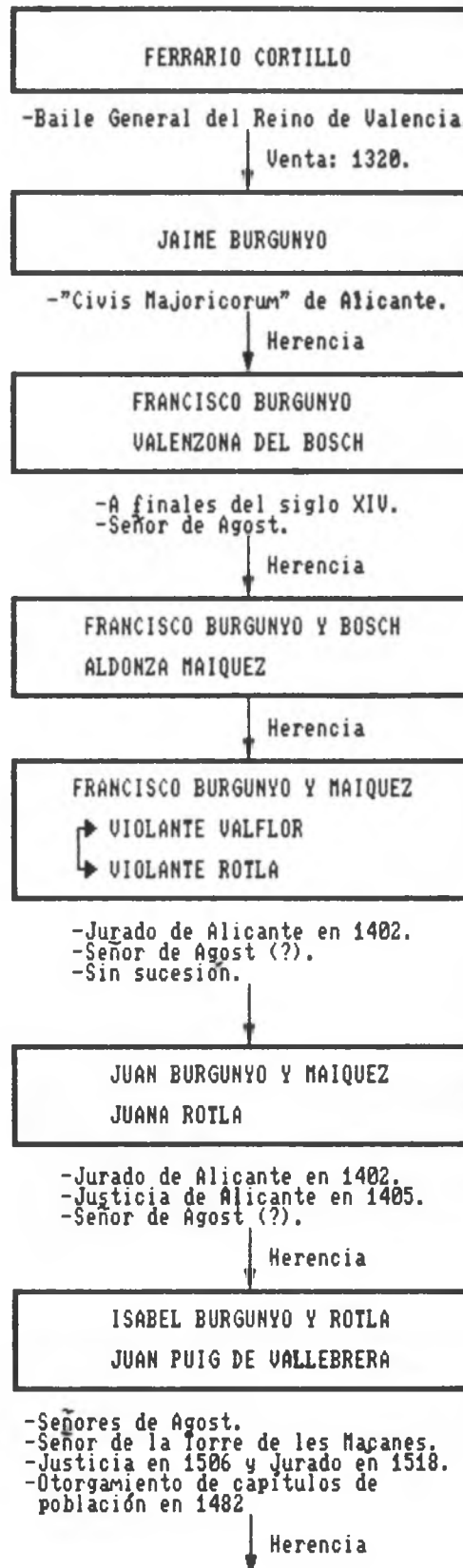


FIG. 5.1

LUIS JUAN VALLEBRERA Y BURGUNYO  
FRANCISCA MAIQUEZ

- Firma de Derecho en 1553 (Límites del término y partición de frutos).
- Vinculadores de Agost en 1561.
- Señores de Agost.

↓ Herencia

JUAN FRANCISCO VALLEBRERA Y MAIQUEZ  
ELFA MACA DE LIZANA Y MACA DE LIZANA

- Amparo de posesión en 1590 (Partición de frutos).

↓ Herencia

JUAN DE VALLEBRERA Y MACA DE LIZANA  
ANA BELLUIS

- Señores de Agost y de las heredades de Aguas y Baranyes.
- Barón de Mogente, Novelda y Castillo de la Mola.
- Pedro Maca, de Lizana y Vallebrera por razon de Vínculo.

Testamento: 25-IV-1606.  
Fallecimiento: 27-IV-1606.  
Herencia (Dote y cuota Viudal).



ANA BELLUIS

↓ Venta: 12-V-1609.  
31.000 Libras.

ISABEL VALLEBRERA Y MACA DE LIZANA  
FRANCISCO ROCAMORA Y RUIZ

- Capítulos matrimoniales: 12-VIII-1603.
- Señores de Agost y Barones de Novelda, Mogente y Castillo de la Mola.
- I Conde de la Granja (1628) y Señor de la Heredad de Benferri.
- Amparo de posesión en 1613 (Jurisdicción Alfonsina y Vedamiento de Pastos).
- Amparo de Posesión en 1656 (Jurisdicción Alfonsina).

↓ Herencia

FRANCISCO ROCAMORA VALLEBRERA  
ISABEL MARRADES BOIL

- II Conde de la Granja y Señor de Benferri.
- Señor de Agost (?).
- Sin sucesión.



Fig: 5.2



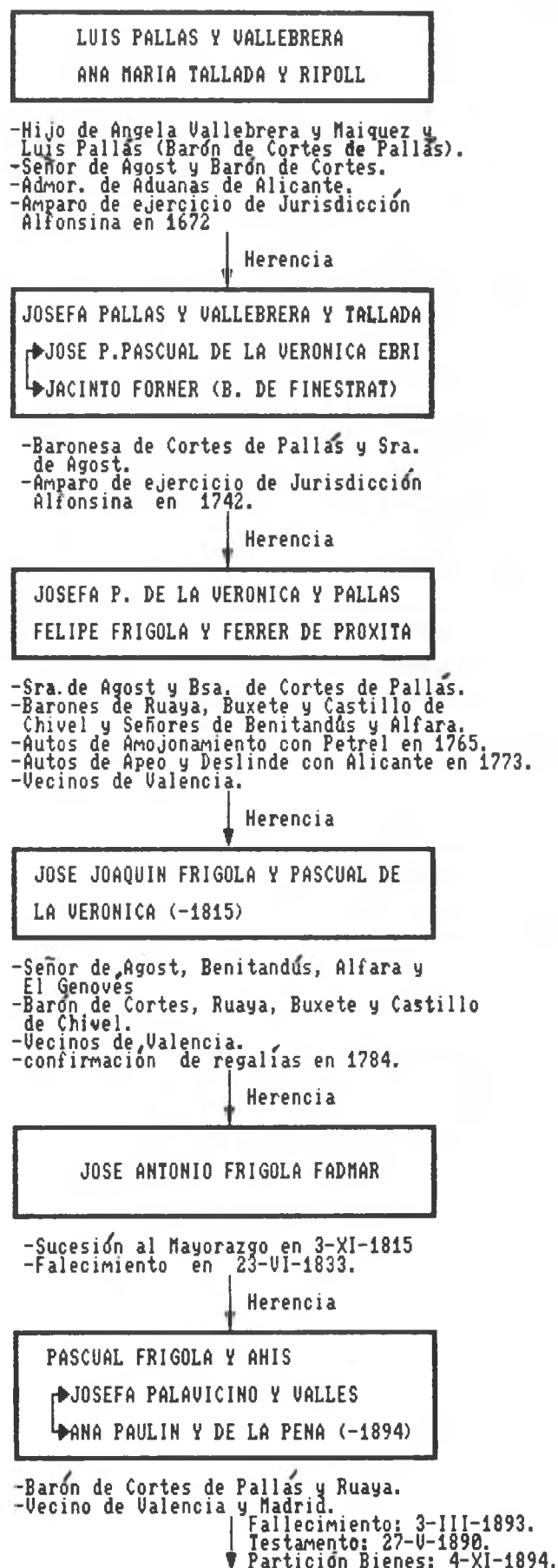


Fig: 5.3

PASCUAL FRIGOLA Y PALAVICINO  
ENILIA CARRUANA GIMENO

- Herencia íntegra por renuncia de sus hermanos a su favor.
- Barón de Ruaya y Cortes de Pallás.
- Propietario y vecino de Valencia.

Testamento: 11-III-1908.  
Fallecimiento: 26-IV-1908.  
Partición de Bienes: 24-IV-1909.

VENTAS

ANA FRIGOLA CARRUANA  
VICENTE BETA ARNAL

- 1/2 del Remanente del tercio libre y del tercio de mejora y legítima.
- Propietaria y vecina de Murcia.

Fallecimiento: 13-IX-1944.  
Testamento: 16-II-1927.  
Partición Bienes: 12-IX-1945.

VICENTE BETA FRIGOLA  
CARMEN REIG LINARES

- Herencia íntegra excepto el tercio libre en usufructo correspondiente a su padre.
- Vecino de Valencia.

Donación: 14-IX-1964

VICENTE JOSE BETA REIG  
ENMA CUNAT GUARDIOLA

- Vecino de Valencia.

VENTAS

Fig: 5.4

Maça de Liçana<sup>28</sup> (señores de las baronías de Mogente, Novelda y Castillo de la Mola) o los Rocamora (señores de la Granja y Benferri).

Tras el matrimonio de D. Juan Fco. Vallebrera y Maiquez con D<sup>a</sup> Elfa Maça de Liçana y Maça de Lizana, el vínculo de los Maça de Liçana pasó a la persona de su sucesor, D. Juan de Vallebrera y Maça. La muerte sin sucesión de este último propició, a raíz del enlace de D<sup>a</sup> Isabel Vallebrera y Maça con D. Francisco Rocamora y Ruíz, y de la venta del señorío de Agost por D<sup>a</sup> Ana Belluis (viuda de D. Joan de Vallebrera y Maça) la unión de los patrimonios de las tres casas (Maça, Rocamora y Vallebrera). Sin embargo, nuevamente la falta de sucesión (de sus tres hijos) determinó, por razones de mayorazgo, su posterior disgregación, pasando el señorío de Agost a una familia de la

-----

<sup>28</sup> Sobre los Maça de Liçana Escolano expone lo siguiente: "Los cavalleros Maças de su primero apellido se llamaron Liçanas, por ser señores de la villa y castillo de Liçana, con otros muchos lugares en la ribera de Fiscal en Aragón (...). Al apellido de Liçanas añadieron el de Maças, el año mil noventa y seys, en el sitio y toma de la ciudad de huesca. (...). De aquí salieron los Maças de Liçana con el dicho Rey a socorrer al Cid Ruy Díaz, quando vino a meter sitio sobre Valencia el Rey Moro de Marruecos; y lo mismo hizieron sus descendientes en servicio del Rey D. Jayme, en la conquista del Reyno. Desde entonces quedaron heredados en el, y fueron de cada dia acaudalando nuevos señoríos por la calidad de sus personas. En el año 1288 los hallamos señores de Villamarchante: en vida del Rey D. Alfonso el tercero de Aragon, señores de Moxente (...) y en la del Rey D. Pedro el quarto, de muchas villas y lugares en a isla de Cerdeña (...). De los cavalleros della, se sirvieron los reyes de Aragon en los mayores empleos de paz y guerra que se les ofrecieron: D. Pedro Maça el tercero (...) vendio el lugar y castillo de Liçana en el año mil quatrocientos y doze, (...): y compró del precio algunos lugares de los que despues se agregaron al estado de Moxente. ESCOLANO, G.; Op. Cit., Tomo V, Lib. VIII y IX, pp. 1.297-1300.

nobleza valenciana, los Pallás<sup>29</sup>, barones de Cortes de Pallás<sup>30</sup>. A partir de este momento, el absentismo de los titulares del señorío se acentuaría en mayor medida, ante su mayor vinculación con la capital valenciana, y los nuevos enlaces con casas nobiliarias valencianas como los Frígola (Barones de Ruaya, Buxete y Castillo de Chivel y señores de Benitandús, Alfara y el Genovés). De hecho, el arrendamiento de los derechos señoriales sería una práctica común en el señorío desde una época temprana.

Como parece deducirse de la escritura de venta del lugar, existía ya un cierto volumen de población asentada en el término, en las alquerías que, situadas en sus proximidades, dependían o mantenían una cierta vinculación con el castillo de Agost (no se menciona en ningún momento el concepto de lugar o de una entidad poblacional de cierta consideración). La constitución definitiva del emplazamiento tendría lugar tras el otorgamiento de la carta de población del lugar, efectuado, el 21-VI-1482 (ante D. P. Martínez Lillo, Alicante), por D. Joan Puig de Vallebrera a favor de un grupo de 9 pobladores, vasallos del

-----  
<sup>29</sup> "La cabeça deste linage fue el señor de la Baronia de Pallás en Cataluña, que después tuvo titulo de Conde, y dio principio a los que del mayor del solar tomaron el apellido. Y assi hallamos que huvo en aquel Condado tres casas, o familias que baxavan del Conde con nombres diferentes (...), y de aquel tronco, salieron aventajados cavalleros en paz y guerra; y como deudos de la casa Real, siempre honrados y estimados". ESCOLANO, G: Op. Cit., Tomo V, Lib. VIII, p. 886.

<sup>30</sup> "(...) Cortes encierra dentro de sus límites las dos aldeas de Boxet y Roaya: y hazen entre los tres 300 casas (que tienen por señor a D. Juan Pallás, que trae su origen de D. Luys Ladrón Pallás de Vilanova, hijo del Vizconde D. Jayme de Xelva (...)). ESCOLANO, G; Ibidem, p. 998.

mismo, integrado por 4 cristianos y 5 sarracenos. El carácter mixto del asentamiento ya había sido puesto de manifiesto en 1320, con motivo de la firma de la escritura de venta del lugar.

Las cartas pueblas consisten en unos documentos de carácter contractual, ligados al establecimiento de tierras en enfiteusis, en los que se establecen una serie de normas y condiciones de población y cesión de las tierras entre los futuros pobladores (enfiteutas) y el dueño del lugar. Gual Camarena<sup>31</sup> recoge diversas interpretaciones del concepto de carta puebla, y subraya que su significado supera al de un simple "contrato agrario colectivo", siendo necesaria su extensión al conjunto de "elementales ordenanzas municipales, o bien al de privilegios y franquicias locales, con expresión detallada de los deberes y derechos de pobladores y señores, no exclusivamente dirigidos al cultivo de la tierra". Distingue este instrumento normativo de los fueros, y lo define como "un contrato colectivo para la población o repoblación de un lugar, y para el cultivo de la tierra entre el señor y los pobladores, en el que generalmente se expresan los deberes y derechos mutuos, junto con importantes disposiciones de carácter "político, religioso, económico, militar y administrativo""<sup>32</sup>.

-----  
<sup>31</sup> GUAL CAMARENA, M: *Las cartas pueblas del reino de Valencia. Contribución al estudio de la repoblación valenciana*. (Premio Menéndez Pelayo 1948 del CSIC). Edición preparada por D<sup>a</sup>. D. Pérez Pérez, Directora del Archivo del Reino de Valencia, Generalitat Valenciana, Valencia, 1989, pp. 11-15.

<sup>32</sup> Ibidem, p. 15.

En este sentido, Gil Olcina afirma que "el contenido de las cartas pueblas y de los establiments emanados de ellas desborda ampliamente el marco de la enfiteusis alodial, por cuanto el estabiliente, además de intervenir como dueño de casa y tierras, lo hace a título de señor jurisdiccional, condición que conlleva una serie de elementos y prestaciones ajenas al contrato entre particulares"<sup>33</sup>.

Como ha puesto de manifiesto Gual, los contenidos de las cartas pueblas van evolucionando con el tiempo, incrementando su extensión material, el grado de especificación y el número de aspectos regulados<sup>34</sup>. [Por lo que se refiere al caso de Agost, prima la regulación de las cuestiones ligadas al contrato agrario; efectivamente, la mayor parte de los capítulos estipulados van dirigidos a establecer el tipo y la cuantía de los cánones a percibir por el señor<sup>35</sup>. Las rentas satisfechas al titular del dominio directo adquieren un carácter mixto, puesto que coexisten, dependiendo del tipo de cultivo, las particiones de frutos (en cereales y legumbres de huerta y secano, algarrobos, olivos, diversas especies hortícolas) y los censos en metálico (en viñas, higueras y alfalfa)<sup>36</sup>. Al margen de otro grupo de condiciones de índole similar destinadas a incentivar el cultivo de ciertas especies vegetales viñas e higueras), a través

-----  
<sup>33</sup> GIL OLCINA, A: *La propiedad señorial en tierras valencianas*". del Cenja al Segura, Valencia, 1979, p. 34.

<sup>34</sup> GUAL CAMARENA, M. (1989): Op. Cit., p. 14.

<sup>35</sup> ARV. Real Justicia, Lib. 804, año 1762, fs. 10-15.

<sup>36</sup> Estos capítulos serán tratados más extensamente en el apartado dedicado al funcionamiento económico del señorío.

de las exenciones temporales de cargas o la imposición de algún cultivo determinado (una tahulla de viña anual), se incluyen la satisfacción del diezmo de ciertos productos (cereales de huerta y secano, olivo, higueras y viña) y una serie de obligaciones del señor para con los enfiteutas, para facilitar el asentamiento y garantizar la puesta en explotación de la tierra (proporcionar cal y tejas para las nuevas viviendas<sup>37</sup>, y dotar a sus expensas de una balsa de agua a cada heredad<sup>38</sup>.

En otro orden de cosas, y por lo que respecta a otros aspectos más relacionados con el ejercicio de unas ciertas competencias jurisdiccionales, y, concretamente, en relación a los derechos exclusivos, privativos y prohibitivos, únicamente se menciona como regalía la obligatoriedad de utilizar la almazara señorial, satisfaciendo un cánon por ello, y estableciéndose, además, las consiguientes penas en caso de contravención (requisamiento del producto y una pena en metálico):

"empero que les olives se hajan a fer en la Almassara del dit Lloch, e pagar los dits vasalls lo delme acostumat, e, mes que paguem per dret de la almassara al señor, ó, a la dita Almassara de Dotze Barcelles una

-----

<sup>37</sup> "Item, que los dits Vasalls, que en lo dit Lloch volran fer cases lo dit señor per donar aquell, ó, a tots aquells que volra, o, volran fer cases en lo dit Lloch tanta cal, e, teula com haura, e, hauran mester per alls dites cases francament sens paga alguna". ARV. Ibidem, f. 15.

<sup>38</sup> "Item, dona una Bassa de Aygua á cascuna Heretat, en així, que si mes Vasalls, o, Llauradors y vendrán, que puyxan partirse la dita Aygua entre aquells". ARV. Ibidem, f. 15.

per moltura, e, tres lliures per dret de bigue, é, que el señor done Almaserer, é, bestia que faça lo dit oli, e si les traieran del dit lloch de Agost per a ferles en altra part perden les dites olives, e, encorreguen en pena de sexanta sous los que contrafarán, e, que si lo señor de la oliva volra fer ab sa bestia lo dit oli, que pague solament les tres lliures per dret"

Con la pretensión de garantizar la consolidación del lugar, evitando el abandono de los nuevos pobladores, a la vez que la sujeción a la señoría directa de los futuros enfiteutas, se estipulaba la prohibición de enajenar los bienes establecidos durante los cinco años siguientes al asentamiento; transcurridos los cuales, tenía el enfiteuta la posibilidad de transferirlos a otra persona, pero a condición de que ésta se avasallara de nuevo en el lugar. En caso contrario, los bienes cedidos volvían al señor:

"Item, que los dits Vasalls la casa que en lo dit Lloch tendrán, ó, de asi havant tendran, e, la orta que tenen de present e, tindran de asi havant no la puixen vendre, ni transportar dins los cinch anys á ningú vasall sens Licencia del señor empero que pasats los cinch anys lo dit Vasall del dit Lloch, ó, qualsevol de aquells puyxa vendre les cases, e, tafulles de la orta, que aquells tenen stablides del Señor, é, los milloraments del Cequans á qualsevol Persona puyxa



aquell aquí será venuda, se haja de avasallar de nou del dit Lloch, ó, qui será vasall del dit Lloch, per manera que la dita Casá, e orta y sequans no reste despoblada, e, sens Vasalls, é, si lo contrari farant passats los dits cinch anys, que les dites cases, e, terres de la orta, e, los dits Cequans sien del Señor".

En definitiva, la escasez de capítulos de que consta la carta de población (11 en total), dirigidos además esencialmente a regular las particiones de frutos y el resto de rentas derivadas del dominio directo de la tierra, la carencia de cláusulas relativas al gobierno municipal y la administración del lugar, la inexistencia de alusiones a algunos de los derechos más característicos de la enfiteusis (laudemio, fadiga, concesión de licencia señorial en las enajenaciones o la facultad de exigir el reconocimiento de la señoría directa -cabreve-), y el hecho de ser una copia de otra copia librada en 1535 (presentada por D<sup>a</sup> Josefa Pascual de la Verónica en el pleito seguido contra el Consejo, Justicia y Regimiento del lugar de Agost), permite plantear la posibilidad de que el documento aparezca incompleto.

A este respecto, cabe señalar casos de cartas de población anteriores a ésta, como la de Alcora, otorgada el 31-XII-1305, en la que son tomados en consideración una gama de aspectos más variados y completos: satisfacción del diezmo y primicia, regulación de las actividades económicas, limitación de la venta de los bienes según el estatus social del enfiteuta,

libertad de residencia, elección de oficiales municipales, regalías y monopolios, aprovechamiento de utilidades rústicas del término, ordenamiento del riego, entre otros<sup>39</sup>.

Sin embargo, no debe descartarse la posibilidad de que la copia reproduzca íntegramente el documento, y que el resto de aspectos no fueran especificados por escrito, aunque si mantenidos comúnmente. A este respecto cabe señalar el hecho de que en los pleitos suscitados contra la ciudad de Alicante por la cuestión de las competencias jurisdiccionales del señorío desde el siglo XVI, y tal vez con anterioridad, fuesen alegadas por los titulares del lugar de Agost diversas sentencias amparando el ejercicio de la jurisdicción del señor (y confirmando a la ciudad de Alicante solamente en el ejercicio de la suprema), y nunca la carta puebla del lugar. Esta hipótesis podría verse igualmente corroborada por la configuración a principios del siglo XVIII de unos capítulos de gobierno para la regalía de las tiendas de comestibles, posiblemente regida hasta el momento por la costumbre<sup>40</sup>.

Un último punto a reseñar es que esta carta constituye un ejemplo de repoblación mixta en el que no tiene lugar el establecimiento de condiciones diferentes para cada uno de los dos grupos étnicos que lo integran, por lo menos en las

-----  
<sup>39</sup> GUAL CAMARENA, M. (1989): Op. Cit., p. 13.

<sup>40</sup> ARV. Real Audiencia. Escribanías de Cámara, Exp. 55, año 1804.

cuestiones reguladas en la carta puebla<sup>41</sup>.

Podríamos considerar factible la obtención de la jurisdicción alfonsina en este momento, tras el otorgamiento de la carta de población; pues como han puesto de manifiesto diversos autores, el logro de esta jurisdicción intermedia, para aquellos señores que no poseyesen mero imperio<sup>42</sup>, "se supeditaba a la posesión, fundación, o en algún caso, simple titularidad del dominio útil<sup>43</sup> de un lugar con no menos de quince hogares de cristianos viejos, reduciéndose este mínimo con vecindario musulmán a sólo tres fuegos en realengos o señoríos de la Corona y a siete en dominios de otros señores"<sup>44</sup>.

-----  
<sup>41</sup> Esta carta puebla es puesta por Gual Camarena como ejemplo de repoblación con una legislación única e idéntica para moros y cristianos, frente a los casos en que cada grupo étnico obtendría unas condiciones de población propias y diferenciadas. GUAL CAMARENA, M. (1989): Op. Cit., p. 16.

<sup>42</sup> ROMEU ALFARO, S.: "Los fueros de Valencia y los fueros de Aragón: Jurisdicción Alfonsina", *Anuario de Historia del Derecho español*, n.º 42, Madrid, 1972, pp. 75-115.

<sup>43</sup> A este respecto, Pla Alberola señala como ésta era la situación en la que se encontraban diversos lugares de moriscos del condado de Cocentaina, en los que los titulares de la jurisdicción alfonsina no poseían el dominio directo, sino el útil (Benámer, Benitaher, Benimazuet, Benutit), merced a la estabilidad que les proporciona el contrato enfiteútico en el acceso al usufructo de la tierra, consolidando de este modo el control sobre los colonos (aparceros, medieros generalmente). El logro de la jurisdicción alfonsina sobre estas unidades agrícolas, aunque no fuera un factor esencial para el titular del dominio útil, si sería deseable tanto desde el punto de vista económico, como por facilitar el control sobre los colonos o por razones de prestigio social. PLA ALBEROLA, P.: "Condiciones de tenencia de la tierra y jurisdicción en el siglo XVI valenciano. Hacia una tipificación de las alquerías moriscas". *Coloquio sobre la propiedad rústica en España y su influencia en la organización del espacio*. Alicante, 1981, pp. 53-63.

<sup>44</sup> GIL OLCINA, A: "La propiedad de la tierra en los señoríos de jurisdicción alfonsina". *Investigaciones Geográficas*, n.º 1, Alicante, 1983, p. 8.

A pesar de no alcanzar el mínimo establecido para el caso de un vecindario constituido íntegramente por cristianos, si supera el fijado para el caso de los lugares poblados por musulmanes integrados en un término de realengo, al que estarían subordinados jurisdiccionalmente en el ejercicio de la suprema (caso de Agost respecto a Alicante).

Este carácter de poblamiento mixto tendrá una importante incidencia a comienzos del siglo XVII, con motivo del extrañamiento de los moriscos, a pesar de la polémica suscitada en torno a esta cuestión entre el titular del señorío y los acreedores censualistas del mismo (en relación a la reducción de los intereses de los censales impuestos sobre el lugar).

Las competencias jurisdiccionales que disfrutaba el señor aparecen más claras en la escritura de venta del lugar otorgada, el 12-V-1609, por D<sup>a</sup> Ana Belluis (viuda de D. Joan de Vallebrera y Maça de Liçana, D. Pedro Maça de Liçana y Vallebrera por razón de vínculo, señor de las baronías de Mogente, Novelda y Castillo de la Mola, del lugar de Agost y de las heredades de Aguas y Barañes), a favor de D. Francisco Rocamora y Ruiz (esposo de D<sup>a</sup> Isabel de Vallebrera y Maça de Liçana)<sup>45</sup>.

Por un precio de 31.000 libras fue transferido el señorío de Agost, con su término, el dominio directo de todas las tierras y solares establecidos enfitéuticamente y los derechos a

-----  
<sup>45</sup> AMA. Arm. 14, Primera Copia Original del apeo y deslinde de Agost con Alicante, 1773, fs. 90-112 vto. También se encuentra en ARV. Real Audiencia, Procesos de Madrid, A, Legajo 2.220, n<sup>o</sup> 312, pp. 65-73 vto.

él inherentes, pastos, prados, montes, fuentes, aguas de lluvia, acequias, censos y vasallos entre otros; incluyéndose en la transacción las regalías (hornos, molinos, carnicerías o tiendas de comestibles y tabernas) y el ejercicio de una jurisdicción civil y criminal limitada, con la percepción de los derechos correspondientes a la misma (peytas, besants, zafras, calonías y otras multas, ...). Así es puesto de manifiesto en el siguiente fragmento:

"do, vendo concedo ac trado seu quasi trado, transforo, et transporto vobis dicto Petro Masa de Rocamora, olim D. Francisco de Rocamora Militi, Domino villarum et Baronarum de Moxent, Novelda, et Cami de la Mola dicte Civitate Valentie habitante (...) dictum Locum de Agost situm, et positum infragenerales terminos Civitatis Alicantis francum et quitium de omni Censu cum laudimio et fatica (...). Hoc tamen ad dicto et infactum deducto, et declarato q. in presenti venditione intellegantur, et comprehendantur onmes quantitates que facto legitimo compoto remanserint debitores arrendatores dicti Loci de Agost, cum illo volo sint vestre propie et non mee atque cum omnibus et singulis furibus et actionibus mihi dictis nominibus quomodo libet pertinentibus, et pertinere debentiobus nunc, et in feturam in dicto Loco de Agost et termino eiusdem, cum Domibus, et terris Domini dicti Loci at que cum omnibus et singulis fortalitiis, et populationibus in

dicto Loco et eus termino constructis et de cetero  
 construendis cum Hominibus, et feminis cuiusvis Legis,  
 sexus, status nature sexte vel conditionis existaret in  
 dicto Loco et termino eiusdem habitantibus, et  
 habitaturis, et cum mansis, mansionibus, pratis, et  
 pasturis, montaneis, mare plantis montibus, valliis,  
 selvis, nemoribus garrigus arboribus, et plantis  
 fructiferis, et infructiferis, fontibus, aquis  
 diluvibus, et saladis, Cequiis, aquarum ductibus cum  
 forniis, molendinis, macellis, tabernis, Censibus,  
 tributis, laudemiis et faticiiis, et aliis rebus  
 juribus, Herentiis, peytis, queistris demandis ex  
 autoribus, zafriis, besantis, caloniis atque multis  
 hoste exercitu, et cavalgata de redemptione ipsorum, et  
 aliis servitutibus, et adempreviis et cum omni  
 Jurisdictione Civili, et Criminali exercitio, et  
 dominio ipsarum, et cum cepis (?) cathenio (?)  
 compedibus et aliis captionum (?) generibus per foros  
 antiquos, et novos ac privilegia et consuetudinis  
 presentis Civitatis et regne Valentie (...)"<sup>46</sup>

En concepto de dote, aumento de dote y parte de la  
 herencia, fueron adjudicados a D<sup>a</sup> Ana Belluis, tras la muerte de  
 D. Joan de Vallebrera y Maça (el 27-IV-1606), el lugar de Agost,  
 las heredades de Aguas y Barañes y diversas propiedades (casas)

-----  
<sup>46</sup> AMA. Ibidem, fs. 105-107.

en Alicante y Orihuela y Callosa (carnicerías). El grado de endeudamiento del fallecido hacía insuficiente la parte de la herencia que le había correspondido, puesto que el valor de las deudas que lo gravaban superaba el de su herencia, dote y "creix", "de tal manera que no podía cobrar aquella ni se alimentarse". Esta situación la había impulsado a solicitar permiso (en carta de 20-XI-1607) a la Real Audiencia para efectuar la "venta de La dita herencia als dits acrehedors, o, a qualsevol altra persona que provehira dita real Audiencia La vena per preu y en la quantitat de la dot y creix que se li deu conforme les cartes y apoques presentades en lo present Juhi y causa a que no sia tenguda de evictio sino per fets propis"<sup>47</sup>, así como a instar una demanda de tenuta de las villas de Mogente, Novelda y Castillo de la Mola y resto de los bienes de su esposo<sup>48</sup>, contra el resto de herederos del mismo (por no haber recibido el pago de su dote y "creix").

En relación a la demanda de tenuta se llegó a un acuerdo, el 26-VII-1608, entre D<sup>a</sup> Ana Belluis y Maça de una parte, y D<sup>a</sup> Isabel Vallebrera y D. Francisco Rocamora de otra, en el que se estipulaba la renuncia a la demanda en favor de D<sup>a</sup> Isabel, a cambio de la donación a D<sup>a</sup> Ana de todos los frutos de sus bienes y villas hasta el 24-VI-1608 (como fue establecido en fechas anteriores por la Real Audiencia; exceptuando los granos de la cosecha de 1608, puesto que sólo le corresponderán 12

-----  
<sup>47</sup> ARV. Real Audiencia, Procesos de Madrid, Leg. 2.220, f. 61vto.

<sup>48</sup> sobre los que en ese momento D<sup>a</sup> Isabel Vallebrera y Maça había interpuesto demanda de posesión.

cahices de trigo de la villa de Mogente), asumiendo las cargas existentes sobre los mismos hasta esa fecha, y de la satisfacción de una dote (según el valor estipulado en ápoas o legítimas) y un "creix" por un importe de 5.000 libras, en forma de cargamiento de censal (a 16 dineros por libra, es decir, un 6,6 % de interés)<sup>49</sup>.

Finalmente, la venta del lugar fue efectuada, el 12-V-1609, por D<sup>a</sup> Ana Belluis a favor de D. Francisco Rocamora (en esas fechas señor de las villas y baronías de Mogente, Novelda y Castillo de la Mola) por un precio de 31.000 libras, con el compromiso, por parte del adquirente, de asumir y redimir los diversos censos consignativos y los violarios impuestos sobre el señorío de Agost durante los 20 años siguientes a la venta. La cantidad estipulada como precio debía ser empleada en las redenciones mencionadas y en el pago de las cargas existentes (en torno a las 26.000 libras), destinando una parte al cargamiento de un censo, de 5.000 libras de capital y 6.666 sueldos 8 dineros (333 libras 6 sueldos 8 dineros) de pensión anua (6,6 % de interés), a favor de D<sup>a</sup> Ana, a satisfacer en dos pagos anuales (Navidad y San Juan) durante el resto de su vida<sup>50</sup> (el mismo que había sido acordado con anterioridad).

El considerable importe de las cargas impuestas sobre el señorío de Agost nos hacen evidente el grave endeudamiento y las dificultades económicas de los titulares del mismo; situación

-----

<sup>49</sup> Estaban obligados a redimir el censal en un plazo de 8,5 años; cada año 1.000 libras, y el último 500. ARV. Ibidem, fs. 62-64.

<sup>50</sup> AMA. Arm. 14, Primera Copia ..., fs. 90-112 vto.



extensible a la mayor parte de las economías señoriales valencianas, a tenor de la crisis que afectaba al régimen señorial valenciano ya a finales del siglo XVI, en vísperas del extrañamiento de los moriscos. Crisis que había sobrevenido como consecuencia de la devaluación de las rentas señoriales en metálico, percibidas en concepto de cánon enfiteútico o por la sustitución de ciertos derechos por cantidades fijas en dinero; de la suavización de las primitivas condiciones de repoblación; la desorganización de la administración señorial y la excesiva cuantía de los gastos que requería el mantenimiento de su nivel de vida, o el mantenimiento de largos y costosos pleitos entre otros factores<sup>51</sup>.

Por lo que respecta a la incidencia de estos factores en el caso de Agost, cabe señalar que el volumen principal de las rentas procedentes de la propiedad de la tierra estaba constituido por pagos en especie (con particiones de frutos al 1/4, al 1/5 y al 1/3), pues sólo las higueras, las viñas y la alfalfa estaban sujetas a la satisfacción de cánones en metálico. Si podían ser responsables en mayor medida el mal funcionamiento de la administración señorial, delegada en el arrendatario de los derechos señoriales, lo que suponía una detracción de parte de la renta a favor de este último, y el sostenimiento de algún pleito,

-----  
<sup>51</sup> CISCAR PALLARES, E.: *Tierra y señorío en el País Valenciano. (1570-1620)*. Del Cenia al Segura, Valencia, 1977, pp. 53 y 107-118; HALPERIN DONGI, T.: *Un conflicto nacional. Moriscos y Cristianos Viejos en Valencia*. Inst. "Alfons el Magnànim", Diputación Provincial de Valencia, Valencia, 1980, pp. 43-45 y 58-63.

generalmente por cuestiones de sucesión en algún vínculo o mayorazgo. En efecto, gran parte de los censales que gravaban el señorío de Agost habían sido cargados por D. F. Vallebrera y Maiquez (en un valor aproximado de 11.000 libras) para sufragar los gastos del pleito suscitado por la sucesión del estado de Maça a la muerte de D<sup>a</sup> Elfa Maça de Liçana, su esposa, entre sus hijos de una parte, y Gonzalo Maça y otros de otra<sup>52</sup>.

En relación a esta deuda de 11.000 libras, en los capítulos matrimoniales firmados el 13-VIII- 1603 entre D<sup>a</sup> Isabel Vallebrera y Maça y D. Francisco Rocamora, entre otros puntos, se establecía que "se haya de firmar y capitular que en caso que la casa y hacienda de maça, viniere por algun tiempo a los contrahentes, o, hijos de este matrimonio tengan obligacion de pagar y quitar los censos que ha cargado el señor de Agosto en suma de onze mil libras, las cuales se han cargado para obtener sentencia en favor en el dicho estado de maça"<sup>53</sup>. En esta escritura, D. Joan de Rocamora hacía donación a su hijo, D. Francisco Rocamora y Ruiz, del lugar de La Granja y de las

-----  
<sup>52</sup> ARV. Real Audiencia, Procesos de Madrid, Ibidem, fs. 49 vto-50 y 59. En 1598, D. Pedro Maça Liçana, olim D. Joan Vallebrera y Maça, estaba siguiendo un pleito con D. Pedro Maça de Lladró, Marqués de Terranova, por la sucesión de varios bienes, como las villas y baronías de Mogente y Novelda. ARV. Real Audiencia, Procesos, Parte III, Apéndice, n<sup>o</sup> 6.990, año 1598.

<sup>53</sup> La satisfacción de esas cargas y sus intereses debía realizarse de la siguiente manera "cada un año dos mil libras obligandose a lo cumplir esto y pagar de las rentas del dicho estado de maça, asseguando la forma de la paga de las dichas mil libras consignando las rentas del dicho estado cada un año a parecer de cada un letrado que las partes dixesen alargando dicho capítulo para seguridad suya y de sus vasallos". ARV. Real Audiencia, Procesos de Madrid, A, Legajo 2.220, n<sup>o</sup> 312, f. 59.

heredades de Benferri y Benimira, transfiriéndole todos los derechos que le habían pertenecido en el último testamento otorgado por D. Pedro Maça, olim D. Joan Maça, su tío.

Por lo que respecta a los instrumentos de crédito, los censales impuestos sobre el señorío revestían una cuantía más bien modesta, entre las 105 y las 700 libras (sólo superadas en cuatro ocasiones, con cantidades próximas a las 1.700 libras, en dos casos, y a las 4.500 libras en otros dos), presentando las pensiones anuas un interés entre el 6,6 y el 7,5% (sólo en un caso se sitúan en torno al 9,5%), mientras que en el caso de los violarios (censales con duración limitada e intereses superiores) el interés fijado alcanza el 14,28% (porcentaje superado incluso en alguna ocasión)<sup>54</sup>. Los pagos de las pensiones eran efectuados con mayor frecuencia de una sola vez (generalmente coincidentes con la fecha de imposición o muy próximos a ella), aunque existen casos en los que eran satisfechas en dos plazos. El monto global de estos censales, incluídas las deudas, se situaba en una cantidad próxima a las 26.000 libras.

Estos instrumentos fueron muy utilizados por todas las clases sociales y corporaciones, tanto como censualistas como censatarios; destacando, entre los primeros, principalmente las clases medias (comerciantes, eclesiásticos, instituciones, viudas, notarios, pequeña nobleza), y, entre los segundos, la

-----  
<sup>54</sup> En relación a la cuantía de los intereses, algunos autores señalan como, en el caso de los censales, en Valencia éste se situaba en torno al 6,6%; al 7,5 y 8,3% en Játiva, o al 10% de Orihuela y Alicante; mientras que el de los violarios se situaba en torno al 14,28%. CISCAR PALLARES, E. (1977): Op. Cit., p. 114.

nobleza (tanto la pequeña nobleza provinciana como los grandes señores) y las clases populares<sup>55</sup>. Estas clases medias (patriciado urbano, pequeña nobleza y estamento eclesiástico), con residencia generalmente en Alicante, serán los principales acreedores del lugar de Agost. Las dificultades económicas y la imposibilidad de satisfacer las pensiones anuales, así como de redimir los censos, motivaron la venta, por parte de D. Francisco Rocamora, de las heredades de Aguas y Barañes -también bastante gravadas, aunque no tanto como el señorío de Agost- (realizada a favor de D. Alfonso Martínez de Vera) y de otras propiedades (casas, carnicerías) situadas en Alicante, Orihuela y Callosa, así como la cesión temporal de otros bienes (molinos,...) a los acreedores, para su explotación, hasta la cancelación de la deuda.

La gran extensión de estos instrumentos de crédito durante el antiguo régimen, y especialmente entre la nobleza señorial y los lugares de señorío, dará lugar a una compleja problemática a tenor de la expulsión de los moriscos. Las maltrechas economías señoriales, con graves problemas de solvencia, se verían, tras este hecho, incapaces de satisfacer las pensiones de los censos; dando origen como consecuencia de ello a un importante enfrentamiento entre los censualistas, que

-----

<sup>55</sup> Los censales parecen ser el modo de inversión más atractivo para los pequeños capitales, que buscaban a la vez un interés relativamente elevado y una seguridad total. Además, se ha de mencionar los préstamos, que a un interés superior, eran otorgados a favor de los señores, con garantía de las comunidades de los lugares de sus señoríos. CISCAR PALLARES, *Ibidem*, pp. 114-121; HALPERIN DONGHI, T. (1980): *Op. Cit.*, pp. 39-41.

demandaban la percepción de sus rentas<sup>56</sup>, y los señores, que se resistían al pago de las mismas y solicitaban una reducción del interés de los censales, aduciendo su carencia de recursos económicos y los perjuicios ocasionados por el extrañamiento de los moriscos. La Corona, con una postura en general intermedia entre ambas facciones, tendería finalmente a favor de la nobleza, estableciendo la reducción de los intereses de los préstamos hipotecarios<sup>57</sup>.

Agost sería uno de los señoríos donde se haría patente dicho problema. Desde el año 1614 tendría lugar un pleito instado por D. Francisco Maça Rocamora contra los acreedores censualistas del lugar, con el objeto de obtener la aprobación de la reducción del interés de los censales acogiéndose a lo dispuesto por la

-----  
<sup>56</sup> Parte de los censales habían sido impuestos por moriscos expulsos sobre tierras de realengo. Una solución adoptada en estos casos concretos, fue la de vender esos bienes (supuestamente el dominio útil) a los acreedores censalistas, por parte del Real Patrimonio. CISCAR PALLARES, E.: "Ventas de tierras de moriscos expulsados (Reflexiones sobre el caso de Agullent". *Primer Congreso de Historia del País Valenciano*. Universidad de Valencia, Valencia, 1976, Vol. III, pp. 333-337.

<sup>57</sup> CISCAR PALLARES, E. (1977): Op. Cit., pp. 114-118, 136-149 y 154-158; HALPERIN DONGHI, T. (1980): Op. Cit., pp. 248-267.

Real Pragmática de 2-IV-1614<sup>58</sup>. La convocatoria de acreedores, efectuada el 11-IX-1614 por el auditor de la causa, fue rechazada por éstos, alegando, en primer lugar, que la situación de D. Francisco no era tan precaria como pretendía, y que los frutos del lugar, más las heredades de Aguas y Barañes y el resto de bienes enajenados, agregados de nuevo al patrimonio, serían suficientes para solventar las pensiones y deudas contraídas; en segundo lugar, que en Agost no había existido población morisca, y, en tercer lugar, que éste había adquirido el señorío comprometiéndose a satisfacer las pensiones y redimir los censales, destinándose para ello una gran parte del precio de venta. Además, mencionaban la obligación recogida en los capítulos matrimoniales entre D<sup>a</sup> Isabel Vallebrera y D. Francisco Rocamora, y aunque aceptaban la reducción de los intereses en Novelda y Mogente (si poblados por moriscos), no hacían extensible esta medida al caso de Agost, al señalar la distinta procedencia de ambos patrimonios.

-----

58 Algunas directrices fundamentales fueron las siguientes: la reducción de los intereses de deudor anteriores a la expulsión, impuestos sobre los lugares de moriscos por sus señores, al 5% (cap. 3º); los censales cargados por las aljamas (no sus señores) se reducen al 5% hasta donde puedan cubrir su pago las rentas de propios de las mismas, y el resto al 2,5% (cap. 4º); si a pesar de la reducción las rentas señoriales no bastaban para sufragar las deudas, se procedería al consenso y al prorrateo entre todos los acreedores censualistas (cap. 9º); si el señor heredase varias casas nobiliarias, se hará un concurso separado para cada casa (cap. 10º); se reducen al 5% los intereses de los censales y deudor procedentes de las compras de lugares de moriscos (cap. 16º). CISCAR PALLARES, Ibidem, pp. 156-157.

D. Francisco Rocamora admitió el hecho de la inexistencia de población morisca en Agost, pero adujo los perjuicios sufridos en el señorío, por estar cultivado gran parte del término por moriscos residentes en Novelda. Además del abandono de tierras cultivadas que este hecho había supuesto, había disminuído considerablemente la población existente en el lugar, al ir a poblar otras zonas deshabitadas por la expulsión; reflejándose ambos procesos en la cuantía de los precios estipulados por el arrendamiento de los derechos señoriales. Estos habían descendido desde las 1.262 libras 10 sueldos anuales, a unas 650 libras (prácticamente se habían reducido en la mitad). Solicitaba por todo ello la reducción al 5% (a vint mil per millar) de los intereses de los censales, lo que había sido concedido a otras casas señoriales (Torres Torres, Oliva y Gandía) tanto en bienes y lugares de moriscos como en los que no tenían esta característica. Así se exponía en el siguiente fragmento:

"D. Francisco Maça Rocamora y D<sup>a</sup> Isabel Maça, señores de la casa y estat de Maça, supplicants dihuen que sa Magestat ab lo asiento que se ha servit donar a les cases dels señors y Barons del present regne a fet merçe a dits supplicants de reduhirlos los censals que responien a vint mil per millar, lo que se ha de entender haverse concedit per sa Magestat generalment en tots los censals que per qualsevol occasio, o, causa, o titol responguesen dits supplicants no sols

sobre la vila de Novelda y altres de moros, Pero tambe sobre lo lloch de Agost y altres bens que los dits supplicants posseheixen, per haver tengut notable y excessiu dany no sols en les poblacions dels moros, pero encara en lo lloch de Agost, la major parte el terme del qual se cultivava per moros poblats en la dita vila de Novelda, de forma que la major part de dit terme ha estat y esta huy incult y sens profit, y lo dit lloch que solia ser de noranta casas, ans mes que menys se ha reduhit a dihuyt, o, vint cases, y aquest dany excessiu en lo dit lloch seguit per la expulsio dels moros se prova ab evidencia ab los arrendaments de dit lloch, puix arrendamtse ans de la expulsio en mil docentes sexanta dos lliures y deu sous, huy esta arrendat en sis centes y Cinquanta lliures tantsolament. Y per haver constatat a sa Magestat y a la junta que ha tingut les mans en lo assiento de dites coses se ha concedit en la de dits supplicants reductio general, y lo mateix se ha concedit a altres cases de Barons del present Regne, como son la casa de Torrestorres, Oliva y Gandia y altres en les quals recahuen llochs y bens que no eren de moriscos, y en esta forma se ha entes la reductio concedida a altres cases obligant als acrehedors censalistes que tenien sos credits y censals sobre bens que no eren de Moros, a concorrer a los demes acrehedors y guardar entot una mateixa reductio. E com (...) havent convocat als



acrehedors de la casa de Agost, precahint provisio feta per V. E. y real Audiencia no hajen volgut nomenar elets pretenent que en la dita casa de Agost no hauria reductio, (...) supplica sia per V. E. y real Audiencia manat declarar que los censals que respon la casa de Agost, als quals esta obligat lo dit D. Francisco estan reduhits a vint mil lo millor, y que ad aquesta raho y sor han de cobrar les pencions de dits censals, comaixi sia conforme la Real Pragmatica y ordens y avisos particulars, (...)"<sup>59</sup>.

Los acreedores enviaron diversas peticiones señalando la improcedencia de lo planteado por el señor de Agost, y solicitando la satisfacción de las pensiones con las rentas procedentes de los arrendamientos del lugar, como había venido sucediendo desde 1614 a 1617<sup>60</sup>. En este sentido, se hace mención del embargo de los frutos y rentas de los lugares de Novelda, Mogente y Agost por parte de varias instituciones (corte del gobernador y Real Audiencia) a instancias de D<sup>a</sup> Ana Belluis y demás acreedores<sup>61</sup>. El 20-IV-1616 D. Francisco Rocamora y D<sup>a</sup> Isabel Vallebrera suplicaban no se emprendiese ninguna ejecución contra ellos y su universidad de Agost, puesto que se había

-----  
<sup>59</sup> ARV. Real Audiencia, Procesos de Madrid, A, Legajo 2.220, n<sup>o</sup> 312, fs. 3-3 vto.

<sup>60</sup> Distribución entre los diversos acreedores de una paga de 350 libras del plazo de Carnestoltes, y otra de 1.400 libras de la paga de Todos los Santos. Ibidem, fs. 16 vto.-49 vto.

<sup>61</sup> Ibidem, fs. 23-26.

procedido al arrendamiento de todas las villas, lugares y bienes, de acuerdo a la Real Pragmática de S. M., de cuyos réditos sólo se les habían señalado los alimentos.

Finalmente, el 6-VII-1617, D. Francisco de Rocamora y su esposa obtuvieron la reducción solicitada, según se desprende de la misiva real del tenor siguiente:

"Ilustre Duque de Feria primo mi lugartinente y capitán general (en el Reyno de Valencia), hasta agora no se ha podido responder a lo que los dias passados me escrivio el Marqués de Carazena vuestro predecesor en esse cargo sobre lo de los censales del lugar de Agosto, Pero porque se ha entendido que del mas del daño notable que los dueños de aquel lugar (que (como sabeys) son D. Francisco Rocamora y D<sup>a</sup> Ysabel Maça Vallebrera su muger) han recibido en el por la expulsion de los moriscos y en otros lugares suyos, y que muchas casas llamadas los palacios que tenian en el término de aquel lugar por occasion de las tierras que los moriscos possehian y cultivavan cerca dellas han venido en total diminucion y Ruyna, demas de que en el mismo lugar de Agosto faltan oy mas de quarenta. Por la presente declaro que en la reduccion concedida a los dichos D. Francisco y D<sup>a</sup> Ysabel en el asiento de su casa entendí y entiendo que han de ser comprehendidos todos y cualesquier censales a que el dicho lugar de Agosto este obligado especial, o, generalmente, y que en

respecto dellas es mi voluntad que gozen dela dicha Reduccion a raz6n de veinte mil el millar desde el d6a de la expulsion en adelante, y que en respecto de la paga destos y de la obligaci6n y execuci6n de sus fianzas y en todo lo demas gozen tambien todo lo que por Pragm6ticas m6as esta concedido a los due1nos de lugares a quienes se ha concedido reduccion en esse Reyno, encargo y mandos que en recibiendo esta carta y a sus tiempos ordeneyes como lo uno y lo otro se notifique a los tribunales y personas a quien toca para que tengan noticia dello, que en haberlo assi me servireys."<sup>62</sup>

A pesar de la confirmaci6n real de la reducci6n, los acreedores censualistas continuaron manifestando sus protestas. A tenor de ello, fue ordenada (en 3-XI-1618) la comprobaci6n de la disminuci6n del n6mero de habitantes en Agost. La consulta de los libros del derecho del real de la sal del Reino de Valencia (contribuci6n por casa o habitador) evidenciaba, seg6n certificaci6n librada el 17-XI-1618, la evoluci6n siguiente<sup>63</sup>:

-1606 (15-XII): 58 casas

-1607 (25-X): 56 casas

-----

<sup>62</sup> ARV. Ibidem, fs. 74 vto.-75 vto.

<sup>63</sup> Los datos no coinciden con los declarados por ambas partes durante los autos, posiblemente debido a la falta de veracidad de unas estad6sticas de car6cter eminentemente fiscal; pero si reflejan de una manera bastante clara la reducci6n de la poblaci6n experimentada en Agost tras la expuls6n de los moriscos.

-1610 (17-X): 23 casas

-1611 (18-X): 23 casas

El último pronunciamiento registrado en el expediente, de fecha 31-I-1619, no modificó lo establecido por la real carta de 1617; a pesar de ello, continuaron durante un tiempo los escritos de los censualistas a la Real Audiencia. Así lo demuestran también los expedientes abiertos por esta misma causa en años posteriores<sup>64</sup>.

Este proceso nos refleja el desplazamiento de la población morisca hacia zonas más alejadas de la universidad de Agost, aunque conservando el dominio útil de las tierras antiguamente establecidas en enfiteusis. Por otra parte, de ser cierta esa despoblación y el abandono subsiguiente de las tierras cultivadas por los moriscos, el señor habría recuperado el dominio útil de las mismas, estando en disposición de establecerlas de nuevo, en unas condiciones similares a las ya existentes en el resto del término, o bien con otras más gravosas para el nuevo campesinado enfiteuta, que le permitirían reactualizar algunas de sus rentas, esencialmente las percibidas en metálico. No hemos localizado ningún documento que verifique ninguna de las hipótesis, pero en un informe municipal de finales del siglo XVIII (concretamente de 22-XII-1782) se hace constar

-----

<sup>64</sup> En 1627 se desarrolló un expediente instado por los acreedores del lugar de Agost en relación a las rentas procedentes del arriendo del lugar. ARV. Real Audiencia, Procesos, Parte 1ª, A, nº: 1.325, año 1627. En 1632 tuvo lugar otro con los mismos acreedores sobre secuestro. ARV. Ibidem, Parte 3ª, nº 2.478. Otros procesos localizados también son: ARV, Ibidem, Parte 3ª, nº 124, año 1626; nº 140, año 1639; y nº 283, año 1676.

que "en Agost, y Busot el derecho Dominical esta regulado en algunos frutos, de ocho uno, y en otros de doce uno, y de los Algarrovos en Busot de diez y seis uno, y en Agost no se paga derecho Dominical de este fruto"<sup>65</sup>. Esta situación implicaría una suavización de las exigencias señoriales (aunque no se especifica su generalización o no a todo el término), producto bien de un reajuste general de las condiciones de establecimiento, bien de una relajación de las primitivas condiciones con el paso del tiempo.

## 2.2.-El ejercicio de la jurisdicción.

Las competencias jurisdiccionales del titular del señorío se enmarcaban dentro de los límites de la jurisdicción alfonsina, una jurisdicción intermedia, plena en lo civil y limitada en lo criminal. Así es puesto de manifiesto en un fragmento de un pedimento instado en 1742 por D<sup>a</sup> Josefa Pallás de Vallebrera, dueña por esas fechas del lugar:

"(...) el caso es que dicho lugar está situado dentro los terminos generales de la Ziudad de Alicante, la qual y sus oficiales, solo tienen Jurisdiccion en los

---

<sup>65</sup> AMA. Arm. 12, Lib. 64, f. 282 vto. Cifrado en GIMENEZ LOPEZ, E. (1981): Op. Cit., p. 135.

casos de la Suprema, y mi parte la tiene en lo civil y criminal, dentro de los límites del fuero del señor Rey D. Alonzo, privativamente a dicha Ciudad, por tener término distinto y separado para el qual el dueño del lugar de Agost, nombra Alcaldes y Regidores, y goza de los aprovechamientos de las Jervas, agua y pastos de su territorio, prohibiendo a los vecinos de Alicante el uso de los pastos para sus ganados, multando, y penando a los que contravienen (...)"<sup>66</sup>.

Esta jurisdicción fue con frecuencia cuestionada por la ciudad de Alicante, que se negaba a admitir su ejercicio por el titular del señorío o sus representantes, interfiriendo en causas correspondientes a la alfonsina, y por tanto ajenas a la suprema que disfrutaba la justicia de la ciudad. Esta actitud fue origen de numerosos pleitos entre la justicia y ayuntamiento de Alicante de una parte, y el titular de Agost y la justicia del lugar de otra<sup>67</sup>. En estas confrontaciones, por lo general, resultaba siempre amparado en el ejercicio de la jurisdicción alfonsina (y en otros derechos, como el vedamiento de pastos) el lugar de Agost, mientras a la ciudad le era ordenado no perturbar ni interferir esas competencias.

-----  
<sup>66</sup> AMA. Arm. 1, Lib. 31, fs. 509-510. Cifrado en ALBEROLA ROMA, A: *Jurisdicción y propiedad de la tierra en Alicante. (siglos XVII y XVIII)*. Ayuntamiento-Universidad de Alicante, Alicante, 1984, p. 478.

<sup>67</sup> AMA. Arm. 1, Lib. 31, fs. 509-522 y 626-629; y Arm. 14, *Primera copia original ...*, año 1773.

En este sentido, el 20-VII-1613 D. Francisco Maça y Rocamora obtenía, frente a la ciudad de Alicante, un amparo de posesión en relación al ejercicio de la jurisdicción alfonsina, el nombramiento de oficiales, la distinción de términos y el vedamiento de pastos<sup>68</sup>. Sin embargo, los justicias de Alicante continuaron entrando con "vara alta de justicia" en el lugar en casos de la competencia exclusiva de la alfonsina, lo que motivó la promulgación de un Real mandato, de fecha 27-X-1614, en el que exigía a la ciudad explicaciones por la contravención de la anterior providencia, a la vez que se le ordenaba no innovar lo establecido por ella<sup>69</sup>.

A pesar del apoyo institucional a los dueños del lugar, la ciudad de Alicante siguió intentando extralimitarse en sus funciones jurisdiccionales, interfiriendo en causas fuera del alcance de la suprema; dando lugar al pronunciamiento de nuevas sentencias favorables a los señores y justicia de Agost. Así ocurría en 1656 y 1672. El 3-XI-1656 fue ordenada la liberación del alcalde de Agost, preso en Alicante por haber protestado un despacho remitido por la Justicia de la ciudad, y, el 15 de ese mismo mes y año, a tenor de la pretensión del ayuntamiento de la ciudad de que el arrendatario de las hierbas de Agost asegurase en Alicante los posibles daños ocasionados por el ganado (diera casa pignoradora), le fue ordenado nuevamente no perturbar al lugar ni la posesión en que se hallaba su dueño, D. Francisco

-----  
<sup>68</sup> AMA. Arm. 1, Ibidem, fs. 509-522.

<sup>69</sup> AMA. Arm. 14, Primera copia ..., f. 123.

Rocamora. Igualmente, el 1-VI-1672, le fue admitido a D. Luis Pallás de Vallebrera el recurso interpuesto contra la justicia de Alicante, por haber entrado en Agost con vara alta y haber intentado prender al oficial de justicia del lugar por su intervención en un conflicto suscitado en días anteriores con un vecino de dicha ciudad. En esa provisión se cancelaban los actos realizados por la justicia de Alicante en el lugar, y se le ordenaba nuevamente no interferir de ese modo<sup>70</sup>:

"(...) fos manat a Vos dit Justicia que sots pena de doscentes lliures exegidores de bens propis de aquell, se abstingues de fer semejans enantaments y de entrar en dit Lloch y son terme particular en Vara alta de Justicia ni de fer ni exirsir ningun acte o actis Jurisdiccionalis que no fos per, y en los Casos que sea ofereri en tocants el Coneiximent de aquells a dita Suprema Jurisdicció ac etiam sots Decret de nulitat manat Cancellar qualsevol actes que per vos se poguese haver fet en dit dia y ocasió, (...) "<sup>71</sup>.

Con anterioridad a esta provisión, la ciudad había obtenido a su favor un Real Despacho (de fecha 24-VII-1670) en el que se mandaba a Agost no atentar (degollamiento de reses) contra

-----

<sup>70</sup> AMA. Arm. 1, Ibidem; y Arm. 14, Primera copia ..., fs. 125 vto.-128.

<sup>71</sup> AMA. Arm. 14, Primera copia ..., f. 126 vto-127.



los ganados, pertenecientes a vecinos de Alicante, que pacían en el término del lugar, y se ratificaba el derecho de "herbechar y pasturar" de los vecinos de Alicante en el término de Agost<sup>72</sup>.

Parece ser que no surgieron nuevos conflictos hasta el siglo XVIII, y que la situación se modificó a raíz de la guerra de sucesión, propiciando este hecho una cierta subordinación jurisdiccional del lugar a la ciudad de Alicante, al igual que había sucedido por este motivo en el señorío de Busot. En estos términos se expresaba el delegado de la ciudad de Alicante en un memorial presentado en 1723 a la Real Audiencia de Valencia<sup>73</sup>.

Además de declarar "Que siempre y de un tiempo inmemorial, a, esta parte, y sin cosa en contrario, los lugares de Agost, Busot, Monforte, Villafranqueza o Palamó, Muchamiel, San Juan, y Benimagrell han estado subordinados y sujetos al gobierno y Jurisdicción de la Ziudad mi parte, tenidos y reputados por calles y aldeas suyas y sus Vezindades, tratadas con el mismo gose de todas las franquesas, que han gozado los naturales vezinos de ella por estar, como están dichos lugares situados dentro de los límites de sus términos, y Pagos, exersiendo y practicando quantos actos de Jurisdicción se han ofresido, assí en lo sivil como en lo criminal, por medio de su Justicia Mayor y Governador de dicha ciudad (...)"<sup>74</sup>; hacía

-----  
<sup>72</sup> AMA. Primera copia ..., fs. 12-18 vto. Esta sentencia que daría lugar a unos autos, inacabados según el testimonio recogido en esa copia de apeo y deslinde (1773), se vería contrarrestada por otras de signo contrario, dadas antes y después de esa fecha.

<sup>73</sup> AMA. Arm. 1, Lib. 26, fs. 488-497.

<sup>74</sup> AMA. Ibidem, fs. 488 y ss.

alusión a la ratificación del ejercicio de esa jurisdicción sobre los términos mencionados (tanto de señorío como de realengo) por una misiva de fecha 31-VIII-1709, a tenor de las protestas elevadas por la ciudad ante la intención de instaurar un gobierno de carácter militar en esos lugares.

Esta situación parece que se mantuvo durante algún tiempo, aunque en los autos de apeo y deslinde de términos entre Agost y Alicante<sup>75</sup> se recoge el testimonio de la designación de alcaldes ordinarios y regidores por el señor territorial (elección de los cargos por el titular del señorío entre las personas propuestas por los oficiales salientes) desde 1716 a 1740<sup>76</sup>. En relación al derecho de nombramiento de escribano de los juzgados, se afirma su pertenencia a los dueños de Agost, manifestando su ejercicio por parte de los mismos hasta 1740, y señalando como desde entonces hasta 1762 no se habían encontrado certificados de los nombramientos porque "no se registraron por ser títulos particulares dados por los Señores Territoriales"<sup>77</sup>.

En 1742 y 1744, la titular del señorío, D<sup>a</sup> Josefa Pallás de Vallebrera, obtuvo sendos amparos de posesión y ejercicio de la jurisdicción alfonsina, incluyendo también el segundo de ellos la confirmación de la pertenencia de las penas de cámara.

-----  
<sup>75</sup> AMA. Arm. 14, *Primera copia original del apeo y deslinde de Agost con Alicante*. 1773.

<sup>76</sup> AMA. Ibidem, fs. 180-186.

<sup>77</sup> AMA. Ibidem, f. 181. Hacia 1762, aparecen ya recogidos dichos nombramientos en los libros del Real Acuerdo del Archivo del Reino de Valencia.

El 21-VIII y el 27-X de 1742, el procurador de la señora de Agost y Baronesa de Cortes interpuso sendas apelaciones por "los excesos jurisdiccionales" del Alcalde mayor de la ciudad de Alicante en Agost, quien interfería en la jurisdicción que dicha señora poseía privativamente en dominio y los alcaldes del lugar en ejercicio. La primera de dichas apelaciones estuvo motivada por la actuación del alcalde mayor de Alicante en relación al embargo de varias reses, sufrido por tres ganaderos vecinos de Alicante por contravenir un bando del alcalde de Agost que prohibía el paso al ganado a tierras donde existiesen garvas de trigo, debiendo esperar un mínimo de tres días desde la extracción de las gavillas (para el aprovechamiento de las espigas esparcidas por los pobres). El alcalde mayor de Alicante ordenó el comparecimiento del de Agost y la restitución de las reses embargadas, libres y sin costas, y acusó a este oficial de justicia de hacer los bandos sin licencia ni aprobación de la justicia de Alicante.

El segundo recurso fue instado a raíz de la presencia del Alcalde mayor de Alicante en Agost, auxiliado del personal pertinente, en relación al caso de un tiro de pedrada entre dos vecinos de Agost, y el encarcelamiento del alcalde, el teniente y el escribano del lugar con el pretexto de no haber sido avisado del hecho. En respuesta, fue promulgado un auto de fecha 15-XII-1742, en el que se ordenaba a la Justicia y Regimiento de la ciudad de Alicante no perturbar el ejercicio de la jurisdicción alfonsina de D<sup>a</sup> Josefa Pallás en Agost; y, además,

se declaraba respecto a los autos criminales (pedrada), que pertenecían al mero imperio, que el alcalde mayor de Alicante debía tener conocimiento de ellos<sup>78</sup>.

El 16-V-1743 tres abogados de Valencia dictaminaban, a petición del ayuntamiento de la ciudad de Alicante, que, dadas las pruebas presentadas (distintas providencias de amparo, testimonios de los nombramientos de los oficiales de justicia por los dueños del lugar), la ciudad perdería el pleito sobre jurisdicción alfonsina de Agost<sup>79</sup>.

El ejercicio de la jurisdicción alfonsina queda demostrado con la actuación de la justicia del lugar en las diversas causas suscitadas y con su posterior ratificación por la Real Audiencia. En función de estas competencias, el señor de Agost, entre otra serie de derechos, percibía, íntegramente, diversas rentas en metálico en concepto de "penas de cámara, de campo y ordenanzas"<sup>80</sup>, así como la mitad de los ingresos generados por las multas y castigos aplicados a las causas desarrolladas en el lugar correspondientes a la Jurisdicción suprema; destinando una parte al "Real Fisco" por los gastos de Justicia, según estaba prevenido por la Real Provisión de 27-VII-1716.

-----  
<sup>78</sup> AMA. Arm. 1, Lib. 31, fs. 509-522. Cifrado en Alberola Romá (1984), fs. 478-479.

<sup>79</sup> AMA. Ibidem, fs. 626-629.

<sup>80</sup> "de las Penas de Cámara que se causan en el lugar de Agost con frutos de la Jurisdicción alfonsina en la parte que están señalados a los dueños de los lugares de Valencia según el fuero alfonsino". AMA. Ibidem, f. 117.

La ciudad de Alicante debió oponerse igualmente a la pertenencia de estos derechos y rentas a los titulares del señorío, aunque sin resultados positivos, puesto que en 1744 la Real Audiencia de Valencia fallaba a favor de D<sup>a</sup> Josefa Pallás y Vallebrera, propietaria del lugar en esas fechas, con el auto siguiente (de fecha 10-VII-1744):

"(...). El señor D. Andrés de Angulo Ramírez de Arellano Marques de Angulo del Consejo de Su Magestad su Alcalde de el Crimen en la Real Audiencia de esta dicha Ciudad y Juez Subdelegado de la Comicion y efectos de Penas de Camara y gastos de Justicia pertenecientes en este Reyno á el Real y Supremo Consejo de Castilla por el Ylustrísimo Señor D. Gabriel de Olmeda y Aguilar del Consejo y Camara de Castilla y Superintendente General de dichos efectos: Haviendo visto estos autos y que por ellos consta que D<sup>a</sup> Josepha Pallás y Vallebrera viuda de D. Jazinto Forner se halla amparada en el uso y exercicio de la Jurisdicción alphonsina del Lugar de Agost propio suyo situado dentro de los terminos Generales de la ciudad de Alicante, cuyas Justicias pertenecen a Jurisdicción Suprema en virtud de Decreto de la Real Audiencia de quinze de Diciembre de el año pasado de mil Setecientos quarenta y dos y en vista de lo que en esta razón se expone por el Abogado fiscal de esta Subdelegacion, Dixo que por aora y sin perjuicio de los derechos de el

Real Patrimonio debía declarar y declaró que las penas de Cámara y las de Campo y ordenanzas correspondientes á ellas y resultantes de la Jurisdicción alphoncina que corresponde a los Juzgados ordinarios de dicho lugar de Agost como también la mitad de las que resultasen de el ejercicio de la Jurisdicción Suprema en el mismo Lugar y su Termino segun las antiguas disposiciones de este Reyno, han pertenecido y pertenecen a dicha Doña Josepha Pallás y á los que la Succediesen en la posesion de dicho Lugar con tal que a dichas Penas de Camara se hagan las aplicaciones conforme a derecho por Dever hacerse a los gastos de Justicia lo que legalmente les Corresponde, y assi mismo a dichas Penas de Camara lo restante de la otra mitad del ejercicio de dicha Jurisdiccion Suprema y su importe con separación de las que pertenecen al posehedor de dicho Lugar se ha de depositar de cuenta de sus Justicias en Persona abonada para convertir dichos gastos de Justicia en los fines de su destino dando Cuenta de ellos a el Regio Fico y depositando sus alcances en la Receptoría de este Reino segun se previene y dispone en la Real Provición de dicho Consejo Supremo de Veinte y siete de Julio de mil Setecientos y diez y seis; mandaron y mando a las Justicias de dicho Lugar y á los demás a quienes toque, y pertenezca; que assí lo guarden cumplan y (...)"<sup>81</sup>.

---

<sup>81</sup> AMA. Ibidem, fs. 118 vto.-119 vto.

*folios local*

Las competencias jurisdiccionales, además del ejercicio de la potestad judicial (y la percepción de las rentas inherentes a ella), llevaban aparejada la facultad de designar a los oficiales encargados del gobierno municipal; en un principio, justicia, jurados, consejeros (además de otros cargos auxiliares o destinados a otras funciones -almotacén, asesor, escribano-), y, tras la implantación del modelo de ayuntamiento castellano, alcalde ordinario, regidores, escribano y síndico, entre otros cargos (los aspectos relacionados con las prerrogativas que comportaba el ejercicio de la jurisdicción han sido desarrollados más extensamente en el capítulo dedicado al señorío de Busot). De este modo, el señor conseguía controlar la vida económica y política del señorío, y garantizar, gracias a ello, la percepción de sus rentas.

Los cargos de justicia, jurados y consejeros eran de duración anual, pero no de designación directa; puesto que eran los miembros del ayuntamiento cesante (justicia y jurados para el primer caso, y ambos más el consell para los otros dos) los que confeccionaban la lista de posibles candidatos al cargo, entre los cuales el señor del lugar elegía aquellos que más le convenían. Así, en 1651 fue presentada a D. Francisco Rocamora una nómina de 14 personas para el cargo de consejeros, la mayor parte de los cuales habían desempeñado ese cargo durante el año anterior. La decisión señorial fue la siguiente: "Nombro para Consejeros a todos los Contenidos en la memoria exceptuando á Polinario Vicedo y á Jayme Segura que están borrados, y los

emplearé en otra ocasión"<sup>82</sup>. Se ha de señalar también una cierta coincidencia de los apellidos recogidos en la lista, lo que podría indicar un cierto grado de parentesco.

Una vez realizado el nombramiento por el señor, tenía lugar el juramento de los designados. Una muestra de ello es el que tuvo lugar el 14-XII-1659:

"(..) Vosaltres Jaume Arques, Jaume Segura= Juan Arques= Melchor Vicedo de Melchor= Bartholome Vicedo de Melchor= Ambros Yvorra, y Bartholomeu Vicedo de Castellona Consellers nomenats per lo molt Ylustre señor D. Francisco Massa y Rocamora Cavaller del Abit de Alcantara, Conde de la Granja, Señor de la casa y estat de Masa, Castell de la Mola, y present Lloch de Agost, y Polinario Vicedo tambe Conseller nomenat per lo dit Señor prestades, y posades Mans sobre lo Llibre Misal de la Santa Mare Yglesia y en mans y poder de mi Frances Garcia Notari Procurador, y Batle del dit molt Ylustre Señor en lo dit Lloch de Agost juran á Deu y als seus Sans quatre Evangelis de les vostres mans dret, y tocant que sempre y quan serieu cridats a Consell acudireu puntualment y en lo Consell que assistíreu donareu vostron voz y parer conforme eus dictará vostra bona consideracio y conciencia per a tot bé del Comu, y bon Govern del dit, y present Lloch,

---

<sup>82</sup> AMA. Ibidem, f. 177 vto.



guardant en tot y per tot la fidelitat a la dita  
Señoría del dit molt Ylustre Señor mirant tota utilitat  
del Comun y asó fareu si nostre Señor Deu (...). Fiat  
large actum en la Casa de dita Señoría lloch acostumat  
pera semblants negocis (...)"<sup>83</sup>.

Este párrafo nos revela, además, la existencia en el  
lugar de la figura del Bayle o procurador señorial, generalmente  
de designación directa y con amplias competencias, que asume la  
autoridad señorial y actúa en nombre suyo.

El nombramiento del justicia era efectuado por el  
titular del señorío, a propuesta del justicia y jurados cesantes.  
Una vez efectuado el juramento del nuevo oficial, tenía lugar la  
autorización del cargo por el notario (que como hemos comprobado  
en el testimonio anterior podía ocupar también el cargo de Bayle)  
y escribano.

El nombramiento de los cargos municipales tras la  
instauración del modelo castellano era llevado a cabo por el  
mismo procedimiento. A propuesta de los oficiales salientes y por  
elección señorial eran designados dos alcaldes ordinarios, dos  
regidores, un "alcalde de la Hermandad", un alguacil mayor, un  
síndico y un escribano. Una vez aprobado por el Real Acuerdo o  
los Capítulos Generales del Reino, tenía lugar el juramento de  
los elegidos y la autorización por el escribano del ayuntamiento  
del lugar. Así ocurría el 16-VII-1716 con el nombramiento

-----  
<sup>83</sup> AMA. Ibidem, fs. 178-179.

efectuado por D. Jazinto Forner (esposo de D<sup>a</sup> Josefa Pallás y Vallebrera). Sin embargo, a este respecto cabe señalar la Real Resolución de 1723, que responsabiliza a los dueños de lugares de los nombramientos de los oficiales de sus pueblos, sin necesitar la aprobación de Capitanes Generales o Real Acuerdo.

El cargo de escribano si era de designación señorial directa, siendo necesaria la posterior aprobación del nombramiento por el Real y Supremo Consejo de Castilla. Con anterioridad a 1762 no existen testimonios de esos nombramientos, pues, como señala el escribano designado en esa fecha, por D<sup>a</sup> Josefa Pascual de la Verónica y Pallás, "al parecer no se rexistraron por ser títulos particulares dados por los Señores Territoriales". Este oficial señalaba asimismo la interrupción de esa facultad señorial desde 1740. La persona elegida debía contribuir a la Real Hacienda, tras la ratificación del cargo, con el pago de la media annata, que en este caso había ascendido a 5.625 maravedíes vellón.

La elección directa por el dueño del lugar de este funcionario municipal evidencia la trascendencia de este cargo para asegurar la mediatización señorial del lugar y la percepción de las rentas del titular del dominio directo; puesto que era el escribano el encargado de autorizar tanto los nombramientos de los miembros del gobierno municipal, como las transacciones de bienes efectuadas por los vecinos de Agost (tanto de propiedades plenas como establecidas enfitéuticamente).

La naturaleza de su cometido queda claramente especificada en el fragmento siguiente, correspondiente al nombramiento efectuado el 20-IV-1762 por D<sup>a</sup> Josefa Pascual de la Verónica<sup>84</sup>:

"(...). Por quanto Melchor Castelló escribiente natural y vezino de dicho Lugar de Agost tiene todas las Calidades, y circunstancias que se requieren para exercer la Artte de escrivano y de que está apto en todo genero de escripturas, Auttos y diligencias Judiciales como extrajudiciales, teniendo tambien la de legitimidades, limpieza de sangre (...): Por tanto, y tener de esta escritura la señora otorgante de su buen grado, y cierta ciencia: otorga que nombra y crea al dicho Melchor Castelló presente y baxo acceptante, por escrivano publico Numerario y de los Juzgados de dicho su Lugar de Agost, para que como á tal en el y su término pueda recibir y authorizar, reciba y authorize todas y qualesquiera escrituras, de Poderes, Substituciones, Ventas, Censsos, obligaciones, Donaciones, Compromissos, testamentos, Codicilos, y demás genero de Escrituras, Instrumentos, y Contratos, Auttos y diligencias Judiciales pertenecientes a dicho empleo de escrivano numerario y de los Juzgados del referido lugar de Agost, y su termino (...). Y mandó a los Alcaldes, Justicias, Regidores, Consejo,

-----  
<sup>84</sup> AMA. Ibidem, fs. 181 vto.-184.

Ayuntamiento, oficiales, y hombres buenos de dicho lugar de Agost reciban hayan y tengan por Escrivano publico Numerario y de los Juzgados de él y su termino al dicho Melchor Castelló, y le guarden y hagan guardar todas las honrras, Gracias, libertades, preheminencias, Prerrogativas é inmunidades, (...)"<sup>85</sup>.

En los autos de apeo y deslinde de términos entre Alicante y Agost de 1773, la ciudad, a pesar de reconocer el ejercicio de la jurisdicción alfonsina por los titulares del señorío, rechaza la participación del lugar en los mismos como parte legítima, al considerar que están incluídos en su término general, y que esa jurisdicción no exime a la población del concepto de lugar, aldea o calle de Alicante<sup>86</sup>. Esta actitud sería adoptada por Alicante en otros actos de amojonamiento y deslinde llevados a cabo por otros términos de sus proximidades, limítrofes con los términos generales, no particulares, de la ciudad. Así ocurría en el proceso de delimitación de término de la villa de Petrel, en la que la ciudad se negó a la presencia como partes de Agost y Monforte<sup>87</sup>.

-----  
<sup>85</sup> AMA. Ibidem, fs. 182-182 vto.

<sup>86</sup> AMA. *Primera Copia Original del apeo y deslinde del termino de esta Ylustre Ciudad con el de la Universidad de Agost. Dado Por Fco. Xavier Paredes Granados, Escribano de la Comisión. Año de 1773*, fs. 3-203.

<sup>87</sup> AMA. Arm. 1, Lib. 40 (Privilegios y Provisiones Reales. Año 1765), fs. 18-163.

Estas diligencias fueron motivadas por la preocupación del ayuntamiento de la Alicante ante la usurpación de terrenos relengos realizados por los pueblos confinantes. Por esta razón, fueron acometidas en 1757 (aunque anuladas posteriormente) unas operaciones de deslinde con los pueblos limítrofes, con el objeto de reconocer enfiteutas y censos perpetuos, tierras, sotos, prados, montes, dehesas, etc, y establecer los diezmos y regalías pertenecientes a la ciudad<sup>88</sup>. En este sentido, los procuradores de la ciudad acusaron a los titulares del señorío de adquirir terrenos sometidos a la jurisdicción suprema para ejercer en ellos la alfonsina, y solicitaron la limitación del término particular de Agost, así como el ejercicio de la jurisdicción alfonsina, a la superficie originariamente comprendida en la compra realizada en 1320<sup>89</sup>.

El ayuntamiento y titulares de Agost, finalmente, vieron reconocidas sus competencias jurisdiccionales en el lugar, y deslindado el término particular del señorío.

---

<sup>88</sup> AMA. Ibidem, fs. 33 vto.-35 vto. y 56 vto-57.

<sup>89</sup> AMA. Ibidem, fs. 205-248 vto.

### 2.3.-El funcionamiento económico del señorío.

El señor del lugar obtenía una serie de rentas en el lugar, procedentes tanto del ejercicio de la jurisdicción como de la propiedad de la tierra que había cedido en enfiteusis. La parte más importante de esos recursos correspondería sin duda al apartado mencionado en último lugar.

Como pone de manifiesto la carta puebla del lugar, otorgada en 1482, la enfiteusis fue el régimen de tenencia predominante en el lugar; aunque parece posible la existencia de tierras francas en el mismo, según se deduce de algunas escrituras de venta contenidas en los protocolos notariales. Sin embargo, la escasez de documentación no permite esbozar ninguna conclusión terminante a este respecto.

Al régimen de tenencia empleado son inherentes una serie de derechos destinados a garantizar el dominio directo del señor, la percepción por el estabiliente de parte de las plusvalías de la tierra establecida y el pago de una serie de rentas en metálico o en especie. La fadiga, el luismo (entrega al propietario del dominio directo de la décima parte del precio de los bienes transferidos), la exigencia de realizar un cabreve periódico, el comiso, o la necesidad de obtener la licencia señorial en caso de enajenaciones (en ocasiones satisfaciendo también un cánón en metálico por la concesión de la autorización)

son algunos de estos derechos. Además, el titular del señorío recibía un cánón anual de carácter mixto, en especie y en metálico, dependiendo de las especies cultivadas por el enfiteuta. Estas últimas prestaciones constituyen el contenido fundamental de la carta puebla del lugar.

Efectivamente, en este documento otorgado el 21-VI-1482 se establece como censo más frecuente la partición de frutos, con diversas partes alícuotas a favor del señor, aunque se reservan algunos cultivos bastante rentables a la entrega de censos en metálico. Las particiones de frutos fueron estipuladas en  $1/5$  en el caso de cultivos de secano (cereales y otras especies), en  $1/4$  en el de cultivos de huerta (cereales -trigo y cebada-, legumbres, cebollas, ajos, habas,...) y en  $1/3$  de los frutos del arbolado (olivos y algarrobos), tanto en huerta como en secano. Otra serie de productos estaban gravados con censos en metálico, en torno a los 6 dineros por higuera plantada, y a los 4 sueldos y 6 dineros por tahulla de viña o alfalfa, ambas en huerta. Así se recoge en varios de los capítulos de la carta de población:

.-"Primo que los Blats ques collirán en la Orta axi de Forment com de ordi, o, de altres Blats paiguen a raho el quart ço es, al señor un cafis, e als vasalls tres cafizos, e, que, hans e primerament se pague, e, sia pagat Delme axi com es acostumat".

.-"Item dels Blats del Cequa que hajan a pagar, e, que paguen a la cinquena, ço es, de cinch cafiços hu, e pagar hans, e primerament lo delme segons es acostumat".

.-"Ytem, que de les altres Rendes e fruyts ques haurán, e procehirán de la terra ortal, se pague, e que siá pagat al quart axi com Cebes, Alls, Faves, Legums, e semblants altres fruyts, e aixi mateix paguen les dites Rendes, é, Fruyts del seca a la cinquena aixi com es de sus mencionat".

.-"Item, que paguen, é, sien tenguts pagar de les olives, e, garrofes, axi de la orta com del secà paguen, e sien tenguts pagar al terç ço es, de tres cafiços hu al dret del señor, e, dos á ells, (...)"

.-"Item, que sien tenguts pagar al señor de les alfalfes que tendran en lo dit lloch, e orta de Agost a raho de quatre sous e sis dines per tafulla".

.-"Item mes, que de les Figueres plantades que ara son, e, donen Renda, paguen per cascuna per dret de Señor sis dines, e de les Figueres que de así havant plantarán del terç any havant que serán plantades donen al dret de Senyor á raho de sis Dines per figuera axí com huy de les de sus dites que huy son es contengut e, declarat pagant lo Delme que deuran donar, exceptat figueres de Burjasot, e, verdals de totes altres paguen dret de señor".



.-"Item, que de les Vinyes que serán plantadas en la Orta del dit Lloch, e, terme de aquell paguen, e , sien tenguts pagar cascu á raho de quatre sous e, sis dines per cascuna tafulla del terç any havant de les dites vinyes plantades pagant empero los dits vasalls lo Delme acostumat de les dites Vinyes e Rendes que de aquelles haurán".

.-"Item, que cascu dels dits Vasalls Sien tenguts en lo Giner primer vinent del any mil quatrecents huytanta tres plantar una tafulla de Vinya, y en los Giner del any huytanta quatre altra tafulla, y en lo Giner del any, huytanta cinch altra tafulla per manera que dins tres anuys cascu dels dits Vasalls haja plantat tres tafulles de Vinya".

Tanto los censos en especie como los impuestos en metálico resultan superiores a los establecidos en Busot o Aguas. Concretamente en el caso de las particiones, se observa como las establecidas en esta ocasión se alejan bastante del séptimo o la doceava parte imperantes en Busot, acercándose más a las que serían fijadas posteriormente en Villafranqueza, y, ya a finales del siglo XVIII, en la Vallonga de Burgunyo.

Además de las particiones se incluye en algunos capítulos el pago del diezmo (aunque restringido a ciertas especies -cereales, olivos, higueras y viña), previamente a la satisfacción de los censos enfitéuticos, aunque sin especificar claramente quien ha de percibir dicho derecho.

En este sentido, en el remate de los corderos correspondientes al diezmo del ganado de la Universidad de Agost, concedido en 1761 a F. Vicedo Morant, figura como otorgante la Real Junta de Fábrica del Tercio-diezmo, integrada por representantes del ayuntamiento y de la iglesia<sup>90</sup>.

Como se ha puesto de manifiesto en los capítulos expuestos, el señor ejercía un cierto control sobre la puesta en explotación de las tierras establecidas, bien a través de normas que exigiesen de cada vasallo la implantación de un determinado cultivo, por ejemplo la de plantar durante los tres primeros años de asentamiento una tahulla de viña anual, bien mediante incentivos, como la exención temporal de cargas señoriales. En este último sentido, tanto en el caso de higueras como de viñas, el enfiteuta, durante los tres primeros años de vida de la planta, no estaba obligado a satisfacer al señor ninguna prestación en concepto de cánón enfiteutico.

Asímismo, los vasallos debían entregar al señor del lugar, llevándolo a la casa señorial, dos gallinas y una carga de leña:

-----  
<sup>90</sup> El precio ofrecido por los 53 animales recogidos ascendió a 43 libras 14 sueldos 6 dineros (16 s. 6 d. por cabeza). ANJ. Prot. Not. de G. Arqués y Bernabeu, P.Varios 1, año 1761, pp. 22 vto.-23 vto. En 1763 fueron fijadas 1 libra 7 sueldos 7 dineros por cada uno de los 82 corderos entregados por el diezmo. Esa cantidad se mantenía sin grandes variaciones en 1764 (1 L. 7 s.), habiendose rematado 110 cabezas entre corderos y cabritos. ANJ. Ibidem, P. Varios 2, año 1763, f. 107 vto, y año 1764, fs. 178-179.

"Item, que los dits Vasalls donen e, sien tenguts donar al dit Señor lo Present acostumat donar al Señor del dit Lloch, ço es, dos gallines cascu, e, una carrega de Llenya, la qual sien tenguts portar aquella honlo señor tendrà sa Casa o, habitacio".

El extrañamiento de los moriscos incidió, en un principio, negativamente en el señorío; puesto que supuso el abandono de una importante proporción de tierras cultivadas por éstos en el término y el despoblamiento del lugar provocado por las posibilidades de asentamiento de los vecinos restantes en otras zonas más atractivas, desocupadas a raíz de la expulsión.

Ambos hechos podrían haber posibilitado el otorgamiento de nuevos establecimientos de tierras, manteniendo las antiguas condiciones de repoblación, o bien estipulando otras nuevas; aunque la carencia de fuentes documentales no permite formular ninguna hipótesis al respecto.

En la segunda mitad del siglo XVIII si se ha detectado, tras la consulta de varias escrituras de transferencia del dominio útil recogidas en protocolos notariales<sup>91</sup>, una cierta suavización de las cargas señoriales derivadas de la propiedad de la tierra; aunque desconocemos si es un hecho parcial o generalizado en el señorío, y por tanto si responde a la imposición de condiciones más moderadas en nuevos

-----  
<sup>91</sup> ANJ. Prot. Not. de Arqués y Bernabeu, Ps. 1 y 2 (Varios), años 1761-1764.

establecimientos, o a un relajamiento general de las existentes desde un principio.

A este respecto cabe señalar como en las declaraciones de cargas se mencionan conjuntamente, y sin ir referidas especialmente a ningún tipo de cultivo, particiones de frutos y censos en metálico. La proporción de la cosecha percibida por el señor no es especificada en ningún caso, pero sí aparece consignado el valor del canon anual en metálico, que se establece en 1 dinero por jornal (o barchilla de sembradura), a satisfacer en una sola paga cada 15 de agosto. Cantidad que parece ser independiente de las características de explotación de la finca (campa o arbolada -almendro principalmente-, secana o con ciertas posibilidades de riego -existencia de fuentes o de un sistema de boqueras). Cánones de un importe similar fueron declarados durante la tercera década del siglo XIX en un expediente abierto por la adscripción a señorío o a realengo de una importante porción de tierras<sup>92</sup>.

En una de esas escrituras (otorgada con motivo de la venta de dos parcelas de tierra, una comprensiva de 3 tahullas "con Derecho de Boquera de dicha rambla (Derramador)" y otra de 4 tahullas con un día de agua de la fuente y balsa de la universidad de Agost) se menciona como único gravamen la existencia de un censo de 140 libras de capital, anua pensión a satisfacer el día de todos los santos, impuesto a favor de la

-----  
<sup>92</sup> ARV. Bailía E, Apénd. 550, 195 fs.

señoría del lugar<sup>93</sup>.

En relación a este punto, en un informe del año 1782 redactado por el ayuntamiento de la ciudad de Alicante, se señala la existencia de particiones al 1/8 y al 1/12, según los casos, y se manifiesta como los algarrobos no soportan ninguna carga señorial<sup>94</sup> (cuando este cultivo había partido al 1/3 inicialmente). De ser cierto este hecho, nos revelaría una importante suavización de los cánones exigidos en especie, bastante gravosos en su origen.

De las referencias localizadas, se deduce un claro predominio del secano en el término, garantizado en ciertas ocasiones por los escasos caudales hídricos procedentes de alguna fuente existente en el lugar (objeto de venta independiente de la tierra)<sup>95</sup> o del aprovechamiento de las aguas de avenida a través de los sistemas de riego por boqueras. La importancia de los recursos mencionados en último lugar se hace evidente por la precisión con que son inscritos y delimitados los respectivos derechos en los libros del Registro de la Propiedad.

-----  
<sup>93</sup> ANJ. Ibidem, P. 2 (Varios), año 1762, fs. 1 vto.- 3vto.

<sup>94</sup> AMA. Arm. 12, Lib. 64, f. 282 vto. Cifrado en E. Giménez López: *Alicante en el siglo XVIII: Economía de una ciudad portuaria en el antiguo régimen*. Alicante, 1981, p. 135.

<sup>95</sup> En 1761 era vendido un día de agua (24 horas el día 19 de diciembre) de "la fuente manantial y balsa de la universidad de Agost", por 28 libras y libre de todo género de censo, vínculo o gravamen. ANJ. Ibidem, P. 1 (Varios), año 1761.

Al margen de los derechos y rentas inherentes a la propiedad de la tierra y los percibidos en función del ejercicio de la potestad judicial, la gestión de los **derechos exclusivos, privativos y prohibitivos** es el tercero de los grandes capítulos de rentas señoriales; cuya gestión podía ser asumida directamente por el señor, o bien delegada en los arrendatarios de derechos dominicales, quienes a su vez subarrendaban las distintas regalías individualmente.

Este tipo de derechos afectan tanto a la transformación de productos agrarios, a ciertas producciones industriales o a los servicios a la comunidad rural -hornos, almazaras, molinos, tiendas, tabernas, carnicerías, mesón- como al aprovechamiento de las utilidades rústicas del término -montes, pastos, recogida de leñas o de esparto-. Permiten al señor controlar la actividad económica del lugar y constituyen una fuente de ingresos importante.

Algunos de estos monopolios fueron ya incluidos en la venta del lugar efectuada en 1320 por el baile general del reino, en nombre del rey Jaime II. En este documento, además de la posesión de molinos, hornos y carnicerías, se otorgaba el disfrute de los derechos de esas características que en el futuro pudieran existir.

La carta puebla de 1482 solamente contemplaba la obligatoriedad de utilizar la *almazara* señorial, satisfaciendo al señor por ello un cánón mixto, constituido por la doceava parte de las olivas que llevaran a moler, en concepto de derecho de moltura, y 3 libras por el de bigue. El señor proporcionaba tanto

la persona encargada de la almazara como las bestias necesarias para el proceso de transformación, aunque el enfiteuta tenía la posibilidad de aportar él mismo esta última, en cuyo caso solamente pagaría el canon en metálico. La contravención de esta norma era castigada con la pérdida del género y una multa de 60 sueldos.

El titular del señorío obtuvo la ratificación de la posesión de estas regalías a raíz de la sentencia promulgada por la Real Audiencia en 3-XI-1784, en los autos promovidos en 1782 a instancias del procurador patrimonial de la Comisión de Cabreves "(...) sobre y en razón de que los Dueños territoriales de los lugares de Bussot y Agost, y de la villa de Villafranqueza, acudiesen a cabrear los hornos, molinos, Alfarerías y demás alaxas que disfrutaban o hiciesen constar de la gracia de su consecion", puesto que en los pueblos mencionados "se hallan muchos ornos que los Dueños territoriales han mandado construir, assí para cozer pan, como, para fábricas de vidrio, alfarerías de texas y demas obraxes de xarras, cantaros y demas faenas, sin que para ello hayan obtenido lisencia ni establecimiento de la Bailia (...)"<sup>96</sup>.

En esta sentencia se declaraba no estar obligado el barón de Cortes al reconocimiento y cabreve de las regalías, mejorando el auto promulgado el 12-I-1784 por D. Vte. Abargues y Satorre, abogado de los Reales Consejos del Ylustre Colegio de Madrid, Juez de la Comisión de Cabreves. En este último auto,

-----

<sup>96</sup> ARV. Bailía, E, Exp. nº 1.418, año 1784, f. 1.

basándose en la falta de autenticidad de las pruebas presentadas por la parte del señor de Agost (la copia de la escritura de venta del lugar de 1320) se establecía lo siguiente:

"(...) en consideración, a los substanciales vicios que contiene el documento presentado por la (parte) del Dueño Territorial del lugar de Agost, para acreditar la libertad de los hornos de pan cocer, alfarerías, y demás regalías de que se trata: Dixo se debía declarar y declaró estar afectas al dominio mayor y directo del Real Patrimonio, y que con la propia afección debe dicho dueño territorial acudir por si, o por medio de apoderado con poder especial a cabrevarlas en esta Audiencia y solicitar suplemento de títulos en la conformidad que previene la instrucción aprobada por la Real Zedula de 10-VII-1781; y mandó se haga saber a la misma parte lo cumpla dentro de tercero día, con apercibimiento de que pasado sin ejecutarlo se procederá a declararlas por de Comisso y a lo que aya lugar, (...)"<sup>97</sup>.

El titular del señorío tuvo que enfrentarse, además, a la oposición de los vecinos del lugar a la situación generada por el control señorial de las regalías. En este sentido, y en relación a las que atañían a los *abastos públicos* -panaderías y

-----  
<sup>97</sup> ARV. Ibidem, f. 71.



*tiendas de comestibles-*, se suscitó a principios del siglo XIX, en vísperas de la disolución del régimen señorial, un pleito sobre la regulación del peso de la harina, puesto que las condiciones de venta de este producto fueron consideradas perjudiciales para el común, en beneficio únicamente del señor del lugar y los arrendatarios de las tiendas<sup>98</sup>.

El cabildo municipal, reunido el 3-III-1804, acordó, a instancias del síndico personero de Agost y a pesar de la oposición de algunos de sus miembros, regular el peso de la harina para la venta de pan, de modo que la ganancia de los arrendatarios de las tiendas fuera proporcional al abasto, así como requerir del procurador señorial la presentación de los capítulos que establecían el funcionamiento de las tiendas de comestibles. El representante de D. Joaquín Frígola alegó que el gobierno de las tiendas de abastos estaba reglamentado por las normas acordadas por la junta y jurados del lugar en 1700, a las que se habían sujetado los diversos titulares y los arrendatarios de los derechos dominicales en los arriendos y subarriendos de las mismas. Además de los géneros que debían suministrarse a la población y las multas fijadas por la contravención de los capítulos, se contemplaban las ganancias correspondientes a los arrendatarios. En relación a este último aspecto es significativo el único capítulo recogido en el expediente:

-----  
<sup>98</sup> ARV. Real Audiencia, Escribanías de Cámara, Exp. 55, año 1804, 175 fs.

"(...). Item, en la Farina deu sous per sos treballs de Ports, y maquila, y se li conten dosse arroves de farina per cafis de Barsella grossa de Alacant, y vall de elda, y deu arroves de Barcella chica de fora, y lo port, y moltura á consencia dels jurats, de aquell forment, y farina portada de fora alacant, y vall de elda en lo Pá 1 sueldo 4 dineros per arroba, y lo segó= (...)"<sup>99</sup>.

Como se indica en este fragmento, en el precio de la harina venía incluida una cantidad de 10 sueldos en concepto de costes de transporte y maquila (molienda del trigo), habiéndose estipulado el contenido del cahiz de trigo en 12 arrobas de harina. El síndico personero del lugar hizo hincapié en lo perjudicial que esta costumbre resultaba para los vecinos, puesto que en la fijación de los precios del pan (estimación de las onzas de pan que podían adquirirse por 4 y 8 dineros) se tomaba en consideración este cómputo -además del coste de adquisición del producto por los tenderos (que debía ser declarado a los regidores, quienes se alternaban en el control de los abastos con los diputados), de los gastos de "conducción, porte a proporcion de la distancia, y los de molienda, amasijo y cocimiento"- cuando en realidad el cahiz de trigo contenía 14 o 15 arrobas de harina, quedando el exceso a beneficio de los arrendatarios de la fleca o de las tiendas. De ese modo se

-----

<sup>99</sup> ARV. Ibidem, fs. 42-42 vto.

justificaba "que siendo tan inexplicables las utilidades y grangerías que por este termino experimentan diariamente los tenderos, o Panaderos, no tienen el menor inconveniente de encargarse de las tiendas, y panaderías á precios subidos, y al cabo el Dueño que debía interesarse en el alibio de los Pobres es el que por lo regular experimenta mayor conveniencia (...)"<sup>100</sup>.

Tanto el dueño del lugar como los arrendatarios y subarrendatarios de las tiendas se opusieron a las medidas propuestas por el síndico, ante el recorte que podrían experimentar sus rentas. En este sentido, se alude en el expediente a una considerable reducción de los precios de arrendamiento, que pasan de 440 libras anuales por el arriendo de cada tienda en 1801, o de las 900 libras en años posteriores (ante los elevados precios del trigo), a rentas próximas a las 200 libras al final del proceso. Este rechazo se hizo patente en la demora de las diligencias de regulación, demora propiciada por la actitud favorable al señor de algunos de los miembros del ayuntamiento<sup>101</sup>, y que daría lugar a la apertura del expediente correspondiente en la Real Audiencia. A pesar de ser ordenado por el Real Acuerdo (el 10-IV-1804) el cumplimiento de lo previsto en el cabildo mentado, no varió la situación. El

-----  
<sup>100</sup> ARV. Ibidem, fs. 5-5 vto.

<sup>101</sup> Así lo denunciaba el mencionado síndico personero: "(...) Y aunque desde entonces acá es ya pasado un Mes ó mas aun no se ha puesto en practica, y recela mi Parte, que por seguir algunos el Partido del Dueño de la Población procurarían embarazarlo". ARV. Ibidem, f. 6.

procurador en la causa de D. José Joaquín Frígola criticó la providencia aduciendo que perjudicaba los intereses de su parte, pudiendo "alterar, y privar á este de la Posesión en que por muchos años se halla con arreglo a los Capítulos, y demas que de Ynmemorial han gosado las regalías de las tiendas propias de mi principal como consta á Público (...)"<sup>102</sup>. El argumento presentado para solicitar la mejora del auto del Real Acuerdo consistía en el consentimiento de los capítulos adoptados por los síndicos personeros y diputados del lugar "que siempre han procurado manifestar su mayor zelo y actividad como elegidos por el mismo Comun, y sin el menor respeto á los Dueños Territoriales, basta seguramente para convencer la equidad y Justicia con que se establecio dicho capitulo procurando nivelar y conciliar el interes y beneficio del Publico en el surtido y seguridad de su Abasto de primera necesidad, y la recompensa de los Panaderos por sus trabajos y contingencias, y obligacion cerrada de surtir al Pueblo (...)"<sup>103</sup>.

Los vecinos, por su parte, admitieron la carga de 10 sueldos, pero no el peso incorrecto del cahiz de trigo, señalando que fueron los bajos precios del trigo los que permitieron la aceptación de este hecho en otro tiempo, y cuestionando la independencia de los oficiales municipales, dado que el señor elegía anualmente los cargos "entre los que se le proponen, y son adictos suyos", y "éstos para concentrar en los de su

-----  
<sup>102</sup> ARV. Ibidem, fs. 13-13 vto.

<sup>103</sup> ARV. Ibidem, fs. 44-47 vto.

pandilla la jurisdicción y gobierno sacrifican al pueblo, aumentando á costa de éste los emolumentos del señor"<sup>104</sup>. El procurador del común denunció el sometimiento del gobierno municipal al señor, a través del control ejercido por los administradores señoriales, quienes asumían también el cargo de escribanos. Tras el pronunciamiento del Fiscal Patrimonial a favor de los vecinos, fue promulgado un auto en 17-VII-1804 en la misma tónica que el anterior. Sin embargo, los autos continuaron hasta la adopción de un acuerdo por ambas partes para evitar los gastos ocasionados por los pleitos, puesto que en la última sentencia promulgada por la Real Audiencia, en 2-IV-1807, se había fallado nuevamente contra el señor. El 6-X-1807 el ayuntamiento de Agost y el Barón de Cortes establecían los siguientes puntos de acuerdo<sup>105</sup>:

-en cuanto al derecho de poya en los hornos de cocer pan, y ante la escasez de leña, se permitía la elección de la forma de pago, en especie (pan) o en dinero; aumentando en este último caso en una tercera parte (de 8 a 12 dineros por arroba).

-el pago por el del aceite podría pagarse igualmente en metálico o en especie, ascendiendo en el primer caso a 24 dineros por arroba.

-en cuanto a la harina, se establece su peso real, aunque se incrementaría a los arrendatarios de las tiendas en concepto de portes, maquila y despacho 18 reales corrientes (27

-----  
<sup>104</sup> ARV. Ibidem, fs. 50-53 vto.

<sup>105</sup> ARV. Ibidem, fs. 165-166 vto.

rs. vellón) por cada cahiz de trigo de Agost, Alicante y valle de Elda, y, en el caso de proceder de la montaña o de otras zonas, correspondería al arrendatario el salvado de la harina y 16 dineros por arroba amasada.

El convenio fue aprobado por la Real Audiencia el 26-I-1808, tras ser considerado favorablemente por el gremio de horneros y abastos a petición del fiscal patrimonial.

La mayor parte de los derechos señoriales eran objeto de cesión conjunta en arrendamiento por el dueño del lugar, pero en algunos casos, como el *abastecimiento de carnes*, se efectuaba individualmente tras su remate en pública subasta (en esta ocasión se concedía a quien ofreciese la libra de carne más barata). En los miembros del ayuntamiento había delegado el señor la gestión de esta regalía, por la que percibía 1 dinero por libra de carne vendida y 4 dineros por res que matase el arrendatario de la misma, dada la importancia de las cuestiones de abastecimiento para el común de vecinos. En este sentido, en 1761 era otorgada en arrendamiento por un año a Antonio Carbonell, vecino de Tibi, quien había ofrecido vender la libra de carne de cordero y oveja a 42 dineros la libra, y la de carnero a 52 dineros<sup>106</sup>. Sin embargo, con posterioridad a la firma de la escritura, al ofrecer otro postor -también vecino de Tibi-, la libra de carne por un dinero menos, le fue cancelado el arrendamiento en favor de este último<sup>107</sup>.

-----

<sup>106</sup> ANJ. Prot. Not. de G. Arqués y Bernabeu, P. 1 (varios), año 1761, fs. 19-20 vto.

<sup>107</sup> ARV. Ibidem, fs. 26-27.

Las condiciones de arrendamiento se especifican con bastante detalle (no se remite a unos capítulos constituidos previamente), procurando garantizar el abastecimiento de géneros de buena calidad a la población. En este sentido, el abastecedor estaba obligado a suministrar carne de carnero (cuando fuera necesario a dictamen de los regidores), oveja (de junio a septiembre) y macho (el resto del año), estándole prohibida la venta de cualquier otro tipo de carne sin el consentimiento de los regidores (en caso contrario pena de 3 libras y requisamiento de la res). La venta estaba permitida hasta las 10 de la mañana en invierno, y hasta las 8 en verano, y la falta de carne durante la primera hora se penaba con una multa de 3 libras, costeadando el abastecedor las diligencias emprendidas por los regidores de prolongarse durante más tiempo la carencia de género. La obligación de proveer de carne se extendía a soldados, pasajeros y cualquier forastero además de los vecinos (aunque sólo a éstos últimos debía suministrar carne de carnero).

El salario del cortante (puesto designado de conformidad al ayuntamiento y al abastecedor) se establecía en 36 libras anuales, a condición de recibir únicamente la sangre y tripas de la pieza. Otras partes de las reses como la cabeza, los pies y las asaduras eran cedidas al ayuntamiento en beneficio del común (probablemente en concepto de propios), quien las

remataba en pública subasta<sup>108</sup>. Al abastecedor le estaba permitido apacentar en el bovalar del lugar hasta 200 cabezas de ganado lanar, y fuera de él, en los montes del término, hasta 60 de cabrío, siempre y cuando se responsabilizara de los daños ocasionados por el mismo. Otra serie de disposiciones señalaban que no podría negarse a la venta de alguna piel si así lo solicitasen los vecinos, y, en caso de necesitar sal para salarlas, estaba estipulado que la adquiriese en el estanco de la universidad. Por último, resta señalar que al abastecedor le era exigido el presentar fiador, y costear los gastos del remate y la escritura.

La regalía de pesos y medidas parece que también había sido cedida por el señor al ayuntamiento del lugar, encargándose los regidores de su control (entregando los instrumentos de peso y medida a los vendedores que los necesitasen). Sin embargo, cabe la duda de que el señor estuviera realmente en posesión de la regalía, puesto que no incluida explícitamente en la confirmación obtenida por éste en 1784 de su derecho a las regalías del lugar, fue cuestionada durante los primeros años del siglo XIX, y reclamada su pertenencia al Real Patrimonio<sup>109</sup>.

-----

<sup>108</sup> En 1761 era cedido su aprovechamiento por un año y un precio de 68 libras, a pagar por tercias, a favor de un vecino de Agost; a condición de no vender la cabeza y los pies a un precio superior al de la libra de carne, y la asadura por más de 12 dineros. Además se le exigía fianza y la satisfacción de los costes de la escritura, remate, etc. ANJ. Ibidem, fs. 17 vto-19.

<sup>109</sup> ARV. Bailía, E, Exp. 2.372, 59 fs.



En este sentido, el 6-VI-1807 Tomás Payá, un vecino de Monforte, solicitaba el establecimiento del derecho de pesos y medidas de la Universidad de Agost, aduciendo su carácter de regalía real y los perjuicios que el sistema mantenido causaba a los vecinos del lugar, al propiciar las ventas fraudulentas por la falta de control en los pesos y medidas (inexistencia de "peso, romana y medida fiel y legal")<sup>110</sup>. A pesar de la respuesta del ayuntamiento del lugar negando los fraudes y defendiendo el cometido de los regidores, el informe del juez administrador de la bailía de Alicante fue favorable al establecimiento, fundamentando su resolución en la posible falta de honestidad en el manejo de los pesos y medidas tanto de los regidores (aprovechamiento de los beneficios en perjuicio de la regalía, y por tanto de los propios del ayuntamiento), como de los comerciantes (instrumento en manos de los propios interesados); en las rentas que podría obtener el Real Patrimonio (derechos enfitéuticos) y en la carencia de título, por parte del ayuntamiento del lugar, que acreditase su posesión de la mencionada regalía<sup>111</sup>.

La intervención de D. José Joaquín Frígola -Barón de Cortes, y "Dueño y Señor Jurisdiccional, Territorial, Campal y solariego" de la Universidad de Agost-, oponiéndose a su cesión en enfiteusis, no varió la postura de los funcionarios reales. El pronunciamiento del procurador patrimonial, efectuado el

-----  
<sup>110</sup> ARV. Ibidem, fs. 4-5.

<sup>111</sup> ARV. Ibidem, fs. 7 y ss.

17-X-1808, reiteraba los argumentos anteriores, y solicitaba la declaración de derecho privativo del rey el establecer pesos y medidas en Agost, con reserva del dominio mayor y directo y la imposición de un canon anuo de 15 reales al margen del resto de derechos enfitéuticos, "poniendo un peso, romana y medida legal con las pesas correspondientes y con la exacción de derechos por arrobas, barchillas o aranceles existentes en Alicante"<sup>112</sup>. El auto definitivo de la Real Audiencia fue dictado en términos bastante aproximados, declarando "propia, peculiar y privativa de S. M. la regalía de Romana, Pesos y Medidas de Agost", aunque ordenando su arrendamiento en pública subasta sólo durante un año (con preferencia de T. Payá), al término del cual debería ser incluida entre los derechos de la Bailía, pasando a la Contaduría Principal<sup>113</sup>. Tanto el barón como el ayuntamiento se desentendieron del asunto, y aunque el interesado en el establecimiento instó apelación de la sentencia no obtuvo resultados positivos (auto de 29-VIII-1809).

Sin embargo, el ayuntamiento del lugar continuó disfrutando de la regalía objeto de litigio a pesar de la sentencia. Así se deduce de los requerimientos enviados, con motivo de la Real Orden de 3-III-1819<sup>114</sup>, a las villas y universidades dependientes de la bailía de Alicante en 1819 para

-----

<sup>112</sup> ARV. Ibidem, fs. 49-51-

<sup>113</sup> ARV. Ibidem, fs. 51 vto.-52 vto.

<sup>114</sup> En este Real Orden se declaraba que, a pesar de los despachos dictados en fechas anteriores, se seguían manteniendo los derechos del Real Patrimonio en la facultad de establecer o arrendar los pesos y medidas y demás regalías que le correspondían en le reino de Valencia por derecho de conquista.

que presentaran los títulos de pertenencia de las regalías de pesos y medias, herbaje y pilón de carnicería, y de la consiguiente respuesta del ayuntamiento de Agost:

"(...) que este Ayuntamiento, ni el común de Vesinos que representan gozan de ninguna de las Regalías que en el antecedente Despacho se mencionan. Que el erbage, pilón de carnisería, y si acaso alguna otra hay, pertenece a particulares, y que unicamente por lo que toca a pesos, y medidas, tienen los Regidores de cargo de darlas, a cualesquiera vendedores, y en recompensa de este trabajo, y compensacion de los gastos que trae el apresto de dichos pesos, y medidas, perciben dos cuartos por cada de las veces que lo dan, sin tener para esto otro título que presentar, ni tener otra autorización que una costumbre, de que no se recuerda cosa en contrario. (...)"<sup>115</sup>.

Sin embargo, la solución definitiva no llegó hasta 1833. En 1828, el procurador patrimonial solicitaba de nuevo la atribución de la regalía al Real Patrimonio, y el señalamiento de las condiciones necesarias para su arrendamiento en pública subasta<sup>116</sup>. El auto definitivo, pronunciado el 13-X-1832 ante la

-----  
<sup>115</sup> 17-VI-1819. ARV. Bailía, E, Exp. 3.378, año 1827, f. 3.

<sup>116</sup> ARV. Ibidem, f. 6.

demora provocada por la rebeldía del lugar, así lo estableció; y ante la falta de respuesta de la parte de Agost, se declaraba, el 14-V-1833, "por consentido y pasado en autoridad de cosa juzgada el Definitivo pronunciado con fecha de 13 de octubre último"<sup>117</sup>.

La pertenencia al señor del lugar de otra serie de regalías más relacionadas con el *aprovechamiento de las utilidades rústicas* del término queda fuera de toda duda; en las escrituras de venta otorgadas en 1320 y 1609, figuran comprendidos en la transacción los montes, pastos, aguas o fuentes del término, entre otros bienes. En el pleito suscitado a principios del siglo XVIII entre Agost y Monforte en torno al deslinde de términos, el titular del señorío fue considerado como parte en el mismo, dada su condición de poseedor de las regalías de pastos, leñas y recogida del esparto<sup>118</sup>. Además de la percepción señorial de los diezmos, en el expediente se recoge la concordia celebrada el 29-VII-1714 entre ambas poblaciones, a tenor de los problemas derivados de los daños ocasionados por el tránsito de ganado, y de la recogida del esparto, leña y carbón entre otras actividades. En dicha concordia quedó establecida la división de términos, señalándose zonas comunes a ambos de abrevación o pasto del ganado, y se prohibió el aprovechamiento de las utilidades rústicas a las personas ajenas a cada término.

-----  
<sup>117</sup> ARV. Ibidem, fs. 43 vto-44.

<sup>118</sup> ARV. Real Justicia, Leg. 796, año 1746, fs. 511-522.

En relación a estas cuestiones (y también con el cuestionamiento de las competencias jurisdiccionales del señor por el ayuntamiento alicantino), D. Francisco Masa y Rocamora, dueño de Agost, obtuvo en 1656 el respaldo de la Real Audiencia contra las pretensiones de la ciudad de Alicante sobre los pastos del término. En la Real Provisión dictada el 27-XI-1656, se ordenaba a la ciudad no molestar al arrendatario de los herbajes de Agost (de quien se requería diese casa peñoradora en Alicante y no en Agost), no impedir el pasto del ganado en el término de dicho lugar, y no introducir su ganado en el mismo. El Conde de la Granja había dado en arrendamiento, como había venido haciendo desde su toma de posesión del lugar, las hierbas y pastos del término a Mateo Sánchez, ganadero aragonés, quien había dado casa peñoradora en Agost<sup>119</sup>.

En la segunda mitad del siglo XVIII, la regalía de las hierbas del término, arrendada con el conjunto de los derechos señoriales, aparece subarrendada por un periodo de 4 años a un labrador y vecino de Agost<sup>120</sup>. El arrendatario o subarrendatario de las "yerbas del término" otorgaba permiso a los ganaderos para pastar sus ganados con las obligaciones de tomar la sal correspondiente que se repartiera según el número de cabezas y de dar la fianza de casa peñoradora que asegurase los daños y talas causadas por los ganados y pastores. En 1761, Gaspar Puerto, vecino de Bocairente, y por éste su pastor, vecino de Bañeres,

-----

<sup>119</sup> AMA. Arm.14, *Primera copia original* ..., fs. 128 vto-131 vto.

<sup>120</sup> ANJ. Prot. Not. de G. Arqués y Bernabeu, P. 2 (varios), año 1764, fs. 176-178.

obtenía, en estas condiciones, el consentimiento del arrendatario para apacentar en el término 10 cabezas de ganado lanar<sup>121</sup>. Lamentablemente, no hemos podido localizar ningún dato sobre la cuantía de estos arriendos.

Sin embargo, según se desprende de referencias posteriores, parece que esta regalía era compartida por el señor con el ayuntamiento del lugar (posesión de la misma durante medio año por cada uno). Así se pone de manifiesto en un fragmento del memorial presentado por el ayuntamiento el 9-V-1829, en respuesta a la requisitoria enviada por el administrador de la bailía de Alicante para certificar la pertenencia de diversas regalías, y entre ellas la del "herbaje":

"(...). La corporación pensaba que no existe necesidad de presentar los títulos, en cuya virtud disfrutan del herbaje; toda vez que el Ayuntamiento está poseyendo, gozando y disfrutando por mas de 100 años de él; cuya posesión inmemorial le confiere un dominio y propiedad con exclusión de toda otra persona y derecho que quiera suponerse (...)"<sup>122</sup>.

No obstante, es ésta una situación que podría haberse configurado tras la abolición del régimen señorial y la supresión de las regalías, consecuencia de algún convenio entre el titular

-----  
<sup>121</sup> ANJ. Ibidem, P. 1 (varios), año 1761, fs. 83 vto.-84.  
<sup>122</sup> ARV. Bailía, E, Exp. 913, Apéndice, año 1829, s/f.

del antiguo señorío y el ayuntamiento. Esta suposición puede fundamentarse en la falta de referencias anteriores a esta cuestión, y en el hecho de que en la primera respuesta del ayuntamiento a la requisitoria enviada en 1819 por el administrador de la bailía, dada en ese mismo año, se declaraba pertenecer el herbaje y el pilón de carnicería a particulares, y sólo gozar los regidores de ciertas competencias en relación a la regalía de los pesos y medidas<sup>123</sup>.

En último lugar, cabe insistir en el hecho de que el modo más frecuente de gestión y aprovechamiento de las regalías por parte del dueño del lugar fue su cesión en arrendamiento. Como se deduce de páginas anteriores, existen testimonios de esta costumbre desde los primeros años del siglo XVII, en que el producto de los mismos era destinado a la satisfacción de las pensiones de los censales impuestos sobre el señorío. El arrendamiento conjunto de los derechos señoriales parece que fue el sistema predominante, aunque, igualmente, existen testimonios de su cesión individual (caso del arrendamiento de las hierbas en 1656). De darse el primer caso, el subarrendamiento de cada regalía individualmente era el procedimiento más generalizado.

Durante los primeros años del siglo XIX, en los momentos previos a la disolución del régimen señorial, el arrendamiento de los derechos dominicales seguía incluyendo tanto las regalías como las particiones de frutos (o los censos en

-----  
<sup>123</sup> ARV. Bailía, E, Exp. 3.378, año 1827, f. 3.

metálico). En relación a estas últimas, cabe mencionar la costumbre de que el arrendatario proporcionase ("bistrechase") a los enfiteutas los granos necesarios como simiente de la próxima cosecha, que una vez recogida le serían reintegrados por los mismos. Esta costumbre, mantenida por los señores, de abastecer a los vasallos del grano suficiente para la siembra, fue transmitida a los arrendatarios de los derechos señoriales<sup>124</sup>. De este modo se evitaba que en los momentos de siembra los altos precios de los granos pudiesen perjudicar a los campesinos y a la cosecha del año siguiente.

En este sentido, Madalena Segura (viuda de Josef Aldaguer y vecina de Agost), en la cesión, efectuada en 30-X-1799 a favor de José Rodríguez (comerciante de Alicante), de la mitad del arrendamiento de los derechos señoriales de Agost (otorgado inicialmente al matrimonio por D. José Joaquín Frígola, señor del lugar, en enero de 1798), además de reservarse la recolección de los frutos, exigía de J. Rodríguez el bistrechar 30 cahices de trigo -a razón de 21 libras 10 sueldos cada uno- y 50 cahices de cebada -a 10 libras 10 sueldos cada uno- a los enfiteutas, según las condiciones estipuladas en la escritura de arrendamiento (de las que carecemos de más noticias). Con posterioridad, y "usando de benignidad", el mencionado arrendatario decidió facilitar a los colonos o arrendatarios 80 cahices más de cebada y 9 de trigo, bajo las mismas condiciones. Por este motivo, M. Segura le

-----  
<sup>124</sup> GOZALBEZ ESTEVE, E.: *Análisis de un señorío valenciano. El Marquesado de Lombay*. Tesis doctoral inédita, Alicante, 1990, p. 242.



transpasaba, el 7-VI-1800, el derecho de percibir de los mismos las porciones de granos distribuídas previamente (39 cahices de trigo y 130 de cebada en total)<sup>125</sup>.

Con este objeto, J. Rodriguez otorgaba poco después a J. Segura (labrador y vecino de Agost) poder para que "en su nombre perciba y cobre de los colonos y demás terratenientes o arrendadores de los derechos dominicales de la universidad todas las porciones de grano que el compareciente ha bistrechado para el anterior simentero, y de lo que se encautase de y celebre las correspondientes cartas de pago: y si para su cobro o para cualquier incidente fuese necesario aparecer en juicio, lo haga Josef Segura, ante los Justicias, jueces y tribunales, de su magestad: y requiera e inste en ellos ejecuciones, prisiones, secuestro, embargo, desembargos, solturas, ventas, transpasos y remates de bienes, tome posesiones y amparos, decline jurisdicción y pida beneficios de restitución"<sup>126</sup>. La dificultad de la misión ocasionó su cometido a diversos recaudadores, todos vecinos de Agost, en muy poco tiempo, dada la posible ineficacia de sus respectivas gestiones<sup>127</sup>.

Algunos autores mencionan como en épocas anteriores, en las que era mayor el sojuzgamiento de los enfiteutas al señor del lugar, éste solía ceder ciertas competencias jurisdiccionales (dentro de los límites de la jurisdicción civil) a los

-----  
<sup>125</sup> AHPA. Prot. Not. de F. Aracil, P. 87, año 1800, fs. 75-76.

<sup>126</sup> AHPA. Ibidem, fs. 76-77.

<sup>127</sup> AHPA. Ibidem, fs. 78-79, y P.88, año 1800, fs. 23 vto-24 vto.

arrendatarios de los derechos dominicales; instrumento de coacción preciso para lograr de los vasallos la satisfacción de las pensiones<sup>128</sup>.

Sin duda, los beneficios que los arrendatarios de los derechos señoriales (en el caso de las particiones de frutos) podrían obtener de la acumulación de las producciones agrícolas percibidas podrían ser bastante cuantiosos, sobre todo ante la posibilidad de especular con ellas en los momentos de escasez, con la subida de los precios consiguiente. En este sentido, la coyuntura durante los últimos años del siglo XVIII y los primeros del siglo XIX sería especialmente favorable para este colectivo, ante el considerable aumento de los precios provocado por la serie continuada de malas cosechas y la incidencia de los conflictos bélicos<sup>129</sup>, siempre y cuando consiguieran la satisfacción de esas pensiones por parte de los enfiteutas.

Estos altos precios del trigo fueron los que determinaron que el común de vecinos de Agost exigiera, en los primeros años del siglo, la regulación del precio de la harina, con la consiguiente modificación de las condiciones de cesión de la regalía.

-----  
<sup>128</sup> GOZALBEZ ESTEVE, E. (1990): Op. Cit., pp. 236-238.

<sup>129</sup> ARDIT LUCAS, M.: *Revolución liberal y revuelta campesina. Un ensayo sobre la desintegración del régimen feudal en el País Valenciano. (1793-1840)*. Ariel Historia, Barcelona, 1977, pp. 79-87. PALOP RAMOS, J. M.: *Hambre y lucha antifeudal. La crisis de subsistencia en Valencia (siglo XVIII)*. Madrid, 1977, pp. 197-219.

Estos arrendatarios de los derechos señoriales con frecuencia solían ser comerciantes, en ocasiones con actitudes absentistas, delegando las funciones de recolección de los frutos correspondientes y de percepción del resto de derechos señoriales o subarrendando las distintas regalías existentes. El ejemplo de José Rodríguez, comerciante y vecino de Alicante, abastecedor "de la carne de macho y carnero rematado" en Agost, arrendatario, también, de alguno de los propios de la ciudad de Alicante y prestamista (tanto de cantidades en efectivo como de instrumentos necesarios para el cultivo o la siembra), con granero de su propiedad, es significativo al respecto. En ocasiones, estos arrendatarios gestionaban los derechos dominicales de más de un señorío. Este es el caso de Blas Navarro, vecino de Valencia, quien en la década de los sesenta del siglo XVIII figuraba como arrendatario de los derechos dominicales de Agost y Busot; nombrando, en el primero de los señoríos mencionados, a F. Angel (maestro cirujano y vecino de Agost) procurador y "colector de los derechos dominicales de la señoría de Agost"<sup>130</sup>.

Desconocemos, lamentablemente, la cuantía de los arriendos y subarriendos, así como el alcance de la participación de los arrendatarios en las rentas señoriales, que en estos

---

<sup>130</sup> ANJ. Prot. Not. de Arqués y Bernabeu, P. 2 (Varios), año 1764, fs. 176-178.

casos de arrendamiento conjunto solía ser bastante importante<sup>131</sup>. Sin embargo, podríamos incluir a los arrendatarios de las prestaciones de este señorío (junto a los de las de Busot o Villafranqueza) en un grupo intermedio entre los grandes arrendatarios de derechos señoriales (por ejemplo D. Pedro Vergara que, en 1758, abonaba 58.078 libras por la totalidad de los derechos señoriales del Duque de Gandía)<sup>132</sup>, y aquellos que invierten en esta actividad a pequeña escala, a través del arrendamiento de uno o varios derechos señoriales, con mayores dificultades de superación de alguna dificultad de tipo coyuntural. Ejemplos de este último caso serían los distintos subarrendadores de las diversas regalías del lugar o los arrendatarios de las particiones de frutos del reciente señorío de la Vallonga de Burgunyo<sup>133</sup>.

Las relaciones entre arrendatarios y señores no estaban libres de conflictos, sobre todo los relacionados con abusos de los primeros en el señorío o con el puntual pago de las pensiones

-----

<sup>131</sup> Morant Deusa señala al respecto, como en el arrendamiento de los derechos señoriales del Marquesado de Llombay en 1765, el arrendatari había obtenido un beneficio del 16% de la inversión inicial. MORANT DEUSA, I.: *El declive del señorío. Los dominios del ducado de Gandía (1705-1837)*. Inst. Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1984, p. 113.

<sup>132</sup> MORANT DEUSA, I. (1984): Op. Cit., p. 114.

<sup>133</sup> Estos últimos, labradores (e incluso algunos enfiteutas del señorío) y vecinos del lugar o sus proximidades, además de la satisfacción de la renta anual y algunas especies de volatería en concepto de adehalas, tenían ciertas obligaciones contraídas con el señor (vigilancia del cumplimiento de las condiciones de establecimiento, dar acomodo a las caballerías y delegados del dueño, ...), quien les cedía también las dependencias para el almacenamiento y transformación de los productos agrarios (caso muy diferente del comentado en relación a J. Rodríguez por ejemplo).

del arrendamiento. Ejemplos de este último hecho se han localizado en Agost. En este sentido, D<sup>a</sup> Josefa Pallás de Vallebrera solicitabay obtenía en 1743 el auto de embargo de los bienes y frutos de su arrendatario, por el atraso de éste en los pagos del arriendo (a pesar de la intromisión de la ciudad de Alicante en las competencias jurisdiccionales de la señora del lugar y sus funcionarios)<sup>134</sup>. También en 1800 tenía lugar un enfrentamiento entre D<sup>a</sup> M. Segura y D. José Joaquín Frígola por la negativa de este último a percibir valores reales en parcial pago del arriendo<sup>135</sup>. En cambio, en 1802, J. Rodríguez daba poder para efectuar el cobro de todos los granos y demás derechos que le estuvieran debiendo, y, en particular, las 2.203 libras 10 sueldos que debía entregarle el depositario de la universidad, por efecto de la "causa de tercería" seguida con el barón de Cortes<sup>136</sup>.

-----  
134 AMA. Arm. 14, *Primera copia* ..., fs. 133-139.

135 AHPA. Prot. Not. de F. Aracil, P.87, 1800, fs. 90 vto-91 vto

136 AHPA. Ibidem, P. 89, año 1802, fs. 183 vto.-184. Causa tal vez relacionada con el pleito mantenido por D. José de Frígola contra varios labradores y hacendados de Agost sobre "tanteo de la jurisdicción, señorío y vasallaje del citado pueblo", del que no hemos podido localizar el expediente, sino únicamente alguna referencia contenida en los libros del Real Acuerdo. ARV. Real Acuerdo, Lib. 77, año 1782, fs. 137 y 754.

### 3.-Disolución del antiguo régimen y desintegración del patrimonio señorial.

En vísperas de la disolución del régimen señorial, ya habían empezado a detectarse ciertos síntomas de oposición antiseñorial y de rechazo, o por lo menos cuestionamiento, de algunas prerrogativas o prestaciones disfrutadas por los dueños del lugar. Ejemplos de ello son el pleito mantenido, desde los primeros años de la década de los ochenta del siglo XVIII, por el señor contra varios enfiteutas sobre "tanteo de la jurisdicción, Señorío y Vasallaje" (del que no se ha podido localizar el expediente correspondiente); o el suscitado en relación a la regulación del peso de la harina en la venta de pan, cuya solución requirió la moderación de las condiciones de funcionamiento de la regalía de las tiendas y panaderías. En este último empieza a criticarse la mediatización de la vida política y económica del lugar por el titular del señorío; situación derivada del control que éste ejerce sobre los funcionarios municipales (elegidos entre sus adeptos) y sobre las regalías.

Por fuerza, una situación precedente de estas características determinaría una profunda incidencia de los decretos abolicionistas en el antiguo señorío de carácter jurisdiccional y territorial. Resultado del nuevo marco

sociopolítico y legislativo, como factores más importantes, será la práctica desaparición del antiguo patrimonio señorial (el establecido enfitéuticamente). A su total extinción se llegará durante la segunda mitad del siglo XIX y durante el siglo XX, a tenor del proceso de venta del exiguo patrimonio conservado e inscrito en el Registro de la Propiedad.

La promulgación del decreto de 6-VIII-1811 supuso la supresión de todos los señoríos jurisdiccionales, con la incorporación a la Corona de las competencias de esa índole ejercidas por los antiguos señores. Además de la pérdida de la potestad judicial, supuso la desaparición de los antiguos derechos señoriales de carácter prohibitivo, exclusivo y privativo; derechos que no fueron reintegrados junto a las rentas y prestaciones derivadas de la propiedad de la tierra por la Real Cédula de fecha 15-IX-1814.

La evolución experimentada por alguna de estas regalías ha sido ya adelantada en epígrafes anteriores. En efecto, por la Real Orden de 3-III-1819 se exigía, a las villas y universidades dependientes de la bailía de Alicante, presentar los títulos de pertenencia de varias regalías como la de pesos y medidas, el "herbaje" o el "pilón de carnicería", para proceder en caso contrario como regalías del Real Patrimonio<sup>137</sup>. Después de un largo proceso, ya comentado, la regalía de los pesos y medidas, que nunca había sido disfrutada por el dueño del lugar sino gestionada por el ayuntamiento, fue declarada perteneciente

-----

<sup>137</sup> ARV. Bailía, E, Exp. 3.378, año 1827.

al Real Patrimonio por auto de la Real Audiencia promulgado el 13-X-1832.

Los expedientes formados al respecto, informan también de la nueva situación de las otras dos regalías mencionadas<sup>138</sup>. En ellos se recoge una declaración del ayuntamiento del antiguo señorío efectuada en 1828, en la que se afirma estar el "herbaje" medio año en posesión del ayuntamiento y el otro medio en manos de D. José Antonio Frígola, Barón de Cortes y señor territorial del lugar. En relación al abastecimiento de carne, los autos pendientes entre ambas partes impedirían determinar su pertenencia, además del cobro de las rentas derivadas de la misma. Por lo que respecta a la posesión de los montes y pastos del término, parece que a pesar de lo manifestado por el ayuntamiento, y por el dueño del lugar en otros pleitos (por ejemplo en el enfrentamiento con los alfareros afirma el procurador señorial ser de su principal las leñas del monte)<sup>139</sup>, éste último perdería cualquier derecho sobre ellos, pasando a ser considerados como propios del ayuntamiento<sup>140</sup>. En este sentido,

-----  
<sup>138</sup> ARV. Ibidem, Exp. 3.378 (1827) y 913 Apénd. (1829).

<sup>139</sup> "(...). Además de que en dichas fabricas se consumen extraordinariamente las leñas del monte, de que tambien es dueño mi Principal, sin que por dicho consumo se le exsija separadamente cantidad ni prestación alguna (...). ARV. Bailía, E, Exp. 869 bis, Apéndice, año 1827, f. 28.

<sup>140</sup> En relación a la titularidad de los montes de utilidad pública, C. Montiel plantea la hipótesis de la correspondencia entre montes de propios y montes señoriales con reserva por parte de su dueño de los dominios útil y directo; y montes del común y montes de origen señorial con concesión de su aprovechamiento, y en ocasiones de la propiedad, al común de vecinos. MONTIEL MOLINA, C.: *Los montes de utilidad pública en la provincia de Alicante*. Universidad de Alicante-CAPA, Alicante, 1990, pp.79-95.



cabe señalar como no aparece ninguna superficie de estas características inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de los descendientes de los antiguos titulares, mientras si se han localizado anotaciones a favor del Estado de montes procedentes de los propios del lugar (caso del "Castellet de la Murta" o la "Solana del Maigmó")<sup>141</sup>.

En relación a otro tipo de regalías como los hornos, tiendas, mesón o taberna, el señor se había visto privado del monopolio de esa actividad y de las rentas que obtenía de su arrendamiento, pero no de los edificios donde éstas se habían instalado y desarrollado, siempre que hubieran sido de su absoluta propiedad. Así había ocurrido en otros señoríos como Busot o Aguas; y se demuestra, en el caso de Agost, por la inscripción, en 1874 y libre de cargas, en el Registro de la Propiedad del "horno del Barón", una finca urbana de dos pisos, constituido el primero de ellos por un "horno de pan cocer, entrada, corral cubierto y dos cuartos"<sup>142</sup>. Idéntico significado adquiere la cesión en arrendamiento, por un periodo de dos años y un canon mensual de 140 reales vellón, de un mesón o parador situado en la villa, efectuada en 1851 por el apoderado del Barón de Cortes a favor de un vecino de Agost<sup>143</sup>.

-----  
<sup>141</sup> Registro de la Propiedad de Novelda, Lib. 65, Fca. 4.358, fs. 25-29, y Fca. 4.261, fs. 39-43.

<sup>142</sup> Registro de la Propiedad de Novelda, Lib. 16, Fca. 1.686, fs. 225-226.

<sup>143</sup> AHPA. Prot. Not. de J. Cirer y Palou, P. 502, año 1851, 2º tomo, fs. 1.309 vto.-1.313.

Las condiciones establecidas en el contrato responden a los aspectos comentados en otras ocasiones: hacer buen uso del edificio abonando en caso contrario los daños ocasionados, dar fianza que garantice la percepción de la renta anual, correr el arrendatario con los gastos de escritura, continuación del arriendo pasados los dos años estipulados inicialmente de convenir a ambas partes (avisando de no ser así con un mes de anticipación a la otra), entre otros. Además se añade la obligación de entregar al arrendatario del huerto del barón la mitad del estiércol producido en el mesón, y la de enlucir cualquier habitación en la que hubiese fallecido alguna persona de enfermedad contagiosa.

A pesar de la supresión de las regalías y de cualquier derecho de origen jurisdiccional, los titulares del antiguo señorío de Agost consiguieron mantener un derecho de estas características, a pesar del pleito suscitado por los alfareros del lugar, afectados por el mismo. Es éste un hecho que se dio con alguna frecuencia en el País Valenciano en relación a regalías como la posesión de las hierbas y montes, derechos de aduanas y de pesas y medidas, o escribanías<sup>144</sup>.

El Barón de Cortes pretendía seguir cobrando de los alfareros de Agost un canon de 30 sueldos anuales (15 reales valencianos) por cada rueda existente en las fábricas de

-----  
<sup>144</sup> BLESÀ CUÑAT, A.: "Aportación al estudio de los pleitos de señorío posteriores al decreto de 1811". *Primer Congreso de Historia del País Valenciano*. Valencia, 1975, Vol. IV, pp. 255-256.

alfarería; pretensión rechazada contundentemente por éstos<sup>145</sup>. El pleito recoge una extensa polémica en torno al carácter de la mencionada prestación. Mientras el señor del lugar considera este canon como un censo de carácter enfitéutico vinculado a los solares y casas en los que se ejerce la actividad (no sobre las ruedas por si mismas sino por todo lo que constituye la fábrica-solares, ollas, ...), y defiende su reinstauración por la Real Cédula de 15-IX-1814, los alfareros denuncian su carácter jurisdiccional o su procedencia de las regalías. Algunos fragmentos de los pedimentos presentados por estos artesanos de Agost a lo largo del proceso son bastante significativos al respecto:

- "(...) se quiere exigir la misma prestación que se exigía cuando el señor barón de Cortes era dueño jurisdiccional y árbitro de la fortuna de los vecinos, (...) "<sup>146</sup>.

- "(el censo sobre la rueda de alfarería) es un pecho introducido por otro de los efectos de la jurisdicción y autoridad que en tiempos lejanos tenía el dueño el Ylustre Barón de Cortes, y por ningun título pertenece á todas aquellas prestaciones análogas con el Señorío territorial y solariego (...) "<sup>147</sup>.

---

145 ARV. Bailía, E, Exp. 869 bis, Apéndice, año 1827, 108 fs.  
146 ARV. Ibidem, f. 30 vto.  
147 ARV. Ibidem, fs. 49 vto.-50 vto.

-"(...) no pertenece la pensión á las rentas, frutos, emolumentos que traigan causa de el Señorío Territorial y solariego en virtud de contratos admitidos en el derecho; si mas bien, á los que trahen origen de la jurisdiccion y autoridad de los mismos señores territoriales o jurisdiccionales de que hablan los Decretos Reales de S. M. (...) "<sup>148</sup>.

El procurador señorial instó demanda, el 12-II-1817, en el juzgado ordinario de Agost para exigir la satisfacción por parte de los alfareros de los derechos de rueda desde 1814 hasta 1816. Los interpelados se excusaron de dicho pago alegando el escaso tiempo que desempeñan dicha actividad, no trabajar con su rueda, o ignorar "se tenga derecho para pagar al Señor, lo que se le pide por su Apoderado, y siempre que por este se enseñe Documento legitimo para ello lo pagara; pero en el entretanto no venia obligado á ello, sin embargo, que el dice a visto, y le consta han pagado algunos Alfareros, y tambien el que relaciona ignora porque causa es, ni si el señor deve, o nó, percibir lo que se le pide, ..." <sup>149</sup>. Sin embargo, el alcalde ordinario del lugar amparó el derecho del barón de percibir dicho canon en auto dictado el 24-IX-1817.

-----  
<sup>148</sup> ARV. Ibidem, f. 54.

<sup>149</sup> ARV. Ibidem, fs. 6-6vto.

Por este motivo, los alfareros apelaron el fallo, reincidiendo en el origen jurisdiccional de la prestación y denunciando los abusos y arbitrariedades de los señores y sus representantes. El siguiente fragmento de la apelación de uno de los afectados es muestra evidente del ambiente antiseñorial existente por esas fechas (1818) en el lugar, actitud que se extendería de igual modo, al socaire del decreto de 1811 y de la instauración del nuevo periodo constitucional en 1820, por lo que respecta a los derechos señoriales inherentes a la propiedad de la tierra.

"Sin duda en el tiempo del feudalismo (cuando los señores jurisdiccionales hacian á su arbitrio los nombramientos de Justicia, y esta servía de instrumento a su codicia y caprichos) entre otras de las absurdas prestaciones que exigían indebidamente de los que llamaban sus vasallos, inventaron los titulados Barones de esta universidad, ó, por mexor decir, los que en su nombre (como Apoderados suyos) exercian en ella el despotismo, la imposicion de censo en las ruedas de Alfaharería contra todas las disposiciones de nuestro derecho á que no les permitió acogerse la pobreza de los que se dedicavan á esta industria; y asi tuvieron que sufrir esta prestacion como otras indevidas, hasta que la Justificacion y Piedad de nuestro actual Monarca, atemperándose en esta parte á lo que havían deliberado las llamadas Cortes, dexó sin fuerza tales

usurpaciones, dexando extinguida toda prestacion que proviniese de dominio jurisdiccional, ó de privilegios exclusivos.

Nuestras leyes jamás han admitido imposicion de censos sobre bienes que no sean raices, y no hay todavía quien haya soñado el imponerlas sobre cosas muebles sino es los que fueron Apoderados de los Barones de Cortes, sino es en el delirio de la arbitrariedad con que jugavan de los miserables vecinos de Agost ¡Censo en una cosa mueble que por el uso se consume! ¡Censo en una cosa que puede romper y quemar el que la posee a su arbitrio! ¡Censo que solo dura lo que le dá la gana á quien lo lleva impuesto!. Es menester no saber lo que es censo, es menester no saber lo que es emfiteusis, (...) para llamar censo enfiteutico a la prestación que quiere exigir el supuesto apoderado del Barón (...); es menester ignorar absolutamente nuestras leyes y carecer de toda noción de derecho (...). ¡Las ruedas amovibles de una Fabrica pagar censo! Unas ruedas que hacen y rompen los Dueños cuando quieren ¿serán acaso estas ruedas fabricadas por los primitivos Barones de Cortes de una materia y forma eterna, y entregadas á los Alfahareros de aquel tiempo para que con ellas trabajasen perpetuamente ellos y sus descendientes? (...).

Si es pues imposible de derecho que tales muebles se hallen sugetos a censo ¿sobre que otra cosa puede fundar la prestación el Barón de Cortes sino es sobre el dominio jurisdiccional ó sobre los derechos exclusivos? si es sobre lo primero (porque en aquel tiempo miserable en fuerza de la jurisdiccion que tenía tratava como esclavos á los que llamava sus vasallos y les exigia todo aquello que se le antojava por vivir en su Pueblo y en el termino de su dominacion) este abuso acabó con su dominio jurisdiccional por medio de la sabia resolucion que contiene la real cédula del año catorce, si es sobre lo segundo, porque también en aquel tiempo quiso el Barón de Cortes ser el unico alfaharero de Agost, ó el unico que pudiese poner ruedas de Alfahareriacon exclusion de los demás vecinos, sin permitir esta industria sino sólo á los que le contribuiesen con la prestacion anual de 30 sueldos, si abusó entonces de su poder ya quedó del mismo modo privado de este abuso en dicha real cedula; y si para ello obtuvo alguna concesion ó real Privilegio quedó del mismo modo extinguido en ella; (...)"<sup>150</sup>.

---

<sup>150</sup> ARV. Ibidem, fs. 23-25 vto.

La respuesta señorial al alegato precedente refleja fundamentalmente el ambiente de rechazo al pago de las prestaciones de origen señorial, aprovechando cualquier excusa para ello:

"Convertidos los tiempos en una absoluta libertad y desorden, no quisieron ser menos que los demas los Alfareros de esta Universidad, pero truncado y entendido á su arbitrio y conveniencia las ordenes que á nadie eximian del cumplimiento de sus legitimas obligaciones, (...). Es sabido que nadie puede eximirse de una obligacion que ha cumplido y reconocido justa en otro tiempo, sin que por Tribunal competente se declare previo el debido reconocimiento de causa en lo que aun no han pensado los Alfareros de esta Universidad, y solo se cuydaron de proceder arbitrariamente y contra el ... del Decreto á que han querido acogerse entendiendolo segun les convino y por la corriente de no pagar, que es lo que más les interesava; y por lo mismo sienten ahora se les haga reduccion al buen orden y cumplimiento de sus obligaciones, que observaron hasta el año ochocientos onze, habiendo sido necesario para que las cumplan la Real orden de Septiembre de 1814, contra cuyo tenor aun están discolos despues de tanto timepo los Alfareros de esta Universidad por el apego que tiene la arbitraria libertad que se tomaron de no



pagar; (...)"<sup>151</sup>.

El 17-XII-1818 fue promulgada nuevamente otra sentencia favorable a los intereses señoriales, ordenando el cumplimiento de la dada el año anterior; aunque los alfareros continuaron manteniendo su negativa, a pesar de llegar incluso a sufrir el embargo de ciertos bienes por la cantidad de 150 sueldos cada uno (pensiones atrasadas desde 1814-1818). Esta situación llevó al colectivo a apelar en 1820 ante la Real Audiencia. El memorial del representante señorial incide en las corrientes antiseñoriales generadas en el señorío, vinculándolas a la legislación abolicionista y los periodos liberales. Las expresiones del mismo son bastante elocuentes cuando alude a la negativa continuada de los alfareros a satisfacer las pensiones con frases como las siguientes: "como si continuase el tiempo Constitucional", "(...); pero después de la llamada Constitucion no quedaron los ánimos tan dociles como lo fueron antes de ella; (...)" . Atribuye a la promulgación de la Constitución el cambio experimentado en la situación y en el ánimo de los enfiteutas y resto de antiguos vasallos; y en relación al abandono de los pagos de nuevo en 1820, responsabiliza al periodo revolucionario de 1820-1823 de la acentuación de los desórdenes, "perdiéndose por consiguiente quanto se había adelantado en este y otros expedientes (...)"<sup>152</sup>.

-----  
<sup>151</sup> ARV. Ibidem, fs. 27-27 vto.

<sup>152</sup> ARV. Ibidem, fs. 91 vto.-96 vto.

Posiblemente, el hecho de desarrollarse la apelación en fechas muy próximas a la reinstauración del absolutismo pudo influir en la sentencia de la Real Audiencia, dictada (el 22-XI-1827) en la misma tónica que las anteriores. El cariz que tomaba el proceso, impulsó a algunos enfiteutas a tomar en consideración el solicitar el establecimiento de las fábricas que poseían, o el suplemento de títulos, al Real Patrimonio, evitando de este modo el pago de las pensiones al señor (puesto que habrían de satisfacer los derechos enfitéuticos al Real Patrimonio. Sin embargo, esta posibilidad propició la adopción de un acuerdo entre ambas partes. El 3-V-1828 se estableció el compromiso de abandonar los autos y de costear cada parte los gastos por ella ocasionados en el pleito, y, por parte del barón, el de condonar las pensiones vencidas hasta 1828 a todos los alfareros comprendidos en el documento, a condición de que cada uno de ellos "que trabaje por su cuenta en este arte y en rueda separada", satisfaga cada 31 de agosto 19 sueldos a la señoría (pagando cada fábrica una única rueda aunque conste de varias)<sup>153</sup>.

La situación que revela el expediente, de oposición al mantenimiento de los antiguos derechos señoriales, afectaría igualmente a las prestaciones y rentas derivadas del dominio directo de la tierra. El volumen de información obtenido para el estudio del señorío de Agost ha sido inferior al manejado en los casos de Aguas, Busot y La Vallonga, sobre todo en lo que hace

-----

<sup>153</sup> ARV. Ibidem, f. 108.

referencia al vaciado de protocolos notariales, dada la imposibilidad material, por falta de tiempo, de recurrir al análisis exhaustivo de esta fuente.

Sin embargo, la situación de abierta oposición antiseñorial reflejada en el anterior proceso y los testimonios contenidos en un pleito suscitado por la adscripción a señorío o a realengo de una serie de tierras comprendidas en el término del antiguo señorío de Agost<sup>154</sup>, nos permiten intentar aventurar la evolución experimentada por el mismo. No cabe duda que el carácter mixto del señorío (existencia de elementos jurisdiccional y territorial), y la profunda imbricación de la enfiteusis con el régimen señorial valenciano propiciarían la confusión de los derechos percibidos por cada uno de esos conceptos, acentuando la actitud antiseñorial de los vecinos y extendiendo su negativa al pago de derechos señoriales a los derivados del régimen de tenencia mencionado. La promulgación del decreto de 1811, que supuso la supresión de las jurisdicciones señoriales y su incorporación a la corona, llevaría consigo el abandono momentáneo de la satisfacción por el campesinado enfiteuta de los derechos señoriales derivados de la propiedad de la tierra (cánones enfitéuticos, luismos, etc), hasta la publicación de la Real Cédula de 15-IX-1814. El mismo proceso tendría lugar durante el trienio liberal (1820-1823), de modo que, tras la reinstauración del absolutismo volverían a percibirse las rentas procedentes del señorío territorial.

-----  
<sup>154</sup> ARV. Bailía, E, Apéndice 550, año 1824, 195 fs.

El pleito mencionado se había iniciado en 1824 entre los funcionarios de la Bailía de Alicante y varios propietarios de Agost, a tenor de la denuncia interpuesta por un labrador y vecino del lugar contra Antonio Lledó (escribano real en Alicante y "ciudadano de los de inmemorial") por la usurpación de una importante porción de terreno realengo (80 jornales) parte inculta y parte culta; terreno que este reputaba por señorío, satisfaciendo los cánones y derechos correspondientes. El interpelado manifestó haber adquirido el territorio por compra a D. Miguel Costillo (90 jornales cultos e incultos con algunos manantiales de agua) a finales del año 1820, y, puesto que le era indiferente reconocer el dominio directo del Real Patrimonio o el de la señoría de Agost y ya había efectuado importantes labores de acondicionamiento de la finca<sup>155</sup>, solicitó se verificase con rapidez su carácter, y en caso de determinarse como realengo, le fuera establecido por la bailía.

El transferente original (M. Costillo) afirmó la sujeción de la finca a la señoría directa del barón de Cortes, a una pensión de censo de 1 libra 5 sueldos, y a un real valenciano (2 sueldos por libra) por "derecho de señoría" (luismo)<sup>156</sup>; y presentó escrituras de adquisición de tierras de la zona de finales del siglo anterior, en las que se incluía la licencia del

-----  
<sup>155</sup> "(...) Que haviendo panificado el cauce de la Rambla dels deramadors, quitado la malesa de los Tamarits, Junqueras y piedras, y haberla plantado de frutales y Parras, utilizando las aguas para su riego en merito de escavaciones y Bovedas que a todo coste á hecho (...)" ARV. Ibidem, f. 3.

<sup>156</sup> ARV. Ibidem, fs. 16-23.

procurador patrimonial y se aludía a la partición de frutos y a un censo en metálico de 1 dinero por cada barchilla de sembradura entre otras cargas.

Algunas manifestaciones realizadas por este último ilustran el proceso sufrido por el patrimonio señorial establecido enfiteúticamente tras la promulgación de las leyes de señoríos, y concretamente la situación generada por la instauración del trienio liberal:

"Pues el Lledó hizo distintas compras á poco tiempo de nuestro convenio en el mismo termino de Agost en tiempo del Gobierno Revolucionario que también se elongaron libres y francas siendo de señorío, por no necesitarse en aquel entonces la Lisencia del Procurador Patrimonial y Extendida en el mismo Agost todos los que ha comprado en dicho tiempo libres como se puede calificar por los Prothocolos de la Escritura. Pues si el indicado Lledó quiere por sus fines torcidos sujetar al Real Patrimonio lo que se ha extendido, y ensanchado y á mi que no me Mortifique ni moleste al Tribunal, (...).

(...) me instauró demanda (en 1824) el tal Lledó en este mi Juzgado pidiendome no se quantos pesos por la Decima que le devía abonar por que le pedían después de la Ynstauracion de Nuestro Rey Soberano D. Fernando 7º que Dios Guarde el Derecho Dominical, se dejo este,

y puso en practica este hotro que se contradice lo uno en lo hotro el mismo hecho de la petición de Agost, si nada puede ignorar sobre la hacienda, (...),<sup>157</sup>.

El procurador del Real Patrimonio siguió reclamando el terreno en litigio como relengo (unos 50 jornales de tierra "juncar y yerma", con la tercera parte del agua para el riego), y rechazando la declaración de Costillo sobre su pertenencia al señorío de Agost. La limitación de la extensión territorial de dicho señorío a las "Casas de Vallebrera", afirmando que sobre el resto del término sólo poseían los barones de Cortes el señorío jurisdiccional (abolido en 1811), fue el argumento aducido por dicho procurador:

"(...) sin que pueda servir de obstáculo alguno lo expuesto por D. Miguel Costilla de que corresponden al Señorío de Agost; en primer lugar deve despreciarse esta proposición porque el Señor de Agost solo es Dueño territorial de las Casas de Vallebrera; y extra del territorio de estas si disfruta algun derecho, lo será por el Señorío Jurisdiccional; y como este quedó abolido por Real Orden nada tiene que ver con el terreno inculto de los Montes, Causes de Ramblas, y Camino Real, por que estos enjamas han salido de la

---

<sup>157</sup> ARV. Ibidem, fs. 139-139 vto.

Esfera del Realengo"<sup>158</sup>.

Por auto dictado por el juez administrador de la Bailía de Alicante, en fecha 30-VIII-1825, se otorgó el establecimiento de dicho terreno, solicitado por el procurador patrimonial, a favor de Lledó. Sin embargo, el pleito quedó inconcluso en 1832, pues el expediente no recoge ninguna sentencia definitiva de la Real Audiencia. Es importante señalar a este respecto como no comparece como parte en ningún momento el titular del antiguo señorío, quien habría resultado bastante afectado de admitirse las reivindicaciones del procurador patrimonial, al cuestionarse la extensión del señorío territorial y por tanto la percepción de las rentas derivadas de éste.

Es interesante señalar también, en relación a la pérdida del antiguo patrimonio rústico señorial, como el nuevo contexto sociopolítico y legal y la carencia de un poder coactivo por parte de los señores, favorecieron no sólo la pérdida de significado del dominio directo y el rechazo al pago de las rentas a él inherentes, sino la usurpación de tierras incultas, yermos y baldíos, de la plena propiedad señorial. En estos términos se expresa A. Lledó tratando de justificar la posesión de la gran cantidad de tierra que había reducido a cultivo:

-----

<sup>158</sup> ARV. Ibidem, fs. 143 vto-144.

"(...) Que habiendo mandado el Gobierno Supremo en Decreto de 6 de Agosto de 1811, y posteriormente aprobado por V. R. M. que quedasen incorporados a la Corona, todos los Señoríos Jurisdiccionales de qualesquiera clase y condición que fuesen y abolidos los privilegios llamados exclusivos privativos y prohibitivos que tubiesen el mismo origen de Señorío como son, los de caza, Pesca, Hornos, Molinos, Aprovechamientos de Aguas, Montes y demás, quedando al libre uso de los pueblos, y haberse abolido el dominio directo que disfrutaba vuestro Real Patrimonio en dicho Reyno de Valencia por decreto de 19 de Julio de 1813, dió margen á que los posehedores limitrofes se apropiasen de los terrrenos incultos y los huniesen á sus propiedades"<sup>159</sup>.

A este respecto cabría contrastar el caso de Agost con el Aguas de Busot, pues mientras que en el primero de los señoríos tuvo lugar la pérdida de toda la superficie de carácter montuoso en favor de los propios del lugar o de algunos particulares por ocupación ilegal (como el caso anteriormente mencionado), los titulares del segundo, merced a la carencia de elemento jurisdiccional sobre el mismo (exceptuando las escasas competencias en materia civil relacionadas con la implantación de

---

<sup>159</sup> ARV. Ibidem, p. 153.



la enfiteusis y la propiedad del lugar), consiguieron preservar la mayor parte de los terrenos de esa índole, que constituyeron la parte más gruesa de su patrimonio en el lugar.

Las referencias contenidas en este expediente han sido las últimas que hemos localizado en relación a los derechos señoriales inherentes a la propiedad de la tierra. En las escrituras de venta de tierras comprendidas en el término, bastantes escasas y en su mayor parte pertenecientes a 1851, se declara siempre la franqueza de cargas<sup>160</sup>, sin aludir a la causa de este hecho.

Tampoco los libros del Registro de la Propiedad recogen en las inscripciones de fincas ninguna alusión al dominio directo de los barones de Cortes; o se declaran libres de cargas, o no se incluye ninguna referencia al respecto. Las expresiones anotadas con mayor frecuencia son las siguientes:

- "Esta finca no aparece gravada á censo ni otro gravamen".
- "Dicha tierra no responde á censo ni pension alguna".
- "Esta finca no aparece gravada y no tiene censo ni carga alguna".
- "Certifico= Que reconocidos los índices de este registro no resulta gravamen alguno contra la finca de este número, y en su consecuencia la anotación

-----  
<sup>160</sup> AHPA. Prot. Not. de F. Sala y Cantó, P. 1628, años 1821-28; y de J. Cirer y Palou, P. 501, año 1851, 2 tomos.

anterior queda convertida en inscripción positiva.

(...)"

Las anotaciones preventivas que recogen las certificaciones y asientos de los libros de la antigua Contaduría de Hipotecas mantienen la misma tónica; e incluso en las escasas ocasiones en las que interviene el señor del lugar como adquirente en una transacción sigue manteniéndose la inexistencia de gravámenes.

Este hecho y el frecuente recurso de los titulares del señorío a los convenios con sus enfiteutas y los vecinos de Agost en cuestiones conflictivas (pleito con los alfareros, pleito sobre la regulación del peso de la harina), permitiría considerar la posibilidad de la adopción de un acuerdo temprano entre ambas partes, fundamentado en la sustitución de las cargas señoriales por una cantidad en metálico, o bien en la redención colectiva y definitiva de los censos de carácter enfiteútico; alternativas seguidas en diversos señoríos valencianos<sup>161</sup>. Sin embargo, resulta extraña la falta de referencias a ese posible convenio o transacción en el Registro de la Propiedad, puesto que de operaciones similares, en otras ocasiones (caso de Villafranqueza por ejemplo), si se hace eco esta fuente.

-----  
<sup>161</sup> GIL OLCINA, A.: "Declive y ocaso de la enfiteusis señorial valenciana". *Agricultura y Sociedad*, nº 49, Madrid, 1988, pp. 293-318; "La extinción de la propiedad señorial en el territorio valenciano". *Estudios Geográficos*, nº 154, 1979, pp. 51-74; *La propiedad señorial en tierras valencianas*. Del Cenja al Segura, Valencia, 1979; MAHIQUES ALBEROLA, D.: "La renda senyorial en l'etapa final de la transició al capitalisme: El Marqués de Bélgida". *Estudis d'història contemporània del País Valencià*, nº 6, Valencia, 1986, pp. 33-52.

De no haber tenido lugar este proceso, nos encontraríamos con un caso mucho más acusado que el de Busot, por ejemplo, en el que la reacción antiseñorial y la negativa de los enfiteutas a reconocer el dominio directo de los Barones de Cortes (y por tanto a satisfacer las prestaciones y rentas de él derivadas) y a incluirlo en las inscripciones registrales de sus fincas fue total y generalizada.

En uno u otro caso, lo cierto es que en el antiguo señorío alfonsino de Agost se produjo la pérdida total del patrimonio cedido en enfiteusis, proceso extendido al resto de propiedades señoriales vinculadas al ejercicio de alguna regalía por los titulares del mismo (caso de las superficies de monte y pastos). El patrimonio conservado en el término, muy exiguo y gestionado mediante el arrendamiento o la explotación directa, fue objeto de inscripción por sus propietarios en una fecha bastante tardía. Estos bienes serían enajenados en diferentes etapas, durante la segunda mitad del siglo XIX y el transcurso del siglo XX, por los descendientes de los antiguos señores, dando lugar a la desintegración total y definitiva del antiguo elemento territorial del señorío.

Por otra parte, parece que las disposiciones desvinculadoras no tuvieron en este caso las implicaciones que si afectaron a otros patrimonios de origen señorial. Tras la muerte de D. José Joaquín Frígola y Pascual de la Verónica (Barón de Cortes, Ruaya, Buxete y Castillo de Chivel, y señor de Agost, Benitandús, Alfara y el Genovés), heredó el vínculo, a finales

de 1815, su hijo D. José Antonio Frígola Fadmar, quien falleció en 1833, antes de que tuviera lugar el restablecimiento de la ley de supresión de mayorazgos de 1820 (Real Decreto de fecha 30-VIII-1836). El siguiente sucesor, D. Pascual Frígola y Ahís, adquirió por ello todos los bienes vinculados, manteniéndolos en su poder hasta la última década del siglo XIX (fallecimiento en 3-III-1893).

Las disposiciones testamentarias de este último establecieron la distribución de todos sus bienes entre sus hijos y su segunda esposa (Ana Paulín y de la Peña); legó el usufructo del tercio de todos sus bienes a su viuda, mejoró en el otro tercio a sus hijos Pascual y Matilde, y en cuanto al remanente nombró por herederos a sus tres hijos, por partes iguales y de libre disposición. Sin embargo, el fallecimiento de D<sup>a</sup> Ana Paulín el 10-VII-1894, y la renuncia a sus respectivas herencias de D. Carlos y D<sup>a</sup> Matilde Frígola y Palavicino (el 24-II y el 21-IX-1894) en favor de su hermano, D. Pascual Frígola y Palavicino, propiciaron la unificación de nuevo de los legados y mejoras en la persona de este último.

La inscripción del patrimonio preservado en el Registro de la Propiedad fue tardía e incompleta. D. Pascual Frígola y Ahís sólo inscribió dos fincas urbanas, el "horno del Barón" y una casa de habitación, ambas sin cargas, en 1874 y 1864 respectivamente. La anotación de la primera se realizó de la siguiente forma: "Isidoro Gozalbez y Gozalbez, propietario, vecino de Alicante, como apoderado del Barón, D. Pascual Frígola acudió en 3-II-1874 al Juez Municipal de Agost, solicitando

acreditar la posesión en que se halla dicho señor desde hace más de veinte años, la que adquirió por herencia de su padre D. José Antonio Frígola, y este de su también difunto padre por herencia o vinculada"<sup>162</sup>. El resto, un total de 6 fincas (4 rústicas y 2 urbanas, una de ellas la "casa-palacio"), fueron inscritas en 1896, también por medio de apoderado y sin ningún gravamen, por su hijo D. Pascual de Frígola y Palavicino.

La exigüidad del patrimonio rústico conservado es evidente, pues las 4 fincas propiedad de los Frígola de estas características en conjunto no superaban las 12,01 hectáreas. Las heredades, constituídas por tierras de secano y regadío (riego de aguas de avenida y de la balsa del pueblo)<sup>163</sup> y dedicadas al cultivo de olivos, higueras, vid y algún producto de huerta, presentaban una cabida bastante heterogénea, entre 0,1201 y 8,5 hectáreas.

El proceso de desintegración de la propiedad preservada fue iniciado (si no se produjeron otras ventas con anterioridad a la creación de los Registros de la Propiedad, pues en esta ocasión ha sido imposible consultar los libros de Contaduría de Hipotecas) por D. P. Frígola Ahís, quien enajenó las dos fincas por él inscritas (en el mismo año de su inscripción) a dos

-----  
<sup>162</sup> Registro de la Propiedad de Novelda, Fca. 1.686, Lib. 16, fs. 225-226.

<sup>163</sup> Por ejemplo, una de las fincas estaba integrada, además de 2,6422 ha., por 45 días de agua de la balsa de regantes de Agust: 36 días correspondientes a los tres primeros días de cada mes y 9 días más distribuidos el resto del año (6 y 26 de enero, 26 de marzo, 12 de abril, 23 de julio, 26 y 27 de agosto, 27 de septiembre y 19 de diciembre). Registro de la Propiedad de Novelda, Fca. 3.607, Lib. 51, fs. 73-76.

labradores y vecinos de Agust. D. P. Frígola y Palavicino continuó dicho proceso, desprendiéndose de tres de las fincas rústicas (en total 3,603 ha.) y del resto de las urbanas. Todas las transacciones fueron efectuadas en 1898 y a favor del mismo adquirente, J. Vicedo Beviá (industrial y vecino de Murcia), por un total de 34.000.

Sin embargo, a pesar de la venta de los restos del antiguo patrimonio señorial, este último adquirió 2,4020 ha. de secano, posiblemente de la plena propiedad -libre- de alguno de sus antecesores, puesto que el transferente en la operación fue D. Mariano Frígola y Alcedo. A esta finca se le agregó otra situada en los límites con Monforte, obteniéndose una cabida total de 4,41 ha. Esta finca junto con otra de una cabida superior a las 8 ha. fueron las únicas propiedades que recibió como pago de su herencia D. Ana Frígola Carruana, heredera, en 1909, de los bienes del Barón de Ruaya y de Cortes de Pallás en Agust<sup>164</sup>. A su muerte, en 1944, pasaron a manos de su hijo, D. V. Beta Frígola<sup>165</sup>, quien, en 1964, las donaba a V. J. Beta Reig. Este último fue el responsable de la enajenación de los últimos vestigios del patrimonio señorial vinculado por los Vallebrera en 1561, al vender ambas heredades (12,817 ha.) en 1980 a un grupo

-----  
<sup>164</sup> A D<sup>a</sup> Ana Frigola había correspondido, según lo dispuesto por su padre (D. P. F. y Palavicino), la mitad del tercio de libre disposición y del de mejora, además de la legítima, por un total de 242.542,59 pts; para cuyo pago le fueron cedidas entre otras propiedades todas las existentes en Agust.

<sup>165</sup> Tras la correspondiente escritura de partición de bienes, otorgada el 12-IX-1945, D. Vicente Beta entró en posesión de la herencia de su madre, excepto el tercio de libre disposición que fue legado en usufructo a su padre, D. V. Beta Arnal.

de agricultores y vecinos de Agost (J. M. Martínez Román y J. A., Fco. y F. Martínez Jover), por un precio global de 400.000 pts.

Por tanto, podemos concluir afirmando que la liquidación del antiguo patrimonio solariego de los titulares del señorío de Agost vino dada por la conjunción de dos procesos, la pérdida del elemento territorial establecido enfitéuticamente, en favor de los enfiteutas del lugar, y la enajenación del patrimonio subsistente por los descendientes de los antiguos señores de Agost, durante los últimos años del siglo XIX y el siglo XX.

## CAPÍTULO 6

LA VALLONGA DE BURGUNYO. CONSOLIDACIÓN DE UNA GRAN PROPIEDAD.



## CAPTITULO 6

### LA VALLONGA DE BURGUNYO. CONSOLIDACION DE UNA GRAN PROPIEDAD.

#### INTRODUCCION

La reposición, en 1772, por obra de Carlos III (Real Provisión de 16-V-1772) del privilegio otorgado por Alfonso II en las Cortes Generales de 1329, permitía continuar el proceso colonizador y de génesis de nuevos señoríos interrumpido por la promulgación del Real Decreto de 29-VI-1707, que establecía la abolición de los fueros valencianos, al tiempo que posibilitaba la concesión de la jurisdicción alfonsina a los dueños de algunos lugares ya creados, como Formentera<sup>1</sup>.

Esta nueva situación se evidencia en la fundación de una serie de señoríos durante el último cuarto del siglo XVIII, adscritos, junto con los creados con anterioridad al conflicto sucesorio, a la segunda de las etapas diferenciadas en la génesis de señoríos alfonsinos (actuando la expulsión de los moriscos como punto de separación entre ambas); caracterizada por la proliferación de este tipo de enclaves por iniciativa de las instituciones religiosas y el patriciado urbano, fundamentalmente en los llanos meridionales del antiguo Reino de Valencia<sup>2</sup>.

-----  
<sup>1</sup> GIL OLCINA, A. (1983): "La propiedad de la tierra en los señoríos de jurisdicción alfonsina", *Investigaciones geográficas*, núm. 1, Instituto Universitario de Geografía, Universidad de Alicante, Alicante, p.16.

<sup>2</sup> GIL OLCINA, A. (1983): Op. Cit., p.16.

Santa María de Aguas Vivas, fundada por el convento de Aguas Vivas en el valle del mismo nombre<sup>3</sup>; San Rafel en Cocentaina; Peñacerrada o Pueblo Nuevo en Muchamiel, fundada por D. Antonio Pascual y Molina, Marqués de Peñacerrada; Algorfa, segregada de Almoradí y perteneciente a D. Ignacio Pérez de Sarrió<sup>4</sup>, o La Vallonga de Burgunyo, creada por D. Pedro Burgunyo y Juan en el realengo alicantino, son ejemplos de este pceso finisecular.

### 1.- LA FUNDACION DEL SEÑORIO

D. Pedro Burgunyo y Juan<sup>5</sup> caballero, regidor perpetuo de la clase de nobles del ayuntamiento de Alicante (y más tarde Alguacil mayor de la Inquisición de Murcia en Alicante), determinó fundar una nueva población -La Vallonga de Burgunyo- en tierras de su propiedad situadas en las partidas secanas del Pla

-----

<sup>3</sup> FRANCH BENAVENT, R. (1979): "El régimen señorial del Convento de Aguas Vivas durante el siglo XVIII", *Estudis*, núm. 8, Valencia, pp. 223-271.; (1980): "Un caso de señorío eclesiástico valenciano: El convento de Aguas Vivas durante el siglo XVIII", *Anales Valentinis*, núm. 11, Valencia, pp.83-117.

<sup>4</sup> Ultimo señorío erigido en el Bajo Segura, cuya ubicación en el interior del término de Almoradí, dividiéndolo en dos sectores, acarreó mayores dificultades al logro de la jurisdicción en 1798. GIL OLCINA, A. y CANALES MARTINEZ, G. (1988): *Residuos de propiedad señorial en España. Perduración y ocaso en el Bajo Segura*, Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, Alicante, p.82.

<sup>5</sup> Burgunyo y Ruiz de Rocamora como heredero de los bienes amayorazgados por D. Miguel Ruiz y Ximenez y D<sup>a</sup>. Luisa Rocamora; consistentes en varias haciendas en Catral y Almoradí y una casa en Orihuela.

de la Vallonga y las Atalayas, muy próximas a la ciudad de Alicante, acogiéndose para ello al Privilegio Alfonsino<sup>6</sup>.

Con este fin, otorgó, ante el escribano Patricio Montllor, dos escrituras fundacionales en 25-XI-1779 y 19-XII-1779, estableciendo un total de diecinueve suertes a un número igual de enfiteutas; quince en la Heredad de la Vallonga y cuatro en la de las Atalayas<sup>7</sup>, solicitando poco después la concesión de la jurisdicción alfonsina.

Ambas heredades formaban parte del patrimonio de los Burgunyo, que, según el justiprecio de 1756, comprendía en las dos partidas anteriormente mencionadas 227,75 Ha. de superficie cultivada; constituyendo La Vallonga la finca de mayores dimensiones del término de Alicante<sup>8</sup>.

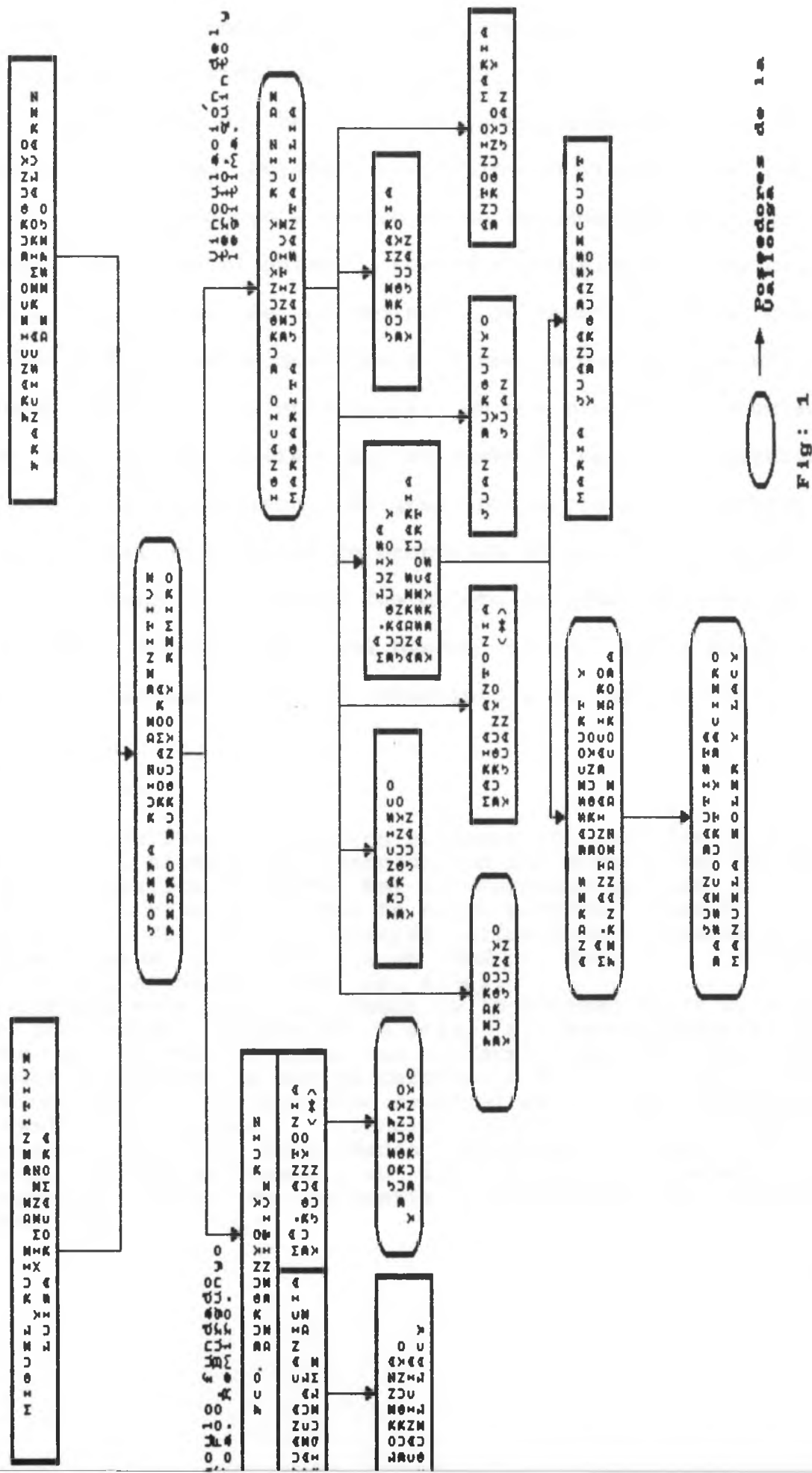
Los Burgunyo (ver esquema 1), además de importantes propietarios de tierras (no solamente en el término de Alicante sino también en los de Almoradí y Catral), eran una de las familias más nobles y antiguas de Alicante (habían sido señores de Agost), que se mantuvo integrada en la oligarquía ciudadana que ejercía el control del gobierno municipal, tanto durante la etapa anterior al conflicto sucesorio, mediante su participación

-----  
<sup>6</sup> Privilegio otorgado por el Rey Alfonso II en 1329, que posibilitaba el disfrute de la jurisdicción alfonsina (jurisdicción baja y mixta) al fundador de un lugar con un mínimo de 15 vecinos (en el caso de cristianos viejos).

<sup>7</sup> GIL OLCINA, A (1983): Op. Cit., p 16-17).

<sup>8</sup> GIMENEZ LOPEZ, E.: *Alicante en el siglo XVIII. Economía de una ciudad portuaria en el antiguo régimen*. Institució Alfons el Magnànim, Diputació Provincial de Valencia, 1981, p. 135.

# LOS BURGUNYO DESDE FINALES DEL SIGLO XVII A MEDIADOS DEL XIX



en el sistema insaculatorio<sup>9</sup>, como en la etapa borbónica posterior, tras la reorganización de los municipios valencianos acorde al ejemplo castellano.

La heredad de la Vallonga había recaído en D. Pedro Burgunyo y Juan como heredero del vínculo instituido por su abuelo D. Pedro Burgunyo y Remiro en su segundo hijo D. Ignacio Burgunyo y Ruiz en el quinto, tercio y legítima de sus bienes libres<sup>10</sup>. El empleo de un régimen de tenencia en el que va implícita la división de dominios y la cesión del dominio útil al cultivador -caso de la enfiteusis- en una propiedad vinculada, pone de relieve las diferencias existentes entre el mayorazgo valenciano y el castellano, de gran incidencia en la evolución posterior de las estructuras de propiedad en uno y otro caso<sup>11</sup>.

La valoración de que fue objeto en 1742 (con motivo de la partición y división de los bienes de D. Pedro Burgunyo y Remiro entre sus dos hijos, D. Francisco y D. Ignacio Burgunyo y

-----

<sup>9</sup> "(...) desde 1366 que son los primeros oficiales de la ciudad que se hallan, siempre han ejercido los más honoríficos oficios, y en la insaculación del Señor Rey D. Fernando que fue en 10 de Julio de 1493, vino insaculado En Perot Borgoño Doncell (...)"  
ARQUES JOVER, Fr. A.: *Nobiliario Alicantino*. Transcripción, adiciones, notas y comentarios de MAS y GIL, L. y ESQUERDO RIBERA, J. M., Alicante, 1966, pp. 41-42.

<sup>10</sup> Integraban este vínculo, además de la heredad de la Vallonga, varias propiedades inmediatas a ésta, y, aproximadamente, 225 tahullas de huerta situadas en el término de Almoradí. AHPA. Protocolos Notariales de Adrián Cazorla. P 1761, fs. 117-150 vto.

<sup>11</sup> GIL OLCINA, A: *La propiedad señorial en tierras valencianas*, Del Cenia al Segura, Valencia, 1979, p.185; "Crisis y transferencia de las propiedades estamental y pública", *La propiedad rústica en España y su influencia en la organización del espacio*, Dpto. de Geografía, Universidad de Alicante, Alicante, 1981.

Ruiz) en una cuantía de 26.719 Libras y 8 Sueldos<sup>12</sup> es un hecho indicativo de su gran extensión superficial; puesto que las adquisiciones de tierras realizadas por esas fechas en esa misma partida por D. Pedro Burgunyo y Remiro y D. Ignacio Burgunyo oscilaban entre las 7 y las 16,6 Libras por jornal<sup>13</sup>. Sus enormes dimensiones dificultaron la correcta estimación de su cabida superficial; como se pone de manifiesto al contrastar las 16.000 tahullas que fueron vendidas por D. Juan Bautista Bassecourt y Baciero a D. Juan Bautista Lafora y Caturla en 1862<sup>14</sup> e inscritas en el Registro de la propiedad por éste último en 30-VII-1864<sup>15</sup> con las 5464 tahullas en que fue rectificada su cabida en 30-X-1884<sup>16</sup>.

Las Atalayas, sin embargo, con una extensión de 254 jornales, había sido adquirida por D. Pedro Burgunyo y Juan a su madre, Margarita Juan y Santacilia, el 19-XII-1779 (en la misma fecha de la concesión de la escritura de establecimiento), junto con 12 jornales de secano en la partida del Carchofar (anexas a las Atalayas) por 8.683 Libras.

-----  
<sup>12</sup> Incluyendo también las diversas dependencias e instalaciones de la finca (casa, ermita, bodegas, lagares, cisterna, balsas, noria, etc). AHPA. Protocolos Notariales de Adrian Cazorla. P. 408, fs. 9-81.

<sup>13</sup> AHPA. Protocolos notariales de Adrián Cazorla

<sup>14</sup> AHPA. Protocolos Notariales de José Cirer y Palou. P 528, fs. 2992-2997.

<sup>15</sup> Registro de la Propiedad de Alicante. Libro 1, fs. 321-324, Finca 79.

<sup>16</sup> Registro de la Propiedad de Alicante. Libro 194, Tomo 310, fs. 150 y ss., Finca 11.769.

La gran extensión superficial del predio, con las dificultades que podría suponer para la puesta en explotación de la totalidad de la finca, junto con las condiciones poco favorables del terrazgo (escasez de recursos hídricos que determina su configuración como un espacio de secano, condiciones edáficas, ...), analizadas en ciertos aspectos por el informe emitido por el ayuntamiento de Alicante en 22-XII-1782 en respuesta al Decreto del Consejo de Castilla de 6-XII-1781<sup>17</sup>, justifican el recurso a la enfiteusis como el medio más eficaz, económico y rentable para poner en explotación la propiedad<sup>18</sup>;

-----

<sup>17</sup> Se pone de manifiesto, por ejemplo, la inexistencia de caudales permanentes y el aprovechamiento de los esporádicos aportes pluviales: "Que el terreno y sus Cercanías es saludable, de buena constelazion, abundante de Pastos, Leñas, materiales, y en punta de Aguas tiene las precisas dulces para beber nacidas de su Noria, y á las inmediaciones, ay distintas Fuentes aunque no en tierras desu continencia, y si de otros vezinos (...), esta excluida de todo regadio por carezer de Agua perenne para su riego, pero abunda, y goza de vertientes de consideracion que bañan, riegan y conservan el inmenso numero de Arboles singularmente Algarrovos de que se compone, e igualmente de tierras de labor mas de las necesarias (...)" AMA. Cartas escritas y recibidas. Arm. 12, Lib. 64, fs. 279-292 vto. Cif. en E. GIMENEZ LOPEZ (1981): Op. Cit., p.135).

<sup>18</sup> Al primero de estos factores alude D. Pedro Burgunyo y Juan en el Memorial presentado el 7-XII-1780 para solicitar la aprobación de las dos escrituras de establecimiento por él otorgadas en 1779, y la concesión de la jurisdicción alfonsina: "que la expresada hacienda de la Vallonga por la dilatada extension de su terreno quedaria en mucha parte sin el correspondiente necesario cultivo, conservandose como hasta ahora ensu privativo particular aprovechamiento, y que el modo de aumentarla en utilidad, y veneficio de sus sucesores y de los mismos vasallos pobladores, es el de el establecimiento que les ha dado en que tambien se sigue conocida utilidad á el Estado por el aumento de familias que en la expresada Hacienda puedan mantenerse, á la Real Hacienda de vuestra magestad por el mayor aumento de la contribucion (...)" ARV. Real Acuerdo, Año 1788. Lib. 83, fs. 409-413 vto. También en AMA. Libro de Reales Provisiones, 1781. Arm.1, Lib.60, fs. 333-337 vto.

considerando las posibilidades que ofrece el establecimiento enfiteúutico para ejercer una elevada presión sobre el enfiteuta. Posibilidades fundamentadas en la percepción de unas rentas en especie particularmente gravosas, consistentes en la cuarta parte de la producción de todo tipo de sembrados, incluida la barrilla, y la tercera de la vid y el arbolado; y que el enfiteuta debía transportar hasta la residencia señorial limpias y libres de todo tipo de gastos.

Un censo en metálico cuya cuantía no se especifica<sup>19</sup>, la capitación anual de un dinero por cabeza de ganado mayor y menor (en San Miguel de Septiembre), la entrega de 5 sueldos (el 24 de junio) y una gallina (en la fiesta de Santo Tomás de diciembre) anuales por casa o solar para su edificación, los ingresos derivados del empleo de los medios de transformación de los productos agrarios monopolio del señor y del resto de regalías señoriales (taberna, mesón, tienda, balsas, era, ...) y la percepción del derecho de laudemio, vendrían a completar el capítulo de la renta señorial.

Este régimen de tenencia es, por tanto, capaz de proporcionar rentas mucho más cuantiosas que las procedentes del arrendamiento -fórmula de explotación indirecta predominante en el Campo de Alicante<sup>20</sup>-, cuya percepción se ve reforzada por el control político y económico que conllevan el ejercicio de la

-----  
<sup>19</sup> GIMENEZ LOPEZ, E. (1981): Op. Cit., p. 139.

<sup>20</sup> GIMENEZ LOPEZ, E.: *Alicante en el siglo XVIII. Economía de una ciudad portuaria en el antiguo régimen*. Institució "Alfons el Magnànim", Valencia, 1981, pp. 140-141.



jurisdicción alfonsina y las prerrogativas y derechos prohibitivos, exclusivos y privativos inherentes a ella.

Se acentúa, de este modo, la finalidad primordialmente económica de la fundación del señorío, configurándose éste como una auténtica explotación agraria, en la que el poblamiento es considerado unidad de explotación<sup>21</sup>, aspecto reflejado en los capítulos que regulan el funcionamiento agrícola del lugar (que serán analizados posteriormente).

La renta señorial constituye otro más de los aspectos reglamentados en las cartas de población otorgadas en 25-IX y 19-XII de 1779 por D. Pedro Burgunyo, integradas por 36 y 12 capítulos respectivamente<sup>22</sup>. En ambos casos se establecen tierras y casas o solares para la edificación de las viviendas a los enfiteutas, reservándose el señor el dominio directo de los mismos. Las cesiones de dominio útil podrían haberse efectuado tanto en el caso de tierras incultas como en el de tierras cultivadas, puesto que ambas heredades eran objeto de un aprovechamiento de secano (que probablemente no afectaba a la totalidad de las fincas), orientado principalmente a la producción de cereales (trigo y cebada), barrilla (en el caso de la Vallonga) y diferentes cultivos arbóreos (almendros, algarrobos, higueras y vid; particularmente implantada esta

-----  
<sup>21</sup> GIMENEZ LOPEZ, E. (1981), Op. Cit., p. 138.

<sup>22</sup> Los 36 capítulos de la primera de las cartas han sido resumidos por PALOP RAMOS, J.M.: *Hambre y lucha antifeudal. La crisis de subsistencia en Valencia. (Siglo XVIII)*, Madrid, 1977, pp. 113-118. Los documentos originales se encuentran localizados en ARV. Real Acuerdo, Lib. 76, fs. 644-654, y en AMA. Libro de Reales Provisiones, 1781. Arm. 1, Lib. 60, fs. 329-375.

última en la Vallonga, como podría deducirse a tenor de la concentración en ella de dependencias e instalaciones relacionadas con la producción de vino) con anterioridad a su establecimiento.

Sin embargo, la homogeneidad y gravosidad de las particiones de frutos (de carácter similar, incluso, en algún contrato de aparcería) apuntaría hacia el establecimiento predominante de tierras puestas ya en explotación, como puede desprenderse del contraste con otros ejemplos contemporáneos. En este sentido, las particiones impuestas por el Convento de Aguas Vivas en el caso de establecimientos de tierras incultas (otorgadas en una 1ª etapa hacia 1787) se fijaban en 1/5 de todos los frutos, granos y legumbres, "sin distinción de huerta, secano, ni marjal", mientras que en el caso de las concesiones de tierras desmontadas y plantadas (en una 2ª etapa, hacia 1796) se establecían en 1/4 de granos y legumbres en secano y en 1/3 del vino y de los cultivos arbóreos, y de los granos y legumbres en regadío<sup>23</sup>. Particiones, por otra parte, muy similares a las existentes en la Vallonga. Además, podría aducirse como prueba de esta hipótesis, el testimonio contenido en el informe municipal a la hora de analizar la cuantía de las particiones de frutos<sup>24</sup>.

-----  
<sup>23</sup> FRANCH BENAVENT, R. (1980): Op. Cit., p. 101.

<sup>24</sup> "(...) sin duda porque fueron establecidas después de panificadas como lo están exactamente las de la Vallonga, y Atalayas, y muy plantadas aunque secanas que equivale al regadío que ay en Villafranqueza, (...)" AMA. Arm. 12, Lib. 64, f.282 vto.

La cuantía de las suertes establecidas no se especifica en ninguna de las cartas de población y, lamentablemente, no se ha localizado completa la serie de protocolos del notario Patricio Montllor, que habría podido arrojar alguna luz sobre el asunto. En la heredad de las Atalayas fueron cedidos 202 jornales, más los 12 que poseían, anexos a éstos, en la partida del Carchofar. En el caso de la Vallonga, puede realizarse una estimación aproximada mediante el análisis de las escrituras de renuncia y transpaso de las antiguas porciones establecidas a favor de D. Pedro Burgunyo y Juan, y, posteriormente, de D<sup>a</sup>. Josefa Burgunyo y Burgunyo (como sucesora en el vínculo de los Burgunyo)<sup>25</sup>.

Las porciones de tierra cedidas, cuyo establecimiento se cancela en estas escrituras, oscilan entre los 12 y los 70 jornales, predominando los que presentan una cabida entre los 30 y los 40 jornales; aunque se ha de señalar que, de las 15 suertes originales de la Vallonga, en cinco casos no se dispone de datos, bien porque en la escritura no se detalla la superficie exacta (simplemente se hace referencia a una parte de la heredad -como ocurre en los casos de renuncia de las Atalayas-), bien porque esas escrituras no han sido halladas, ya que las series no están completas, faltando algunos años intermedios en los periodos

-----  
<sup>25</sup> AHPA. Protocolos Notariales de Patricio MONTLLOR (años 1781-1793, aunque incompleta), Francisco ARACIL (años 1808-1810) y Antonio HERNANDEZ Y SOLER (año 1812).

fijados para cada notario. Sin olvidar el hecho de que pudieron no haberse producido, continuando los enfiteutas la explotación de los predios establecidos.

Además de las rentas señoriales y la distribución de tierras y solares, el control del gobierno y la administración municipal, la ordenación y control de la producción y del funcionamiento económico del señorío, el aprovechamiento de las utilidades rústicas, y la salvaguarda del dominio directo, son los aspectos básicos en torno a los cuales se estructuran los capítulos de población.

El gobierno y la administración municipal descansan en manos del señor, quien se reserva la designación (anual) de los cargos del gobierno local y la facultad de dictar las ordenanzas más adecuadas en cada momento para regir la nueva población. Asimismo, los enfiteutas se obligaban a prestar juramento de fidelidad y homenaje al dueño del lugar, y a acudir a él para solucionar los pleitos, además de otra serie de compromisos en torno a las derramas y a la administración de los arbitrios.

Por otra parte, el señor dispone de los elementos necesarios para ejercer un completo control de la actividad económica del lugar; tanto a través de la posesión de los derechos privativos, exclusivos y prohibitivos -regalías- (reservándose la libertad de arrendarlas) que le permitían dominar los medios de transformación de los productos agrícolas, como a través de las distintas disposiciones estipuladas en torno a la ordenación y control de la producción y los intercambios comerciales.

Para la ordenación y control de la producción se apoya en una serie de condiciones, entre las que destacan la obligación de conducir los productos cosechados a los lugares señalados por el señor (con el fin de verificar en ellos las operaciones agrícolas), notificando de antemano el momento de la conducción; la obligación de dar aviso del inicio de las faenas de recogida y siega de las cosechas; la prohibición a los deudores de la señoría de realizar las faenas agrícolas; el recuento del ganado y la capitación de 1 sueldo por cabeza; o la imposibilidad de cortar o quemar cualquier árbol sin licencia de la señoría, y el deber, en caso de contar con ella, de conducirlo a la casa del señor y replantar otro en su lugar. La prohibición a los vecinos de la venta al por menor, y el abastecimiento local de la tienda, taberna y carnicería, junto a la propiedad de las regalías, permitían al señor obtener el control del mercado local.

A la salvaguarda del dominio directo y al mantenimiento de sus derechos están destinados el mayor número de disposiciones de la carta de población. Podemos realizar una enumeración de las más importantes (algunas de las cuales refuerzan y aseguran el cobro de las rentas señoriales):

-la obligación de cabrear y reconocer la señoría directa cada 10 años, siendo suficiente la presentación de cualquier auto de cabreve para la justificación de la señoría directa.

-en el caso de la pérdida de las escrituras de establecimiento, el constar en el libro de cuentas de la señoría y la presencia de las casas y tierras en su partida bastarán para el reconocimiento del dominio directo.

-se prohíbe la realización de cualquier transacción de las propiedades establecidas sin solicitar previamente la licencia señorial , y sin pagar la décima parte del valor estipulado, por derecho de luismo. Transacción que de cualquier modo sólo podía efectuarse entre pobladores del lugar.

-se prohíbe cualquier transacción con instituciones o personas privilegiadas, asegurandose de este modo la percepción de los derechos enfiteúticos; percepción que, en manos de ese tipo de enfiteutas, podía verse muy dificultada.

-se contempla la posibilidad de consolidar el dominio útil y el directo por el señor en el caso de la confiscación de los bienes del enfiteuta a causa de algún delito.

-se prohíbe la proclamación como señor directo de otro que no sea el dueño o sus sucesores.

-no se permite vincular, hipotecar o cargar ningún tipo de gravamen sin licencia del dueño.

-se garantiza el cobro de los censos y pechos atrasados simplemente con que constase su deuda en el libro señorial, eximiendo de tal exacción solamente la presentación del recibo pagado.

-se establece la preferencia de la señoría directa a cualquier acreedor en el cobro de sus derechos sobre los vasallos; pudiendo tomar para ello parte de los frutos cosechados por sus deudores.

En lo que respecta a las utilidades rústicas, señalar la prohibición de extraer leña de la "Pinada" (de la Vallonga) y de romper otras tierras distintas a las censidas; la reserva por parte del dueño del lugar de las hierbas de su jurisdicción para su venta o arrendamiento; las disposiciones en torno a la quema o tala de los árboles y la extracción del agua necesaria de la cisterna y la noria siempre que aporte su caballería y se reponsabilice del deterioro que pueda causar por su uso.

Por último, restaría mencionar que la responsabilidad del mantenimiento de todas las instalaciones e infraestructuras de la finca (cisternas, norias, caminos, ...) recae en los enfiteutas; estableciéndose la pena de comiso en el caso de no actuar de este modo por lo que respecta a los caminos y también a las tierras, árboles y casas. De este modo, todos los gastos de amortización son soportados por el enfiteuta.

Las condiciones estipuladas en las escrituras de establecimiento aseguran al señor el control del gobierno municipal y de la actividad económica del señorío. Con ellas se pretende, además, mantener y consolidar un lugar de poblamiento estable (obligación de residir en el poblado y trabajar personalmente la tierra -comiso tras un abandono de ocho meses-; cláusulas que exigen al enfiteuta la responsabilidad del

mantenimiento de los bienes censidos), sin descuidar por ello la salvaguarda del dominio directo, observándose también la posibilidad de su consolidación con el útil a través del comiso.

Los capítulos contenidos en la carta de población de las Atalayas atañen principalmente al aspecto de las rentas señoriales (reducidas en este caso a las particiones de frutos, el luismo y la entrega de una gallina el día de Santo Tomás) y al de la defensa del dominio directo. En este último caso contempla solamente las prohibiciones de transferir las tierras sin licencia señorial y sin verificar el pago del derecho de laudemio (exceptuando también las transacciones a instituciones o personas privilegiadas), y de hipotecar, vincular o cargar cualquier tipo de gravamen sobre los bienes establecidos sin expresa licencia señorial; las posibilidades de consolidar el dominio útil con el directo en el caso de confiscación de los bienes por delito al enfiteuta, y la preferencia de la señoría directa al resto de acreedores en el cobro de deudas y en la percepción de los derechos señoriales.

También alguno de los artículos está dirigido a asegurar el mantenimiento de los bienes enfeudados<sup>26</sup>, de las cisternas y la noria (con una regulación de su uso similar a la del caso anterior); así como la conservación y la limpieza de las

-----  
<sup>26</sup> En este sentido, en relación a las tierras cedidas, se acuerda que: "(...) debiendo dichos terratenientes llevar dichas tierras á uso y costumbre de buen labrador, tragillandolas, tapando portillos, y haciendo lo demas que sea conducente para que vengan en aumento, y no vengan en disminucion." AMA. Arm 1, Lib. 60, f.368. Cláusula ésta muy frecuente en los contratos de arrendamiento de la época.



balsas y el aljibe, de uso común a los cuatro pobladores.

Se aprecia la falta de cláusulas relativas al gobierno y la administración locales, a la propiedad señorial y a la regulación del uso de las regalías y al control del trabajo agrícola de los vecinos y de los intercambios. Tampoco están presentes algunas de las dirigidas en la otra carta de población a la salvaguarda del dominio directo y a la percepción de las rentas. Todo ello, tal vez, en relación a la proximidad de ambos enclaves y a la consideración de que fueron objeto en la otra carta de población, a los que, probablemente, habrían de adherirse, sobre todo en lo relativo al uso de los monopolios señoriales y a algunas de las competencias jurisdiccionales del señor, manteniéndose más ajenos al resto de aspectos más directamente relacionados con el propio núcleo de población.

Las condiciones de población del lugar de la Vallonga de Burgunyo fueron analizadas cuidadosamente en el informe realizado por el ayuntamiento de Alicante en 22-XII-1782 en respuesta al Decreto de 6-XII-1781<sup>27</sup>; en el que se hace constar la dureza de algunas de las cláusulas convenidas.

Las mayores críticas se dirigen hacia las particiones de frutos, a las que considera excesivas y muy superiores a las propias de otros lugares de señorío próximos y en los que el régimen de tenencia predominante es también la enfiteusis. Una muestra de ello es el siguiente fragmento: "(...) parece gravosa

-----  
<sup>27</sup> AMA. Arm. 12, Lib. 64, fs. 279-292 vto.. Cifrado en E. GIMENEZ LOPEZ, (1981), Op. Cit., p. 135.

su quota, y el estrechar al enfiteuta á llevar los frutos á la casa del Dueño, pues en Agost, y Busot el Derecho Dominical esta regulado en algunos frutos, de ocho uno, y en otros de doce uno, y de los Algarrovos en Busot de diez y seis uno, y en Agost no se paga derecho Dominical deeste fruto, y en Villafranqueza de quatro uno, sin duda porque fueron establecidas despues de panificadas como lo estan exactamente las de la Vallonga, y Atalaya, y muy plantadas aunque secanas que equivale al regadio que ay en Villafranqueza, y no se llevan los frutos á la Casa del Dueño<sup>28</sup>."

También en relación a la percepción de las rentas son consideradas excesivamente rigurosas las disposiciones que facultan al señor para denegar el permiso para la realización de las faenas agrícolas a sus deudores y exigir el cobro de pechos y censos atrasados siempre que constase su deuda en el libro de cuentas señorial; y en este último caso "(...) porque excluye toda especie de defensa, y pretende credito descriptura quarentigia un libro que no la tiene por naturaleza, aunque la modifica con la libertad de retirar recibo, que parece subsanar todo inconveniente, pero pueden sufrirse muchos descuidos enlos Pobladores como rusticos, ó por otros improvistos trastornos"<sup>29</sup>. En este mismo sentido, se acepta el pecho anual de un dinero por

---

<sup>28</sup> AMA. Arm. 12, Lib. 64, f. 282 vto., cifrado en E. GIMENEZ LOPEZ, (1981), Op. Cit., p. 135.

<sup>29</sup> AMA. Arm. 12, Lib. 64, f. 288 vto.

cabeza de ganado, siempre que no se les impida el uso de las hierbas del término para alimentar a sus ganados, tomándolo en consideración a la hora de plantear su arrendamiento.

Otras disposiciones de menor importancia son también objeto de alguna matización. La posibilidad de realizar transacciones de bienes censidos solamente entre pobladores del lugar, aunque favorable en un primer momento para el fomento de la nueva población, podría resultar perjudicial en el futuro ante el incremento del vecindario y las diversas transmisiones hereditarias. También la inexistencia de un periodo de tiempo límite para la actuación del comiso en el caso de no verificarse la labor de mantenimiento de las propiedades establecidas y del resto de instalaciones del señorío podría generar algunos problemas, pues como se apunta en el informe "(...) seria la indifinicion libertad plena del propietario para aliviar á unos, sostener á otros, y expeler á los que estimase menos (...) "<sup>30</sup>.

Por último, merece la pena señalar la favorable actitud del ayuntamiento hacia el establecimiento, aunque puntualizando que las competencias jurisdiccionales de D. Pedro Burgunyo deberían ceñirse al ejercicio estricto de la jurisdicción alfonsina, sin perjudicar en ningún momento a las de la ciudad de Alicante. Sin embargo, es un hecho que no deja de sorprender, considerando los tradicionales enfrentamientos mantenidos por la ciudad de Alicante con los dueños de otros señoríos alfonsinos situados en el entorno de la capital (Agost, Busot,

-----  
<sup>30</sup> AMA. Arm. 12, Lib. 64, f. 287.

villafranqueza) a causa de su negativa a reconocer esta jurisdicción; enfrentamientos que, generalmente, se decantaron a favor de los titulares de estos enclaves señoriales. La explicación podría residir en la mayor proximidad y dependencia de este lugar respecto a la ciudad de Alicante, hecho que evitaría el peligro, existente en el caso de los otros señoríos, de una extralimitación en sus competencias jurisdiccionales. Sin olvidar el hecho de la profunda vinculación del fundador del señorío con la élite detentadora del gobierno municipal.

La dureza de la carta de población de la Vallonga y las tardías fechas en que se produjo su otorgamiento ha sido interpretado por algunos autores como exponente del fenómeno de reacción feudal que, durante el siglo XVIII, y especialmente en su segunda mitad, se generaliza en Europa<sup>31</sup>. En el Reino de Valencia el régimen señorial se vio reforzado por la conjunción de dos hechos, el extrañamiento de los moriscos, que posibilitaba el incremento de las bases territoriales de los señoríos con población mayoritaria, o en una proporción importante, de esa procedencia, a la vez que una reestructuración de las rentas señoriales propiciada por las condiciones insertas en las cartas pueblas pactadas en el consiguiente proceso repoblador<sup>32</sup>; y la Guerra de Sucesión, que favoreció el afianzamiento y el incremento del poder político de los señores, que, en algunos

-----  
<sup>31</sup> PALOP RAMOS, J.M. (1977): Op. Cit., p.110-118.

<sup>32</sup> CISCAR PALLARES, E.: *Tierra y señorío en el País Valenciano (1570-1620)*. Del Cenja al Segura, Valencia, 1977, 411pp.

casos, como en el ducado de Gandía<sup>33</sup>, contó con la colaboración de la oligarquía terrateniente (que de este modo imponía su hegemonía a nivel local), y que en otros (Elche), merced a la plena consolidación de la jurisdicción señorial, permitió al señor actualizar rentas e introducir una serie de nuevos derechos y regalías, a la vez que hacerse con propiedades de tradicional aprovechamiento comunal<sup>34</sup>.

Un aumento de la presión señorial evidencian los pleitos suscitados entre señores y vasallos; en los que se hacen notar las extralimitaciones de los dueños territoriales en su interpretación de las condiciones establecidas en las cartas de población (introducción de particiones de frutos más cuantiosas que las estipuladas originariamente o de nuevas regalías; intentos de implantar las particiones usuales a los terrenos roturados con posterioridad al establecimiento; la eliminación de ciertos aprovechamientos comunales tradicionales; ...)<sup>35</sup>. Sin embargo, otros autores<sup>36</sup> han señalado, partiendo del análisis de este tipo de procesos, la relajación producida en las condiciones

-----  
<sup>33</sup> MORANT DEUSA, I.: *El declive del señorío. Los dominios del ducado del Gandía (1705-1837)*. Institución "Alfonso el Magnánimo", Valencia, 1984, pp. 183-192.

<sup>34</sup> RUIZ TORRES, P.: *Señores y propietarios. Cambio social en el sur del País Valenciano. (1650-1850)*. Institució "Alfons el Magnànim", Valencia, 1981, pp. 77-114.

<sup>35</sup> ARDIT LUCAS, M.: *Revolución liberal y revuelta campesina. Un ensayo sobre la desintegración del régimen feudal en el País Valenciano. (1793-1840)*. Ariel, Barcelona, 1977, pp. 41-46.

<sup>36</sup> CHIQUILLO PEREZ, J.A.: "Aproximación al estudio del régimen señorial valenciano en el siglo XVIII", *Estudis*, núm. 7, Valencia, 1978, pp. 223-271. Esta hipótesis ha sido criticada, entre otros, por I. MORANT DEUSA quien señala la posible sobrevaloración del significado de los conflictos analizados (MORANT DEUSA, I. (1984), Op. Cit., p. 26).

impuestas en las cartas de población (estancamiento de censos de casas y tierras; tanspaso de ciertas regalías y baldíos a los ayuntamientos; descenso en alguna proporción de ciertas particiones de frutos, o desaparición de la obligatoriedad de las particiones en otras), aunque sin generalizar ni exagerar la situación hasta el extremo de afirmar un descenso de la presión señorial en el s. XVIII; sino relacionando el grado de presión señorial con el control que éste posee sobre las tierras (consolidación de la presión señorial solamente en los nuevos establecimientos de tierras concedidos desde mediados del siglo XVIII).

En relación a este caso concreto, y por supuesto al resto de señoríos alfonsinos que surgen en esta etapa final, nos parece más acertada la postura de otros autores como Gil Olcina<sup>37</sup> o Pla Alberola<sup>38</sup>, que rechazan de plano su asociación con un proceso de refeudalización, basándose en la pérdida de significación política del señorío a finales del siglo XVIII y la escasa entidad de estos nuevos núcleos de población. Al margen de estas consideraciones es necesario señalar como, con cierta frecuencia, las condiciones impuestas al campesinado enfiteuta eran similares o incluso mejores que las que soportaban los arrendatarios o aparceros en el realengo o en otras zonas de

-----  
<sup>37</sup> GIL OLCINA, A.: "Reformismo ilustrado, colonización interior y restablecimiento del fuero alfonsino". *Agricultura y Sociedad*, n° 56, MAPA, Madrid, pp. 79-112.

<sup>38</sup> PLA ALBEROLA, P.: "Recolonización anterior y expansión del régimen señorial. La carta puebla de la Sarga de 1774". *Estructuras y regímenes de tenencia de la tierra en España*. MAPA, Madrid, 1988, pp. 117-128.

implantación señorial. Este es por ejemplo el caso concreto de la Sarga y la Vallonga.

En otro orden de cosas, Romero Gonzalez se muestra también contrario a la idea de un severo régimen señorial en el Reino de Valencia durante todo el siglo XVIII, al tomar en consideración la existencia, a principios del siglo XIX, de un gran dinamismo y una clara división social del campesinado en los términos de señorío (aunque hace constar las diferencias derivadas de la imposición de pensiones en especie o en metálico, así como de un asentamiento anterior o posterior a la expulsión de los moriscos.

Las referencias contenidas en las escrituras de renuncia y cesión de los establecimientos (que dan testimonio del proceso de reversión del dominio útil a los propietarios del dominio directo que tendrá lugar posteriormente) sobre las deudas contraídas por los enfiteutas con D. Pedro Burgunyo y Juan, permiten sugerir la percepción por éste de la parte de frutos que le correspondía ( $1/4$  de los sembrados y  $1/3$  de los plantados) como dueño territorial de la Vallonga y propietario del dominio directo de las tierras establecidas. Sin embargo, se ha podido documentar el recurso al arrendamiento de este derecho mediante el hallazgo de una escritura de arrendamiento otorgada en 1800 por un periodo de 4 años<sup>39</sup>; aunque no sea posible concretar ni el inicio y ni el final del empleo de este sistema.

-----  
<sup>39</sup> AHPA. Prot. Not. de Luis A. Navarro. P.1314, fs. 52-57.

No obstante, éste podría ser considerado como el primer arrendamiento de los frutos de la Vallonga, puesto que en el caso de ser una renovación de otro concedido con anterioridad, remitiría a las condiciones ya establecidas, sin exponerlas de nuevo. Aunque también podría responder a una modificación de esas condiciones o a una sustitución de los arrendatarios.

El arrendamiento de la parte de frutos de la Vallonga fue otorgado a cinco labradores, Juan Sirvent, Juan Lillo, José Pastor, Andrés Torregrosa y Antonio Catalá, los cuatro primeros residentes en la partida del Raspeig y el último en la Vallonga. Tres de ellos (J. Pastor, A. Torregrosa y A. Catalá), además, habían sido anteriormente, o serían en un futuro, enfiteutas de la Vallonga. De este modo eran los arrendatarios los que debían cobrar de los censatarios la parte de las cosechas correspondiente; no se hace mención, por otra parte, de forma precisa, del resto de derechos establecidos con arreglo a los capítulos de 1779.

La cuantía de la renta anual ascendía a 1.270 libras, a satisfacer en dos plazos -de 635 libras cada uno-, el 25 de agosto y el 25 de enero. Esta se completaba con la entrega al señor de dos gallinas "gordas y buenas", cada año por Sto. Tomás.

Por su parte, el propietario les cedía las dependencias necesarias para el almacenamiento y la transformación de los productos agrarios (casa, garrofera, almazara,...), aunque se reservaba la bodega, la torre (para residir en ella cuando acudiese a la heredad) y el huerto cercado próximo a la casa, para su cultivo.



Los arrendatarios estaban obligados a ejercer una cierta labor de vigilancia y de control del cumplimiento de las condiciones estipuladas en la escritura de establecimiento. Procurar que las labores agrícolas se hicieran a uso y costumbre de buen labrador, y que los troncos de los árboles secos fuesen conducidos a casa del señor -recibiendo en compensación una parte de lo que a éste correspondiese-, debiéndolos llevar él mismo en el caso de no cumplirse así, o en su defecto, pagar un tanto por árbol quedándose con la leña; impedir la venta o permuta de los bienes establecidos sin avisar previamente al propietario, para que éste pudiera conceder la licencia y cobrar el laudemio correspondiente; y vigilar que nadie cortase leña de la pinada (a ellos también les estaba prohibido) y que los ganados que pastasen no dañasen las tierras y cultivos -percibiendo, en éste caso, los arrendatarios las multas de los ganados.

Otro compromiso de los arrendatarios con el dueño, era el de dar acomodo y atender las caballerías del dueño o de sus enviados al lugar, satisfaciendo el otorgante el precio corriente; aunque debían suministrarle la paja necesaria para mantener una caballería sin cobrar nada por ello. Por lo que respecta al vino, si el señor desease el "vino negro" producido, se lo abonaría a los arrendatarios al mismo precio que a los cultivadores, mientras que si solamente desease un tercio, deberían entregárselo al precio corriente.

Los gastos de la escritura eran costeados por los arrendatarios, a quienes D. Pedro exigía la formalización de una hipoteca sobre otros bienes como garantía de la percepción de las

rentas. Con este mismo propósito se establece la cláusula que deniega la concesión de rebajas en el precio de los arrendamientos a causa de los desastres provocados por piedra, langosta, avenidas de agua, o factores de cualquier otro tipo.

Con este sistema, el propietario se asegura la percepción de una renta en metálico todos los años, liberándose de compartir los riesgos con los enfiteutas en los momentos de malas cosechas. Por otra parte, los arrendatarios, residentes en la Vallonga o en sus cercanías, y, en algún caso, con una mayor vinculación por ser enfiteutas en ella, velaban por el cumplimiento de las condiciones de población y el mantenimiento de la finca en buenas condiciones, ejerciendo un control directo sobre los trabajos agrícolas, y, en cierto sentido, asegurándole la percepción de otros derechos contemplados en la carta de población.

El arrendamiento de los derechos dominicales fue una práctica muy común entre los señores valencianos. Los arrendatarios de estos derechos podían especular en momentos de escasez, cuando los precios se disparan, con las producciones agrícolas percibidas. Algunos de ellos, como José Rodríguez<sup>40</sup>, arrendador de los derechos señoriales de Agost, prestaban el grano, entregado con anterioridad, a los mismos enfiteutas, o a otros labradores, para efectuar la siembra de la nueva cosecha.

---

<sup>40</sup> AHPA. Prot. Not. de Francisco Aracil. P.87, fs. 75-76 y 76-77.

La participación de los arrendatarios en las rentas señoriales podía proporcionarles beneficios considerables; un ejemplo de ello, lo constituye el 16% de la inversión inicial obtenido en el Marquesado de Llombay en 1765<sup>41</sup>. Sin embargo, los arrendatarios de los frutos de la Vallonga (labradores, algunos de ellos enfiteutas, que se ven obligados a renunciar a sus establecimientos en 1812) responden mejor al segundo de los grupos de arrendatarios establecidos por I. Morant<sup>42</sup>. Aquellos que ejercen esta actividad en pequeña escala, arrendando uno o varios derechos dominicales mediante un desembolso no muy elevado, y con bastantes dificultades para enfrentarse con éxito a una mala cosecha u otro tipo de desastre coyuntural. Sirvan de referencia las 1.270 libras anuales pagadas en este caso, frente a las 58.078 abonadas, en 1758, por D. Pedro Vergara por la totalidad de los derechos señoriales del Duque de Gandía<sup>43</sup>. En muchos casos, una situación de esta clase acarrearía el embargo de los bienes fiadores del arrendatario. Una situación similar, aunque en ella no figura el Conde de Cirat como acreedor, es el embargo y subasta de los bienes del arrendatario de los derechos dominicales de Villafranqueza<sup>44</sup>.

-----  
<sup>41</sup> MORANT DEUSA, I. (1984): Op. Cit., p. 113.

<sup>42</sup> MORANT DEUSA, I. (1984), Op. Cit., p. 115.

<sup>43</sup> MORANT DEUSA, I. (1984): Op. Cit., p.114.

<sup>44</sup> AHPA. Prot. Not. de F. Aracil. P.89, fs 54-57, y P.90, fs. 131 vto. y siguientes.

## 2.-LA CONSOLIDACION DE DOMINIOS. EL MANTENIMIENTO DE UNA GRAN PROPIEDAD.

La enfiteusis no fue el único sistema de tenencia empleado por D. Pedro Burgunyo en la explotación de la Vallonga; recurrió también a los contratos de arrendamiento y aparcería, con un probable predominio de los primeros sobre los segundos, frecuentemente otorgados a pobladores de la Vallonga de Burgunyo. La utilización de regímenes que no implicaban la división de dominios y la cesión de la propiedad, unido a la peculiar evolución experimentada por los diversos establecimientos realizados en 1779 -que apartaba a este señorío de las trayectorias seguidas por la gran mayoría de los dominios señoriales en los que la fórmula de tenencia imperante era la enfiteusis<sup>45</sup>-, justificarían la conservación del patrimonio territorial en manos de la familia Burgunyo y sus sucesores hasta la segunda mitad del siglo XX. A esto habría que añadir la existencia de superficie no cultivada y no establecida en manos del propietario, como lo pone de manifiesto el informe municipal

---

<sup>45</sup> GIL OLCINA, A (1979): Op. Cit., pp.135-147 y 186-189; GIL OLCINA, A. (1988): Op. Cit., pp. 57-60.

de 1782<sup>46</sup>.

Los rasgos esbozados por el profesor Gil Olcina<sup>47</sup> en su caracterización de los dueños de señoríos alfonsinos enclavados en el Bajo Segura podrían ajustarse, en cierta medida, a la persona de D. Pedro Burgunyo y Juan. En efecto, miembros del patriciado urbano, comportamiento burgués, profundo interés por la correcta administración de sus patrimonios y pretensiones de lograr su promoción nobiliaria son elementos que pueden detectarse en D. Pedro Burgunyo y Juan (quizá más acusados en D. Pedro Burgunyo y Remiro, fundador del vínculo -adquiriendo gran parte de las tierras que posteriormente lo integrarían- y abuelo del creador de la nueva población). La búsqueda de la mayor rentabilidad de sus propiedades se hace patente no solo en la rigurosa imposición de las condiciones de establecimiento de la Vallonga (control del funcionamiento económico del señorío -trabajo agrícola, mercado local y medios de transformación de los productos agrarios-), sino en la concisa estipulación de las condiciones de arrendamiento tanto de las tierras de la Vallonga como del resto de las fincas situadas en el término de Alicante y en las huertas de Almoradí y Catral.

-----  
<sup>46</sup> "(...) y no ay duda que se hallan provehidos los 15 Pobladores Suficientemente, y que le quedan al Dueño bastantes tierras fuera delas enfeudadas para ir llamando la atencion á otros partidarios para el aumento de la población". AMA. Arm. 12, Lib. 64, fs. 282-282 vto. Cifrado en GIMENEZ LOPEZ, E. (1981): Op. Cit., p. 135.

<sup>47</sup> GIL OLCINA, A. y CANALES MARTINEZ, G. (1988): Op. Cit., p. 260-264.

2.1.-La cancelación de los establecimientos enfiteúuticos y la consolidación de la plena propiedad de la tierra.

Una circunstancia de la mayor trascendencia para la conservación del patrimonio rústico de los Burgunyo es el proceso de reversión del dominio útil de las propiedades censidas al propietario del dominio directo. El abandono de los convenios de establecimiento y la aplicación del derecho de comiso sobre las tierras establecidas fueron los procesos a través de los cuales se logró la consolidación de dominios en manos de D. Pedro Burgunyo y sus sucesores.

Si bien las primeras escrituras de renuncia y transpaso del dominio útil a D. Pedro Burgunyo y Juan datan de 1787, podría señalarse una etapa previa en la que ya se insinúa el proceso que tendrá lugar posteriormente. En efecto, ya en 1780 se produce el primer caso de transferencia de las suertes establecidas en 1779. Juan Martinez de Juan, al que le fue cedida "la parte nona" de las tierras de la Vallonga en 1779, la transpasó a su vez en 7-II-1780, tras obtener la licencia del dueño del lugar y realizar el nuevo enfiteuta el reconocimiento de lo acordado en la carta de población, a Vicente Torregrosa, labrador y vecino de la partida del Raspeig; quien, a su vez, volvería a transferirla en 1781.

Nuevas cesiones de los contratos de establecimiento volvieron a efectuarse en este último año, tanto en las Atalayas como en la Vallonga. En total, se han confirmado, como puede observarse en el Cuadro 1, nueve operaciones de este tipo, cinco

CUADRO I. CESIONES DE CONTRATOS DE ESTABLECIMIENTO ENTRE ENFITEUTAS EN LA VALLONGA DE BURGUNYO

FECHA	TRANSFERENTE	VECINDAD	ADQUIRENTE	VECINDAD	SUPERFICIE (TAHULLAS)	LOCALIZ.	COMPENSACIÓN ECONÓM.* (LIBRAS, SUELDOS, DIN.)	COMPENSACIÓN ECONÓM.** (LIBRAS, SUELDOS, DIN.)
1780	Juan Martinez	Alicante	Vicente Torregrosa	Pda. Raspeig	280	Vallonga		
1781	Vicente Torregrosa	Pda. Raspeig	José Torregrosa Andrés Torregrosa	Villafranqueza Pda. Raspeig	280	Vallonga	86,,16,,	87,,14,,
1781	Juana M <sup>a</sup> Tari (vda. F. Candela)		José Pastor Francisco Pastor	Pda. Raspeig	1/4 parte de Atalayas	Atalayas	37,, 6,, 7,,	22,,13,, 5,,
1781	Clara Espí (vda. J. Brotons)	Pda. Vallonga	Antonio Pérez	Alicante	1/2 de la 15 <sup>a</sup> suerte	Vallonga	20,,	
1782	Clara Espí (vda. J. Brotons)	Pda. Vallonga	Francisca Mena (vda. M. Mas)	Pda. Vallonga	1/2 de la 15 <sup>a</sup> suerte	Vallonga	84,,	
	Blas Candela	Pda. Vallonga	Mateo Mas	Pda. Vallonga	186	Vallonga		
1797	Mateo Mas	Pda. Vallonga	José Soler de José	Pda. Vallonga	186	Vallonga		
1797	Andrés Torregrosa	Pda. Raspeig	Juan Torregrosa	Pda. Raspeig	112	Vallonga		
	José Torregrosa	Villafranq.	José Pastor	Pda. Raspeig	160	Vallonga		

\* que recibía D. Pedro Burgunyo y Juan en pago de las deudas con él contraídas por los transferentes

\*\*que recibía el transferente de los nuevos enfiteutas, como compensación de los cultivos y de las labores agrícolas realizadas

FUENTE: AHPA. Protocolos Notariales. Elaboración Propia.

en la Vallonga y una en las Atalayas, datadas entre 1780 y 1782<sup>48</sup>. Con posterioridad a esta fecha se han tenido noticias sobre otros tres casos, dos de ellos en 1797, gracias a las referencias contenidas en las escrituras de renuncia de los establecimientos.

Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, las series notariales empleadas, localizadas en la sección de protocolos del Archivo Histórico-Provincial de Alicante<sup>49</sup>, no están completas, o bien no se ha obtenido de su análisis los resultados apetecidos; por lo tanto, no se descarta la posibilidad de que se produjera un número más elevado de transferencias de tierras censidas. No obstante, esta deficiencia tiene más trascendencia en el proceso posterior de reversión de las propiedades al dueño del dominio directo. Hay que señalar que, aunque esa falta de información ha podido ser superada en parte, gracias a las referencias y alusiones de escrituras posteriores, se carece totalmente de información respecto a tres de los quince establecimientos realizados en la Vallonga.

---

<sup>48</sup> aunque se carece de datos para uno de los trasposos efectuados en la Vallonga, podría afirmarse que este hecho se produjo antes de 1789, año en que fue cedida en aparcería.

<sup>49</sup> notarios Patricio Montllor (1777-1793), Luis Antonio Navarro (1783-1807), Francisco Aracil (1794-1810), y Antonio Hernández y Soler (1811-1817).



Este primer tipo de operaciones fueron realizadas en su mayor parte por labradores residentes en zonas muy próximas a la Vallonga (el término de Alicante -preferentemente la partida del Raspeig-, y, en un caso, Villafranqueza.) o en este mismo lugar; abarcando la totalidad de la suerte inicialmente otorgada o solamente una fracción de ésta. El nuevo enfiteuta debía compensar al que renunciaba al establecimiento por las faenas agrícolas realizadas hasta la fecha y por el valor de los cultivos existentes, y asumir las deudas contraídas por éstos con el fundador del lugar. Hay casos en que la cuantía de las deudas determinaba la percepción de la cantidad en metálico solamente por el señor. Probablemente, en estos pagos iban ya incluidos los derechos a satisfacer al señor por la transmisión del dominio útil. No se hace, en estas escrituras, referencia a ninguna otra cantidad convenida por la enajenación de las tierras establecidas; las condiciones en las que se realiza la cesión motivarían esta circunstancia.

Resta añadir que no ha sido posible estimar la superficie total objeto de estas transacciones, pues ése es un dato que no precisan las escrituras (gracias a referencias posteriores ha podido establecerse en algún caso). Si puede asegurarse que en todos los casos (exceptuando las 280 th. que fueron transferidas, en distinta proporción, a Juan Torregrosa y Jose Pastor) se produjo la transmisión íntegra de la superficie originariamente establecida.

El proceso de reversión del dominio útil de las tierras establecidas a los Burgunyo comienza más tempranamente en el caso de las Atalayas que en el de la Vallonga. En 1787 se puede verificar ya, en el caso de las Atalayas, la total consolidación de ambos dominios en las personas de D. Antonio M<sup>a</sup> y D. José Burgunyo y Juan -a quienes había sido adjudicada la finca en la división de los bienes de la herencia de su madre D<sup>a</sup>. Margarita Juan y Santacilia<sup>50</sup>-, y como resultado de la conjunción de dos factores, la cancelación de las escrituras de establecimiento por los enfiteutas y la aplicación del derecho de comiso sobre las tierras censidas. Factor, éste último, que no ha sido detectado en la Vallonga.

La inobservancia de las condiciones de establecimiento determinó la aplicación de esta pena sobre dos de las suertes establecidas (en 1785 en uno de los dos casos). La renuncia de

-----

<sup>50</sup> La finca fue adquirida inicialmente por D. Pedro Burgunyo y Juan a su madre, en la misma fecha en que otorgó la escritura de establecimiento a Josef Catalá, Vicente Ferrer, Francisco Pastor y Francisco Candela (pasando sus tierras a su muerte a manos de José y Francisco Pastor), todos labradores y vecinos de Alicante. Al año siguiente, no habiendo satisfecho D. Pedro la cantidad acordada en la escritura de venta, y ya fallecida su madre, cedió los derechos que tenía sobre la propiedad, reincorporándola al cuerpo de bienes de la herencia materna, aunque manteniendo sin ninguna variación los contratos enfiteúticos. Posteriormente fue objeto de varias transacciones entre varios miembros de la familia Burgunyo. Fue adquirida, en primer lugar, por D<sup>a</sup>. Antonia Burgunyo y Juan a sus hermanos D. Antonio M<sup>a</sup>. y D. José Burgunyo, por un precio de 8000 Libras, el 12-X-1787; a quienes la volvió a retrovender en abril de 1790. Cinco años más tarde fue cedida por D. Antonio M<sup>a</sup>. a su hermano D. Francisco Burgunyo. Finalmente fue inscrita en el Registro de la Propiedad por D. Juan Bautista Lafora Caturla tras haberla adquirido de D. Juan Bautista Bassecourt y Baciero, quien la heredó de su padre D. Andrés M<sup>a</sup>. Bassecourt y Burgunyo.

derechos sobre el resto de las tierras otorgadas en enfiteusis se realizó en octubre de 1787, una vez obtenido el permiso de D. Pedro Burgunyo y Juan. En estas escrituras no se precisa ninguna cantidad en metálico como compensación al enfiteuta, mencionando como única causa la inconveniencia, para este último, de continuar con el convenio.

Esta ventajosa recuperación del dominio útil por el propietario del dominio directo no tiene paralelo en el resto de señoríos comprendidos en el área de estudio en los que la enfiteusis es el régimen de tenencia predominante. Exceptuando los casos en los que el señor ha perdido toda posibilidad de consolidar los dos dominios (Agost, Villafranqueza), la única vía para conseguir la reversión del dominio útil y acceder a la plena propiedad de la tierra ha sido su adquisición al enfiteuta, a veces precedido de la utilización del derecho de fadiga. Esta ha sido la trayectoria seguida por el Marques del Bosque en Busot y Aguas de Busot, con más fortuna en el segundo caso.

De todos modos, el escaso éxito del establecimiento de las Atalayas (cuyas causas serán analizadas más tarde), pues no se prolongó durante más de ocho años, no favoreció la permanencia del enfiteuta en la tierra que le había sido cedida en enfiteusis, y por lo tanto la génesis de otro tipo de planteamientos y reivindicaciones.

Tampoco el establecimiento de la Vallonga conoció mejor suerte, pues no tuvo una vigencia superior a los treinta y cinco años. El proceso de reversión fue más tardío y de mayor duración, finalizando hacia 1812 (ver cuadro II). Es más problemático

CUADRO II. REVERSIONES DEL DOMINIO UTIL DE LAS TIERRAS ESTABLECIDAS EN LA VALLONGA

FECHA	TRANSFERENTE	VECINDAD	ADQUIRENTE	SUPERFICIE (TH)	ENFITEUTA ORIGINAL	SUPERF. ORIGINAL	TIPO TRANSF.
1808	Jaime y Josefa Palomares	Pda. Bacarot	Pedro Burgunyo y Juan	118	Jaime Palomares	180	herencia
1809	Tomás Llogregat	Pda. Vallonga	Pedro Burgunyo y Juan	92	Antonio Soler	184	herencia
1810	Alejandro Torregrosa	Pda. Vallonga	Pedro Burgunyo y Juan	140	José Torregrosa*	280	herencia
1810	Antonia Palomares	Pda. Vallonga	Pedro Burgunyo y Juan	60 (casa)	Jaime Palomares	180	herencia
1810	Vicente, Rita y Tomasa Soler	Pda. Vallonga	Pedro Burgunyo Y Juan	152	Antonio Soler	152	herencia
1812	Antonio Catalá	Pda. Vallonga	M <sup>a</sup> Josefa Burgunyo	60 (casa)	Matías Asnar	120	herencia
1812	Tomasa Asnar	Pda. Vallonga	M <sup>a</sup> Josefa Burgunyo	60	Matías Asnar	120	herencia
1812	Angela y Josefa Brotons	Pda. Vallonga	M <sup>a</sup> Josefa Burgunyo	48	Martín Brotons	48	herencia
1812	José Aracil	Pda. Vallonga	M <sup>a</sup> Josefa Burgunyo	80	Luis Villanueva	80	herencia
1812	Vicente Soler de Antonio	Pda. Vallonga	M <sup>a</sup> Josefa Burgunyo	92 (casa)	Antonio Soler	184	herencia
1812	José Pastor	Pda. Raspeig	M <sup>a</sup> Josefa Burgunyo	160 (casa)	José Torregrosa	160	venta
1812	José Soler	Pda. Vallonga	M <sup>a</sup> Josefa Burgunyo	186	Mateo Mas**	186	venta
1812	Vicente Pastor	Pda. Raspeig	M <sup>a</sup> Josefa Burgunyo	41	José Pastor	41	herencia
1812	Juan Torregrosa	Pda. Raspeig	M <sup>a</sup> Josefa Burgunyo	112	Andrés Torregrosa*	280	venta

\* Las 280 th. les fueron transferidas por V. Torregrosa, quien las había adquirido de uno de los primeros enfiteutas en 1780.

\*\* Le fueron transferidas previamente por uno de los primeros enfiteutas al poco tiempo de su establecimiento.

FUENTE: Elaboración propia. AHPA. Protocolos Notariales

establecer el momento de su inicio, pues aunque no han sido halladas escrituras de renuncia a los establecimientos y de cesión de las propiedades censadas a D. Pedro Burgunyo y Juan anteriores a 1808, si existe constancia de al menos una cancelación del contrato enfiteútico en fecha más temprana, puesto que en 1789 una de las suertes iniciales fue cedida en aparcería por D. Pedro Burgunyo.

Ninguno de los pobladores originarios -que no eran jornaleros sin recursos, sino propietarios de tierras, en mayor o menor medida<sup>51</sup>- figura en estas escrituras. Los otorgantes de las escrituras de cesión detentan el dominio útil de la tierra a través de transmisiones hereditarias de forma predominante -pues solamente en tres ocasiones se ha accedido a él mediante compra-, transfiriéndose, en más de la mitad de las ocasiones, de modo íntegro la superficie inicialmente establecida. Una gran mayoría son vecinos de la Vallonga; y generalmente residen fuera (principalmente en el Raspeig) aquellos que han adquirido las tierras o han heredado una porción del establecimiento original. Este hecho supone una contravención de la obligatoriedad de residencia determinada por la carta de población, y parece que se ajusta a la opinión expresada en el informe municipal, que recomendaba su carácter simplemente transitorio.

-----

<sup>51</sup> Así se afirma en el informe municipal: "Que los Partidarios en quienes se han dividido las tierras no son pobres Jornaleros de aquella inmediación, si vezinos de distintas partes, y aunque ai uno, ó otro de la Partida de la Vallonga, ó cierra de Sancho, es dilatada, gosan, y posehen tierras propias, ademas de las enfeudadas, y tienen su apero para la labor de sus tierras señaladas (...)".

Es interesante destacar, en cualquier caso, la rapidez con que se concluyó el proceso, pues la mayor parte de los establecimientos se cancelaron en un periodo no superior a 5 años. Pueden distinguirse dos etapas en este corto proceso; la diferenciación entre ambas vendría marcada por dos hechos, la abolición del régimen señorial decretada el 6-VIII-1811 por las Cortes de Cádiz, al incorporar a la nación todos los señoríos jurisdiccionales de cualquier clase y condición, y el cambio de titularidad en la posesión del dominio directo, como consecuencia del fallecimiento de D. Pedro Burgunyo y Juan el 9-IX-1811, y la sucesión del vínculo fundado por D. Pedro Burgunyo y Remiro en la persona de D<sup>a</sup>. Josefa Burgunyo y Burgunyo, sobrina de D. Pedro.

Como se puede observar en el cuadro III, durante la segunda etapa se produce una mayor concentración de reversiones del dominio útil; aunque, sin embargo, la superficie afectada resulta menor de lo que en teoría debiera corresponderle. La explicación a este hecho reside en la mayor superficie media de los establecimientos cancelados en la primera etapa (112,8 tahullas frente a 93,22 th.).

CUADRO III<sup>52</sup>

FECHA	SR. DIRECTO	SUPERF.(th)	%	N <sup>o</sup> REN.	%
1808-1810	Pedro Burgunyo	564	40,20	5	35,71
-----					
1818	M <sup>a</sup> Josefa Burgunyo	839	59,80	9	64,29
-----					
TOTAL		1.403	100,00	14	100,00

Algunas de las razones aducidas por los enfiteutas para la cancelación de los establecimientos son comunes a ambas etapas. En todas las escrituras halladas se hace referencia a la crítica situación de la época y a la penosa situación personal de los cultivadores, que les imposibilita trabajar las tierras establecidas y cumplir las condiciones estipuladas. El siguiente fragmento de una escritura de cesión lo refleja con bastante claridad: "(...) experimentando el concurrente la calamidad delos

-----

<sup>52</sup> El cuadro se ha elaborado a partir de los datos disponibles, por tanto, se ha de tener en cuenta que, debido a la carencia de información sobre cinco de las suertes inicialmente establecidas (en tres casos esa carencia es absoluta), los resultados obtenidos corresponden solamente a las diez restantes. El hecho de que aparezca un número superior de renunciaciones se explica en función del fraccionamiento de las suertes iniciales por razones hereditarias. Es necesario matizar también, que no en todos los casos han revertido las superficies originales, además de que sólo en algunas ocasiones se incluye la cabida de los solares establecidos en las estimaciones superficiales.

tiempos sin olvidar la triste y lastimosa situación en que se encuentra motivo de no poder por Termino alguno, Cultivar dicha tierra, consistente en los insinuados 23 jornales (...), mayormente quando en el día se hallan abandonados enteramente por las arrambladas de las abenidas, muchos portillos, y la mayor parte dela Tierra yerma por espacio de dies años, havia suplicado al propio Señor D. Pedro Burgunyo le relevase de la obligacion a que se hallava constituhido (...), á cuya justa solicitud havia condescendido por las causas que anteriormente quedava hecha explicacion, con tal de que realise la oportuna Escritura de renuncia y transpaso, (...)"<sup>53</sup>. También se menciona el fuerte endeudamiento contraído con el señor del lugar.

Las practicadas durante 1812 aluden a una nueva razón, estrechamente vinculada al cambio de titularidad y, probablemente, a las nuevas condiciones introducidas por el decreto de 6-VIII-1811, de modo que la nueva poseedora del dominio directo podría haber ejercido una mayor presión sobre sus enfiteutas (basada en el fuerte endeudamiento contraído con ella y su antecesor, acumulado de años anteriores) para conseguir la cesión de las suertes establecidas y recobrar la plena propiedad de la tierra. Esta razón viene expresada en los siguientes términos: "(...); experimentando que por razón de las actuales criticas circunstancias y atrasos en que se halla por la falta de cosechas, no puede en modo alguno continuar el cumplimiento de lo

---

<sup>53</sup> AHPA. Protocolos Notariales de Francisco Aracil. P. 94, fs.47-49.



pactado en la relatada Escritura (de establecimiento), y ha practicado hasta ahora: Ha tratado con D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Josefa Borgunyo y Borgunyo (...) como heredera del citado Sr. D. Pedro, y actual posehedora de los vinculos y mayorasgos que este disfruto, el cederle y renunciar á su favor el derecho que tiene el compareciente sobre las narradas tierras; (...); restituyéndolos como los restituye á la susodicha no tan solo por las razones expuestas, si tambien por reconocer no tenia facultades suficientes el mencionado Sr. D. Pedro para imponer el derecho de enfiteusis sobre una posesion vinculada qual es la heredad de la Vallonga y tierras Expresadas, y por lo mismo se las restituye libremente, y en los propios términos con que las poseyó el susodicho Borgunyo."

Las causas del fracaso de los establecimientos y de la consiguiente consolidación de dominios en manos del propietario pueden intuirse en los fragmentos anteriormente comentados. No cabe la menor duda de que el fuerte endeudamiento de los enfiteutas posibilitó el desarrollo de este proceso, con un favorable resultado para el dueño del lugar, quien recuperaba sus tierras sin realizar desembolsos a cambio de la cancelación de las deudas (aunque en ningún momento se menciona la palabra venta ni cantidad en metálico alguna), en un momento en que las reivindicaciones de los enfiteutas de otras zonas de señorío empezaban a disponer de un nuevo marco legal más acorde con la defensa de sus intereses, y empezaba a generalizarse la oposición abierta del campesinado enfiteuta contra las exigencias señoriales.

Las raíces de este endeudamiento podemos encontrarlas en la propia dureza de las condiciones de población, junto a la crítica situación de la época, consecuencia de la serie continuada de malas cosechas, ante los avatares meteorológicos, y las dificultades introducidas por la guerra.

La dureza de las cláusulas de establecimiento (tomadas como ejemplo del recrudecimiento de la presión señorial en el siglo XVIII), especialmente en lo relativo a las particiones de frutos y al control de las actividades económicas del lugar, hacía difícilmente soportables sus exigencias por los enfiteutas; de modo que cualquier trastorno en las cosechas podría tener una grave repercusión, imposibilitando la satisfacción de las cargas estipuladas (hay que tener en cuenta las porciones de la cosecha que el campesino debía destinar para simiente del año siguiente, al pago de los impuestos reales y los censos en metálico y resto de derechos señoriales, y para satisfacer las necesidades básicas de su familia). Parece acertado suponer, además, que la dureza de estas condiciones impidiera la obtención por el enfiteuta de los excedentes monetarios suficientes para consolidar la propiedad del dominio útil.

En este sentido, diversos autores<sup>54</sup> han puesto de relieve la sucesión continuada de malas cosechas desde 1780, estrechamente vinculadas a un posible enfriamiento del clima, y a una mayor frecuencia de los periodos de sequía y de las

---

<sup>54</sup> ARDIT LUCAS, M. (1977): Op. Cit., pp. 79-87; PALOP RAMOS, J.M. (1977): Op. Cit., pp. 197-219.

inundaciones. Desde 1802 a 1805 se sucedieron una serie de años catastróficos, en los que el hambre (precedida por varios años de malas cosechas), la guerra y las epidemias actuaron conjuntamente<sup>55</sup>. Este grupo de variables negativas agravaría unas condiciones estructurales ya de por sí muy deterioradas por sus propias características, determinando el progresivo endeudamiento del campesinado, y, en algunos casos, el abandono del cultivo de parte de las tierras establecidas, con bastante antelación al momento de su devolución al propietario, como se pone de manifiesto en alguna de las escrituras de renuncia. Este último hecho podría actuar como factor decisivo en la recuperación del dominio útil por el propietario mediante la aplicación del derecho de comiso, aunque supondría una reducción del valor de las fincas, a la vez que mayores esfuerzos en el caso de plantearse una nueva puesta en explotación por el propietario.

Franch Benavent<sup>56</sup> describe un proceso similar en el caso de Aguas Vivas, donde el endeudamiento campesino (consecuencia de las malas cosechas) motivaría la venta de los bienes establecidos al convento como pago de deudas, dando origen a la desaparición de algunos enfiteutas y a la disminución de las propiedades de otros, a la vez que propiciaría, junto a la desigualdad de las concesiones y las subdivisiones hereditarias, el inicio de una cierta diferenciación económica entre los enfiteutas.

-----  
<sup>55</sup> ARDIT LUCAS, M. (1977): Op. Cit., p.86.

<sup>56</sup> FRANCH BENAVENT, R. (1980). Op. Cit., pp. 104-111.

No pueden olvidarse en esta exposición de causas los factores comentados anteriormente, como el cambio de titularidad y la nueva situación sociojurídica.

Resta mencionar un último hecho posiblemente relacionado con los sistema de explotación puestos en práctica posteriormente. Como se observa en el cuadro II, no se ha verificado una completa rescisión de los contratos de establecimiento en lo que atañe a los solares y viviendas; lo que podría implicar la permanencia de esos pobladores como arrendatarios, aparceros o simples jornaleros de plantearse la explotación directa por el propietario. Esta última situación es la que podría deducirse del comentario realizado por Madoz<sup>57</sup>.

## 2.2.-Otros sistemas de tenencia

D. Pedro Burgunyo y Juan recurrió también a otros sistemas de explotación indirecta -arrendamiento y aparcería- para la puesta en valor de sus tierras de la heredad de la Vallonga.

El único contrato de aparcería localizado ("heredad a partido") fue otorgado en 1789 a dos pobladores de la Vallonga<sup>58</sup>. La superficie cedida, de la que no se especifica cabida, había revertido a D. Pedro Burgunyo tras su establecimiento inicial en

-----  
<sup>57</sup> MADOZ, P.: *Diccionario geográfico-estadístico de España y sus posesiones de ultramar*. Madrid, 1846-50, Tomo IV, pp. 661.

<sup>58</sup> AHPA. Prot. Not. de Patricio Montllor. P. 1239, fs. 286 vto.-288.

1779 y su posterior traspaso a otro nuevo enfiteuta.

La duración del contrato fue fijada en 8 años, y las condiciones estipuladas reproducían algunas de las cláusulas comprendidas en las escrituras de establecimiento. La parte alícuota exigida en la partición de las cosechas es idéntica a las particiones contempladas en los establecimientos enfiteúticos: el  $\frac{1}{3}$  de todos los árboles (considerando también los frutales) y el  $\frac{1}{4}$  de toda especie de semillas, incluyendo la barrilla; que el "partidario" debía llevar a sus costas, libre de todo gasto y limpia, a casa del propietario. No coincide, sin embargo, con ninguna de las variantes de aparcería señaladas para el Campo de Alicante por Altamira<sup>59</sup> -por mitad en el arbolado y viñas en Busot, Aguas y otros pueblos de la Sierra;  $\frac{1}{2}$  del vuelo y  $\frac{1}{4}$  del suelo para el propietario, modalidad de terraje conocida como "cuarta", y dos tercios para el cultivador y uno para el propietario, conocida propiamente como terraje, en Campello-; y también presenta diferencias con el tipo de aparcería de mayor arraigo y difusión en los secanos el Bajo Segura, el terraje, en la que  $\frac{1}{7}$  es la partición más frecuente en sembradura, y por mitad en arbolado (existe algún ejemplo en el que el propietario retiene los  $\frac{2}{3}$ )<sup>60</sup>. Además, debía entregar,

-----  
<sup>59</sup> ALTAMIRA, R.: *Derecho consuetudinario y economía popular de la provincia de Alicante*. Facsimil, Instituto de Estudios "Juan Gil-Albert", Alicante, 1985, p. 26.

<sup>60</sup> En las aparcerías del Bajo Segura resulta también frecuente la compensación en metálico por el uso de las instalaciones anejas (particularmente almazaras), como también la entrega de adehalas, principalmente volatería, en fechas señaladas. GIL OLCINA, A. y CANALES MARTINEZ, G. (1988): *Op. Cit.*, pp. 64-65.

anualmente al propietario, en concepto de adehala, dos gallinas el día de Santo Tomás.

La preocupación por el adecuado mantenimiento y la mejora de la finca, de lo que se responsabiliza al aparcerero, están también presentes en el contrato. La obligación de cultivar las tierras a uso y costumbre de buen labrador, realizando las labores agrícolas necesarias y en los momentos oportunos, y la de plantar todos los árboles que deseara el propietario, facilitándole los pies (aunque sin poder arrancar ninguno sin su permiso), son una muestra de ello. Una cláusula similar que propicia, mediante imposiciones o incentivos, la expansión de una arboricultura de escasas exigencias hídricas, permite al profesor Gil Olcina matizar la condición de aparcerías a mejorar o transformar, y no simples aparcerías a partir, en el caso del Bajo Segura<sup>61</sup>.

Por último, correría de cuenta del cultivador el pago del equivalente y las contribuciones a la iglesia correspondientes a las tierras.

Este régimen de tenencia, poco frecuente y exclusivo de los secanos en el Campo de Alicante según E. Giménez, al que se acogían principalmente pequeños propietarios<sup>62</sup>, permite al propietario acceder a una parte importante de la cosecha, sin necesidad de ceder el dominio útil de sus tierras. La participación del propietario en los riesgos en el caso de malas cosechas

---

<sup>61</sup> GIL OLCINA, A. y CANALES MARTINEZ, G. (1988): Op. Cit., p. 65.

<sup>62</sup> GIMENEZ LOPEZ, E. (1981): Op. Cit., p. 130.

motivaba su preferencia por los labradores, en el secano, a la renta en metálico. Dada la coyuntura alcista de los precios del trigo de finales del s. XVIII y principios del s. XIX<sup>63</sup>, podría haber resultado al propietario más interesante que la percepción de una cantidad en metálico; sin embargo, la serie continuada de malas cosechas de este periodo pudo influir en el recurso más frecuente al sistema de arrendamiento, por el que el propietario se aseguraba la percepción de una renta fija.

El arrendamiento, más extendido en el regadío que en el secano, constituye la fórmula de tenencia indirecta de la tierra predominante en las propiedades de la nobleza y el patriciado urbano alicantinos<sup>64</sup>, aunque desde el s. XVIII desempeñan un papel relevante ciertas comunidades religiosas y la clase comercial<sup>65</sup>, tras invertir sus ganancias en tierra. Este sistema fue empleado también por los dueños de la Vallonga a finales del s. XVIII y principios del s. XIX y, probablemente, con mayor profusión que la aparcería.

A pesar de las dificultades generadas por los cambios de notario en la familia y la falta de series notariales completas, si se han localizado diversas escrituras de arrendamiento desde 1780 a 1812 que pueden ilustrar satisfactoriamente la cuestión.

-----  
<sup>63</sup> PALOP RAMOS, J.M. (1977): Op. Cit., pp. 197-220.

<sup>64</sup> GIMENEZ LOPEZ, E. (1981): Op. Cit., pp. 121-130.

<sup>65</sup> ALBEROLA ROMA, A. (1984): *Jurisdicción y propiedad ...*, p.280.

En su gran mayoría fueron otorgadas a pobladores de la Vallonga (hay verificada una única excepción, en un residente en La Cañada), y de sus apellidos (Soler, Llobregat, Aracil) parece deducirse un cierto parentesco con los enfiteutas de la heredad. La duración del contrato oscila entre los 4 y los 8 años, siendo 4 y 6 años los periodos de arrendamiento más frecuentes. Sólo se ha detectado un caso en el que se fije un tiempo de contrato de obligado cumplimiento (5 años) y otro opcional, con el acuerdo de ambas partes (2 años)<sup>66</sup>. En relación a este punto, se ha de señalar el incremento en la duración del arrendamiento en conexión con la mayor dimensión de la superficie arrendada, las obras de reparación y puesta a punto necesarias para reemprender la explotación y a las nuevas plantaciones de arbolado y viñas a realizar bajo la responsabilidad del arrendatario.

El pago de la renta anual fijada se establece en uno (Todos los Santos, Sto. Tomás Apostol o S. Miguel de Septiembre) o dos plazos (San Juan y Navidad, agosto y diciembre), predominando la primera modalidad. Su cuantía varía a tenor de la situación, calidad (siempre en secano) y extensión de la superficie arrendada, del estado de conservación y mantenimiento de la finca (que exigirá un esfuerzo u otro del cultivador para poder iniciar su cultivo), y de las labores de replantación de arbolado que debe asumir el arrendatario (no siempre le proporciona los pies el propietario). Estos dos últimos factores

-----  
<sup>66</sup> AHPA. Prot. Not. Francisco Aracil, P.94, fs. 248-250 vto.



se verán compensados con una reducción considerable del precio del arrendamiento en alguno de los primeros años de contrato, preferentemente.

Este es el caso contemplado en el arrendamiento convenido, en 1807, entre Carlos Campos, apoderado de D. Pedro Burgunyo y Juan, y Bautista Llobregat de Bautista<sup>67</sup> de 45 jornales (180 tahullas) de secano, parte plantados de algarrobos, olivos, almendros, higueras y viña, y parte campa, y una "casa de habitación", durante 6 años, en el que la renta anual estipulada ascendía a 100 Libras (a pagar el día de Todos los Santos), exceptuando el primer año, cuya cuantía no superaba las 50 Libras en compensación por las nuevas plantaciones que debería efectuar de vides e higueras.

En otras ocasiones, se le entregaba al arrendatario, por el valor de las reparaciones y obras de adecuación realizadas en la hacienda, una cantidad en metálico (según justiprecio de peritos), abonándole una porción todos los años<sup>68</sup> -descontada del cánon anual-, o bien combinando este sistema con la entrega de una cantidad inicial tras concluir estas labores; también se ha apreciado el empleo conjunto del descuento efectuado en uno de

-----

<sup>67</sup> AHPA. Prot. Not. de Francisco Aracil. P. 92, fs. 286-288.

<sup>68</sup> Este es el acuerdo al que llegaron Carlos Campos, apoderado de D<sup>a</sup> Josefa Burgunyo y Burgunyo, y Bautista Llobregat, en 1812, al establecer las condiciones de arrendamiento de 50 jornales de secano, parte de plantados y parte campa, durante 8 años, y 92 Libras de renta anual. A cambio de "iluminar y componer todas las vertientes de dicha hacienda", "tapar todos los Portillos que en el día hay en las citadas tierras y trixillar todos los bancales y regalladores", el propietario tendría que abonarle 256 pesos en total, 32 cada año. AHPA. Prot. Not. de Antonio Hernández y Soler, P.940, fs. 158 vto.-160.

los primeros años de arrendamiento y el abono de las reparaciones por el propietario<sup>69</sup>.

Las rentas de menor cuantía eran las satisfechas por el arrendamiento de 9 jornales (36 th.) en la Sierra de Sancho, limítrofes a la "Pinada" de la Vallonga; de peor calidad que las restantes, y cedidas en unas condiciones menos rigurosas<sup>70</sup>. El resto oscila entre las 60 y las 100 libras, en función de la superficie arrendada (entre los 40 y los 60 jornales -19,216 y 28,82 hectáreas<sup>71</sup> respectivamente-) y las posibilidades de aprovechamiento de los predios. La pensión anual más elevada era la percibida de un sector muy próximo a la casa principal y con acceso a la noria, lo que permitía la ubicación de la única zona detectada destinada al cultivo de hortalizas<sup>72</sup>. En este caso no se especifica la superficie objeto de arrendamiento, aunque se estima similar a las anteriores.

-----  
<sup>69</sup> En 1808, en el arrendamiento otorgado por Carlos Campos a Félix Soler de Antonio, se convenía el pago de una renta anual de 20 libras el primer año y 60 libras cada uno de los restantes por "encontrarse la mayor parte de dichas tierras incultas de algunos años y arruinadas por falta de cultivo". Además, se contemplaba, "por los perjuicios existentes de hierbas de raiz, portillos, márgenes y vertientes (...); y por todos los demás", el abonar a Soler 72 pesos, 13 sueldos y 4 dineros (38 pesos, 13 sueldos, 4 dineros al realizar las reparaciones, y 7 pesos cada uno de los cinco primeros años de arrendamiento -deduciéndolos del cánón anual- hasta completar la cantidad indicada). AHPA. Prot. Not. de Francisco Aracil. P.94, fs. 248-250 vto.

<sup>70</sup> Cultivar a uso y costumbre de buen labrador, no cortar leña de la Pinada para usos propios, realizando además una función de vigilancia de la misma, prohibir la pernoctación de cualquier cazador en la casa existente en las tierras, y entregar dos gallinas por Navidad al otorgante del arrendamiento.

<sup>71</sup> Representando la tahulla una superficie de 1201 m<sup>2</sup>.

<sup>72</sup> AHPA. Prot. Not. de Patricio Montllor. P.1234, fs. 240-242, y P.1242, fs. 246 vto.-248.

En los casos en que se ha verificado la renovación del arrendamiento, normalmente de la misma superficie de tierras, no se ha percibido, en un período de 10 a 12 años, ningún incremento de la renta anual estipulada, o, en cualquier caso, ha sido muy ligero (de 2 libras en el caso del arrendamiento de la parcela situada en la Sierra de Sancho). La falta de homogeneidad de las condiciones de los arrendamientos y de las tierras cedidas, además de la falta de información y de la carencia de series completas y más prolongadas, no permite analizar su evolución y determinar su incremento o depreciación en conjunto. De todos modos, la crítica situación coyuntural, y los repetidos años de malas cosechas pudieron influir manteniendo o moderando la cuantía de las pensiones, a la vez que provocar, en algún caso, un fuerte endeudamiento de los arrendatarios. En este sentido, es clarificador el ejemplo de Luis Fríes<sup>73</sup>, quien, en 1784, adeudaba, de arrendamientos anteriores, 369 libras 2 sueldos; deuda que en 1792, y por el mismo motivo, ascendía a 458 libras 2 sueldos y 6 dineros (la renta anual durante ese periodo de tiempo se había mantenido en 100 libras), y que el arrendatario se comprometía a satisfacer durante los dos primeros años del nuevo arrendamiento, al margen de las correspondientes pensiones anuales.

-----  
<sup>73</sup> AHPA. Prot. Not. de Patricio Montllor. P.1234, fs. 240-242 y P.1242, fs. 246 vto-248.

Independientemente de los pagos anuales en metálico, el arrendatario se veía obligado a entregar, como una especie de adehalas, algunas piezas de volatería, generalmente dos gallinas, por Navidad o Santo Tomás Apostol, aunque esta condición no se especifica en todos los contratos de arrendamiento. Alberola Romá<sup>74</sup> ha señalado también la exigencia de una cierta cantidad de frutos o grano a cuenta del arriendo, o su equivalente en dinero, para asegurar el cobro de los cánones anuales, contemplada en algunos contratos de arrendamiento durante los s. XVII y XVIII en el término alicantino.

Además del tiempo de duración del contrato y la cuantía de la renta anual, las escrituras de arrendamiento incluyen una serie de condiciones destinadas a garantizar la percepción de las pensiones y el adecuado mantenimiento de la finca en manos del cultivador, a la vez que permiten al propietario ejercer una cierta planificación sobre las labores agrícolas (nuevas plantaciones por ejemplo); todo ello encaminado a lograr la mejora de la propiedad, contribuyendo el arrendatario a la amortización de los gastos. Algunas de estas condiciones han sido perfiladas con anterioridad, mencionándose también el tipo de compensaciones que recibía el arrendatario.

Una cláusula común a muchos de los contratos de arrendamiento de la antigua gobernación de Alicante<sup>75</sup> presente también en los otorgados en la Vallonga, aunque no de forma

-----  
<sup>74</sup> ALBEROLA ROMA, A. (1984): *Jurisdicción y propiedad* ..., p.283.

<sup>75</sup> GIMENEZ LOPEZ, E. (1981): *Op. Cit.*, p.129; ALBEROLA ROMA, A. (1984): *Jurisdicción y propiedad* ..., p. 288.

generalizada, es la que trata de asegurar la percepción del cánón anual a pesar de los posibles desastres agrícolas por causa de las condiciones climáticas o de cualquier otro factor (guerra, peste, langosta, ...), desechando la disminución de los precios de arriendo. La compensación por los barbechos y estercolados existentes en tierra campá (no en plantados) a Bautista Llobregat de Bautista<sup>76</sup>, en el caso de que no pudiese sembrar el último año de arrendamiento por falta de agua y no quisiese iniciar otro nuevo contrato, constituye la única excepción detectada en la Vallonga.

Entre las responsabilidades que el arrendatario asume respecto al tratamiento del que ha de ser objeto la finca, la más común, presente incluso en los arrendamientos más sencillos, es la de cultivar a uso y costumbre de buen labrador. A ella se añaden otra serie de obligaciones como realizar las labores precisas y en los momentos oportunos, "dar las rejas" necesarias a las tierras, cavar los troncos de los árboles cuando

---

<sup>76</sup> AHPA. Prot. Not. de Francisco Aracil, P.92, fs. 286-288.

se labre, "majencar y amorgonar" las viñas<sup>77</sup>, tapar márgenes y portillos para posibilitar el riego de las tierras y árboles, "tregillar" (traillar) o allanar los bancales y "regalladores", dar los correspondientes barbechos, y "birbar" o arrancar las malas hierbas de los sembrados entre otras. El escardado de los árboles debía realizarse sólo "a sus debidos tiempos", avisando antes al propietario, excepto el último año de arrendamiento en el que no podrá tocarlos el cultivador<sup>78</sup>.

El arrendatario debía ocuparse, además, de realizar el acondicionamiento necesario de las vertientes y boqueras, dejándolas corrientes (funcionales) para el riego, y encargarse también de su mantenimiento posterior. La reparación y adecuación de la acequia vertiente principal corría inicialmente de cuenta del dueño, quedando bajo la responsabilidad del labrador su conservación<sup>79</sup>. De éste dependía también el cuidado

-----  
<sup>77</sup> Magencar o mantornar (binar, aparar) consiste, de modo general, en dar la segunda labor de arado a los campos, cuando las plantas se encuentran ya algo crecidas, a fin de eliminar las malas hierbas existentes entre ellas. Más concretamente consiste en hacer la segunda cava en las viñas. El amurgonamiento o amugronamiento supone realizar el acodo de las vides para renovar las cepas viejas, débiles o muertas. La práctica de los "colgats y capficats" (acodos y renuevos), de gran tradición entre los rabassers catalanes, fue prohibida por la Audiencia de Cataluña en el siglo XVIII (aunque durante poco tiempo), al alegar los propietarios de tierras su ilegitimidad como medio de alargar indefinidamente la duración de la viña, y, por ende, del contrato de rabassa morta. BALLCELLS, A.: *El problema agrario en Cataluña. La cuestión rabassaire (1890-1936)*. Servicio de Publicaciones Agrarias, Ministerio de Agricultura, Madrid, 1980, 2ª Ed., pp. 37-44.

<sup>78</sup> AHPA. Prot. Not. de Francisco Aracil. P.94, fs. 248-250 vto.

<sup>79</sup> AHPA. Prot. Not. de Francisco Aracil. P.94, fs.248-250 vto.

de la noria, costeando las reparaciones inferiores a 5 sueldos; si los gastos excedían esa cantidad eran asumidos por el propietario<sup>80</sup>.

Por último se establecía la obligación de devolver la finca en el mismo estado en que le había sido facilitada al comienzo del arrendamiento. Con esta finalidad, se exige en todos los arrendamientos dejar el "alfarrás" entregado al iniciar el arrendamiento (estiércol, barbechos viejos de dos rejas, zonas de rastros de barrilla, ...) o bien satisfacer su importe en metálico, convenientemente valorado por peritos, el último año de arrendamiento. La importancia del alfarrás varía de unos arrendamientos a otros<sup>81</sup>, y, generalmente, el que deja el arrendatario al finalizar el arriendo no debe sobrepasar el convenido al principio más que en un cierto límite. El propietario abonaba el exceso hasta una cierta cantidad; el resto quedaba a beneficio del dueño sin ninguna compensación para el cultivador. Por este motivo, en algunas ocasiones, se realizaba un inventario de los barbechos, sembrados y cantidad de estiércol disponibles en la finca.

-----  
<sup>80</sup> AHPA. Prot. Not. de Patricio Montllor. P.1234, fs. 240-242, y P.1242, fs. 246 vto.-248.

<sup>81</sup> Por ejemplo 715 capazos de a 2 barchillas cada uno de estiércol, y en disposición de destinarlo al bancal para hacer barrilla, 7 tahullas de estercolado de rastrojo de barrilla y 465 r<sup>s</sup> v<sup>n</sup> en barbechos viejos de dos rejas en un caso, o el entregado por valor de 44 libras y 10 sueldos (barbechos de 1 y 2 rejas, estercolados, y 8 carros de estiércol) en otro. AHPA. Prot. Not. de Francisco Aracil. P.92, fs. 251 vto.-254, y P.94, fs.248-250 vto.

Por lo que respecta al aprovechamiento de las utilidades rústicas, se prohibía a los arrendatarios arrancar cualquier árbol que se secase sin avisar antes al dueño, correspondiendo a éste el tronco, y las ramas al arrendatario; así como cortar leña de la Pinada de la vallonga para usos propios. En uno de los arrendamientos se permite al labrador el construir una era de pan trillar, proporcional a la hacienda, con el compromiso de abonarle su valor al finalizar el arrendamiento. Un caso curioso lo constituye el acuerdo al que llegan Félix Soler y Carlos Campos<sup>82</sup>, por el que el propietario se reserva la facultad de vender las hierbas de todas las tierras para pastos de ganado, correspondiendo a Soler una de las dieciseis partes en las que se dividirá el producto obtenido por ello, que le será descontada anualmente del precio del arrendamiento.

Por otra parte, el arrendador ejercía un cierto control sobre las mejoras a realizar en la finca, mediante las cláusulas del contrato que le permitían fijar el número de nuevas plantaciones (o la replantación de las existentes), el tipo y calidad del arbolado, y la zona destinada a esas labores. Las disposiciones más frecuentes son las que hacen referencia a la viña, tanto respecto a la replantación de la viña existente o la que faltase al majuelo como al establecimiento de nuevas cepas (en zonas ya roturadas, o bien por roturar -corriendo a cargo del arrendatario, en este caso, las labores de acondicionamiento de la tierra-), indicándose en unos casos la zona a ocupar por la

-----

<sup>82</sup> AHPA. Prot. Not. de Francisco Aracil, P.94, fs. 248-250 vto.



viña, y en otros el número de cepas a plantar. El plazo señalado para la realización de estas tareas oscila entre los 2 y los 3 primeros años de arrendamiento. En compensación, el arrendatario optaba a un descuento en la cuantía de la primera renta anual, o bien a una cantidad en metálico en el último año de cultivo, siempre y cuando, en este último caso, las cepas tuvieran una edad determinada (normalmente 3 años al finalizar el arrendamiento). Así, por ejemplo, Félix Soler recibiría 15 pesos por cada uno de los dos millares de cepas plantados en una zona no ocupada con anterioridad por este cultivo<sup>83</sup>; mientras Bautista Llobregat obtenía una cantidad menor, 12 pesos por cada uno de los tres millares fijados<sup>84</sup>.

En cuanto al resto del arbolado (algarrobos, olivos, almendros e higueras), el propietario fijaba el número de unidades a plantar, anualmente o bien durante una serie de años, aunque no siempre especificando la clase de árbol. El arrendatario debía plantarlos, ciudarlos y regarlos, recibiendo a cambio una cantidad en metálico por cada árbol (20 reales vellón si se trata de algarrobos u olivos, y 4 por cada higuera o almendro enramado<sup>85</sup>) solamente cuando el arrendador no le hubiese proporcionado los pies (y siempre que no se le hubiese descontado ya del precio del arrendamiento).

-----  
<sup>83</sup> AHPA. Prot. Not. de Francisco Aracil, P.94, fs. 248-250 vto.

<sup>84</sup> AHPA. Prot. Not. de Antonio Hernández y Soler. P.940, fs. 158 vto.-160.

<sup>85</sup> AHPA. Prot. Not. de A. Hernández, P.940, fs. 158 vto.-160.

Este sistema de tenencia indirecta no hacía necesaria la cesión del dominio útil de la tierra al cultivador, a la vez que garantizaba al propietario la oportunidad de revisar las rentas anuales según las fluctuaciones de los precios. Esta será la formula elegida, con exclusividad, por D. Pedro Burgunyo y Juan y D<sup>a</sup> Josefa Burgunyo y Burgunyo para la explotación de las fincas que, de menores dimensiones que la Vallonga y, en su mayor parte, de regadío, poseían dentro y fuera del término de Alicante, principalmente en el Bajo Segura (huertas de Catral y Almoradí), donde el arrendamiento a corto plazo tenía gran arraigo y difusión en regadío<sup>86</sup>.

La información manejada es bastante limitada, sobre todo en el caso de D<sup>a</sup> Josefa Burgunyo, pues las escrituras localizadas corresponden solamente a las fincas procedentes de las herencias materna y paterna, y no a las que adquiriría posteriormente al heredar el vínculo que poseía D. Pedro Burgunyo. Además, tampoco constituyen estos predios la parte fundamental de los bienes amayorazgados por D. Pedro Burgunyo y Remiro.

El periodo de arrendamiento más frecuente era de 6 años, detectándose también algún caso en que se elevaba hasta 8 o bien no superaba los 4 años (esto último solamente comprobado en los arrendamientos, otorgados por D<sup>a</sup> Josefa Burgunyo, de una

---

<sup>86</sup> GIL OLCINA, A. y CANALES MARTINEZ, G. (1988): Op. Cit., pp. 60-64.

heredad situada en el Cabo de la Huerta<sup>87</sup>).

Los arrendatarios residen en los municipios en los que se ubican las fincas (Almoradí y Catral), o bien en otros próximos a ellas (Dolores o San Juan según los casos); observándose una cierta continuidad de los mismos individuos, o de otros vinculados a ellos por algún tipo de parentesco, en los arrendamientos. La cesión de una de las fincas de la Huerta de Almoradí a José Nigues, con toda probabilidad, durante 18 años<sup>88</sup> (1782-1800), o la de 104 tahullas, también en Almoradí, a Félix Gomez durante más de 14 años<sup>89</sup> (con anterioridad a 1782 -existe constancia de ello por la referencia en esta escritura a un arrendamiento anterior- y hasta su muerte en 1796), pasando posteriormente a manos de un familiar suyo, quien la retuvo, por lo menos, hasta 1808<sup>90</sup>, constituyen un ejemplo de este hecho.

La extensión de las fincas arrendadas, que oscila entre 49 y 104 tahullas, destacando la situada en el término de Catral por sus mayores dimensiones -660 tahullas-, en combinación con las relativas disposiciones hídricas para riego, permitirían la obtención de una producción suficiente para mantener al campesino y satisfacer con un cierto desahogo las rentas anuales al propietario. Indicativo de este hecho es la ausencia de

-----  
<sup>87</sup> AHPA. Prot. Not. de Francisco Aracil (P.90, fs. 90 vto.-92) y Antonio Hernández Soler (P.940, fs. 122-123 vto.

<sup>88</sup> AHPA. Prot. Not. de Patricio Montllor (P.1231, fs. 53 vto-57 vto y P.1237, fs. 25 vto-26) y Luis Antonio Navarro (P.1314, fs. 12-17).

<sup>89</sup> AHPA. Prot. Not. de Patricio Montllor, P.1231, fs. 50-53 vto. y P.1239, fs. 135 vto.-142 vto.

<sup>90</sup> AHPA. Prot. Not. de Luis A. Navarro, P.1315, fs. 8 vto.-18.

referencias, en los contratos de arrendamiento, a deudas contraídas con el dueño. La única excepción la constituye Martín Rodríguez, quien, en 1774, en la renovación del arrendamiento que le había sido otorgado en 1768 por D. Pedro Burgunyo, se comprometía a satisfacer en el último año del nuevo arrendamiento las cantidades adeudadas en el anterior<sup>91</sup>; esta situación no vuelve a repetirse con su sucesor.

Las fincas de menores dimensiones, con una superficie en torno al medio centenar de tahullas, pertenecen a D<sup>a</sup> Josefa Burgunyo, encontrándose entre ellas la única propiamente de secano (situada en el Cabo de la Huerta).

El cánón anual se satisface en metálico, generalmente en dos plazos, uno en verano y otro en invierno (San Juan y Sto. Tomás, 31 de julio y 31 de diciembre, 16 de julio y Sto. Tomás, 31 de julio y Sto. Tomás, agosto y diciembre). Las únicas excepciones las constituyen el pago por mensualidades estipulado en el arrendamiento otorgado (por 8 años) en 1774 a Martín Rodríguez, y el único plazo (Todos los Santos) convenido en el de la heredad del Cabo de la Huerta. En algunos casos, se contempla la obligación de entregar, siempre que lo solicitara el propietario, un anticipo de la renta anual durante los 15 días siguientes al aviso<sup>92</sup>, e incluso un año de arrendamiento por adelantado en el plazo de un mes, a partir del momento de su notificación<sup>93</sup>; dándose por finalizado, en caso contrario, el

-----

<sup>91</sup> AHPA. Prot. Not. de Patricio Montllor, P.1228, fs. 136-139.

<sup>92</sup> AHPA. Prot. Not. de L. A. Navarro. P.1314, fs. 12-17.

<sup>93</sup> AHPA. Prot. Not. de Luis A. Navarro. P.1314, fs.17 vto.-21 vto.

contrato de arrendamiento.

La cuantía de la renta oscila entre las 66 y 1.700 libras; valores establecidos en función del tipo de cultivo, la situación y extensión superficial de la finca y las disponibilidades hídricas. En términos absolutos, la renta anual más elevada era la que respondía la heredad de Catral, con una extensión de 660 th; el resto (exceptuando la finca de secano en la que la pensión anual ascendía a 66 libras, y los 157 pesos aportados por una heredad en Almoradí, dedicada fundamentalmente al olivo) se sitúa, según los años, entre las 200 y las 385 libras. Sin embargo, en términos relativos, son las haciendas dedicadas al cultivo del olivo, morera y algún frutal, a pesar de tener unas menores dimensiones, las que satisfacen una cantidad más elevada por tahulla. Considerando los periodos de arrendamiento 1800-1806 y 1802-1808 (según las fincas), en los que se posee información de todos los arrendamientos<sup>94</sup>, se observa lo siguiente:

extensión (th)	104	660	49	56	60
renta anual (libras)	385	1.700	204	157	66 (sec)
libras/tahulla	3,7	2,57	4,16	2,8	1,1

-----  
<sup>94</sup> AHPA. Prots. Nots. de Luis A. Navarro, P.1314, fs. 12-17 y 17 vto.-21 vto., y P.1315, fs. 8 vto.-18; y Prots. Nots. de Francisco Aracil, P. 89, fs. 115 vto-117 vto y 117 vto-119 vto, y P.90, fs. 90 vto.-92.

Son las moreras (cultivadas solamente en el primer y tercer caso) y, probablemente, algún otro tipo de factor como el suelo o la situación los que matizan la cuantía de los arrendamientos.

Como complemento a las rentas en metálico, los arrendatarios se veían obligados a entregar, generalmente el día de Sto. Tomás, una parte de los frutos obtenidos (lino, almidón, aceite, melones, granadas, naranjas, membrillos), proporcional a la entidad de las cosechas, y algunas piezas de volatería (gallinas, capones, pavos) y un cerdo (o una cantidad equivalente en metálico), que debían llevar, a sus costas, a casa del propietario. Además, en caso de residir algún tiempo en la hacienda el dueño de la misma, el cultivador debía proporcionarle la leña, paja, fruta o cualquier abasto de similar naturaleza ("verde"), en cantidad suficiente<sup>95</sup>.

Al control del estado de conservación y mejora de los predios va encaminado el grupo más numeroso de condiciones estipuladas en las escrituras de arrendamiento. Los trabajos de mantenimiento y acondicionamiento general de la finca (monda de los "escorredores" de los plantados, realizándola de nuevo, por cuenta del arrendatario, en caso de inundaciones; mantenimiento y cuidado de las instalaciones y dependencias de la finca -almaraza, bodega, horno, noria...-; barbechos; "tregilla" y arado de las tierras, y todas aquellas labores agrícolas que son de uso y costumbre de buen labrador) y los cuidados y el

-----  
<sup>95</sup> AHPA. Prot. Not. de P. Montllor. P.1239, fs. 135 vto.-142 vto, y de Luis. A. Navarro. P.1314, fs. 12-17.

tratamiento del que han de ser objeto los plantados existentes en la hacienda por parte del arrendatario, y el seguimiento y planificación de las mejoras por el arrendador son aspectos detallados cuidadosamente en estos documentos.

La escarda de los olivares debía ser realizada un año si y otro no, y la de los morerales después de coger la hoja, ambas por "hombres peritos e inteligentes", mandándolo hacer en caso contrario por el dueño, a costas del arrendatario. Se exigía cavar los troncos de los árboles, especificando, además, por lo que se refiere a las moreras, el número de riegos (3) y de rejas (6) que había de darle<sup>96</sup>. Se contempla también la prohibición de sembrar en los plantados, exceptuando algunos casos: trigo de "añives" en los olivares y moreras, bien estercolados y en "años vacíos"; panizo, si estuvieran "descargados", volviendo a labrar la tierra una vez "cortados y desbordonados los cañotes", lino en los morerales estercolados. Los morerales debían llevarse amedianados, en cada año la mitad descargados y la otra mitad de año y vez<sup>97</sup>.

Por lo que respecta a las mejoras, el arrendatario debía reponer los árboles necesarios, y plantar anualmente la cantidad de árboles, que en número o extensión, el propietario le señalase, proporcionándole los pies sólo una vez; y si el

-----  
<sup>96</sup> AHPA. Prot. Not. de P. Montllor. P.1239, fs. 135 vto-142 vto.

<sup>97</sup> "permitiendole que pueda dejar de tercero la parte y posesion que le pareciere conveniente, ya por venir tarde la escarda, ó ya por combenir para la conservacion y mejor adelantamiento de los plantados". AHPA. Prot. Not. de L. A. Navarro. P.1315, fs. 8 vto-18.

dueño deseaba acometer alguna mejora no podía oponerse, obteniendo como única compensación una rebaja del precio del arrendamiento<sup>98</sup>.

El arrendatario estaba obligado, además, a devolver la heredad en el mismo estado en que le fue entregada (por ello se confeccionaba un inventario en el momento de la cesión de la finca), y le estaba prohibido extraer estiércol (que debía consumir en las tierras) o paja de la hacienda; debiendo dejar el alfarrás de cultivos tal como le fue proporcionado al principio.

Por otra parte, la preocupación del propietario por asegurar el cobro de los cánones anuales se refleja en una serie de disposiciones entre las que figuran la exigencia de disponer de un fiador, la prohibición de subarrendar las fincas sin permiso del arrendador, y en el hecho de no acceder a la reducción de precio del arrendamiento por causa de desastres naturales o provocados por otros motivos (guerra, plagas, ...).

Por último, queda mencionar que, tanto los gastos de escritura, como el pago de diezmos y primicias y de las mondas de aguas vivas y muertas (exceptuando derramas del azud del Alfaytami y obras nuevas que corrían a cargo del dueño), eran responsabilidad del arrendatario.

-----

<sup>98</sup> AHPA. Prot. Not. de L.A. Navarro. P.1314, fs. 17 vto.-21 vto.



## SUCESSION EN LA POSESION DEL PREDIO " LA VALLONGA DE BURGUNYO "

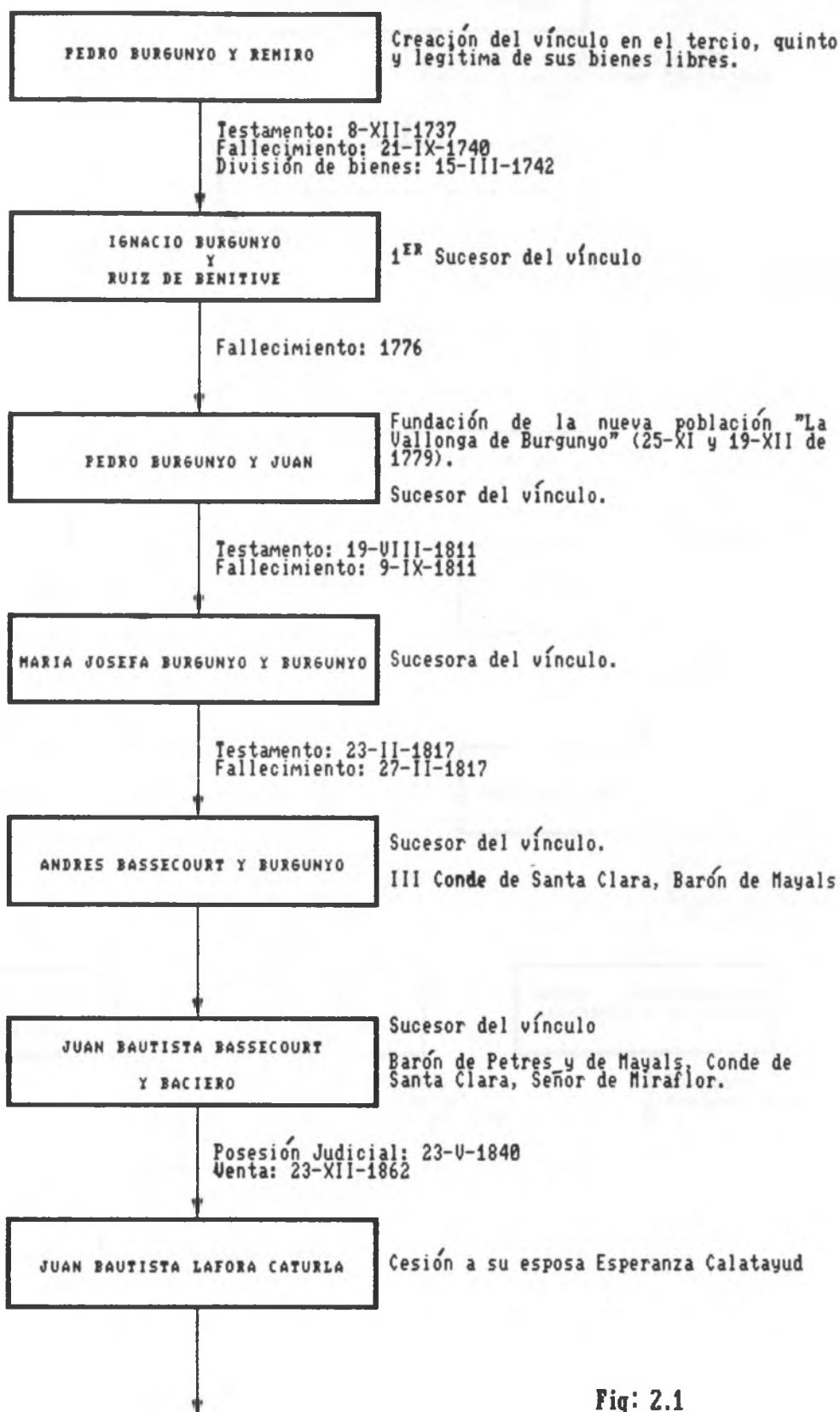


Fig: 2.1

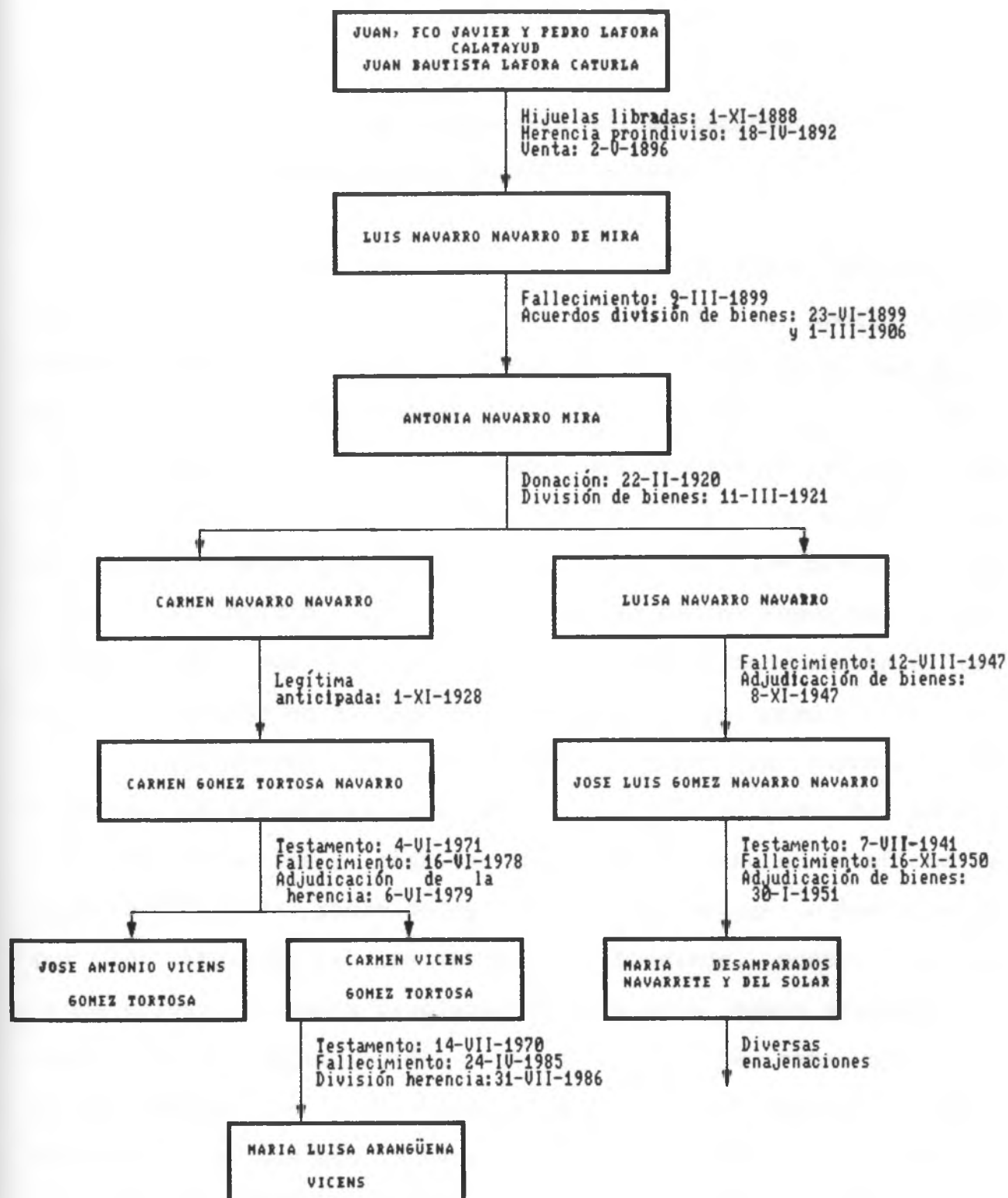


Fig: 2.2

### 2.3.-El cambio de titularidad. La incidencia de las disposiciones desvinculadoras.

Durante el siglo XIX, el nuevo marco político y jurisdiccional creado como consecuencia de la abolición del régimen señorial no modificó la estructura de la propiedad de la Vallonga, consolidada plenamente en las postrimerías del s. XVIII y primeros años del s. XIX, a tenor del proceso de reversión del dominio útil al titular del directo y la consiguiente consolidación de la plena propiedad de la tierra en manos de este último. Si incidió, en cambio, a través de las repercusiones de algunas de sus nuevas disposiciones (concretamente las desvinculadoras) en el cambio de titularidad del predio.

El decreto de 6-VIII-1811 implicó la supresión del elemento jurisdiccional (instrumento coactivo en manos del señor) y de los monopolios y regalías señoriales; pero no cuestionó la legitimidad de la posesión del elemento solariego o territorial por los titulares de los señoríos alfonsinos, puesto que, en todos ellos, la plena propiedad de la tierra había precedido al logro de la jurisdicción. Se producía, de este modo, su transformación en explotaciones agrarias de mayor o menor entidad<sup>99</sup>, en las que la evolución posterior de la estructura de la propiedad vendría determinada por el régimen de tenencia

---

<sup>99</sup> GIL OLCINA, A. (1983): Op. Cit., p.21.

predominante<sup>100</sup>.

En este caso concreto, la plena propiedad del elemento territorial había sido ya consolidada en 1812 en manos de D<sup>a</sup> Josefa Burgunyo y Burgunyo, tras el abandono de los establecimientos enfiteúticos y la cesión de las tierras establecidas por los enfiteutas. Por esta razón, la pérdida de la jurisdicción no tuvo una gran repercusión en el lugar, y, desde luego, no impidió la realización y conclusión de este proceso de reversión. La supresión de monopolios y regalías probablemente tampoco adquirió un significado especial, ante el abandono de los establecimientos y el nuevo planteamiento adoptado para la explotación de la finca, fundamentado en el arrendamiento y la explotación directa; puesto que dejaban de suponer una fuente de ingresos en el sentido anterior.

Se puede establecer, en líneas generales, un cierto paralelismo entre la Vallonga y el señorío de Algorfa (a pesar de implantarse en ellos regímenes de tenencia distintos), pues ambos señoríos, muy tardíos, se convierten en haciendas ajenas por completo, perdida la jurisdicción, a la problemática que el decreto de 6-VIII-1811 suscitó en los enclaves alfonsinos con enfiteusis señorial<sup>101</sup>.

Por lo que respecta a la explotación de la finca, se mantuvo, en un primer momento, la tenencia indirecta mediante el arrendamiento. Al margen de los otorgados con anterioridad a

-----  
<sup>100</sup> GIL OLCINA, A. y CANALES MARTINEZ, G. (1988), Op. Cit.

<sup>101</sup> GIL OLCINA, A. y CANALES MARTINEZ, G. (1988): Op. Cit., p.82.

1811, en vigencia hasta 1813-1815, sólo hemos localizado una escritura de arrendamiento posterior a esa fecha. En 1812, D. Carlos Campos (hacendado y vecino de Alicante), como apoderado general de D<sup>a</sup> Josefa Burgunyo, cedía en arriendo, por un periodo de 8 años, 50 jornales de tierra campa y plantados en la Vallonga<sup>102</sup>, por un precio anual de 92 libras. Las condiciones establecidas son muy similares a las comentadas en el apartado anterior, destacando las orientadas al acondicionamiento y mejora de la finca (reparar las vertientes de la hacienda, tapar portillos, allanar e igualar las tierras, plantar un total de 3 millares de viña, y 20 árboles, por lo menos, cada año).

Por otra parte, de las alusiones contenidas en una escritura en la que se compensaba a D. Andrés M<sup>a</sup> Bassecourt por los desperfectos y desmejoras producidos en los bienes vinculados y por la parte de frutos correspondiente al último año de D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Josefa, parece desprenderse la continuación de los arrendamientos otorgados por ésta durante la posesión de aquel<sup>103</sup>.

Las referencias que sobre la "aldea o caserío" de Burgunyo proporciona Madoz a mediados del s. XIX, en el siguiente fragmento<sup>104</sup>:

-----  
<sup>102</sup> AHPA. Prot. Not. de Antonio Hernández y Soler. P.940, fs. 158 vto-160.

<sup>103</sup> AHPA. Prot. Not. de A. Hernández y Soler. P.941, fs. 20-26vto

<sup>104</sup> MADOZ, P.: *Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar*. Madrid, 1846-50, IV, pp. 661.

"(...). Comprende unas 40 CASITAS de solo piso bajo, á escepcion de la casa-torre del Sr. Conde de Sta. Clara, propietario de todo el caserio y del terreno que abraza, las cuales forman una ala con dicha torre y una calle transversal. Se hallan habitadas por los jornaleros y demas empleados, que cultivan esta pingüe posesion, (...). Para el gobierno del caserio hay un alcalde pedáneo que nombra el ayuntamiento de Alicante. El terreno que abraza este heredamiento es vasto, generalmente de secano, bastante fértil, á escepcion de unas pocas tahullas de huerta que se riegan con las aguas de una noria: se halla plantado de algarrobos, almendros, olivos, viñedos y un pequeño pinar en la parte montuosa. PROD.: las ya dichas, con mas trigo, cebada y algunas hortalizas; la mas abundante es la de algarrobas. POBL., sobre 40 vec., 100 almas"

confirman la consolidación de la unidad de poblamiento establecida en 1779 (integrada en esos momentos por un centenar de habitantes) y la transformación del antiguo señorío en una explotación agraria, de cuya puesta en cultivo se ocupa directamente su propietario, apoyándose para ello en la mano de obra jornalera residente en la misma<sup>105</sup>.

-----  
<sup>105</sup> Tal vez, alguno de esos individuos pudo formar parte del grupo de enfiteutas que canceló las escrituras de establecimiento de las tierras. Algunos de ellos no actuaron del mismo modo con las casas y solares establecidos en la Vallonga, pudiendo constituir el núcleo inicial del vecindario existente en esos momentos.

Tras el fallecimiento de D. Pedro Burgunyo y Juan, el 9-IX-1811, los vínculos que éste había poseído pasaron a manos de su sobrina D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Josefa Burgunyo y Burgunyo, como su más inmediata sucesora<sup>106</sup>. A su muerte, D. Juan Bautista Antoyne, como apoderado de D. Andrés M<sup>a</sup> de Bassecourt y Burgunyo<sup>107</sup>, instó un pedimento el 27-II-1817<sup>108</sup> solicitando testimonio del llamamiento que, a la sucesión de sus vínculos, realizó D<sup>a</sup> Josefa, en su testamento de fecha 23-II-1817<sup>109</sup>, en la persona de éste.

D. Andrés M<sup>a</sup> Bassecourt (primo hermano de la fallecida) accedía, así, a parte de los bienes amayorazgados por D. Miguel Ruiz y Ximenez y D<sup>a</sup> Luisa Rocamora, consistentes en una hacienda en el término de Catral ("La Rafa") y dos en Almoradí, una de huerta ("del pino") y otra de secano ("La Cañada Carpa"), y a los que integraban el "simple fideicomiso" fundado por D. Pedro Burgunyo y Remiro, la hacienda de la Vallonga en el término de Alicante, y la "hacienda de D. Pedro" en el de Almoradí.

La heredad de las Atalayas, que formaba parte de sus bienes libres, pasó a manos de su hermana D<sup>a</sup> Lorenza Burgunyo y Canicia, mientras a D. Andrés correspondía una hacienda ("de Pérez", con una superficie de 69 jornales, parte de tierra campa y parte de plantados) lindante con las tierras de la Vallonga,

-----  
<sup>106</sup> AHPA. Prot. Not. de A. Hernández y Soler. P.940, fs. 93-113 vto.

<sup>107</sup> Capitán de Reales Guardias Walonas y Caballero de la orden Militar de Alcántara, residente en Barcelona.

<sup>108</sup> AHPA. Prot. Not. de A. Hernández. P. 941, fs. 9 vto.-34 vto.

<sup>109</sup> AHPA. Prot. Not. de A. Hernández. P.941, fs. 28-33vto.

por si existiera algún desmejoro en los vínculos. Esta finca, valorada en 3.767 libras 10 sueldos, fue insuficiente para cubrir la cantidad total que había de serle entregada por los frutos y rentas correspondientes al año en que murió D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Josefa y los "desmejoros" y desperfectos de los predios que integraban los vínculos, debiéndosele todavía 1.700 libras. Por esta razón, en 1819, se le cedió también la casa (con accesoria) y el huerto (3 th. aproximadamente) existentes en la universidad de San Juan, y un hilo de agua vieja<sup>110</sup>, debiendo él a su vez reintegrar las 1825 libras en que excedía el valor de estos bienes.

Los bienes que constituían estos vínculos, se fueron transmitiendo íntegramente hasta pasar a manos del último de los poseedores perteneciente a la familia de los Burgunyo, D. Juan Bautista Bassecourt y Baciero, hijo de D. Andrés M<sup>a</sup> Bassecourt y Burgunyo. Las dificultades económicas y el fuerte endeudamiento de D. Juan B. Bassecourt, Conde de Santa Clara y Barón de Petrés y Mayals, ocasionaron la venta, en 1862<sup>111</sup>, del predio de la Vallonga, y de otras fincas libres lindantes con ella, a un destacado miembro de la burguesía alicantina, D. Juan Bautista Lafora y Caturla. Las tres fincas incluidas en esta transacción (todas de secano), una de ellas situada en la partida de la Vallonga, y las dos restantes en la de las Atalayas, fueron las siguientes:

---

<sup>110</sup> AHPA. Prot. Not. de A. Hernández y Soler. P.941, fs. 20-26vto.

<sup>111</sup> AHPA. Prot. Not. de José Cirer y Palou, P.528, fs. 2992-2997.



-LA VALLONGA, con una extensión superficial de 16.000 th. -parte campa, parte pinar y parte plantada de árboles y viña-, constaba, además, de casa principal, ermita, caserío, bodega, prensa, y cubo, entre otras instalaciones, y de algunos huertos.

-LA BASTIA o BASTIDA, con una cabida de 190 jornales (760 th.) -parte campa, parte inculta y parte plantada de árboles-, disponía de casa, ermita, balsa, aljibe y fuente de agua manantial. Trece años antes su extensión superficial alcanzaba los 300 jornales (1.200 th.)<sup>112</sup>. Sobre esta heredad, que con el nombre de Las Atalayas fue establecida a varios enfiteutas junto al predio de la Vallonga en 1779, recaía un censo de 5.000 libras (75.000 r<sup>s</sup> v<sup>n</sup>) de capital, y pensión ánuua de 100 libras (1.500 r<sup>s</sup>) -al 2%-, a favor de los herederos del Marqués de Alos<sup>113</sup>.

-LAS ATALAYAS O VENTORRILLO DE GUERRA, con una extensión superficial de 31 jornales (124 tahullas), parte campa y parte plantados, contenía también una casa y otras instalaciones. Esta finca fue adquirida, con una cabida inicial de 245 th., el 17-XII-1787 (ante Pedro Fuentes), por D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Antonia Burgunyo y Juan a D. Lorenzo Antoyne y D<sup>a</sup> Ventura

-----  
<sup>112</sup> Según la escritura de obligación otorgada por D. Juan Bautista Bassecourt, en 1848, al Consejo Provincial de Alicante. AHPA. Prot. Not. de José Cirer y Palou, P.502, fs. 1300 vto-1302.

<sup>113</sup> Impuesto por D. Juan Forner, antes Pascual del Pobil, el 14-IV-1761.

Maricon<sup>114</sup>. En esta transacción quedó gravada con un capital de censo de 700 libras al 3%, y sujeta al pago de 1.000 libras, ambas cantidades como resto del precio de venta<sup>115</sup>.

Las condiciones en que fue efectuada la venta ponen de manifiesto las dificultades económicas y el grado de endeudamiento del Conde de Santa Clara, factores que motivaron la necesidad de desprenderse de estos predios. Así, de los 800.000 r<sup>S</sup> v<sup>n</sup> (53.333 libras, 5 r<sup>S</sup> v<sup>n</sup>) convenidos como precio de venta -incluyendo las 5.000 libras del censo que gravaba la Bastida-, sólo recibió D. Juan B. Bassecourt 71.685 r<sup>S</sup> 90 céntimos (4.779 libras, 1 r), reservándose el comprador los 728.314 r<sup>S</sup> v<sup>n</sup>, 9 céntimos restantes, para el pago de diversas deudas contraídas entre 1861 y 1862, a cuya seguridad habían sido otorgadas diversas hipotecas sobre las fincas<sup>116</sup> (ver cuadro IV). Los 220.000 r<sup>S</sup> adeudados a Francisco Alberola (comerciante alicantino), fue la única cantidad no comprendida en este acuerdo, debiéndola satisfacer D. J. B. Bassecourt; aunque en el caso de abonarla Lafora (como de hecho sucedió por su cesión a éste por Alberola en 1863 -con un descuento del 12% sobre la cantidad total) debía reintegrársela Bassecourt con otros valores<sup>117</sup>.

-----  
<sup>114</sup> AHPA. Prot. Not. de Patricio Montllor. P.1242, fs. 281-284.

<sup>115</sup> Registro de la Propiedad de Alicante, General, Libro 1, Finca 81, fs. 329-332.

<sup>116</sup> AHPA. Prot. Not. de J. Cirer y Palou, P.528, fs. 2992-2997; y Registro de la propiedad de Alicante, General, Libro 1, Finca 79, fs. 321-324; Finca 80, fs. 325-328 y Finca 81, fs. 329-332.

<sup>117</sup> AHPA. Prot. Not. de Vicente Izquierdo y Champoursin, P.991, fs. 297-303.

CUADRO IV. ENDEUDAMIENTO DE LOS POSEEDORES DE LA VALLONGA

Fuente: A.H.P.A. . Protocolos Notariales. Registro de la Propiedad de Alicante.- Elaboración propia.

DEUDOR	CANTIDAD ADEUDADA	ACREEDOR	ACTIVIDAD	RESIDENCIA	FINCA HIPOTECADA	CANTIDAD	IMPOSICIÓN	CANCELACIÓN
Bassecourt	356.951 rs.(3)	Jaime Safont	Comercial	Barcelona	Vallonga		29-I-1861	22-X-1868
Bassecourt	70.000 rs.(1)	Sdad Gral Esp. de descuentos	Financiera	Alicante	Vallonga(2)		28-XI-1861	
Bassecourt	120.000 rs.(1)	Sdad Gral Esp. de descuentos	Financiera	Alicante			5-VIII-1862	
Bassecourt	90.000 rs.(1)	Sdad Gral Esp. de descuentos	Financiera	Alicante			15-X-1862	
Bassecourt	80.000 rs.(1)	Sdad Gral Esp. de descuentos	Financiera	Alicante			4-XII-1862	
Bassecourt	220.000 rs. (8%) (4)	Francisco Alberola	Comercial	Alicante	Vallonga Bastida Atalayas	120.000 rs 60.000 rs 40.000 rs	8-X-1862	4-VII-1863
Lafora	969.912 rs 43 cént	Hacienda Pública			Atalayas Vallonga Bastida	60.141 rs 441.772 rs 99.334 rs	30-IV-1863	22-X-1863
Lafora	600.000 rs (6%) (5)	Sociedad de comercio "Salvetti, Harmssen y Cía"	Comercial	Alicante	Vallonga Bastida Atalayas	575.000 rs 20.000 rs 5.000 rs	13-VII-1865	18-IX-1884
Lafora	481.100 rs (6)	Sociedad de comercio "Font Archer e hijo"	Comercial	Barcelona	Vallonga	481.100 rs	III-1866	15-IX-1866 y 27-V-1867
Lafora	3166 esc. (embargo)(7) 5826 esc. (embargo)	Banco de España			Bastida Atalayas	3166 esc. 5826 esc.	V-1868	IX-1868
Lafora	10.936 esc. (embargo)(8)	Admón Eca de Hacienda			Vallonga Bastida		21-X-1869	23-VI-1876
Lafora	45.101 pts 19 cént.	Salvadora Calatayud García		Madrid	Vallonga	45.101 pts	21-VI-1871	27-VIII-1884
Lafora	146.750 pts (6%)	Esperanza García Ruiz			Vallonga Bastida Atalayas	50.000 pts 15.000 pts	21-VI-1871	11-III-1881
Lafora	100.000 pts (6%)( 9)	Banco Hipotecario de España			Nueva Finca	100.000 pts	4-IX- 1884	21-V-1896

(1) Deudas asumidas por Juan B. Lafora (escritura de venta)

(2) Hipoteca impuesta el 7-XII-1861 y cancelada el 7-III-1863

(3) 293.314 rs. 9 cént. fueron abonados por J.B. Lafora (esc. de venta)

(4) Cesión a J.B. Lafora el 6-III-1863, con el descuento del 12%

(5) Cesión a Salvadora Calatayud García el 3-IV-1882.

(6) A la seguridad de una cesión y venta de títulos u obligaciones del Estado para subvenciones de ferrocarril.

(7) Como fiador de Miguel Raggio y Caturla, a la seguridad de la recaudación de contribuciones (Toledo).

(8) Como fiador de Francisco Androver, recaudador general de la contribución

(9) Secuestro y posesión interina por el Banco (27-1-1894 al 18-5-1896)

Por sus actividades como "empresario de quintas", o su asociación con alguno de estos individuos, se vió obligado a hipotecar algunas de sus fincas (La Bastida, Las Atalayas, y una de las situadas en Almoradí) a favor del Consejo Provincial<sup>118</sup>, como garantía de las cantidades que debería hacer efectivas en el caso de que algunos de los soldados presentados como sustitutos fueran sorteados o abandonaran el servicio antes de finalizar su cumplimiento.

El paulatino proceso de enajenación del patrimonio rústico de D. Juan B. Bassecourt y Baciero, desencadenado por la falta de recursos financieros y el progresivo endeudamiento, se inició en fechas bastante tempranas. En efecto, desde 1840 (año de su toma de posesión del vínculo) se vio obligado a efectuar la venta condicional (con pacto de retrovendo) de alguna de sus fincas<sup>119</sup>, teniendo que solicitar, en algunos casos, varias prórrogas sucesivas para la retrocompra, ante el riesgo de perder la finca definitivamente<sup>120</sup>. En algún caso, fue la necesidad de cancelar una deuda, ante la apertura de expediente a instancias

-----  
<sup>118</sup> AHPA. Prot. Not. de J. Cirer y Palou, P.501, fs. 113 vto-116 vto, y P.502, fs. 1300 vto-1302.

<sup>119</sup> En 1851 vendía con pacto de retrovendo (en un plazo de 2 años), por 37.500 r<sup>s</sup>, una porción de tierra huerta situada en Benicalaf. AHPA. Prot. Not. de J. Cirer y Palou, P.501, fs. 971 vto-973.

<sup>120</sup> Este es el caso de la heredad que poseía en la Huerta de Catral, pues, tras su venta condicional en 1840, le fue renovado el plazo de retrocompra varias veces, hasta 1858 en la última escritura localizada. AHPA. Prot. Not. de J. Cirer y Palou. P.502, fs. 1665-1666 vto.

del acreedor, la que le llevó a considerar esta solución<sup>121</sup>.

No se ha de olvidar, en este proceso de disgregación del patrimonio territorial, la incidencia ejercida por las disposiciones desvinculadoras (ley de 27-IX-1820, restablecida por Real Decreto de 30-VIII-1836), puesto que determinan la desaparición de las trabas impuestas por el mayorazgo a la libre disposición de los bienes. Estas disposiciones contribuirán de forma importante al debilitamiento económico de la nobleza y a la liquidación de sus dominios territoriales<sup>122</sup>. Por tanto, desempeñarán un papel fundamental en la trayectoria de la heredad al propiciar su enajenación. Una trayectoria que no deja de ser peculiar, ante el hecho de su transmisión íntegra en las diferentes transacciones de que fue objeto, posibilitándose de este modo su perduración como una gran propiedad hasta la segunda década del s. XX. Momento a partir del cual se inicia el proceso de disgregación, limitado en una primera fase a las divisiones de índole hereditaria.

D. Juan B. Lafora Caturla, propietario, abogado residente en Alicante (y, durante cierto tiempo, en Madrid) e integrante de una acaudalada familia de comerciantes alicantinos, realizó la inscripción de las tres fincas adquiridas en los

-----  
<sup>121</sup> Efectivamente, ante las exigencias de Roque Blanquer, a quien ya debía su padre 67.938 r<sup>s</sup> 26<sup>mr</sup>vds, se vio obligado a cederle (con posibilidades de adquirirla de nuevo), en compensación de parte de la deuda, la casa, con su accesorio, y huerto que poseía en San Juan, además del hilo de agua vieja. AHPA. Prot. Not. de Juan José Sesse, P. 1676, fs. 34 vto.-37 vto.

<sup>122</sup> GIL OLCINA, A. (1977): Op. Cit., pp. 130-131; GIL OLCINA, A. (1981): Op. Cit., pp. 32-36.

libros de fincas rústicas de la antigua Contaduría de hipotecas el 26-XII-1862. Posteriormente, fueron trasladados tras la entrada en funcionamiento de los registros de la propiedad, recogiendo estos libros de registro las anotaciones correspondientes a las operaciones de que fueron objeto las fincas (fundamentalmente hipotecas y cancelaciones de préstamos hipotecarios) desde 1863<sup>123</sup>.

Tras su agrupación en una sola finca fue inscrita de nuevo el 3-X-1884<sup>124</sup>, produciéndose en esta ocasión una rectificación de la cabida declarada inicialmente, con motivo de la nueva medición practicada por el Banco Hipotecario de España, ante la concesión de un préstamo hipotecario sobre la finca.

La nueva finca ocupaba una superficie 762 Ha. y 39 áreas (1.587 jornales -6.348 th.) en las partidas de la Vallonga y las Atalayas. El error provenía del considerable exceso de cabida de la Vallonga, puesto que, de las 16.000 th. declaradas en un principio, sólo la componían realmente 5.464 tahullas. En este momento, la hacienda disponía de una casa de labor y 17 más para colonos, con la serie de dependencias e instalaciones existentes con anterioridad, "unos 9.277 árboles de diferentes clases" y una fuente de agua manantial.

-----  
<sup>123</sup> Registro de la propiedad de Alicante, General, Libro 1, Finca 79, fs. 321-324; Finca 80, fs. 325-328 y Finca 81, fs. 329-332.

<sup>124</sup> Registro de la propiedad de Alicante, general, L. 194, Tomo 310, Finca 11.769, f. 150 y ss.

La finca, bajo este nuevo titular, fue hipotecada en diversas ocasiones, como se observa en el cuadro IV. A pesar de esta problemática situación provocada por las dificultades económicas, quedó en manos de la familia Lafora, al hacerse cargo de las deudas contraídas por D. Juan B. Lafora Caturla su esposa, D<sup>a</sup> Salvadora Calatayud García.

La raíz del endeudamiento de D. Juan B. Lafora se encuentra en la naturaleza de sus actividades profesionales. Tras la liquidación de la casa de comercio paterna, desarrolló diversos proyectos de ingeniería en Alicante, inició la traída de aguas de Torremanzanas e intervino en la construcción de vías de comunicación. Por su implicación en la creación de dos ferrocarriles provinciales fue conocido como "el pequeño Salamanca"<sup>125</sup>. La concesión del ferrocarril Alicante-Murcia le fue otorgada en 1877, y, tras su abandono, inició los trámites para la construcción del ferrocarril de la Marina en 1882<sup>126</sup>. Este nuevo proyecto se presentaba como una prolongación del anterior, constituyéndose para su realización la "Compañía de los ferrocarriles estratégicos y secundarios de Alicante"<sup>127</sup>. Mientras la compañía de los ferrocarriles andaluces, heredera de la concesión de Lafora, inauguraba el servicio a Murcia el 11-V-1884<sup>128</sup>, el ferrocarril de vía estrecha Alicante-Denia no

-----  
<sup>125</sup> VIDAL TUR, G.: *Alicante, sus calles antiguas y modernas*, Alicante, p.413.

<sup>126</sup> RAMOS HIDALGO, A.: *Evolución urbana de Alicante*, Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, Alicante, 1984, p. 232.

<sup>127</sup> ABELLAN GARCIA, A.: *Los ferrocarriles del Sureste*. Instituto Juan Sebastián Elcano, Madrid, 1979, p. 60.

<sup>128</sup> RAMOS HIDALGO, A. (1984): Op. Cit., p. 232.

entró en funcionamiento hasta el año 1915<sup>129</sup>.

Por tanto, motivos de índole similar a los que ocasionaron el primer cambio de titularidad, provocaron la enajenación de la propiedad, el 2-V-1896<sup>130</sup>, por D. Juan B. Lafora Caturla y sus hijos (como herederos abintestato de los bienes obtenidos tras la muerte de su madre) a favor de D. Luis Navarro de Mira, miembro de una acaudalada familia de la burguesía noveldense, en cuyo seno se mantiene íntegramente hasta bien mediado el siglo XX.

El precio confesado establecido en esta venta fue de 115.000 pts. La práctica totalidad de esa cantidad (114.193 pts. 72 cént.) quedó retenida en manos del nuevo titular con el objeto de entregarlas al Banco hipotecario de España para la cancelación del crédito (y los correspondientes intereses) concedido en 1884. La necesidad de esta enajenación se refleja en el proceso de secuestro y posesión interina de que fue objeto por el banco, durante dos años (ante la falta de pago de los intereses de varios semestres vencidos<sup>131</sup>), hasta su transferencia a D. Luis Navarro.

---

129 COSTA MAS, J.: *El Marquesat de Denia. Estudio geográfico*. Valencia, 1977, p. 551.

130 Registro de la propiedad de Alicante, general, L.325, T.502, fs. 194-198.

131 Registro de la propiedad de Alicante, general, L.307, T.476, fs. 49-54.



## 2.-FRAGMENTACION DE UNA GRAN PROPIEDAD Y NUEVAS PERSPECTIVAS DE USO DEL SUELO EN LA 2ª MITAD DEL SIGLO XX.

La vinculación realizada por D. Pedro Burgunyo y Remiro en el 1/5, 1/3 y legítima de sus bienes libres, garantizó la perduración de este patrimonio rústico íntegramente en manos de sus descendientes hasta la 2ª mitad del siglo XIX. El establecimiento de un orden de sucesión prefijado, de modo general, por línea de primogenitura (aunque éste no fue el caso de la primera sucesión al vínculo), preferentemente masculina; la imposición de limitaciones a las enajenaciones de bienes vinculados (solamente permitidas en determinadas circunstancias -subrogación de otros bienes en sustitución de los enajenados) y la protección contra el endeudamiento posibilitaron su pervivencia. Sin olvidar, en otro orden de cosas, la importancia que adquiere el proceso de reversión del dominio útil para la consolidación, de nuevo, de la plena propiedad de la tierra, perdida tras el establecimiento enfitéutico otorgado en 1779.

Sería posteriormente, en posesión de los Navarro, y ya en el siglo XX, cuando tuviera lugar el proceso de disgregación de este importante patrimonio territorial situado en el Campo de Alicante -inscrito en 1884 en el Registro de la propiedad de Alicante como una única gran finca, con una extensión superficial

posteriores, lo que suponía el 55,36 % de la finca original) correspondió a Carmen Navarro Navarro; y estaba integrada por dos porciones, "La Torre", con una cabida de 360,7804 hectáreas (360,3427 hectáreas tras las rectificaciones posteriores) y "La Bastida", con 61,4912 hectáreas<sup>135</sup> (68,924 has. ya rectificada su extensión); y una gran parte de las dependencias y anexos de la finca<sup>136</sup>.

"La Vallonga", con una extensión superficial de 340,1232 hectáreas (346,16449 hectáreas tras posteriores rectificaciones de cabida, lo que supone el 44,64 % de la finca madre), correspondió, a su vez, a Luisa Navarro Navarro; constituida por tres fragmentos, "Las Paleras", con una cabida de 252,21 hectáreas (253,07848 hectáreas según el cómputo posterior), el "Cap Gross", con 56,2068 hectáreas (59,50 hectáreas en realidad, vendidas en su totalidad, durante los ochenta, a una empresa agrícola comercial), y "Las Atalayas" o "Ventorrillo de guerra", con 31,7064 hectáreas (33,586013 hectáreas de acuerdo a lo anterior, y también segregadas íntegramente, aunque en una fecha más temprana -1957-), y una serie de dependencias<sup>137</sup>, algunas comunes a "La Torre".

-----  
<sup>135</sup> Una cabida bastante inferior a la que presentaba la finca cuando fue inscrita por D. Juan Bautista Lafora Caturla en el Registro de la Propiedad: 91,2760 has.

<sup>136</sup> 3 casas en el Poblet de Burgunyo y otras dos más distanciadas de éste, "La Pinada" y "La Bastida", con la ermita, bodega, cuadras, almazara, graneros, eras, aljibes (varias de estas instalaciones en comunidad con la finca "La Vallonga").

<sup>137</sup> Cinco casas, tres en el Poblet de Burgunyo y otras dos denominadas "de fuentes" y "las Paleras", eras, aljibes, bodega, cuadras, cuba y almazara. Registro de la propiedad de Alicante, General, Lib. 469, Finca 23099, fs. 127-131 vto.

de 762 Hectáreas 39 áreas<sup>132</sup>-, caracterizado en una primera fase por la incidencia de las divisiones hereditarias.

Tras la muerte de D. Luis Navarro Navarro de Mira, en 1899, sin haber otorgado ninguna disposición testamentaria, fue declarada heredera abintestato, el 19-V-1899, por el Juzgado de Primera Instancia de Novelda, su hija Antonia Navarro Mira<sup>133</sup>.

D<sup>a</sup> Antonia Mira y Segura y D<sup>a</sup> Antonia Navarro Mira, viuda e hija respectivamente del fallecido, acordaron el 23-VI-1899, ante el notario D. Antonio Sanchez Vergerano, considerar todos los bienes gananciales, dividiéndolos, por tanto, por mitad entre ambas. En escrituras posteriores (28-XII-1904 y 1-III-1906) se adjudicó la viuda varias fincas radicadas en Novelda renunciando al resto de derechos, que, de ese modo, pasaron a corresponder a su hija. La finca permaneció íntegra en manos de esta última hasta el momento en que, con motivo de su donación (el 22-II-1920), fue dividida entre sus dos hijas, Carmen y Luisa Navarro Navarro<sup>134</sup>.

Las dos nuevas fincas resultantes de esta primera fragmentación fueron inscritas en el Registro de la propiedad el 11-III-1921. "La Torre", con una extensión de 427,2716 hectáreas (429,2667 hectáreas tras las rectificaciones y permutas

-----  
<sup>132</sup> Es decir, 6348 th. (1587 jornales). De ellas, 656,2264 Has. (5464 th.) correspondían a "La Vallonga", 91,2760 Has. (760 th.) a "La Bastida", y 14,8924 Has. (124 th.) a "Las Atalayas" o "Ventorrillo de Guerra".

<sup>133</sup> Registro de la Propiedad de Alicante, General, Lib. 325, T. 502, fs. 197-198.

<sup>134</sup> Registro de la propiedad de Alicante, General, Lib. 469, T.739, fs. 122-124.

La división de la heredad de la Vallonga llevó consigo, asimismo, el establecimiento de una serie de condiciones y servidumbres sobre las dos nuevas fincas, dirigidas al mantenimiento y uso conjunto de los caminos ya existentes y de las vertientes, que deberían conservar su aprovechamiento tradicional.

Las dos nuevas fincas surgidas tras esta fragmentación inicial seguirán trayectorias bastante diferenciadas, aunque, en ambos casos, afectadas por la continuación del proceso de disgregación que, a partir de la segunda mitad del siglo XX, adquiere un carácter distinto. La desmembración de la gran propiedad no vendrá motivada exclusivamente por las divisiones hereditarias, sino por la importancia que adquieren las ventas a terceros, a manos de los cuales pasará una considerable proporción de este patrimonio territorial, concretamente el 48,37% del total, aproximadamente unas 375 hectáreas; atribuyéndose la enajenación de un 69,78 % de esa superficie a M<sup>a</sup> Desamparados Navarrete y del Solar, propietaria actual de la finca "La Valonga", y el 30,22 % restante a los propietarios de "la Torre", fundamentalmente Carmen Gómez-Tortosa Navarro (ver fig.3). Del mismo modo, el resto del patrimonio todavía en manos de los descendientes de D. Luis Navarro, el 51,63 % de la superficie inicial, poco más de 400 has., se conserva en su mayor parte (78,91 %) en posesión de D. José A. Vicens y Gómez-Tortosa y D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> Luisa Arangüelles Vicens (ver fig. 3), correspondiendo a M<sup>a</sup> Desamparados Navarrete solamente el 21,09 % del mismo.

# EVOLUCION DE LA PROPIEDAD DE LA VALLONGA EN MANOS DE LOS NAVARRO

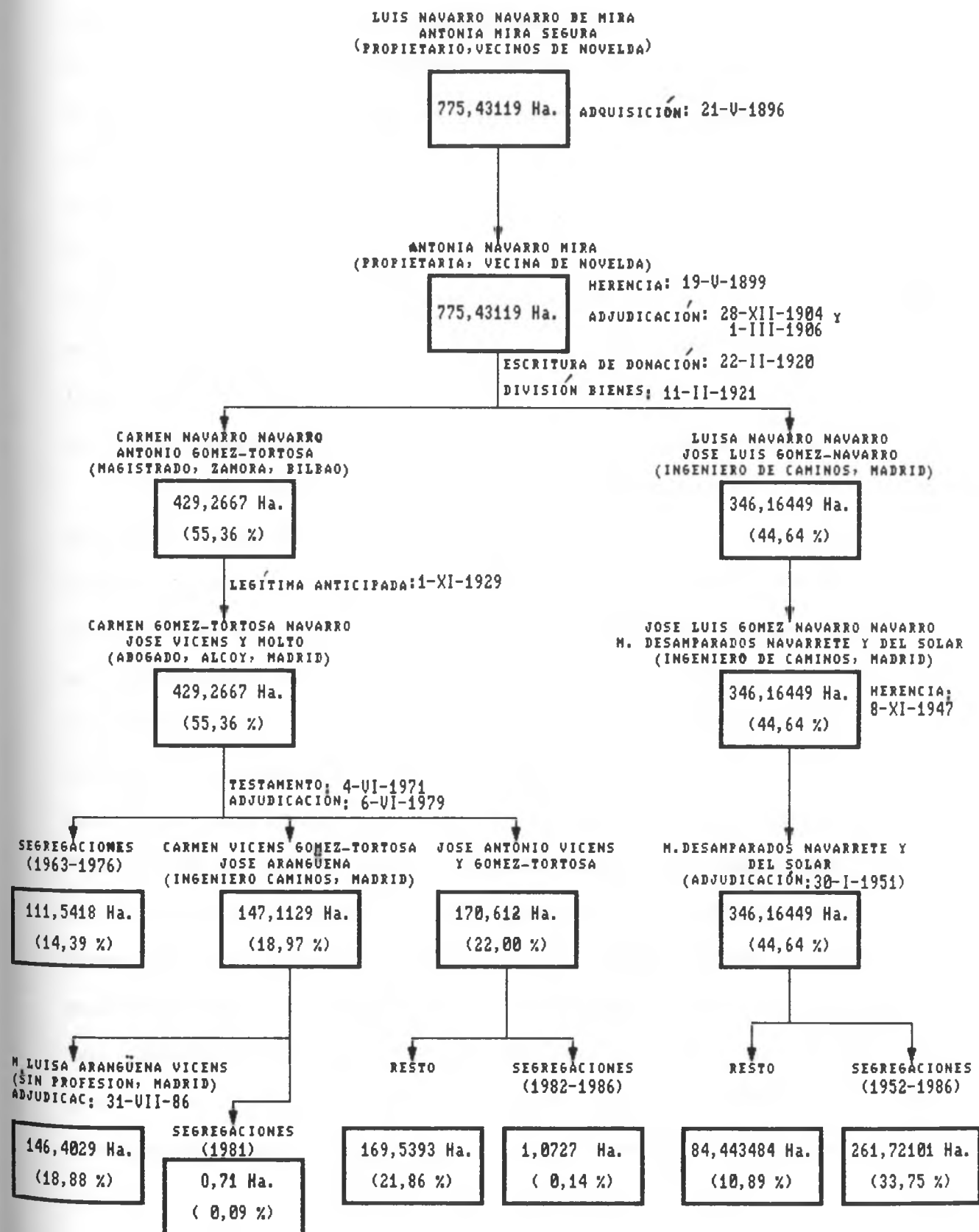


Fig: 3

En definitiva, y al margen de la diferente extensión superficial inicial, la evolución experimentada en la propiedad de ambas fincas (ver cuadros V-VIII) difiere bastante de un caso a otro. Mientras "La Torre" permanece en su mayor parte en manos de la familia (73,6 % -casi 316 hectáreas-), M<sup>a</sup> Desamparados Navarrete se desprende de una considerable fracción de "la Vallonga", conservando solamente el 24,39 % de su superficie. Además, como se observa en los cuadros V y VI, el proceso de segregación y venta comienza para "La Vallonga" en una fecha más temprana, concretamente en 1952, mientras en "La Torre" las primeras segregaciones tienen lugar once años después.

Al margen de un motivo fundamental, de índole más general, como es la revalorización del espacio que ocupan ambas fincas a tenor de su ubicación en el sector oeste del área periurbana de la ciudad de Alicante, no puede omitirse ni menospreciarse el papel desempeñado por la vinculación afectiva a la tierra como factor moderador y matizador del alcance de la dinámica segregadora; papel que se pone de manifiesto en las distintas porciones conservadas en manos de los propietarios de "La Torre" y "La Vallonga". Evidentemente, el desarraigo es total en el caso de la dueña de "La Vallonga", viuda de D. José Luis Gómez Navarro Navarro, y desde 1951 heredera de la finca por la muerte de éste, quien ha residido siempre fuera de la provincia. Los descendientes de Carmen Navarro Navarro han mantenido, a pesar de residir en su mayor parte fuera (en Madrid fundamentalmente), un mayor contacto con la finca, residiendo en

CUADRO V. SEGREGACIONES DE LA FINCA "LA TORRE" \*\*\*

AÑO	SUP.(HAS.)	HA/TOTAL ACUMULADO	ADQUIRENTE	ACTIVIDAD	RESIDENCIA	TRANSFERENTE	FINCA	PRECIO(PTS)
1963	4,9427	4,9427	Particular	Industrial	Alicante	C. Gómez-Tortosa Navarro	Torre	40.000
1963	2,9023	7,845	Fco R. Borja Sempere	Industrial	Alicante	C. Gómez-Tortosa Navarro	Torre	30.000
1966	8,2040	16,049	Fco R. Borja Sempere	Industrial	Alicante	C. Gómez-Tortosa Navarro	Bastida	100.000
1974	20,00	36,049	"Cerámica Bellavista S.A."	Industrial	Dos Hermanas	C. Gómez-Tortosa Navarro	Bastida	10.000.000
1975	16,44	52,489	Ayuntamiento Alicante		Alicante	C. Gómez-Tortosa Navarro	Bastida	8.220.000
1976	1,0260	53,515	Particular	Industrial	Petrel	C. Gómez-Tortosa Navarro	Bastida	513.000
1976	0,6440	54,159	Mercantil "Transportes Torrecillas y García S. L."	Comercial	Hellín	C. Gómez-Tortosa Navarro	Bastida	322.000
1976	2,2527	56,4117	Particular (varios)	Agraria Comercial	Elche Alicante	C. Gómez-Tortosa Navarro	Bastida	1.126.350
1976	9,4856	65,8973	Particular (varios)*	Comercial	Alicante	C. Gómez-Tortosa Navarro	Bastida	4.742.800
	45,6445	111,5418	INUR**			C. Gómez-Tortosa Navarro	Torre	
1981	0,21	111,7518	Particular	Pensionista	Alicante	Ma C. Vicens Gómez-Tortosa	Torre	105.000
1981	0,25	112,0018	Particular	Empleado	Alicante	Ma C. Vicens Gómez-Tortosa	Torre	125.000
1981	0,25	112,2518	Particular	Chofer	Alicante(Rebolledo)	Ma C. Vicens Gómez-Tortosa	Torre	125.000
1982	0,2075	112,4593	Particular	Empleado	Alicante(Rebolledo)	J.A. Vicens Gómez-Tortosa	Torre	330.000
1986	0,8652	113,3245	Particular	Pensionista	Alicante(Rebolledo)	J. A. Vicens Gómez-Tortosa	Torre	2.531.000

\* Rafael y Manuel Torrecillas Sorío, representante, el primero, de

"Transportes Torrecillas y García, S.L." y de "Agroalicante S.A."

\*\* Parcela expropiada por el INUR para la constitución del Polígono Industrial "Las Atalayas"

\*\*\* Sólo constan las ventas a terceros, no las segregaciones por divisiones hereditarias

FUENTE: Registro de la Propiedad de Alicante. Elaboración Propia.

CUADRO VI. SEGREGACIONES DE LA FINCA "LA VALLONGA"

AÑO	SUP. (HAS.)	HA/TOTAL ACUMULADO	ADQUIRENTE	ACTIVIDAD	RESIDENCIA	TRANSFERENTE	FINCA	PRECIO (PTS)
1952	33,8625	33,8625	Fco Pellín Torres	Agraria	Alicante (Vallonga)	MaD. Navarrete y del Solar	Paleras	8.450
1957	33,586013	67,448513	Fco Pellín Torres*	Agraria	Alicante (Vallonga)	MaD. Navarrete y del Solar	Atalayas	25.140
1972	109,1005**	176,549013	INUR			MaD. Navarrete y del Solar	Paleras	31.026.761
1982	59,50	236,049013	Mercantil "Uvas Gil, S.A."	Comercial Agraria	Murcia	MaD. Navarrete y del Solar	Cap Gross	14.000.000
1984	0,3520	236,401013	Particular	Agraria	Alicante	MaD. Navarrete y del Solar	Paleras	150.000
1984	3,82	240,221013	Mercantil "Hijos de Federico Lis, S.A."	Comercial	Valencia	MaD. Navarrete y del Solar	Paleras	5.000.000
1986	21,50	261,721013	Mercantil "Aliagro S.A."	Comercial Agraria	Alicante	MaD. Navarrete y del Solar	Paleras	6.000.000

\* En 1968, tras su fallecimiento y posterior división de sus bienes entre sus 4 hijos, pasó a manos de la Mercantil "Explotaciones Vallonga, S.A." a raíz de la cesión efectuada por los herederos de éste a cambio de acciones de la sociedad.

\*\* Finca expropiada por el INUR para la creación del Polígono Industrial "Las Atalayas". Ya bajo la titularidad del SEPES, se segregan de ella 58,29 Has. que, junto con 34 fincas más, integran la superficie sobre la que se desarrolla la 1ª fase del polígono.

FUENTE: Registro de la propiedad de Alicante. Elaboración Propia



CUADRO VII

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS ENAJENADAS\* DE LA VALLONCA DE BURGUNYO POR PERIODOS DE SEGREGACION Y TAMAÑO

TAMAROS	1952-1966			1968-1978			1981-1989			TOTAL			
	Parcel.	Sup. (Has.)	%	Parcel.	Sup. (Has.)	%	Parcel.	Sup. (Has.)	%	Parcel.	Sup. (Has.)	%	
0-1	A	1	4.55	50,5440	0.17	5	22.72	1,7822	0.48	5	27.27	2,4867	0.69
	B	1	4.55	50,5440	0.17	1	4.55	0,3520	0.09	1	4.55	0,3520	0.09
	T	2	9.10	101,0880	0.34	6	27.27	2,1342	0.57	6	31.82	2,8387	0.78
>1-5	A	2	9.10	3,2787	0.97	1	4.55	2,82	1.02	3	13.64	11,3217	3.06
	B	2	9.10	3,2787	0.87	1	4.55	3,82	1.02	3	13.64	3,82	1.02
	T	4	18.20	6,5574	1.84	2	9.10	6,64	2.04	6	27.27	15,1437	3.98
>5-10	A	1	4.55	8,2040	2.19	1	4.55	8,2040	2.19	2	9.10	16,4080	4.32
	B	1	4.55	8,2040	2.19	1	4.55	8,2040	2.19	2	9.10	16,4080	4.32
	T	2	9.10	16,4080	4.38	2	9.10	16,4080	4.38	4	18.20	32,8160	8.64
>10-20	A	2	9.10	16,4080	4.38	2	9.10	16,4080	4.38	2	9.10	16,4080	4.38
	B	2	9.10	16,4080	4.38	2	9.10	16,4080	4.38	2	9.10	16,4080	4.38
	T	4	18.20	32,8160	8.76	4	18.20	32,8160	8.76	4	18.20	32,8160	8.76
>20-50	A	2	9.09	67,448513	17.98	1	4.55	21,50	5.73	3	13.64	90,9853	23.79
	B	2	9.09	67,448513	17.98	1	4.55	21,50	5.73	3	13.64	90,9853	23.79
	T	4	18.18	134,897026	35.96	2	9.10	43,00	11.46	6	27.27	181,9703	47.55
>50-100	A	1	4.54	109,1005	29.09	1	4.55	59,50	15.86	2	9.09	168,5955	44.95
	B	1	4.54	109,1005	29.09	1	4.55	59,50	15.86	2	9.09	168,5955	44.95
	T	2	9.08	218,2010	58.18	2	9.10	119,00	31.72	4	18.18	386,7965	100.00
>100	A	1	4.54	109,1005	29.09	1	4.54	109,1005	29.09	1	4.54	109,1005	29.09
	B	1	4.54	109,1005	29.09	1	4.54	109,1005	29.09	1	4.54	109,1005	29.09
	T	2	9.08	218,2010	58.18	2	9.08	218,2010	58.18	2	9.08	218,2010	58.18
TOTAL	A	3	13.64	16,049	4.28	7	31.82	1,7822	0.48	15	68.18	13,3245	3.42
	B	2	9.09	67,448513	17.98	1	4.54	95,72	25.71	3	13.64	168,1901	44.95
	T	5	22.73	83,497513	22.26	8	36.36	107,441	28.19	18	81.82	281,5346	74.63

FUENTE: Registro de la Propiedad de Alicante. Elaboración Propia.

A: Finca "La Torre"

B: Finca "La Vallonga"

T: Total

\* Solo han sido consideradas las parcelas vendidas a terceros, no las segregaciones por divisiones hereditarias.

CUADRO VIII

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS ENAJENADAS DE LA VALLONGA DE BURGUNYO POR PERIODOS DE SEGREGACION Y ACTIVIDAD PROFESIONAL, DE LOS ADQUIRENTES

ACTIVIDAD PROFESIONAL	Nº Enaj.	1952-1966			1968-1978			1981-1989			TOTAL		
		%	Sup. (Has.)	%	Nº Enaj.	%	Sup. (Has.)	%	Nº Enaj.	%	%	Sup. (Has.)	%
AGRARIA	A												
	B	2	9,09	67,448513	17,98				1	4,55	0,3520	0,09	3
	T	2	9,09	67,448513	17,98				1	4,55	0,3520	0,09	3
INDUSTRIAL	A	3	13,64	16,049	4,28	2	9,09	21,0260	5,61				
	B												
	T	3	13,64	16,049	4,28	2	9,09	21,0260	5,61				
COMERCIAL	A												
	B					3	13,64	12,3823	3,30				
	T					3	13,64	12,3823	3,30				
INUR	A					1	4,55	45,6445	12,17				
	B					1	4,54	109,1005	29,09				
	T					2	9,09	154,745	41,26				
OTRAS	A					1	4,54	16,44	4,38	5	22,72	1,7827	0,48
	B												
	T					1	4,54	16,44	4,38	5	22,72	1,7827	0,48
TOTAL	A	3	13,64	16,049	4,28	7	31,82	95,4928	25,46	5	22,72	1,7827	0,48
	B	2	9,09	67,448513	17,98	1	4,54	109,1005	29,09	4	18,19	85,172	22,71
	T	5	22,73	83,497513	22,26	8	36,36	204,5933	54,55	9	40,91	86,9547	23,19

A: Finca "La Torre"  
B: Finca "La Vallonga"  
T: Total

FUENTE: Registro de la Propiedad de Alicante. Elaboración Propia.

ella periódicamente, e, incluso, ocupándola en la actualidad de modo permanente; hecho que se refleja en el propio estado de conservación del Poblet de Burgunyo<sup>138</sup>.

En líneas generales, la consolidación y acentuación del proceso de disgregación del predio de la Vallonga a partir de la segunda mitad del s. XX, y, concretamente a partir de los años 60, está determinado por las nuevas perspectivas que surgen en la zona ante la nueva orientación productiva de ese espacio.

Orientación derivada, principalmente, de la evolución de los usos del suelo propiciada por la dinámica económica y espacial de la ciudad de Alicante, y, concretamente, dimanante de la consolidación del espacio situado en torno a la Nacional 330 como el área de mayor concentración de implantaciones industriales del municipio<sup>139</sup>. Sin olvidar, por otra parte, la trascendencia que adquiere en el Campo de Alicante, la renovación del uso agrario tradicional, a través de las transformaciones de secano a regadío; transformaciones que, gracias al desarrollo de nuevos medios de captación, almacenamiento y distribución de las

-----

<sup>138</sup> El lugar de la Vallonga de Burgunyo fue siendo abandonado por sus pobladores (probablemente aparceros, arrendatarios o jornaleros), como se pone de manifiesto en la reducción que había experimentado hacia 1884, cuando, con motivo de su inscripción en el Registro de la Propiedad como una única finca, se declara solamente la existencia de 17 casas para colonos; mientras Madoz, en su descripción del lugar, menciona la existencia de "40 casitas de solo piso bajo". Derribado el poblado posteriormente, fue rehabilitado más tarde para la construcción de bodegas y viviendas adosadas a ellas junto a la casa-torre de los dueños. En la actualidad sólo residen dos familias, al margen de los dueños, encargadas de su mantenimiento.

<sup>139</sup> GARCIA CARRETERO, M<sup>a</sup> DEL M.: *Dinámica de los espacios industriales en el municipio de Alicante*. Colec. Estudios Municipales, Ayuntamiento de Alicante, Alicante, 1991.

aguas en este ámbito<sup>140</sup>, permiten sustituir los cultivos tradicionales del secano (algarrobos, almendros, ...) por otros de mayor rentabilidad (vid, hortalizas, ...), orientados principalmente a la exportación, entre los que destacan los cultivos de invierno<sup>141</sup>.

El carácter de la actividad industrial implantada en este eje viene condicionado por la orientación productiva y funcional de la ciudad, que nunca se ha configurado como un núcleo industrial propiamente dicho, sino que, tras mantener una importante tradición comercial, se consolida, en la actualidad, como ciudad de servicios, papel potenciado por la especialización turística de la franja litoral.

Por tanto, la orientación terciaria predominante se ha venido complementando, como ha analizado M<sup>a</sup> del Mar García<sup>142</sup>, con el desarrollo de actividades como el almacenaje y la distribución, la fabricación de bienes de consumo final, la venta al por mayor, o la instalación de talleres de pequeño y mediano tamaño principalmente, que, de forma espontánea en un principio, se han localizado en torno a las principales vías de acceso a la ciudad. Fenómeno englobado en el proceso de descentralización de

-----  
<sup>140</sup> MORALES GIL, A. y BRU RONDA, C.: "Disponibilidades hídricas y modernas técnicas de embalse en el Campo de Alicante". *Investigaciones Geográficas*, n<sup>o</sup> 2, 1984, pp. 19-50.

<sup>141</sup> COSTA MAS, J.: "La agricultura de los cosechero-exportadores del tomate de invierno en Alacant". *Investigaciones Geográficas*, n<sup>o</sup> 2, Alicante, 1984, pp. 63-85.

<sup>142</sup> GARCIA CARRETERO, M<sup>a</sup> del M. (1991): Op. Cit.

ciertas actividades del núcleo urbano, ante el crecimiento experimentado por la ciudad y la consiguiente ocupación de las periferias más cercanas y dotadas de una mejor accesibilidad.

El interés municipal por planificar la ubicación de las actividades industriales y consolidar y ordenar los espacios ya definidos por una dedicación industrial se plasma, tras un evidente periodo de anarquía en los asentamientos de esta naturaleza, en el Plan General de Ordenación Urbana de 1968/73, y en la redacción de los Planes Parciales que afirmaban las zonas en las que de modo espontáneo se había implantado esta actividad. Esta iniciativa municipal se vio completada por la génesis, siguiendo las mismas pautas de localización, de otros polígonos industriales de promoción estatal y privada<sup>143</sup>.

De este modo, la Nacional 330 (que atraviesa el antiguo predio señorial dividiéndolo en dos sectores a ambos lados de la carretera), por otra parte eje de gran tradición industrial desde finales del siglo pasado<sup>144</sup>, se configura y consolida como un espacio de asentamiento "industrial"; hecho patente en la instalación a lo largo de este eje de tres polígonos industriales: "Llano del Espartal-Nueva Florida" (de generación espontánea, pero planificado posteriormente por el ayuntamiento), "El Pla de la Vallonga" (promovido por la iniciativa privada completamente, aunque bajo el control municipal tras finalizarse

-----  
<sup>143</sup> GARCIA CARRETERO, M<sup>a</sup> del M. (1991): Op. Cit., pp. 38-39.

<sup>144</sup> Fundamentalmente pequeños talleres y almacenes, aunque también se implantó alguna fábrica de mayores dimensiones (por ejemplo de cerámica). GARCIA CARRETERO, M<sup>a</sup> del M. (1991): Op. Cit., pp. 225-229.

su urbanización) y "Las Atalayas" (de promoción estatal, aunque escasamente ocupado en la actualidad).

En consecuencia, la revalorización experimentada por este ámbito, derivada de la nueva especialización funcional (frente a la tradicional actividad agrícola de secano de escasa rentabilidad) que de modo paulatino ha ido adquiriendo, consolidada y acentuada desde la implantación de una actuación planificadora, incidirá de un modo determinante en la fragmentación de esa gran propiedad, favoreciendo la sustitución, en los sectores enajenados, del uso agrario tradicional (siempre que éste todavía se mantuviese, propiciando, en caso contrario, la ocupación de amplios espacios abandonados con restos de ese antiguo aprovechamiento de secano marginal) por otro nuevo de tipo industrial-comercial (en relación a la naturaleza de la actividad industrial del municipio), que se establece, en un caso, en conexión con las áreas planificadas y destinadas a ese fin, y, en otro, respondiendo a una ubicación espontánea y puntual. En cierto sentido, esa ubicación dependerá del periodo de implantación de ese uso, aunque siempre en las zonas más próximas a la carretera, produciéndose una cierta marginación de los espacios más interiores.

Se ha de señalar, sin embargo, que en algunos sectores no se han visto todavía materializadas estas expectativas; este es el caso del polígono industrial de Las Atalayas, escasamente ocupado a pesar de su nivel de dotación infraestructural y la enajenación de la mayor parte de las parcelas; y de otras porciones vendidas a mercantiles o industriales sobre las que no

se ha implantado todavía ninguna actividad, situación que puede responder a un cambio producido en las condiciones que determinan la dinámica de esas empresas o bien a una actitud meramente especulativa de las mismas.

El ritmo de fragmentación seguido está íntimamente ligado al proceso de consolidación de la orientación industrial-comercial de la zona, que también se hace patente en la evolución de la dedicación profesional de los adquirentes de las diversas parcelas enajenadas. Por esta razón, se ha procurado analizar el proceso de fragmentación partiendo de la consideración de tres periodos en los que se agrupan los años durante los cuales se han producido enajenaciones (1952-66, 1968-78, 1981-89). Su elección está fundamentada en las expectativas existentes en la zona en cada momento, en la actividad profesional de los nuevos propietarios (que permite inducir una cierta orientación en la implantación de un uso determinado, aunque no siempre se consolide) y en la actuación de algún agente externo, de gran importancia para la evolución posterior de este espacio, como es el caso de las expropiaciones realizadas por el INUR (Instituto nacional de Urbanización) para la constitución del polígono industrial de Las Atalayas.

El proceso de disgregación del predio de la Vallonga aparece detallado en los diversos cuadros presentados (del V al XIV), tanto en los que reflejan las enajenaciones realizadas año

por año<sup>145</sup>, en las que se incluyen una serie de datos sobre las características de los sujetos que intervienen en cada transacción (cuadros V y VI), como los que muestran su distribución por periodos de segregación, tamaño y actividad profesional de los adquirentes (cuadros VII y VIII). Las nuevas ventas de que son objeto algunas de las parcelas segregadas, afectando en unos casos a la totalidad de su superficie, mientras en otros solamente se detecta una enajenación parcial de las mismas, también han sido tomadas en consideración (cuadros IX-XIV).

Desde una perspectiva global, puede afirmarse que, a pesar de que el mayor número de segregaciones se ha producido en la Torre (un 68,18 % frente al 31,82 % de la Vallonga -ver cuadros VII y VIII-) corresponde a la Vallonga la mayor proporción de superficie enajenada (el 69,78 % frente al 30,22 de la Torre). Este hecho viene determinado por la mayor extensión superficial de las parcelas procedentes de la Vallonga, que raras veces descienden de las 20 hectáreas (concretamente sólo se han dado dos casos, uno inferior a media hectárea y otro a 4 hectáreas), y que, en una ocasión, llegan a superar las 100 hectáreas (ver cuadro VI). Por el contrario, respecto a la Torre se da el caso inverso, pues 14 de las 15 enajenaciones producidas

-----  
<sup>145</sup> Estos cuadros contienen también los precios confesados de venta, pues, a pesar de ser poco veraces y fidedignos, pueden actuar como elementos de referencia.



CUADRO IX

2º PROCESO DE SEGREGACIÓN DE LAS FINCAS ORIGINARIAMENTE ENAJENADAS DEL PREDIO DE LA VALLONGA DE BURGUNYO

AÑO	SUP. (HAS.)	SUP. ORIGINAL	FINCA	HA/TOTAL ACUMULADO	ADQUIRENTE	ACTIVIDAD	RESIDENCIA	TRANSFERENTE	PRECIO(PTS)
1960	16,0301	33,8625	Vallonga	16,0301	Fco R. Borja Sempere	Industrial	Madrid	Fco Pellín Torres	3.500
1961	0,1056	33,586013	Vallonga	16,1357	Particular	Agraria	Alicante(Foncalent)	Fco Pellín Torres	4.000
1962	0,116446	33,586013	Vallonga	16,252146	Particular	Agraria	Alicante(Foncalent)	Fco Pellín Torres	1.000
1962*	0,6314	33,586013	Vallonga	16,883546	Fco Pellín Arqués	Agraria	Alicante	Fco Pellín Torres	2.000
1962*	9,255055	33,586013	Vallonga	26,138601	Fco Pellín Arqués	Agraria	Alicante	Fco Pellín Torres	8.000
1962*	7,806336	33,586013	Vallonga	33,944937	Emilia Pellín Arqués	Agraria	Alicante	Fco Pellín Torres	10.000
1962*	3,356631	33,586013	Vallonga	37,301568	Rosa Pellín Arqués	Otras	Alicante	Fco Pellín Torres	5.000
1962*	12,314545	33,586013	Vallonga	49,616113	Ramón Pellín Arqués	Agraria	Alicante(Vallonga)	Fco Pellín Torres	
1962*	4,294538	33,8625	Vallonga	53,910651	Emilia Pellín Arqués	Agraria	Alicante	Fco Pellín Torres	4.000
1962*	4,123144	33,8625	Vallonga	58,033795	Ramón Pellín Arqués	Agraria	Alicante(Vallonga)	Fco Pellín Torres	4.000
1962*	3,333687	33,8625	Vallonga	61,367482	Rosa Pellín Arqués	Otras	Alicante(Vallonga)	Fco Pellín Torres	2.000
1962*	5,443873	33,8625	Vallonga	66,811355	Fco Pellín Arqués	Agraria	Alicante	Fco Pellín Torres	4.000
1976**	12,6492	21,0125***	Torre	79,460555	INUR			Fco R. Borja Sempere	3.432.712
1981	9,4856	9,4856	Torre	88,946155	"Agroalicante, S.A."	Comercial	Hellín	Particulares****	23.000.000
1982	0,6440	0,6440	Torre	89,590155	"Agroalicante, S.A."	Comercial	Hellín	"Transportes Torre- illas y García,S.L."	530.000
1985	8,3633	21,0125***	Torre	97,953455	Merc. "Jimsten S.A."	Comercial	Alicante(Pla Vallong)	Fco R. Borja Sempere	6.000.000
1987	0,8652	0,8652	Torre	98,818655	Particular	Agraria	Alicante(Rebolledo)	Particular	3.000.000
1989	1,0823	1,126350	Torre	99,900955	"Agroalicante, S.A."	Comercial	Hellín	Particulares	11.000.000

FUENTE: Registro de la Propiedad de Alicante. Elaboración Propia

- \* Donación de nuda propiedad y reserva de usufructo (1-V-1962)
- \*\* Expropiación. Fecha del acta de ocupación y pago (13-IV-1976)
- \*\*\* Constituida por la agrupación (en 1974) de las 11,1063 Has. adquiridas a Carmen Gómez-Tortosa con otras dos fincas más
- \*\*\*\* Rafael y Manuel Torrecillas Sorio; representante el primero, de "Torrecillas y García, S.L." y "Agroalicante, S.A."

CUADRO X

## DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS OBJETO DE UNA SEGUNDA ENAJENACION POR PERIODOS DE SEGREGACION Y TAMAÑO

TAMAÑOS (HAS.)	1952-1966			1968-1978			1981-1989			TOTAL			
	NºEnaj.	%	Sup. (Has.)	NºEnaj.	%	Sup. (Has.)	NºEnaj.	%	Sup. (Has.)	NºEnaj.	%	Sup. (Has.)	
0-1	A						2	11,11	1,5092	1,51	2	11,11	1,5092
	B	3	16,67	0,853446	0,86						3	16,67	0,853446
	T	3	16,67	0,853446	0,86		2	11,11	1,5092	1,51	5	27,78	2,367646
1-5	A						1	5,56	1,0823	1,08	1	5,56	1,0823
	B	5	27,77	20,551873	20,57						5	27,77	20,551873
	T	5	27,77	20,551873	20,57		1	5,56	1,0823	1,08	6	33,33	21,634173
5-10	A						2	11,11	17,8489	17,87	2	11,11	17,8489
	B	2	11,11	17,061391	17,08						2	11,11	17,061391
	T	2	11,11	17,061391	17,08		2	11,11	17,8489	17,87	4	22,22	34,910291
10-20	A						1	5,56	12,6492	12,66	1	5,56	12,6492
	B	2	11,11	28,344645	28,37						2	11,11	28,344645
	T	2	11,11	28,344645	28,37		1	5,56	12,6492	12,66	3	16,67	40,993845
TOTAL	A						1	5,56	12,6492	12,66	5	27,28	20,4404
	B	12	66,66	66,811355	66,88						6	33,34	33,0896
	T	12	66,66	66,811355	66,88		1	5,56	12,6492	12,66	12	66,66	66,811355
											18	100,00	99,900955

FUENTE: Registro de la Propiedad de Alicante. Elaboración Propia.

A: Finca "La Torre"  
 B: Finca "La Vallonga"  
 T: Total

CUADRO XI

## DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS OBJETO DE UNA SEGUNDA ENAJENACION POR PERIODOS DE SEGREGACION Y ACTIVIDAD PROFESIONAL DE LOS ADQUIRENTES

ACTIVIDAD PROFESIONAL	NoEnaj.	1952-1966			1968-1978			1981-1989			TOTAL					
		%	Sup. (Has.)	%	NoEnaj.	%	Sup. (Has.)	%	NoEnaj.	%	Sup. (Has.)	%				
AGRARIA	A															
	B	9	50,00	44,090937	44,13				1	5,55	0,8652	10,87	1	5,56	0,8652	0,87
	T	9	50,00	44,090937	44,13				1	5,55	0,8652	10,87	10	55,56	44,956137	45,00
INDUSTRIAL	A															
	B	1	5,56	16,0301	16,05								1	5,56	16,0301	16,05
	T	1	5,56	16,0301	16,05								1	5,56	16,0301	16,05
COMERCIAL	A															
	B								4	22,22	19,5752	19,59	4	22,22	19,5752	19,59
	T								4	22,22	19,5752	19,59	4	22,22	19,5752	19,59
INUR	A															
	B								1	5,55	12,6492	12,66	1	5,55	12,6492	12,66
	T								1	5,55	12,6492	12,66	1	5,55	12,6492	12,66
OTRAS	A															
	B	2	11,11	6,690318	6,70								2	11,11	6,690318	6,70
	T	2	11,11	6,690318	6,70								2	11,11	6,690318	6,70
TOTAL	A															
	B	12	66,67	66,811355	66,88				1	5,55	12,6492	12,66	5	27,78	20,4404	20,46
	T	12	66,67	66,811355	66,88	1	5,55	12,6492	12,66	5	27,78	20,4404	18	100,00	99,900955	100,00

FUENTE: Registro de la Propiedad de Alicante. Elaboración Propia.

A: Finca "La Torre"

B: Finca "La Vallonga"

T: Total

CUADRO XII

RELACIÓN DE FINCAS INICIALMENTE PERTENECIENTES A LA VALLONGA DE BURGUNYO OBJETO DE UNA TERCERA ENAJENACIÓN

ANO	SUP.(HAS.)	SUP. ORIGINAL	FINCA	HA/TOTAL ACUMULADO	ADQUIRENTE	ACTIVIDAD	RESIDENCIA	TRANSFERENTE	PRECIO(PTS)
1965	0,116446	0,116446	Vallonga	0,116446	Particular	Industrial	Alicante	Particular	15.000
1965	0,1056	0,1056	Vallonga	0,222046	Particular	Industrial	Alicante	Particular	
1968	0,6314*	0,6314	Vallonga	0,853446	"Explotaciones Vallonga S.A."**	Comercial	Alicante	Fco Pellín Arqués	
1968	9,255055*	9,255055	Vallonga	10,108501	"Exp. Vallonga S.A."	Comercial	Alicante	Fco Pellín Arqués	1.000.000
1968	7,806336*	7,806336	Vallonga	17,914837	"Exp. Vallonga S.A."	Comercial	Alicante	Emilia Pellín Arqués	899.000
1968	3,356631*	3,356631	Vallonga	21,271468	"Exp. Vallonga S.A."	Comercial	Alicante	Rosa Pellín Arqués	385.000
1968	6,009108*	12,314545	Vallonga	27,280576	"Exp. Vallonga S.A."	Comercial	Alicante	Ramón Pellín Arqués	694.000
1969	3,333687	3,333687	Vallonga	30,614263	Ramón Pellín Arqués	Agraria	Alicante (Vallonga)	Rosa Pellín Arqués	50.000
1978	5,479337***	12,314545	Vallonga	36,0936	INUR			Ramón pellín Arqués	2.462.000

FUENTE: Registro de la Propiedad de Alicante. Elaboración Propia.

\* Fincas aportadas a la Mercantil "Explotaciones Vallonga S.A." por los herederos de Fco Pellín Torres a cambio de acciones de la sociedad. De su agrupación surgió una de las fincas integrantes de la superficie sobre la que se creará el Polígono Industrial del Pla de la Vallonga; empresa acometida por la citada mercantil.

\*\* Constituida el 21-XII-1968 e integrada por los siguientes socios: Fco, Ramón, Rosa y Emilia Pellín Arqués; Rosa Arqués Boix (poseedora del usufructo vitalicio de las fincas agrupadas y aportadas); Antonio Hernández Quirante, Ezequiel Espí Gilabert, José Monllor Raduan, Luis Gisbert Casanova y Bernardo Terol Aracil.

\*\*\* Expropiación. Acta de ocupación y pago (4-XII-1978).

CUADRO XIII

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS OBJETO DE UNA TERCERA ENAJENACION POR PERIODOS DE SEGREGACION Y TAMAÑO

TAMAROS (HAB.)	1952-1966			1968-1978			1981-1989			TOTAL		
	Nº Parcel.	Sup. (Hec.)	% Negoci.	Nº Parcel.	Sup. (Hec.)	% Negoci.	Nº Parcel.	Sup. (Hec.)	% Negoci.	Nº Parcel.	Sup. (Hec.)	% Negoci.
0-1	A											
	B	26,20	0,000046	1,04	2,624	4,73	7	17,77	31,34	7	17,77	31,34
	T	26,20	0,000046	1,04	2,624	4,73	7	17,77	31,34	7	17,77	31,34
1-5	A											
	B			24,00	0,000000	0,00						
	T			24,00	0,000000	0,00						
15-10	A											
	B			44,00	0,000000	0,00	4	44,00	0,000000	4	44,00	0,000000
	T			44,00	0,000000	0,00	4	44,00	0,000000	4	44,00	0,000000
TOTAL	A	26,20	0,000046	1,04	2,624	4,73						
	B											
	T	26,20	0,000046	1,04	2,624	4,73						

FUENTE: Registro de la Propiedad de Alicante. Elaboración propia.

A: Finca "La Torre"  
B: Finca "La Vallones"  
C: Total

CUADRO XIV

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS OBJETO DE UNA TERCERA ENAJENACION POR PERIODOS DE SEGREGACION Y ACTIVIDAD PROFESIONAL DE LOS ADQUIRENTES

ACTIVIDAD PROFESIONAL	1952-1966			1968-1978			1981-1989			TOTAL		
	Nº Enaj.	% Sup. (Has.)	% N.º Enaj.	% Sup. (Has.)	% N.º Enaj.	% Sup. (Has.)	% N.º Enaj.	% Sup. (Has.)	% N.º Enaj.	% Sup. (Has.)	% N.º Enaj.	% Sup. (Has.)
AGRARIA	A											
	B	1	11,11	3,33	687	9,24	1	11,11	3,33	687	9,24	
	T	1	11,11	3,33	687	9,24	1	11,11	3,33	687	9,24	
INDUSTRIAL	A											
	B	2	22,22	0,22	2046	0,61	2	22,22	0,22	2046	0,61	
	T	2	22,22	0,22	2046	0,61	2	22,22	0,22	2046	0,61	
COMERCIAL	A											
	B	5	55,56	27,05	853	74,97	5	55,56	27,05	853	74,97	
	T	5	55,56	27,05	853	74,97	5	55,56	27,05	853	74,97	
INUR	A											
	B	1	11,11	5,47	9337	15,18	1	11,11	5,47	9337	15,18	
	T	1	11,11	5,47	9337	15,18	1	11,11	5,47	9337	15,18	
OTRAS	A											
	B											
	T											
TOTAL	A											
	B	2	22,22	0,22	2046	0,61	7	77,78	35,87	1554	99,39	100,00
	T	2	22,22	0,22	2046	0,61	7	77,78	35,87	1554	99,39	100,00

A: Finca "La Torre"  
B: Finca "La Vallonga"  
T: Total

FUENTE: Registro de la propiedad de Alicante. Elaboración Propia.

CUADRO XIV

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS OBJETO DE UNA TERCERA ENAJENACION POR PERIODOS DE SEGREGACION Y ACTIVIDAD PROFESIONAL DE LOS ADQUIRENTES

ACTIVIDAD	1952-1966			1968-1978			1981-1989			TOTAL			
	NºEnaj.	%	Sup.(Has.)	NºEnaj.	%	Sup.(Has.)	NºEnaj.	%	Sup.(Has.)	NºEnaj.	%	Sup.(Has.)	
PROFESIONAL	A												
	B			1	11,11	3,33687	9,24			1	11,11	3,33687	9,24
	T			1	11,11	3,33687	9,24			1	11,11	3,33687	9,24
AGRARIA	A												
	B												
	T												
INDUSTRIAL	A												
	B	2	22,22	0,222046	0,61			2	22,22	0,222046	0,61		
	T	2	22,22	0,222046	0,61			2	22,22	0,222046	0,61		
COMERCIAL	A												
	B			5	55,56	27,05853	74,97	5	55,56	27,05853	74,97		
	T			5	55,56	27,05853	74,97	5	55,56	27,05853	74,97		
INUR	A												
	B			1	11,11	5,479337	15,18	1	11,11	5,479337	15,18		
	T			1	11,11	5,479337	15,18	1	11,11	5,479337	15,18		
OTRAS	A												
	B												
	T												
TOTAL	A												
	B	2	22,22	0,222046	0,61	7	77,78	35,871554	99,39	9	100,00	36,0936	100,00
	T	2	22,22	0,222046	0,61	7	77,78	35,871554	99,39	9	100,00	36,0936	100,00

FUENTE: Registro de la propiedad de Alicante. Elaboración Propia.

A: Finca "La Torre"  
B: Finca "La Vallonga"  
T: Total

CUADRO XV

DISTRIBUCION DEL TOTAL DE SEGREGACIONES SEGUN LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE LOS ADQUIRENTES Y EL PERIODO DE SEGREGACION

PERIODO	ACTIVIDAD PROFESIONAL									
	Agraria Nº Enaj. %	Industrial Nº Enaj. %	Comercial Nº Enaj. %	INUR Nº Enaj. %	Otras Nº Enaj. %	TOTAL				
1952-66	11 22,45	6 12,25			2 4,08	19	38,78			
1968-78	1 2,04	2 4,08	8 16,33	4 8,16	1 2,04	16	32,65			
1981-89	2 4,08		7 14,28		5 10,21	14	28,57			
TOTAL	14 28,57	8 16,33	15 30,61	4 8,16	8 16,33	49	100,00			

FUENTE: Registro de la Propiedad de Alicante. Elaboración Propia.



CUADRO XVI

DISTRIBUCION DEL TOTAL DE SEGREGACIONES SEGUN LA ACTIVIDAD PROFESIONAL Y LA RESIDENCIA DE LOS ADQUIRENTES

RESIDENCIA ADQUIRENTES	ACTIVIDAD PROFESIONAL										TOTAL
	Agraria Nº Enaj. %	Industrial Nº Enaj. %	Comercial Nº Enaj. %	INUR Nº Enaj. %	OTRAS Nº Enaj. %						
Alicante	14 28,57	5 10,21	9 18,37		8 16,33	36	73,48				
Provincia		1 2,04				1	2,04				
Resto		2 4,08	6 12,24	4 8,16		12	24,48				
TOTAL	14 28,57	8 16,33	15 30,61	4 8,16	8 16,33	49	100,00				

FUENTE: Registro de la Propiedad de Alicante. Elaboración Propia.

no superan las 20 hectáreas, siendo la extensión más frecuente la inferior a 1 hectárea, y, en menor medida, la comprendida entre 1 y 5 hectáreas (ver cuadro V)<sup>146</sup>.

Estas dimensiones están relacionadas con la actividad profesional de los adquirentes y el posible uso que de ellas se puede deducir<sup>147</sup>; pues, mientras en el caso de la Vallonga los nuevos propietarios son agricultores, sociedades mercantiles (alguna de ellas vinculada a la producción y comercialización de productos agrarios) o el INUR (posteriormente el SEPES -Sociedad Estatal para la Promoción y Equipamiento de Suelo-), por tanto mayores demandadores de superficie, en el de la Torre predominan industriales y empleados, junto a alguna sociedad mercantil (al margen del INUR), con unas menores necesidades de espacio, por la propia naturaleza de los usos a establecer, que, sobre todo en el caso de los particulares, están orientados hacia la segunda residencia (ver cuadros V, VI y VIII).

Fruto de la revalorización que experimenta este espacio, una porción importante de la superficie inicialmente segregada (el 26,44 %, aproximadamente unas 100 hectáreas), sobre todo en los primeros años, vuelve a ser objeto de una segunda enajenación (ver cuadro IX), e, incluso, más de la

-----  
<sup>146</sup> Es sintomático el hecho de que la única segregación que supera las 20 has. de superficie (45 has. 64 áreas 45 cent.) se haya producido como consecuencia de una expropiación del INUR.

<sup>147</sup> Pues, generalmente, en el Registro de la Propiedad no se especifica el tipo de uso que se hace de esos terrenos. Sólo se menciona si son rústicos o urbanos, y, en algunas ocasiones, la implantación de una actividad industrial o residencial, que, en este último caso, suele ser de segunda residencia.

tercera parte de esa superficie (el 36,13 % -el 9,62 % del total de la superficie vendida en un principio-) cambió de propietarios por tercera vez (ver cuadro XII).

Se aprecia igualmente en estos casos un cambio en la actividad profesional de los propietarios, de acuerdo con la tendencia detectada hacia la sustitución de usos del suelo, aunque, como ya se ha señalado anteriormente, algunas zonas no hayan experimentado todavía la implantación de ninguna actividad determinanda, manteniéndose amplios espacios vacíos con restos del antiguo aprovechamiento tradicional. Efectivamente, aunque en algunos casos los transferentes son industriales o mercantiles, predominan los que manifiestan una dedicación agraria, lo que implicaría la sustitución de una orientación agraria por otra de tipo industrial-comercial, o bien una renovación y consolidación de las actividades de esta naturaleza (cuadros XI y XIV); pues una actividad de tipo comercial es la que desarrollan la mayor parte de los nuevos propietarios.

En este sentido, es necesario matizar que el alto porcentaje que representa la actividad agraria entre los adquirentes de las parcelas sometidas a una segunda enajenación responde a las divisiones, de índole hereditaria, realizadas por Fco Pellín Torres, entre sus hijos, de las dos fincas por él adquiridas a D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Desamparados Navarrete y del Solar. De la agrupación de las porciones procedentes de una de ellas (El "Ventorrillo de Guerra o Atalayas") en manos de la mercantil "Explotaciones Vallonga S.A." (por cesión de la familia

Pellín-Arqués a cambio de acciones de la sociedad) surgiría una de las fincas sobre cuya superficie se instalaría el polígono industrial del Pla de la Vallonga<sup>148</sup> (cuadro XII).

La extensión superficial de estas nuevas segregaciones, que principalmente afectan a fincas procedentes de la Vallonga (cuadros IX, X, XII y XIII), no supera en ninguno de los casos las 20 hectáreas (las sometidas a una tercera enajenación no exceden las 10 hectáreas), estando representados los distintos grupos distinguidos; se evidencia, de este modo, la existencia de un proceso hacia una mayor fragmentación de la propiedad de la tierra.

Durante el primer periodo de segregación seleccionado, que agrupa las enajenaciones producidas entre 1952 y 1966, la dedicación productiva de la zona se aproxima al mantenimiento de la actividad agrícola tradicional o responde a una actividad industrial implantada espontáneamente, y de un carácter bastante diferenciado de la que se instalará posteriormente (son cerámicas principalmente, algunas fuera de funcionamiento en la actualidad).

Es durante estos catorce años, considerando las ventas de parcelas que proceden directamente de la gran propiedad, cuando se produce el menor número de segregaciones (22,73 %), aunque la superficie afectada por éstas (22,26 %, sobre las 83 hectáreas) sea similar a la del tercer periodo, que sin embargo

-----

<sup>148</sup> Registro de la Propiedad de Alicante, Lib. 8, fs. 227, 231, 235 y 240, sección 2ª; y lib. 129, f. 164 y lib. 134, fs. 197-200, sección 3ª.

recoje el mayor número de ventas. Por el contrario, las que son objeto de una segunda enajenación durante esta etapa (66,66 %) representan el 66,88 % de la superficie, y constituyen el núcleo principal al que pertenecerán las fincas enajenadas por tercera vez (proceso apenas apreciable durante este periodo).

El segundo periodo considerado, durante el cual se produce la segregación y venta de más de la mitad de la superficie del antiguo predio señorial afectada por este proceso (aproximadamente unas 204 hectáreas), abarca los años comprendidos entre 1968 y 1978. Este es un periodo fundamental para la consolidación de la nueva orientación productiva de este ámbito, pues en estos años se gesta la creación de dos de los polígonos industriales ubicados en el eje oeste de acceso a la ciudad; creación que incidirá, a través de dos modos distintos, dependiendo del tipo de promoción del polígono, en el proceso de fragmentación de la gran propiedad, al incluir dentro de sus límites parte del patrimonio rústico de los Navarro.

Las fechas elegidas responden, por una parte, a la cesión, en 1968, de las porciones procedentes de la finca "Ventorrillo de Guerra" (comprendida en un principio en "La Vallonga"), pertenecientes a los hermanos Pellín-Arqués, a la mercantil "Explotaciones Vallonga S.A.", a cambio de acciones de la citada sociedad; y, por otro lado, a las últimas actas registradas de ocupación y pago de los sectores expropiados por el INUR para la creación del polígono industrial de Las Atalayas.

Como ya ha sido expuesto anteriormente, las aproximadamente 27 hectáreas procedentes de la finca "La Vallonga", propiedad de M<sup>a</sup> de los Desamparados Navarrete, que pasarían a formar parte de los terrenos del polígono industrial del Pla de la Vallonga<sup>149</sup>, un espacio industrial promovido por la iniciativa privada<sup>150</sup>, y que, teóricamente, entró en funcionamiento en 1976<sup>151</sup>, habían sido adquiridas mediante compra por D. Fco Pellín Torres; mientras que la superficie que, procedente tanto de "La Torre" como de "La Vallonga", había sido englobada en la zona delimitada para el polígono de Las Atalayas

-----

<sup>149</sup> La extensión superficial de este polígono se aproxima a las 104 has. En un principio, sólo se incorporó a la sociedad la superficie comprendida en el "Ventorrillo de Guerra", pero posteriormente, en 1971, Romualdo Terol Aracil, otro de sus componentes, aportó una porción ligeramente superior a las 53 has., parte de una finca de su propiedad -"El Gasset"- limítrofe a la anterior; pretendiendo, de este modo, realizar una ampliación de capital. GARCIA CARRETERO, M. del M. (1991): Op. Cit., p. 141.

<sup>150</sup> Aunque, en un principio, se mantiene al margen de los proyectos municipales encaminados al equipamiento y promoción de suelo industrial -a pesar de que en la Memoria de revisión del P.G.O.U. de 1973 se menciona el espacio que ocupa el polígono como de posible utilización industrial, en relación a futuras ampliaciones del polígono del Llano del Espartal; y que posteriormente participa del ámbito en el que, a través de la revisión del P.G.O.U. de 1987, se intenta consolidar un "área de transporte" que concentre a las empresas de este tipo en las áreas industriales de la carretera de Madrid-, se planteó su cesión al Ayuntamiento una vez completadas la urbanización y la dotación infraestructural de ese espacio. GARCIA CARRETERO, M. del M. (1991): Op. Cit., pp. 134-138.

<sup>151</sup> Puesto que previamente a la aprobación definitiva del Plan Parcial, se habían realizado ya un número importante de implantaciones industriales; situación conocida y tolerada por el Ayuntamiento ante la escasez de suelo industrial en esos instantes. En estos términos se expresa la Memoria del Plan parcial, que recoge, como objetivo de la primera fase del Plan, la legalización de lo urbanizado hasta ese momento. Memoria del Plan Parcial del Polígono Industrial del Pla de la Vallonga. Explotaciones Vallonga S. A.. Ayuntamiento de Alicante.

(aproximadamente 173 hectáreas), había sido adquirida mediante expropiación (tanto de la familia Navarro, como de los nuevos propietarios de las fincas por ellos segregadas), debido a la naturaleza del organismo promotor del mismo, dependiente del Ministerio de la Vivienda<sup>152</sup>.

La extensión superficial inicialmente prevista para Las Atalayas, 450 hectáreas aproximadamente<sup>153</sup>, no se llegó a urbanizar en su totalidad, puesto que sólo se finalizó la primera de las tres fases propuestas en el plan (1977-78), con una extensión ligeramente superior a las 109 has.; permaneciendo el resto en manos del M.O.P.U. sin ninguna modificación, a pesar de la descalificación de 273 has. en la revisión del P.G.O.U. de 1987<sup>154</sup>.

La expropiación afectó principalmente al sector del antiguo predio señorial propiedad de M<sup>a</sup> Desamparados Navarrete y del Solar, pero incluía la zona en la que se hallaban ubicados el Poblet de Burgunyo y el Palmeral; en los que se estableció la zona verde prevista para el polígono por consejo del

-----  
<sup>152</sup> El polígono de Las Atalayas, de promoción estatal, se inserta en el tercer Programa de Promoción de Suelo Industrial de la Gerencia de urbanización (1965-69) (INUR a partir de 1972); concretamente en el Subprograma B, dirigido a la potenciación de las implantaciones industriales en ciudades de tamaño medio, no integradas en Polos de Desarrollo, y en las que se puede detectar una cierta demanda de suelo industrial. A pesar de la temprana tramitación del proyecto (1968), su desarrollo posterior ha sido muy lento. GARCIA CARRETERO, M. del M. (1991): Op. Cit., pp. 178-218.

<sup>153</sup> Memoria y Anejos del Plan Parcial del Polígono industrial de Las Atalayas. Dirección General de Urbanismo. Gerencia de Urbanización. Ayuntamiento de Alicante.

<sup>154</sup> GARCIA CARRETERO, M. del M. (1991): Op. Cit., p. 177.

Ayuntamiento, puesto que de otro modo hubieran sido destruidos. Tras la recalificación, como suelo no urbanizable, realizada por el Ayuntamiento, permanecen más alejados del espacio ocupado actualmente por el polígono<sup>155</sup>.

Junto a estas segregaciones, se producen otras de menor cuantía, probablemente propiciadas por esta dinámica, que van a parar a manos de industriales o sociedades mercantiles.

Durante el tercer periodo, desde 1981 a 1989, continúa el proceso de disgregación; ahora incentivado por la consolidación de las expectativas despertadas en la etapa anterior tras la gestación de los diversos polígonos industriales ubicados en la Carretera Nacional Madrid- Alicante (actualmente autovía), ante la reciente evolución y el replanteamiento actual de la ordenación de esos espacios, íntimamente ligado al mantenimiento de la demanda de suelo industrial en el municipio.

Los nuevos propietarios, en este caso, son, fundamentalmente, sociedades mercantiles, que agrupan la práctica totalidad de la superficie enajenada en este periodo, que, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, se ubica en las proximidades del área ocupada por ambos polígonos (generalmente en sus mismos lindes), y, generalmente, en contacto con la carretera. También se distinguen una serie de particulares, aunque éstos poseen una porción ínfima de ese total, que generalmente orientan al establecimiento de una segunda residencia.

---

<sup>155</sup> GARCIA CARRETERO, M. del M. (1991): Op. Cit., pp. 198-205.



Es en este periodo donde también se producen las ventas, de extensión considerable (59,50 has. en un caso, y 21,50 has. en otro) a sociedades mercantiles orientadas a la producción y comercialización de productos agrarios, acordes al proceso comentado anteriormente de renovación de la actividad agrícola tradicional.

En conclusión, el establecimiento y consolidación de los polígonos industriales del Pla de la Vallonga y Las Atalayas, en estrecho contacto con esta propiedad, ha actuado como indicador en la fluidez de este proceso. Además, se hace necesario poner de relieve, que en esta dinámica ocupan una parte importante las nuevas ventas realizadas a partir de antiguas segregaciones, que de este modo se incorporan también al proceso, adoptando una orientación productiva diferente, en algunos casos, adaptada a las nuevas connotaciones de este espacio.

Por último, cabría señalar, que este proceso de expansión del regadío y de sustitución de cultivos ha incidido también, aunque en un sentido diferente, en la configuración actual del antiguo predio señorial; pues supone una nueva orientación productiva de este espacio agrario, fundamentada en la explotación a través del arrendamiento de gran parte de su superficie a compañías especializadas en cultivos de exportación (tomate, alcachofas, ...), aunque combinada con sectores en los que todavía se mantiene el secano tradicional, y otros, de menor importancia en el conjunto, cultivados directamente por los propietarios.

## CAPÍTULO 7

PEÑACERRADA. UN PEQUEÑO SEÑORÍO DE TARDÍA FUNDACIÓN EN LA  
HUERTA DE MUCHAMIEL.

## CAPITULO 7

### PEÑACERRADA. UN PEQUEÑO SEÑORIO DE TARDIA FUNDACION EN LA HUERTA DE MUCHAMIEL.

El señorío de Peñacerrada, situado en la huerta de Muchamiel, constituye un caso especial dentro del grupo de pequeños señoríos del Campo de Alicante y Bajo Vinalopó. No sólo es el de más tardía fundación en el ámbito señalado, sino que presenta una diferencia fundamental con el resto, el recurso desde un principio al arrendamiento a corto plazo como régimen de tenencia. Desconocemos su extensión superficial, puesto que fue erigido en una propiedad vinculada, no constando por tanto en las escrituras de partición de bienes consultadas las características y cabida de la misma. Tampoco ha sido posible localizar el asiento de la finca en el Registro de la Propiedad. El estudio del señorío y la evolución del patrimonio señorial se ha fundamentado en el vaciado de protocolos notariales, una fuente de gran riqueza a pesar de las dificultades que entraña su naturaleza (aleatoriedad y fragmentación de la información, necesidad de un análisis bastante exhaustivo sin garantías de ser completo, dificultad de conseguir series notariales íntegras, entre otras).

La peculiaridad de este pequeño señorío alfonsino y su proceso de formación determinarán que la incidencia de las disposiciones abolicionistas en la evolución posterior del patrimonio señorial sea prácticamente nula, adquiriendo el protagonismo otros factores como la normativa desvinculadora, las divisiones hereditarias o el endeudamiento, cuya combinación dará lugar a la casi total desmembración y extinción del mismo.

La fundación del mismo es obra de D. Antonio Pascual de Riquelme y Molina, un miembro del patriciado urbano alicantino que obtuvo el título de Marqués de Peñacerrada el 10-IX-1761, tras solicitar la concesión del título de Castilla que había sido otorgada (Real Decreto de 27-XI-1697) por Carlos II a su abuelo materno D. Joseph de Castañeda, aunque no transformada por éste ni por su sucesor<sup>1</sup>. Entre los bienes que integraban su patrimonio, constituido principalmente por una serie de propiedades vinculadas (procedentes de los vínculos de Rodríguez de Junterón, Villafuerte, Zapata y Castañeda, Pascual, Molina, Pérez de Sarrió, Canals, Martorell)<sup>2</sup> estaba comprendida la "heredad grande" de Bonany, situada en Muchamiel (perteneciente al vínculo fundado el 5-IV-1687 por D. Vicente Pascual Alfonso), en la que sería ubicado el nuevo señorío.

---

<sup>1</sup> AMA. Arm. 1, Lib. 37, fs. 62-67. *Libro de Privilegios y Provisiones, Cédulas Reales y otros documentos, 1761-1762.*

<sup>2</sup> Adquiridos por vía materna (Molina, Gonzaga, Rodríguez de Junterón, Vilafuerte), paterna (Pascual, Pérez de Sarrió) o a través de un enlace matrimonial (Canals, Martorell); algunos con posterioridad a la creación del lugar, como los dependientes del Marquesado de Beniel.

Al margen de estos bienes, poseía un número importante de propiedades en calidad de libres, adquiridas por herencia o compra (algunas hipotecadas con censales consignativos, subrogados en lugar de fincas vinculadas enajenadas) o bien establecidas por el Real Patrimonio (posesión únicamente del dominio útil de las mismas).

En este último caso, había adquirido 221,5 jornales (106,4086 hectáreas) de tierra situados en diversas partidas de los términos de Alicante y de Muchamiel (Monnegre, Bec del Aguila, Moralet, Llano del Rocar), bien por establecimiento directo, bien por compra a otros enfiteutas<sup>3</sup>. La porción de mayores dimensiones, establecida por el Real Patrimonio el 8-IV-1772 -con una pensión anua de 93 sueldos y 6 dineros (6 dineros por jornal), a satisfacer en San Miguel de septiembre, y un capital de 187 libras-, presentaba una cabida de 187 jornales (89,8348 hectáreas) de tierra, localizada en la partida del Llano del Rocar (Muchamiel)<sup>4</sup>.

En 1796, tras el fallecimiento sin sucesión de su tío D. Gil Pedro Andrés de Molina, Saavedra, Juntarón y Gonzaga, entró en posesión de los vínculos y mayorazgos del Marquesado de Beniel<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> ARV. Bailía, E, Exp. 1.450 d bis, fs. 48-53).

<sup>4</sup> Esta superficie se vio reducida con posterioridad, al anularse el establecimiento de 19 jornales, otorgados anteriormente a otro enfiteuta.

<sup>5</sup> AHPA. Prot. Not. de Joaquín Rovira, Ps. 1.538 y 1.540, años 1794 y 1796 respectivamente.

De forma predominante, el patrimonio rústico de los Marqueses de Beniel y Peñacerrada sería puesto en explotación mediante el arrendamiento; con la excepción de las zonas en las que había tenido una cierta implantación el establecimiento enfitéutico (Beniel y Era Alta). En este último caso, no podemos precisar si los establecimientos se reducían a solares y casas o afectaban también a las tierras. Los solares de Beniel estaban gravados con una pensión anual de media fanega de trigo por San Juan y una gallina por Navidad, y sujetos al resto de derechos enfitéuticos (luismo -10% del valor de las enajenaciones-, fadiga, entre otros)<sup>6</sup>. Las rentas derivadas de los mismos presentaban grandes dificultades de cobro ya en 1803. Así se pone de manifiesto en la escritura de partición de bienes de D. Antonio Pascual y Molina, en la que se hace constar lo siguiente: "en otra deuda contra los censualistas de Beniel en trigo y gallinas que la mayor parte es incobrable, trece mil setecientos diez y siete reales"<sup>7</sup>. En esta escritura no se precisa el tipo de bienes censidos, y en otra posterior, de 1870 (con objeto de distribuir la herencia de D. Luis Pascual y Roca de Togores -fallecido en 1859), se expone "que el perímetro que ocupa el pueblo de Beniel, las casas construídas sobre dichos terrenos y los solares existentes, cuyos censos enfitéuticos se llaman fadigas, y su capital es de tres mil ciento sesenta y ocho

---

<sup>6</sup> AHPA. Prot. Not. de P. Manchón y Soriano, P. 1.113, años 1835-36, fs. 136-231. Escritura de partición de los bienes de D. Gil Mariano Pascual de Riquelme y Vergara.

<sup>7</sup> AHPA. Prot. Not. de Fco. Sala y Cantó, año 1803, f. 126.

escudos, cuatrocientas milésimas, se adjudiquen también proindiviso y por quintas partes como las fincas anteriores"<sup>8</sup>, además de establecerse la división entre los cinco hijos del marqués de parte de las 5.884 tahullas tierra huerta que integraban el heredamiento de Beniel (valoradas en 1843 en 2.782.419 reales 19 maravedíes).

El predominio del arrendamiento se pone de manifiesto no sólo en el gran volumen de contratos de este tipo localizados, sino en las escrituras de partición de bienes o de concesión de poderes para la administración de las fincas alejadas de su lugar habitual de residencia (Alicante)<sup>9</sup>. En alguno de éstos se contempla, por ejemplo, el "arrendar a partido, y terraje"<sup>10</sup>, junto a cobrar todas las cantidades de granos, dinero, etc, que se debieran en Beniel y su término, la ciudad de Orihuela y su jurisdicción. En este mismo sentido, en 1816, D. Gil Mariano Pascual y Vergara (Rodríguez de Junterón, Villafuerte, Zapata y Castañeda por razón de vínculo) concedía poder a Fco. Bermabeu para "administrar, arrendar, pedir cuentas y cobrar arrendamientos, especialmente los otorgados en la villa de Beniel, Era Alta, Cartagena, Murcia, Lorca y demás rentas que pertenecen a su señoría en todos los demás pueblos del reino de Murcia así como en el de Valencia"<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> AHPA. Prot. Not. de V. Izquierdo y Champoursin, P. 1.006, año 1870, 1<sup>er</sup> Tomo, f. 493.

<sup>9</sup> AHPA. Prot. Not. de Joaquín Rovira y de Fco. Sala y Cantó.

<sup>10</sup> AHPA. Prot. Not. de Joaquín Rovira, P. 1.540, año 1796, fs. 62-63.

<sup>11</sup> AHPA. Prot. Not. de Fco. Sala y Cantó, P. 1.627, año 1816, fs. 93-94 vto.

Aunque de manera más limitada, parece que también algunas fincas eran explotadas directamente por sus dueños. Así se desprende de varias escrituras de venta de cosechas de vino<sup>12</sup> o aceite<sup>13</sup>. En esta misma tónica, en 1798, el marqués al terminar el plazo de arrendamiento de la heredad "Torralva" (regadío y secano, arbolada y blanca) situada en Lorca, decidía desalojar a su arrendatario (contrato verbal), puesto que deseaba "dar a la heredad los grandes adelantos de que es susceptible, haciendo diferentes mejoras, y aumentándole también el bajo precio en que está con otros muchos gastos de que resultará de mucha utilidad a sus sucesores"<sup>14</sup>.

Otra parte, aunque menos importante, de sus ingresos estaba constituida por censales<sup>15</sup> (instrumentos de crédito que

---

<sup>12</sup> En 1785, D. Antonio Pascual recibía 3.200 rs. vn. por 100 cántaros de vino añejo tinto, vendido cada cántaro por 32 rs. vn. AHPA. Prot. Not. de Joaquín Rovira, fs. 5-5 vto.

<sup>13</sup> Así por ejemplo, en 1781, D. Antonio Pascual y Molina, vendía la cosecha de aceituna de ese año de la hacienda que poseía en el término de Novelda (aportada por su esposa M<sup>a</sup> Teresa Vergara y Miguel) por 1.500 libras a tres vecinos de Novelda. AHPA. Prot. Not. de Joaquín Rovira, P. 1.528, año 1781, fs. 130 vto.-131 vto.

<sup>14</sup> AHPA. Ibidem, P. 1.541, año 1798, fs. 184-185 vto.

<sup>15</sup> Junto a otros de menor entidad, destacan varios capitales de censo, como los 15.783,33 rs. (pensión anual 479,50 rs.) impuestos por la Marquesa viuda de Paneres (Murcia), los 52.950 rs (1.500 rs. de pensión anual) impuestos por el Marqués del Bosque sobre el pueblo de Busot, o los 143.333 rs. (pensión anual 4.325,74 rs.) impuestos sobre los propios de Jijona. AHPA. Prot. Not. de V. Izquierdo y Champourcin, año 1863, 2<sup>a</sup> Tomo, fs. 1279-1.376. Partición de bienes de D. Antonio Pascual y Pascual del Pobil y D<sup>a</sup> Angustias Roca de Togores.



también gravaban sus propiedades), juros<sup>16</sup> y rentas de carácter similar, más afectadas por procesos de devaluación.

1.-La fundación del lugar de Peñacerrada y su funcionamiento hasta la abolición del régimen señorial.

A pesar de que el restablecimiento del fuero alfonsino se produjo en 1772<sup>17</sup> tras la elevación por D. Antonio Pascual y Molina, Marqués de Peñacerrada, y D. Ignacio Pérez de Sarrió, dueño del lugar de Formentera, de un memorial solicitando su reposición, parece que el mencionado marqués no decidió servirse del mismo hasta bien avanzada la década de los ochenta.

En el citado memorial se hacía constar en relación al fuero alfonsino:

---

<sup>16</sup> Este tipo de rentas había sido adquirido al entrar en posesión de los vínculos de Villafuerte (un juro de 82.500 mrds. en alcabalas del Campo de Calatrava -privilegio en 7/VIII/1591- pero reducido a 43.125 mrds.; juro de 10.775 mrds. de renta sobre las alcabalas de Guadalajara y su partido -privilegio en 22/VI/1605-, juro de 70.312 mrds. de renta sobre las alcabalas de Ocaña -privilegio de 5/III/1714) y Castañeda (juro de 93.500 mrds. sobre millones de Valladolid, pero reducido a 31.170 mrds. -privilegio de 31-V-1635-; la mitad de otro juro de 101.641 mrds. de renta -privilegio en 21/I/1639). AHPA. Ibidem, P. 1.538, año 1794, fs. 29-30 vto.

<sup>17</sup> Real Provisión, en que nuevamente se confirma la subsistencia del Fuero del Sr. Rey D. Alfonso del año de mil trescientos veinte y ocho, concedido a los vassallos que formassen lugares. Madrid, 16 de Mayo de 1772.

"Que esta gracia era la que había hecho repartir las dilatadas heredades entre muchos, para que se cultivasse mejor la tierra haciendola fructificar, y procrear, sirviendo de alimento á tantas familias, que siendo haciendas de un dueño, ni se cultivaria tan bien, ni havría tanta procreación; ni el equivalente, ó unica contribucion, y demás Rentas Reales que pagava esse Reyno, serian con tanto aumento: Que los suplicantes, y otros, estaban en la duda, sila declaración del Glorioso Padre de N.R.P. á favor de los buenos Vassallos, sería extensiva á los Lugares que de nuevo fundassen, como parecía serlo; pero como eran menester cantidades de consideración para construir dichas quince Casas, y poblarlas de otros tantos Vecinos casados, nadie se atrevia á expender sus caudales sin que precediese declaracion de ella: Por lo qual, suplicaron á N.R.P. se sirviese declarar estar vijente á favor de ellos dicho privilegio Alfonsino en los Lugares que de nuevo fundassen en sus haciendas, y de sus mugeres (...)"<sup>18</sup>.

En efecto, en 3-I-1785, D. Antonio Pascual presentaba la Real Provisión ante el Real Acuerdo, quien en 17-II de ese año acordaba su obediencia y cumplimiento, declarando, por tanto, estar en vigor a favor del marqués el privilegio alfonsino<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Ibidem.

<sup>19</sup> ARV. Real Acuerdo, Año 1785, Lib. 80, fs. 20 y 557-558 vto.

El nuevo lugar fue construido en la heredad "Grande", situada en Muchamiel, en la partida de Bonany, integrada en el vínculo fundado por D. Vicente Pascual. Con el objeto de evitar los problemas que se derivasen de ese hecho, el Marqués de Peñacerrada imponía el 9-XII-1786<sup>20</sup> un censo al quitar, al 3% anual, de 2.529 libras 6 sueldos 5 dineros de capital (38.088 rs. vn. 19 mrds.) y 75 libras 18 sueldos de pensión (1.142 rs. 32 mrds.), sobre las 18 tahullas 1 cuarta 10 brazas (2,1962404 hectáreas) de tierra huerta en las que pensaba edificar la nueva población<sup>21</sup>. En el término del nuevo lugar serían incluidas las propiedades que el marqués poseía en diversas partidas (por ejemplo, al margen del resto de la heredad "Grande", las tierras establecidas por el Real Patrimonio en el Llano del Rocar).

Sin embargo, y a diferencia de otros señoríos surgidos también en esta etapa, no se ha hallado ninguna escritura de establecimiento ni carta de población, sino que en 1788 eran otorgadas, el 6 y 7 de agosto y el once de noviembre, 19 escrituras de arrendamiento a otros tantos pobladores del lugar<sup>22</sup>. Es probable que el número de asentados fuera mayor, puesto que el protocolo notarial donde éstas estaban recogidas aparece incompleto. En estos contratos eran cedidos en arriendo, por un plazo de cuatro años, una casa en el lugar (en la plaza o

---

<sup>20</sup> En esta escritura (otorgada ante Fco. Sala Cantó), que lamentablemente no hemos podido localizar, se efectuó la demarcación de la citada superficie.

<sup>21</sup> AHPA. Prot. Not. de Fco. Sala y Cantó, P. 1.624, año 1803, f. 119 vto.

<sup>22</sup> AHPA. Prot. Not. de Fco. Sala y Cantó, P. 1.615, año 1788, fs. 157-196 vto.

en las calles que daban a la misma) y una pequeña suerte de tierra huerta, con el agua necesaria para su riego, situada en la heredad "Grande", en la partida de Bonany, a partir de ese momento Peñaserrada. Así se pone de manifiesto en la siguiente escritura:

"Sepan quantos la presente escritura en esta publica forma vieren y leyeren, como yo el Ylustre D. Antonio Villafuerte Zapata y Castañeda, antes Pascual y Molina Marqués de Peñaserrada, vecino de la ciudad de Alicante, hallado al presente en mi heredad llamada la grande, cita en el termino de la villa de Muchamiel, y partida de Bonany, la misma que me ha pertenecido, como posehidor del vínculo fundado por mi segundo abuelo D. Vicente Pascual, en la que tengo construhidas por mi veinte y tres casas arrematadas, ó concluhidas, que con la principal y accesoria hacen veinte y cinco, todas habitadas con sus respectivas familias casadas; y otras empesadas, todas en forma de Poblacion, que desde aora la nombro, y quiero que en lo succesivo se nombre el lugar de Peñaserrada, siendo otro de los Pobladores y habitantes con su muger e hijos Josef Baeza: Por tanto sabedor y cierto del que me pertenece por la presente y su tenor, otorgo y conosco que arriendo, y por título de arrendamiento doy y concedo, a Josef Baeza, de exercicio trabajador vecino de dicho Lugar nuevo de Peñaserrada quien se halla presente y despues aceptante una casa de habitación y morada, cita en la plasa de

dicho Lugar nuevo, por precio de dies libras; y una tahulla y media de tierra regadío, poco mas o menos tanta quanta sea, y son parte de las de dicha heredad llamada la Grande con medio quarto de ora de Agua todas las martavas cortas y primera de cada año, por precio de onse libras y dies sueldos, que juntas con las dies de la casa, forman la de veinte y una libras y dies sueldos que me deverá satisfacer y pagar, anualmente en una sola paga, en el día veinte y nueve de Setiembre, siendo la primera en dicho día del de mil setecientos ochenta y nueve, y assi succesivamente, hasta fenecer los quatro primero subsiguientes, por que le arriendo (...). Y para su cumplimiento obligamos á saber Yo dicho Ylustre Marques de Peñaserrada mis bienes y rentas é Yo el referido Josef Baesa mi persona y bienes havidos y por haber; y damos poder a los Justicias y Jueces de Su magestad qualesquiera que sean en especial a los de dicha ciudad de alicante, villa de muchamiel, y dicho lugar nuevo en caso de haverla, para que nos apremien respectivamente á ello, (...)"<sup>23</sup>

Todas las porciones de tierra concedidas presentan un tamaño reducido, entre 1 tahulla y una cuarta (0,150125 hectáreas) y 3 tahullas (0,3603 hectáreas) de cabida, predominando las parcelas de 1,5 tahullas (0,18015); y, exceptuando las de 3 tahullas que llevan aparejada una dotación

---

<sup>23</sup> AHPA. Ibidem, fs. 157-158 vto.

de 12 minutos de agua todas las martavas del año, todas las demás cuentan con 7,5 minutos de agua, generalmente "las martavas cortas y la primera de cada año". En conjunto, los 19 arrendamientos otorgados sólo supusieron una superficie superior a las 30 tahullas (3,6030 hectáreas); obteniendo el marqués de estas operaciones un total de 368,5 libras (221,5 libras por el arriendo de las tierras y 147 libras por el de las casas), que debían serle pagadas siempre en el día de San Miguel de septiembre.

Parece existir una cierta diferenciación en la calidad y el valor de las tierras y casas (en este caso tamaño, situación o arrendamiento íntegro o parcial del edificio -por ejemplo solamente los bajos) cedidas, pues no hemos conseguido establecer una renta homogénea para ellas. Mientras la pensión anual exigida por las casas oscila entre las 5 y las 11 libras, la de las tierras se sitúa entre 5,3 y 9,3 libras por tahulla. En algunos casos era exigida, además, la entrega por el arrendatario de una gallina o, en su lugar, 10 sueldos. Las condiciones estipuladas en el contrato de arriendo se reducen a tratar las tierras y casas a uso y costumbre de buen labrador y buen inquilino, mandándolo hacer, en caso contrario, el propietario a costas del arrendatario, y a contemplar la ejecución del arrendatario, con solo la presentación de la escritura, en caso de no cumplir con el pago de las rentas anuales.

No ha sido posible establecer la procedencia de los nuevos pobladores, pues en todas las escrituras figuran como vecinos del lugar de Peñacerrada, aunque si aproximarnos a su estrato social. Todos declaran ser trabajadores (excepto un caso en que afirma ser sastre), por lo tanto pequeños arrendatarios, y tal vez propietarios de tierras de escasa superficie que necesitasen completar sus ingresos mediante el arrendamiento de otras parcelas.

Dado que en algunos arrendamientos se hace constar en relación a la vivienda "que actualmente esta habitando con su familia", unido al hecho de la presentación del memorial al Real Acuerdo en 1785, podríamos suponer una fecha anterior para el asentamiento (tal vez 1784), sin embargo no se ha podido comprobar ante la carencia del protocolo correspondiente a ese año en la serie del notario Fco. Sala Cantó, pues no ha aparecido en los pertenecientes a otros notarios, como Joaquín Rovira.

No obstante, nos inclinamos por situar su fundación en 1788, a tenor de los términos en que se expresan las escrituras; la presentación ante el Real Acuerdo únicamente de la Real Provisión de 1772, sin acompañar este documento de otros que evidenciasen el asentamiento de población; y la actitud del ayuntamiento de la villa de Muchamiel.

A este respecto, cabe señalar como las primeras noticias sobre la oposición de la villa proceden del año 1789. En efecto, en la sesión capitular de fecha 3-IV-1789 "sobre cierto Despacho, que se dice haver ganado de la superioridad del Real Acuerdo el Marqués de Peñacerrada, para la formación de un Pueblo

circunvecino ó quasi junto con esta villa, sin que para ello haya sido la misma citada ni emplazada para ser vencida en contradictorio juicio", se acordaba nombrar una persona lo suficientemente capacitada para defender los derechos de la villa y su común de vecinos en caso de resultar perjudicados por el proyecto de D. Antonio Pascual y Molina<sup>24</sup>.

El 17 de abril el ayuntamiento de Muchamiel recibía una requisitoria del alcalde mayor de Alicante, como Juez Comisionado del Real Acuerdo, con el objeto de citar y emplazar al Síndico Procurador de la villa "para el amojonamiento del término del nuevo Pueblo, intitulado de Peñacerrada". A pesar de las protestas de la misma por no haber sido emplazada ni oída en el proceso de erección del nuevo lugar, el Real Acuerdo ordenaba el 20 de mayo siguiente efectuar el mencionado deslinde, aunque señalando que sin perjuicio de atender a la villa. Ante esta situación, en la sesión capitular de 12 de junio se planteaba el acudir al Real y Supremo Consejo<sup>25</sup>.

En 1805, tras la muerte de D. Antonio Pascual y Molina (1801) y la división de su herencia (1803), las tierras de carácter libre comprendidas en el término de Peñacerrada pasaron a manos de su esposa y de sus hijos (principalmente M<sup>a</sup> Luisa Pascual y Vergara), en menor medida al primogénito, al que correspondieron las de carácter vincular. A pesar de esta

---

<sup>24</sup> AHPA. Prot. Not. de José Ayala y Cantó, P. 120, año 1789, fs. 182 vto.-184.

<sup>25</sup> AHPA. Ibidem, fs. 188 vto.-189 vto.



división, siguen manteniéndose en todas las mismas condiciones de arrendamiento. Aunque todavía persisten porciones de muy pequeño tamaño (entre 1,25 y 3 tahullas), aparecen suertes de mayores dimensiones, relativas (pues siguen siendo reducidas), entre las 4 y las 10 tahullas. Los precios de arriendo exigidos continúan manteniéndose en la misma tónica, aunque difieren bastante de unos casos a otros: entre 3,84 y 23,27 libras por tahulla aunque predominando los situados entre las 6 y las 8 libras por tahulla. Suponemos que inciden en esta diferenciación factores como la calidad de la tierra, la localización, los cultivos implantados en la misma o el estado de conservación de las fincas. Se registra en estos arrendamientos (y probablemente también en los anteriores a 1805, aunque no los otorgados durante los primeros años), al margen de la renta en metálico, aunque con algunas excepciones, la entrega a los otorgantes de una serie de arrobas de paja (entre 4 y 25 arrobas según los casos), aunque no hemos podido establecer ningún criterio o relación entre la superficie arrendada, las cantidades en metálico exigidas y la imposición de este gravamen en especie<sup>26</sup>.

Se ha observado que continúan manteniéndose como arrendatarios algunos de los primeros pobladores del lugar o personas vinculadas por lazos familiares con ellos, aunque aparecen apellidos nuevos en los contratos de arriendo. La vecindad declarada ya no es solamente la de Peñacerrada, sino que adquieren gran importancia los residentes en Muchamiel.

---

<sup>26</sup> AHPA. Prot. Not. de Fco. Sala y Cantó, P. 1.624, año 1805.

Las escrituras de arrendamiento otorgadas en esta fecha no recogen la concesión de agua de riego al tiempo que la tierra, aunque sí figura entre las condiciones estipuladas la de sacar y pagar el agua de la Administración todas las martavas que se tome. A las obligaciones mencionadas con anterioridad, sólo se añaden la advertencia de que no podrá solicitarse ningún tipo de rebaja del recio de arrendamiento por ninguna causa, y, en contados casos, la exigencia de fiador<sup>27</sup>.

Junto a las parcelas de regadío, algunos arrendatarios obtienen la cesión de otras, de mayores proporciones, de secano, y que, generalmente, son parte de las tierras establecidas al marqués por el Real Patrimonio o bien adquiridas por éste a otros enfiteutas en el Llano del Rocar.

Estas fincas presentan una mayor extensión superficial (aunque siguen siendo pequeñas heredades), entre los 3 jornales (1,4412 hectáreas) y los 6 jornales (2,8824 hectáreas). Al igual que las dimensiones de las parcelas, el precio de arrendamiento responde a las mayores dificultades de cultivo, la falta de seguridad de las cosechas y los menores rendimientos obtenidos; oscilando entre las 15 y las 17 libras, se sitúan entre 0,63 y 1,25 libras por tahulla.

Esta será la tónica que se mantendrá en años posteriores, aunque se dan casos en que las dimensiones de las fincas arrendadas se incrementarán notablemente. Este es el caso

---

<sup>27</sup> AHPA. Prot. Not. de Fco. Sala y Cantó, P. 1.624, año 1805, fs. 86-87.

de las 17 tahullas de regadío cedidas por D. Mariano Pascual y Vergara en 1809 a A. Forner (trabajador y vecino de Peñacerada) por una renta anual de 113 libras (6,65 libras por tahulla) y 10 arrobas de pajar<sup>28</sup> o los 8 jornales de secano arrendados, en la partida de los Llanos, a Nicolás Gomis (labrador, vecino de Muchamiel) por un precio de 35 libras (1,09 Lib./th.)<sup>29</sup>. Un ejemplo más notorio lo constituirá la cesión en arriendo de 138,5 jornales de tierra (554 tahullas=66,5354 ha.), situada en el Llano del Rocar, a favor de Salvador Lledó y Bernardo Alemán (ambos vecinos de Peñacerrada, y el primero de ellos encargado de la regalía de la tienda durante bastante tiempo), con una pensión anua de 80 libras (0,14 lib./th. -la ratio más baja de las halladas, probablemente debido al carácter inculto de parte de la superficie) y por un período de 8 años<sup>30</sup>. Ambos arrendatarios llevaban en arrendamiento al mismo tiempo otras fincas de menor tamaño, tanto de regadío como de secano. Los contratos otorgados por plazos de tiempo superiores a los 4 años se limitan siempre al caso de fincas de secano y de una cierta extensión, exceptuando los arrendamientos de las grandes heredades de regadío ("La Almaxa", la "Condomina", la "Torre de Pascual").

Por lo que respecta a las condiciones de arrendamiento, se observa un nivel de exigencias progresivamente mayor. Mientras en 1806 sólo se establecía, al margen de los requisitos

---

<sup>28</sup> AHPA. Prot. Not. de Fco. Sala y Cantó, P. 1.625, año 1809, fs. 72-73.

<sup>29</sup> AHPA. Ibidem, P. 1.624, año 1806, fs. 123-123 vto.

<sup>30</sup> AHPA. Ibidem, fs. 116-117.

anteriores, la obligación del arrendatario de llevar, a sus costas, la paja acordada en los contratos a la plaza de Peñacerrada, en 1809 y 1810 se exige a los cultivadores cavar, plantar y cuidar los árboles que deseara el propietario, proporcionándole éste los pies<sup>31</sup>; se especifica que en caso de secarse los árboles, el arrendatario sólo podrá apropiarse del ramaje, reservando el tronco a la señoría (que a veces se verá obligado a transportar a Peñacerrada), y se impone la obligación de pagar a 10 sueldos la hora de agua de las martavas que se saquen de la Administración<sup>32</sup>.

Al margen de estas condiciones, aparecen cláusulas más específicas, dirigidas a garantizar el mantenimiento en buen estado de las heredades y el adecuado cultivo de las especies plantadas. A estos objetivos responden las prohibiciones de limpiar las moreras<sup>33</sup> o los algarrobos el último año de arrendamiento o la de costear el arrendatario las reparaciones de los daños ocasionados en los barrancos por las avenidas, siempre que no fuera necesario para ello el trabajo de más de dos hombres, pues en caso de revestir mayor envergadura recaería esa

---

<sup>31</sup> Por ejemplo, en 1810, D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Luisa Pascual y Vergara exigía a A. García, en el contrato de arrendamiento de 4,5 tahullas de regadío por un precio anual de 27 libras, que plantase a sus costas las moreras y resto de árboles que desease, proporcionándole ella los pies. AHPA. Ibidem, P. 1.626, año 1810, fs. 50-51.

<sup>32</sup> AHPA. Ibidem, P. 1.625, año 1809, fs. 69-70.

<sup>33</sup> AHPA. Ibidem, P. 1.626, año 1810, fs. 50-51.

obligación en el otorgante<sup>34</sup>.

A principios de la década de los veinte se observa una cierta disminución de los precios de arrendamiento, que se sitúan, en el caso de las tierras de regadío, siempre por debajo de las 7 Libras por tahulla (generalmente entre 5,2 y 6,67 lib./th., aunque también existe algún ejemplo con valores más reducidos<sup>35</sup>. En los contratos otorgados en estas fechas se exige ya la presentación de fiador, y se establece la obligación de replantar los árboles secos por el arrendatario a sus costas (condición que ya se había estipulado en algún contrato de 1814).

Puede revestir un cierto interés cotejar estos datos con los procedentes de las escrituras de arrendamiento de fincas propiedad de los marqueses situadas en la huerta de Muchamiel o en otras zonas más o menos próximas (Alicante o San Juan), a fin de evaluar la rentabilidad de esta iniciativa señorial. En este sentido podemos señalar que todos los arrendamientos presentan unas características similares, tanto en relación a los precios (en ocasiones son más elevados los impuestos en Peñacerrada, aunque no se puede desligar este hecho del propio valor y adecuación al cultivo de la tierra) como a las condiciones

---

<sup>34</sup> Este es el caso del arrendamiento de media tahulla de tierra regadío otorgado a V. García y F. Díez (arrieros y vecinos de Muchamiel y Peñacerrada respectivamente) por 14 libras anuales (28 lib./th.) en 1810. AHPA. Ibidem, fs. 92-94 vto.

<sup>35</sup> En 1822, D. Mariano Pascual y Vergara arrendaba a J. Ferrandis Pastor (trabajador y vecino de Muchamiel) 13 tahullas de regadío, situadas en Peñacerrada, por un periodo de 4 años y 25 libras de renta anual (1,92 Lib./th.). No cabe duda que en estos casos influirían factores como la calidad de las tierras, los cultivos existentes o las disponibilidades de agua de riego. AHPA. Ibidem, P. 1.628, año 1822, fs. 55 vto.-56.

impuestas. Se ha de señalar que en estos otros casos, salvo algunos arrendamientos que afectan a pequeñas superficies de tierra<sup>36</sup> (algunas con una relación superficie-canon anuo bastante elevada<sup>37</sup>) predomina la cesión de heredades de mayor entidad, situadas en torno a las 17 (2,0417 ha.) y 124 tahullas (14,8924 ha.) en regadío y las 36 (4,3236 ha.) y las 320 tahullas (38,4320 ha.) en secano, en las que junto a la tierra se ceden diversas dependencias y útiles para el cultivo y la transformación de los productos agrarios. Las pensiones anuales fijadas oscilan entre 56 y 676 libras para las heredades de regadío, y entre 30 y 150 libras para las de secano. Por este motivo, las condiciones de arrendamiento vienen estipuladas con un mayor detalle, dirigidas a regular un mayor número de aspectos.

Al margen de las mencionadas con anterioridad, la dotación por la señoría de una mayor cantidad de agua que la

---

<sup>36</sup> Por ejemplo los arrendamientos concedidos en la partida de Benaduet (Muchamiel), proxima al término del nuevo señorío, en la que predomina la cesión de pequeñas porciones de tierra, entre las 2,5 y 4,5 th., con cánones anuales entre las 16 y 31 libras (6-6,5 Lib./th.). AHPA. Ibidem, P. 1.624 (año 1805, fs. 65 vto.-66 vto. y 87-88) y 1.627 (año 1817, fs. 79 vto.-81). También es el caso de algunos arrendamientos otorgados en San Juan, afectando a superficies de 3,25 tahullas (19 libras de canon anual -5,85 lib./th.) y 8,25 tahullas (58 libras -7,03 lib./th.). AHPA. Ibidem, P. 1.624, fs. 82-83 y 93-93 vto.

<sup>37</sup> Las dos tahullas de tierra de regadío conocidas como "Huerto del Ravalet" con cánones anuales sobre las 32 libras (en 1805 -16 lib./th.-, 34 libras en 1790 -17 lib./th.). AHPA. Prot. Not. de J. Rovira, P. 1.536, año 1.790, fs. 201 vto.-202 vto, y Fco. Sala y Cantó, P. 1.624, año 1805, fs. 85-86. También las 7 tahullas de regadío otorgadas en el arrendamiento del "Huerto de Maltés", por un precio anual, en 1806 y 1809, de 86 libras (12 lib./th.). AHPA. Prot. Not. de F. Sala y Cantó, P. 1.624, año 1806, fs. 119 vto.-120 vto., y P. 1.626, año 1810, fs. 70 vto.-71.

correspondiente al minuto por tahulla<sup>38</sup> -aunque señalando que "la que en las martavas que se embargue la Agua en la Administración tenga obligacion el propio arrendador de pagarle sin que por ello devera abonar su señoría cosa ni cantidad alguna"<sup>39</sup>-, la obligación de presentar fiador, el costeamiento de los gastos de escritura por el arrendatario, la entrega de piezas de volatería en concepto de adehalas<sup>40</sup> o la reserva por el dueño de ciertos frutos (la carrasca en la Colomina), el mantenimiento de la finca en buenas condiciones mediante la realización de las labores adecuadas (tregillar y amargenar las tierras, dar las rejas correspondientes al finalizar los arrendamientos así como los riegos necesarios), reservándose los propietarios la facultad de enviar peritos a revisar el estado de la misma, la exigencia de efectuar unas labores determinadas en ciertos cultivos, como la viña (podarlas a "llama y braguer", "cavarlas y magencarlas a golpe y repique", es decir dar dos cultivos de "legón", amorgonarlas), o la capacidad del otorgante de planificar la puesta en explotación de la finca (estableciéndose un mínimo de nuevos plantados, -capítulo que adquiere mayor importancia en el

---

<sup>38</sup> AHPA. Ibidem, P. 1.627, año 1816, fs. 45 vto.-47.

<sup>39</sup> 2,5 hilos de agua vieja en el caso de la heredad de la "Torre de Pascual". AHPA. Ibidem.

<sup>40</sup> un pavo grande y gordo por Pascua de Resurrección en el caso de la heredad de la "Torre de Pascual" (Ibidem, P. 1.627, año 1816, fs. 45 vto.-47), o por Santo Tomás en el de la heredad de la "Colomina" (Ibidem, fs. 91-93), u 8 gallinas en las heredades del Moralet y el Monnegre (Ibidem, P. 1.624, año 1806, fs. 136-137 vto. y P. 1626, año 1810, fs. 81-82 vto.).

caso de las heredades con tierras sin roturar-)<sup>41</sup>, son algunos ejemplos. De modo general, se hace constar que ante ninguna circunstancia se procederá a reducir la cuantía de los arrendamientos; pero en una ocasión se especifica que en caso de piedra o langosta el propietario tomará en consideración el abonar a los arrendatarios el tanto que le parezca, sin que pueden volver a solicitarlo de nuevo<sup>42</sup>.

La obtención de la jurisdicción alfonsina por el dueño del lugar suponía el ejercicio por éste de unas ciertas competencias jurisdiccionales, así como el disfrute de los privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos. Sin embargo, no hemos podido obtener ningún tipo de información sobre el alcance de las primeras (aunque nos inclinamos a suponerlas una escasa entidad, como han señalado algunos autores)<sup>43</sup> ni sobre el funcionamiento del gobierno local. A pesar de estos hechos, no

---

<sup>41</sup> Por ejemplo plantar 20 almendros cada año de arrendamiento en Alicante (Ibidem, P. 1.625, año 1807, fs. 81-82 vto.); plantar 100 árboles anuales (en un plazo de 8 años), a elección de la señoría dándole ésta los pies (almendros, olivos, algarrobos), en la partida del Monnegre (Ibidem, P. 1.614, año 1785, fs. 117 vto-11 vto.); plantar 4 tahullas de viña abonando el propietario 12 libras por millar en el caso de la heredad "las Matas", situada en Alicante (Ibidem, P. 1.625, 1807, fs. 83-84); o sustituir plantas existentes por otras especies (Monastril o Forcallada), y plantar 8 millares de viña en la tierra campa de la heredad, en el caso de la hacienda "la Almaxa" (Ibidem, P. 1624, 1803, fs. 73-75).

<sup>42</sup> AHPA. Ibidem, P. 1.627, 1816, fs. 91-93.

<sup>43</sup> GIL OLCINA, A.: "Reformismo ilustrado, colonización interior y restablecimiento del fuero alfonsino". *Agricultura y Sociedad*, nº 56, Madrid, 1990, pp. 79-112. PLA ALBEROLA, P.: "Recolonización interior y expansión del régimen señorial. La carta puebla de la Sarga de 1774". *Estructuras y regímenes de tenencia de la tierra en España*. MAPA, Madrid, 1987, pp. 117-128.



puede negarse una dependencia bastante acusada de los nuevos pobladores hacia su señor, dada la inseguridad que comportaba su estatus de arrendatario, pendiente de la renovación del contrato de arrendamiento cada cierto tiempo.

No cabe duda, que al margen del deseo de promoción social (evidenciado en la obtención del título de marqués de Peñacerrada dos décadas antes de la fundación del señorío), D. Antonio Pascual y Molina acometió la empresa con una finalidad claramente económica. El régimen de tenencia elegido, le permite asegurar una renta anual fija en metálico independiente del resultado de las cosechas, así como su revisión cada cierto tiempo para adecuarla a las fluctuaciones de los precios, y no entraña ningún riesgo en relación a la conservación de la propiedad, pues no implica una división de dominios. Además, como ya se ha puesto de manifiesto, le facilita la puesta en explotación de parte de su patrimonio rústico todavía inculto, como es el caso de las tierras establecidas por la corona en el Llano del Rocar. Este hecho se vería completado con el disfrute por el señor de las regalías, que le permiten controlar la actividad económica y los intercambios en el lugar (aunque no en la medida en que ocurría en otros señoríos), e incrementar sus rentas al asegurarse el abastecimiento de las necesidades de sus colonos. De este modo, el señorío se convierte en una explotación agraria de una cierta entidad, en la que el control sobre la fuerza de trabajo facilita su rentabilidad.

Las miras de carácter económico de esta iniciativa se deducen igualmente de la consideración que se hace por los titulares del señorío de la jurisdicción que les compete en el lugar. Efectivamente, ésta es considerada en la partición de bienes de la herencia de D. Antonio Pascual y Molina como parte de los gananciales, otorgándose a la Marquesa viuda de Peñacerrada y Beniel su disfrute. Así se desprende del siguiente fragmento: "la jurisdicción que obtuvo del lugar de Peñacerrada que fundó toca por mitad a su esposa como gananciales; y la otra mitad que le correspondía quería que la tuviese también dicha señora para que la disfrutase entera durante su vida, con la condición de que no ha de tomar nuevo estado de religiosa o de cualquier otro y después de sus días vaya y pertenezca la mitad de que pudo disponer a su hijo primogénito"<sup>44</sup>.

Los privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos revisten en este caso una menor importancia que la que adquieren en otros señoríos de similares características. La pequeña entidad del señorío, su tardía fundación y su proximidad a la villa de Muchamiel inciden sin duda en ello. Unicamente se han identificado aquellas regalías relacionadas con la prestación de servicios de abasto a la comunidad: horno de pan cocer, abasto de carnes, tienda, taberna y panadería. El señor consigue de este modo rentabilizar al máximo su inversión, al disponer de los medios de abasto a la población, cuya gestión arrendaba anualmente. Sin embargo, se establece una cierta libertad para el

---

<sup>44</sup> AHPA. Ibidem, P. 1.624, año 1803, fs. 123 vto.-124.

poblador, por ejemplo al señalarse los días de mercado libre o al permitirle acudir a cualquier tienda, y no verse limitado y obligado a recurrir a la del lugar.

Sin embargo, se ha de tener en cuenta, posiblemente ante la proximidad de la villa de Muchamiel y la oposición de ésta a la erección del lugar, que algunos de los capítulos de regulación de las diversas regalías van dirigidos a evitar cualquier perjuicio a la villa y los monopolios de la misma.

Al igual que la jurisdicción, tras la muerte de D. Antonio Pascual y Molina, pasaron a manos de su viuda y no al directo sucesor al señorío.

Los datos que poseemos, aunque no nos permiten realizar un seguimiento completo, sí nos permiten aproximarnos bastante a las características y funcionamiento de las mismas.

La primera que se establece en el lugar es la regalía de la tienda. En 1789 es arrendada a Salvador Bañuls (labrador y vecino de Peñacerrada) por 8 libras anuales y durante un año. Del abasto de carnes y el horno de pan no tenemos noticias hasta 1806 y 1807 respectivamente. La duración del periodo de arrendamiento suele ser de un año, aunque el horno de pan, a partir de 1809, comienza a arrendarse cada 4 años. Por lo que respecta a la regalía del abasto de carnes, hay una escasa continuidad de los arrendatarios, que no suelen renovar el arrendamiento más de una vez. La situación es totalmente contraria a la que presenta la regalía de la tienda -que a partir de 1815 será también taberna, panadería y cubillo-, pues exceptuando un año que fue gestionada

por B. Santo, se mantuvo siempre en manos de Salvador Lledó (entre 1804 y 1818, fechas para las que disponemos de información).

Los precios de arrendamiento varían considerablemente de unas regalías a otras. Mientras el del abasto de carnes se mantiene constante en 17 libras anuales, los otros dos experimentan una evolución diferenciada. El canon exigido en 1807 por el horno de pan cocer se sitúa en 20 libras<sup>45</sup>, ascendiendo a 27 en 1809<sup>46</sup>. Por lo que respecta a la regalía de la tienda, a pesar de situarse la renta anual en 1789 solamente en 8 libras<sup>47</sup>, se eleva a 82 libras en 1804<sup>48</sup>, ascendiendo a 200 libras en 1806, fecha en la que adquiere el máximo valor. En este año fue arrendada en subasta pública optando al mismo B. Santo<sup>49</sup>. A partir de este año comenzará a descender hasta situarse en 90 libras en 1810<sup>50</sup>, cantidad que se mantendrá hasta 1818<sup>51</sup>.

En cuanto a la condiciones estipuladas en los contratos, las menos detalladas corresponden al horno de pan cocer. En este caso, únicamente se exige al hornero tratar y habitar dicho horno como buen hornero e inquilino,

---

<sup>45</sup> AHPA. Ibidem, P. 1.625, fs. 72 vto.-73 vto.

<sup>46</sup> AHPA. Ibidem, año 1809, fs. 36 vto-37 vto.

<sup>47</sup> AHPA. Prot. Not. de Joaquín Rovira, P. 1.535, año 1789, fs. 242 vto.-243 vto.

<sup>48</sup> AHPA. Prot. Not. de F. Sala y Cantó, P. 1.624, año 1804, fs. 4-4 vto.

<sup>49</sup> AHPA. Prot. Not. de Fco. Sala y Cantó, P. 1.624, año 1805, fs. 164 vto-165 vto.

<sup>50</sup> AHPA. Ibidem, P. 1626, año 1810, fs. 1-2.

<sup>51</sup> AHPA. Ibidem, P. 1.627, año 1817, fs. 124-125.

responsabilizando al arrendatario de los daños ocasionados con motivo de incendios u otros avarates, cuando sean debidos a un descuido de éste.

Las cláusulas establecidas en relación a las otras dos regalías presentan ciertas similitudes. En ambos casos, se ha de abastecer al lugar de los géneros que suministran las regalías de Muchamiel y a los mismos precios con que se venden en ellas, o, en algún caso, ligeramente inferiores (por ejemplo en relación a las carnes un cuarto menos por libra). Respecto al abasto de carnes, que han de ser de buena calidad, se exige el suministro de las mismas que se maten en Muchamiel; y, aunque se señala que la carnicería del lugar es franca de pagar al arrendatario del derecho de la villa los dos dineros por libra de las carnes que se maten, se señala que ha de satisfacerse por deseo de la señoría, sin que este heho pueda perjudicar en lo sucesivo los derechos de Peñacerrada. El arrendatario del derecho ha de entregar a la señoría 17 libras por el arrendamiento de la casa carnicería, y 9 onzas de carne por toda res desollada al cortante<sup>52</sup> (18 onzas de las reses que se maten de refresco), cargando además con todas las costas de la escritura.

Por lo que respecta a la tienda, se prohíbe la venta a los vecinos de Muchamiel de los productos que se comercialicen en la villa (bajo pena de 12 sueldos), aunque se confiere a los pobladores de Peñacerrada libertad para acudir a efectuar sus

---

<sup>52</sup> En 1821, el salario del mismo se establece en dos reales vellón diarios.

compras donde quisieran. Además se estipula la existencia de mercado franco los miércoles, en los mismos términos en que este se desarrolla en Muchamiel. En el arrendamiento otorgado en 1789, el precio del mismo se destina "al alivio de los vecinos, bien como rebaja del equivalente, médico o enfermedades de los más pobres, o por medio de la Justicia del pueblo se retribuiría individualmente"<sup>53</sup>. Esta cláusula no volverá a repetirse con posterioridad.

En 1806 se exige la entrega, además del canon anual, de 30 reales vellón por el derecho anual del aguardiente, y 4 dineros más para el aceite de la lámpara de la capilla del lugar<sup>54</sup>. En cuanto a los géneros a suministrar, se autoriza la venta de harina de cualquier calidad, aunque no la de vinos foráneos.

Tras la abolición del régimen señorial y la supresión de los derechos exclusivos, privativos y prohibitivos, el Marqués de Peñacerrada continuará explotando la tienda, taberna y panadería, percibiendo los cánones impuestos anualmente y estableciendo las condiciones de su cesión en arrendamiento. En este caso queda bastante clara la distinción entre la antigua regalía y el edificio donde ésta se desarrollaba, como queda puesto de manifiesto en uno de los contratos otorgados por D. Mariano Pascual y Vergara en 1815 en el que, en relación al

---

<sup>53</sup> AHPA. Prot. Not. de J. Rovira, P. 1.535, año 1789, fs, 242 vto-243 vto.

<sup>54</sup> AHPA. Prot. Not. de F. Sala y Cantó, P. 1.624, año 1805, fs. 164 vto-165 vto.

precio de arriendo, se hace constar: "con exclusión de la casa que sobre el arrendamiento se deberá entender con la Ylustre Señora Marquesa viuda su madre"<sup>55</sup>. No sucedería lo mismo con la regalía del abasto de carnes, que pasaría a ser gestionada por el ayuntamiento, aunque en las escrituras figura también la marquesa, como propietaria del edificio, a quien deben de satisfacerse 17 libras anuales por el arriendo del mismo.

---

<sup>55</sup> AHPA. Prot. Not. de F. Sala y Cantó, P. 1.627, año 1815, fs. 3-4.

## CONCLUSIONES



## CONCLUSIONES

Un rasgo fundamental del ámbito objeto de estudio es la notoria implantación del régimen señorial que presenta, así como la notable fragmentación jurisdiccional existente. En efecto, coexisten y se superponen distintos niveles jurisdiccionales, integrados en un complejo sistema de relaciones de interdependencia; la delimitación de las competencias de cada uno de ellos será fuente continua de enfrentamientos. La fragmentación jurisdiccional resulta más acentuada en el Campo de Alicante que en el Bajo Vinalopó. Mientras en la segunda de las comarcas -coincidente con el antiguo Marquesado de Elche- es preeminente (y casi exclusiva) la jurisdicción suprema o baronal que ejerce el titular del marquesado, de modo que pasa prácticamente desapercibido en la documentación existente el pequeño señorío de Asprillas (sobre cuya adscripción jurisdiccional tenemos ciertas dudas -señorío alfonsino o solariego únicamente-) subordinado al anterior, el Campo de Alicante, en vísperas de la abolición del antiguo régimen, se caracteriza por una multiplicidad de jurisdicciones: la suprema ejercida por el núcleo realengo de Alicante, la alfonsina que poseen los titulares de la serie de pequeños enclaves señoriales

aledaños que la circundan (Agost, Busot, Villafranqueza, Peñacerrada y la Vallonga, además de la Sarga) y la baja que disfruta el Marqués del Bosch en el señorío solariego de Aguas de Busot.

No cabe duda de que esta imbricación de niveles jurisdiccionales ocasionará un continuo proceso de afirmación y delimitación no sólo de las competencias que brinda el disfrute de la misma, sino de otras cuestiones como la amplitud territorial de los diferentes términos comprendidos en el ámbito comarcano -y, concretamente, en el término general de la ciudad de Alicante- o la pertenencia de los derechos de aprovechamiento de las utilidades rústicas (aguas, montes, pastos) de dichos enclaves. Un ejemplo de esta situación lo constituye el enfrentamiento suscitado entre la ciudad de Alicante y los titulares y ayuntamientos de los señoríos de Agost, Busot y Villafranqueza ante la reacia actitud de ésta a admitir el ejercicio de la jurisdicción alfonsina (o suprema en el caso de Villafranqueza) en los mismos y la disputa por el aprovechamiento de pastos, o el generado entre el Marqués de Elche y los señores de Asprillas en torno a la cuestión de los diezmos.

La jurisdicción alfonsina, instaurada por Alfonso II en las Cortes de 1329, con una finalidad discutida por diversos autores (política, de control de los pequeños enclaves señoriales, colonizadora), se constituye como una jurisdicción de carácter intermedio entre la suprema y la baja o civil, plena en lo civil y limitada en lo criminal, para cuyo disfrute será imprescindible la previa posesión del elemento territorial y el

asentamiento de un mínimo volumen de población en él (15 hogares en el caso de cristianos viejos, y 7 ó 3 en el caso de mudéjares o moriscos, dependiendo de su ubicación en otros dominios señoriales o en realengo respectivamente).

La propiedad de la base territorial por los titulares de los señoríos alfonsinos con antelación a la obtención de la jurisdicción revestirá una gran trascendencia en momentos posteriores, tras la supresión del régimen señorial y la puesta en vigor de la legislación abolicionista.

La posesión de la misma ha sido confirmada en los diversos casos analizados: la adquisición a la corona del castillo y término de Agost en 1320 por Jaime Burgunyo, la transferencia del lugar de Busot en 1423 realizada por las herederas de Bonafonat de Vallebrera a favor de Pedro Fernández de Mesa, la venta de las heredades de Aguas y Barañes a D. Alfonso Martínez de Vera por D. Francisco Rocamora en 1609, la adquisición de las heredades de Palamó y Orgegia por D. Pedro Franqueza en los últimos años del siglo XVI. La propiedad de este recurso en el caso de los señoríos posteriores es un hecho fuera de toda duda; el elemento territorial de todos estos nuevos señoríos formaba parte del patrimonio rústico de los aspirantes a la jurisdicción alfonsina, en calidad de bienes libres o vinculados.

Este hecho nos da pie para incidir en una matización de gran importancia, la distinta época de gestación de los señoríos integrados en el ámbito de estudio. Y es que, efectivamente, aspectos como la composición de las rentas señoriales, el grado

de consolidación del régimen señorial en el señorío (y, por tanto, de control y mediatización señorial de la vida local), el alcance real de las competencias jurisdiccionales de los titulares o los regímenes de tenencia empleados van a estar determinados por la época de constitución de los mismos.

De este modo, podemos establecer diferencias fundamentales entre los diversos señoríos de la zona considerada. Con anterioridad a la expulsión de los moriscos surgen Agost, Aguas, Asprillas, Busot y villafranqueza, y son posteriores a este hecho Peñacerrada, La Vallonga y la Sarga, creados tras la reposición del privilegio alfonsino en 1772.

La diferente consolidación del régimen señorial así como la naturaleza de las competencias jurisdiccionales de los señores alfonsinos originará, tras la promulgación de la legislación abolicionista, una reacción antiseñorial más o menos acentuada, de la que dependerán las posibilidades de preservación de los patrimonios señoriales.

Por lo que respecta a la estructura de las rentas señoriales, la importancia de partidas como la participación en diezmos, los ingresos derivados de la posesión de los privilegios exclusivos, privativos o prohibitivos (más numerosos y sobre un volumen de población de mayor entidad en los señoríos mas antiguos) o las rentas procedentes del ejercicio de la justicia será distinta en unos casos y otros. Por ejemplo en relación a las regalías, existe un franco contraste entre Busot, Agost y Villafranqueza de una parte, y Peñacerrada o la Vallonga por otra. Mientras en los mencionados en primer lugar se establecen

regalías sobre las actividades artesanales o industriales o de transformación de los productos agrarios (hornos, almazaras, molinos, tejares,)), la prestación de servicios a la comunidad (pesos y medidas, trata de mercaderías, abasto de carnes, tienda, taberna o panadería) o el aprovechamiento de las utilidades rústicas (montes, pastos, aguas, leñas), en los segundos son más reducidas, limitadas generalmente a las actividades relacionadas con el abasto de la población (tienda, taberna, horno, carnicería). Además, en la estipulación de los capítulos que regulan su funcionamiento, se imponen cláusulas destinadas a preservar y no perjudicar las regalías que de naturaleza similar existen en las entidades de población vecinas (caso de Peñacerrada).

También será distinto el sistema de gestión y administración de las rentas señoriales. Es de destacar el predominio del arrendamiento de los derechos dominicales en los señoríos anteriores al extrañamiento de los moriscos, generalmente de manera global -dando lugar con frecuencia al subarrendamiento de los mismos-, aunque en algunas ocasiones son los ayuntamientos de los dominios señoriales los encargados de gestionar alguno de estos derechos (por ejemplo algunas regalías). Frente a ello, los enclaves señoriales creados en vísperas de la abolición del antiguo régimen serán administrados directamente por sus titulares (o sus apoderados), salvo excepciones de carácter más o menos temporal pero que siguen manteniendo un criterio económico (caso del arrendamiento de las particiones de frutos en la Vallonga de Burgunyo).

Es éste un hecho íntimamente ligado con la finalidad última de este tipo de iniciativas, ya que al deseo de promoción social se unen criterios de tipo económico, la puesta en explotación más rentable de heredades de una cierta extensión y, en ocasiones, sólo parcialmente cultivadas. Así sucede en los casos de la Vallonga y Peñacerrada, puesto que ambos señoríos se identifican con grandes explotaciones agrícolas, donde se consigue al máximo la integración del cultivador con la tierra, y donde la posesión de las regalías y el ejercicio de una cierta jurisdicción tienen un carácter de complemento y garantía de las rentas señoriales. A este último grupo se agregan los titulares del señorío de Asprillas que en los últimos momentos del antiguo régimen sustituirían el arrendamiento de sus propiedades y del derecho de diezmos por la gestión directa de los mismos, convirtiéndose en el paradigma de esa nueva clase señorial asimilada en sus prácticas a la burguesía.

En efecto, los titulares de los nuevos señoríos alfonsinos, miembros de la pequeña nobleza titulada y el patriciado urbano, presentan unos comportamientos alejados de los del resto de la nobleza absentista; muestran una abierta preocupación por la correcta administración y rentabilización de sus propiedades, y por el engrandecimiento y conservación de sus patrimonios. Así se ha puesto de manifiesto en el caso de los Roca Togores, dueños de Asprillas, de los Pascual de Riquelme, titulares de Peñacerrada, los Burgunyo, señores de la Vallonga de Burgunyo, y los Rojas, poseedores de los lugares de Aguas, Busot, y otros señoríos en el Bajo Segura.

El proceso de ampliación de sus patrimonios, al margen de los mecanismos habituales de adquisición, se verá apoyado por la política matrimonial adoptada por estas casas señoriales, de carácter endogámico y dirigida a emparentar con otras casas señoriales de rango similar o incluso superior, o con miembros del patriciado urbano y la pequeña nobleza no titulada, pero con importantes recursos económicos. Así se ha puesto de manifiesto al analizar los diversos señoríos.

Una incidencia fundamental adquieren los regímenes de tenencia en el proceso de extinción de los patrimonios señoriales en el antiguo reino de Valencia. Al régimen señorial valenciano va particularmente asociada la enfiteusis. Esta forma jurídica de propiedad y explotación será empleada de manera casi generalizada en los señoríos del Campo de Alicante y Bajo Vinalopó. La profunda imbricación de esta forma de tenencia con el régimen señorial valenciano, debido al soporte que le presta el ejercicio de la jurisdicción, evidenciado en la importancia y trascendencia de derechos como el comiso, la fadiga o el luismo, ocasionará, tras la abolición del régimen señorial, la identificación de los derechos derivados de la propiedad de la tierra con los resultantes del ejercicio de la jurisdicción, derivando en la negativa de los enfiteutas a reconocer los derechos del dominio directo y a satisfacer las prestaciones inherentes a él.

La percepción de un canon en especie o en metálico es el más importante de los derechos derivados de la propiedad de la tierra. De diferente cuantía según la época de su imposición, las características de la tierra o el tipo de cultivos, se dan bajo

esas dos formas en los señoríos de Aguas y Busot, mientras predominan las particiones en especie, adquiriendo solamente un carácter complementario las satisfechas en metálico, en los señoríos de Agost y Villafranqueza. Los señoríos más recientes (La Vallonga y La Sarga) registran las particiones en especie más altas de todo el conjunto, hecho que no se debe atribuir a un recrudecimiento de la presión señorial, sino a las compensaciones que cabría exigir el titular del dominio directo ante la cesión del útil en una época de retroceso de la enfiteusis y de generalización de las reivindicaciones de los enfiteutas por el acceso a la plena propiedad de la tierra, junto al incremento demográfico y la mayor demanda de tierras.

Una distinta evolución experimentarán aquellos señoríos en los que se implante desde un primer momento el arrendamiento como forma de tenencia (Peñacerrada) o se produzca la sustitución de la enfiteusis por otras formas de explotación, arrendamiento, aparcería o explotación indirecta, bien en los momentos previos a la abolición del régimen señorial (La Vallonga de Burgunyo), bien durante las primeras décadas del siglo XIX (Asprillas); a través de la consolidación de dominios en manos del titular del directo propiciada por el ejercicio de los derechos de comiso y fadiga, o la compra directa de las propiedades establecidas a los enfiteutas, bien sin mediar ninguna medida de presión, bien por cesiones en pago de deudas. En el caso de la Vallonga, por ejemplo, se combinan ambos procesos, comiso y reversión del dominio útil en pago de deudas y por el abandono de los establecimientos ante la imposibilidad de llevar a cabo las labores de cultivo.



El empleo de regímenes de tenencia que no implicasen la división de dominios y la génesis de una propiedad compartida, salvaguardaría los patrimonios señoriales de los efectos derivados de las disposiciones abolicionistas y el nuevo marco sociopolítico y legal creado tras la supresión del antiguo régimen. En cambio, aquellos señoríos en los que fue implantada la enfiteusis como régimen de tenencia predominante sufrirían el desmantelamiento del elemento territorial en manos de sus titulares, propiciando el acceso a la plena propiedad de la tierra de los enfiteutas; proceso que tendría lugar de hecho antes que de derecho.

Y es que en efecto, a pesar de que las disposiciones abolicionistas mantuvieron el señorío territorial y las prestaciones con ese origen -aunque sí suprimieron las jurisdicciones y las regalías-, el nuevo contexto sociopolítico creado, en el que toma cuerpo la génesis de una acentuada corriente antiseñorial y reivindicativa por parte de los enfiteutas, favorecerá la desaparición de hecho de las rentas derivadas del dominio directo, ante la reiterada negativa de los enfiteutas a su reconocimiento y satisfacción. Es éste un proceso que se verá posibilitado por la pérdida de significado del dominio directo en beneficio del útil, y la transformación del primero en un mero *ius in re aliena*, y con el tiempo en un gravamen ilusorio e irreal, carente de contenido. Gran protagonismo adquirirá en esta evolución el Registro de la Propiedad, al dificultar, por el propio rigor de los asientos registrales, la inscripción del dominio directo, así como al

favorecer la ocultación de los enfiteutas de las cargas señoriales o la generalización de preceptos como el de la prescriptibilidad de las cargas de origen señorial. Esta evolución ha sido la seguida en los casos de Busot, Aguas y Agost.

En este punto hemos de realizar una matización en relación al señorío de Aguas de Busot. Aunque sufre un proceso paralelo al detallado en las líneas anteriores, la carencia de jurisdicción de los titulares del mismo va a posibilitarles acometer, con ciertas garantías de éxito, un proceso de recuperación del dominio útil durante la segunda mitad del siglo XIX, a través del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en expedientes judiciales, aunque también a partir de la simple transacción comercial con los enfiteutas o la cesión del dominio útil en pago de deudas. Este proceso permitirá al dueño del antiguo señorío territorial conservar parte del patrimonio antiguamente establecido en enfiteusis, al margen de la superficie de monte cuya posesión no se vio disputada. Es fundamental en la evolución final del patrimonio solariego de Aguas la actitud del titular del mismo, quien aprovechó los mecanismos de que disponía para preservar sus patrimonios de la extinción y el desmantelamiento.

Desaparecidas las jurisdicciones y abolido el régimen señorial, los pequeños señoríos surgidos en esta última etapa volverían a ser integrados en los municipios de los que se habían segregado algunas décadas antes, consolidándose, en cambio, los

constituídos en periodos bastante más anteriores, con la excepción de Villafranqueza que volvería a formar parte del término de Alicante.

Otro tipo de iniciativas emprendidas por los titulares de señoríos, como la adopción de acuerdos con los enfiteutas para la sustitución de las prestaciones señoriales por cantidades fijas en metálico, de cuya satisfacción se responsabilizaba en ocasiones el ayuntamiento del lugar (Villafranqueza), no se vieron coronadas al final por el éxito, ante la negativa de los antiguos enfiteutas o sus representantes a continuar con los pagos establecidos.

Por el contrario, diferente será la trayectoria de aquellos señoríos en los que no se mantenía la enfiteusis en los momentos previos a la supresión del régimen señorial, puesto que, preservado su elemento territorial, se convertirán en grandes explotaciones agrarias (caso de la Vallonga o Peñacerrada, similar a otros pequeños señoríos del Bajo Segura), hasta la entrada en vigor de otras disposiciones complementarias que favorecerían a la larga la fragmentación y la desaparición de los antiguos patrimonios señoriales.

Hemos de conceder por tanto una incidencia también de primer orden a las disposiciones desvinculadoras, que afectarán además de estos patrimonios, a los conservados en los señoríos de predominio de la enfiteusis por hallarse en plena propiedad del señor, ante el recurso limitado a ciertas heredades de otros

regímenes de tenencia como el arrendamiento, la aparecería o la explotación directa. Estas disposiciones favorecerán los procesos de fragmentación hereditaria y de enajenación a terceros.

Importancia complementaria adquieren igualmente otros factores como el endeudamiento señorial (motivado por el mantenimiento de un alto nivel de vida, la disminución y desaparición de una serie de rentas o la realización de proyectos empresariales con resultados negativos) o la falta de vinculación afectiva a la tierra de los nuevos poseedores.

Todos estos hechos se combinan en mayor o menor medida en los casos de la Vallonga y Peñacerrada, aunque en el primero sólo parcialmente. Transmitida íntegramente por motivos económicos (endeudamiento) a finales del siglo XIX a una adinerada familia noveldense, sería conservada en el seno de la misma, aunque dividida por motivos hereditarios hasta bien mediado el siglo actual, momento en que comenzaría un importante proceso de fragmentación y segregación a terceros asociado a la falta de vinculación afectiva de una parte de los herederos (proceso que no se ha hecho extensivo a toda la finca).

En el caso de Peñacerrada, la promulgación de las disposiciones desvinculadoras adquiere una trascendencia fundamental, al propiciar la fragmentación hereditaria del patrimonio vinculado (mecanismo iniciado con anterioridad en los bienes libres) y la enajenación a terceros con objeto de satisfacer las deudas acumuladas sobre él. Como resultado de ambos factores, en la segunda mitad del siglo XIX, los titulares del Marquesado de Peñacerrada contarán únicamente en el antiguo

señorío con la posesión de la casa solariega y las tierras anejas a la misma, integradas en la finca del mismo nombre. Esta superficie en la actualidad no supera las 2,5 hectáreas.

Esto nos pone de manifiesto como vuelve a ser la actitud de los titulares fundamental en el proceso evolutivo de los antiguos patrimonios señoriales. Un caso contrario al ejemplo expuesto lo constituye la Casa de Rojas, pues la voluntad preservadora de D. José de Rojas y Canicia y de D. José de Rojas y Galiano favorecería el mantenimiento y conservación de una importante parte de sus patrimonios, a través del recurso a disposiciones testamentarias como las cesiones en usufructo o la distribución de legítimas en bloques homogéneos geográficamente.

## BIBLIOGRAFÍA

## BIBLIOGRAFIA

- ABELLAN GARCIA, A.: *Los ferrocarriles del sureste (Estudio Geográfico)*. Instituto Juan Sebastián Elcano, CSIC, Madrid, 1979.
- AGUADO, A. M<sup>a</sup>: "Aproximació a l'estructura de classe i conflictes socials en el senyoriu de Montesa: Sueca al segle XVIII". *Estudis d'Història Contemporània del País Valencià*, n<sup>o</sup> 2, Valencia, 1981, pp. 99-114.
- AGUADO, A. M<sup>a</sup>: "La partició de fruits i la seva evolució a la segona mitat del segle XVIII a Sueca". *Economia Agrària i Història Local. I Assemblea d'Història de la Ribera*. Institució Alfons el Magnànim, Valencia, 1981, pp. 363-381.
- ALBEROLA ROMA, A.: "Aportación al estudio de la enfiteusis en tierras realengas. Comentario a unas instrucciones de cabrevación". *La propiedad de la tierra en España*. Alicante, 1981, pp. 141-152.
- ALBEROLA ROMA, A.: "Los establecimientos de aguas en el Realengo alicantino: Una forma de aplicar el contrato enfiteútico por el Real Patrimonio a fines del siglo XVIII". *Revista de Historia Moderna*, n<sup>o</sup> 3, Alicante, 1983, pp. 99-113.
- ALBEROLA ROMA, A.: *El pantano de Tibi y el sistema de riegos de la Huerta de Alicante*. Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, Alicante, 1984.

- ALBEROLA ROMA, A: *Jurisdicción y propiedad de la tierra en Alicante (ss. XVII y XVIII)*. Ayuntamiento-Universidad de Alicante, Alicante, 1984.
- ALBEROLA ROMA, A.: "Las disponibilidades hídricas en la huerta alicantina: un problema tradicional". *Demanda y Economía del agua en España*. CAAM-Instituto de estudios Juan Gil-Albert, Alicante, 1988.
- ALCUBILLA: *Diccionario de la Administración Española. Compilación de la Novísima legislación de España En todos los ramos de la administración pública*. Fundado por D. Manuel Martínez Alcubilla, Madrid, 1930, 6ª Ed., 13 Tomos.
- ALTAMIRA CREVEA, R.: *Derecho consuetudinario y economía popular de la Provincia de Alicante*. Facsímil, Instituto de estudios Juan Gil-Albert, Alicante, 1985.
- ANAYA, C., DOMENEC, J., ANDRES, I., PEREZ, F. Y PUIG, F.: "Estructura de la propietat als senyorius valencians a les darrerries de l'Antic Règim: Tavernes de Valldigna, Albalat de la Ribera y Gandia". *Estudis d'Història Contemporània del País Valencià*, nº 5, Valencia, 1984, pp. 195-205.
- ARDIT, M., GARCIA, C., MORANT, I. Y RUIZ, P.: "Estructura i crisi del règim senyorial al País Valencià". *L'Espill*, nº 3, Valencia, Tardor, 1979, pp. 59-87.
- ARDIT LUCAS, M.: *Revolución Liberal y Revuelta campesina. Un ensayo sobre la desintegración del régimen feudal en el País Valenciano (1793-1840)*. Ariel, Barcelona, 1977.



- ARQUES JOVER, Fray A.: *Nobiliario Alicantino*. Transcripción, adiciones, notas y comentarios de L. Más y Gil y J. M. Esquerdo Ribera, Ayuntamiento, 1966.
- ARTOLA, M.: "El antiguo Régimen". *Estudios sobre historia de España*. (Obra homenaje a M. Tuñón de Lara), Madrid, 1981, Vol. I, pp. 149-166.
- BADENAS M. A. y BERNAT, J. S.: "Epidemias y hambre en la crisis del Antiguo Régimen. Estudio demográfico (1808-1814)". *Estudis d'Història Contemporània*, nº 2, Valencia, 1981, pp. 115-137.
- BALCELLS, A.: *El problema agrario en Cataluña. La cuestión Rabassaire (1890-1936)*. MAPA, Madrid, 1980, 2ª Ed.
- BARON DE FINESTRAT: *Nobiliario Alicantino*. Instituto de Estudios Alicantinos, Alicante, 1983.
- BENDICHO, V.: *Crónica de la muy ilustre, noble y leal ciudad de Alicante*. Acabada en la misma ciudad el año del señor 1640. Resumida y anotada por D. F. Figueras Pacheco. Instituto de Estudios Alicantinos, Alicante, 1960.
- BERNAL, A. M. y DE LA PEÑA, J. F.: "Formación de una gran propiedad agraria. Análisis de una contabilidad agrícola del siglo XIX". *Agricultura, Comercio colonial y Crecimiento económico en la España Contemporánea*. (Actas del primer coloquio de Historia Económica de España), Ariel, Barcelona, 1974, pp. 129-157.

- BLESA CUÑAT, A.: "Aportación al estudio de los pleitos de señorío posteriores al Decreto de 1811". *Primer Congreso de Historia del País Valenciano*. Universidad de Valencia, Valencia, 1975, Vol. IV, pp. 249-262.
- BORRELL MACIA, A.: Voz "Fadiga", en MASCAREÑAS, C. y PELLISE PRATS, B.: *Nueva Enciclopedia Jurídica*, Seix, Barcelona, 1971, T. IX, pp. 450-454.
- CABO ALONSO, A.: "Fuentes para la Geografía Agraria de España". *Estudios Geográficos*, nº 83, Madrid, 1961, pp. 223-249.
- CAMARENA MAHIQUES, J.: *Padrón demográfico-económico del reino de Valencia ¿1735?*. Universidad de Valencia, Valencia, 1966.
- CASEY, J.: "Irrigació i economia al País Valencià. 1589-1689". *Actas del primer congreso de Historia del País Valenciano*. Valencia, 1976, Vol. III, pp. 281-289.
- CASEY, J.: *El regne de València al segle XVII*. Curial, Barcelona, 1981.
- CAVANILLES, A. J.: *Observaciones sobre la Historia natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia*. 1797, Facsímil, Valencia, 1972, 2 Vol.
- CISCAR PALLARES: "Ventas de tierra de moriscos expulsados (Reflexiones sobre el caso de Agullent)", *Primer Congreso de Historia del País Valenciano*, Universidad de Valencia, Valencia, Vol. III, 1976, pp. 333-337.
- CISCAR PALLARES, E.: *Tierra y señorío en el País Valenciano 1570-1620*, Del Cenia al Segura, Valencia, 1977.
- CLAVERO, B.: *Mayorazgo y propiedad feudal en Castilla. 1360-1836*, Siglo XXI, Madrid, 1974.

CLAVERO, B.: "Foros y rabassas. Los censos agrarios ante la revolución española". *Agricultura y Sociedad*, nº 16, Madrid, 1980, pp. 27-69.

CLAVERO, B.: "Foros y rabassas. Los censos agrarios ante la revolución española (2ª parte)", *Agricultura y Sociedad*, nº 18, Madrid, 1981, pp. 65-100.

CLAVERO PARICIO, L.: *Los climas de la Región Valenciana* (resumen de tesis doctoral), Universidad de Barcelona, Barcelona, 1980.

COLECCION LEGISLATIVA: *Colección de los Decretos y Reales Ordenes que se han expedido o circulado por la secretaría del Despacho de la Gobernación de la Península, correspondientes a los años de 1820 y 1821*: Impresa de Orden del Gobierno, Imprenta Nacional, Madrid, 1822.

COLECCION LEGISLATIVA: *Colección de Decretos y órdenes expedidas por Cortes Generales y Extraordinarias, mandada publicar por orden de las mismas, 1814-1823*, Madrid, Imprenta Nacional, Imprenta de D. Tomás Alban y Compañía, 1820-1823.

COLECCION LEGISLATIVA: *Colección de Decretos*, (s. l.-sn), Madrid, Imprenta Real, 1816-1848.

COLECCION LEGISLATIVA/MUÑIZ MIRANDA, J.: *Colección oficial de las Leyes, reales disposiciones y circulares de interés general, expedidas por el Rey D. Fernando VII y por las Cortes en el año 1820*, Imprenta José Morales, 1853.

- COLECCION LEGISLATIVA: *Colección legislativa de España: continuación de la Colección de Decretos*, Edición oficial, Imprenta Nacional, Ministerio de Gracia y Justicia, Madrid, 1848-1893.
- CORBELLA, A.: Voz "Censal", en MASCAREÑAS, C. y PELLISE PRATS, B.: *Nueva Enciclopedia Jurídica*, Seix, Barcelona, 1971, T. V, pp. 1-5.
- COSTA MAS, J.: *El Marquesat de Denia. Estudio Geográfico*, Universidad de Valencia, Valencia, 1977.
- COSTA MAS, J.: "La agricultura de los cosechero-exportadores de tomate de invierno en Alicante", *Investigaciones Geográficas*, nº 2, Universidad de Alicante, Alicante, 1984, pp. 63-85.
- COSTA MAS, J.: "La cuestión del agua en un área de tradicional regadío deficitario: Elche (Alicante)", *Economía y Demanda del agua en España*, CAM-Instituto Juan Gil-Albert, Alicante, 1988, pp. 379-387.
- CHIQUILLO PEREZ, J.A.: "Aproximación al estudio del régimen señorial valenciano en el siglo XVIII", *Estudis*, nº 7, Valencia, 1978, pp. 241-259.
- DOMINGUEZ MOLTO, A.: *El señorío de la Baronía de Planes*, Gráficas Vidal-Leuka, Alicante, 1978.
- DONEZAR DIEZ DE ULZURRUN, J.M.: "Las respuestas particulares del catastro de Ensenada", *Estudios sobre Historia de España*, Homenaje a M. Tuñón de Lara, Vol. I, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Madrid, 1981, pp. 133-145.

- ESCOLANO, G.: *Década primera de la Historia de Valencia*, Universidad de Valencia, Departamento de Historia Moderna, Facsímil, 1972.
- FIGUERAS PACHECO, F.: "Geografía de la Provincia de Alicante", en CARRERAS CANDI, F.: *Geografía General del Reino de Valencia*, T. V, Barcelona.
- FRANCH BENAVENT, R.: "El régimen señorial del convento de Aguas Vivas durante el siglo XVIII", *Estudis*, nº 8, Valencia, 1979/80, pp. 223-271.
- FRANCH BENAVENT, R.: "Un caso de señorío eclesiástico valenciano: El convento de Aguas Vivas durante el siglo XVIII", *Anales Valentinós, Revista de Filosofía y Teología*, nº 11, Valencia, 1980, pp. 83-117.
- FRANCO, V.I.: *Noticia de la actual población del Reyno de Valencia: la de sus despoblados desde la Conquista por el Rey D. Jayme Primero: las leguas que distan de la Capital: los Señoríos directos que los poseen. y las Diócesdis á que pertenecen*, Valencia, 1804, Librería "París-Valencia", Facsímil, 1979.
- FURIO, A. y GARCIA, F.: "Algunas consideraciones acerca del feudalismo medieval valenciano", *Estudios sobre Historia de España*, Homenaje a M. Tuñón de Lara, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Vol. I, Madrid, 1981, pp. 109-122.
- GARAY MONZO, J.M.: "Los señoríos de la Hoya de Buñol y los Serranos en el siglo XVIII", *Estudis*, nº 9, Valencia, 1981/82, pp. 267-303.

- GARCIA CARRETERO, M.M.: *Dinámica de los espacios industriales en el municipio de Alicante*, Ayuntamiento de Alicante, Serie Estudios Municipales, nº 7, Alicante, 1991.
- GARCIA DE PEDRAZA, L. y CASTILLO REQUEMA, J.M.: "Influencia de la configuración topográfica de la Península Ibérica con sus caracteres meteorológicos y climáticos", *Paralelo 37*, nº 5 Almería, 1981, pp. 31-41.
- GARCIA MONERRIS, C. y GARCIA MONERRIS, E.: "De señorío a realengo: Las dificultades de legitimación y consolidación de una bailía. Dénia 1763-1840", *Estudis d'Història Contemporània del País Valencià*, nº 6, Valencia, pp. 53-79.
- GEIGER, F.: "El Sureste español y los problemas de la aridez", *Revista de Geografía VII*, nº 1-2, Barcelona, 1973.
- GIL OLCINA, A.: "El regadío en Elche", *Estudios Geográficos*, nº 128, Madrid, 1968, pp. 527-574.
- GIL OLCINA, A.: "El régimen de los ríos alicantinos", *Estudios Geográficos*, nº 128, Madrid, 1972, pp. 425-457.
- GIL OLCINA, A.: "Las estructuras de establecimiento y venta a carta de gracia de las haciendas de moriscos en el Marquesado de Elche", *Cuadernos de Geografía*, Valencia, 1979, pp. 27-37.
- GIL OLCINA, A.: "La extinción de la propiedad señorial en el territorio valenciano", *Estudios Geográficos*, nº 154, Madrid, 1979, pp. 51-74.
- GIL OLCINA, A.: *La propiedad señorial en tierras valencianas*, Del Cenit al Segura, Valencia, 1979.

- GIL OLCINA, A.: "Crisis y transferencia de las propiedades estamental y pública", *Coloquio sobre la propiedad de la tierra en España*, Departamento de Geografía, Universidad de Alicante, Alicante, 1981, pp. 11-38.
- GIL OLCINA, A.: "La propiedad de la tierra en los señoríos de jurisdicción alfonsina", *Investigaciones Geográficas*, nº 1, Instituto Universitario de Geografía, Alicante, 1983, pp. 7-24.
- GIL OLCINA, A.: "Los ilustrados y el régimen señorial valenciano", en ALBEROLA, A. y LA PARRA, E.: *La Ilustración española*, Instituto Juan Gil-Albert, Diputación Provincial, Alicante, 1985, pp. 403-415.
- GIL OLCINA, A.: "Jurisdicción alfonsina y poblamiento valenciano", *Cuadernos de Geografía*, nº 39-40, Valencia, 1986, pp. 235-245.
- GIL OLCINA, A. y otros: *Inundaciones en la ciudad y término de Alicante*, Universidad de Alicante-Ayuntamiento de Alicante, Alicante, 1986.
- GIL OLCINA, A.: "Marco institucional y propiedad de la tierra", *Estructuras y regímenes de tenencia de la tierra en España*, MAPA, Madrid, 1987, pp. 23-60.
- GIL OLCINA, A.: "Declive y ocaso de la enfiteusis señorial valenciana", *Agricultura y Sociedad*, nº 49, MAPA, Madrid, 1988, pp. 293-318.
- GIL OLCINA, A.: "Evolución de los grandes regadíos deficitarios del Sureste peninsular", *Demanda y Economía del agua*, CAM-Instituto Juan Gil-Albert, Alicante, 1988, pp. 311-327.

- GIL OLCINA, A.: "Reformismo ilustrado, colonización interior y restablecimiento del fuero alfonsino", *Agricultura y Sociedad*, nº 56, MAPA, Madrid, 1990, pp. 79-112.
- GIL OLCINA A. y CANALES MARTINEZ, G.: *Residuos de propiedad señorial en España. Perduración y ocaso en el Bajo Segura*, Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, Alicante, 1988.
- GIL OLCINA, A. y otros: *Lluvias torrenciales e inundaciones en Alicante*, Instituto Universitario de Geografía, Universidad de Alicante, 1983.
- GIMENEZ LOPEZ, E.: *Alicante en el siglo XVIII. Economía de una ciudad portuaria en el Antiguo Régimen*, Institut Alfons el Magnànim, Diputación Provincial de Valencia, 1981.
- GONZALEZ VECIN, J.: "Evolución del paisaje agrario del Bierzo desde el siglo XVIII. Investigación socioeconómica", *Primer Congreso de Geografía de Castilla la Vieja y León*, Consejo General de Castilla y León, Burgos, 1982, pp. 167-181.
- GOZALVEZ PEREZ. V.: *El Bajo Vinalopó. Geografía Agraria*, Universidad de Valencia-Ayuntamiento de Elche, Valencia, 1977.
- GOZALVEZ ESTEVE, E.: *Análisis de un Señorío Valenciano. "El Marquesado de Llombay"*, Tesis doctoral inédita, Alicante, 1990.
- GUAL CAMARENA, M.: *Las Cartas Pueblas del Reino de Valencia*, Generalitat Valenciana, Valencia, 1989.
- GUMUZIO, J. y MATARREDONA, E.: *Formaciones edáficas del Campo de Alicante*, Universidad de Alicante-Instituto Universitario de Geografía, Alicante, 1983.



- HALPERIN DONGHI, T.: *Un conflicto nacional. Moriscos y cristianos viejos en Valencia*, Institut Alfons el Magnànim, Diputació Provincial de Valencia, Valencia, 1980.
- HARO SABATER, J.R.: "Un eclesiástico valenciano, diputado liberal en las Cortes de Cádiz. Joaquín Lorenzo Villanueva", *Primer Congreso de Historia del País Valenciano*, Vol. IV, Valencia, 1975, pp. 273-284.
- HERNANDEZ MARCO, J.L.: "Evolución de cultivos y estructura de la propiedad en el País Valenciano. El secano en los siglos XVIII y XIX", *Estudis*, nº 7, Valencia, 1978, pp. 111-119.
- HERNANDEZ MARCO, J.L.: "Propiedad, trabajo y renta en el setecientos valenciano según unas fuentes poco utilizadas: los padrones de riqueza del Equivalente", *Premier Colloque sur le Pays Valencien à l'époque moderne*, Pau, Valencia, 1980, pp. 273-282.
- HERNANDEZ MARCO, J.L. y ROMERO GONZALEZ, J.: *Feudalidad, burguesía y campesinado en la Huerta de Valencia*, Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 1980.
- HURTADO ALVAREZ, E.: *Esbozos genealógicos y nobiliarios relativos a Alicante*, CAPA, Alicante, 1983.
- IBORRA LERMA, J.M.: *Realengo y señorío en el Campo de Morvedre*, Caja de Ahorros y Socorros de Sagunto, 1981.
- IZQUIERDO MISIEGO, J.I.: "Estructura agraria y paisaje en el borde Sureste de "Tierra de Campos": El ejemplo de Ampudia", *Primer Congreso de Geografía de Castilla la Vieja y León*, Consejo General de Castilla y León, Burgos, 1982, pp. 147-165.

JUAREZ SANCHEZ-RUBIO, C.: *Tipología climática de la provincia de Alicante*, mecanografiada, 1982.

LACOMBA, J.A.: "Fuentes para la Geografía de España. Las estadísticas de la Restauración", *Estudios Geográficos*, nº 90, Instituto Juan Sebastián Elcano, Madrid, 1963, pp. 39-55.

LOPEZ GOMEZ, A.: "Riegos y cultivos en la Huerta de Alicante. Evolución y estado actual", *Estudios Geográficos*, nº 45, Instituto Juan Sebastián Elcano, Madrid, 1951, pp. 701-771.

LOPEZ GOMEZ, A.: "Riegos y cultivos en las Huertas Valencianas", *Cuadernos de Geografía*, nº 1, Valencia, 1965, pp. 1-23.

LOPEZ GOMEZ, A.: "Embalses en los siglos XVI y XVII en Levante", *Estudios Geográficos*, nº XXXIII, Madrid, 1971, pp. 617-656.

LOPEZ GOMEZ, A.: "El origen de los riegos valencianos. Los canales romanos", *Cuadernos de Geografía*, nº 15, Valencia, 1974, pp. 1-24.

LOPEZ GOMEZ, A. y ROSSELLO VERGER, V.M.: *Geografía de la provincia de Alicante*, Diputación Provincial de Alicante, Alicante, 1978.

LOPEZ, L. y MALTES, J.B.: *Ilice Ilustrada*, (Historia de las antigüedades, grandezas y prerrogativas de la muy noble y siempre leal Ciudad de Alicante, que escribió el P. D. Juan Bautista Maltés (...), Compañía Collegui Societatis Alonensis, Alicante, 1907.

MADOZ, P.: *Diccionario Geográfico-Histórico-Estadístico de España y sus posesiones de ultramar*, Madrid, 1846.

- MADRAMANY Y CALATAYUD, M.: *Tratado de la Nobleza de la Corona de Aragón, especialmente del Reyno de Valencia, comparada con la de Castilla. Para ilustración de la Real Cédula del Sr. D. Luís I. de 14 de Agosto de 1724*, Valencia, 1788.
- MAHIQUES ALBEROLA, D.: "La renda senyorial en l'etapa final de la transició al capitalisme: El Marquès de Bèlgida", *Estudis d'Història Contemporània del País Valencià*, nº 6, Valencia, 1986, pp. 33-52.
- MALEFAKIS, E.: *Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX*, Ariel, Barcelona, 1976.
- MAÑE JANE, A.: *La redención de censos con dominio*, Bosch, Barcelona, 1940.
- MARTINEZ MORELLA, V.: *Alicante en la "Crónica de la inclita y coronada ciudad de Valencia y su reino" de Martín de Viciano (\*)*.
- MASACHS ALAVEDRA, M.: *El régimen de los ríos peninsulares*, CSIC, Barcelona, 1948.
- MATA OLMO, R.: "Concentración de la propiedad y renta de la tierra en la Campiña andaluza durante el Antiguo Régimen", *La propiedad rústica en España y su influencia en la organización del espacio*, Departamento de Geografía de la Universidad de Alicante, Alicante, 1981, pp. 39-51.
- MATA OLMO R.: *Pequeña y gran propiedad agraria en la depresión del Guadalquivir*, MAPA, Madrid, 1987.
- MATA OLMO, R. y RODRIGUEZ CHUMILLAS, I.: "Propiedad y explotación en el regadío de las "Vegas" de Madrid", *Agricultura y Sociedad*, nº 42, Madrid, 1987, pp. 149-180.

- MATA OLMO, R. y ROMERO GONZALEZ, J.: "Fuentes para el estudio de la propiedad agraria en España (siglos XVIII-XIX). Balance provisional y análisis crítico", *Agricultura y Sociedad*, nº 49, 1988, pp. 209-292.
- MAURICE, J.: *La reforma agraria en el siglo XX (1900-1936)*, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1975.
- MESTRE SANCHIS, A.: "La recolección de diezmos en la diócesis de Valencia según la encuesta capitular de 1758", *Primer Congreso de Historia del País Valenciano*, Vol. III, Valencia, pp. 631-642.
- MILLAN, J.: "La ciudad y los señores. La crisis del realengo foral en el Sur del País Valenciano", *Estudis*, nº 2, Universidad de Valencia, Valencia, 1981, pp. 61-97.
- MILLAN Y GARCIA VARELA, J.: *Rentistas y Campesinos. Desarrollo agrario y tradicionalismo político en el sur del País Valenciano, 1680-1840*, Instituto Juan Gil-Albert, Diputación Provincial de Alicante, 1984.
- MONTIEL MOLINA, C.: *Los Montes de Utilidad pública en la Provincia de Alicante*, Universidad de Alicante-CAPA, Alicante, 1990.
- MORALES GIL, A.: "El riego con aguas de avenida en las laderas subáridas", *Papeles del Departamento de Geografía de Murcia*, nº 1, Murcia, 1968-69, pp. 167-183.
- MORALES GIL, A. y BRU RONDA, C.: "Disponibilidades hídricas y modernas técnicas de embalse en el Campo de Alicante", *Investigaciones Geográficas*, nº 2, 1984, pp. 19-50.

- MORANT, I.: "Algunos aspectos de la oposición antifeudal en el Ducado de Gandía durante el siglo XVIII", *Premier Colloque sur le Pays Valencien à l'époque Moderne*, Pau, Valencia, 1980, pp. 315-327.
- MORANT, I.: *El declive del señorío. Los dominios del Ducado de Gandía (1705-1837)*, Institut Alfons el Magnànim, Diputació de Valencia, Valencia, 1984.
- MORENO GARBAYO, N.: *Colección de Reales Cédulas del Archivo Histórico Nacional*, Catálogo, Servicio de Publicaciones MEC, Madrid, 1977.
- MOXO, S. de: *La disolución del régimen señorial en España*, CSIC, Madrid, 1965.
- ORTEGA, M.: "El aprovechamiento de las tierras de pasto en el "Estado" de Luna durante el siglo XVIII", *Agricultura y Sociedad*, nº 43, Madrid, 1987, pp. 145-162.
- PALOP RAMOS, J.M.: *Hambre y lucha antifeudal. Las crisis de subsistencia en Valencia (Siglo XVIII)*. Siglo XXI, Madrid, 1977.
- PEÑA FERRIOL, L.: Voz "Laudemio", en MASCAREÑAS, C. y PELLISE PRATS, B.: *Nueva Enciclopedia Jurídica*, Seix, Barcelona, 1971, T. XIV, pp. 776-827.
- PEREZ APARICIO, C.: "La guerra de successió: Una revolució camperola". *Primer Congreso de Historia del País Valenciano*, Universidad de Valencia, Valencia, 1976, Vol. III, pp. (\*).

- PESET REIG, M.: "Apuntes sobre la abolición de los Fueros y la Nueva Planta Valenciana". *Primer Congreso de Historia del Pais Valenciano*, Universidad de Valencia, Valencia, 1976, Vol. III, pp. 225-236.
- PESET, M. y GRAULLERA, V.: "Nobleza y señorío durante el siglo XVIII valenciano". *Estudios de Historia Social*, nº 12-13, Madrid, 1980, pp. 245-281.
- PESET REIG, M.: "Propiedad y señorío en la Ribera del Júcar". *Economia agrària i Història local. I Assemblea d'Història de la Ribera*. Institució Alfons el Magnànim, Valencia, 1981, pp. 99-159.
- PESET, M.; MANCEBO, M<sup>a</sup> F. y GRAULLERA, V.: "El señorío de Alfara del Patriarca, 1601-1845". *Estudis d'Història Contemporània*, nº 2, Valencia, 1981, pp. 5-60.
- PESET REIG, M.: *Dos ensayos sobre la historia de la propiedad de la tierra*. Revista de Derecho Privado, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1982.
- PLA ALBEROLA, P.: "Apuntes para el estudio de las rentas señoriales en el siglo XVI. Los pequeños señoríos del "Cuartel de las montañas". Jerónimo Zurita. Su época y su escuela (Congreso Nacional). Fundación "Instituto Fernando el Católico", Zaragoza, pp. 259-265.
- PLA ALBEROLA, P.: "Condiciones de tenencia de la tierra y jurisdicción en el siglo XVI valenciano. Hacia una tipificación de las alquerías moriscas". *Coloquio sobre la propiedad rústica en España y su influencia en la organización del espacio*. Alicante, 1981, pp. 53-63.

- PLA ALBEROLA, P.: *Conflictos jurisdiccionales en un gran señorío valenciano: El Condado de Cocentaina ante la consolidación del absolutismo*. Tesis doctoral inédita, Dpto. De Historia Moderna, Universidad de Alicante, Alicante, 1985.
- PLA ALBEROLA, P.: *Cartas pueblas del Condado de Cocentaina*. Ayuntamiento de Cocentaina-Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, Alicante, 1986.
- PLA ALBEROLA, P.: "Recolonización interior y expansión del régimen señorial. La carta puebla de la Sarga de 1774". *Estructuras y regímenes de tenencia de la tierra en España*. MAPA, Madrid, 1987, pp. 117-128.
- PUIG PEÑA, F.: Voz "Enfiteusis", en MASCAREÑAS, C. y PELLISE PRATS, B.: *Nueva Enciclopedia Jurídica*. Seix, Barcelona, 1971, T. XVIII, pp. 552-570.
- RAMOS FERNANDEZ, R.: "Proyectos para trasvase de aguas de riego a Elche". *Cuadernos de Geografía*, nº 7, Valencia, 1970, pp. 259-272.
- RAMOS HIDALGO, A.: *Evolución urbana de Alicante*. Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, Alicante, 1984.
- ROBLEDO HERNANDEZ, R.: "Revolución burguesa en España: La reconversión de los privilegiados". *Estudis d'Història Contemporània del País Valencià*, nº 6, Valencia, 1982, pp. 81-95.
- ROMERO GONZALEZ, J. y CUOCO GINER, J.: "La estructura de la propiedad de la tierra y los cultivos en la Ribera Baixa durante el siglo XIX: El caso de Cullera". *Cuadernos de Geografía*, nº 24, Valencia, 1979, pp. 55-78.

- ROMERO GONZALEZ, J.: "Les estructures de propietat de la terra i de les unitats d'explotació al País Valencià. Mètode i fonts per al seu estudi". *Economia agrària e Història local. I Assemblea d'Història de la Ribera*. Institució Alfons el Magnànim, Valencia, 1981, pp. 161-183.
- ROMERO GONZALEZ, J.: *Propiedad agraria y sociedad rural en la España Mediterránea. Los casos valenciano y castellano en los siglos XIX y XX*. MAPA, Madrid, 1983.
- ROMERO GONZALEZ, J. y SALORT VIVES, S.: "Pequeña y gran propiedad en Alicante ante la Reforma Agraria. 1933-34. Estudio preliminar". *Investigaciones Geográficas*, nº 8, Alicante, 1990, pp. 37-50.
- ROMEU ALFARO, S.: "Los fueros de Valencia y los fueros de Aragón. Jurisdicción Alfonsina". *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 42, Madrid, 1972, pp. 75-115.
- RUIZ TORRES, P.: "La crisis del régimen señorial en el País Valenciano: El señorío de Elche". *Estudis d'Història Contemporània del País Valencià*, Valencia, 1978, pp. 7-46.
- RUIZ TORRES, P.: "Economía campesina y capitalismo agrario en el País Valenciano a finales del siglo XIX". *Estudios sobre Historia de España*. Obra homenaje a Manuel Tuñón de Lara, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Madrid, 1981, Vol. I, pp. 203-227.
- RUIZ TORRES, P.: *Señores y propietarios. Cambio social en el Sur del País Valenciano: 1650-1850*. Institució Alfons el Magnànim, Valencia, 1981.



SANCHEZ RECIO, G.: "Las rentas señoriales del Condado de Elda a finales del Antiguo Régimen. Los diezmos". *Revista de Historia Moderna*, nº 3, Alicante, 1983, pp. 139-180.

SERRA i PUIG, E.: "Notes per a una aproximació a l'estudi del Régim senyorial al País Valencià al segle XVII". *Actas del Primer Congreso de Historia del País Valenciano*, Valencia, 1976, Vol. III, pp. 345-359.

TRIBUNAL SUPREMO: *Sentencias del Tribunal Supremo publicadas en la Gaceta de Madrid*. Imprenta Nacional, 1873-1902. Imprenta de la Sucesora de M. Minuesa de los Ríos.

VIDAL OLIVARES, J.: *Materiales para la Historia Económica de Alicante (1850-1900)*. Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, Alicante, 1986.

VIRAVENS PASTOR, R.: *Cronica de la muy ilustre y siempre fiel ciudad de Alicante*. 1876, Facsimil, Alicante, 1976.